

El Estado mágico

**Naturaleza, dinero y modernidad
en Venezuela**

Fernando Coronil

Índice

Prefacio a la edición en español.....	3
Prefacio.....	6
Introducción: El Estado mágico y el occidentalismo.....	13
PARTE I PREMIERE.	
<i>LA NATURALEZA DE LA NACIÓN: FETICHISMO DEL ESTADO Y NACIONALISMO.....</i>	<i>31</i>
1. La naturaleza de la historia.....	33
2. Los dos cuerpos de la nación.....	82
PARTE II DEBUT.	
<i>CONTRAPUNTEO VENEZOLANO: DICTADURA Y DEMOCRACIA.....</i>	<i>134</i>
3. El 18 Brumario de la dictadura.....	136
4. Construyendo la nación: la nación como constructo.....	182
5. El 23 de Enero de la democracia.....	218
PARTE III REPRISE.	
<i>EL PETRO-ESTADO Y LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO.....</i>	<i>251</i>
6. Las guerras de los motores: las máquinas del progreso.....	253
7. Espejismos de El Dorado: la muerte de una fábrica de tractores.....	305
8. El excremento del diablo: delincuencia y sociabilidad.....	341
PARTE IV SECUELA.	
<i>ORO NEGRO: FETICHISMO DEL DINERO Y MODERNIDAD.....</i>	<i>384</i>
9. Cosechando el petróleo: la tormenta del progreso.....	387
10. Más allá del occidentalismo: una modernidad subalterna.....	406
Referencias.....	415

Prefacio a la edición en español

El *Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad* en Venezuela sale a la calle durante el desencantamiento del Estado más identificado con los sectores populares en la historia venezolana. Frente a estos sectores, el comandante Hugo Chávez ha aparecido como un líder que los representa no porque es como ellos, como otros habían aparentado, sino porque aparenta realmente ser de ellos. Desde el centro del escenario político, Chávez los ha invitado a pasar de las gradas al patio principal y participar en una historia que será por fin para ellos. Este libro trata de hacer comprensible transformaciones de la sociedad venezolana durante buena parte del siglo pasado animadas también por promesas de progreso colectivo -desde el gobierno de Juan Vicente Gómez al de Rafael Caldera. Chávez terminó de desmoronar el sistema político cuya constitución y crisis examino aquí. Otros libros habrán de dar cuenta de este significativo cambio. Solo quiero notar que así como mi interpretación destaca transformaciones y continuidades en el pasado siglo -entre dictaduras y gobiernos democráticos- espero que también permita hacer más visible el curioso entrecruzamiento de lo novedoso y lo repetitivo en la V República chavista. En la medida en que el libro ilumina persistentes estructuras y procesos constitutivos de la sociedad venezolana, mantendrá su relevancia en el futuro, pero mi mayor aspiración es que algún día profundas transformaciones democráticas hagan que descansa en nuestras bibliotecas, como un texto de interés netamente historiográfico, en la sección de historia antigua.

Si este análisis logra mostrar la forma peculiar en que el Estado venezolano se encamó en la presidencia y se constituyó en el centro de poderes extraordinarios basados en la domesticación social de la riqueza natural del país, creo que también ayudará a comprender el súbito encanto y violento desencanto del país con su nuevo gran mago. El reinado de las formas y las palabras en el teatro político venezolano hace que no sea una perogrullada decir que cambiar la estructura institucional del Estado no implica cambiar sus mecanismos íntimos ni la sociedad de la cual forma parte. La fábrica social venezolana no solo ha domesticado a la riqueza natural de la nación, sino que se ha nutrido de ella, formando un enmarañado tejido difícil de enderezar, y fomentando los mitos que la encantan. Como observó el inolvidable José Ignacio Cabrujas, bajo el embrujo del petróleo cada presidente decretó el mito del progreso. Pero el mito chavista es distinto. En medio de una polarización y

frustración social crecientes, la crisis del sistema democrático anterior -una crisis a la vez económica, política y moral- creó un vacío extraordinario. De ese vacío sin precedentes surgió Chávez, jugando el papel, como otros antes que él, de salvador de la nación. Pero a diferencia de guiones anteriores, esta vez el papel ha correspondido a un Bolívar no solo popular, sino anti-patricio, apoyado como nunca antes por sectores que habían sentido perder hasta la esperanza. En medio de la devastación de un país empobrecido y polarizado, el mito del progreso chavista ya no puede disimular la división, como antes, frente al espejismo de un futuro bienestar colectivo; el mito no es ya unificador sino justiciero. Su mito asusta o seduce, dependiendo de donde uno esté parado y lo que quiera para el país. Si bien las acciones van a la zaga de las palabras, en un escenario político donde las palabras son acciones, los temores de sus opositores son tan intensos como las renovadas esperanzas de sus partidarios. Al menos la política, aunque en esta forma, ha entrado en cada hogar.

En una lúcida discusión de la historiografía de insurgencias populares, la antropóloga Veena Das señala que frente a estructuras masivas de dominación, es posible que “las rebeliones subalternas produzcan sólo una noche de amor... no pueden transformarse en una vida de amor”. Esta disyuntiva también surgió en la mente de Gabriel García Márquez después de hablar con Chávez al principio de su presidencia: “Tenía la impresión de que había conversado con dos hombres opuestos. Uno, a quien la historia le había dado la oportunidad de salvar a su país. Otro, un ilusionista que pasaría a la historia como un déspota más”. Si no estaba claro entonces, creo que ahora es más fácil discernir si Chávez es un líder capaz de usar su magia personal para revitalizar la moribunda democracia venezolana, o un mago capaz de ofrecer solamente la efímera ilusión del progreso. Pero si miramos más allá de los dilemas del chavismo, tal vez podamos aspirar que la repolitización que éste ha desencadenado abra espacios para una renovación de las luchas por la democracia en Venezuela.

Quiero cerrar este prólogo agradeciendo a quienes hicieron posible la edición de *El Estado mágico* en español. Un entusiasta grupo de lectores latinoamericanos de la edición inglesa me animaron a convertir en realidad mi mayor deseo: que el libro fuese publicado en Venezuela y circulara por Latinoamérica. Destacando que el libro ayudaba a entender no solo a Venezuela, sino a Colombia y la América Latina, el filósofo colombiano Oscar Guardiola ofreció publicarlo en su país. El médico Miguel Zerpa impulsó tenazmente su publicación en Venezuela; si es cierta mi sospecha de que en mi trabajo vio la continuación de la obra de su maestro, mi padre Fernando Rubén Coronil, debo agradecerle también haber reconocido la filiación que siento entre la medicina social y la antropología crítica. Agradezco al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela

haber acogido su iniciativa. Mi hija Mariana, convertida en una arqueóloga del caos, trabajó durante meses excavando las citas originales del español y revisando el texto. El esmerado trabajo profesional y solidario del equipo de Nueva Sociedad mejoró notablemente este libro; mi profundo agradecimiento a su visionario director y gran aliado, Dietmar Dirmoser, a sus talentosos editores Sergio Chejfec y Henry Arrayago y a la eficiente Aída Llopis, quien puso todo en limpio

El libro fue escrito en inglés, pero la versión inglesa ya era, de cierta manera, una traducción de la otra lengua en que fue vivido y pensado. La traductora cubana Esther Pérez logró recrear esa primera voz. Leí su traducción en un pueblo de la costa venezolana, colgado de un chinchorro, de un tirón, con el canto del Caribe nuestro acompañando el contrapunteo entre nuestros idiomas y voces. “Mucho se dice que el traductor es un traidor, más poco se reconoce que frecuentemente es un creador,” me dijo Gerardo Mosquera, el agudo crítico de arte cubano, cuando le conté esta experiencia. Por el don de ofrecerme en sus palabras las mías, no encuentro mejores palabras de reconocimiento que recordarle al lector que este libro, como tanto en esta América nuestra de transculturaciones permanentes, es también un contrapunto de muchas voces.

Prefacio

*For every poet it is always morning in the world, and History a forgotten insomniac night.
History and elemental awe are always our early beginning, because the fate of poetry is
to fall in love with the world in spite of History**

Derek Walcott

Este recuento de la historia contemporánea de Venezuela forma parte de un prolongado esfuerzo, emprendido con el objeto de producir una perspectiva desde donde analizar las sociedades que han sido centrales en la formación de lo que se ha dado en llamar el mundo moderno, respecto del cual sin embargo son consideradas marginales. Ello ha supuesto oponerme a lo que denomino occidentalismo, esto es, prácticas de representación cuyo efecto consiste en presentar a los pueblos no occidentales como el Otro de un ser occidental. Hace bastante tiempo que trabajo en la elaboración de esta perspectiva, en un ir y venir entre Venezuela, mi patria, y Estados Unidos, donde estudié y ahora trabajo. Una empresa de esta índole incluye un conjunto de temas relativos a los efectos de pensar y traducir atravesando fronteras culturales. Aquí sólo quisiera apuntar que asumo a sabiendas el riesgo de que este análisis confirme prejuicios sobre deficiencias inherentes a América Latina, contra la oportunidad de poner en tela de juicio la oposición colonial entre la civilización y el atraso que aún hoy organiza las comprensiones vigentes sobre la diferencia cultural. Al mostrar cómo la historia laberíntica de Venezuela transcurre en el seno de un laberinto mayor, confío en contribuir a desalentar la idea falsa de que su historia puede quedar contenida dentro de fronteras fijas de orden territorial, temporal o cultural. He podido desplazarme a lo largo de estos laberintos interconectados sólo porque tuve la fortuna de contar con la orientación y el apoyo de muchas personas. Quisiera poder expresarles a todas ellas mi gratitud. Como aquí menciono solamente a quienes contribuyeron de modo directo con la elaboración de este libro, pido perdón a aquellos sin cuya preciada amistad y apoyo nunca hubiera salido a la luz.

He realizado las investigaciones de las que deriva el presente texto en varios periodos: dos etapas

* Para todo poeta siempre es de mañana en el mundo, y la Historia es una olvidada noche de insomnio. La Historia y el pavor elemental son siempre nuestro primer inicio, porque el destino de la poesía es enamorarse del mundo a pesar de la Historia.

ininterrumpidas entre 1974 y 1979, y 1988 y 1989, así como durante diversos trabajos de campo a lo largo de varios veranos que mediaron entre esos dos periodos. Durante la primera etapa (1974-1979), estaba vinculado al Centro para el Estudio del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes), y los fondos para la investigación provinieron de una subvención que me otorgara el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit). Estudié la formación de las clases y la mitificación del progreso nacional investigando el sector de la industria automotriz, definido por el Estado como “el motor del desarrollo nacional”. Como parte de esta labor, estudié, acompañado por Julie Skurski, numerosas empresas automotrices, entrevisté a administradores y propietarios, y realicé una encuesta que nos sirvió para recoger información técnica sobre las empresas y las opiniones de gerentes y obreros acerca de tópicos específicos. También entrevistamos a funcionarios gubernamentales que diseñaron los planes de desarrollo estatales y recibimos una gran ayuda de los técnicos que formularon y pusieron en práctica la política relativa a la industria automotriz. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que contribuyeron a esta investigación, compartiendo con nosotros sus experiencias y opiniones, en particular a Sebastián Alegrett, Rodrigo Arcaya, José Bisogno, Robert Bottome, Pedro Concha, Mariano Crespo, Roberto Madero, Hugo Pisani, Alfredo Salas Rotundo, Roberto Salas Capriles y Jack Sweeney. El Cendes constituyó un foro estimulante para el debate de las transformaciones políticas e históricas de Venezuela. Quiero expresar en especial mi agradecimiento a Manuel Be- roes, Gastón Carvallo, Germán Carrera Damas, Ocarina Castillo, Luis Gómez, Iván Gorrín, Margarita López-Maya y Terry Karl. Mónica González, José Seijó y Nelson Freytes colaboraron en la obtención y organización de los datos.

Durante el año académico 1988-1989, la Spencer Foundation y la Michigan Society of Fellows, con el apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), me facilitaron los fondos para la investigación. En el Celarg, Yolanda Salas de Lecuna y Héctor Malavé Mata fueron constantes fuentes de valiosas sugerencias. Durante ese año exploré la interrelación entre las concepciones de la historia del pueblo y de la elite, tal como se expresan en las ideologías políticas y en la religiosidad popular, mediante la investigación de la campaña presidencial y del culto popular de María Lionza. En respuesta al incremento de la represión estatal y la intranquilidad popular, amplié mi investigación para examinar el estudio del vínculo entre la violencia política, la memoria colectiva y las transformaciones sociales. Para mi investigación sobre la violencia política conté con la colaboración de muchas más personas de las que puedo mencionar aquí; me gustaría reconocer la cooperación de Ligia Bolívar, Matías Camuñas, Liliana Ortega, Antonio García y Walter Márquez. Buena parte de lo que

aprendí sobre el culto de María Lionza se lo debo a Daisy Barreto y a Mariano Díaz. Quiero también agradecer a Bernardo Mommer, cuyo trabajo pionero en la aplicación de la teoría de la renta del suelo a la industria venezolana del petróleo y lectura crítica de dos capítulos de este libro, contribuyeron de manera significativa con esta obra.

El libro adoptó su forma inicial en la Universidad de Chicago, donde me formé como antropólogo. La labor de dos extraordinarios profesores y estudiosos, que me iniciaron en este campo, sigue orientando mi pensamiento. Víctor Turner me ayudó a apreciar la intuición de William Blake de que se puede ver el universo en un grano de arena. Por su parte, Terence Turner es un acicate constante para llevar el pensamiento hasta sus últimos límites, e interrogar no solo su veracidad sino su valor; tanto su integridad personal e intelectual, como el apoyo leal en momentos de adversidad, me alentaron a seguir adelante. Muchos otros en la Universidad de Chicago contribuyeron a dar forma a este libro, tanto por la excelencia de su trabajo como por el apoyo crítico a mi propia labor. La obra pionera de Bernard Cohn en la intersección entre la antropología y la historia, puso en tela de juicio las convicciones limitantes de ambas disciplinas y abrió un espacio que hizo posible mi trabajo. La imaginativa integración de la etnografía y la historia para el estudio del colonialismo, realizada por Jean y John Comaroff, ha sentado un modelo ejemplar de lo que puede lograr una antropología crítica. A pesar de sus ocupaciones, John Comaroff siempre ha encontrado un momento para ofrecerme una opinión crítica. John Coatsworth, historiador, y Adam Przeworski, cientista político, me proporcionaron un inspirador contrapunteo disciplinario que amplió el rango de mi trabajo. Mediante el aliento que me brindaron y el ejemplo de su obra académica, Paul Friedrich, Keith Hart y Nancy Munn me ayudaron a formular varios aspectos de esta obra. Tengo también una deuda de gratitud con varias personas de la Universidad de Chicago cuya amistad y opiniones alimentaron este proyecto en diversas coyunturas; en particular Lauren Berlant, Robin Derby, Martha Lampland, Moishe Postone, Rafael Sánchez, Kathleen Swartzman y Richard Turits.

Durante mi estancia como *fellow* en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame desarrollé la sección dedicada a dictaduras y golpes de Estado; quisiera agradecerles en especial a Roberto Da Matta y Guillermo O'Donnell sus valiosas sugerencias. El libro adoptó su forma definitiva en la Universidad de Michigan. Mis alumnos hicieron avanzar mis pensamientos en direcciones inesperadas, haciendo realidad el ideal de la educación como un proceso interactivo mediante el cual el educador es educado. De no ser por las asimetrías de esta interacción podría reconocer de modo más pleno cuánto y quiénes me enseñaron. La Michigan Society of Fellows, el seminario de profesores

sobre Estudios Comparativos de las Transformaciones Sociales, y los departamentos de Antropología e Historia han constituido foros sumamente estimulantes de conversaciones que han transgredido los límites de las disciplinas. Quiero expresar mi gratitud a numerosas personas de Michigan que me brindaron comentarios y apoyo, en especial a Jane Burbank, Fred Cooper, Valentine Daniel, Nicholas Dirks, Laurent Dubois, Geoff Eley, Paul Eiss, Michael Fotiadis, Lessie Jo Frazier, Raymond Grew, Daniel Levine, Bruce Mannheim, Brink Messick, Walter Mignolo, Sherry Ortner, David Pedersen, John Pemberton, José Rabasa, Bill Rosenberg, Rebecca Scott, Bill Sewell, Ann Stoler y Ron Suny. Vaya mi profunda gratitud a los miembros de mi equipo de lectura, Roger Rouse, Kim Schepelle, David Scobey y Julie Skurski, quienes leyeron las primeras versiones del manuscrito; y también a un grupo de estudiantes de la Universidad de Michigan que leyeron la versión final y me ofrecieron valiosas sugerencias. En su etapa final, el texto se enriqueció gracias a los encendidos debates que sostuve con el grupo de latinoamericanistas que elaboran una perspectiva subalterna para el estudio de las Américas¹. Quisiera expresar también mi reconocimiento al Undergraduate Research Opportunity Program de la Universidad de Michigan, que me posibilitó contar con la ayuda de varios estudiantes, en especial Danielle Hayot, quien compuso la bibliografía, y Tomás Grigera, quien produjo los gráficos. David Brent, editor de la University of Chicago Press, confió en este proyecto y lo apoyó desde su inicio; dos lectores anónimos me proporcionaron valiosas sugerencias. Tuve la suerte de trabajar con Jim Schaefer, quien mejoró mi redacción y mis análisis, y me brindó una visión crítica y amistosa sobre el libro en su conjunto, que me ayudó a llevarlo a término. Recibí un valioso apoyo financiero para varias fases de mi investigación de la Universidad de Michigan por intermedio del Rackham Graduate School, la vicerrectoría para asuntos académicos y multiculturales, la vicepresidencia de investigaciones y el International Institute.

Mis amigos del Liceo Andrés Bello se percatarán de que el compromiso que orienta esta obra se formó años atrás en nuestra pasión compartida por lo posible. Por su apoyo y amistad quiero también expresar mi agradecimiento a Jorge Blanco, Ramón Castro, María Elena Coronil, Marisa y Perán Erminy, Mima Guerra, James Huey, Pablo Livinalli, Stuart McDowell, Elsa Morales, Ana Rodríguez, Zeva Schub y Gloria Skurski. Vaya también mi gratitud a mis padres, Lya Imber de Coronil y Fernando Rubén Coronil; y a mis suegros, Irene y Frank Skurski, cuyas vidas ejemplares y apoyo incondicional hicieron posible esta obra. Mis hijas, Mariana y Andrea, aceptaron que su padre estuviera a menudo

¹ Para una colección de artículos que presentan algunos de estos puntos de vista, v. *Subaltern Studies in the Americas*, número especial de *Dispositio/n* vol. 19 N° 46, 1994, editado por José Rabasa, Javier Sanjinés y Robert Carr.

distraído o no estuviera, pero también hallaron innumerables formas de recordarme que había una vida fuera del libro y me contagiaron con su alegría; quizás algún día comprendan que este libro fue escrito para ellas. Finalmente, al revisar estos reconocimientos siempre insuficientes, me viene a la mente el proverbio cubano: “Un solo palo no hace monte”. Si bien es cierto que todo libro es un producto colectivo, este lo es más que otros. Desde el inicio fue un proyecto compartido. Julie Skurski participó en su creación desde el inicio hasta el final como compañera, amiga y colega. Su voz está presente en cada palabra, lo que hace que la idea de autoría individual sea una ficción generosa pero injusta. Mi gratitud a todos, y en especial a ella, por dar vida a esta necesaria ficción.

Mientras que las personas que he mencionado me ayudaban a recorrer el laberinto, otras me atrapaban en él y me obligaban a experimentar el poder escurridizo del Estado. Al mostrar cómo el ejercicio del poder del Estado crea condiciones que dificultan la comprensión de su funcionamiento, la propia y laberíntica historia de este libro reproduce la historia estatal que describe; es por ello que siento la tentación de contarla. Pero para no escribir un libro dentro de otro libro, sólo ofreceré una breve versión de la historia para reconocer su efecto sobre la producción del texto.

Antes de comenzar mi investigación había realizado trabajo de campo en Cuba durante un año, en un proyecto que quedó trunco debido a cambios políticos en la isla. Por diversas razones decidí no escribir sobre Cuba, sino dedicarme al análisis de la ideología nacionalista y el poder del Estado en Venezuela. Sin embargo, a mi regreso a EEUU fui detenido, se me impidió la entrada bajo la acusación de ser agente de la subversión, se me negó toda información acerca de los cargos que pesaban contra mí y, tras varios meses, se me ordenó abandonar el país “en 48 horas”. Como resultado de un encuentro casual en el que coincidían lazos familiares y vínculos políticos, un abogado con buenos contactos logró la suspensión de mi deportación (¡después de haber sido enviada por correo!) y se ocupó de mi defensa.

Esa defensa incluyó un “juicio” kafkiano. Acusado de agente de la subversión, pero sin que me permitieran conocer los cargos en razón de que revelarlos podía poner en peligro la seguridad del gobierno de EEUU, tuve que preparar mi defensa sobre la base de imaginar qué podía ser interpretado como mi culpa y enfrentarlo con un discurso apoyado en todas las pruebas que podía presentar. Una parte esencial de esa defensa consistía en hacer un relato de mi vida desde la niñez. Ese recuento debía contar con el respaldo de cartas de personalidades oficiales y públicas, así como de informes policiales y de inteligencia de EEUU y Venezuela. Como parte de ese proceso, obtuve el apoyo del entonces presidente venezolano, Rafael Caldera (mi padre era el médico de su familia), quien le pidió

a su embajador en Washington que me representara ante las autoridades norteamericanas. No obstante, mi situación siguió siendo la misma. Tras más de un año en EEUU intentando solucionar mi caso por medios legales o políticos, pero sin conseguir ni siquiera una audiencia, Julie Skurski y yo decidimos regresar a Venezuela para llevar adelante nuestro nuevo proyecto. Sin embargo, cuando comencé a estudiar las estructuras del poder político y económico, supe que mi caso era fuente de rumores y murmuraciones en tales círculos, y de que había estado bajo estrecha vigilancia desde antes de mi detención en Miami. Mi incapacidad para demostrar inocencia, a pesar del considerable apoyo recibido, probaba mi culpa. La desconfianza, los rumores y la vigilancia, si bien limitaban mi investigación, también me ayudaron a entender cómo el poder crea realidades mediante sus efectos. Los datos que he obtenido después (que incluyen documentos a los que accedí mediante la Ley sobre Libertad de Información [Freedom of Information Act]) parecen indicar que me vi envuelto en una intrincada red de poder que entrelazaba los intentos del presidente Nixon para golpear la disidencia en EEUU y el disenso en América Latina, con rivalidades entre varios líderes políticos venezolanos. A fines de 1978, durante la presidencia de Carter, se desistió de las acusaciones en mi contra tal como se habían formulado: mediante una carta que no ofrecía ninguna explicación. A la luz de estos acontecimientos, así como de la continuada sensibilidad de algunos de los temas que abordo, me vi obligado a ponderar el impacto de publicar mi recuento de la formación del Estado en Venezuela sobre mi posibilidad de seguir trabajando en su transformación. Resulta irónico que la crisis del Estado y el reto a su poder sin límites, que analizo en este libro, hayan abierto un espacio político al cual este texto puede ahora sumarse.

Cuadro 1

Jefes de Estado, 1908-1996	
1908-1935	General Juan Vicente Gómez
1936-1941	General Eleazar López Contreras
1941-1945	General Isaías Medina Angarita
1945-1948	Junta Revolucionaria de Gobierno (presidida por Rómulo Betancourt)
1948	Rómulo Gallegos
1948-1950	Junta Militar (presidida por Carlos Delgado Chalbaud)
1950-1958	General Marcos Pérez Jiménez
1958-1959	Junta Cívico-Militar (presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal)
1959-1964	Rómulo Betancourt
1964-1969	Raúl Leoni
1969-1974	Rafael Caldera
1974-1979	Carlos Andrés Pérez
1979-1984	Luis Herrera Campíns
1984-1989	Jaime Lusinchi
1989-1993	Carlos Andrés Pérez
1993-1994	Ramón Velázquez
1994	Rafael Caldera



Carlos Andrés Pérez durante la campaña presidencial de 1988.

Introducción:

El Estado mágico y el occidentalismo

*Nunca levantamos muchas salas de teatro en este país. ¿Para qué? La estructura principista del poder fue siempre nuestro mejor escenario.... ¿De dónde sacamos nuestras instituciones públicas? ¿De dónde sacamos nuestra noción de "Estado"? De un sombrero. De un rutinario truco de prestidigitación. ... La aparición del petróleo como industria creó en Venezuela una especie de cosmogonía. El Estado adquirió rápidamente un matiz "providencial". Pasó de un desarrollo lento, tan lento como todo lo que tiene que ver con la agricultura, a un desarrollo "milagroso" y espectacular. ...Un candidato que no nos prometa el paraíso es un suicida. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene nada que ver con nuestra realidad. El Estado es un brujo magnánimo.... El petróleo es fantástico y por lo tanto induce a lo "fantasioso". El anuncio de que éramos un país petrolero creó en Venezuela la ilusión de un milagro. Creó en la práctica la "cultura del milagro".... La riqueza petrolera tuvo la fuerza de un mito.... Betancourt, Leoni y Caldera no fueron demasiado lejos en ese "sueño venezolano. porque la realidad presupuestaria lo impedía. Seguíamos siendo ricos, pero no tan ricos. Pero vino el otro Pérez, Carlos Andrés Pérez, y allí sí encontramos la frase que nos definía. Estábamos construyendo La Gran Venezuela. Pérez no era un presidente. Era un mago. Un mago capaz de dispararnos hacia una alucinación que dejaba pequeñas las fanfarronadas del perezjimenismo.... Pérez Jiménez decretó el sueño del Progreso. El país no progresó, desde luego. El país engordó... [El gobierno de] Pérez Jiménez fue un debut:[el de] Carlos Andrés Pérez, una reprise. **José Ignacio Cabrujas***

Tiene sentido que José Ignacio Cabrujas, un aclamado autor de obras teatrales y series de televisión, íntimamente familiarizado con formas locales de la tabulación venezolana, se haya convertido en uno de los comentaristas políticos más agudos del país. Invitado por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre) a expresar sus puntos de vista sobre la política venezolana¹, Cabrujas llama la atención sobre algo evidente y, no obstante, ausente del análisis social: la deificación del Estado en la vida política contemporánea de Venezuela².

Al reflexionar sobre espejismos vividos colectivamente, Cabrujas relaciona la apariencia providencial del Estado con su materialidad terrenal, y subraya los efectos culturales y políticos de su extraordinaria riqueza financiera. Como si quisiera reconocer, y al mismo tiempo desautorizar, la exaltada autorrepresentación del Estado, señala que éste en Venezuela es un "brujo magnánimo" dotado de poder para reemplazar la realidad por ficciones fabulosas apuntaladas por la riqueza petrolera. "El petróleo es fantástico y por lo tanto induce a lo "fantasioso", dice Cabrujas. Su

¹ El presidente Jaime Lusinchi decretó la creación de la Copre el 17 de diciembre de 1984, con el objetivo de promover la democratización del Estado. Para un análisis de la Copre que la ubica en el contexto de diversos intentos de reformar el Estado venezolano, v. Gómez Calcaño y López-Maya (1990:57-116).

² Philip Abrams sostiene que el análisis social tiende a reproducir la apariencia divina del Estado como fuerza unificada y autocentrada (1988). En el caso venezolano, esta apariencia se ve reforzada por la riqueza fiscal, que proviene sobre todo de los ingresos petroleros y no de los impuestos, lo que permite al Estado encarnar poderes que parecen emanar de sí mismo. (Para un comentario sobre los puntos de vista de Abrams, v. el capítulo I). Para el análisis de los efectos intersubjetivos de las relaciones de poder, el concepto weberiano de carisma, en particular en sus versiones más sociológicas y antropológicas (Shils 1965; Tambiah 1984), arroja luz sobre la deificación del Estado. El concepto marxista de fetichismo del Estado abarca la fenomenología del poder político y su dinámica social subyacente. Para un agudo análisis del concepto marxiano de fetichismo, v. Pietz (1993); para un intento de aplicar el concepto de fetichismo al Estado, v. Wells (1981).

capacidad de despertar fantasías permite a los líderes estatales hacer de la vida política un encandilador espectáculo de progreso nacional mediante “trucos de prestidigitación”. Los representantes del Estado, esto es, las encarnaciones visibles de los poderes invisibles del dinero petrolero, aparecen en el escenario estatal como magos poderosos que extraen la realidad social, desde instituciones públicas hasta cosmogonías, de un sombrero.

Una versión oficial de la cosmogonía política venezolana ha logrado definir la visión pública del pasado de la nación. Según esta visión, el nacimiento de la modernidad nacional se produce con la muerte del general Juan Vicente Gómez, en 1935, cuando terminan sus 27 años de dictadura. La muerte de Gómez liberó a Venezuela del yugo de un gobierno personalista y permitió emprender un proceso de democratización solo interrumpido por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). Después de 1958, el proceso condujo a la consolidación del sistema democrático más duradero de la América del Sur. Según este recuento, mientras Gómez mantuvo al país atrapado en un pasado arcaico, Pérez Jiménez creó un oscuro interregno que interrumpió brevemente el proceso democratizador puesto en marcha con la desaparición de Gómez.

Contra lo generalmente aceptado, solo en forma parcial Cabrujas se hace eco de esta historia oficial. En lugar de concentrarse de modo exclusivo en los regímenes democráticos, escoge dos momentos de la autoconformación del Estado como agente del progreso moderno: el gobierno dictatorial de Pérez Jiménez, al cual describe como el “debut” del “sueño del Progreso”; y la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), que representa, según Cabrujas, la “*reprise*” alucinante de ese mito. Aunque Pérez Jiménez era un dictador militar y Pérez un líder democrático, Cabrujas sugiere que ambos promovieron el mito del progreso con más fuerza que otros presidentes, y que gobernaron en periodos de riqueza fiscal y estabilidad política extraordinarias.

A pesar de sus diferencias, estas visiones oficiales y anecdóticas del pasado de la nación se centran en el mismo periodo “moderno” posterior a 1935. Uno de los trucos de prestidigitación más efectivos realizados en Venezuela ha consistido en relegar a Gómez al periodo “de atraso” del pasado venezolano. Al caracterizar su gobierno como encarnación de lo primitivo, los regímenes posteriores se han presentado, por contraste, como representantes de la modernidad. De este modo han encubierto que sus bases se asientan en el régimen de Gómez, con el que comparten la dependencia de la economía petrolera y la extraordinaria personalización del poder del Estado. Como veremos, fue durante el régimen “tradicional” de Gómez, no obstante, que se tomó posible imaginar Venezuela como una nación petrolera moderna, identificar al gobernante con el Estado y representar al Estado

como agente de la modernización. Que incluso Gabrujas haya olvidado a Gómez es sintomático, pienso, de una amnesia colectiva que envuelve a la versión predominante de la historia venezolana³. Lo olvidado filtra lo que se recuerda. El poder de persuasión de un recuento histórico depende, como el de un acto de magia, de que los artificios de su producción se mantengan ocultos. Al igual que la historia, que de modo ambiguo se refiere tanto a la memoria selectiva de relatos sobre el pasado, como a éste en su totalidad, la magia alude a una realidad extraordinaria, pero también a una presentación selectiva de elementos que provoca una ilusión de existencia mediante invisibles manipulaciones apoyadas en la distracción y la diversión. Como la historia, la magia pende entre la ficción y los hechos, entre los trucos y la verdad. En *La historia oficial*, película argentina sobre el terror de Estado y la memoria histórica, Gabriela, hija adoptiva (en realidad apropiada de padres desaparecidos), el día de su cumpleaños (que se celebraba, por cierto, en la fecha de su adopción) le pregunta al mago de su fiesta: “¿Usted es un mago de trucos, o de verdad?”. Como sugiere el filme, con el mero hecho de plantearse, la pregunta abre un espacio para explorar el juego de ilusión y verdad de la magia y de la historia, porque recuerda que ambas se producen, como la memoria misma, mediante actos de representación.

En este libro examino la aparición del Estado venezolano como agente trascendente y unificador de la nación. Sostengo que la deificación del Estado tuvo lugar como parte de la transformación de Venezuela en nación petrolera que, en tanto tal, se percibía como una nación con dos cuerpos: un cuerpo político compuesto por sus ciudadanos y un cuerpo natural cuya materia era su rico subsuelo. Al condensar en sí los múltiples poderes dispersos en los dos cuerpos, el Estado apareció como un agente único dotado del poder mágico de rehacer la nación. El arduo establecimiento de la autoridad estatal tuvo íntima relación con la explotación petrolera. A lo largo del siglo XIX el frágil Estado venezolano, crónicamente asaltado por caudillos regionales, fue incapaz de imponer su control sobre el fragmentado territorio nacional. Solo cuando se transformó en mediador entre la nación y las compañías petroleras foráneas, a principios del siglo XX, fue que el Estado adquirió la capacidad política y los recursos financieros que le permitieron aparecer como un agente independiente capaz de imponer su dominio sobre la sociedad. De ahí que el propio Estado se haya originado como un conjunto de prácticas, instituciones e ideologías de gobierno en el curso de las pugnas relativas a la

³ Sin embargo, Cabrujas reconoce que Gómez marca el inicio de la rápida transformación económica que condujo a la identificación del Estado con el Gobierno. "En Venezuela el Estado es el Gobierno", dice Cabrujas. Esta identificación se produjo de modo tan natural como el "crecimiento" de la economía. Según Cabrujas, desde el gobierno de Gómez hasta el de Luis Herrera Campins, Venezuela "crecía económicamente casi como los ciclos de la naturaleza", sin ser responsable de su propio crecimiento (1987:19).

regulación de la producción petrolera y el control del dinero procedente de ella. Este control le permitió transformarse a medida que ampliaba el ámbito de su actuación: el control sobre la producción del sector de los minerales y su procesamiento (petróleo, gas, productos petroquímicos, bauxita, hierro, acero, alúmina, aluminio y productos industriales relacionados); la regulación y la promoción de la actividad económica privada (la determinación de las tasas de interés, el establecimiento de tarifas aduaneras, la concesión de licencias, la aprobación de subsidios, la determinación de precios y salarios, etc.); y el establecimiento de un control central sobre un número de otros sectores, desde la educación (p. ej., la definición del contenido de la curricula y la estructura de los exámenes finales) hasta el transporte y las comunicaciones (la distribución del papel destinado a la prensa gráfica y el arriendo de frecuencias a estaciones de radio y televisión).

Transformado así en un petroestado, el Estado venezolano llegó a tener en sus manos no solo el monopolio de la violencia política, sino también el de la riqueza natural. El Estado ha ejercido este poder de forma teatral, garantizando el consentimiento mediante el despliegue espectacular de su presencia imperiosa: trata de conquistar, no de persuadir. En este sentido, como el Estado imperial español analizado por José Antonio Maravall (1986), el venezolano se ha constituido como una fuerza unificadora mediante la producción de fantasías de integración colectiva en instituciones políticas centralizadas. Como heredero de la cultura del barroco, el Estado venezolano “cautiva mentes” mediante formas culturales muy retóricas que buscan el consentimiento del público dejándolo, en palabras de Godzich, boquiabierto (1994:79). Sujeto al encantamiento de la cultura barroca, “el público ni participa ni internaliza los argumentos: es conquistado, subyugado, arrastrado por el flujo persuasivo de la retórica” (ibíd.). El Estado venezolano tiende a deslumbrar mediante las maravillas del poder, no a convencer mediante el poder de la razón, por cuanto ésta se transforma en ingrediente del espectáculo amedrentador de su imperio. Con la fabricación de deslumbrantes proyectos de desarrollo que engendran fantasías colectivas de progreso, lanza sus encantamientos sobre el público y también sobre los actores. Como “brujo magnánimo”, el Estado se apodera de sus sujetos al inducir la condición o situación de receptividad para sus trucos de prestidigitación: un Estado mágico.

En los capítulos que siguen analizo la formación histórica del Estado durante tres periodos críticos: la larga dictadura del general Juan Vicente Gómez (1908-1935), el gobierno militar del general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) y la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). He tomado prestadas las imágenes dramatúrgicas de Cabrujas, por lo que he dividido mi exposición en cuatro

actos: la “premiere” de Gómez, en la parte I; el “debut” de Pérez Jiménez, en la parte II; la “reprise” de Carlos Andrés Pérez, en la parte III; y la “secuela” del drama, en la parte IV. Con excepción de la introducción y conclusiones, cada capítulo se centra en ciertos temas y coyunturas históricas en las que el Estado definió e intensificó la concreción del “sueño venezolano”. Como apunta Cabrujas, otros presidentes (incluidos los principales arquitectos de la democracia venezolana, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera) “no fueron demasiado lejos en ese “sueño venezolano” porque la realidad presupuestaria lo impedía. Seguíamos siendo ricos, pero no tan ricos” (1987:19). Al concentrarme en periodos de intensa mitificación del progreso, brindo una interpretación de la dinámica de la transformación histórica en Venezuela que se opone a los recuentos dominantes no solo de su historia moderna, sino de la modernidad misma.

En la parte I ubico la omisión de Gómez en círculos concéntricos de olvido, que vinculan amnesias nacionales y globales como dimensiones interconectadas del proceso de formación nacional en todo el planeta. El primer capítulo constituye una introducción amplia, contiene un análisis teórico de temas que trato de efectuar mediante narrativas históricas y etnográficas en los capítulos posteriores. El capítulo se centra en la supresión de la naturaleza en las corrientes dominantes de la teoría social y evalúa el significado de esta desaparición para la comprensión de la división del mundo entre centros modernos y periferias atrasadas. Sostengo que esta amnesia en relación con la naturaleza ha implicado también el olvido del papel de la “periferia” en la formación del mundo moderno, un activo “silenciamiento del pasado” (Trouillot 1995) que reinscribe la violencia de una historia hecha a expensas del trabajo y los recursos naturales de pueblos relegados a los márgenes.

A fin de analizar la significación del petróleo para la formación del Estado venezolano y dar cuenta de su valor monetario, desarrollo un enfoque para el análisis de sociedades que dependen de la exportación de uno o pocos productos primarios. Mediante un examen de teorías sobre el subdesarrollo, opiniones neoclásicas sobre los recursos naturales, la teoría marxista del valor y un estudio de la evolución de los precios del petróleo durante este siglo, me separo del problema de la magnitud y la dirección de los flujos de valor (la problemática del intercambio desigual, que es objeto de la mayoría de las teorías sobre el subdesarrollo) y llamo la atención sobre las divisiones globales del trabajo y la naturaleza implicadas en la creación del valor. Al tratar la creación del valor como un proceso que supone tanto la formación de sujetos como la producción de bienes, ubico los campos asociados normalmente con la cultura, la política y la economía en un campo de análisis unificado. Mediante el desarrollo de un enfoque unificador, intento examinar la constitución histórica de sujetos

como parte de la formación de un mundo objetivado de instituciones y creencias sociales, y ver la historia que los forma como criaturas históricas, a la vez, como la fuente que nutre su actividad de protagonistas de la historia.

La mayoría de los analistas separan a los países del Tercer Mundo exportadores de petróleo del resto de los países tercermundistas, dada su excepcional riqueza financiera. Por supuesto, estos países petroleros comparten rasgos estructurales distintivos respecto de otras naciones periféricas, los cuales no solo se derivan de su riqueza financiera, sino también de la centralidad del Estado en sus economías⁴. Lo que me resulta sorprendente, Sin embargo, es hasta qué punto las naciones exportadoras de petróleo nos pueden ayudar a discernir la situación que comparten la mayoría de los países del Tercer Mundo en virtud de su posición como exportadores de productos primarios que dependen de la renta del suelo (ingresos cuya base es la tierra)⁵. La magnitud de esas rentas puede variar mucho, dependiendo de factores como el tipo de producto exportado, los patrones de producción y demanda globales, y la competencia de productos alternativos. Esas rentas pueden provenir de diferentes estructuras productivas y de distintos tipos de vínculos entre la economía local y la global, según la ya clásica distinción entre enclaves bajo control extranjero y sectores de exportación controlados nacionalmente (Cardoso y Faletto 1979). Pero esas rentas contribuyen a establecer patrones similares de especialización interna y de dependencia externa que consolidan el papel de las naciones del Tercer Mundo, como lo que llamo sociedades exportadoras de naturaleza. Aun cuando estas naciones traten de romper su dependencia colonial de las exportaciones de productos primarios mediante la puesta en práctica de planes de desarrollo dirigidos a diversificar sus economías, por lo general se apoyan para hacerlo en la divisa obtenida mediante la exportación de productos primarios, con lo que intensifican su dependencia de los mismos. Paradójicamente, al tratar de aprovechar su ventaja comparativa, estas naciones exportadoras de naturaleza a menudo vuelven a asumir su papel colonial de fuentes de productos primarios, papel ahora reescrito en términos de la racionalidad neoliberal del capitalismo globalizante. Para ellas, al poscolonialismo sigue el neocolonialismo.

La dependencia de la mayoría de los países del Tercer Mundo de unos pocos productos primarios de exportación los somete con frecuencia a ciclos similares de auge y crisis, sea el producto de

⁴ De modo similar, un analista sostiene que "culturalmente, Venezuela pertenece a la América Latina; estructuralmente, su economía y sus patrones de estabilidad e inestabilidad se asemejan más a los de otros países productores de petróleo relativamente populosos como Argelia, Irán y Nigeria" (Karl 1995: 34).

⁵ Examinó en detalle la categoría de renta del suelo en el capítulo 1.

exportación el azúcar, como en los casos de Cuba y de Puerto Rico durante la “danza de los millones” tras la Primera Guerra Mundial; sean carne y granos, como en la Argentina de la *belle époque*; sea el guano, como en el próspero Perú de mediados del siglo XIX; sea el petróleo, como en la mayoría de las naciones petroleras (los ejemplos podrían fácilmente extenderse a otros productores de productos primarios de la América Latina, Asia y África). Los auges de la exportación tienden a sobrevalorar la moneda nacional, promover importaciones de bienes manufacturados y socavar los sectores productivos dirigidos al mercado interno. Los economistas que estudiaron la erosión de las manufacturas holandesas como resultado de la rápida expansión de la producción de gas en el Mar del Norte, llaman a este fenómeno la “enfermedad holandesa”, o síndrome del petróleo. No obstante, la enfermedad holandesa solo ataca de manera ocasional a las resistentes economías diversificadas del Primer Mundo, pero constituye una epidemia de las economías monoproductoras. Dado que se trata de una plaga colonial que deformó al Tercer Mundo hasta convertirlo en un conjunto de países exportadores de productos primarios estrechamente especializados, la enfermedad holandesa debería rebautizarse y adoptar el nombre de enfermedad del Tercer Mundo o enfermedad neocolonial⁶.

Recordar la naturaleza -reconocer teóricamente su significación histórica- nos permite replanteamos las historias dominantes del desarrollo histórico de Occidente y poner en tela de juicio la idea de que la modernidad es hija de un Occidente autopropulsado⁷. Una naturaleza reconceptualizada nos permite incluir en nuestros recuentos históricos no solo un conjunto más diversificado de actores históricos, sino también una dinámica histórica más compleja. Nos da la posibilidad de sustituir lo que Lefebvre llama la dialéctica “osificada” del capital y el trabajo por una dialéctica del capital, el trabajo y el suelo (siguiendo a Marx, Lefebvre denomina suelo no solo a los poderes de la naturaleza, sino a los agentes asociados a ella, incluido el Estado que ejerce la soberanía sobre un territorio nacional). La dialéctica de estos tres elementos nos ayuda a ver el Estado terrateniente como un agente económico independiente y no como un mero actor político estructuralmente dependiente del capital; y a conceptualizar el capitalismo como un proceso global que forma centros y periferias en íntima relación, y no como un sistema autogenerado que se expande desde regiones modernas y activas, y engulle sociedades tradicionales y pasivas.

Al ampliar los referentes sociales y geográficos del capitalismo, esta perspectiva descentra

⁶ Para estudios sobre la enfermedad holandesa, v. Corden y Neary (1982); Buitier y Purvis (1980); y Wijnbergen (1984).

⁷ Siguiendo la línea iniciada por Hegel, pensadores tan diversos como Habermas (1987), Taylor (1989) y Giddens (1987) consideran la modernidad como un fenómeno europeo. Para una crítica de este punto de vista desde una perspectiva latinoamericana, v. Dussel (1993).

concepciones eurocéntricas que identifican la modernidad con las formaciones culturales metropolitanas y relegan a la llamada periferia al terreno de lo premoderno. Al considerar la modernidad metropolitana como un producto regional de las interacciones entre el “centro” y la “periferia”, la reasume como su forma dominante y no como su norma universal (autoproclamada). A su vez, al reconocer el papel de la periferia en la conformación del mundo moderno, esta perspectiva nos permite acercarnos a ella como el lugar de modernidades subalternas y no como a una región donde el progreso occidental abraza a culturas tradicionales.

En el segundo capítulo examino las transformaciones que hicieron de Venezuela una nación petrolera durante la dictadura de Gómez. Con su gobierno, el poder político comenzó a tener su base en el control estatal sobre la explotación del subsuelo. Al hacer depender de fuentes independientes de riqueza las iniciativas políticas y económicas del Estado, esta fundación centralizante creó las condiciones que, al mismo tiempo, sustentaron el camino hacia la democracia política y limitaron su desarrollo. A partir de Gómez, el Estado se convirtió en el centro del poder político y económico. Los recuentos oficiales han ocultado hasta qué punto el Estado democrático descansa sobre bases construidas durante este régimen, y el hecho de que deba negociar las tensiones subyacentes derivadas del origen público de la riqueza del Estado y el carácter privado de su apropiación. Este capítulo muestra que, si bien como sostiene Anderson, el imaginario nacional se apoya en parte en medios de comunicación como el capitalismo de la prensa, también depende de la materialidad misma de la nación como hábitat dispensador de vida, de modalidades divergentes de configurar el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza.

Durante el régimen de Gómez, cuando la riqueza nacional comenzó a ser sinónimo de su cuerpo natural, y en la medida en que diversos grupos sociales identificaron sus intereses particulares con los del país en la industria petrolera, el Estado empezó a representarse como el agente legítimo de una “comunidad imaginada” (Anderson 1991), formada por su propiedad colectiva sobre el cuerpo natural de la nación. Al representar la “democracia moderna” de Venezuela en oposición a la “dictadura primitiva” de Gómez, la democracia se desarrolló como antítesis de la dictadura: democracia y dictadura se tornaron las dos caras de la misma moneda petrolera. A pesar de las diferencias entre el gobierno de Gómez y los regímenes liberales constituidos en su contra, estos se conformaron como los Estados de una nación petrolera. Analizo cómo esta forma común se perfiló durante el régimen de Gómez y el período inmediatamente posterior, mediante el examen de la autoconformación de Venezuela en nación petrolera por intermedio de luchas democráticas contra el “atrasado” gobierno

gomecista (me concentro en los debates que tuvieron lugar en 1936) y la formulación de políticas sobre el petróleo (hasta 1943). El capítulo termina con una crítica del vaciamiento de la materialidad en algunas teorías sobre la democracia, mediante un comentario crítico sobre las obras de Claude Lefort y Slavoj Žižek.

En la parte II, mediante un análisis de varios golpes de Estado (1945, 1948, 1952 y 1958), examino cómo se ventiló la disputa entre regímenes dictatoriales y democráticos entre 1945 y 1958. En el contexto de una diversificación limitada de la economía interna, el Estado se convirtió en objeto de una intensa rivalidad política y en centro de las luchas económicas. De la misma forma en que durante el gobierno de Gómez el Estado, con fuentes independientes de riqueza, había sido la herramienta privatizada de un gobernante personalista, después pudo tornarse herramienta sectaria de un partido democrático. La tensión entre el origen natural de la riqueza colectiva y finita de la nación, y el destino privado de su apropiación social, dio contornos a la disputa democracia / dictadura entre 1945 y 1958.

Mediante el examen detallado de la orquestación práctica y la representación pública de estos golpes, reviso cómo el Estado se construyó como el lugar central del poder político. En el capítulo 3 analizo cómo este papel se conceptualizó durante el proceso que condujo a la consolidación de la dictadura de Pérez Jiménez. Amplió este análisis en el capítulo 4 examinando la imagen del progreso de este dictador. En primer término, presento un panorama general de las consecuencias contradictorias de sus políticas económicas, que mientras promovían la diversificación económica limitaban su ulterior desarrollo; e ilustro este proceso por medio de un análisis del desarrollo siderúrgico. Las políticas contradictorias de Pérez Jiménez hicieron que el capital local se volviera contra el régimen y formara una alianza con los partidos de la clase media que condujo al golpe de Estado de 1958. En el capítulo 5 examino la orquestación del 23 de Enero, considerado por muchos como el momento fundacional de la democracia venezolana, la más estable y duradera de la América del Sur.

Estos tres capítulos ubican la construcción de la democracia venezolana en el contexto de debates recientes sobre los procesos mundiales de democratización, en los cuales figura como un caso ejemplar. Sostengo que las características “políticas” a menudo invocadas para explicar la estabilidad y el éxito de la democracia local -la supuesta vocación democrática, las capacidades de negociación y las aptitudes de aprendizaje de los líderes también deben ser objeto de una explicación. Mi análisis de los discursos fundacionales de la democracia en la parte I, y de la dinámica de las clases y la formación del Estado en la parte II, trata de brindar una explicación de las condiciones que han permitido y

limitado la democracia en Venezuela.

En la parte III analizo la consolidación del petroestado durante el periodo de auge petrolero de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Mientras que en los centros metropolitanos la cuadruplicación de los precios del petróleo, a fines de 1973, produjo visiones de declinación política y económica, en Venezuela, al igual que en otras naciones productoras, dio lugar a la ilusión de que una modernización instantánea estaba al alcance de la mano, y que torrentes de dinero provenientes del petróleo cambiarían el curso de la historia y lanzarían al país hacia el futuro. Pérez propuso transformar la bonanza petrolera en un vasto proyecto para desarrollar el país en una escala sin precedentes y a toda velocidad, y lograr, en efecto, dar un salto hacia la autonomía. Si Simón Bolívar había encabezado la nación en su marcha hacia la Independencia merced al triunfo sobre España en la batalla de Carabobo en 1821, Pérez proponía ganar la batalla decisiva por la independencia económica de la nación.

En tres capítulos examino el proyecto de transformación nacional de Pérez y su plan para “sembrar el petróleo”. En el capítulo 6 estudio su intento de desarrollar la industria automotriz mediante la producción de “vehículos completamente venezolanos” (esto es, completar la producción nacional de vehículos) y la lucha política que siguió a ese intento, conocida como la “guerra de los motores”, cuando el Gobierno negoció con las empresas automotrices transnacionales y los capitalistas nacionales la producción local de motores para vehículos. El proceso de negociación, que aparentemente versaba sobre temas técnicos, se convirtió en un espacio para la oposición a las metas de desarrollo existentes y para la realineación de las fuerzas políticas en el seno de la alianza política gobernante. Las demoras en las decisiones de políticas, causadas en apariencia por un conflicto entre la estrategia de promoción de las exportaciones y la de sustitución de importaciones para desarrollar la producción nacional, ocultaba una reorientación subyacente de la estrategia global de las empresas automotrices transnacionales, así como un conflicto nacional crónico, intensificado por el auge petrolero, entre la producción de valor y la apropiación de la renta. Los debates internos de política reflejaban la tensión entre el predominio social real de la circulación de la renta sobre la producción de valor, y la necesidad política de disfrazar esta práctica dominante del sector de negocios y presentar al Estado y a la burguesía como adalides de la producción y de la autonomía empresarial. Mientras que el capítulo sobre la guerra de los motores analiza la incapacidad para poner en práctica la política de producción nacional de vehículos, el siguiente examina la corta vida de Fanatracto, una compañía auspiciada por el Gobierno y propiedad conjunta del Estado, una empresa transnacional

estadounidense y un conglomerado nacional. Desde 1936 la consigna de “sembrar el petróleo” ha expresado de modo metafórico la política estatal de utilizar los recursos provenientes del subsuelo para financiar la producción industrial y agrícola moderna. La creación de una fábrica de tractores se entendía como un medio para fomentar tanto la industria como la agricultura y, por tanto, se convirtió en una de las expresiones más altas de ese objetivo. Fanatracto nació en medio de gran promoción y gastos, pero fue abandonada silenciosamente tan pronto como se construyó, y se le dejó morir. En este capítulo analizo la insólita historia de Fanatracto e intento explicar su desaparición como resultado de rivalidades en el seno del Estado y de las orientaciones contradictorias de sus accionistas en lo relativo a inversiones productivas.

A diferencia de estos dos estudios del campo productivo, el capítulo 8 explora el asesinato de Ramón Carmona, un abogado ametrallado en las calles de Caracas a la luz del día. El debate público sobre este asesinato durante la campaña electoral de 1978, reveló la existencia de una vasta red de transacciones formales, informales e ilegales que vinculaban a través de varios acuerdos de negocios a una amplia gama de actores que iban desde inmigrantes pobres hasta el presidente y su amante. Mientras que mi análisis sobre la guerra de los motores y la muerte de Fanatracto señala cómo el predominio de la circulación de la renta sobre la producción de valor erosionó los esfuerzos productivos, con el caso Carmona exploro la lógica interna del sistema de circulación de la renta después del auge petrolero de 1973, cuando los ríos de petrodólares que fluyeron a lo largo del cuerpo político cambiaron su forma al redefinir criterios normativos y proyectar en el escenario público como normal y deseable el rostro ilícito de la actividad estatal.

Estos tres capítulos muestran cómo la tensión entre circulación del dinero proveniente del petróleo y producción de valor que subyace al capitalismo rentista de Venezuela, se vivió y expresó concretamente en las acciones cotidianas de diferentes actores sociales. La circulación de torrentes de dinero proveniente del petróleo no solo erosionó la actividad productiva y estimuló la diseminación de la especulación y la corrupción financieras, sino que también facilitó la concentración del poder en los más altos niveles de gobierno. A su vez, los poderes extraordinarios del presidente alentaron un estilo vertical de diseño de políticas que a menudo condujo a acciones arbitrarias y contradictorias, y que minó las prácticas democráticas.

En la parte IV analizo acontecimientos posteriores y hago algunas observaciones generales sobre el arco histórico que cubre este libro. En el capítulo 9 muestro brevemente cómo la hegemonía creciente del capital internacional (incluido el capital nacional internacionalizado) ha conducido a que

el mercado desplace al Estado como el lugar predominante de las acciones lucrativas y como la fuente legitimadora de las categorías en cuyos términos se define la vida pública. El capítulo 10 arroja luz sobre este desplazamiento al subrayar la lógica social de la transformación histórica analizada en el libro, y se concentra en los procesos gemelos de globalización y abstracción que han acompañado a la transustanciación del petróleo en dinero. Sostengo que si la circulación de petrodólares a través de la economía nacional subordinó las estructuras productivas a la lógica de captación de la renta, ahora la circulación de petrodólares y de dinero de la deuda en los circuitos financieros internacionales ha logrado dominar a la economía nacional y determinar las condiciones en las cuales tiene que funcionar, obligando al Estado nacional a actuar en nombre del mercado abierto. La creciente abstracción de la fuente del poder estatal, que ha ido de la materialidad específica del petróleo como sustancia a la capacidad de intercambio general del dinero como equivalente universal, ha conllevado no solo un cambio de las formas del poder político y de sus representaciones fetichizadas, sino también un debilitamiento del Estado con respecto a la hegemonía en expansión del dinero internacional. Circunscribiendo la necesidad de reforma al ámbito interno, al “ajuste interno” que demanda ahora la doctrina neoliberal, en su nombre se promete modernizar la nación arrancándola del mundo de fantasía conjurado por el petroestado mágico y trayéndola al mundo transparente y racional del mercado libre.

Cuadro 2

Gastos del Estado, 1900-1979 (en millones de bolívares)

Presidente	Periodo	Precios actuales	Precios de 1979	Promedio anual
Cipriano Castro	1900-1908	433	2.247	250
Juan V. Gómez	1908-1935	3.170	12.885	477
Eleazar López C.	1936-1941	805	8.833	1.606
Isaías Medina A.	1941-1945	1.798	6.905	1.534
Rómulo Betancourt	1945-1948	2.249	7.429	3.715
Rómulo Gallegos	1948	1.644	4.605	4.605
M. Pérez Jiménez	1948-1958	24.410	68.926	7.658
Wolfgang Larrazábal	1958	6.260	17.389	17.389
Rómulo Betancourt	1959-1964	32.384	84.307	16.861
Raúl Leoni	1964-1969	40.133	90.166	18.033
Rafael Caldera	1969-1974	59.920	120.210	24.042
Carlos A. Pérez	1974-1979	221.840	286.362	57.272

Fuente: Fundación Polar 1988: 455.

En el prólogo de uno de sus muchos libros, Jorge Luis Borges (1978) alertó contra las largas introducciones. He decidido atender el consejo y no permitir que esta introducción sea mucho más larga que la suya -aunque quizás le tienda una trampa borgeana al lector y continúe con mis comentarios introductorios en el siguiente capítulo. He estructurado este libro como una serie de fragmentos que pueden leerse como unidades en sí mismas o como partes de un conjunto mayor, que es, a su vez, solo un fragmento de una historia laberíntica. No obstante, dos asuntos relacionados entre sí requieren un comentario en este punto: primero, la relación del libro con la crítica al eurocentrismo y, segundo, su concentración en el funcionamiento del poder en las “altas esferas” del Estado. El primero tiene que ver con mi intento de ver la modernidad desde su fondo; el segundo, con mi decisión de echar una mirada sobre la historia de Venezuela desde la cima.

Si bien puede resultar evidente que el punto de vista aquí presentado sobre la historia de Venezuela se nutre de la crítica poscolonial contemporánea, quizás no resulte tan obvio que lo hace vinculando obras recientes producidas a propósito del colonialismo de la Europa septentrional en Asia y África con una larga tradición caribeña y latinoamericana de reflexión crítica sobre el colonialismo y el imperialismo moderno⁸. En buena medida, debido a la influencia de la crítica pionera de Edward Said al orientalismo, la crítica del eurocentrismo se ha centrado en las representaciones occidentales de sociedades no occidentales que estuvieron sujetas a la dominación colonial de Europa septentrional. Quizás los estudiosos que desarrollaron de modo más productivo esta crítica hayan sido los vinculados al Grupo de Estudios Subalternos de la India, que ha intentado refundar la historiografía hindú mediante una crítica de su dependencia de categorías eurocéntricas, compartidas no solo por la historiografía colonial, sino también por la nacionalista y la marxista. Este extraordinario logro colectivo ha ejercido una influencia significativa sobre quienes estudian otras zonas del mundo⁹. Desde una perspectiva latinoamericana, que se nutre de una relación mucho más larga con el colonialismo y el imperialismo europeos, resulta perceptible la asunción por parte de esos autores de una clara separación entre Europa y el mundo colonial, aun cuando reconocen su constitución

⁸ Estas referencias incluyen figuras de la centralidad de José Martí, Fernando Ortiz, Fernando Henrique Cardoso, C.L.R. James, Frantz Fanón y Stuart Hall. Quisiera reconocer públicamente la influencia que también he recibido de autores no académicos provenientes de la literatura (p. ej., José Lezama Lima, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Augusto Roa Bastos); las artes visuales (los muralistas mexicanos, el pintor cubano Manuel Mendive y los venezolanos Apolinar, Emerio Darío Lunar, Miguel Von Dangel y Jacobo Borges); y, no menos importante, la música popular, en especial la música del Caribe, la cual, gracias a Ortiz, considero una forma de transculturación que afirma la vida.

⁹ V. el ensayo bibliográfico de Cooper con respecto a África (1994) y de Mallon con respecto a América Latina (1994).

histórica mutua¹⁰.

Pienso que el análisis de la representación occidental de otras sociedades -el centro de *Orientalism* (1978), de Said- conlleva la necesidad de oponerse a esos *constructos* en tanto elementos de la autoconformación de Occidente como encarnación de lo moderno. Por tanto, desmontar el orientalismo supone que vinculemos y problematicemos más las dos entidades que están en el centro del análisis de Said: las representaciones orientalistas de Occidente y el Occidente mismo. Ello requiere reorientar nuestra atención: pasar del problema del "orientalismo", que se centra en la representación estereotipada del Oriente, al del occidentalismo, término con el que designo la relación entre la concepción implícita de Occidente y sus representaciones de las sociedades no occidentales. Esta perspectiva no supone invertir el centro del análisis de Oriente a Occidente, del Otro al Yo. Lo que intenta, al guiar nuestro entendimiento hacia la naturaleza relacional de las representaciones de colectividades humanas, es sacar a la luz su génesis en relaciones de poder asimétricas, que incluyen el poder para velar su génesis en la desigualdad, cortar sus conexiones históricas y, por tanto, presentar como atributos internos e independientes de entidades cerradas en sí mismas lo que son en realidad resultados históricos de pueblos relacionados entre sí. El occidentalismo, tal como lo defino, no es, por tanto, el reverso del orientalismo, sino su condición de posibilidad de existencia. Si bien cualquier sociedad puede producir representaciones estereotipadas de la diferencia cultural como parte de su propia autoproducción, lo singular del occidentalismo es que conlleva la movilización de representaciones estereotipadas de sociedades no occidentales como parte del autodiseño de Occidente como poder imperial. El occidentalismo es inseparable de la hegemonía occidental, no solo porque como forma de conocimiento expresa el poder de Occidente, sino también porque establece un vínculo específico entre conocimiento y poder en el Occidente.

De esta forma, el occidentalismo es la expresión de una relación constitutiva entre representaciones occidentales de la diferencia cultural y el predominio global de Occidente. Plantear un reto al

¹⁰ Aunque los estudiosos adscritos a los estudios subalternos han utilizado de manera productiva esta separación entre Europa y el mundo colonial, su empleo conlleva el riesgo de reinscribir las asunciones imperiales que subyacen en el esquema de los tres mundos (para una crítica de este esquema, v. Pletsch 1981). Por ejemplo, Chakrabarty plantea que la historia europea funciona globalmente como la clave para interpretar la historia del Tercer Mundo, y para ello invoca la famosa analogía de Marx entre la biología evolutiva y el desarrollo social (su idea de que igual que la anatomía humana es la clave para entender la anatomía del mono, las categorías abstractas de la sociedad burguesa son la clave para entender las sociedades anteriores) (1992: 3-4). Esta clave solo se aplica a las sociedades contemporáneas si no ofrecemos resistencia a la negación imperial de su carácter coetáneo, lo que hace que parezcan mantener entre sí una relación evolutiva y no admite que coexisten lado a lado (contra Fabian 1983). El argumento de que "un historiador del Tercer Mundo está condenado a conocer Europa dado que es la cuna de lo moderno" (Chakrabarty 1992: 19) revela, pero también confirma, el papel ideológico de Europa como la clave indispensable para comprender la realidad interna del Tercer Mundo. Aun cuando Chakrabarty analiza la efectividad de esta división ideológica entre Europa y sus Otros, el lector puede muy bien preguntarse si la aceptación de esa división no supone el riesgo, al mismo tiempo, de reinscribir la idea de Europa como civilizada ("la anatomía humana") y del Tercer Mundo como salvaje ("la anatomía del mono"). He preferido tomar como punto de partida el concepto de transculturación de Ortiz, tanto para problematizar la separación entre Primer y Tercer Mundo como para poner en tela de juicio la idea de Europa como la patria de la teoría (1995).

occidentalismo demanda desbancarlo como modo de representación que produce concepciones polarizadas y jerárquicas de Occidente y sus Otros y hace de esas concepciones figuras centrales en los recuentos de las historias global y locales mediante una serie de operaciones: la desagregación de sus historias relacionales; la conversión de la diferencia en jerarquía, la naturalización de esas representaciones; y, por tanto, la intervención, aun sin intención, en la reproducción de relaciones asimétricas de poder¹¹.

De lo dicho hasta aquí debe ya resultar evidente que este libro explora la historia de Venezuela mediante una mirada a los centros cimeros del poder político. Ese tipo de historia comparte el problema de las historias “de arriba hacia abajo”, aun si trata de ubicar ese “arriba” en el seno de un complejo conjunto de relaciones y de verlo desde los márgenes. Una limitación obvia es el acceso restringido que tiene la mayoría de los analistas a lo que a menudo es un escenario social poderoso, excluyente e infestado de secretos. No obstante, el riesgo mayor es el de verse atrapado “arriba” por los rigores del trabajo y las complicidades osmóticas del poder, con el resultado de que los sectores subordinados desaparecen de la vista o permanecen como sombras en el trasfondo. Cuando ello sucede, el análisis, inconscientemente, tiende a reinscribir la arrogante mirada desde la cima y a reproducir su autoproclamada universalidad y su desinterés básico por las vidas y las formas de conocimiento de los sujetos subalternos.

Si bien me he concentrado en una mirada desde las imponentes alturas del Estado, he tratado de brindar una perspectiva de los de abajo, desde adentro y también desde afuera. Producir este libro mientras trabajaba con sectores populares de Venezuela, iba y venía desde Estados Unidos y tenía en mente a lectores venezolanos y de otros países, me alentó constantemente a emplear perspectivas cambiantes, a rastrear los vínculos entre formas de poder locales y globales, y a ver el Estado como dominante y dependiente, incluso como subalterno.

Al contrario de algunas taxonomías esencialistas de lo subalterno, considero el concepto de subalternidad como relacional y relativo, y que hace referencia a actores sociales heterogéneos que comparten una condición común de subordinación. Entiendo que hay tiempos y lugares en los que aparecen en el escenario de la historia como sujetos subalternos que, en otros tiempos y lugares, desempeñan papeles dominantes. Más aún: en cualquier tiempo y lugar, un actor puede ser subalterno en relación con otro, y al mismo tiempo dominante con respecto a un tercero. Y, por su-

¹¹ Desarrollo este punto de vista sobre el occidentalismo mediante una elaboración a partir de la obra de Said que se apoya en una evaluación crítica de tres modalidades de representación occidentalistas. Para una importante contribución al análisis de la formación mutua de Europa y sus colonias, v. Cooper y Stoler (1989).

puesto, hay contextos en los cuales estas categorías no son aplicables. La subalternidad no define el ser de un sujeto, sino un Estado subordinado del ser¹². Sin embargo, dado que la subordinación prolongada tiene como efecto la fijación de los sujetos en posiciones de limitación, una concepción relacional de lo subalterno exige una visión doble que reconozca, en un nivel, un suelo común para diversas formas de subordinación y, en otro, la identidad singular de sujetos formados en mundos sociales específicamente acotados. Mientras que la primera óptica abre un espacio para establecer vínculos entre múltiples sujetos subordinados (incluido el analista que adopta una perspectiva subalterna), la segunda reconoce los efectos diferenciadores e intransferibles de modalidades específicas de subordinación¹³.

Desde una perspectiva subalterna abordo en este libro la formación del Estado venezolano en el contexto de la producción histórica de la modernidad subalterna de Venezuela. Para el tratamiento de la dominación y la subalternidad como caracterizaciones relacionales, me ha resultado productivo en ciertas situaciones observar el Estado neocolonial en lo que tiene de permeado por relaciones de subalternidad, sin olvidar su considerable poder ni su diferencia con actores subalternos sujetos a formas más absolutas de subordinación. Al desagregar categorías homogeneizantes en sus formas históricas relacionales, una perspectiva subalterna brinda la base para una crítica general del poder en sus formas múltiplemente fetichizadas. En lugar de organizar mi recuento en términos de narrativas que presentan al Estado como un agente soberano y central en la transformación de la nación de la tradición a la modernidad, tomo esas narrativas como mi objeto de análisis.

He tratado de no olvidar que el proceso de formación del Estado venezolano forma parte de un proceso global de modernidad que reclama para sí una universalidad, una racionalidad y una moralidad que dependen de la subordinación, la exclusión o la destrucción de formas alternativas de sociabilidad, racionalidad y valores (Chatterjee 1993). Como las narrativas de la modernidad se han construido sobre la base de exclusiones y negaciones, he tratado de prestar atención a las operaciones ocultas que seleccionan y naturalizan la memoria histórica, al filtro que crea las memorias nacionales y global, y a sus respectivas formas de amnesia.

¹² A partir de la tipología de la cual se sirve Guha para clasificar a los sujetos subalternos y dominantes, Spivak centra su trabajo en el sujeto subalterno con menos poder para desarrollar su tesis sobre la subordinación como actor político del sujeto subalterno, o, dicho con sus palabras, su incapacidad para "hablar". En una crítica de su argumentación central, tomo los sujetos subalternos intermedios de Guiña para desarrollar una concepción relacional de la subalternidad que utilizo para analizar las transformaciones del Estado venezolano en 1989, cuando sus líderes populistas se convirtieron en defensores del programa de austeridad del FMI (1994; 2000).

¹³ Este cambio de lo que entiendo por subalternidad, que difiere de lo que significaba para mí el término en trabajos previos (1994), le debe mucho a algunos debates que sostuve con miembros del Grupo de la Playa del Latin American Subaltern Studies Group de Puerto Rico (marzo de 1996), y especialmente a la insistencia de Josefina Saldaña en la alteridad radical de los sujetos subalternos y a la sugerencia de Alberto Moreira de que empleáramos un "registro doble" en nuestro acercamiento a lo subalterno.

Aunque la antropología se ha detenido a las puertas del estudio del Estado, paradójicamente me preparó para abordar algunas de las tareas que he enfrentado en este libro. Las unidades de estudio usuales de la antropología son los pueblos subordinados o subalternos: los Otros de Occidente, y, en el seno de Occidente, sus comunidades o subculturas marginales. Comencé a elaborar esta obra en la Universidad de Chicago, a manera de esfuerzo para lograr que la antropología superara sus límites legítimos previamente establecidos. Es un lugar común de la antropología política que el antropólogo “tiene una ‘licencia profesional’ para estudiar las estructuras intersticiales, suplementarias y paralelas de sociedades complejas, esto es, las áreas grises periféricas que rodean lo que Lenin trató como las alturas estratégicas del poder soberano” (Vincent 1978:176). Me propuse aceptar esta licencia y al mismo tiempo poner en tela de juicio sus límites, y centrarme directamente en el estudio de las alturas estratégicas del poder soberano. Al centrar mi atención en las zonas opacas de las decisiones estatales y corporativas que están en el corazón mismo de procesos que han conformado el mundo moderno, he tratado de preservar la perspectiva unificante que ha distinguido a la antropología, así como la energía descentrante que anima esta obra.

La perspectiva descentrada desarrollada en el libro intenta establecer una posición que permita trascender la oposición entre lo universal y lo regional que subtiende a la modernidad occidental. El “descentramiento”, igual que lo “pluritópico” de Mignolo (1995) o lo “policéntrico” de Shohat y Stam (1994) funciona como señal que expresa el deseo de llegar a modos de aprehender y construir la diferencia en la igualdad. Al adoptar esta perspectiva confío en no limitarme a ampliar las referencias geopolíticas de la modernidad, sino a trascender su horizonte conceptual. Como señala Dussel:

La “realización” de la modernidad ya no consiste en el paso de su encamación europea abstracta a la “real”. Hoy en día consiste más bien en un proceso que trascenderá a la modernidad como tal, en una transmodernidad, en la cual tanto la modernidad como su alteridad negada (las víctimas) se realizan mutuamente en un proceso mutuo de fertilización creativa (1993: 76).

En su libro *Petróleo - jugo de la tierra*, Juan Pablo Pérez Alfonzo, el arquitecto fundamental y posterior crítico de las políticas petroleras venezolanas, afirmó que “el petróleo es el más importante de los combustibles indispensables para la vida moderna” (1961:83). Toda su obra se nutrió de un agudo sentimiento de que el petróleo era central para la conformación del mundo moderno, como fuente de energía que se agota y también como sustancia que se incorpora al mundo objetual de la modernidad, desde la ropa que usamos hasta los vehículos que nos transportan y las casas que

habitamos. El petróleo ha contribuido a moldear un mundo muy estratificado y ecológicamente irracional cuya imagen es la de pueblos y cosas desvinculados, que comparten su separación unos de otros y de la historia que los engendró. Si la modernidad es un proceso que se caracteriza por la incesante, obsesiva e irreversible transformación de un mundo fragmentado en entidades separadas entre sí, entonces los efectos de la producción y el consumo de petróleo reflejan el espíritu de la modernidad¹⁴. Susan Buck- Morss ha señalado que “Una construcción de la historia que no mire hacia adelante, sino hacia atrás, hacia la destrucción de la naturaleza material como ha ocurrido realmente, brinda un contraste dialéctico con el mito futurista del progreso histórico (que sólo puede sostenerse si se olvida lo sucedido)” (1995: 95). Si una visión subalterna del pasado -lo que Walter Benjamín llamó “la tradición de los oprimidos” (1969:253-264)- se sostiene en la esperanza de un futuro sin subalternidad, la construcción que hace este libro de la historia de Venezuela trata de mirar adelante, hacia una forma de progreso que dé forma a esa esperanza.

¹⁴ Tomo este concepto de una conversación con mi amigo Jim Huey.

Primera parte

Premiere

*La naturaleza de la nación:
fetichismo del Estado y nacionalismo*



El general Juan Vicente Gómez en Maracay, rodeado por familiares y amigos.

(Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Foto: Felipe Toro.)



Hombre con un busto de Simón Bolívar durante el saqueo de Caracas tras la muerte del general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935. (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

1. La naturaleza de la historia

Quizás la palabra más compleja del idioma sea “naturaleza”. Resulta relativamente fácil distinguir en ella tres zonas de significado: 1) la cualidad y el carácter esencial de algo; 2) la fuerza inmanente que dirige al mundo o a los seres humanos, o a ambos; 3) el mundo material, se incluya o no en él a los seres humanos. No obstante, es evidente que en 2) y 3), aunque la zona de referencia es clara en sentido general, los significados precisos son variables y, en ocasiones, incluso opuestos. El desarrollo histórico de la palabra en los tres sentidos es importante, pero también resulta significativo que los tres sentidos, y las muchas variaciones y alternativas en el seno de los dos más complicados de ellos, permanecen aún activos y generalizados en los usos contemporáneos de la palabra.

Raymond Williams

Una construcción de la historia que no mire hacia adelante, sino hacia atrás, hacia la destrucción de la naturaleza material como ha ocurrido realmente, brinda un contraste dialéctico con el mito futurista del progreso histórico (que sólo puede sostenerse si se olvida lo sucedido).

Susan Buck-Morss

Como dijera Borges en cierta ocasión, la ausencia de camellos revela la autenticidad del Corán: es un texto que tiene sus raíces en una cultura donde se da por sentada la existencia de los camellos. Siguiendo la misma lógica, la poca atención prestada a la naturaleza por la teoría social occidental contemporánea, quizás muestre hasta qué grado la apropiación masiva de los recursos naturales de la cual depende el mundo moderno ha llegado a asumirse como un hecho natural. Sin embargo, si en el primer caso esa familiaridad expresa la dinámica milenaria entre sociedad y naturaleza, en el segundo refleja el crecimiento abrupto de una perspectiva de corto plazo que amenaza el futuro de la naturaleza y de la humanidad.

“Podemos cerrar los ojos y decir que no queremos estar bien informados sobre estos temas”, afirma uno de los autores del “primer informe completo sobre el estado general del territorio de los Estados Unidos”¹. No obstante, ese estudio insta a una toma de conciencia colectiva: “Vastos territorios donde antes existía un dinámico *hábitat* natural, que en una época sumaban al menos la mitad del área de los 48 estados contiguos, se han degradado hasta el punto de correr peligro”. Otro de sus autores, al alertar sobre el hecho de que “no se trata de que estén desapareciendo especies aquí y allá, sino de que estamos perdiendo conjuntos enteros de especies y sus *hábitats*”, propone que “a

¹ En la primera página de *The New York Times* del 15 de febrero de 1995 se publicó un artículo sobre este informe. Sobre la idea de que la protección de las especies en vías de extinción no puede adoptarse como un objetivo absoluto, sino que se la debe equilibrar con la promoción de las necesidades humanas, v. Mann y Plummer (1994).

los que fomentan nuevos proyectos debería exigírseles pruebas de que sus actividades no resultarán dañinas". En momentos cuando se exalta el libre mercado como la encarnación natural de la racionalidad, creo que es más que probable que los encargados de presentar aquellas pruebas serán los estados, cuyas regulaciones sobre conservación ambiental (incluida la Ley sobre Especies en Vías de Extinción [*Endangered Species Act*], aprobada en EEUU), corren el riesgo de ser eliminadas por "antinaturales", en respuesta a las presiones de los defensores de los derechos sobre la propiedad y sus aliados conservadores en el Congreso estadounidense. Resulta irónico que los pasos que dan los conservadores para abrir nuevos espacios a la obtención de ganancias mediante la eliminación de impedimentos al juego "natural" del mercado, amenacen con erosionar las bases físicas que hacen posibles las ganancias a largo plazo y la vida misma.

Es notable que el informe describa la destrucción de la naturaleza en el mismo centro del sistema capitalista. La información disponible sobre el resto de las Américas y otras regiones no metropolitanas, configura una imagen inquietante de la devastación de la naturaleza que ha tenido lugar en las naciones neocoloniales, en las cuales una cultura colonial de pillaje de la naturaleza sigue sirviendo de base a las prácticas actuales. A pesar de los esfuerzos encaminados a diversificar sus economías, realizados después de obtener la independencia, estas antiguas colonias continúan, por lo general, dependiendo de productos agrícolas o minerales de exportación y son regidas por Estados cuyas indulgentes políticas ambientales a menudo son violadas por "promotores" que cuentan con la complicidad de funcionarios estatales².

Un ejemplo típico ilustra la erosión de las bases naturales de las economías del Tercer Mundo. Hace una década, las Naciones Unidas consideraban "rico" en recursos hidráulicos a El Salvador, pero hoy lo definen como cercano a la "línea de la pobreza". El país experimenta actualmente una grave escasez de agua debido a la mala planificación, el despilfarro causado por tuberías con un deficiente mantenimiento y el uso abusivo por parte de los dueños de la tierra. El caudal del Lempa, el mayor río del país, ha disminuido en 62,9% entre 1985 y 1993. Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropriada, afirma que el agua "se convertirá en un recurso estratégico, y una gran parte de las futuras acciones políticas y militares tendrán como causa el abastecimiento de agua a habitantes con poder". Y añade: "En el futuro hablaremos de ecopolítica y no de geopolítica, porque los límites geográficos serán menos importantes que los ecológicos para la definición de áreas de interés y relaciones de poder". Según Navarro, "lo que debiera constituir una fuente de vida se

² Para un análisis clásico del impacto destructivo de la conquista y la colonización de las Américas, v. Crosby (1972).

convertirá en fuente de disputas y violencia” (cit. por Dalton 1995)*. La distinción que establece Navarro entre preocupaciones ecológicas y geográficas llama poderosamente la atención sobre la necesidad de incluir una apreciación más plena de la importancia de la naturaleza en la geopolítica contemporánea. Y aunque este ejemplo parezca tener importancia solo en el nivel interno, la destrucción del bosque húmedo de la Amazonia, fuente de oxígeno de todo el planeta, evidencia que las preocupaciones ecológicas plantean cuestiones relativas a la soberanía nacional y los derechos internacionales que ponen en tela de juicio los límites geopolíticos tradicionales.

Desde los orígenes del comercio mundial, nacido con la conquista de las Américas, hasta la globalización del mercado acelerada por avanzadas tecnologías de la producción y de las comunicaciones, la mercantilización planetaria de los recursos naturales tiende a continuar como si estos fueran inagotables, a pesar de las restricciones conservacionistas. Para todo propósito práctico, en las sociedades en las cuales los negocios han llegado a definir el sentido común y los fines de la existencia, se da por sentada la naturaleza.

La teoría social occidental y la naturaleza

Ninguna generalización puede hacer justicia a los tratamientos diversos y complejos que ha hecho de la naturaleza la teoría social occidental. Creo, sin embargo, que los paradigmas dominantes en la ciencia social occidental tienden a reproducir la premisa que permea la cultura moderna de que puede darse por sentada a la naturaleza. La cosmovisión del progreso histórico posterior a la Ilustración por lo general afirma la primacía del tiempo sobre el espacio, y de la cultura sobre la naturaleza. En el marco de estas polaridades, la naturaleza se asocia de manera tan cercana al espacio y a la geografía que estas categorías a menudo se emplean como metáforas intercambiables. Cuando las diferencian, los historiadores y los científicos sociales usualmente presentan espacio o geografía como un escenario inerte sobre el cual tienen lugar los acontecimientos históricos, y a la naturaleza como el material pasivo con el cual los seres humanos construyen su mundo³. Esta separación entre

* Traducido del inglés. (N. de la T.)

³ Esta afirmación excluye subdisciplinas que le atribuyen a la naturaleza una influencia decisiva en los asuntos sociales, como la sociobiología y diversos tipos de determinismos geográficos cuyas categorías cosificadas y lógica reduccionista dificultan la comprensión y desalientan las acciones transformadoras; paradójicamente, estos puntos de vista sobre la naturaleza pueden tener el efecto de inhibir, por temor a resultar asociados a ellos, intentos alternativos encaminados a integrar a la naturaleza al análisis social. Por otra parte, sin que haya sido mi intención, mi caracterización no le hace justicia a un sustancial conjunto de trabajos que arroja luz sobre la compleja unidad que existe entre la sociedad y la naturaleza (realizado por geógrafos, antropólogos ecologistas, críticas feministas), y que incluye muchos estudios que han nutrido este libro, pero que puedo mencionar sólo de forma parcial en el presente análisis.

historia y geografía, y el predominio del tiempo sobre el espacio, tienen el efecto de producir imágenes de sociedades que parecen separadas de su medio natural, como si estuvieran hechas de aire. Cuando aparece la naturaleza generalmente adopta, de nuevo, la apariencia del aire, eterna y al alcance de la mano. Bañada por esta luz engañosa, la apropiación social de la naturaleza no parece requerir una atención analítica especial.

No pretendo que esta caracterización sea más que una guía general que me ayude a ubicar mi punto de vista sobre los paradigmas teóricos dominantes tal y como los veo desde mi perspectiva de antropólogo cultural e historiador. Mi obra, que forma parte de una contracorriente, parte de estudios que se oponen a la actual priorización del tiempo a costa del espacio, pero no mediante un reordenamiento, sino mediante una redefinición de esas categorías para integrar una concepción espacializada del tiempo con una idea temporalizada del espacio. Muchos de esos estudios se han producido en el punto de intersección entre la geografía radical y la economía política. En un análisis sobre esta corriente titulado “The Postmodernization of Geography: A Review”, Edward Soja comenta que la atención creciente que les conceden los no geógrafos a los temas espaciales y geográficos ha llegado a tal punto que esos advenedizos “se atreven ... a proclamar lo que la mayoría de los geógrafos aún vacilan en hacer explícito: que el espacio y la geografía quizás estén desplazando la primacía del tiempo y la historia como las dimensiones interpretativas especialmente significativas del periodo contemporáneo” (1987: 289).

Si se tiene en cuenta que el complejo conjunto de transformaciones culturales asociado a la posmodernidad conlleva una crisis de los metarrelatos y, por consiguiente, el privilegio de la simultaneidad en detrimento de la secuencialidad, y de la superficie a costa de la profundidad, resulta comprensible que se pueda creer que la “posmodernización de la geografía” conduzca, como sugiere Soja, al desplazamiento del tiempo por parte del espacio. Mientras que los *grand récits* de la modernidad empujaron a la geografía hacia el trasfondo, el *bricolage* de la posmodernidad la hace regresar al centro del escenario. Es muy posible que la geografía esté desempeñando un papel principal en esta coyuntura; pero en la medida en que esta reversión de los papeles preserve los significados comúnmente atribuidos a las categorías espacial y temporal, su protagonismo se ve inhibido por una ansiedad posmoderna relativa a cualquier forma de agencia y a la propia posibilidad del protagonismo histórico.

Por ejemplo, Fredric Jameson considera que el posmodernismo es el “dominante cultural” que expresa la homogeneización del mundo bajo la égida del capitalismo tardío. La expansión del

capitalismo coloniza terrenos que habían servido para establecer normas de diferencia y bases para la historicidad. A este respecto, Jameson asigna un papel esencial al Tercer Mundo. Por momentos lo incluye desembozadamente junto al inconciente como parte de la naturaleza: “El capitalismo tardío puede, por tanto, describirse como el momento cuando los últimos vestigios de la Naturaleza que sobrevivieran en el capitalismo clásico, esto es, el Tercer Mundo y el inconciente, resultan al fin eliminados” (1984: 207). En otros escritos lo ubica como una formación precapitalista en el seno de un marco evolucionista convencional (1986; 1988; 1990). En ambos casos, en la medida en que el posmodernismo coloniza el Tercer Mundo, éste deja de funcionar como un alter ego en relación con el cual el Primer Mundo puede reconocer su propio avance e historicidad⁴. Sin un afuera (esto es, la naturaleza o el Tercer Mundo) que sirva como fuente de diferencia radical, y con un adentro constituido por la generalización de un espacio posmoderno carente de profundidad, generado por las nuevas tecnologías de la producción y las comunicaciones, el mundo se toma irrepresentable. Como respuesta al mundo opaco e impenetrable que ha disuelto la posibilidad de una opción política radical por parte de sujetos soberanos, Jameson propone una “estética de trazado de mapas cognoscitivos”. A la pérdida del sentido de la historicidad asociada con el surgimiento del espacio posmoderno, le corresponde un debilitamiento de la agencia política.

A diferencia de Jameson, Ernesto Laclau celebra las posibilidades políticas abiertas por el posmodernismo, al cual considera un cambio epocal de las condiciones de formación de identidad. En vez de los protagonistas políticos unitarios de la modernidad, cuyos papeles prescritos fueran fijados por los grandes metarrelatos, ahora resulta posible imaginar estrategias políticas múltiples en torno de una plétora de identidades y alianzas constituidas de manera fluida. En un libro sugerentemente titulado *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo* (1990), Laclau apoya su argumentación en un extenso análisis del espacio y el tiempo como principios de organización. Considera el espacio como un campo de repetición, estasis y determinación, por oposición al tiempo, que entiende como el reino de la innovación, el cambio y la libertad. Al conceptualizar la libertad como la ausencia de determinación (obsérvese la afinidad con las definiciones liberales de la libertad como la ausencia de restricciones), Laclau ve la historia como una expresión de libertad y, por tanto, como el reino de la política. El espacio, que es el terreno de la repetición o la estasis, se reduce a una esfera no política de determinación estructural.

Resulta significativo que a pesar de sus divergentes evaluaciones de la posmodernidad, Jameson y Laclau

⁴ Sin embargo, para Jameson los textos del Tercer Mundo de alguna forma se mantienen fuera del alcance del posmodernismo. Presumiblemente, dado que como expresión de una cultura de resistencia reflejan una realidad premoderna, aún tienen “una tendencia a recordarnos etapas superadas de nuestro propio desarrollo cultural en el Primer Mundo” (1986: 65). Para una crítica de la concepción de Jameson de la literatura del Tercer Mundo, v. Ahmad (1987).

reproduzcan una opinión muy generalizada que considera al tiempo y al espacio como categorías opuestas.

Si bien aprecian el nuevo papel del espacio en la cultura posmoderna, preservan su familiar subordinación al tiempo como lugar primario de la agencia en la teoría social. Sin embargo, la nueva valorización del espacio reduce la efectividad de la historia. Liberada de los metarrelatos modernistas y desanudados los lazos que la ataban a condiciones estructurales que la dotaban de un poder trascendental, la historia se asocia ahora a microprocesos de efectos inciertos. Al ubicar la construcción de la historia en situaciones contingentes, se libera a la agencia humana de la determinación estructural, pero también se la hace menos capaz de realizar transformaciones históricas.

Una inclinación posmoderna a divorciar las formaciones culturales de las relaciones sociales, a menudo ha significado que éstas se vieran como textos cuyo significado puede elucidarse mediante análisis textuales, con independencia de las condiciones en las cuales se producen y reciben. En la medida en que la sensibilidad posmoderna conduce a la teorización de la naturaleza y el espacio en estos términos textualizados, el espacio aparece como un constructo discursivo vaciado de materialidad. Si la naturaleza y los fenómenos espaciales asociados a ella fueron antes tratados como el escenario material donde los dramas modernistas describían el progreso ineluctable de la historia, ahora son llevados como cuerpos etéreos a un escenario descentrado donde guiones posmodernos ponen en duda la posibilidad de representar la historia y su avance. La naturaleza, desplazada como trasfondo material o desmaterializada como protagonista meramente discursivo, ha eludido estos modos dominantes de análisis social.

Si se conceptualiza desde el inicio a la sociedad y a la naturaleza como distintas pero partes de un todo único, deja de tener sentido tratar a ésta como externa a la sociedad o desestimar la materialidad sensible y significativa del mundo hecho por los seres humanos. Se puede reconocer la naturaleza como un algo dado, un don, y también aceptar que los seres humanos forman parte de ella y al mismo tiempo participan en su transformación, que la ha tornado “segunda naturaleza”⁵. Este reconocimiento permite historizar y no ontologizar la relación entre naturaleza y sociedad. A partir del concepto marxiano de la unidad fundamental entre sociedad y naturaleza, Ollman plantea que ambas están vinculadas por “relaciones internas” y no por una interacción externa; esto es, por la constitución dialéctica de entidades relacionadas y no por la interacción entre entidades separadas

⁵ Hegel utilizó el concepto de segunda naturaleza para distinguir entre el medio ambiente natural, externo, o primera naturaleza, del medio social pleno de sentido que crean los seres humanos. Según Marx, en las sociedades capitalistas esta segunda naturaleza también aparece como externa a los humanos, dado que estos no controlan las condiciones de su producción. El concepto marxiano del metabolismo entre la sociedad y la naturaleza expresa tanto su unidad fundamental como sus variables diferenciación y separación históricas. Para un análisis del concepto marxiano de naturaleza, v. Schmidt (1971), Smith (1990) y Lippi (1979).

(1971: 28)⁶. De modo similar, Schmidt sugiere que, para Marx, “mientras que los procesos naturales independientes de los hombres son en lo esencial transformaciones de materia y energía, la producción humana misma no escapa de la esfera de la naturaleza”, porque los seres humano son una parte de la naturaleza cuya naturaleza humana se transforma mediante su actuación sobre la naturaleza externa. Como resultado de esta “interacción metabólica”, que fue la manera de Marx de referirse a este intercambio entre la sociedad y la naturaleza, “la naturaleza se humaniza y los seres humanos se naturalizan” (1971: 78-79).

Esta perspectiva unificadora también puede emplearse para el estudio del espacio y el tiempo. Lo que Soja llama “la reafirmación del espacio y la geografía en la teoría social crítica” (este es el subtítulo de su libro de 1989 podría entonces entenderse como la oportunidad no para instalar el espacio y la geografía en el lugar del tiempo y de la historia como “las dimensiones interpretativas especialmente significativas del periodo contemporáneo”, sino para reevaluar el significado de estas categorías polarizadas. El tiempo ocupa el espacio, y el espacio se despliega en el tiempo; como “medios” recíprocos comparten una fundamental unidad en la diferencia⁷. Doreen Massey apunta que el asunto no consiste en

argumentar a favor de una reconsideración del estatus del espacio en los términos del viejo dualismo (proyecto que, de cualquier manera, se puede argüir que es consustancialmente arduo, dados los términos de dicho dualismo), sino en plantear que lo que hay que superar es la formulación misma del espacio/tiempo en términos de este tipo de dicotomía (1992: 75).

Esta oposición dualista está siendo criticada desde distintas disciplinas académicas y movimientos intelectuales. La propia reconceptualización de Massey integra de modo creativo los hallazgos de la geografía radical, la teoría feminista y la física moderna. Supone tres consideraciones. La primera, la necesidad de desarrollar una concepción alternativa de la sociedad como entidad tetradimensional, y no “como una especie de corte tridimensional (e, incluso, más a menudo bidimensional) que se mueve a lo largo del tiempo” (1992: 79). La segunda, la necesidad de conceptualizar el espacio como algo “construido sobre la base de interrelaciones, como la coexistencia simultánea de interrelaciones

⁶ Según Bertell Ollman, una filosofía de las “relaciones internas” no solo supone que las relaciones son internas a las cosas, sino que las cosas son inherentemente relacionales. “Nadie negaría que las cosas aparecen y funcionan como lo hacen debido a sus lazos espacio- temporales con otras cosas, incluido el hombre en tanto ser con necesidades físicas y sociales”, dice Ollman. Y añade: “Concebir las cosas como relaciones equivale simplemente a interiorizar esta interdependencia... en la cosa misma” (1971: 28).

⁷ Gregory y Urri utilizan la idea de “medio” en relación con el espacio: “La estructura espacial se considera ahora no solo como el escenario en el cual se despliega la vida social, sino como el medio a través del cual se producen y reproducen las relaciones sociales” (1985:3).

e interacciones en todas las escalas espaciales, desde el nivel más local hasta el más global” (1992: 80). No hay que entender el tiempo como una dimensión absoluta, sino como una forma de relacionalidad, como simultaneidad, como “un momento en la intersección de relaciones sociales configuradas” (1992:81). La tercera, la necesidad de pensar el espacio como ordenado y caótico a la vez y, por tanto, de trascender dicotomías que han servido, como en la obra de Laclau, para tratar la espacialidad como “una estructura que establece la naturaleza positiva de todos sus términos” (1990: 69). El espacio, ya no restringido al dominio estructurado del orden, puede terminar su injustificable exilio de la política. Se puede ver la libertad de modo sustantivo en lugar de identificarla formalmente con la acción irrestricta e inmaculada.

Obra pionera de Henry Lefebvre, *La production de l'espace* ([1974] 1991), ha sentado las bases para pensar el espacio en términos que integran su significación socialmente construida con sus propiedades formales y materiales. A diferencia de los teóricos que interpretan la construcción social del espacio como una licencia para separar la sociedad de la naturaleza, Lefebvre la entiende como parte del desafío de examinar cómo la naturaleza participa en la construcción social del espacio. Su tríada de “práctica espacial, representaciones del espacio y espacios representacionales” constituye un marco útil para investigar cómo se han producido históricamente las múltiples formas de percibir, concebir y vivir el espacio y de otorgarles significación cultural. Para Lefebvre, los seres humanos, ubicados en la naturaleza y utilizando los materiales que ella provee, construyen el espacio, pero no como una cosa, como “se produce un kilogramo de azúcar o una yarda de tela”. Los espacios se producen a partir de relaciones sociales y de la naturaleza, que constituyen su “materia prima” (1974: 84). Son tanto el producto como la condición de posibilidad de las relaciones sociales. Como relación social, el espacio también supone una relación natural, una relación entre la sociedad y la naturaleza mediante la cual la sociedad se produce a sí misma al apropiarse de la naturaleza y transformarla. “¿Es el espacio una relación social?”, se pregunta Lefebvre. Su respuesta enfatiza el papel del poder en la producción social del espacio: “Sin duda, pero es una relación social inherente a las relaciones de propiedad (en especial la propiedad de la tierra), y también está estrechamente vinculada con las fuerzas productivas (que le imponen una forma a esa tierra)” (1974:85). Si bien los efectos de la naturaleza dependen necesariamente de sus propiedades físicas, esas propiedades siempre se construyen culturalmente mediante interacciones sociales que tienen lugar en campos de poder. Como veremos, esta perspectiva crítica -perfeccionada por estudiosas feministas y geógrafos radicales- ha nutrido mi análisis de la relación entre el Estado y la economía petrolera de Venezuela.

La naturaleza del Tercer Mundo

Es evidente que todas las naciones se ubican en el espacio y se constituyen mediante relaciones específicas con el mundo natural. Sin embargo, la relación de las naciones con la naturaleza cobra una particular significación en los países que dependen de la producción de productos primarios, mercancías cuya ventaja comparativa en el mercado internacional por lo general se deriva de una combinación de factores naturales y trabajo barato, y no de una productividad social mayor. En la mayoría de las naciones neocoloniales estos productos son agrícolas o minerales; excepto en el caso de la minería de capital intensivo, su producción usualmente supone un uso abundante de trabajo. Por esta razón, es probable que el trabajo barato continúe siendo en el futuro una importante ventaja comparativa de las economías del Tercer Mundo. No obstante, dado el poder del capital para sustituir por máquinas el trabajo humano, y el desarrollo de una economía informal en sociedades metropolitanas sobre la base del trabajo barato de nacionales e inmigrantes, son las cualidades especiales de los recursos naturales del Tercer Mundo, y no su trabajo barato, las que, en última instancia, le garantizan a la región como un todo un papel en la división internacional del trabajo⁸.

Sin embargo, incluso esta base natural no es estable. Según Alexander Kouznetsov, funcionario de asuntos económicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Cnucd), hay evidencias que indican la existencia de “una dimensión generalmente desatendida de cambio estructural a largo plazo que puede caracterizarse como la “desmaterialización” de la producción, esto es, una reducción de la demanda de productos de las industrias de materias primas intensivas en los países industrializados y una disminución de la intensidad del uso de materias primas en los sectores industriales ya existentes” (1988:70). Esta “desmaterialización de la producción” afectará en particular, según Kouznetsov, “a la mayoría de los países en vías de desarrollo, los cuales dependen de su capacidad de explotar y comercializar sus recursos naturales, que representan la parte principal de su potencial de exportación y a menudo son su única fuente confiable de obtención de divisas” (1988: 67)⁹.

⁸ La industria del turismo confirma la dependencia del Tercer Mundo con respecto a la “naturaleza”. Mientras que el turismo en el Primer Mundo supone el consumo de ambientes y productos culturales creados por los seres humanos, en el Tercer Mundo depende mucho del consumo de ambientes naturales mínimamente modificados para proporcionar las comodidades adecuadas a quienes desean experimentar la “naturaleza”, lejos de la “civilización”.

⁹ Para un análisis más amplio del papel de las materias primas en estructuras productivas en evolución, v. *Materials Technology and Development*, el quinto número del *Bulletin for the Advanced Technology Alert System*, publicado por las Naciones Unidas.

La división internacional del trabajo es también una división global de la naturaleza, no solo una división social del trabajo. “La tierra, los recursos del subsuelo, el aire y la luz que bañan la tierra” - apunta Lefebvre- “son todos parte de las fuerzas productivas y de los productos de esas fuerzas”. La división del trabajo, por tanto, “afecta a todo el espacio, no solo al ‘espacio de trabajo’, no solo a la fábrica” (1991:347). Lo que puede llamarse la división internacional de la naturaleza constituye la base material de la división internacional del trabajo: son dos dimensiones de un proceso unitario. Centrar la mirada de manera exclusiva en el trabajo vela el hecho ineludible de que el trabajo siempre se ubica en el espacio, que transforma la naturaleza en ubicaciones específicas, y, por tanto, que su estructura mundial supone también una división global de la naturaleza.

Una vez que se incorpora la naturaleza al análisis social, no se puede seguir abstrayendo la organización del trabajo de su base material. El motor de la expansión mundial del capitalismo y la creación de un mercado global de mercancías ha sido el esfuerzo promovido por el afán de lucro para controlar, además del trabajo barato, la tecnología y los mercados, a la naturaleza. La noción abstracta del “mundo de las mercancías”, señala Lefebvre, “no puede concebirse separada del mercado mundial, el cual se define territorialmente (en términos de flujos y redes) y políticamente (en términos de centros y periferias)” (1991:350). La construcción del Primer y del Tercer Mundo como categorías regionales tiene su premisa en una distinción entre zonas donde el capitalismo se desarrolla mediante el fomento de nuevas tecnologías y productos, y regiones donde “penetra” y se expande mediante el control del trabajo, los mercados y la naturaleza. Si bien esta taxonomía esquemática enmascara las complejas interacciones históricas mediante las cuales el Primer y el Tercer Mundo se han formado mutuamente, lo cierto es que refleja el papel asignado a la periferia como fuente de trabajo y materias primas baratos.

Si, como proponen los geógrafos radicales, la geografía importa, es en buena medida porque hace importar a la materia misma. Dado que la significación de la naturaleza siempre se constituye históricamente, lo sustancial de reconocer la importancia de la geografía, en mi opinión, no consiste en desplazar a la historia, sino en integrar perspectivas históricas y geográficas. Como he señalado, una perspectiva sintética resulta especialmente relevante para examinar sociedades en el Tercer Mundo, región constituida mediante formas cambiantes de control colonial e imperial de sus poblaciones y recursos naturales. Es mediante el desarrollo de esta perspectiva que intento entender cómo se tornó importante el petróleo en la transformación que hizo de Venezuela un Estado petrolero. Esta transfiguración, lejos de ser un proceso local, se realizó mediante vínculos que

relacionaban y transformaban a la nación y al mundo en el proceso de producción de riqueza.

La riqueza de las naciones: productos naturales, productos sociales

Los productos de la tierra -es decir, todo lo que se obtiene de su superficie mediante la aplicación conjunta de trabajo, maquinarias y capital- se divide en tres clases presentes en la sociedad, a saber, la propietaria de la tierra, la propietaria de las reservas o el capital necesario para su cultivo, y los trabajadores mediante cuya industria se cultiva la tierra. Pero en los diferentes estadios de la sociedad, la proporción del producto total de la tierra que se asigna a cada una de estas tres clases, bajo los nombres de renta, ganancia y salarios, ha sido esencialmente diferente; y esa proporción ha dependido fundamentalmente de la fertilidad, de la acumulación de capital y de la población y las habilidades, la ingeniosidad y los instrumentos empleados en la agricultura. Determinar las leyes que regulan esta distribución es el problema principal de la Economía Política. David Ricardo

En el mundo occidental, la compleja transformación social asociada al surgimiento de la modernidad ha llevado a una redefinición radical de la relación entre sociedad y naturaleza. La reorganización del trabajo estimulada por lo que Weber denominó de modo ambivalente “la búsqueda racional de la ganancia” ha planteado un número de cuestiones, entre las cuales ha sido central, para usar palabras de Smith, la “causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones”. El gran logro de la economía política clásica fue ubicar el trabajo en un lugar central del debate sobre el tema. Mientras que el mercantilismo había visto la fuente del valor en el comercio, y los fisiócratas en la tierra agrícola, los economistas políticos clásicos la ubicaron en el trabajo productivo. De esta forma distinguieron entre las riquezas naturales (dones invariables) y el trabajo (fuerza creadora de valor). Para ellos, si bien la riqueza de las naciones es resultado de la combinación entre naturaleza y trabajo, solo el trabajo productivo puede ampliar su magnitud.

Adam Smith fue el primero en plantearlo en esta forma, y Ricardo y Marx desarrollaron la idea. Sin embargo, la noción de la centralidad del trabajo se generalizó de manera tan inmediata que Marx, en su época, tuvo que recordarles a sus seguidores que la riqueza no es solo el resultado del valor socialmente creado, sino también de la “riqueza material” disponible en la naturaleza; o, como también dijo siguiendo a William Petty, el trabajo es el “padre” y la tierra la “madre” del valor (1967: 43). Aun así, los seguidores de la teoría del valor basada en el trabajo han tendido a centrar su atención en la extracción de plusvalía, sea en el nivel nacional o en el internacional, y a desatender el papel de la naturaleza en la creación de riqueza. Esa poca atención prestada a la naturaleza también

caracteriza la obra de los economistas neoclásicos, para los cuales los recursos naturales no merecen un tratamiento especial, porque se convierten simplemente en mercancías en un mercado de bienes cuyo valor está determinado por las orientaciones subjetivas de los actores económicos mediante la oferta y la demanda.

Empleando la teoría del valor basada en el trabajo, algunos estudiosos han producido análisis críticos para explicar la falta de desarrollo de la periferia en términos de la explotación del trabajo. Las teorías del desarrollo desigual plantean que los bienes producidos en la periferia tienen un componente mayor de trabajo incorporado que los bienes que se obtienen a cambio de ellos. Al partir de esta posición, así como del hecho de que la naturaleza no desempeña ningún papel en la creación de valor, resulta comprensible que los teóricos más preocupados por el análisis de la desigualdad internacional hayan descuidado el papel de los recursos naturales en la organización y la reproducción de las sociedades periféricas.

Como la producción de mercancías en la periferia generalmente se organiza alrededor de la explotación no solo del trabajo, sino también de los recursos naturales, entiendo que el estudio del neocolonialismo requiere que no sigamos concentrándonos en el flujo desigual de valor y que fijemos la mirada en la estructura desigual de la producción internacional. Este enfoque coloca en el centro del análisis la relación entre la producción de valor social y la riqueza natural. El propósito de llamar la atención hacia la producción como un proceso holístico es examinar el conjunto de las relaciones y entendidos sociales formados mediante la mercantilización mutua de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, en vez de estudiar los recursos naturales uno a uno, como mercancías (como hace la economía neoclásica) o concentrarse exclusivamente en la transferencia de valor (a la manera de la teoría del intercambio desigual).

En sociedades donde los ingresos provienen principalmente de la mercantilización del trabajo, la creación de valor es al mismo tiempo el principal objetivo de la producción y el principio subyacente de la organización económica. En sociedades donde los ingresos dependen de la mercantilización de la naturaleza, la captura de la renta condiciona la organización de las actividades económicas. En un caso, la estructura productiva tiene que transformarse constantemente para aumentar la productividad y las ganancias; en el otro, hay que maximizar las rentas y garantizar el acceso a su distribución mediante una variedad de medios políticos. Es obvio que la mercantilización de la naturaleza y del trabajo dependen una de la otra. La razón de esta distinción esquemática es ayudarnos a diferenciar tendencias dominantes en diferentes órdenes sociales. Si bien en cualquier

sociedad específica los elementos que contraste aquí están difuminados, lo que trato de demostrar es que el Primer y el Tercer Mundo tienden a polarizarse en términos de estos modos de producir y distribuir la riqueza. Esa diferencia tiene profundas consecuencias políticas y culturales que ameritan una mayor investigación.

Más allá de las apariencias

“La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un ‘enorme cúmulo de mercancías’” (Marx 1975- 1981: 43). Con esta simple observación Marx abrió su análisis clásico de la sociedad capitalista. Críticos y seguidores han discutido sobre los hallazgos y el método de Marx, pero han tendido a compartir las dos premisas implicadas en esta posición inicial: la concepción de la nación como la unidad fundamental de análisis y de que la riqueza nacional se expresa mediante las mercancías. Si bien esta perspectiva ha resultado útil para el estudio de las naciones ubicadas en el centro del sistema capitalista internacional, ha velado consistentemente la comprensión de las sociedades ubicadas en la periferia.

El capitalismo no solo se ha desarrollado al interior de las naciones, sino también entre ellas. Sin embargo, la identificación de la sociedad con la nación y el entendimiento de la nación como una unidad contenida en sí misma, a menudo conduce a la interpretación de los fenómenos económicos internacionales como proyecciones externas de la dinámica endógena de las naciones más avanzadas.

Como ha señalado un crítico de esta posición:

La tendencia ha sido tomar la economía nacional -el sistema capitalista desarrollado, monopolista, en el cual el modo de producción capitalista es universal, donde el desarrollo y la socialización de los medios de producción ha avanzado más, donde el dominio y el movimiento del capital resulta más claro- y entonces analizar las fuerzas que se proyectan hacia fuera de este sistema hacia el mundo externo (Radice 1975:18).

Como sugiere esa afirmación, por lo general se estudian las naciones capitalistas avanzadas como unidades autónomas, mientras que las sociedades periféricas se analizan en términos del impacto que tienen sobre ellas las naciones centrales. Una posición alternativa sostiene que la dinámica del “sistema-mundo” explica el desarrollo de las naciones (Wallerstein 1976). Esta última posición no centra su mirada en las naciones dominantes, sino en el sistema internacional, pero corre el riesgo de

preservar la idea de que las naciones periféricas se conforman a partir de fuerzas sistémicas externas. Incluso cuando se hace un esfuerzo explícito por dar cuenta de las historias de pueblos no europeos, y por observar la interacción entre naciones metropolitanas en expansión y sociedades periféricas, la tendencia es la de cobijar a estas naciones bajo el manto del capitalismo, y entender al capitalismo como una fuerza externa¹⁰.

Para hacer justicia a Marx, hay que decir que el análisis de una economía cerrada en *El capital* es una premisa simplificadora cuyo objetivo consiste en aclarar la lógica de la acumulación capitalista. Pero como en esa obra los vínculos entre la economía nacional y el sistema internacional -forjados mediante la acumulación primitiva, el colonialismo, el comercio mundial, la inversión extranjera y la banca internacional- se sugieren pero no se desarrollan, esta premisa de trabajo ha reforzado la tendencia a considerar la economía nacional como si fuera en realidad un sistema independiente. Al hacer en buena medida una abstracción de las condiciones externas, el modelo de Marx hace que la atención se dirija a la dinámica interna de la sociedad capitalista, concebida como unidad nacional. Es una sociedad impulsada por la constante expansión del valor, que resulta de la transformación del trabajo en fuerza de trabajo cada vez más productiva en el contexto de la competencia capitalista. La competencia por las ganancias conduce a la formación de un sistema productivo de creciente especialización y diferenciación, y a la producción en constante expansión de una variedad de mercancías en aumento. Para Marx las mercancías son el producto de la totalidad de la fuerza productiva de una sociedad y también factores en la organización de su sistema productivo. Como prendas simbólicas de la fuerza productiva de una sociedad, forman un sistema de significación mediante el cual se representa el valor interno; en este sentido son mercancías "nacionales". Es desde esta perspectiva que la riqueza de la sociedad capitalista se presenta como "un enorme cúmulo de mercancías".

Pero la preocupación de Marx no consistía solo en indagar acerca de los medios de representación de la riqueza, sino en investigar sobre los fines de la representación; esto es, no solo cómo, sino por qué la representación del valor asume la forma que asume en la sociedad capitalista. Compartía con Smith y Ricardo la opinión de que la riqueza de las naciones depende de la organización productiva del trabajo. Llamó a Adam Smith "el Lutero de la economía política" por haber demolido los fetiches de la economía vulgar: las ideas de que la tierra, el dinero o el comercio eran en sí mismos los orígenes de

¹⁰ Mediante el análisis de obras de Wolf (1982), Mintz (1985), Taussig (1980) y Mitchell (1988), entre otros, he planteado que el desarrollo del capitalismo en la periferia tiende a ser visto como una fuerza "externa" que se origina en los centros metropolitanos (1996).

la riqueza. Pero Marx dio un paso más. Mostró cómo surge el fetichismo del funcionamiento de la sociedad capitalista, y reveló el vínculo entre el modo de producir y la forma de representar el valor. En su opinión, la sociedad capitalista genera un conjunto de creencias ilusorias sobre sí misma que son componentes esenciales de las relaciones capitalistas. Esas creencias son reales en el sentido de que participan en la construcción social de la realidad y brindan una racionalidad para el comportamiento económico que representa fielmente la experiencia subjetiva conformada en un sistema dado de relaciones sociales. Pero son también engañosas, porque representan de modo distorsionado los procesos fundamentales de la creación y la distribución de valor en la sociedad capitalista; no muestran que estos tienen su origen en la dinámica reproductiva de la vida social. El fetichismo es el complejo proceso de representación mediante el cual los objetos aparecen como la fuente de poderes que el trabajo humano inscribe en ellos.

Lo que se oculta, sugiere la obra de Marx, determina no solo lo que se representa, sino la propia naturaleza de la representación. El intercambio en la esfera de la circulación, regido por ideas de equivalencia, esconde la creación de valor en la esfera de la producción, estructurada en términos de relaciones de desigualdad. En el escenario del mercado, la apariencia de un intercambio equivalente de salarios por fuerza de trabajo, oculta la creación de plusvalía mediante la fuerza de trabajo no retribuida en el terreno de la producción. De esa forma, el intercambio en la sociedad capitalista genera la ilusión de que el trabajo, el capital y la tierra crean los salarios, las ganancias y las rentas respectivamente, y que cada una de esas formas de ingreso es una justa compensación de su factor de producción correspondiente. Por este proceso de representación, la aparente equivalencia del intercambio oculta la desigualdad en la producción. Sobre esta ilusión se sustenta la legitimidad del capitalismo.

La riqueza de las naciones pobres

Cuando este modelo clásico se traspone del centro a la periferia del sistema capitalista, la premisa simplificadora de Marx -la de que la nación constituye una unidad- mistifica más de lo que ilumina. Porque lo que tipifica las economías de las sociedades periféricas, si es que tal generalización es posible, es que no forman sistemas internos integrados y que están conectadas con el mercado mundial mediante la exportación de productos primarios. Ciertamente que ninguna economía nacional constituye un sistema autosuficiente en sentido absoluto. Pero las naciones capitalistas avanzadas

cuentan con estructuras productivas diversificadas, que otorgan un cierto grado de coherencia interna y les permiten a sus Estados y clases dominantes ejercer un control relativo sobre sus decisiones económicas internas. Por el contrario, las sociedades periféricas tienden a estar vinculadas al mercado mundial mediante la exportación de uno o unos pocos productos primarios y la importación masiva no solo de capital y bienes intermedios, sino también de un vasto repertorio de bienes de consumo. Los precios de sus productos primarios, que dependen de factores naturales cambiantes, tienden a sufrir muchas variaciones y están sujetos a la competencia de otras regiones del Tercer Mundo y a la creciente productividad del centro, así como a la sustitución por productos de fabricación humana. Las estructuras productivas nacionales en la periferia -que a menudo combinan y rearticulan relaciones precapitalistas y capitalistas- dependen de las importaciones para alcanzar una coherencia interna. Los productos primarios de exportación tienen menos importancia como bienes concretos -como valores de uso- que como medios para obtener divisas en el mercado internacional -como valores de cambio-. Una proporción significativa de las divisas que el país obtiene a partir de esos productos se destina a importar los bienes extranjeros que se toman cada vez más vitales para la reproducción de las sociedades del Tercer Mundo. Esta dependencia con respecto a los productos manufacturados de importación mantiene la fragmentación de la economía local y la necesidad de integrar las esferas nacional e internacional.

Para estas naciones, las exportaciones de productos primarios son principalmente una fuente de divisas. El valor de los productos nacionales y de la moneda nacional, que representa la capacidad productiva local, se mide en términos del sistema internacional de producción e intercambio; su valor monetario expresa, en forma cristalizada, la intersección de lo nacional y lo global. ¿Se representa la riqueza de estas naciones como “un enorme cúmulo de mercancías”? En el caso de sociedades organizadas en torno de la captura de renta o en las cuales la renta desempeña un papel importante, una trasposición mecánica de la observación de Marx resulta errada.

En estas sociedades no existe un “cúmulo de mercancías” homogéneo. El mundo de las mercancías está fragmentado, y esa fragmentación refleja y refuerza la desarticulación de las economías en las cuales la renta desempeña un papel clave. Las mercancías que circulan nacionalmente no son solo el producto de naciones diferentes, sino de órdenes culturales distintos, y llevan en sí la huella de esta diferencia. Las mercancías importadas procedentes de los centros metropolitanos representan los órdenes culturales de esas naciones. El cúmulo de mercancías importadas, a diferencia del número limitado de mercancías producidas nacionalmente, se convierte en el vehículo privilegiado para

representar la riqueza. Pero estas mercancías importadas no son simples representaciones de riqueza, porque encarnan la organización productiva de otras sociedades y, en consecuencia, su lugar en una jerarquía de desarrollo cultural. Mediante el comercio se establece una aparente equivalencia entre el valor de las mercancías de sociedades diferentes. Pero esta equivalencia formal no oculta, sino que, por el contrario, subraya la desigualdad entre los órdenes productivo y cultural de las sociedades metropolitanas y periféricas.

La creciente globalización de la producción metropolitana hace menos evidente la diferencia. Si bien muchos productos, como indican sus etiquetas, se fabrican actualmente en lugares del Tercer Mundo, son empresas transnacionales metropolitanas las que controlan su producción. Bajo la impresión superficial de que la producción se dispersa por el mundo, se esconde la realidad de una creciente concentración del capital y de un aumento de la polarización de las estructuras productivas globales (Man- del 1978; Palloix 1978; Sassen 1991). Diversos procesos, que incluyen la internacionalización del capital del Tercer Mundo y el surgimiento de empresas que traspasan las fronteras geográficas - empresas verdaderamente transnacionales que carecen de patria nacional (Miyoshi 1993)- difuminan los límites geográficos basados en los continentes que definen el modelo centro/periferia. Al mismo tiempo que el Primer Mundo ha generado un Tercer Mundo en su seno, el Tercer Mundo ha producido sus propios enclaves de Primer Mundo.

De esta forma, en las sociedades del Tercer Mundo las mercancías se han tomado símbolos con una carga profunda, cosas sociales que portan, inscrita en sí mismas, su vida global¹¹. Los bienes importados son, al mismo tiempo, la evidencia tangible de la capacidad de importación nacional y, por tanto, de la riqueza local, y recordatorios ineludibles de la incapacidad local para producirlos. Los productos primarios de exportación, cuando resultan reducidos a meros intermediarios, aparecen estrictamente como contraparte material de las tentadoras mercancías metropolitanas, y representan a un mismo tiempo el nivel de desarrollo productivo local y la estrechez de su especialización. Las mercancías expresan jerarquías entre las culturas, no solo magnitudes de valor. En la búsqueda de las divisas, las fuerzas productivas internas se canalizan hacia la producción de una o dos mercancías, como azúcar, bananos, café, caucho, oro, cobre y petróleo. Estas mercancías señalan el lugar de los exportadores de productos primarios en la división internacional del trabajo y definen, en grado

¹¹ Para un agudo análisis de algunas de las cuestiones teóricas implicadas en el examen de la "vida social de las cosas", v. Appadurai (1988), así como la crítica de Ferguson (1988). Para un estudio de las mercancías y el intercambio en un contexto colonial, v. Thomas (1991). Haug realizó un análisis pionero de la cultura de las mercancías en las condiciones del capitalismo (1986). El *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*, de Fernando Ortiz es un análisis clásico de la "vida social" de los dos principales productos agrícolas de la sociedad cubana (1995).

significativo, su identidad nacional, al endilgarles, por ejemplo, la etiqueta de naciones petroleras, repúblicas bananeras o sociedades de plantación, o -en sentido más lato- de naciones subdesarrolladas o atrasadas.

El comercio internacional parece establecer una relación de equivalencia entre las mercancías y la capacidad productiva de las diferentes sociedades. Para los teóricos que trabajan en el marco de las premisas del intercambio desigual, los precios (como expresión de las fuerzas de mercado) tendrían que corresponder a valores (como la objetivación de fuerza de trabajo abstracta) para que esta equivalencia reflejara las relaciones sociales reales en la esfera de la producción. Pero los precios del mercado internacional se ven especialmente afectados por el rejuego de factores políticos y naturales, lo que hace que se desvíen notablemente de los valores.

¿Qué es, entonces, lo que hace competitivos en el mercado mundial a los productos primarios de exportación, y cómo es que se convierten en fuente de divisas? A pesar de sus considerables diferencias, los exportadores de productos primarios comparten una suerte común: la competitividad internacional de sus productos de exportación está determinada por el grado en el cual el sector de exportación dispone de trabajo barato o de una ventaja natural. Esta última puede consistir en tierra especialmente apropiada para el producto, presencia de bienes naturales escasos o exclusivos, ubicación cercana a ciertos mercados, o abundancia de recursos minerales. En términos históricos, cuando ha sido la fuente de una ventaja comparativa en el comercio, el trabajo barato ha tendido a reflejar la persistencia de relaciones no mercantiles, que abaratan su costo de reproducción, y no la generalización local de relaciones capitalistas de producción. El trabajo barato también indica la existencia de control político sobre los trabajadores, lo que reduce la expansión, movilidad y autonomía del trabajo libre.

No obstante, a medida que la competencia capitalista ha uniformado los procesos laborales en todo el mundo, el trabajo barato se ha convertido en un factor crucial en la manufactura. Esto se evidencia sobre todo en el caso de plataformas de exportaciones como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán¹². Según Mandel, la importancia relativa de la manufactura de mano de obra intensiva no disminuye en el capitalismo tardío en beneficio de las industrias de capital intensivo, pero estas últimas, como tendencia, no se trasladan a la periferia (1978: 364-376). El surgimiento de una vasta

¹² Algunas de estas naciones han logrado desarrollar vinculaciones hacia atrás (*backward Linkages*) y estructuras industriales integradas. Según Gereffi y Hempel, la clave del éxito de los países recientemente industrializados de Asia oriental reside en que utilizaron la protección del Estado para transformar una industrialización orientada a las exportaciones en un medio para mejorar y desarrollar empresas productivas internas. El mecanismo fundamental para lograrlo ha sido un tipo de manufactura por contrato (*original equipment manufacturing*, OEM) en la cual existe una clara separación entre el productor real y el proveedor de las especificaciones del producto y el mercadeo (1996).

“economía informal” en el corazón de las naciones muy desarrolladas ha constituido un acontecimiento inesperado. Refleja no solo la presencia de trabajadores inmigrantes, sino también las condiciones estructurales que conducen a la formación y expansión de procesos de mano de obra intensiva que generan una gran proporción de los insumos que emplea la “economía formal” (Sassen 1993). De esta forma, como han señalado muchos comentaristas, el Tercer Mundo ha crecido dentro de los límites del Primer Mundo; e incluso un autor, en el título de su libro, ha llegado a bautizar a Los Ángeles como capital del Tercer Mundo (Rieff 1991).

En el caso de muchos bienes primarios de exportación, los mismos procesos mundiales que uniforman la producción internacional subrayan la importancia de los factores naturales en la creación de una ventaja comparativa para el comercio. Ello indica que la competitividad de estos productos se debe a una mezcla de factores sociales y naturales. Hacia 1965, solo 4.000 millones de un total de 40.000 millones de dólares de las exportaciones del Tercer Mundo eran productos industriales. A pesar de una significativa ampliación de la producción industrial del Tercer Mundo, las materias primas muy poco transformadas y los productos agrícolas siguen siendo las exportaciones fundamentales de la mayoría de las naciones periféricas (Pearson Report, cit. por Mandel 1978: 370). Las tendencias de la producción agregada por nación o región no revelan las transformaciones de la estructura productiva, que están teniendo lugar a escala planetaria como respuesta a la globalización de la producción bajo el control de un número relativamente reducido de empresas transnacionales. Si bien existen evidencias de un crecimiento significativo de la manufactura en ciertos enclaves del Tercer Mundo, también es obvio que las naciones industrializadas -fundamentalmente a través de empresas transnacionales aún “ubicadas” en sus respectivos países de origen- mantienen un dominio global tanto en lo que se refiere a tecnologías productivas como en lo que atañe a la propia producción. El Tercer Mundo, donde vive 80% de la población mundial, representa solo 20% de la producción global. Los productos primarios representan casi la mitad de las exportaciones del Tercer Mundo, pero solo una cuarta parte del comercio internacional de EEUU (ECLA 1995: 219-234).

El trabajo barato ha sido siempre un punto focal para analizar a las naciones del Tercer Mundo. Encendidos debates han tenido su centro en el papel que desempeña en el intercambio desigual y en la reproducción de una división internacional del trabajo que obstruye el desarrollo equilibrado de la periferia. Por el contrario, los recursos naturales siguen siendo hasta el día de hoy una dimensión muy desatendida y sobre la que se ha teorizado poco al estudiar las relaciones centro/periferia. La concentración en el tema del trabajo barato ha sido resultado, en parte, de reacciones comprensibles

contra interpretaciones reduccionistas que atribuyen el subdesarrollo económico a factores culturales o psicológicos. El énfasis en los costos del trabajo ha hecho que la atención se dirija a la manera de estructurar los procesos productivos a escala global.

Este interés en las relaciones productivas ha sido también la base de una crítica de la teoría imperante sobre el comercio internacional. El principio fundamental de la teoría neoclásica del intercambio, la ley de los costos comparativos de Ricardo, plantea que con el tiempo todas las naciones se benefician del comercio. Igual que en el mundo sin fisuras de Adam Smith, la búsqueda del interés individual conduce al bienestar colectivo, en el universo uniforme de la economía neoclásica el libre comercio entre las naciones las beneficia a todas. En ese mundo de “armonías universales”, como ha señalado un crítico, “ninguna nación tiene que temer al libre comercio, porque éste humilla a los poderosos y alza a los débiles. Algo parecido a Dios, sólo que un poquito más confiable” (Shaikh 1979b: 29).

Los datos empíricos que revelan la creciente desigualdad entre las naciones a lo largo del siglo xx han alentado el estudio de la interacción entre el comercio y la producción internacionales. En los años 50, Raúl Prebisch se interesó por “el deterioro de los términos del intercambio” que afectaba a los exportadores de productos primarios. Paul Baran realizó un análisis pionero de los mecanismos internacionales de inversión y extracción de la plusvalía (1957). Durante una década en la que la economía política ocupaba un lugar central en el análisis social, Arghiri Emmanuel (1972), Samir Amin (1974) y Ernest Mandel (1978) examinaron los mecanismos comerciales del intercambio desigual. Pese a sus significativas diferencias, esos tres autores comparten la opinión de que el subdesarrollo es el resultado de un constante drenaje de plusvalía que va de la periferia al centro. Esta premisa común los conduce a centrar su atención en esa transferencia. Aunque no están de acuerdo sobre el mecanismo en particular, su línea de pensamiento básica es que el subdesarrollo tiene sus raíces en el intercambio desigual, que consiste en una significativa falta de correspondencia entre precios y valores; la apariencia de intercambio equivalente en el nivel de los precios oculta una asimetría en el nivel de los valores. Como dijera Mandel: “Unos valores internacionales se intercambian por valores internacionales iguales. ¿Dónde se oculta, entonces, el 'intercambio desigual' en esta equivalencia? Se encuentra en el hecho de que estos valores internacionales iguales representan cantidades desiguales de trabajo” (1978: 359). Esto es, “mediante el intercambio, los países avanzados se apropian de más cantidad de trabajo de la que generan en la producción” (Weeks 1983: 500).

Hay que reconocer que estos autores también analizan los rasgos específicos de las estructuras sociales de las sociedades del Tercer Mundo, y no solo el valor que fluye de ellas. Amin distingue

entre las economías integradas “autocéntricas” del centro y las “extrovertidas” de la periferia. Mandel critica a Emmanuel por subrayar el costo del trabajo asalariado y excluir el análisis de su productividad. Para aquél, “el problema del intercambio desigual se remite, en última instancia, al problema de las diferentes estructuras sociales de los países subdesarrollados” (1978: 365). Pero como ocurre con frecuencia en el análisis social, los factores últimos a menudo se convierten en principios explicativos, y no en problemas que también requieren una explicación. Las estructuras subdesarrolladas se tornan explicaciones tautológicas del subdesarrollo.

A pesar de sus diferencias, estos críticos centran su análisis en la transferencia de valor porque comparten una premisa común. Critican las propuestas de la teoría del comercio ortodoxa, no su base en la ley de los costos comparativos (la cual plantea que el comercio que dimana de la ventaja comparativa de cada nación las beneficia a todas). A partir de la teoría del valor de Marx, Shaikh ha demostrado cómo el libre comercio conduce, por el contrario, a la ventaja absoluta de la economía más fuerte (1979a; 1979b; 1980). Desde esta perspectiva, el desarrollo desigual se convierte en consecuencia del comercio libre. “En vez de anular el desarrollo desigual, se muestra que el comercio libre lo acentúa. En vez de cerrar la brecha entre países ricos y pobres, se ve cómo la inversión directa refuerza el estrangulamiento de los débiles por los fuertes” (Shaikh 1979b: 57).

La concepción de Shaikh sobre la naturaleza del subdesarrollo me parece especialmente sugerente. Según este autor, el asunto esencial no es el flujo de valor que mana de la periferia hacia el centro, sino el desarrollo desigual de las estructuras productivas mundiales debido a la competencia internacional. Por tanto, Shaikh critica a los autores que consideran que el subdesarrollo es producto de la transferencia de valor de las regiones subdesarrolladas del mundo capitalista hacia las desarrolladas. “Por el contrario”, señala, “como el desarrollo desigual a escala mundial es consecuencia directa del propio libre comercio, estas transferencias de valor y las teorías del intercambio desigual que se sustentan en ellas emergen como fenómenos secundarios y no como causas primarias del subdesarrollo”. Concluye afirmando que, “de hecho, un examen crítico de las teorías del intercambio desigual muestra que ni siquiera se puede establecer de modo simple la dirección neta de las transferencias de valor” (1979b: 57). Al limitar el análisis del valor al problema de su magnitud, la teoría del intercambio desigual se mantiene dentro de los límites de la concepción fetichizada sobre la riqueza de la teoría ortodoxa, y corre el riesgo de fetichizar al propio trabajo.

La perspectiva de Shaikh conlleva un cambio de enfoque: del flujo desigual de valor entre las naciones a las desiguales estructuras de producción mediante las cuales se vinculan, de los productos concretos

del trabajo a la propia división internacional del trabajo. Este enfoque estimula un examen más atento de las estructuras en cuyo seno se crea y distribuye el valor. También puede ayudar a ubicar la división internacional del trabajo y de la naturaleza en un campo de análisis unitario.

Al centrar su atención en el trabajo, la teoría del intercambio desigual no ha tomado suficientemente en cuenta el papel de los recursos naturales en la formación de las relaciones sociales que generan el intercambio desigual. Como lo socialmente significativo en el caso de los recursos naturales es cómo las redes de relaciones sociales tejidas a su alrededor tornan relevantes las propiedades materiales de esos recursos, tomarlos como centro del análisis debería conducir a un examen de las estructuras espaciales y las unidades políticas generadas en el proceso de producir y distribuir la riqueza. Resulta paradójico que centrar la atención en la explotación de los recursos naturales pueda alentar la adopción de un punto de vista más abarcador sobre el propio proceso del trabajo.

El proceso de creación de valor supone al mismo tiempo la producción de objetos y la transformación de relaciones sociales. Como Marx nunca se cansó de repetir, el valor no es una cosa, sino una relación social mediada y representada por cosas. La tarea consiste en estudiar cómo la producción de valor conlleva la reproducción o transformación de formaciones sociales y culturales. En términos de este énfasis en la constitución del trabajo mediante el proceso de producción, la teoría del valor basada en el trabajo (*labor theory of value*) puede verse propiamente como una “teoría del trabajo basada en el valor” (*value theory of labor*), esto es, una teoría sobre “la determinación de la estructura de producción y de la distribución del trabajo en esa estructura” (Elson 1979:128). De modo similar, la teoría del valor basada en el trabajo también debería verse como una teoría de la naturaleza basada en el valor; ello arrojaría luz sobre la organización y división de la naturaleza del mismo modo que lo hace sobre el trabajo.

Un acercamiento holístico a la producción abarca la producción de mercancías y también la formación de los agentes sociales involucrados en ese proceso y, por tanto, unifica en un solo campo de análisis los órdenes material y cultural en el seno de los cuales los seres humanos se forman a sí mismos al tiempo que construyen su mundo (Turner 11). Esta visión unificadora intenta abarcar la constitución histórica de sujetos en un mundo de relaciones y entendimientos sociales hecho por los seres humanos. Como estos sujetos están constituidos históricamente y son además los protagonistas de la historia, esta perspectiva considera la actividad que hace la historia como parte de la trama que los forma y que nutre su actividad.

He tratado de desarrollar esta perspectiva en el presente estudio sobre las transformaciones

históricas del Estado y la nación venezolanos, durante el periodo en el cual ese país se convirtió en un gran exportador de petróleo. La “dudosa bendición” que es el petróleo -para usar la expresión de Amuzegar (1982)-ha dejado perplejos a la mayoría de los analistas, porque expresa la paradoja de naciones periféricas “ricas” que, no obstante, sufren los problemas típicos que afligen a los países del Tercer Mundo. Si bien durante el auge de mediados de los 70 Venezuela obtuvo más dólares por sus exportaciones de petróleo que los que recibieron todas las naciones europeas por el Plan Marshall, en 1975 Venezuela tenía la mayor inflación y la más baja tasa de crecimiento de América Latina. Cuando esos analistas señalan la incapacidad de las naciones exportadoras de petróleo para emplear productivamente sus recursos, hablan de la “inexorable dinámica de una economía que se sustenta en el petróleo” (Amuzegar 1982; v. tb. Attiga 1981). En este estudio de Venezuela examino la dinámica social de lo que parece ser la “inexorable dinámica” de economías regidas por el petróleo. Para entender este proceso social primero es necesario tener una idea de cómo se valoriza la riqueza mineral.

Recursos naturales: los puntos de vista más aceptados

La economía neoclásica representa una ruptura con la preocupación de la economía clásica sobre la relación entre producción e intercambio. Mientras la economía clásica intenta establecer las bases del valor en la producción, la economía neoclásica determina el valor mediante las preferencias subjetivas de los agentes económicos. Al plantear una teoría del valor subjetiva, centrada en el mercado, la economía neoclásica define el valor de los recursos naturales de la misma forma como define el de cualquier mercancía: por su utilidad, esto es, por su conveniencia para los consumidores tal como esta se mide en el mercado. El precio de los bienes expresa sus utilidades relativas tal como se establecen mediante intercambio entre los agentes económicos del mercado. Las retribuciones a los propietarios del capital, la tierra y el trabajo se consideran una compensación por su contribución a la producción de valor mediante el cálculo de utilidades o un mecanismo similar que sirva para definir las preferencias subjetivas.

Además, como ha sugerido Mommer, la teoría económica neoclásica analiza los recursos naturales a partir de dos perspectivas fundamentales: bien desde un punto de mira microeconómico que refleja la posición de un individuo, bien desde un punto de vista macroeconómico que asume la perspectiva de la sociedad como un todo (1983:45). Desde una perspectiva microeconómica, los recursos

naturales se consideran “capital natural”. Como afirma Alfred Marshall: “Para el productor individual la tierra no es más que una forma de capital” (Mommer 1983: 3). Desde esta perspectiva, los recursos naturales se compran y se venden como cualquier otra mercancía; por tanto, figuran como un costo de producción o como una fuente de ganancia. La oferta y la demanda determinan su precio, de ahí que la escasez sea un factor esencial en la determinación del mismo. El costo de producción tiene su base en la evaluación de los costos de oportunidad, los costos alternativos o la falta de utilidad para el inversionista. Como plantea Marshall: “Mientras que la demanda tiene su base en el deseo de obtener mercancías, la oferta depende fundamentalmente de la falta de voluntad para sufrir ‘falta de mercancías’” (*discommodities*) (1961: 140).

Desde esta perspectiva, los ingresos que se obtienen a partir de los recursos naturales aparecen como ganancias en el caso de recursos renovables como las cosechas, y como pago por capital preexistente en el caso de recursos no renovables como el petróleo. Los *royalties* abonados a los propietarios de la tierra por concepto de actividades de minería se consideran, por tanto, un pago por “capital natural”. Se trata a los productos del trabajo humano y de la naturaleza como si fueran en esencia la misma cosa; se definen como mercancías. De ahí que Marshall plantee que los *royalties* por concepto de actividades de minería son el precio que se paga por una mercancía que fue “almacenada por la naturaleza, pero a la que ahora se trata como propiedad privada”. Por esta razón, apunta, el precio marginal de los minerales incluye el pago de *royalties* además de los costos marginales derivados de la explotación de la mina (1961:430). En un artículo considerado “la obra clásica para explicar la economía de los recursos no renovables” (Moran 1978: 95), Hotelling plantea lo mismo. Los recursos no renovables, como los minerales, son activos como cualquier otro activo: le rinden beneficios al propietario, sea por apreciación del capital -si se dejan en el suelo como capital- sea como dividendos si se venden (1931).

Una perspectiva macroeconómica reconoce que, de hecho, los recursos naturales carecen de costo de producción; este punto de vista es, por tanto, más sensible al mecanismo real mediante el cual los propietarios de recursos naturales reciben sus ingresos. Estos dependen de las diferencias relativas entre recursos naturales de un mismo tipo pero de orígenes distintos. Dado que la tendencia es que el precio de mercado se establezca a partir del costo de producción de los productores menos eficientes, los propietarios de la tierra reciben una renta cuya magnitud depende de la diferencia entre el precio promedio en el mercado de la mercancía producida en el sector y su costo de producción más bajo en tierras o minas de productividad superior a la promedio. Por tanto, los

beneficios de los propietarios de la tierra representan una transferencia de ingresos procedente de los capitalistas.

Desde una perspectiva microeconómica, el precio abonado a los propietarios por el uso de sus tierras o sus recursos refleja el valor que se asigna a los recursos como capital natural. Desde un punto de vista macroeconómico, el precio de la mercancía producida en el sector determina la renta que reciben los propietarios de la tierra; por tanto, los *royalties* abonados al propietario de la tierra son una transferencia de ingresos y no un pago por capital natural. Como señala Morris Adelman en relación con el petróleo: “la renta o los *royalties* no son costos”. Por tanto, “todo el problema de las rentas y los *royalties* resulta superfluo en lo que toca a la determinación de los precios” (1964:109).

Como ha mostrado Mommer, ambas perspectivas se reflejan, respectivamente, en los sistemas tributario y contable de la mayoría de las sociedades capitalistas. Los sistemas tributarios por lo general representan el punto de vista del contribuyente individual, mientras que los sistemas de cuentas nacionales adoptan la perspectiva de la sociedad como colectividad. De ahí que la mayoría de los códigos tributarios les concedan a los productores de minerales un descuento por concepto de agotamiento, lo que equivale a tratar los minerales como “capital natural”. Sin embargo, no se reconoce ese agotamiento de capital en el sistema de cuentas nacionales; desde la perspectiva de la sociedad no se trata como capital a los productos de la naturaleza (1983:4), sino como una transferencia de ingresos de los capitalistas a los propietarios de la tierra.

Los estudiosos dedicados al análisis de sociedades en las cuales la producción agrícola o mineral desempeña un papel central, a menudo utilizan un concepto neoricardiano de la renta para explicar el precio de los productos agrícolas o minerales¹³. Al tiempo que consideran el suelo y los minerales como una forma de capital, determinan la magnitud de la renta sobre la base de las ventajas comparativas naturales y la relación entre la producción interna y los niveles internacionales de demanda y oferta en coyunturas temporales específicas. El intento de Mamalakis por formular una “teoría mineral del crecimiento” en relación con América Latina, resulta especialmente interesante debido a la amplitud de los elementos incluidos en la comparación (1978). No obstante, en la medida en que esos estudiosos consideran capital a los recursos naturales, fusionan la riqueza y el valor y dificultan la comprensión de la relación entre diferentes formas de actividades generadoras de

¹³ Desde esta perspectiva, por lo general se considera la renta como un ingreso extraordinario, no ganado desde el punto de vista fiscal, que reciben los que producen a bajo costo un producto cuya oferta es limitada; como la competencia capitalista tiende a igualar los costos de producción, la renta tiende a ser temporal. La renta también hace referencia a recompensas que obtienen los productores debido a su monopolio de la tecnología o la producción, o al control político sobre ciertas áreas económicas.

ingresos. Un rasgo fundamental de las sociedades analizadas a partir de la “teoría mineral del crecimiento” es que los ingresos generados por las mercancías minerales no guardan mucha relación con la productividad interna del trabajo, y que el alto nivel de los mismos, especialmente durante periodos de auge, a menudo produce el efecto “perverso” de inhibir el desarrollo de esas naciones¹⁴. Las experiencias del auge del guano en Perú, de los nitratos en Chile y del petróleo en Venezuela demuestran esta tendencia.

De hecho, Mamalakis concluye su artículo citando los casos de Perú y Chile como ejemplos de un empleo bastante “ineficiente” del ingreso procedente de los minerales, y apunta que “el uso más prometedor de los excedentes de rentas mineras ha ocurrido en Venezuela desde 1974, donde el Gobierno está realizando una conversión masiva de sus excedentes mineros en capital físico, humano y tecnológico promotor del crecimiento” (1978:875). No obstante, Venezuela, como la mayoría de los exportadores de petróleo, enfrenta hoy distorsiones económicas más graves que antes del periodo de auge de 1973-1979; son esos resultados los que hacen necesario examinar la “dinámica social” de una economía que se sustenta en el petróleo¹⁵.

Recursos naturales: los misterios de Madame la Terre

Como para la mayoría de los productores de materia prima del Tercer Mundo, para los productores de petróleo la determinación de los precios internacionales es un asunto de extraordinaria importancia. Si deseamos averiguar cómo éstos se han determinado, tenemos que abandonar el mundo neoclásico del intercambio de mercado y volvemos hacia los pensadores que han analizado la producción capitalista como un proceso social que involucra a personas y naturaleza en una transformación mutua. Entre los economistas políticos clásicos, Smith y Ricardo produjeron algunos de los análisis más interesantes sobre los orígenes del valor en la producción y sobre la determinación

¹⁴ Muchos autores han analizado los efectos “perversos” en la sociedad de las rentas petroleras y de otras formas de ganancias rápidas, fenómeno al que a menudo se denomina la “enfermedad holandesa”. Para un análisis clásico de la teoría de los auges de recursos, o “enfermedad holandesa”, ya he mencionado la obra de Corden y Neary (1982). En Venezuela, la expansión de la producción petrolera en los años 20 fue objeto de una crítica contemporánea acerca de sus efectos. Uno de los críticos más consistentes ha sido Arturo Uslar Pietri, quien ya en 1936 expresó su preocupación de que la nación se convirtiera en un parásito del petróleo. El crítico más autorizado fue Juan Pablo Pérez Alfonzo, el arquitecto de las políticas petroleras de AD y fundador de la OPEP, quien se sintió cada vez más preocupado por los efectos del petróleo en Venezuela tras el auge de 1973. Para un análisis de las ideas sobre el petróleo de importantes economistas venezolanos, incluyendo las posiciones de Uslar Pietri y Alfonzo, v. Baptista y Mommer (1987). Para un intento de ubicar el discurso económico sobre la industria petrolera venezolana en el marco de un vasto universo simbólico, v. Pérez Schael (1993). Para un estudio de los efectos “perversos” de las rentas petroleras en una región de Venezuela, v. Briceño León (1990).

¹⁵ Aunque las naciones exportadoras de petróleo tienen muchos rasgos comunes, también poseen historias singulares, que toman la comparación más difícil y también más interesante. Incluso autores que trabajan desde perspectivas teóricas diferentes se inclinan a concordar con que la producción de petróleo en naciones del Tercer Mundo tiende a producir efectos de largo alcance, y la mayoría estaría de acuerdo con la afirmación de que el petróleo ha sido, en el mejor de los casos, una “dudosa bendición” (Amuzegar 1982).

del valor de cambio de los recursos naturales en el mercado. A partir de la obra de ambos, Marx desarrolló su teoría del valor, que develó la apariencia mistificada por la cual factores de producción como el suelo o el capital parecían ser fuentes de valor en el capitalismo.

A los economistas clásicos les preocupaba sobre todo analizar el origen de la riqueza y los mecanismos de su distribución. Pensaban que el valor de una mercancía dependía de las condiciones de su producción, que las economías eran capaces de producir un excedente, y que la riqueza de una nación dependía de la expansión de su capacidad productiva. Consideraban que existían dos tipos de precios: los precios de producción, que reflejan los costos reales de la producción, y que explicaban por medio de una teoría del valor; y los precios de mercado, que describen el precio de intercambio real de las mercancías en respuesta a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. El tema que les interesaba era el del rejuego entre la producción y el intercambio y, por tanto, la relación entre valores (como precios naturales o precios de producción) y precios de mercado. Como indiqué antes, el pensamiento neoclásico no continúa esta línea de pensamiento que ubica los orígenes de la riqueza en la producción, ya que considera que la determinación del valor resulta de las preferencias subjetivas de agentes económicos por intermedio del mercado; explica la producción en términos de intercambio. Los agentes invierten o consumen de acuerdo con sus preferencias subjetivas, y los precios son el resultado del juego de la oferta y la demanda. Por tanto, solo hay un tipo de precios: los precios de mercado.

En el mercado las condiciones de la producción original de valor se ocultan de la vista completamente; bajo su luz cegadora, el valor se torna invisible. Todo lo que se ve son diferentes formas de ingresos: salarios pagados a los trabajadores, ganancias de los capitalistas, rentas para los propietarios de la tierra. Incluso Smith, quien estimaba que el trabajo era la fuente del valor, cayó presa del embrujo de los mismos fetiches que había reducido a añicos. A contrapelo de su propia teoría del valor, afirmó en *La riqueza de las naciones* que “los salarios, las ganancias y las rentas son las tres fuentes originales de todos los ingresos, así como de todo valor intercambiable” (cit. en Marx 1968: 347). Como apuntara éste: “Según su propia explicación debería haber dicho: fuentes originales de todo ingreso, aunque ninguna de estas llamadas fuentes participa en la formación del valor” (ibíd.: 347-348).

Para Marx, la “fórmula trinitaria”, término con el cual designaba la relación entre capital-ganancia, suelo-renta de la tierra y trabajo-salario “comprende todos los misterios del proceso social de producción” (1975- 1981: 1037). El hecho de que esta fórmula mágica parezca ser natural muestra

hasta qué grado ha triunfado el capitalismo en establecer como normal su concepción fantástica de la realidad:

... en esta trinidad económica como conexión de los componentes del valor y de la riqueza en general con sus fuentes, está consumada la mistificación del modo capitalista de producción, la cosificación de las relaciones sociales, la amalgama directa de las relaciones materiales de producción con su determinación histórico-social: el mundo encantado, invertido y puesto de cabeza, donde Monsieur le Capital y Madame la Terre rondan espectralmente como caracteres sociales y, al propio tiempo de manera directa, como meras cosas(1975-1981:1056).

En ese mundo encantado estas formas aparecen juntas como fuentes de valor, pero, según Marx, en realidad no tienen nada en común. El trabajo, despojado de una forma social específica, es una abstracción sin realidad histórica. Como fuente de valor, resulta absurdo que deba tener un precio: '[El] 'precio del trabajo' es algo tan irracional como un logaritmo amarillo" (1975-1981:1042). A su vez, el capital no es una cosa, sino una relación social específica de un modo de producción específico. No es un medio de producción, sino el medio de producción transformado en capital, esto es, monopolizado por un sector particular de la sociedad y utilizado para obtener ganancias: el capital tiende a expandirse. Cuando el capital busca su autoexpansión mediante su forma dinero y no como medio de producción, genera intereses en lugar de ganancia. En este caso el fetichismo del capital aparece en su "forma más enajenada y más característica", porque "el interés parece entonces como independiente, ya sea del trabajo asalariado del obrero, ya del propio trabajo del capitalista, y manar del capital como de su propia fuente independiente" (Marx 1975-1981:1055): el dinero engendra dinero. Por último, la tierra, que es por definición una condición no producida de la producción que forma parte como elemento material de todo proceso de producción, puede tener un precio, pero no valor, porque "el valor es trabajo" (Marx 1975-1981:1038).

Al hablar de la tierra, Marx se refería a "todos los poderes de la naturaleza", es decir, no solo la tierra agrícola sino también las minas, los ríos y las cascadas (Marx 1968:342). Mientras que para Ricardo la renta era un atributo de la naturaleza misma y la propiedad privada de la tierra determinaba simplemente su distribución, para Marx era un atributo de la propiedad privada de la tierra, y su magnitud estaba determinada por el nivel de plusganancia posible en un conjunto dado de condiciones productivas. Desde la perspectiva marxista, el misterio de *Madame la Terre* se resuelve cuando se reconoce que las rentas no añaden valor porque son, de modo inequívoco, una deducción de la plusvalía. Como el valor no se deriva de la naturaleza, sino de la sociedad, las rentas pertenecen

a la distribución de la plusvalía, no a su creación. Pero en la medida en que la producción supone el uso de recursos naturales, las diferencias intrínsecas entre ellos afectan diferencialmente la productividad del trabajo humano y, por tanto, la rentabilidad del capital. De ahí que las rentas representen una deducción de las ganancias de los capitalistas que va a parar a las manos de los propietarios de la tierra en virtud de que poseen un factor natural de producción. Las rentas dependen, por tanto, de la existencia de plusganancia y de la institución de la propiedad privada de la tierra.

La fuente de la plusganancia origina dos tipos de renta: la diferencial y la absoluta. La renta diferencial depende del excedente que tiene su origen en la competencia entre fuentes de capital en el mismo sector económico, por ejemplo, el sector petrolero, que puede expandirse al sector más amplio de la energía si el precio del petróleo se aproxima al del carbón. La renta absoluta es el resultado del excedente que surge de la competencia capitalista entre diferentes sectores; es la renta que hay que pagar al propietario de la tierra con independencia de la fertilidad del suelo. Ambas rentas se derivan del monopolio de la tierra.

La competencia en el seno de un sector, dadas las diferencias de las condiciones de producción (como la fertilidad del suelo y la riqueza de las minas) o de la intensidad del capital (es decir, las magnitudes y tipos diferentes de capital invertido, tales como el uso de fertilizantes y de agricultura mecanizada) conlleva tasas de ganancia desiguales. El propietario de la tierra puede obtener una renta cuya magnitud depende de la diferencia entre la tasa de ganancia real y la promedio. Si la plusganancia resulta de condiciones naturales ventajosas, la renta recibe el nombre de renta diferencial I; si es resultado de un uso más intensivo de capital, se le denomina renta diferencial II. En ambos casos, lo que determina el nivel de la renta es la magnitud de la plusganancia en el sector. Asumamos que el costo de producción en EEUU determina los precios en el sector petrolero. Si la Standard Oil obtiene mayores ganancias en sus yacimientos petroleros venezolanos que en los de EEUU, el Estado venezolano, esto es, el propietario de la tierra, tiene la posibilidad de reclamar una renta mayor. En otras palabras, la magnitud de la renta que recibe el propietario de la tierra depende del precio de mercado de la mercancía producida por el capitalista. La renta diferencial, como explicara Marx, “no entra de manera decisiva en el precio de producción general de la mercancía, sino que lo presupone” (1975-1981: 830). La renta diferencial “siempre surge de la diferencia entre el precio de producción individual del capital individual, que tiene a su disposición la fuerza natural monopolizada, y el precio de producción general del capital invertido en esa esfera de producción en general” (1975-1981: 830-

831).

En un sector económico productivo dado (el sector petrolero o el más vasto sector energético), la propiedad privada de la tierra fomenta la competencia al ofrecerle al capital diferentes condiciones naturales de producción y, por tanto, de rentabilidad. Por el contrario, cuando se trata de diferentes sectores productivos, la propiedad privada de la tierra funciona como un obstáculo a la competencia capitalista, al reclamar una renta como condición para que la inversión de capital utilice el suelo. Por ejemplo, los capitalistas tienen que decidir entre invertir en la manufactura con mínimas obligaciones en lo que toca a rentas, o en la minería, que incluye sustanciales pagos por concepto de rentas. Como se exige una renta, los precios de mercado del sector se elevan por encima de los precios promedio de producción. La renta absoluta, como expresión del poder social de la propiedad privada de la tierra, crea las condiciones que generan un incremento sectorial de la tasa de ganancia por encima de la tasa de ganancia promedio del conjunto de la economía; la propiedad privada de la tierra (la de los propietarios privados y la de los Estados exportadores de petróleo) captura este incremento de las ganancias en forma de renta absoluta. De ahí que la renta absoluta refleja el poder de la propiedad privada de la tierra sobre el capital en la lucha por la distribución de la masa de plusvalía. Mientras que el precio de mercado existente limita la renta diferencial, el nivel de la renta absoluta depende del poder de la propiedad privada de la tierra para aumentar el precio de mercado por medios ajenos al mercado; en un caso, el precio determina la renta; en el otro, la renta determina el precio¹⁶.

Oro negro

El petróleo ilustra mejor que cualquier otra mercancía la importancia y la mistificación de los recursos naturales en el mundo moderno. El petróleo, mercancía indispensable para el sistema capitalista, ha alimentado no solo sus sistemas industrial, de transporte y de calefacción, sino también la imaginación popular y la académica en todo el mundo. No resulta sorprendente, como muestra el análisis de Mommer (1983), que por lo general su precio se haya interpretado en términos de las dos

¹⁶ Existe una vasta y no muy concluyente literatura sobre la teoría del valor basado en el trabajo; esta teoría ha sido criticada con el mismo vigor que ha sido defendida. Marx la desarrolló en los *Grundrisse* (1973), *El capital* (1967) e *Historia crítica de las teorías sobre la plusvalía* (1968). Para interpretaciones y análisis sobre la teoría del valor y asuntos relacionados, v. Bohm-Bawerk (1949), Hilferding (1949), Rubin (1973), Rosdolsky (1977), Meek (1956), Brunhoff (1973), Elson (1979), Fine (1975), Morishima y Catephores (1978), Mandel y Freeman (1984), Steadman et al. (1981), Shaikh (1977; 1980). Para análisis de la teoría en relación con la renta del suelo, v. Ball (1977; 1980), Edel (1976), Fine (1979; 1980), Murray (1977). Para análisis de la renta del suelo en relación con los espacios urbanos, v. Harvey (1989), Lojkine (1977), Edel (1976). V. tb. la polémica entre Samuelson, Sweezy y Baumol en el *Journal of Economic literature* (1974). Estos debates abarcan desde los aspectos hipertécnicos hasta los casi teológicos. Creo que la teoría del valor basada en el trabajo resulta especialmente útil como vía para comprender la formación de sujetos en un mundo de valores objetivados, y no como herramienta técnica para determinar los precios.

perspectivas de sentido común cuya fuente ha sido la visión neoclásica sobre los recursos naturales¹⁷. Desde una perspectiva microeconómica, el petróleo es capital natural. Esta definición surgió del conflicto entre los propietarios privados de la tierra y los capitalistas en EEUU a fines del siglo XIX, cuando se iniciaba el desarrollo de la industria del petróleo. En la confrontación entre propietarios y capitalistas que tuvo lugar durante ese periodo, se llegó al entendimiento tácito de que las ganancias debían repartirse equitativamente entre los dueños del recurso y los capitalistas que lo extraían. El pago al propietario de la tierra de unos royalties equivalentes a un barril de petróleo de cada ocho reflejó dicho entendimiento. Hacia el último cuarto del siglo XIX se consideraba que las ganancias de la industria petrolera de Pennsylvania eran de alrededor de 25% del precio comercial; la mitad de 25% era 12,5%, o, lo que es lo mismo, 1:8, los royalties abonados al propietario de la tierra.

La legislación tributaria de EEUU reconoció esta visión microeconómica. Una serie de leyes, que culminaron en la ley de reducción impositiva por agotamiento (*depletion allowance law*) de 1932, validaba la concepción del petróleo como capital natural. Al igual que los ingresos de las ganancias sobre el capital están sujetos a un impuesto que las grava en la mitad (en principio para proteger la estructura del capital de la sociedad), los impuestos sobre las ventas del petróleo se redujeron en 27,5%, para compensar el agotamiento de este capital natural. (La reducción impositiva por agotamiento del petróleo se concede tanto al capitalista como al propietario de la tierra; equivale respectivamente a 7:8 y 1:8.) Resulta imposible exagerar la importancia de esta reducción impositiva por agotamiento; en 1970 el impuesto sobre los ingresos por actividades de manufactura era de 43%, mientras que en la industria petrolera era solo de 21% (Mommer 1986: 31).

Las naciones productoras de petróleo han adoptado la misma perspectiva microeconómica. Mientras que en EEUU el petróleo pertenece al propietario privado, en la mayoría de las demás naciones se considera propiedad pública o nacional. Las naciones productoras del Tercer Mundo adoptaron el punto de vista del propietario individual de la tierra en su confrontación con las compañías petroleras internacionales, y sus gobiernos decidieron actuar en el nivel internacional como representantes de la nación, entendida como unidad poseedora de la propiedad. Justificaron la demanda de parte de las ganancias derivadas de la venta de este recurso natural, invocando la idea de que el petróleo tiene un valor intrínseco y que, por tanto, se le debe tratar como “capital natural”. La legislación sobre minería de la mayoría de los países petroleros refleja este punto de vista.

¹⁷ Este análisis sobre la conceptualización de los mecanismos de establecimiento de los precios en el sector mineral y de la evolución de los precios del petróleo tiene como base la obra pionera de Mommer (1983; 1986).

Esta perspectiva fue explícitamente reconocida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1962. En su lucha por aumentar su participación en los ingresos petroleros, la OPEP redefinió el objetivo comúnmente aceptado de dividir las ganancias a partes iguales entre Estados y compañías petroleras. Antes de esa histórica reunión de la OPEP, estos Estados tendían a incluir los *royalties* que se les abonaban como parte del porcentaje de las ganancias recibidas por el Estado. A partir de la nueva iniciativa de la OPEP, se definieron los *royalties* como compensación por el valor intrínseco del petróleo en tanto recurso no renovable, es decir, como una forma de reducción impositiva por agotamiento. Se debían compartir las ganancias después de restar los costos de operación de la compañía y de pagar los *royalties*. Al separar los pagos de *royalties* de su parte de las ganancias, los Estados petroleros aumentaron el total de sus ingresos por concepto del petróleo.

Por otra parte, la perspectiva macroeconómica no considera que la renta abonada a los propietarios de la tierra participa en la formación del precio. Como apunta Adelman en su examen del mercado petrolero, la oferta y la demanda determinan el precio, y los aumentos tienen como base la escasez. Las rentas (los pagos de *royalties*) no constituyen un costo y, por tanto, no afectan los precios. Representan, en cambio, un residuo, una diferencia debida a ventajas naturales. Las condiciones de producción de los yacimientos petroleros menos productivos determinan el precio en el mercado mundial. Como los precios de tipos comparables de petróleo se hacen uniformes, sean extraídos de yacimientos ricos o pobres, los yacimientos más productivos producen una renta (Adelman 1972).

Siguiendo de cerca la teoría de la renta de Ricardo, Adelman toma en cuenta la importancia de las diferentes condiciones de producción, al contrario de los analistas neoclásicos que adoptan una perspectiva microeconómica. Pero como la teoría de Adelman solo reconoce como determinantes de la renta a factores naturales, resulta incapaz de tomar en cuenta las fuerzas sociales que en realidad determinan el precio del petróleo. En la introducción a su estudio de 1972 sobre la industria petrolera, predijo que los precios del petróleo disminuirían: “Las conclusiones de este estudio son que los precios del petróleo crudo descenderán, porque la oferta será muy superior a la demanda incluso a precios menores, y también -y este es otro asunto- porque seguirá existiendo suficiente competencia como para que el precio gravite hacia el costo, por más lentamente que sea” (cit. por Hausman 1981: 230).

Este marco teórico no podía explicar la cuadruplicación de los precios del petróleo que se produjo en 1973-1974. Para Adelman son la oferta y la demanda las que determinan los precios del petróleo, y el pago de renta a los Estados de las naciones exportadoras de petróleo depende del nivel de los precios

de mercado de ese producto. Esta teoría asume que el capital tiene acceso a los yacimientos; no comprende el significado económico de la propiedad privada de la tierra como barrera al capital.

Cuando intentan encontrar una lógica subyacente tras acontecimientos aparentemente caóticos - guerras, revoluciones, golpes de Estado- que han conducido a rápidos cambios de los precios, las interpretaciones neoclásicas se mantienen en el nivel de la oferta y la demanda, y la demanda misma se establece mediante un criterio de la producción determinada por el intercambio. En el mejor de los casos introducen “factores políticos” en sus modelos (Moran 1982); pero como esos modelos tienen como premisa el postulado de que el valor se determina en el intercambio, en última instancia son incapaces de dar cuenta del origen del valor en la producción. En este contexto, la “política” no incluye el despliegue de poder mediante el cual los dueños de la tierra, en tanto tales, ejercen su capacidad para reclamar una renta absoluta.

De ahí que a pesar de la considerable sofisticación de estos intentos, sus autores consideren que el movimiento de los precios del petróleo tiene como límite un techo establecido por la oferta y la demanda en el marco de los sectores petrolero o energético. Y de ahí que Adelman, quien emplea una concepción ricardiana de las rentas diferenciales, entienda las rentas petroleras como una categoría residual. Para él, el techo de los precios de la energía antes del auge estaba determinado, del lado de la oferta, por la competencia potencial de las fuentes más caras de petróleo crudo; o, después de los auges de los años 70, por las “oportunidades para invertir en mayor eficiencia térmica más que en nuevas fuentes de petróleo crudo” (1982: 32).

Con el aumento del petróleo, Adelman amplió el techo de precios para extenderlo de la industria petrolera a todo el sector energético. En este sentido estaba en lo cierto, porque al haber un salto en los precios petroleros, el empleo de fuentes alternativas de energía puso límites a ulteriores incrementos del producto. Los auges petroleros de los años 70 evidenciaron que las rentas diferenciales se entienden mejor si se comprende que no surgen de los marcos de un sector industrial definido de manera estrecha (el petróleo), sino de los límites establecidos por fuentes alternativas como el carbón, en el marco de un sector más amplio (la energía). El análisis de Massarrat sobre la industria petrolera en el contexto del sector energético ilustra esta afirmación (1980). Sin embargo, la perspectiva de Adelman del campo más abarcador en el cual se establecen las rentas diferenciales, no toma en cuenta el papel de la propiedad privada de la tierra como barrera a la inversión de capital en recursos naturales. Se limita a extender las fronteras dentro de las cuales la propiedad privada de la tierra desempeña su papel.

El abrupto incremento de los precios del petróleo que tuvo lugar en 1973 y 1974 no se produjo como consecuencia de una escasez mundial de petróleo. En realidad fue resultado de un largo proceso histórico mediante el cual los países miembros de la OPEP, en su calidad de propietarios de la tierra, desarrollaron los medios para extraer una renta sobre la base de su propiedad sobre los yacimientos petroleros -una renta absoluta-, además de las rentas diferenciales que habían cobrado antes. En 1973 un conjunto de condiciones políticas y económicas convergentes ayudaron a establecer esta capacidad colectiva de restringir el abastecimiento mundial de petróleo. Con este poder en las manos, la OPEP se sintió con el derecho a establecer los precios de mercado del petróleo, con lo que liberó el nivel de la renta del límite previo dictado por el precio de mercado. A partir de entonces sería la renta (absoluta y diferencial) la que determinaría el precio de mercado del petróleo.

Esta alteración, de una renta cuyo nivel era determinado por el precio de mercado, a un precio de mercado determinado por el nivel de la renta, expresaba un cambio histórico de las relaciones de poder entre el capital y la propiedad privada de la tierra en todo el mundo capitalista. Los royalties petroleros originales de Pensilvania de 1:8, si bien explicados ideológicamente como un pago a los dueños de la tierra por el uso de su capital natural, representaban en realidad el poder de los propietarios de la tierra a reclamar una renta absoluta, es decir, un pago que les correspondía por poseer la tierra, con independencia de la productividad de sus yacimientos petroleros. Al ampliarse las ganancias del sector del petróleo, este derecho comenzó a representar un porcentaje cada vez más reducido de las ganancias y no una repartición equitativa. De esa forma, se convirtió en lo que siempre había sido: un pago mínimo a los propietarios de la tierra, una renta absoluta. Los dueños de tierra de EEUU diseñaron diversas estipulaciones contractuales para incrementar su participación en las crecientes ganancias de la industria petrolera, pero carecían de la organización colectiva y los conocimientos que les ayudaran a preservar el objetivo original de que se compartieran las ganancias sobre una base de igualdad.

En un inicio, las naciones exportadoras de petróleo siguieron una conducta muy similar a la de los propietarios estadounidenses, ya que actuaban como agentes independientes, pasivos y atomizados, con un conocimiento limitado de la industria del petróleo. Sin embargo, en su lucha por aumentar su participación en las ganancias, estaban mejor ubicadas que los propietarios para aprender sobre la industria, compartir información y actuar de consuno. Al ser Estados soberanos, podían obtener información esencial sobre esta industria sigilosa; en su condición de grandes suministradores de petróleo del mundo capitalista, podían afectar el nivel de la producción mundial. La clave para

entender la evolución de los precios del petróleo es el análisis de cómo estos países consolidaron su poder de propietarios de la tierra, tanto por separado, en tanto Estados soberanos en confrontación con las subsidiarias de las compañías petroleras, como colectivamente, por intermedio de las acciones de la OPEP en el nivel internacional.

Estos Estados pudieron definir el nivel de la renta absoluta mediante el establecimiento de los precios de mercado. Dada esta redefinición de las relaciones de poder, la renta absoluta ha funcionado como una nueva barrera que redefine el campo en el cual funciona. Al promover la ampliación de ese campo, vuelve a trazar las fronteras del campo ampliado. De ahí que la lógica subyacente de la formación de los precios del petróleo no se encuentre en el mercado, como definiera la economía neoclásica, sino en el complejo escenario político en el cual Estados y compañías petroleras, la propiedad privada de la tierra y el capital luchan para producir y apropiarse del valor. En el curso de estas luchas el trabajo participa como una fuerza a través de la mediación del Estado en aquellas naciones en que ha contribuido a definir reclamos nacionalistas¹⁸.

Un siglo de precios del petróleo

Utilizando como base la obra de Mommer puedo ahora dibujar los contornos de la evolución de los precios del petróleo. Desde los orígenes de la industria petrolera en Pensilvania en el siglo XIX hasta 1959, fueron las compañías petroleras estadounidenses, las mayores productoras del mundo durante buena parte de este siglo, las que fijaron el precio del petróleo en el mercado mundial. Desde 1917 hasta 1958, el petróleo de EEUU representó, como promedio, 55% de la producción mundial total. A partir de 1928, el International Oil Cartel (una alianza de compañías petroleras de Gran Bretaña, Holanda y EEUU, dominada por estos últimos) controló la producción mundial y estableció el precio del mercado sobre la base de los elevados niveles de costos prevalecientes en EEUU. La producción de petróleo resultaba significativamente más barata en todas las demás naciones productoras. Ello se debía en parte a que en algunos casos disponían de yacimientos más ricos, pero también a que la extracción estaba organizada de manera más racional. Como el subsuelo de esos países es de

¹⁸ La significación del trabajo en las luchas globales en torno de la formación de los precios en el sector petrolero aún no ha sido establecida, pero es evidente que el papel del trabajo está mediado por su influencia sobre los Estados de las naciones productoras de petróleo. En el caso de Venezuela, varios estudiosos han subrayado la significación del trabajo en la definición de una política petrolera nacionalista, en especial durante las etapas tempranas de la industria del petróleo, antes que el movimiento sindical cayera bajo el control de Acción Democrática (Tennessee 1979; Bergquist 1986). La colección de artículos compilados por Nore y Turner en *Oil and Class Struggle* (1980) constituye un intento por destacar la relevancia del trabajo en las políticas petroleras internas e internacionales de varios países.

propiedad pública, los yacimientos petroleros no están divididos anárquicamente en pequeños lotes, como ocurre en EEUU, lo que eleva los costos de extracción. Dados los precios de mercado uniformes determinados a partir del caro petróleo estadounidense, la diferencia de costo era fuente de plusganancia para las compañías petroleras que funcionaban en otros países.

En el intento por incrementar sus ingresos petroleros, los países exportadores reclamaron una parte de esa plusganancia. En la medida en que lo lograron, de hecho las transformaron en rentas: rentas diferenciales. Dado un cierto nivel de consumo, pareció que el techo de estas rentas lo fijaba el precio del petróleo en el mercado mundial, establecido por la industria petrolera estadounidense (que, hay que recordar, incluía el pago de *royalties*: una renta absoluta). Esta percepción, que determinó la acción de los agentes económicos, era un reflejo adecuado de la realidad. Hasta 1960 la lucha de las naciones productoras de petróleo para aumentar sus ingresos provenientes del producto se vio limitada por la magnitud de la plusganancia de la industria petrolera internacional. En otras palabras, el precio determinaba la renta.

Las condiciones que les permitieron a los Estados productores de petróleo aumentar su participación en las ganancias petroleras al convertir la plusganancia de la industria en rentas diferenciales no podían durar por tiempo indefinido. Los precios del petróleo habían sido notablemente estables. De hecho, desde 1934 habían aumentado lentamente durante un cuarto de siglo. Con la ampliación de la producción en otros países, la participación de EEUU disminuyó; entre 1959 y 1972 solo representó 25% del total mundial. Ya en 1947 EEUU se había convertido en importador y comenzó a ejercer influencia sobre los precios mundiales del petróleo no solo como gran productor, sino también como consumidor cada vez más dominante. En 1959 los precios disminuyeron por primera vez en 25 años. Como era de esperar, esta reducción preocupó mucho a las naciones exportadoras. En 1960 se fundó la OPEP, en buena medida por iniciativa de Venezuela, país que tenía más experiencia como exportador de petróleo y como Estado soberano que los exportadores del Medio Oriente. La OPEP, que es un cartel de propietarios de tierra, no de productores, intentó originalmente estabilizar los precios. Pero su objetivo de aumentar los ingresos de los países miembros, en las condiciones existentes del mercado, implicó necesariamente un aumento; esto es, el establecimiento de una renta absoluta.

Este cambio de una renta determinada por el precio a un precio determinado por la renta comenzó en la década de 1960 y culminó en la de 1970. El momento crucial fue 1968. Las naciones miembros de la OPEP, cuyos ingresos estaban limitados por los precios del petróleo entonces vigentes en el

mercado mundial, decidieron que, para los fines impositivos, serían los Estados exportadores los que fijarían el precio del producto. El propósito expreso de estos precios fiscales era capturar la plusganancia de las compañías. Ostensiblemente, el límite lo fijaba el nivel de plusganancia que obtuvieran las compañías petroleras, y esta plusganancia se definía como las ganancias por encima del nivel acostumbrado y necesario para inducir a los capitalistas a invertir. Como ha planteado Mommer: “La OPEP estaba en vías de transformar toda plusganancia existente o posible en renta del suelo” (1986:183).

El análisis de Mommer muestra cómo el mecanismo de esta transformación creó las condiciones para la generación de plusganancia en la industria petrolera. La plusganancia no se transformaría en rentas mediante el incremento de los impuestos de las compañías petroleras, sino mediante el aumento del precio fiscal del petróleo y la definición de los impuestos como una proporción del precio acrecido del petróleo. Dada una magnitud existente de plusganancia en el sector petrolero, un incremento de los impuestos transforma la plusganancia en renta del suelo. Por el contrario, un aumento del precio fiscal del petróleo establece *a priori* el nivel de la renta, sin tener en cuenta la magnitud de las ganancias en el sector. Por tanto, puede hacer que suban los precios en un esfuerzo por mantener la tasa de ganancia del sector. De ese modo, las naciones de la OPEP, al hacer subir potencialmente los precios y exigir una renta absoluta, no solo estaban capturando la plusganancia existente sino también creando las condiciones para que siguiera existiendo plusganancia en el sector petrolero (1986:182- 183).

En su reunión de 1968, las naciones miembros de la OPEP formularon el objetivo de lograr el control nacional sobre sus industrias petroleras respectivas. Este objetivo debía lograrse mediante el incremento de la participación del Estado en todas las fases de la industria. Según este plan, el papel de las compañías extranjeras llegaría a reducirse con el tiempo al de socios menores o poseedores de licencias. Una vez que las compañías petroleras propiedad de los gobiernos hubieran desarrollado su capacidad para operar la industria, el ingreso de las compañías extranjeras provendría de los pagos por los limitados servicios que brindarían. Por tanto, el reclamo hecho por los Estados miembros de la OPEP de una renta absoluta, estaba íntimamente relacionado con su consolidación política como Estados soberanos en los escenarios interno e internacional, y con el desarrollo de capacidades estatales específicas.

La cuadruplicación de los precios del petróleo en 1973-1974, y de nuevo en 1979, fue la culminación de este proceso. La plusganancia se transformó en rentas mediante la transferencia de valor en el

nivel internacional entre diferentes sectores económicos, y no en el interior del sector petrolero. Este movimiento de valor hacia el sector petrolero sacudió a toda la economía mundial. Se percibió como una redistribución de las riquezas mundiales de las riquezas mundiales hacia las naciones exportadoras de petróleo. Conllevó la reasignación de las ganancias, que pagaron los consumidores de petróleo de todos los sectores, desde la industria básica hasta el público en general. Por esta razón, los países de la OPEP se convirtieron en blanco de ataque de las naciones consumidoras de petróleo en una escala sin precedentes.

En este contexto, las petroleras transnacionales perdieron interés en seguir siendo los capitalistas del petróleo en el Tercer Mundo: querían evitar los ataques del público en un momento en que obtenían grandes ganancias por sus operaciones. Además, la capacidad de los Estados de la OPEP para extraer una renta absoluta no solo reflejaba sino que también aumentaba su poder. Estos Estados podían ahora asumir el control sobre sus industrias petroleras, las cuales ya en 1976 habían sido nacionalizadas en todas las naciones exportadoras y contrataban algunos servicios con las compañías petroleras internacionales. Se habían logrado los objetivos expresados en la reunión de la OPEP de 1968.

Dos acontecimientos subrayados en este breve resumen apuntan a la significación de las relaciones políticas en la determinación de los precios del petróleo. La reunión de la OPEP de 1968 estuvo precedida en 1967 por la tercera guerra árabe-israelí. El incremento de precios de 1973-1974 estuvo precedido en 1973 por la cuarta guerra. En ambas ocasiones se utilizó el petróleo como arma política. Sería simplista aducir que los conflictos políticos causaron el aumento de los precios al afectar la oferta. Lo que sucedió en realidad fue que mediante estas confrontaciones los productores probaron y ampliaron su poder. El petróleo se convirtió en arma política porque los exportadores se tornaron en una fuerza económica.

De esta forma, la historia de los precios del petróleo es un reflejo de las luchas políticas en torno de la distribución del valor tanto en el interior de un sector como entre sectores de la economía mundial.

A los diversos acontecimientos que condicionaron la evolución de los precios, subyacía el creciente poder de los países miembros de la OPEP, que actuaban individual y colectivamente como dueños de un recurso natural. A su vez, la consecuencia más evidente de su poder como terratenientes, el incremento de los ingresos provenientes del petróleo y la nacionalización de estas industrias, no solo afectó la magnitud de su fuerza, sino también su base, las relaciones sociales mediante las cuales el poder del Estado se constituía tanto interna como internacionalmente.

La naturaleza de la historia: de una dialéctica binaria a una dialéctica abierta

He empleado algunas categorías marxistas para arrojar luz sobre aspectos de la economía política internacional del petróleo y como introducción a mi análisis de la formación del Estado en Venezuela. Quiero concluir este capítulo ofreciendo una visión, tanto del capitalismo como del Estado, que intenta superar los prejuicios eurocéntricos y androcéntricos presentes en la visión del capitalismo que Marx nos legó.

La relación de Marx con el capitalismo estaba signada por una profunda ambivalencia. Reconocía al mismo tiempo sus logros y su potencial liberador, así como sus consecuencias alienantes y su limitado horizonte histórico. Sólo habitando la cultura capitalista, sumergiéndose en sus categorías y examinando sus premisas implícitas, pudo criticarla de manera que sigue siendo ejemplar por su amplitud e imaginación. No obstante, la cultura capitalista europea del siglo XIX también habitó en Marx, lo cual limitó el alcance de su crítica. Su desconstrucción del sistema categorial de la economía política no lo libró de su identificación heterosexista de la actividad con la masculinidad, la pasividad con la feminidad y la productividad con la fertilidad (Arendt 1958:106; Parker 1993: 35).

Su concepción del progreso de la historia asume una trayectoria definida por la unión dialéctica del capital y el trabajo que desplaza de manera creciente a la naturaleza -así como a las clases sociales y regiones del mundo identificadas con ella- del centro del escenario de la historia. No solo la burguesía y la clase obrera, sino también la ciudad y el campo, los propietarios de tierras y los campesinos, los centros metropolitanos y la periferia capitalista se definen por el papel que se les asigna en su narrativa del avance de la historia. Su recuento de la unión productiva de *Monsieur le Capital* y *Madame la Terre*, aun sin que sea su intención, sirve para confirmar la representación dominante de un mundo polarizado entre un orden masculino y creativo que es el hogar del capital en los centros metropolitanos, y una esfera feminizada y sometida en la cual la naturaleza espera pasivamente el abrazo fértil del capital en la periferia.

La desatención a la naturaleza en el pensamiento marxista se relaciona con la identificación del capital y el trabajo con la actividad, y de la naturaleza con la pasividad. En el mismo espíritu de la dialéctica entre el amo y el esclavo de Hegel, la dialéctica de Marx entre el capital y el trabajo plantea el antagonismo entre estos dos agentes como la fuente del movimiento emancipatorio de la historia. Si bien esta posición binaria nutre la mayor parte de su obra, en el análisis del papel de la renta del suelo

en el capitalismo Marx menciona un tercer actor: la naturaleza (junto al conjunto de factores asociados a ella). Aun cuando la naturaleza solo entra con fuerza en su análisis hacia el final del tomo 3 de *El capital*, Marx apunta que desempeña un papel de importancia junto al capital y al trabajo. Son estos tres los protagonistas de las sociedades capitalistas: “capital-ganancia (ganancia empresarial más interés), suelo-renta de la tierra, trabajo-salario: es la fórmula trinitaria que comprende todos los misterios del proceso social de producción” (1975-1981: 1037).

Dado que la mayoría de los marxistas, siguiendo los pasos de Marx, se han dedicado a resolver el misterio de la relación capital/trabajo, no resulta sorprendente que el misterio de *Madame la Terre* aún no se haya descifrado. Pocos pensadores se han percatado de que el sistema binario de Marx choca con su “fórmula trinitaria”. Henry Lefebvre resulta excepcional al notar esta tensión y explorar con excepcional lucidez sus consecuencias. Sugiere que una inclusión más plena de la naturaleza llevaría al centro del escenario el papel de otros agentes sociales y de la política misma, entendida como una relación social específica. Tras reconocer que con el término “tierra” Marx designaba a una relación social y no a una cosa (recursos agrícolas o minerales no como objetos inertes, sino como elementos de formaciones sociales constituidos mediante la socialización de la naturaleza), Lefebvre plantea que la tierra incluye a “los dueños de la tierra, al campo, a la aristocracia” y, lo que es más importante para mi línea de análisis, al “Estado-nación, confinado en un territorio específico” y, por tanto, “en el sentido más absoluto, la política y la estrategia política” (1991: 325). De ahí que para él “la oposición binaria [de Marx] de carácter conflictual (dialéctico) implica la subordinación de lo histórico a lo económico, tanto en la realidad como en el terreno conceptual” y también “la disolución o absorción, por parte de la esfera económica, de una multiplicidad de formaciones (la ciudad, entre otras) heredadas de la historia y que son, en sí mismas, de naturaleza precapitalista” (1991: 324).

Lefebvre sugiere que con el tratamiento de la naturaleza que hace Marx al final de *El capital*, su análisis del capitalismo “se detiene” (1991: 325), porque ese análisis lo enfrentó a dificultades que no podía resolver. La principal consistía en reconocer las implicaciones de la importancia creciente de la naturaleza para la producción capitalista, dado que su modelo del desarrollo capitalista era binario. A diferencia de la progresión histórica avizorada por el modelo de Marx, movilizad como lo estaba por la relación capital/trabajo, Lefebvre plantea que la importancia creciente de la tierra ha conllevado un desarrollo más complejo: “A escala mundial, ni la propiedad de la tierra, ni la importancia política de sus propietarios, ni las características peculiares de la producción agrícola dieron señales de desaparecer. Ni, en consecuencia, la renta del suelo abandonó el campo, suplantada por las ganancias

y los salarios”. Lefebvre subraya la importancia creciente de los recursos naturales y las consideraciones espaciales: “Lo que es más, las cuestiones relativas a los recursos del suelo y el subsuelo -del espacio de todo el planeta- aumentaban constantemente su importancia” (1991: 324).

La incapacidad de Marx para dar cuenta de la importancia de la naturaleza, según Lefebvre, se reproduce en la notable insensibilidad de la teoría social contemporánea en lo que toca a la significación de la renta del suelo: “Todos los intentos por reubicar el concepto de renta del suelo en el lugar que le corresponde han sido totalmente sofocados durante décadas, tanto en Francia, como en Europa, como en el mundo en general, en nombre de un marxismo que se ha tomado mera ideología, simple herramienta política en manos de funcionarios” (1991:324). Lefebvre no explica por qué el reconocimiento de la centralidad de la renta del suelo ha representado una amenaza de tal magnitud, pero considero que ello entrañaría integrar las dimensiones temporal y espacial, así como sustituir las concepciones eurocéntricas y esquemáticas del capitalismo por una comprensión más histórica, política y global de su desarrollo histórico¹⁹.

No obstante, como Marx escribió el tercer tomo de *El capital* antes que el primero y el segundo (Rosdolsky 1977), el reconocimiento de la importancia de la tierra en el tomo 3 (en ese momento “tardío”) no explica su subordinación a la dinámica capital/trabajo en el resto de su obra. Además, la falta de atención de Marx a la naturaleza no puede explicarse estrictamente por lo que Lefebvre denomina la “subordinación de lo histórico a lo económico”. Aunque un reconocimiento más pleno del papel de la tierra en la producción capitalista sin duda hubiera obligado a Marx a producir una concepción más política y global del capitalismo, uno de los logros de Marx es haber comenzado a mostrar que la aparente separación entre “economía” y “política” en el capitalismo es ella misma un efecto de la política. A lo largo de toda su obra demostró que lo que vino a llamarse economía en la sociedad burguesa se constituía mediante la lucha de clases y la regulación estatal, como se aprecia con claridad tanto en sus escritos históricos como en *El capital*²⁰.

La omisión de Marx tuvo que ver, según creo, con sus objetivos. Desde la Inglaterra inmersa en la

¹⁹ Sin embargo, el concepto de renta del suelo se ha empleado en el estudio de sociedades en las cuales los productos agrícolas o de la minería desempeñan un papel clave. Si bien estos estudios han hecho valiosas contribuciones al análisis de naciones específicas, no han modificado las concepciones dominantes sobre el capitalismo. Mi trabajo en esta área parte de las contribuciones de estudiosos que han utilizado la categoría de renta para analizar a productores de productos primarios, en especial las naciones productoras de petróleo. Uno de los primeros intentos de reunir un número de ensayos que utilizan la teoría de la renta del suelo para estudiar a los Estados exportadores de petróleo es el de Nore y Turner (1980). La publicación *Peuples Méditerranéens / Mediterranean Peoples* dedicó un número especial (Nº 26, 1984), titulado *Pétrole et société*, al análisis de sociedades sustentadas en el petróleo. Entre los autores que muestran sensibilidad hacia el tema de las implicaciones culturales o políticas de las rentas petroleras, v. la obra de Watts (1983; 1987; 1994) y Graf (1988) sobre Nigeria.

²⁰ Pienso en especial en varios capítulos del tomo I de *El capital* (1967): sobre el dinero (cap. 3), la jornada laboral (cap. 10), y la acumulación primitiva (caps. 26-33).

revolución industrial, trató de hacer avanzar la causa del socialismo presentando a los obreros como una clase explotada que tiene interés en la emancipación universal de la humanidad. Vio las raíces de la explotación en la extracción de plusvalía en el proceso de producción. De ahí que concentrara su atención en la dialéctica entre el capital y el trabajo y en la relación entre ganancia y salarios, a fin de hacer visible, en un nivel relativamente alto de abstracción, las operaciones ocultas que aseguran la extracción de plusvalía y esconden este proceso de la vista. A diferencia del trabajo, la tierra no produce valor. Como el capital, sólo se apropia de él, pero no lo hace, como el capital, involucrando al trabajo en el proceso de producción, sino obstaculizando la movilidad del capital y su capacidad de explotar el trabajo. En este sentido, la tierra es un parásito tanto del trabajo como del capital.

Marx, entonces, vio la tierra como una fuerza conservadora que inhibe el avance del capital. Su obra sugiere que, con el tiempo, la tierra se subsumiría en el capital, o sea, que el capital controlaría el poder de la tierra como relación social opuesta a él. Dado este punto de vista y su preocupación por poner al desnudo la lógica de acumulación capitalista desde una perspectiva que privilegiaba el problema de la explotación del trabajo, resulta comprensible que no se centrara en la naturaleza como fuente de riqueza o como base de la propiedad de la tierra y la renta del suelo. La concepción estrictamente social de Marx de la explotación evita fetichizar el capital, el dinero o la tierra como fuentes de valor. Pero termina por excluir la explotación de la naturaleza del análisis de la producción capitalista y por borrar su papel en la formación de la riqueza.

Esta desaparición de la naturaleza también se aprecia en el análisis marxiano de la forma fundamental de riqueza en el capitalismo: la mercancía. Marx hace tales esfuerzos por mostrar que el valor de las mercancías sólo depende de las relaciones sociales que les imprimen una cantidad definida de fuerza de trabajo abstracto, que presta poca atención al papel de la naturaleza en su constitución como tales: "... la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa, no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones, propias de cosas, que se derivan de tal naturaleza" (1975-1981: 88-89). Si bien es cierto que la relación de valor entre las mercancías no tiene nada que ver con su naturaleza física, su existencia como mercancía no puede separarse de su naturaleza física.

En tanto cosas que encarnan valores de uso y de cambio, las mercancías son, como enfatiza Marx en todos sus demás textos, objetos intrínsecamente sensoriales, que dependen de un medio físico para su constitución como tales; poseen una forma material o "natural" y una forma social o "de valor" (1975-1981: 58). Esto es cierto respecto no solo de mercancías incuestionablemente materiales, como

autos o mangos, sino de otras menos tangibles, como conciertos musicales o poemas. Por supuesto, lo que convierte a una canción o un mango específicos en mercancía no es solo su real o imaginada utilidad, sino su posibilidad de realización en el mercado; su participación en el intercambio mercantil los transforma en mercancía. El mango que compro es una mercancía, pero el que arranco del árbol no lo es; en un caso, como una mercancía, en el otro, una mera cosa. Lo mismo respecto de una canción, que puede circular libremente, como cuando la recibo de un amigo “que canta como un ruiseñor” (Marx 1977: 1044), o vestida de mercancía, lastrada por una etiqueta con su precio, como cuando compro una entrada para un concierto. Las mercancías circulan a través del medio de sus propiedades físicas y no con independencia de ellas. La forma particular de su materialidad sensorial es un elemento intrínseco de la forma que adquieren como mercancías²¹.

Mi razonamiento sobre la importancia de las propiedades físicas de las mercancías no se restringe al reconocimiento del papel de la materia en definir su utilidad en tanto cosas. Muchos estudiosos han señalado que *El capital* se concentra en el valor de cambio y presta poca atención al valor de uso (Baudrillard 1981; Sahlins 1976). Dados los objetivos de Marx, ello me parece comprensible. En mi opinión, la materialidad de las mercancías también participa en su constitución *qua* mercancías y, por tanto, en la definición de su papel según la forma como aparece la riqueza en el capitalismo. Si es cierto, como afirma Marx desde la oración con que se inicia *El capital*, que “la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un ‘enorme cúmulo de mercancías’” (1975-1981: 43), creo que ello se debe a que las mercancías no solo encarnan fuerza de trabajo abstracta, sino riqueza material. La mercancía *qua* mercancía encarna valor social y riqueza natural; en tanto “cosas sensorialmente suprasensibles o sociales” (1975-1981: 88), no pueden entenderse independientemente de sus propiedades físicas ni de sus propiedades sociales.

En su análisis de la forma mercancía, la principal preocupación de Marx es disipar la niebla de la familiaridad “mediante la cual el carácter social del trabajo se nos aparece como el carácter objetivo de los productos mismos” (1967: 74). Para Marx, el fetichismo de las mercancías supone la inscripción de la fuerza de trabajo abstracta en los objetos y la supresión simultánea de esa inscripción de la conciencia colectiva. Resulta irónico que en su celo por demostrar que el valor de una mercancía reside en la inscripción, no en el objeto, Marx haya suprimido la aguda observación de William Petty

²¹ Como señaló Marx, las mercancías no son simples cosas, y no siempre resulta fácil identificar qué es de hecho una mercancía. Los marxistas suelen atribuirle una gran significación a los bienes producidos con trabajo asalariado para el intercambio, pero en realidad se pueden producir bienes para el intercambio, que serían también mercancías, en una diversidad de condiciones laborales. Para un interesante análisis de la mercantilización de la música como un programa al que posteriormente se aplica el trabajo, v. Attali (1977).

(que hace suya) de que el trabajo inscribe el valor a través de un medio material y que la riqueza se genera a partir de la unión del trabajo, “el padre” y la naturaleza, “la madre” (Marx 1967: 43). Hasta donde conozco, este es un aspecto del análisis de Marx sobre la forma mercancía que no ha sido comentado.

Una apreciación del papel de la naturaleza en la formación de la riqueza ofrece una visión diferente del capitalismo. La inclusión de la naturaleza (y de los agentes a ella asociados) debería desplazar a la relación capital/ trabajo de la centralidad osificada que le ha hecho ocupar la teoría marxista. Junto a la tierra, la relación capital/trabajo puede verse en el seno de un proceso más amplio de mercantilización, cuyos efectos y forma específicos hay que demostrar concretamente en cada caso. A la luz de esta visión más abarcadora del capitalismo, sería difícil reducir su desarrollo a una dialéctica entre el capital y el trabajo que tiene su origen en los centros avanzados y se expande a la periferia atrasada. En lugar de ello, la división internacional del trabajo podría reconocerse, de modo más adecuado, como una división internacional simultánea de las naciones y de la naturaleza (y de otras unidades geopolíticas, como el Primer y el Tercer Mundo, que reflejan los cambiantes realineamientos internacionales). Esta perspectiva, al incluir los agentes que en todo el mundo están involucrados en la creación del capitalismo, posibilita avizorar una concepción global, no eurocéntrica, de su desarrollo.

El objetivo de abandonar una dialéctica binaria a favor de otra terciaria es abrir nuestra visión del desarrollo histórico del capitalismo y no limitarla al definir *a priori* la identidad de sus agentes y la lógica de su transformación. Centrar el análisis en la conversión en mercancía de la tierra, el trabajo y el capital -la fórmula trinitaria de Marx- permite abarcar mediante el análisis social, como propone Lefebvre, un número mayor de actores y formaciones sociales, unificar las dimensiones temporal y social y hacer más evidente la relación entre estructura y contingencia en la historia. El propósito crítico es aprehender el carácter relacional de las unidades incluidas en la creación del mundo moderno, no multiplicar su número como entidades independientes.

En la versión marxiana del capitalismo, la tierra aparece de modo ambivalente como fuerzas naturales necesarias que participan en la producción de las mercancías y como una clase social que funciona como obstáculo a la expansión del capital. Cuando Marx habla de los dueños de la tierra como una clase, su ambigüedad se resuelve en una inequívoca negatividad: “una clase que no trabaja ni explota directamente a los trabajadores, y que ni siquiera, a diferencia del capital, que genera interés, lanza homilías edificantes acerca del riesgo y el sacrificio que supone el préstamo de capital” (1981: 968).

Dada su evaluación negativa del papel social de la tierra, resulta comprensible que le haya prestado poca atención a su papel en la evolución del capitalismo. Desde el punto de vista de la periferia del sistema capitalista, sin embargo, es necesario reconocer la centralidad de la tierra como fuerza social activa que mantiene una impactante significación económica y una notable elocuencia política.

Si se coloca la tierra en el centro del análisis en las formas múltiples que asume en el mundo contemporáneo -no solo como una clase que representa un modo de producción en decadencia, sino como una fuerza social activa en la reproducción de las relaciones modernas- resultaría difícil seguir viendo la acumulación del capital como el drama que protagonizan solamente el capital y el trabajo en la sociedad. Por el contrario, habría que incluir también, como sugiere Lefebvre, el “Estado-nación confinado en un territorio específico” y, por tanto, “en el sentido más absoluto, la política y la estrategia política”.

Desde esta perspectiva, la crítica marxista de la apariencia cosificada de la política y la economía como esferas independientes tanto en la cultura capitalista como en la teoría social puede desarrollarse para incluir una crítica de su persistente separación en la teoría marxista misma. La vasta literatura sobre el Estado en las sociedades capitalistas avanzadas y en las periféricas se centra en la relación entre la política y la economía. En el seno de la sociología política convencional, que se inspira más en la programática teórica de Weber que en sus escritos históricos, la mayoría de las obras tratan de establecer la independencia del Estado de su contexto socioeconómico, y de privilegiar el papel intencional de los agentes políticos tanto en el terreno interno como en el internacional. En el seno del marxismo el debate se ha dado entre distintos modos de aprehender los vínculos entre Estado y capitalismo, a partir de la premisa de que los Estados se constituyen y organizan en respuesta a su papel de reproducir las relaciones sociales capitalistas. De ahí que mientras que los neoweberianos tienden a plantear una separación esencial entre Estado y economía, y se preocupan por evaluar grados relativos de “capacidades del Estado” (Skocpol 1985), los marxistas por lo general asumen la existencia de una conexión estructural entre Estado y sociedad y, por tanto, se interesan por explorar su significación en lo relativo a la forma y autonomía relativa del Estado (Miliband 1969; Poulantzas 1976).

Los estudios de Estados de la periferia -como los “Estados en proceso de modernización” (Almond y Verba 1963), los “Estados coloniales” (Alavi 1972; Chandra 1980) y los “Estados dependientes” (Amin 1990; Cardoso y Faletto 1979; Frank 1978)- tienden a reproducir los términos de esos debates. Dadas las formas imperantes de discurso teórico, resulta comprensible que los intentos llevados a cabo por

neoweberianos y marxistas para “volver a introducir el Estado” (Evans, Rueschemeyer y Skocpol 1985) y para ver la “construcción del Estado” como un proceso histórico continuo (Bright y Harding 1984) se hayan enmarcado en los términos de la problemática dual de la autonomía relativa del Estado y de la capacidad de los agentes estatales para generar y seguir cursos de acción específicos. Estos enfoques tienden a asumir el capitalismo y a problematizar la relación del Estado con él.

No obstante, la concepción de capitalismo aquí propuesta proporciona una perspectiva diferente sobre las teorías del Estado. Un rasgo curioso de estas teorías es la facilidad con la que presentan al Estado y a la sociedad como esferas aparte. Mientras que tratan al Estado como el orden “público” de intereses generales reales o imaginarios, conciben a la sociedad como el dominio de los intereses privados. Dada esta oposición, la sociedad, el capital y la economía a menudo llegan a funcionar como sinónimos. La separación entre lo político y lo social está tan fuertemente incrustada en las teorías liberales sobre el Estado que definir las “fronteras” que dividen a la sociedad del Estado (o el “sistema político”, término que abrazaron David Easton y Gabriel Almond en los años 50) ha llegado a convertirse en un problema central de la teoría política liberal²². Si bien las teorías marxistas del Estado en general historizan la relación entre estas esferas o dominios separados, su modo de historizarla reproduce la tendencia de Marx a identificar la expansión de la riqueza de las naciones con la producción de valor. Esta identificación de valor y riqueza reduce la generación de riqueza a la relación capital/trabajo y excluye de su formación el papel de la tierra, considerada una relación social.

La exclusión de la naturaleza tiene importantes consecuencias para las teorías marxistas del Estado. Sea que los teóricos se centren en la relación entre la clase dominante y el papel del Estado (como en las posiciones instrumentalistas y estructuralistas), sea que lo hagan en la forma y la función del Estado capitalista (como en la escuela derivacionista alemana), generalmente asumen que el Estado depende de la sociedad o del capital para obtener sus recursos económicos. Los analistas pueden conceptualizar el Estado de maneras muy diferentes, desde considerarlo un aparato cohesivo que desempeña “funciones” específicas en favor del capital, hasta verlo como un complejo social conflictuado por “intereses” contradictorios, pero todos están de acuerdo en que, sea cual fueren su forma y funciones, depende de la sociedad para la obtención de sus ingresos.

Por tanto, no resulta sorprendente que esta premisa generalizada se reproduzca sin comentarios en

²² Para un útil panorama de la conceptualización liberal sobre el Estado, que subraya la dificultad de definir el Estado y de identificar las fronteras que lo separan de la sociedad, v. Mitchell (1991). La solución de Mitchell al problema tiene como base una concepción foucaultiana del Estado como el efecto estructural de formaciones disciplinarias dispersas.

uno de los más lúcidos intentos recientes por “rescatar” la teoría marxista del Estado. En *Alien Politics: Marxist State Theory Retrieved*, Paul Thomas da por sentado que el Estado depende del capital: “Una de las razones por las cuales tiene sentido emplear la categoría de Estado capitalista es que desde hace largo tiempo el Estado ha dependido de las actividades del capitalismo y de la acumulación de capital, que es, después de todo, la fuente de sus propios ingresos” (1994:21). Sobre la base de la distinción de Giddens entre dos formas de autoridad -el mando sobre las personas y el mando sobre recursos asignables- Thomas trata la decisiva separación entre las esferas política y económica como el rasgo característico de las sociedades capitalistas. “El mando sobre las personas y el mando sobre los recursos son procesos o esferas separados que, en el capitalismo, van a dar a manos diferentes.” La línea argumental de Thomas es compleja, pero su dirección general carece de toda ambigüedad: el mando sobre las personas está en manos del Estado, mientras que el mando sobre los recursos está en manos del capital. Los capitalistas necesitan al Estado para controlar a sus ciudadanos, pero el Estado, “después de todo”, necesita al capital para financiar sus actividades, porque la acumulación de capital es “la fuente de todos sus ingresos” (1994:19).

En las sociedades capitalistas, el trabajo, sujeto a la dominación del capital, produce un excedente económico; en un sentido fundamental, los ingresos de todos los actores sociales dependen, en última instancia, del capital, que es el agente que controla el proceso de producción. Ello justifica, en un nivel general, la idea de una dependencia estructural del Estado con respecto al capital. No obstante, el excedente producido por el trabajo bajo la férula del capital va a dar a manos de los capitalistas en forma de ganancias, pero también a los dueños de tierras en forma de rentas y a los trabajadores como salarios. Además, el Estado a menudo participa directamente en la explotación del trabajo mediante su involucramiento en actividades productivas, y puede actuar como dueño de tierras en tanto representante de la nación.

De ahí que, si bien es cierto que los Estados dependen del capital y sus ganancias, también dependen de la tierra y sus rentas; y tanto las ganancias como las rentas provienen no solo de las actividades internas, sino también de las internacionales. Si como planteara Marx, el Estado en tanto representante general de una sociedad capitalista es un capitalista abstracto, en tanto autoridad soberana en un territorio nacional desempeña el papel de terrateniente abstracto. Además, estos papeles abstractos asumen expresiones concretas mediante el involucramiento directo del Estado en la economía. De ahí que el Estado pueda convertirse en un capitalista activo cuando participa directamente en los sectores financiero y productivo, a menudo en las llamadas industrias básicas

como el acero y la petroquímica. También puede convertirse efectivamente en dueño de tierras cuando controla recursos naturales²³, que en los países del Tercer Mundo a menudo son fuente importante de divisas. En este caso, los capitalistas nacionales pueden llegar a depender de un Estado rico en recursos para obtener sus ingresos mediante múltiples formas de protección y promoción estatales de la industria privada, que van desde los subsidios directos a la exportación hasta las altas tarifas aduanales a las importaciones. Dadas las formas variadas del involucramiento del Estado en la economía de las naciones capitalistas, las fronteras que separan las esferas económica y política en esas naciones se trazan de diversas maneras y en muy raras ocasiones son precisas.

Es necesario descentrar las teorías del Estado, así como las teorías del capitalismo, a fin de abarcar la totalidad de los Estados capitalistas y el proceso global de su formación. En la medida en que las teorías del Estado han presentado a los Estados de las naciones capitalistas avanzadas como el modelo general del Estado capitalista, los Estados de las sociedades capitalistas periféricas se han representado -cuando no han sido simplemente dejados a un lado- como versiones trucas de este modelo; se identifican por un régimen de déficits, no por diferencias históricas²⁴. Pero una visión unificadora de la formación global de los Estados y del capitalismo muestra que todos los Estados nacionales se constituyen como mediadores de un orden que es simultáneamente nacional e internacional, político y territorial. Esta concepción no niega la desigualdad en términos de poder y desarrollo entre los Estados nacionales, ni la significación de influencias modulares entre ellos. Lo que hace, al colocar a los Estados en el seno de una matriz temporal y espacial unificada, es ver sus desigualdades como expresión de intercambios transculturales mutuamente constitutivos entre las sociedades supuestamente aisladas que representan.

Estas consideraciones están en la base de mi análisis de la formación del Estado en Venezuela, cuando en virtud de su propiedad sobre el subsuelo rico en petróleo, se convirtió en un gran propietario de tierras y gran capitalista, durante un periodo en el cual el petróleo se tornó una de las mercancías más valiosas y esenciales del mundo. Si bien mi análisis intenta arrojar luz sobre el ejemplo específico de Venezuela, parto de la premisa de que la revelación de una formación nacional singular brinda una iluminación más general, porque esclarece las circunstancias de las que brotan otras historias nacionales particulares. Creo que esta perspectiva puede arrojar nueva luz sobre otras sociedades que

²³ Para un análisis del involucramiento del Estado en el sector petrolero tanto en naciones metropolitanas como en naciones del Tercer Mundo, v. Klapp (1987). La autora centra su amplio estudio comparativo en cuatro países y trata de contestar la pregunta de por qué "los gobiernos de 74 gobiernos se convierten en empresarios en la industria petrolera en vez de dejar este negocio al sector privado".

²⁴ Resulta suficiente leer los excelentes estudios sintéticos de teoría marxista de Camoy (1984) y Jessop (1982; 1990) para ver cómo los Estados "dependientes" -como los denomina Camoy- aparecen solo como modelos imperializados e inferiores del Estado capitalista "normal".

también dependen de las exportaciones de productos primarios para obtener divisas, y reubicar el análisis de las luchas por la tierra, que ha hecho énfasis en las relaciones entre propietarios y campesinos, pero ha dejado a un lado la significación de las rentas agrícolas en esas relaciones. Aunque las identidades de la mayoría de las naciones del Tercer Mundo han estado vinculadas de manera tan íntima con productos primarios de exportación específicos que en algunos casos se les ha identificado con ellos -bananos (América Central), petróleo (naciones miembros de la OPEP), café (Colombia y Brasil), nitratos y cobre (Chile), trigo y ganado (Argentina) y azúcar (Cuba)- ha resultado difícil desentrañar la significación económica, política y cultural de este vínculo. Si bien el caso venezolano es excepcional en ciertos aspectos, hace más visible procesos que también conforman a otras sociedades del Tercer Mundo.

Como he apuntado, las luchas en torno del petróleo ayudaron a trazar el mapa contemporáneo del mundo. Un famoso analista de la industria petrolera, en reconocimiento al papel crucial del petróleo en la construcción de nuestras “sociedades del hidrocarburo”, ha adelantado la idea de que “el siglo xx bien merece el nombre de 'siglo del petróleo’” (Yergin 1991:14). A principios de este siglo las empresas transnacionales más avanzadas del mundo se establecieron en Venezuela, una sociedad agrícola precariamente organizada, y empezaron a extraer el petróleo. Pocos años después esa sociedad se convirtió en la mayor exportadora mundial y empezó a concebirse como una “nación petrolera”. En los capítulos siguientes examino esta transformación, enfocando mi análisis en la captura por parte del Estado de la riqueza petrolera y en los efectos transformadores de su circulación a lo largo del cuerpo político.

2. Los dos cuerpos de la nación

*El futuro del país se escribirá con petróleo.
Este líquido penetrará en todos nuestros poros y
llegará a adueñarse de nuestro destino.*

Domingo Alberto Rangel¹

*La esencia de una nación es que todos los individuos
tengan muchas cosas en común y que todos
hayan olvidado muchas cosas.*

Ernest Renan

Para que no olvidemos la aguda observación de Renán, “el olvido... [es] un factor esencial en la creación de una nación” (1990: 65), Benedict Anderson señala que los imaginarios nacionales evocan una imagen atemporal de la nación al inducir amnesias históricas específicas (1991). Mediante recuerdos selectivos que construyen una mitología del pasado de la nación y desplazan de la conciencia aspectos conflictivos de sus orígenes históricos, estos imaginarios nacionales evocan una concepción nacional sacralizada como comunidad eterna.

A fines del siglo xx suele identificarse a Venezuela como un país petrolero². Por extraño que pueda parecer, una mera mercancía material representa su identidad como comunidad nacional. El hecho notable de que esta manera más bien común de identificar a una nación neocolonial por su producto fundamental de exportación parezca completamente natural, no hace más que subrayar la necesidad de entender por qué ciertas naciones han llegado a vincularse tanto con ciertas mercancías que éstas han llegado a identificarlas.

Aunque en Venezuela el ensamblaje entre nación y petróleo se produjo en fecha reciente -“la década de 1930”-, ha alcanzado la forma de una realidad atemporal. Como si se tratara de una nube imperceptible, la riqueza del petróleo envolvió a la sociedad venezolana, dejó su huella fresca en todas partes y, sin embargo, hizo que su presencia se sintiera como parte de un paisaje inmemorial. En el presente capítulo quiero remover las remembranzas amnésicas nacionalistas al evocar la época

¹ Rangel (1970: 9).

² Me siento tentado de decir “*aún* se imagina a Venezuela como un país petrolero”. La pobreza creciente, la inestabilidad política, la inflación y la incertidumbre sobre el futuro cada vez mayor han transformado, o incluso erosionado, los significados vinculados a Venezuela como país petrolero. No obstante, encuestas de opinión realizadas en 1995 y 1996 indican que la población todavía cree que el país es rico y que sus habitantes son merecedores de disfrutar esa riqueza. Todo aumento de los precios del petróleo, como el ligero incremento ocurrido en 1996, alimenta esa creencia.

cuando Venezuela se imaginó por primera vez como nación petrolera. En estas memorias olvidadas espero encontrar pistas que puedan ayudar a explicar qué significación tiene esta manera de imaginar la nación para la transformación del Estado venezolano como un complejo ideal y como un sistema institucional.

Olvidando a Juan Vicente Gómez

La abrupta transformación de Venezuela de nación agrícola endeudada en rica exportadora de petróleo tuvo lugar durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, quien proporcionó a las compañías petroleras lo que se consideró de modo bastante unánime como un clima excepcionalmente ventajoso para sus inversiones, que a su vez crearon las condiciones políticas y económicas a favor de consolidar el gobierno dictatorial, convirtiendo a Gómez, por añadidura, en uno de los hombres más ricos de América. Durante este periodo formativo, el régimen y la industria petrolera foránea radicada en el país se condicionaron mutuamente. Juntos definieron el paisaje social en el que los venezolanos comenzaron a reconocer la elusiva presencia del mineral y a conformar su identidad política como ciudadanos de una nación petrolera.

Sin embargo, tanto para la imaginación pública nacional como para la historiografía oficial, Venezuela surgió como nación moderna prácticamente incontaminada por sus vínculos con el periodo de Gómez. Esta purificación se debió en buena medida a la labor ideológica de actores políticos emergentes que trazaron una clara demarcación entre la privatización del Estado realizada por Gómez y su propio proyecto de democratizarlo. Tal demarcación se presentó como un giro histórico, como se aprecia en la frecuentemente citada sentencia de Mariano Picón Salas: “Podemos decir que con el final de la dictadura gomecista comienza apenas el siglo XX en Venezuela. Comienza con 35 años de atraso” (1966: 22). Hasta el día de hoy, la frase ha circulado como mítico certificado del nacimiento de Venezuela como país moderno.

Si un acto de prestidigitación pudo convertir la muerte de Gómez en la mágica entrada de Venezuela en la modernidad, otro acto del mismo tenor convirtió su vida en un modelo del pasado primitivo de la nación. Pero ambos dependían de hacer desaparecer los vínculos que unían a la industria petrolera con el Estado venezolano durante el régimen de Gómez. Como hemos visto, para el dramaturgo José Ignacio Cabrujas la riqueza proveniente del petróleo creó la ilusión de que la modernidad podía llegar a Venezuela como sacada de un sombrero. Cabrujas apunta a dos estadistas venezolanos como los

principales magos de Venezuela: el general Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), que “decretó el sueño del progreso”, y Carlos Andrés Pérez (1974-1979), que transformó el progreso en “alucinación”.

El olvido que pone de manifiesto Cabrujas de la figura de Gómez es sintomático de una amnesia colectiva. Los recuentos dominantes, resueltos a indicar una ruptura entre la dictadura gomecista y los regímenes después establecidos, han escamoteado hasta qué grado el Estado contemporáneo se sustenta en una estructura construida durante aquélla. Sin embargo, la “democracia moderna” de Venezuela, construida febrilmente en oposición a la “dictadura primitiva” de Gómez es, de hecho, su antítesis, la otra cara de la misma moneda. A pesar de las significativas diferencias entre el gobierno dictatorial de Gómez y los regímenes liberales erigidos como contraste, uno y otros se conformaron como Estados de una nación petrolera. Examinaré a continuación cómo esta forma común cristalizó durante el régimen de Gómez y el periodo inmediatamente posterior, mediante una indagación sobre las políticas petroleras (hasta 1943) y las luchas por la democracia contra el régimen gomecista “atrasado” (tomando como centro las formulaciones producidas en 1936).

Sin embargo, el propósito de iniciar con Gómez este drama sobre el Estado venezolano no consiste tanto en restaurar recuerdos reprimidos como en volver a ubicar las reminiscencias hegemónicas a la luz de lo que olvidan; la moraleja del drama tiene que ver con la revelación, no con la restitución. Al iluminar los fundamentos terrenales del Estado como fueran erigidos durante el régimen de Gómez, estaremos en mejor posición para entender las condiciones que han permitido y al mismo tiempo circunscrito la prolongada democracia venezolana, así como la crisis económica y moral sin precedentes que erosiona sus bases desde la década de 1980.

El primer mago: Juan Vicente Gómez

En 1902, barcos de guerra de Inglaterra, Italia y Alemania que amenazaban con invadir si no se saldaba la deuda externa del Gobierno, bloquearon los puertos venezolanos; a fines de ese año Puerto Cabello fue bombardeado³. Sin embargo, en 1930, en ocasión del centenario de la muerte de Simón Bolívar, el gobierno venezolano pagó la totalidad de su deuda externa⁴. En el contexto de una historia de estrecheces financieras del Estado, que reflejaban el limitado control que ejercía sobre una

³ En 1900 la deuda externa de Venezuela era de 189 millones de bolívares. En 1901 el Gobierno, afligido por un paulatino decrecimiento de los ingresos fiscales, se vio obligado a suspender el pago de los intereses de la deuda externa, que aumentaron gradualmente hasta llegar a la cifra de 224,7 millones de bolívares en 1905 (Pardo 1975:162).

⁴ En esa época la deuda era de solo 23,76 millones de bolívares con una tasa de interés anual de 3%. Este gesto, “muy aprovechado en aquel tiempo para extremar las alabanzas de Gómez, careció de fundamentos económicos” (Pardo 1975:180).

economía nacional débil y fragmentada, se trataba de un acontecimiento excepcional. No obstante, era el tipo de logro que llegó a esperarse del mando espectacular de Gómez, quien se hizo de la dirección del Gobierno en 1908 y logró centralizar y controlar el poder estatal hasta que murió en su cama con 76 años⁵. Según Ramón Díaz Sánchez, un agudo escritor venezolano, la muerte de Gómez fue “su último milagro”: tras 27 años de gobierno el pueblo había llegado a creer que su muerte “no iba a ocurrir jamás” (Díaz Sánchez 1973: 24; López 1985: 659-660). Durante su mandato, a lo largo de una sucesión de actuaciones extraordinarias que tejieron sus vidas pública y privada hasta conformar un modelo singular de poder estatal (Skurski 1985), Gómez produjo su propio gobierno como el milagro más sorprendente de toda la historia republicana de Venezuela, una nación desgarrada por guerras civiles y caudillos beligerantes desde su independencia en 1821.

¿Cómo explicar este milagro? O, lo que es más significativo, ¿cómo dar cuenta de que se imaginara el gobierno de Gómez como un milagro? Hasta hace poco tiempo, la radical polarización del clima ideológico venezolano dificultaba responder estas preguntas. Como he apuntado, el establecimiento de un gobierno democrático conllevó una reconstrucción de la historia que plantea una oposición nítida entre el pasado primitivo de Venezuela, representado por Gómez, y los regímenes liberales que lo siguieron; en este esquema, la dictadura de Pérez Jiménez entre 1948 y 1958 se presenta como un paréntesis de sombras, una especie de resurgimiento temporal del oscuro pasado en medio del presente de luz.

Sin embargo, no es coincidencia que en 1930, cuando Gómez pagó la deuda externa, Venezuela hubiera consolidado su posición como el mayor exportador mundial de petróleo. El primer gran depósito se descubrió en 1914; las exportaciones comenzaron en 1918; y en 1928 el país se había convertido en el segundo productor y el primer exportador mundial petrolero (Pardo 1973:172). Aunque los ingresos del Estado por concepto de petróleo en 1924 apenas fueron de 6 millones de bolívares, en 1930 se multiplicaron más de 50 veces hasta alcanzar una cifra superior a 300 millones de bolívares. Con el apoyo político y financiero de la industria petrolera, Gómez se rodeó durante sus 27 años de gobierno, de los profesionales más distinguidos de su época y puso en práctica varias reformas económicas y sociales que modificaron significativamente las bases económicas y políticas de Venezuela y contribuyeron a consolidar su cruel y personalista dictadura. Paradójicamente, la industria más moderna del mundo contribuyó a consolidar el gobierno autocrático como modelo del

⁵ Gómez llegó al poder en 1908 mediante un golpe de Estado incruento. Por su importancia como líder militar durante la guerra civil que condujo al gobierno de Cipriano Castro en 1902, Gómez se convirtió en su vicepresidente. Cuando Castro partió hacia Europa en 1908 por razones médicas, Gómez se hizo del mando.

caudillismo latinoamericano tradicional.

En la medida en que el régimen gomecista fue redefinido como una dictadura atrasada opuesta a la civilizadora democracia venezolana, la interpretación estuvo sujeta a la necesidad ideológica de presentarlo como encarnación de lo primitivo. Como ya dije, Picón Salas definió lo que se convertiría en visión oficial de la historia. Gómez, colocado en oposición a la Venezuela moderna, ha sido un Otro interior respecto del cual se evalúa la Venezuela contemporánea (Skurski 1994). Es así como se convirtió en la encarnación de la antítesis de la democracia. Como resultado de ello, el estudio de su gobierno se ha visto ensombrecido por la misma oscuridad que se le ha atribuido al propio Gómez. No obstante, como ha mostrado Skurski, la barrera ideológica intangible que lo ha escondido de la vista pública también lo ha rodeado de un aura de misterio que aumenta la fascinación que su potente figura política nunca ha dejado de ejercer. Aunque siempre ha sido una presencia sumergida, la forma específica del sostenido atractivo de Gómez ha fluctuado de acuerdo con las circunstancias. Hasta la crisis más reciente, resultaba difícil romper el muro que separaba a Gómez de los regímenes más liberales que sucedieron a su gobierno. Pero el deterioro general de la economía y la pérdida de fe en las instituciones democráticas venezolanas han agrietado el muro. A través de las grietas comienza a verse un Gómez bajo otra luz. Su gestión ya no es tema tabú, o al menos no lo es tanto; nuevos estudios exploran el periodo y retiran el manto de oscuridad que cubrió su gobierno.

En un número especial de una revista de historia dedicado al régimen, con motivo del cincuentenario de la muerte de Gómez, el historiador venezolano Elias Pino Iturrieta plantea, en un artículo que lleva el sugerente título de "Matar a Gómez", que el objetivo de la historiografía actual es desestabilizar tanto la imagen (dominante) del régimen de Gómez como la Edad Media venezolana, como la visión (reprimida) de que fue un modelo de gobierno pacífico y productivo (1985a: 535). Pino Iturrieta explica que Gómez nunca fue sepultado, porque su gobierno no terminó como resultado de un levantamiento colectivo, sino como consecuencia de una muerte natural. Su presencia insepulta, por tanto, ha permeado la vida colectiva de Venezuela en formas que no se reconocen públicamente. Según este historiador: "Nuestra vida está determinada por el imperio de una suerte de Gómez quinquenales sin vínculos con la sociedad civil" (1985a: 534). Estas personalidades semejantes a la de Gómez, que no se restringen a las de los presidentes, son funcionarios del Estado en todos los niveles que se modelan a su imagen y semejanza, detentan el poder omnipotente y distribuyen favores como en el pasado (1985a: 534). "Hay que matar" a Gómez, afirma, y sacarlo a la luz de modo que su figura pueda finalmente reconocerse por lo que fue. Propone que se considere el periodo de Gómez como el

origen de la Venezuela moderna: “el primer capítulo de Venezuela contemporánea” (1985a: 535).

Otra versión de la historia busca el origen de la modernidad venezolana mucho más atrás. Dávila sugiere, en una crítica tanto a la sentencia de Picón Salas de que Venezuela entró al siglo XX en 1936, como a la idea del partido Acción Democrática (AD) de que lo hizo el 18 de octubre de 1945 (fecha de su golpe de Estado contra el general Medina), que el origen de la modernidad de Venezuela hay que rastrearlo en el gobierno del general Guzmán Blanco, durante el último cuarto del siglo XIX (1992: 57). En el curso de sus gobiernos (1870-1877, 1879-1884 y 1886-1888), Guzmán Blanco unificó la moneda nacional, fundó una imprenta nacional, fomentó la construcción de caminos y obras hidráulicas, amplió el sistema ferrocarrilero y levantó un gran número de edificios monumentales.

Aunque la reciente historia revisionista ha logrado arrojar nuevas luces sobre un viejo territorio, también está proyectando sobre él su propia sombra⁶. Si antes se subrayaba la diferencia entre Gómez, en tanto tirano primitivo, con los regímenes liberales que lo sucedieron, ahora la tendencia revisionista es a concentrarse en las continuidades. Los debates se centran en cuestiones de periodización, y generalmente incluyen esfuerzos por precisar el momento exacto de la muerte histórica de Gómez. Si hasta hace poco su muerte biológica marcaba la entrada de Venezuela en la modernidad, ahora que Gómez ya no es la encarnación incuestionada de lo primitivo, discernir los orígenes de la modernidad venezolana es cuestión que invita a producir nuevas respuestas.

Mi contribución a este esfuerzo colectivo no consiste en rastrear una trayectoria alternativa de los orígenes modernos de Venezuela, sino en plantear algunas interrogantes sobre las categorías empleadas para sentar estos hitos. El “historicismo que proyectó a Occidente como la Historia” (Prakash 1995:1475) ha construido a Europa como la patria de la modernidad y al resto del mundo como su receptor rezagado, cuya única alternativa es recuperar el tiempo perdido o permanecer en un estado de atraso. Las taxonomías geopolíticas imperantes reflejan y refuerzan procesos mundiales de polarización que esencializan la diferencia en vez de historizarla; se ubica a las naciones en los escaques de las taxonomías imperiales en virtud de sus supuestas características socioculturales, sin tener en cuenta el hecho de que esos caracteres nacionales son los productos transculturales de his-

⁶ Manuel Caballero, conocido historiador marxista, ya no describe a Gómez en *El tirano liberal* como un dictador primitivo, sino como un tirano liberal, encarnación de contradicciones que expresan las tensiones no resueltas entre autocracia y liberalismo que permearon su gobierno (1992). La biografía más tradicional de Tomás Polanco Alcántara presenta una imagen matizada de Gómez que muestra su compleja personalidad y que incluye datos que desmienten mitos como su supuesto analfabetismo (1990). Yolanda Segnini ha hecho énfasis en el hecho de que Gómez se rodeó de algunos de los intelectuales y profesionales más destacados de la época, cuyos proyectos de salud, educación y reforma económica apoyó (1997). Mediante diálogos ficticios, Ramón Velásquez ha reconstruido la subjetividad íntima de Gómez (1988). Si bien en el presente capítulo me limito a analizar algunos aspectos del gobierno de Gómez, estas obras me han influido, en especial el análisis pionero realizado por Skurski del modelo de gobierno de Gómez (1994; de próxima publicación).

torias interrelacionadas. Si bien Occidente ha llegado a incluir a naciones no europeas económicamente exitosas (Chomsky se refiere a Japón como un “europeo honorario” [1991:13]), se condena al Tercer Mundo a permanecer en un eterno estado de “transición”, cuando no de regresión. Se considera que muchos países del Tercer Mundo, ahora abandonados por las potencias imperiales que un día los explotaron, son intrínsecamente incapaces de diseñar nuevos caminos propios o de recorrer la senda histórica trazada por los protagonistas de la Historia. Atrapados en un limbo histórico, se les presenta como la encarnación quintaesenciada de lo primitivo, o de la banalidad de las políticas en la poscolonia (Mbembe 1992)⁷.

La autoconformación de Europa como la patria de la modernidad tuvo su premisa en la colonización de vastas regiones del mundo, que se consideran atrasadas y necesitadas de civilización. El ambivalente discurso latinoamericano sobre la modernidad, que rechaza la dominación europea pero internaliza su misión civilizadora, ha adoptado la forma de un proceso de autocolonización que asume formas diferentes en distintos contextos políticos y periodos históricos. En este sentido es, como el nacionalismo, un “discurso derivado” (Chatterjee 1986), que al tiempo que rechaza la hegemonía imperial europea, reinscribe sus cambiantes valores y racionalidad, excepto que -y es necesario que lo recordemos- la periferia no es solo la receptora pasiva, sino que a menudo es coautora de este discurso supuestamente derivado, como nos recuerda Anderson en relación con el nacionalismo⁸.

Si vemos la formación del mundo moderno como un proceso unitario global que ha conllevado la constitución mutua del centro y de la periferia, el proyecto de provincializar la modernidad occidental (Chakrabarty 1991; Rafael 1993) supone también reconocer a la periferia como el asiento de modernidades subalternas. El objetivo no es homogeneizar ni catalogar las múltiples formas de la modernidad, y mucho menos engrandecer la periferia mediante un *fiat* semántico, sino deshacer taxonomías imperiales que fetichizan a Europa como única portadora de la modernidad y borran la

⁷ Para conocer los puntos de vista de Mbembe, v. “The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarly in the Postcolony” (1992), y el debate sobre este artículo en el número siguiente de *Public Culture*. En mi contribución a este intercambio, sugerí que existe una conexión entre modos modernos de esencializar la diferencia cultural y ciertas formas de análisis posmoderno que rehúsan ubicar el poder en relaciones estructurales históricamente constituidas. Sostengo allí que este enfoque, “dirigido contra los metarrelatos de la historia, produce minirrelatos desconectados que refuerzan las visiones dominantes del mundo; al reaccionar contra los determinismos, presenta acontecimientos desasidos; con su rechazo a fijar la identidad mediante categorías estructurales, esencializa la identidad mediante la diferencia; al rechazar la ubicación del poder en estructuras o instituciones, lo difumina en la sociedad y, en última instancia, lo disuelve” (1992: 99-100). Tanto desde la perspectiva moderna como desde la posmoderna, generalmente se ve a la periferia como el Otro de la modernidad.

⁸ En la segunda edición de *Imagined Communities*, Benedict Anderson explica que su intención original había sido subrayar que los orígenes del nacionalismo estaban en el Nuevo Mundo, pero que sus críticos, “acostumbrados a la arrogancia de que todo lo que es importante en el mundo moderno tuvo su origen en Europa, asumieron con demasiada facilidad los nacionalismos ‘de segunda generación’ (húngaro, checo, griego, polaco, etc.) como el punto de partida de su modelación” (1991: XIII). Y añade: “Me desconcertó descubrir en muchas de las reseñas de *Imagined Communities* que este provincialismo eurocéntrico se mantenía muy presente, y que el capítulo crucial dedicado al origen americano de la cuestión se dejaba a un lado en la mayoría de los casos. Desgraciadamente, no he encontrado ninguna mejor solución “instantánea que cambiar el título del capítulo 4, que ahora se llama “Creole Pioneers [Pioneros criollos]”.

constitución transcultural de los centros imperiales y las periferias colonizadas. La crítica del *locus* de la modernidad desde sus márgenes crea las condiciones para una crítica intrínsecamente desestabilizadora de la propia modernidad. Deshacer la descripción de la periferia como la encarnación del atraso bárbaro, desmitifica también la autorrepresentación de Europa como la encarnación de la razón universal y el progreso histórico⁹.

Lejos de las luces cegadoras de la Ilustración europea, en medio de pueblos que portan las cicatrices de la violencia moderna como una segunda piel, se hace difícil apartar de la vista o desplazar hacia Otros extranjeros el bárbaro envés de la civilización moderna. En América Latina, desde Argentina hasta México, la incesante insistencia en la necesidad de proteger la civilización importada de lo primitivo local revela tanto los límites de la misión civilizadora de Europa como el grado hasta el cual su racionalidad ha llegado a formar parte de la autoconformación latinoamericana. En sociedades formadas mediante la violencia de una cultura de conquista, la aparición del Estado como agente de la civilización a duras penas logra ocultar la violencia sobre la que se sostiene su poder.

Escribiendo en medio de una Europa abismada en su propio salvajismo, Walter Benjamín describió el horror que enfrentaba con la sentencia de que “no hay documento de la civilización que no sea al mismo tiempo documento de la barbarie” (1969: 256). Leer la historia latinoamericana como un documento de dos caras revela la unidad de razón y violencia que está en la raíz de su formación como periferia de Europa. Mediante la historización de las formas específicas en las cuales la civilización metropolitana ha sido la madre de la barbarie colonial¹⁰, podemos entender de una nueva manera tanto los centros como las periferias. Desde esta perspectiva podemos empezar a considerar el gobierno de Gómez no solo como un obstáculo al progreso moderno en Venezuela, o como su efecto y condición, sino como una forma de modernidad que replantea su (unilateral) versión metropolitana.

Petróleo en Venezuela

Los primeros habitantes de lo que hoy es territorio venezolano, conocían la existencia de lo que llamamos petróleo, empleándolo con propósitos medicinales. La primera referencia escrita apareció

⁹ Como han apuntado varios observadores, resulta imposible separar la crítica de la modernidad de las luchas en pro de la descolonización que tuvieron lugar después de la Segunda Guerra Mundial (Young 1990). Por mi parte, en otro texto he intentado relacionar las críticas de la modernidad y del orientalismo en un análisis de las modalidades occidentales de representación (1996).

¹⁰ Baretta, Dunkan y Markoff, en un análisis pionero de la colonización del espacio en las fronteras ganaderas de las Américas, avanzaron este proyecto al mostrar cómo en las Américas “la civilización” fue, de hecho, “la madre” de “la barbarie” (1978).

en las crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdez en 1535, y ya en 1839 los venezolanos llevaban a cabo estudios científicos del petróleo para fomentar su desarrollo (Martínez 1973: 31-53). El primer pozo que produjo petróleo en el mundo se perforó en Pensilvania en 1859; seis años después se otorgó la primera concesión en Venezuela (Martínez 1973: 65). Mientras que la producción de petróleo en Estados Unidos se amplió rápidamente a partir de 1859, lo que reflejaba no solo la abundancia petrolífera, sino también el poder del capital estadounidense, en Venezuela no alcanzó gran escala comercial hasta la segunda década del siglo XX. El interés foráneo en Venezuela se había concentrado en el asfalto; los capitalistas locales, los primeros en explotar el petróleo, no habían contado con recursos suficientes para realizar las inversiones en la exploración y perforación que les permitieran competir internacionalmente.

La expansión de la economía mundial a inicios del siglo XX creó una demanda mundial. El petróleo se convirtió en la mercancía central del sistema capitalista cuando la Primera Guerra Mundial demostró la superioridad de los vehículos motorizados y la producción masiva de automóviles comenzó a redefinir formas de producción y consumo, al tiempo que re- configuraba la estructura misma del espacio social en el mundo moderno. En esa época, la creciente demanda europea de petróleo convirtió a Venezuela en un lugar atractivo para las inversiones. Mientras que en EEUU la Standard Oil de New Jersey (hoy Exxon), de John D. Rockefeller, enfrentada a una masa anárquica de propietarios privados de tierra, lograba la supremacía mediante el monopolio de la distribución del petróleo (el *downstream*), en Europa, la Royal Dutch Shell, de Henri Deterding, lideraba el control de los yacimientos extranjeros (el *upstream*).

En Venezuela, el general Gómez, enfrentado a una “economía caótica” (Sullivan 1976:249) después de derrocar al general Cipriano Castro en 1908, trató de restaurar el orden invitando al capital extranjero a invertir, con la garantía de tranquilidad laboral y condiciones flexibles para los negocios. Gómez sólo logró atraer inversiones de las compañías petroleras, pero les reciprocó manteniendo “la política petrolera más liberal de la América Latina” (Sullivan 1976:258). La Shell de Deterding, y después la Standard Oil de Rockefeller, así como otras firmas, hicieron grandes inversiones en Venezuela. Gómez, apuntalado por este apoyo, mantuvo su promesa: preservó las condiciones poco restrictivas y garantizó la “paz social” durante los 27 años de su despiadado gobierno. Hacia fines de los 30, la Standard Oil y la Shell ya controlaban 85% de la extracción de petróleo en Venezuela (50% y 35% respectivamente).

Mientras las compañías se dedicaban al negocio de la extracción de petróleo en Venezuela, el Estado

adquiría un nuevo papel de terrateniente nacional. Este rol conllevaba su expansión mediante un sistema cada vez más complejo de instituciones y reglamentaciones -códigos de minería, legislación tributaria, instituciones burocráticas, agencias gubernamentales e ideologías de gobierno- destinado a regular la explotación del petróleo y a retener en Venezuela una parte de las ganancias que obtenían las compañías. En esta novedosa capacidad, el Estado también asumió una nueva relación con la sociedad como administrador de los ingresos provenientes de la fuente de riqueza fundamental de la nación. Al comenzar a afectar a la sociedad de maneras sin precedentes, el Estado petrolero se convirtió en el referente central de acrecidos debates públicos sobre el papel del Estado en una nación petrolera.

El sistema estatal

A inicios del siglo XX el Estado era tan débil y precario como institución nacional que su estabilidad y legitimidad estaban constantemente en riesgo. Carente de ejército nacional y de una burocracia eficiente, en un país endeudado que no contaba con una red nacional de caminos ni con un sistema eficiente de comunicaciones, el Estado aparecía como un proyecto no cumplido cuya forma institucional seguía limitada a bolsones de poder, y que ejercía parcial dominio sobre el territorio de la nación y escasa influencia sobre los ciudadanos.

Bajo la férula de Gómez el Estado sufrió una metamorfosis. En tanto representante de la nación en las negociaciones con la industria petrolera foránea, el Estado se vinculó íntimamente a su presencia en el territorio nacional y se benefició de múltiples maneras de su asociación con ella. Además de apoyo político y legitimidad, la industria petrolera comenzó a proveer una proporción creciente de los ingresos públicos, primero mediante los derechos de importación y la venta de concesiones, y en la década de 1920 mediante los impuestos a las exportaciones petrolíferas. Continuando lo que Veliz (1980) ha denominado la tradición “centralista” latinoamericana, pero apuntalado por la industria petrolera, el Estado puso en práctica una serie de reformas administrativas, algunas de las cuales habían sido iniciadas por los presidentes Guzmán Blanco a fines del siglo XIX y Cipriano Castro a principios del XX, que le permitieron aumentar sus ingresos fiscales (Quintero 1985; Vallenilla 1986), crear un ejército nacional (Ziems 1979), fomentar la integración del territorio mediante un sistema de caminos (Arcila Farías 1974; Martín Frechilla 1994), y ejecutar decisiones que afectaban a la comunidad nacional. Como muchos caudillos decimonónicos de Venezuela, Gómez se impuso como

jefe de Estado por sus habilidades militares y políticas; pero al convertirse en gobernante de una nación petrolera estabilizó su gobierno y consolidó su poder¹¹.

La influencia de la industria del petróleo no puede reducirse a la contribución al Estado por concepto de exportaciones. Los historiadores concuerdan en que Gómez les ofreció condiciones favorables a las compañías petroleras a partir de 1908, y en que estas le retribuyeron proporcionándole un esencial apoyo político y económico. Es claro que durante la segunda década del siglo las exportaciones agrícolas siguieron siendo la fuente principal de divisas. La reorganización del Ministerio de Hacienda llevada a cabo por Cárdenas amplió y organizó la base impositiva del Estado e incrementó sus ingresos (Quintero 1985). Si bien esta reforma, unida a la ampliación del ejército (Ziems 1979) continuaba una vieja tradición de centralismo estatal, no es posible aislarla de la poderosa presencia de la industria petrolera en Venezuela y del creciente apoyo político y económico que le proporcionaba al Estado. Salazar Carrillo apunta que las estadísticas que dan cuenta del impacto del petróleo durante este periodo deben incluir también los pagos por concesiones, los impuestos indirectos y los derechos de importación, todos difíciles de determinar a partir de los datos disponibles. Según este autor, una dificultad adicional consiste en que en esa época no podía separarse con facilidad el Estado de la persona de Gómez. “No era fácil distinguir en esos años al Estado venezolano del clan de Juan Vicente Gómez, que dominaba la economía... La compensación por el uso de concesiones iba a parar a manos de los favoritos de Gómez, y probablemente a las suyas propias a través de ellos” (1994: 39-40). Baptista también ha señalado las limitaciones de la información estadística del periodo, incluida la carencia de datos sobre los beneficios de las compañías antes de 1936 (1991:105). Resulta aún más difícil medir hasta qué punto las compañías petroleras protegían a Gómez de sus enemigos, con lo que se convertían en puntos de apoyo fundamentales del presidente.

Durante el periodo, la fuente de los ingresos estatales cambió: si antes estaba en los recursos provenientes de derechos sobre las importaciones y de la imposición tributaria a los productos agrícolas cultivados por productores privados, pasó a estar en las rentas producidas por la venta de recursos naturales pertenecientes a la nación. Hasta 1925 el café siguió siendo el producto de

¹¹ Los efectos de la industria petrolera en la sociedad son múltiples, pero no claramente discernibles. Para un intento de cuantificar la “contribución” económica y los “efectos” de la industria del petróleo en Venezuela, que incluye el periodo, v. Salazar Carrillo (1994:33-103). Pacheco apunta correctamente que las exportaciones de petróleo solo proporcionaron significativos ingresos al Estado en la década de 1920, pero después sostiene que no se puede considerar que la industria petrolera fuera la fuente del poder de Gómez, al menos en la primera fase de su régimen. Subraya la importancia de la consolidación del ejército por parte de Gómez y de la reorganización de las finanzas públicas a cargo del ministro Román Cárdenas en la década de 1910, aspectos a los cuales considera parte del proceso de unificación nacional comenzado por Cipriano Castro (1984).

exportación fundamental y un sector básico de la economía venezolana. Pero mientras durante este periodo se incrementó la producción de café en Colombia y Brasil, con lo que se reafirmó la importancia de ese producto en sus economías y se fortalecieron las clases sociales asociadas a! mismo, en Venezuela permaneció estacionaria, en parte debido a que le circulación de las rentas petroleras empezó a desplazar el centro de las actividades de obtención de ganancias de la producción agrícola en el campo hacia el comercio y el desarrollo del sector inmobiliario en los centros urbanos (Ascanio 1985; De la Plaza 1970; v. tb. Rodríguez 1983; Roseberry 1983). Las regulaciones de la actividad minera reflejaron las cambiantes percepciones internas acerca de la industria petrolera. A su vez, al incrementar el control interno sobre la industria y el nivel de participación en sus ganancias, estas regulaciones consolidaron la centralidad de la misma.

“Nuestra riqueza nacional” y las políticas petroleras de Gómez

La compleja historia de las regulaciones de la industria del petróleo ha sido narrada en detalle desde diferentes perspectivas¹². No pretendo volver a contar esa historia, sino explorar las cambiantes representaciones del Estado que dichas regulaciones expresaban y ayudaban a construir.

Sibien Gómez nunca dejó de ofrecer a la industria petrolera condiciones flexibles, con el paso del tiempo trató de incrementar los ingresos del Estado provenientes de la actividad. Al principio no planteó casi ninguna demanda al capital extranjero. La Ley de Minería de 1910 solo obligaba a las compañías a pagar un pequeño impuesto que no se diferenciaba de los gravámenes de otras actividades económicas. Se trataba de un impuesto mínimo -2 bolívares por tonelada de petróleo y 1 bolívar por hectárea de tierra- que se debía pagar por contrato durante el disfrute de la concesión.

Estas condiciones extremadamente liberales reflejaban en parte la incertidumbre inicial acerca de la posibilidad de desarrollar la industria del petróleo en Venezuela. Al principio surgió un sistema por el cual las elites locales mediaban entre el Gobierno y las compañías. El Gobierno hacía concesiones de tierra a la elite local y esta, a su vez, las vendía a las compañías petroleras, con lo que obtenía grandes ganancias. En efecto, “la historia temprana de la industria del petróleo en Venezuela muestra la dificultad que encontraron las concesionarias del petróleo para atraer el capital extranjero. Solo después de un tiempo y un esfuerzo considerables pudieron transferir sus concesiones petroleras a

¹² Betancourt (1979), Lieuwen (1961), Malavé Mata (1987), Martínez (1966; 1973; 1980), McBeth (1983), Mejía Alarcón (1972), Mommer (1983; 1986), Pérez Alfonzo (1971), Salazar Carrillo (1994), Tugwell (1975), Vallenilla (1973).

las compañías extranjeras” (McBeth 1983:13). Esta situación comenzó a cambiar en 1913, cuando la Shell hizo su entrada en Venezuela con la compra de dos grandes concesiones otorgadas previamente a dos miembros de la camarilla de Gómez (las concesiones de Valladares y Vigas), transacción que Deterding, de la Shell, llamó “nuestro negocio más colosal” (McBeth 1983:12). La presencia en Venezuela de la Shell “con sus amplios recursos, no solo fue bienvenida por las concesionarias petroleras, sino también por el gobierno de Gómez, que desde el golpe de Estado de diciembre de 1908 había tratado de alentar el desarrollo de las industrias minera y petrolera” (McBeth 1983:13).

Al aumentar la conciencia sobre la magnitud de las reservas petroleras, crecieron también los esfuerzos locales por participar en las ganancias de la industria. Ello dio como resultado regulaciones más estrictas, así como la centralización en la rama ejecutiva del poder de la toma de decisiones sobre la industria petrolera. En 1923 Gómez creó la Compañía Venezolana de Petróleo S.A. (CVP), con monopolio sobre todas las concesiones, cuya venta, así como la de las reservas nacionales de petróleo, se encargaría de negociar con las compañías petroleras. La fuente fundamental de ganancias petroleras de los venezolanos durante este periodo fue la venta de concesiones; a partir de 1908, por tanto, las regulaciones petroleras se habían concentrado en este aspecto. La fundación de la CVP consolidó un desplazamiento del poder de los propietarios de tierra, quienes como beneficiarios de concesiones habían funcionado como mediadores entre el Estado y las compañías petroleras, hacia el Estado, personificado en Gómez, que prácticamente monopolizó el negocio para su propio beneficio y el de su séquito de familiares y aliados.



Placa conmemorativa del inicio de la producción de petróleo en Venezuela.

Sólo el logo indica que fue colocada por la Shell Oil Co.

No obstante, el cambio más significativo se produjo entre 1917 y 1922, cuando el ministro de Fomento, Gumersindo Torres, promulgó regulaciones dirigidas a incrementar la participación estatal en las ganancias de la industria. En 1920 redactó la primera ley sobre el petróleo, que establecía una distinción legal entre la extracción de petróleo y otras actividades mineras. Torres no era un experto en el tema, sino un médico de fuertes convicciones nacionalistas. Su labor regulatoria se concentró en el carácter extractivo de la industria del petróleo. Después de estudiar la legislación sobre el petróleo de México y de EEUU, llegó a la conclusión de que Venezuela tenía derecho a recibir una parte significativa de las ganancias. Sostenía que esta no era una industria igual a ninguna otra, porque se extraían y vendían en el extranjero recursos naturales que eran propiedad de la nación. Por tanto, los impuestos a la industria del petróleo no se debían considerar impuestos ordinarios, sino los medios mediante los cuales el Estado ejercía su derecho a participar en las ganancias de la industria¹³. En efecto, inspirado en los derechos que confería la legislación petrolera estadounidense a los propietarios de tierra, reclamaba la potestad de la nación, en tanto propietaria de la tierra, de exigir una renta por el uso del subsuelo. Resulta irónico que por mediación de Torres, “la renta del suelo, tal como se había desarrollado en las condiciones de la propiedad privada en EEUU, llegó a convertirse

¹³ A pesar de la oposición de Betancourt al régimen de Gómez, alabó a Torres por su firme nacionalismo y por oponerse a los que vendían a Venezuela (1975:17).

en un criterio para la propiedad nacional venezolana” (Mommer 1983: 27).

La nueva legislación petrolera, al tiempo que reflejaba una transformación en la concepción de la nación, fue un factor decisivo en este cambio. El discurso económico comenzó a desplazar su centro de la producción agrícola privada a la captura pública de la renta minera. Para Torres, el petróleo, considerado como un “artículo” que desempeñaba un papel importante en la “industria universal”, formaba parte de la “riqueza nacional”. El Estado, en tanto representante de la nación, era responsable ante la actual y las futuras generaciones de venezolanos de salvaguardar esta “fuente segura de riqueza” (1917: xviii). En 1917 justificó la política de cesar el otorgamiento de concesiones petroleras con el argumento de la responsabilidad estatal de proteger la riqueza de la nación para el bienestar de las futuras generaciones. Las nuevas regulaciones se redactarían luego que el ministerio hubiera “estudiado a fondo tan interesante cuestión a fin de que las determinaciones futuras, sean el resultado de la completa posesión de cuantos conocimientos sean requeridos para juzgar con acierto y no dar lugar a que las generaciones por venir tengan el derecho de hacernos cargos porque no supimos cuidar nuestra riqueza nacional” (1917: XVIII). La idea de que el petróleo constituía “nuestra riqueza nacional”, y de que el papel del Estado era “salvaguardarla” eternamente para la nación fue la base de un discurso político de identidad nacional que surgía en la época.

El gobierno de Gómez se vio tironeado por demandas contrapuestas una vez que empezó a depender de los ingresos provenientes del petróleo.

De un lado, trataba de incrementar sus entradas, y para ello requería del desarrollo de su capacidad regulatoria y de un discurso nacionalista legitimador. Pero se trataba de un gobierno personalista cuya base social era extremadamente reducida. No podía darse el lujo -y no lo hacía- de oponerse frontalmente a las compañías petroleras, y siempre siguió siendo muy dúctil ante sus presiones.

En parte como resultado de esta tensión, Torres fue expulsado del ministerio en 1922, pero fue repuesto en su cargo en 1929. Gómez no podía arreglárselas sin el respaldo de las compañías petroleras ni el apoyo de la pequeña elite urbana de profesionales y comerciantes que trataba de promover la modernización económica. Las leyes y regulaciones aprobadas durante el régimen de Gómez reflejan este conflicto entre los intereses particulares y la limitada capacidad de movilización del Estado personalista, y las nuevas demandas de desarrollo político y económico de sectores urbanos cuyo crecimiento dependía de maximizar la distribución de la renta del petróleo.

La ley de 1920, que regulaba las concesiones petroleras hasta 1934, establecía unos *royalties* promedio de solo 9%. Además, Gómez les concedió a las compañías exenciones de impuestos sobre

las importaciones. Fue así que durante el periodo de 1923 a 1930 el pago de royalties de las petroleras fue menor que el valor de las exenciones por importación de bienes concedidas por el Gobierno. Como dijera Gumersindo Torres: “las compañías se llevan el petróleo y el Gobierno les paga para que se lo lleven” (Vallenilla 1973: 89; tb. Betancourt 1975: 23).

El trato liberal que les dispensaba Gómez a las compañías también era consecuencia de la relación mercantil que existía entre la elite dominante y la industria del petróleo. Para esta elite, el comercio de las concesiones era la principal fuente de ganancias que obtenía de la industria del petróleo. Según un observador, durante el régimen de Gómez la política de concesiones se caracterizó por su corrupción sin paralelos. Más de 100 compañías adquirieron miles de concesiones mediante un sistema de intermediarios. Gómez les otorgaba derechos sobre tierras a sus favoritos, probablemente por una “consideración”, y esos favoritos los vendían después a las compañías, con lo que obtenían ganancias exorbitantes (Karlsson 1975: 73).

Estas regulaciones benignas reflejan hasta qué punto dependía Gómez del apoyo político de las compañías petroleras. Respaldado por estas firmas poderosas, utilizó el Estado como un gobierno privado. Gómez se convirtió en el mayor propietario de tierras de Venezuela y en uno de los hombres más ricos del continente. “Asumió el control exclusivo de las industrias del jabón, papel, algodón, leche, mantequilla, y fósforos; se convirtió en el único proveedor autorizado de carne para Puerto Cabello y otros mercados urbanos, y era el accionista mayoritario de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación” (Sullivan 1976: 266).

Privatización y centralización del Estado terrateniente

Como consecuencia de este sistema privado de comercio, se desarrolló una íntima correlación entre crecimiento de la industria petrolera y fortuna personal de Gómez. Un historiador apunta “una ventaja” de ello: “Ahora el desarrollo y la inspección de las industrias petrolera y minera estarían directamente vinculados a la ganancia personal de la familia de Gómez, lo cual garantizaba que la dirección del país estaba informada al detalle del progreso y los problemas de la industria” (McBeth 1983:17). No obstante, para la mayoría de los venezolanos esta ventaja no se traducía en un beneficio, sino que aumentaba su sentimiento de que la riqueza nacional estaba siendo monopolizada por una pequeña camarilla. Como reconoce este mismo historiador: “el aumento de la conciencia acerca del potencial petrolero del país tuvo el pernicioso efecto de incrementar la corrupción y la

intriga en el seno de la familia y el séquito de Gómez, y las consecuencias de ello se hicieron sentir hasta 1935” (1983:17).

Con la expansión de la producción petrolera, el centro de gravedad de la economía se desplazó de la tierra cultivada hacia el subsuelo, que estaba dado naturalmente; y de los productores agrícolas privados hacia el Estado como propietario de tierras. A la renta del suelo agrícola, que se distribuía mediante la competencia económica entre los productores regionales de café y cacao, la sustituyó ahora la renta del suelo minera, monopolizada y distribuida a discreción por el Estado central. Con este cambio, el poder político, antes fragmentado entre caudillos regionales contendientes, se centralizó. Respaldo por el poder de la riqueza petrolera, Gómez consolidó su poder y definió los cargos clave, distribuyó recompensas y castigos, y llegó a ejercer un control personal sobre todas las ramas de su gobierno.

La expansión de la industria del petróleo en una sociedad cuyo Estado tenía capacidades institucionales muy limitadas promovió la concentración de los poderes en la figura del presidente. El encuentro entre las compañías petroleras foráneas y un caudillo regional sirvió para reunir a las empresas más dinámicas del mundo capitalista y la forma más característica de gobierno del siglo XIX latinoamericano. Como en muchos otros ejemplos de la historia de la América Latina, el resultado paradójico del maridaje de la región con la modernidad fue el reforzamiento de prácticas e instituciones consideradas tradicionales, pero que eran en realidad el producto transcultural de intercambios previos entre culturas europeas y americanas¹⁴.

Mientras más se expandía el Estado desde el punto de vista institucional y más control ejercía sobre el cuerpo político, más parecía Gómez ser la fuente de su crecimiento y la encarnación de su poder. Si en el escenario público de la política desempeñaba el papel de caudillo decimonónico, lo cierto era que esa escena estaba sostenida por la industria del petróleo. En un momento cuando la presencia del petróleo empezaba imperceptiblemente a permear el cuerpo político, el Estado, personificado en Gómez, amplió su papel de mediador entre los terrenos nacional e internacional y entre los órdenes social y natural¹⁵. A través de los efectos de esta doble mediación, los poderes de numerosos actores

¹⁴ El concepto de “transculturación” de Ortiz (1995) subraya la dimensión “construida” (Poole 1994:126) de las tradiciones “inventadas” (Hobsbawm y Ranger 1983). Manuel Moreno Fraguas presenta en *El ingenio* (1976), su extraordinaria interpretación histórica de la industria azucarera cubana, una dramática ilustración de la complicidad entre “modernidad” y “tradicción”. Allí muestra cómo la introducción de tecnologías tan modernas como la máquina de vapor en los ingenios azucareros intensificó el trabajo de los esclavos en los cañaverales. Es obvio que si bien en el siglo XIX el trabajo esclavo se había llegado a ver como un aspecto tradicional de la cultura cubana, su desarrollo en el Caribe durante los siglos anteriores se interpretaba como un aspecto de la misión civilizadora de Europa.

¹⁵ Gómez empleó bien la tecnología y los recursos modernos. Por ejemplo, utilizó el sistema telegráfico ampliado como un recurso de inteligencia con el fin de vigilar a sus adversarios mediante una vasta red de informantes bien ubicados. Su habilidad para desarticular los planes de sus enemigos aumentó el aura de misterio construida en torno de su personalidad pública y acentuó su imagen de caudillo poderoso. Por supuesto, el dinero

e instituciones sociales se condensaron en la figura de Gómez. Su imagen, y la del Estado que representaba, se elevaron por encima de la sociedad como agencia trascendental, y su apariencia sacralizada se proyectó como la fuente original de esos poderes y como la expresión singular de la voluntad nacional.

En la medida en que el Estado ganaba nuevas capacidades, su forma y funciones se hicieron relevantes como nunca antes: cómo estaba organizado, qué acceso tenían (algunos) a él, qué decisiones se tomaban y a quiénes beneficiaban. El creciente reconocimiento público de la importancia de la riqueza petrolera como patrimonio colectivo hizo que la atención se centrara en el Estado en tanto agente responsable de regular la industria y distribuir los ingresos. Los venezolanos, tanto los ubicados fuera como los situados dentro de las estructuras institucionales del aparato estatal, aprendieron a adoptar la perspectiva del Estado al dirigirse a la nación, a reconocerse como ciudadanos de una nación petrolera y a asumir el punto de vista totalizador adscrito normativamente al Estado como representante de la nación. Esta perspectiva unificadora facilitaba la construcción del Estado como representante único de un pueblo unificado.

Una vez transfigurado el Estado en terrateniente nacional, las luchas políticas comenzaron a centrarse en torno de su papel como representante de una nación petrolera. Desde la década de 1930 el petróleo se convirtió en el punto de referencia obligatorio de los artículos, programas políticos y libros escritos por políticos venezolanos. En la medida en que nuevos sectores sociales trataban de cambiar el Estado, y no solo de reemplazar a sus dirigentes, las luchas políticas se convirtieron más bien en luchas en torno de la política, que vinculaban las pugnas contra el Gobierno con visiones contrapuestas sobre el Gobierno. El petróleo estaba en el centro de esas visiones. El negocio del petróleo se transformó en un negocio del Estado, y la política petrolera se convirtió en el negocio de la política.

Del liberalismo clásico al liberalismo rentista

Como señalara antes, la duración sin precedentes de la dictadura gomecista estuvo condicionada por el apoyo político y los recursos económicos brindados por la industria petrolera internacional. Desde

proveniente del petróleo era uno de sus más efectivos recursos modernos. Según Rourke, para Gómez el dinero era "la llave dorada". "Para él, el dinero era lo más grande del mundo, lo único por lo que valía la pena esforzarse. Pensaba que todos creían lo mismo. Estaba convencido de que en la conducta de sus enemigos no había ningún motivo verdaderamente honesto. Sólo trataban de derrocarlo para apropiarse del dinero, que él disfrutaba" ([1936] 1969:192).

1908 hasta 1935, Gómez logró someter a los caudillos locales y concentrar el poder en el Ejecutivo. Creó un ejército nacional, construyó un sistema de caminos que dio inicio a la integración económica del país, desarrolló una burocracia estatal eficiente y puso al frente a sus seguidores, transformó a rivales en aliados al concederles estatus sin poder y se libró de sus enemigos mediante el exilio, la prisión o la muerte. El resultado fue que su régimen consiguió la unificación política y administrativa de la nación y su primera estabilidad política sostenida desde la independencia en 1821.

La lucha política crónica y la constante perturbación de las actividades económicas durante el siglo XIX habían desembocado en regímenes políticos inestables. La erosión de la base económica de la oligarquía terrateniente causada por la guerra y el conflicto civil convirtieron a los militares en la fuente fundamental de poder social y político. “Las guerras del siglo XIX diezmaron a la aristocracia terrateniente: la propiedad y la posición dependían en buena medida del poder político, y no al revés” (Levine 1973: 65). La expansión de la industria del petróleo en la década de 1920 aumentó de modo radical el poder del Estado, al tiempo que intensificaba su naturaleza personal. En el contexto de una sociedad pobre y agraria, desgarrada durante largo tiempo por la guerra civil, este aumento reforzó la tendencia imperante a considerar la política como propiedad del gobernante. Gómez manejó el Estado como un gobierno privado. En 1929 da un discurso histórico ante el Congreso (el único que ha sido transcrito), donde dice que manejar el país es como manejar una hacienda; se describe a sí mismo como un “buen hacendado” porque sabe controlar a sus capataces y porque sus ojos están abiertos. Lo que importaba era tener un buen administrador; dice a los congresantes: “Si a ustedes les parece, yo les doy un candidato, que tendría yo que escogerlo, buscarlo, para que ese candidato tenga que marchar de acuerdo conmigo. Si ustedes me autorizan les buscaré uno”. (Velásquez 1984: 16).

El discurso oficial del poder seguía siendo nominalmente liberal, a pesar de las flagrantes contradicciones con su práctica. Si bien detentaba el poder absoluto, Gómez se preocupó por mantener una apariencia de legalidad. Testaferros de la elite social ocuparon la presidencia, y el Congreso aprobaba formalmente la legislación de Gómez. Desde las luchas por la independencia, el liberalismo había sido el lenguaje público de la elite política venezolana; este lenguaje parecía inviolable. No solo se asociaba con los orígenes de la nación, sino también con el proyecto de Bolívar de republicanismo y emancipación social encabezado por las elites criollas. Por tanto, se había convertido en un componente esencial de la legitimación del dominio criollo desde la Independencia. Los partidos Conservador y Liberal, fundamentales del siglo XIX, compartían el discurso formal del

liberalismo, así como la indiferencia respecto a la efectiva organización de un Estado liberal. En ese siglo desgarrado por la guerra, signado por cambiantes alianzas en el seno de la elite y una sucesión de gobernantes militares, los liberales eran conservadores como también los conservadores.

En tanto se entendía que los principios liberales estaban fundamentalmente desvinculados de las prácticas reales de la elite, ésta podía afirmar que los representaba sin costo político visible. Un ejemplo de ello fue la Constitución Nacional de 1864, redactada durante el gobierno de Guzmán Blanco. Formalmente era un proyecto ideal para la transformación de Venezuela en un Estado liberal y democrático (Carrera Damas 1980:137-138), y concedía el derecho al voto directo y secreto a los varones mayores de 21 años para elegir legisladores locales y nacionales; además, establecía la separación de poderes. A contrapelo de los postulados democráticos de la Constitución, Guzmán Blanco ejerció un poder autocrático. La distancia entre el discurso y la práctica políticos llegó a límites sin precedentes bajo el gobierno de Gómez, quien eliminó los partidos políticos y el derecho de asociación, pero “no se le ocurrió jamás mantenerse en la presidencia sin montar una apariencia de elecciones, de alternabilidad, etc.” (Carrera Damas 1980: 139).

El régimen de Gómez llegó a su fin con su muerte, no como consecuencia de su derrota. Aunque en estas circunstancias habría sido comprensible la continuidad, ya que no se había producido un realineamiento fundamental de las fuerzas sociales, resulta sorprendente hasta qué punto el gomecismo era colectivamente repudiado. Incluso quienes habían trabajado con Gómez, como su ministro de Guerra y sucesor, el general Eleazar López Contreras, se sintieron obligados a distanciarse del gomecismo, porque se lo veía como la negación de los ideales liberales que proclamara defender.

¿Cómo fue posible que a pesar de la vieja tradición de disparidad entre el discurso liberal y las prácticas autocráticas, el gomecismo se convirtiera en ese momento en sinónimo de autocracia y corrupción? Hasta donde conozco, la historiografía venezolana no se ha planteado esta pregunta, porque su respuesta parece evidente: la fachada era demasiado transparente; no podía ocultar el carácter en extremo autocrático del régimen de Gómez. Si bien ello es verdad, hay que decir que la fachada también era transparente por otra causa: en la medida en que Gómez concentraba el poder, la brecha entre apariencia y realidad se amplió tanto que se convirtió en otro tipo de brecha. En ella, nuevos sectores sociales encontraron espacio no solo para condenar la usual disparidad entre los principios liberales y las prácticas reales, sino también para afirmar los principios liberales desde una nueva perspectiva.

En la oposición a Gómez, los ideales del liberalismo echaron raíces por primera vez en un terreno

social fértil donde adquirieron nueva significación. El liberalismo dejó de ser una idea política abstracta cuyo contenido sustantivo se limitaba a los intereses económicos de una oligarquía orientada a la exportación que veía en el comercio libre una fuente de ventajas económicas, y llegó a alimentar y vincular los intereses y las convicciones de grupos sociales cada vez más amplios. El desarrollo de la industria del petróleo durante el régimen de Gómez transformó la relación entre sectores dominantes y subalternos. La oligarquía agraria tradicional y la burguesía comerciante, que antes habían compartido el interés en la agricultura para la exportación, se orientaron ahora hacia las actividades en el comercio urbano y en el mercado inmobiliario, sobre la base de los ingresos provenientes del petróleo, y tuvieron que enfrentar el reto de los nuevos intereses comerciales y manufactureros en ascenso, que se habían introducido en el espacio económico abierto por la expansión de la industria petrolera.

El valor internacional del bolívar reflejó el peso financiero del petróleo en la economía, así como el predominio de los intereses comerciales por sobre los agrícolas e industriales. Un bolívar fuerte, cuyo valor no estaba relacionado con la productividad del trabajo interno, hizo que aumentara el precio de las exportaciones agrícolas y eliminó su competitividad en el mercado mundial, al tiempo que disminuyó el costo de los bienes importados, con lo que se redujo la producción local y se promovieron las importaciones. La circulación interna de los ingresos provenientes del petróleo creó un mercado local de consumidores sin una contrapartida de productores. Las importaciones se convirtieron en un eslabón vital en el circuito de “realización de la renta del petróleo” (Hausman 1981); o sea, al multiplicar los bienes disponibles para la compra, hicieron posible la transformación del dinero proveniente del petróleo en cosas. La concentración de los recursos financieros en los centros urbanos condujo a un rápido proceso de urbanización que dio origen a una incipiente industria de la construcción vinculada a la expansión del desarrollo inmobiliario urbano. La transformación de tierras agrícolas en bienes raíces urbanos se convirtió en una vía directa a la riqueza y en la base para la formación de importantes grupos económicos, esto es, de conglomerados diversificados cuyo centro era una o unas pocas familias vinculadas por lazos de parentesco, de negocios y de amistad. A diferencia de lo que ocurrió en muchos países, este proceso no opuso a una burguesía emergente y a una clase terrateniente tradicional. Los terratenientes se adaptaron con rapidez a las nuevas condiciones y desplazaron sus inversiones a nuevas actividades.

Un rápido proceso de urbanización empezó a denotar la creciente importancia de los sectores urbanos y la disminución de la significación del campesinado. Sectores medios emergentes

comenzaron a reclamar su espacio propio en el sistema político nacional apelando al pueblo como sujeto colectivo y marginado por los regímenes oligárquicos. El sufragio universal se convirtió en emblema del cumplimiento del liberalismo. Por tanto, los ideales expresados y los intereses propuestos por el discurso liberal ya no eran los mismos. La notable continuidad histórica del “proyecto nacional” liberal, apuntada por Carrera Damas (1980), esconde una discontinuidad menos visible, pero no menos notable, en la manera de interpretar dicho proyecto.

La discontinuidad no ha sido menos visible porque sea menos real, sino porque, desde el inicio, la nueva realidad pareció tan natural que su génesis histórica y los intereses económicos que sustentaba se dieron por sentados. Si se pudiera apreciar este proceso desde una altura se podría ver este cambio como el surgimiento del concepto de Venezuela como nación petrolera. Durante el gobierno de Gómez llegó a entenderse que la entidad llamada Venezuela no solo estaba constituida por su pueblo, sino también por su principal fuente de riqueza; no solo por su cuerpo social, sino también por su cuerpo natural. Aunque la tierra y sus productos se celebraban en la poesía y en las artes visuales, la música y las canciones populares, la agricultura no le proporcionaba a Venezuela una fuente común de identificación nacional. Por el contrario, a medida que se expandía la industria del petróleo y cambiaba la sociedad venezolana, tuvo lugar un desplazamiento perceptible. No solo se incluyó el petróleo en la concepción de lo que era Venezuela como nación, sino que llegó a identificar a Venezuela como nación petrolera. La oposición al gomecismo no solo reflejó un rechazo a la brecha ya familiar entre ideales y práctica, sino una revalorización de los principios liberales que reflejaba, a su vez, un cambio significativo en la estructura económica y las relaciones sociales venezolanas.

Curiosamente, la nueva base social del liberalismo se arraigó en la naturaleza: en el interés colectivo en el subsuelo de la nación, que era de propiedad común, y no en los intereses atomizados de individuos. No fue el trabajo individual, sino la propiedad común de la tierra el nuevo cimiento ideológico y material del liberalismo. Se interpretó al ciudadano como miembro de un cuerpo social corporativo, no solo como agente autónomo de un mercado atomizado o como portador aislado de derechos formales. Como antes, la realización del proyecto nacional liberal requería la democratización de la vida política. Pero ahora los portadores sociales de los ideales democráticos concebían la democracia como la extensión de la participación social, no solo en la política nacional, sino también en la riqueza de la nación. El discurso democrático presentaba las esferas política y

económica como dos caras de la misma moneda petrolera¹⁶.

En un inesperado giro histórico, este nuevo liberalismo tenía una profunda afinidad con las ideas liberales originales de Bolívar, modeladas, como ha mostrado Luis Castro Leiva, a partir de los ideales republicanos de Rousseau (1985), por lo que encontró su inspiración en las repúblicas del mundo antiguo y no en las sociedades de mercado contractuales de Locke, Smith o Ricardo. En aquellas sociedades de la antigüedad, como apunta Pagden, la libertad no significaba “la libertad de sus miembros para perseguir sin obstáculos sus fines personales, sino, como dijera Constant, “compartir el poder social entre todos los ciudadanos de la misma patria” (1982:142). En su famoso discurso de Angostura, en 1819, en el cual expresa su visión de la Venezuela republicana, Bolívar destacó el ideal de una sociedad en la cual “los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad”. Paradójicamente, un interés común en el subsuelo de la nación, que era la expresión histórica de la implantación en Venezuela de las empresas multinacionales más dinámicas del siglo XX, se desarrollaba a partir de una corriente subterránea de liberalismo republicano que miraba a la antigüedad en busca de su imagen de un futuro moderno. Como si el espectro de Bolívar sobrevolara Venezuela, este liberalismo rentista fundió los ideales liberales originales de los fundadores de la patria, que tenía sus raíces en una concepción comunitaria de la república, con los ideales liberales transfigurados de actores sociales que imaginaban la Venezuela moderna como una comunidad de ciudadanos unidos por el vínculo común con el cuerpo natural de su patria. En Venezuela, “compartir el poder social” comenzaba a significar compartir entre los ciudadanos de la misma tierra los derechos políticos y la riqueza petrolera.

La centralización del poder durante el gobierno de Gómez, al restringir la base social del régimen y aumentar su dependencia con respecto a las compañías petroleras, limitó no solo el círculo de beneficiarios de las rentas del petróleo a los miembros de su pequeña camarilla, sino también el total de esas rentas. Mediante la presión desde abajo, la democratización del Estado prometía aumentar los ingresos del Estado, ampliar el número de sus beneficiarios y, lo que es más significativo, transformar una riqueza efímera en una capacidad productiva permanente y convertir a Venezuela en una nación moderna. Al interpretar al Estado democrático como el agente de la nación, la oposición le asignaba a ese Estado la tarea histórica de unir y desarrollar la nación fracturada arrebatando el control sobre los recursos del subsuelo de manos extranjeras y empleándolos en nombre de la

¹⁶ En un lúcido análisis de la relación entre la economía y el Estado, Keith Hart (1989) ha mostrado su funcionamiento como las dos caras de una misma moneda, cuyas propiedades específicas tienen que construirse históricamente.

colectividad como sujeto unido.

Si la visión liberal clásica asociada con la expansión de un mercado atomizado supone que los fines nacionales dependen de que cada individuo persiga sus propios intereses, en el caso del liberalismo rentista de Venezuela, cuya base era la expansión de las rentas petroleras del Estado, los intereses de cada persona dependían de la realización de los fines de la nación. Un régimen autocrático había servido de vínculo entre el petróleo y la política. El nuevo proyecto liberal prometía romper ese vínculo y sustituirlo por otro: la democracia.

La voz de la democracia

Este análisis puede permitirnos escuchar las voces que empezaron a hacerse oír después de la muerte de Gómez (su “último milagro”). Venezuela surgía de esas voces como nación petrolera¹⁷.

En *El otoño del patriarca*, Gabriel García Márquez recreó la imagen de un gobernante con un ilimitado poder político, al que se cree “invencible e inmortal”. El Patriarca -una síntesis de los dictadores latinoamericanos, entre los cuales Gómez fue una figura prominente- regresa tras su supuesta muerte, camina entre los vivos y escucha sus voces para destruir a los que habían conspirado en su contra:

[El Patriarca] vio a través del humo que allí estaban todos los que él había querido que estuvieran, los liberales que habían vendido la guerra federal, los conservadores que la habían comprado, los generales del mando supremo, tres de sus ministros, el arzobispo primado y el embajador Schontner, todos juntos en una sola trampa invocando la unión de todos contra el despotismo de siglos para repartirse entre todos el botín de su muerte, tan absortos en los abismos de la codicia que ninguno advirtió la aparición del presidente insepulto que dio un solo golpe con la palma de la mano en la mesa, y gritó, ¡ajá! y no tuvo que hacer nada más, pues cuando quitó la mano de la mesa ya había pasado la estampida de pánico (1977: 38).

Después de la muerte de Gómez se oyeron voces similares; las camarillas tradicionales intentaron “repartirse entre todos el botín”, “todos juntos en una sola trampa invocando la unión de todos

¹⁷ En esta sección me concentro en textos producidos durante el periodo liminar que siguió a la muerte de Gómez, porque revelan elocuentemente cómo se definía una nueva visión de la nación. Cada vez que ha sido posible, me he referido a la compilación de algunos de esos documentos editada por Suárez Figueroa, porque es fácil conseguirla en Venezuela. El Congreso Nacional de Venezuela ha publicado una colección en varios volúmenes de pensamiento político venezolano durante la época republicana, que incluye materiales del periodo que examino aquí. Estos útiles libros reúnen fuentes primarias y ensayos introductorios de estudiosos locales. Especialmente relevantes para los temas analizados en este capítulo son los volúmenes 14 y 15, “El debate político en 1936”.

contra el despotismo de siglos”. Pero durante el régimen de Gómez no solo la abrupta ampliación sino también la índole misma del “botín” habían intensificado la contradicción entre la naturaleza pública y la apropiación privada de la riqueza del Estado. Al monopolizar tanto el poder político como la riqueza de la nación, Gómez había invalidado la legitimidad de su propia voz: no podía tener continuidad ni formal ni reconocida; incluso sus seguidores tuvieron que distanciarse.

En efecto, sus sucesores, el general López Contreras (1936-1941), su ministro de Guerra, y el general Isaías Medina Angarita (1941-1945), ministro de Guerra de López Contreras, forzados por el clima público transformado y las presiones desde abajo, se distanciaron del gomecismo y dieron pasos cada vez mayores en dirección al establecimiento de un régimen democrático.

Si bien muchos recios caudillos e intelectuales destacados habían luchado contra la dictadura, fueron los estudiantes de Caracas quienes la erosionaron y redefinieron los términos del discurso público. Esos estudiantes, conocidos con el apelativo de Generación del 28 -año de la Semana del Estudiante, la más importante protesta pública contra Gómez-, se convirtieron, tras la muerte del dictador, en fundadores de los partidos políticos fundamentales y en las personalidades más prominentes de la política hasta la década de 1970¹⁸. Entre 1928 y 1935 enunciaron un nuevo discurso sobre Venezuela cuya importancia no puede subestimarse.

Según Maza Zavala, “La controversia que se gestó y desarrolló en el exilio entre 1930 y 1935, sobre la naturaleza, el alcance, la ruta, la estrategia y la táctica de la revolución venezolana es, sin duda, la más importante en la historia contemporánea de Venezuela” (1991: III). No hay dudas de que había divisiones en el seno de la izquierda (fundamentalmente en torno del papel de la lucha de clases en el contexto de la formación social distintiva de Venezuela), pero existía un consenso acerca de la necesidad de superar las estructuras feudales, liberar a Venezuela de las garras del imperialismo y democratizar el sistema político. En el juego de la política posterior a 1936 estos objetivos se llenaron de un significado más específico después de perder su filo radical. La misma centralidad del Estado y de sus inmensos recursos naturales hizo que la atención se dirigiera hacia la ampliación y control de esos recursos, con lo que se inhibieron las demandas de transformaciones sociales más radicales, no solo en la agricultura y la industria, sino en la propia industria petrolera. El objetivo principal era maximizar los ingresos provenientes del petróleo; la nacionalización de la industria siguió siendo un

¹⁸ Durante la Semana del Estudiante, los universitarios se aprovecharon de las celebraciones del carnaval para lanzar una crítica velada al régimen; para un análisis del simbolismo y la importancia política de esos acontecimientos, v. Skurski (1993).

sueño distante¹⁹.

Cuando Gómez murió y se produjo una apertura, la voz de esta joven generación logró reconocimiento público; para hacerse oír, otros tuvieron que hacerse eco de sus palabras, cuya presencia reprimida ya había perneado el discurso público. Rómulo Gallegos, maestro de muchos de estos estudiantes, había concluido en 1928 la primera versión de una novela tentativamente titulada *La coronela*. Inspirado en el ejemplo de aquellos, la transformó en *Doña Bárbara* (1929), texto que se convirtió en fundamento mítico de la democracia venezolana. Santos Luzardo, un joven abogado de Caracas, regresa a sus raíces en los llanos, donde derrota a las fuerzas del atraso, personificadas por Doña Bárbara (una alegoría de Gómez) y su aliado, Mister Danger (un agente de intereses extranjeros), y lleva consigo la promesa de la civilización mediante su unión sentimental con Marisela, la hija de la Doña, que es la encarnación del pueblo (Skurski 1993). Como ha mostrado Skurski, si bien fueron los estudiantes los que sirvieron de inspiración a la novela de Gallegos, esta sirvió para darle forma a su orientación en el terreno político, y les proporcionó, con el personaje de Santos Luzardo, un modelo que resultó muy emulado. Lo que decían estos estudiantes en 1936, más libres para expresarse en este momento de apertura histórica, marcó los términos del discurso político en Venezuela hasta muchos años después. Ya no hablaban como estudiantes, sino como líderes políticos con aspiraciones. Aunque su organización (Federación de Estudiantes Venezolanos, FEV) siguió siendo una asociación importante, estos líderes concentraron sus esfuerzos en organizar a amplios sectores de la población. Como con tanto acierto ha señalado Levine:

El aspecto más notable de los cambios políticos producidos tras la muerte de Gómez es precisamente el crecimiento de organizaciones con una amplia base social: sindicatos, ligas cívicas, partidos políticos, etc. Aunque estos grupos eran fundados y dirigidos usualmente por exiliados de la generación de 1928 que regresaban al país, en general las organizaciones tenían un alcance más general y su membresía no se limitaba a los estudiantes. Los estudiantes como grupos de poder por se pronto desaparecieron de la escena. Fueron los catalizadores de la organización partidaria, pero nunca volvieron a ejercer un poder autónomo. En 1936 el poder empezó a pasar a los que podían organizar a las masas (1973: 23).

El año que siguió a la muerte de Gómez estuvo marcado por importantes movilizaciones populares y

¹⁹ La división básica era la existente entre los marxistas (cuyas figuras más prominentes eran los hermanos Gustavo y Eduardo Machado, Salvador de la Plaza, Miguel Otero Silva y Juan Bautista Fuenmayor), y los socialdemócratas (liderados por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Valmore Rodríguez y Luis Troconis Guerrero). Los marxistas tendían a enfatizar el papel de la lucha de clases y, por tanto, a favorecer la reforma agraria; pero incluso ellos se mostraban cautelosos en lo concerniente al petróleo y ponían énfasis en la distribución y el uso de los recursos provenientes de él, no en la nacionalización de la industria petrolera en ese momento.

un activo debate político. Un rasgo notable de este periodo fue el surgimiento de un discurso hegemónico sobre la democracia, desarrollado en respuesta a la privatización del Estado realizada por Gómez. La democracia se identificaba con la armonía social. Mientras que los vinculados con el Partido Comunista no omitían el conflicto de clases, estaban de acuerdo en que la mayor oposición radicaba en las compañías petroleras foráneas y sus aliados nacionales, de un lado, y la población unificada del otro, la mayoría de los jóvenes líderes políticos prefería organizar movimientos y no partidos, ya que se asociaba a éstos con una historia de división y lucha intestina²⁰.

Encontraron poca oposición ideológica en la derecha o en el Estado. Como ha observado Velásquez, sólo el Partido Acción Nacional (Parnac) expresaba los puntos de vista de la derecha; pero sus acciones se limitaban a acusar de comunistas a miembros de organizaciones de izquierda; no representaba un reto ideológico. El presidente López Contreras se adaptó con gran flexibilidad y “mimetismo ideológico” (Hermoso 1991:152) a las presiones desde abajo. En su recuento día a día de los acontecimientos significativos del dramático año que siguió a la muerte de Gómez, Hermoso ha mostrado cómo la adaptabilidad recíproca de la izquierda y el Estado dio lugar a un consenso ideológico en el centro: “El hecho de que no se confrontaran posiciones extremas fortaleció al 'centro político'. Colocado en el centro y reforzado por su poder institucional, el Estado podía aparecer como una figura mediadora: “López devino en el árbitro imaginario de la supuesta confrontación entre dos fantasmas: el inexistente peligro comunista, y la “amenaza de un gomecismo en desbandada, políticamente liquidado, muerto” (1991:153). Pero la condición de posibilidad de esta convergencia mutua en el centro ideológico era la centralidad del Estado como administrador de la riqueza de la nación.

Manifiestos de la nación

La literatura política tras la muerte de Gómez expresó de modo elocuente la nueva visión tejida alrededor de este centro. Uno de los primeros manifiestos, que circuló en diciembre de 1935, inmediatamente después de su muerte, estaba firmado por un gran número de intelectuales, políticos, profesionales y hombres de negocios que proclamaban con gran cautela su compromiso con

²⁰ López Contreras obligó a los movimientos políticos a convertirse en partidos mediante la llamada Ley Lara, promulgada en 1936, a fin de aumentar el control estatal sobre la actividad política y dismantelar las organizaciones comunistas. Para un análisis de los cambios del discurso político en este periodo, v. Velásquez (1983); para una descripción sucinta del crecimiento de las organizaciones con base en la sociedad civil entre 1900 y 1945, v. López-Maya (1984).

la construcción de una Venezuela diferente. “Tenemos el convencimiento de una nueva realidad venezolana, en la cual se animen y estimulen potenciadas por renovados alientos las diversas representaciones de la vida cotidiana” (Suárez Figueroa 1977:111).

Con la certeza de que López Contreras no imitaría los procedimientos de Gómez, los manifiestos secundaron de modo explícito objetivos democráticos que vinculaban los derechos políticos a la recuperación de la riqueza nacional hasta hace poco apropiada por el dictador. Se consideraba que la riqueza gomecista era una fuente de poder ilegítima y peligrosa, “enfermiza”. El Bloque Nacional Democrático, fundado en 1936 en Maracaibo, centro de la industria del petróleo, criticaba que los gomecistas siguieran ocupando posiciones privilegiadas:

Confronta el país, tras la muerte y derrumbamiento de la dictadura de Juan Vicente Gómez, una situación de zozobra provocada por el hecho de que las grandes figuras que acompañaron al dictador en la obra nefanda de saquear las arcas públicas y privadas, continúan, fuera y dentro de Venezuela, usufructuando las riquezas acumuladas, en franca labor de rebeldía y de contumacia, conspirando contra nuestras instituciones democráticas y amenazando constituirse en perenne acechancia de la salud de la República, a favor de fuerzas retrógradas que les facilitan el camino hacia una posible restauración del régimen despótico (Suárez Figueroa 1977:148).

El 14 de febrero de 1936, algunos líderes de la Generación del 28 organizaron en Caracas una demostración masiva contra el gomecismo. Los sectores populares se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales y la policía respondió matando a varios manifestantes. En esa delicada transición, la acción del Estado se interpretó colectivamente como un signo de que los nuevos gobernantes retomaban formas de violencia identificadas con Gómez. Una semana después, a manera de pronta respuesta, López Contreras presentó el Programa de Febrero del Gobierno, que consistía en un análisis de los problemas fundamentales del país y en un plan de desarrollo nacional que algunos analistas consideran el primer gran proyecto de reforma del Estado moderno en Venezuela. Al incorporar las críticas producidas en el seno de la sociedad civil, el Estado neutralizó a su oposición, pero también legitimó un discurso reformista que intensificó la presión social para que se democratizara la forma de gobierno.

Entre las numerosas reacciones al Programa de Febrero se encontró un artículo con el sugerente título de “Dinero, dinero, dinero”, escrito por Miguel Otero Silva, quien se convirtió en uno de los más influyentes intelectuales de su generación (Velásquez 1983:407-415). Otero Silva recordaba al público

que se requería de dinero para financiar el Programa de Febrero²¹. Me parece reveladora su didáctica insistencia en el argumento de que en Venezuela este dinero debía provenir de las dos mayores fuentes de riqueza de la nación: la riqueza personal de Gómez, que debía nacionalizarse, y el petróleo, que debía rendirle mayores beneficios al país mediante un incremento de los impuestos (estaba completamente ausente la idea de que los programas del Estado podían financiarse, al menos parcialmente, mediante los impuestos de los ciudadanos). Otero Silva refutaba el temor de que las compañías petroleras abandonarían el país si el Estado les imponía condiciones más estrictas con el argumento de que obtenían el petróleo a precios tan baratos que nunca se irían de Venezuela. Invocando la autoridad de Gumersindo Torres, ministro de Fomento de Gómez, quien había sido un pionero de la política petrolera nacionalista del Estado, Otero Silva reiteraba su criterio de que Venezuela vendía su petróleo tan barato que el Estado podía obtener más ingresos si les regalaba el petróleo a las compañías pero no las exoneraba de pagar derechos por sus importaciones. No obstante, no bastaba con que el Estado obtuviera más ingresos. Otero Silva alertaba que la ampliación de los recursos del Estado no podía, por sí misma, garantizar que se utilizaran para poner en práctica reformas sociales, porque en Venezuela los funcionarios estatales estaban habituados a robar a la nación. De ahí que reclamara la democratización del Estado y la imposición de controles estrictos a los funcionarios públicos. Concluía su artículo subrayando que la “revolución democrática” iniciada en Venezuela el 19 de diciembre de 1935 tendría que financiar sus programas sociales a partir de esas dos fuentes de riqueza nacional. La muerte biológica de Gómez abrió un espacio político en el que resultaba posible conjugar las demandas de ampliación de derechos políticos con la de fomento del bienestar social. Otero Silva no vacilaba en definir como una “revolución democrática” esta unión de derechos políticos y reformas sociales financiadas por el petróleo.

En 1936, algunos miembros de la Generación del 28 fundan ORVE (Movimiento de Organización Venezuela) con el fin de promover un programa moderado de reforma política y social para la transición del “gobierno autocrático” a un “régimen democrático”. Entre sus miembros se contaban Alberto Adriani, más tarde ministro de Agricultura de López Contreras, y Rómulo Betancourt, quien junto a otros miembros de ORVE fundaría posteriormente el Partido Democrático Nacional (PDN), precursor de Acción Democrática (AD), nacido en 1941. El programa de ORVE trazaba un contraste polar entre el régimen “bárbaro” de Gómez, que había negado la existencia colectiva de la nación, y la

²¹ Miguel Otero Silva (1908-1985) fue uno de los líderes de la Generación del 28. En 1935 era miembro del Partido Comunista (renunció a esa condición en 1953, pero siguió identificado con la izquierda). Más tarde se convirtió en destacado novelista, humorista y periodista. Como senador después de 1958, fomentó el desarrollo de las instituciones culturales en Venezuela.

nueva y prometedora situación política:

Bajo el régimen pasado no hubo existencia nacional. El Estado servía a dos intereses opuestos de la nacionalidad: a la penetración exterior y al caudillaje lugareño. Un grupo de caciques, apoderado del país, sometió el honor venezolano a los grandes intereses extranjeros; hizo de la administración un órgano de despojo público... (Suárez Figueroa 1977:142).

No obstante, el presente era prometedor debido al proyecto de establecer una nueva relación entre el Estado, la nación y la riqueza pública:

Queremos una Democracia, pero una Democracia responsable, donde las funciones del Estado no sean capturadas por las fuerzas del dinero... Queremos unir y no dividir a los venezolanos. Queremos hacer de la política, que antes fue negocio de pequeños círculos oligárquicos, una voluntad y un espíritu nacional que impregne y discipline todas las manifestaciones de la vida colectiva y revele de modo perdurable la voluntad creadora del alma venezolana (Suárez Figueroa 1977:143).

En Venezuela se empezaba a entender que el dinero provenía del petróleo. Un Estado liberado del poder del dinero, controlaba el proveniente del petróleo en vez de dejarse controlar por él. Si en el pasado la política también había sido “negocio de pequeños círculos oligárquicos”, ahora el dinero había “capturado al Estado” y hecho que los negocios de esos círculos dependieran del petróleo. La tarea consistía en forjar una voluntad nacional que dominara los poderes dinerarios en nombre de la colectividad.

El nacionalismo, identificado antes con el logro de la independencia política y la unificación del Estado, se vinculaba ahora a la búsqueda del desarrollo económico y la prosperidad colectiva. El programa político del PDN asociaba el cambio del “Estado autocrático” de Gómez al “Estado democrático constitucional” con el uso de los recursos nacionales en nombre de todo el pueblo a fin de fomentar el desarrollo nacional. Como señalaba el documento: “El nacionalismo es para nosotros creación y defensa de la industria nacional, explotación de nuestras cuantiosas riquezas naturales en bien de la totalidad del pueblo venezolano” (Suárez Figueroa 1977: 184-185).

La democracia llegó a entenderse como un sistema de participación popular no solo en lo tocante a la vida política nacional, sino también con respecto a la riqueza natural de la nación. Una de las expresiones más tempranas de este punto de vista apareció en un documento del Partido Republicano Progresista (PRP), organización fundada en 1936 por miembros del PC y líderes socialistas (el PC era ilegal desde su creación en 1931), cuyo objetivo era funcionar como un partido

de frente popular. Su programa ratificaba el principio de la soberanía popular y exigía que el Estado no solo representara, sino que también defendiera, los intereses de la mayoría y fuera su expresión:

El PRP luchará siempre porque el Gobierno sea la expresión de la voluntad de las mayorías populares, evitando que por ningún motivo el Estado pueda convertirse en instrumento de dominación y de opresión sobre la mayoría nacional por parte de una minoría creada al amparo de condiciones políticas, sociales o económicas que determinen su formación. El Estado será, pues, el instrumento de defensa del pueblo por el pueblo (Suárez Figueroa 1977: 136).

El sentimiento público de rechazo al legado del gomecismo permitió que esta generación de políticos e intelectuales propusiera como algo natural la demanda política democratizadora en conjunción con la demanda de democratización de la riqueza. La concepción de un próspero Estado democrático se contraponía con la realidad del Estado autocrático gomecista. Le daban vida al concepto de democracia estableciendo comparaciones con el régimen personalista cuyo gobierno definían como oneroso y anacrónico:

Por haber acaparado Juan Vicente Gómez, sus familiares e inmediatos cómplices las mayores riquezas del país, tanto en tierras como en industrias, y por ser la Nación, como entidad integrante de todos los venezolanos, la más perjudicada en su presente y porvenir, luchar porque proceda a la confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de Juan Vicente Gómez, sus familiares e inmediatos cómplices (Suárez Figueroa 1977:136).

Con el argumento de que era imposible compensar legal e individualmente todos los “perjuicios personales sufridos” durante el régimen pasado (esto es, a quienes habían enfrentado dificultades tanto políticas como económicas), el documento instaba a nacionalizar la riqueza de Gómez. El objetivo consistía en colectivizar el patrimonio del petróleo por vía del Estado en vez de atomizarlo distribuyéndolo en unas pocas personas. “Sólo pasando esas riquezas al Estado y usándolas para el adelanto de la nación, es que todos los trabajadores venezolanos nos sentiremos resarcidos siquiera en parte de los perjuicios personales sufridos” (Suárez Figueroa 1977:136).

Las compañías extranjeras se asociaban con la transformación del Estado en herramienta de dominación, y los recursos naturales al dinero; las compañías capaces de realizar esta alquimia tenían en sus manos la llave del poder real. En un discurso pronunciado durante el primer mitin de masas convocado por ORVE el 1º de marzo de 1936, Rómulo Betancourt describió a Venezuela como un país cautivo, porque su subsuelo estaba controlado por intereses foráneos:

Un país, es cierto que sin deuda externa, pero con su economía intervenida por el sector más audaz y agresivo de las finanzas internacionales: el sector petrolero. Es verdad que el Estado venezolano no tiene acreedores extranjeros, pero en cambio nuestro subsuelo ha sido prorratedo entre los consorcios del aceite mineral (1975: 25).

En 1975 Betancourt manifestó que acaso le había correspondido ser “el primero que planteara públicamente el problema del petróleo” (1975: 25). No era así, pero si había sido uno de los intentos iniciales por presentar a un público ampliado lo que Gumersindo Torres expresara en la década de 1920: el petróleo era un recurso natural que debía pertenecer a Venezuela. Los nuevos partidos políticos hicieron de esta idea la base de su política de masas. “Nuestro subsuelo” era una imagen que no circulaba entre la población en la década de 1920, pero a partir de la muerte de Gómez condensó nuevas creencias sobre la nación. El discurso democrático sirvió para que la nación llegara a identificarse con su cuerpo natural. Gómez había saldado la deuda externa, pero había vendido el subsuelo de la nación (“lo había repartido entre las compañías petroleras”). La democracia prometía unificar a la nación, utilizar la riqueza natural en beneficio del pueblo.

Como respuesta a la presión pública, que incluyó demostraciones de masas en las que intervinieron varios miles de participantes (30.000 según ORVE), el Gobierno decidió confiscar todas las propiedades de Gómez. Un editorial del periódico de ORVE presentó esta decisión como una victoria de la movilización popular de junio. Subrayaba este carácter al referirse a ella como el primer “gran triunfo” de “Juan Bimba” y “la primera justificación por haber abandonado colectivamente el taller y la fábrica, la casa industrial o el comercio, para ir a la calle a manifestar su querer” (1983: 265)²².

El apelativo Juan Bimba, popularizado en este periodo, no se utiliza para referirse al hombre corriente, como el Joe Blow estadounidense, sino al pobre virtuoso, que en esa época estaba representado por el trabajador rural, víctima de los abusos de gobernantes oligárquicos. Nunca he visto usar el nombre de Juan Bimba como sinónimo de “pueblo”, cuando se apela a esta noción como término inclusivo para hablar del conjunto de la población en tanto una comunidad unificada de valores y objetivos, que incluye a sus elites intelectual y profesional. De ahí que si bien “pueblo” es potencialmente una categoría totalizadora que puede incluir a los líderes provenientes de la clase

²² Resulta interesante que esta mención presente las acciones de junio de 1936 como la primera victoria histórica de Juan Bimba, lo que indica su relativa “modernidad” y la de las masas que representaba. Se suele atribuir al dibujante Mariano Medina Febres (Medo) la creación de este personaje (Medina Febres 1991). Hay que señalar que en este caso sus referentes sociológicos incluyen solo las ocupaciones urbanas de poco nivel y no al liderazgo profesional y de las clases medias que también participaron en las movilizaciones de junio. Tal vez el carácter urbano de esta movilización explique por qué en este caso no se menciona a los campesinos. La imagen gráfica con la cual se llegó a identificar a “Juan Bimba” en la propaganda de AD lo presenta como un campesino prototípico vestido con ordinarios pantalones y camisa de aldea, y calzado con alpargatas.

media que hablan en su nombre, Juan Bimba remite al arquetipo de las mayorías olvidadas de la nación. El documento define las propiedades confiscadas como parte de las “inmensas riquezas” robadas al pueblo por el “Benemérito ladrón”²³. No solo la oposición, sino también el Estado presentaron la medida como un intento de devolver al pueblo, su propietario de derecho, la riqueza colectiva de la que Gómez se había apropiado. Para garantizar que permaneciera en manos del Estado y al servicio del pueblo, el editorial de ORVE concluía pidiendo al pueblo que se mantuviera alerta para impedir una nueva privatización de la propiedad confiscada: “Las tierras e industrias de Gómez no deben ser vendidas a capitalistas nacionales o extranjeros. Deben ser patrimonio explotado en beneficio del pueblo” (ORVE 1983: 266).



Foto de la izquierda: Estudiantes de la Generación del 28, entre ellos Rómulo Betancourt (en la última fila) y Jóvito Villalba (al centro). (Fundación Andrés Mata.)

²³ “Benemérito” fue un título oficial otorgado a Gómez por el Congreso.



Saqueo en Caracas tras la muerte del general Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935. (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

Según un historiador venezolano, se trató del decreto más severo promulgado desde 1830 (Velásquez 1984:15). Las consecuencias administrativas de esta medida fueron inmediatas: el Estado se convirtió en empresario al adquirir bancos, un vasto catálogo de industrias (papel, electricidad, empaçado de carnes, jabón, leche, fósforos) y grandes haciendas en 15 estados. Ello marcó el inicio de la participación estatal directa como capitalista en la economía.

La medida creó las condiciones para que se intensificaran las demandas de democratización, que se entendía no solo como el establecimiento del sufragio universal y de un sistema competitivo de partidos políticos, sino también como la ampliación de la participación del Estado en la economía. Se consideraba que la creación de empresas económicas de propiedad estatal era un medio que permitiría garantizar que la riqueza nacional se empleara para beneficio de la colectividad. Las empresas creadas con dinero del Estado no debían ser apropiadas de forma privada, sino que el Estado democrático las debía administrar para beneficio de la sociedad como un todo. Era este razonamiento el que le permitía a ORVE presentar la medida como la “primera gran victoria” de Juan Bimba.

Quienes expresaban estas demandas apelaban cada vez más al pueblo como sujeto colectivo, o a Juan Bimba, en tanto beneficiario por derecho propio de las políticas del Estado y encarnación del deseo de democratización del sistema político. Si bien se había apelado al pueblo durante toda la época

republicana en su condición de soberano de la república liberal, ahora se le invocaba en tanto heredero legítimo de la riqueza nacional, de la que había sido injustamente despojado. Ahora se presentaba a ciudadanos de una nación petrolera, merecedores no solo de derechos políticos, sino también de la riqueza de la nación, a sectores populares excluidos de anteriores discursos enunciados por hombres que gozaban de educación y provenían del medio urbano.

Las demandas de que se protegiera la riqueza de la nación se centraron en la necesidad tanto de recuperar lo que Gómez se había apropiado como de regular las actividades de las compañías petroleras. De ahí que el PRP también propusiera que se modificaran las concesiones a las compañías foráneas, dado que ya habían repatriado por concepto de ganancias más de lo que habían invertido. Justificaba la demanda con el argumento de que “en manos de las compañías extranjeras está la más grande riqueza del país, el petróleo” (la inclusión de la palabra *petróleo* para designar la riqueza de la nación se tornaría superflua en unos pocos años), pero “esa riqueza no la disfruta la Nación venezolana sino en una ínfima porción” (Suárez Figueroa 1977:136).

La naturaleza del Estado se debatía públicamente en periódicos y reuniones políticas. El 18 de marzo de 1936 ORVE publicó un memorando en el que describía su concepción del Estado. El documento enfatizaba la unidad, subrayaba los peligros de la lucha de clases mediante una referencia a las guerras civiles del siglo XIX y se centraba en la necesidad de promover la idea del Estado como representante de los intereses comunes de la nación: “Hay que robustecer y fortalecer en Venezuela la idea del Estado como órgano conciliador de la discordia social y como instrumento de la disciplina colectiva”. El documento establecía un claro contraste entre el Estado excluyente y personalista de Gómez y la imagen del Estado nacional inclusivo promovido por ORVE: “Frente al Estado personalista y acaparado por un grupo como fue el Estado gomecista, ORVE propicia un Estado al que se incorporen coordinadamente todas las fuerzas vivas del país y que supere con una política de justicia y de integración nacional, las polémicas y rencores regionalistas...” (Velásquez 1983: 49-50).

En respuesta a una petición de la asamblea que aprobó el memorando, para que explicara mejor su concepción del Estado, el Comité de Orientación Política de ORVE ofreció la siguiente definición, de nuevo expresada por oposición al Estado de Gómez:

Entendemos por Estado, no el instrumento de dominación y de explotación personalista que fue bajo la Dictadura, sino la máquina administrativa y política, consciente y ordenada, capaz de desarrollar plenamente, sin las rémoras de los vicios tradicionales de peculado y de rapiña, todo un progreso de reintegración nacional y de justicia social (Velásquez 1983:51).

Para que el Estado, como “máquina administrativa y política”, ejerciera ese poder en nombre de la colectividad, tendría que rendir cuentas a esta: tenía que ser democrático. Se identificaba la corrupción con el Estado autocrático; se manifestaba que la democracia brindaba contención ante la posibilidad de corrupción en un Estado muy ampliado que contaba con recursos financieros crecientes.

Las declaraciones de ORVE reflejaban postulados básicos ya perfilados en el Plan de Barranquilla, redactado en 1931 por Betancourt y otros miembros exiliados del opositor grupo ARDI (Agrupación Revolucionaria de Izquierda). Este documento definía los términos del pensamiento político imperante entre los miembros no comunistas de la Generación del 28. Desde su fundación en 1931, el PC había gozado de gran influencia entre los miembros de dicha generación. Aplicaba a Venezuela la teoría del movimiento comunista internacional, con el argumento de que los intereses de las clases en conflicto colocaban a los trabajadores venezolanos en oposición a los capitalistas. Según ARDI, por el contrario, los rasgos específicos de la sociedad venezolana hacían de ella un caso especial: la debilidad de su proletariado y campesinado, el crecimiento de la clase media, la condición de poderoso enclave petrolero y la posición estratégica del Estado. Por tanto, la clase no era el factor determinante en las luchas políticas venezolanas. Todas las clases tenían un enemigo común: el imperialismo y sus aliados locales, las “estructuras feudales encamadas en el gomecismo”. Estas premisas se convirtieron en el centro de la autodefinición de AD como partido nacional multclasista, cuya misión consistía en unir al pueblo venezolano por la vía del Estado contra las potencias extranjeras que se había apropiado de los recursos de su subsuelo. De esta manera AD devolvería a la nación la soberanía, la dignidad y la riqueza.

Esta concepción de la política nacionalista anima un discurso pronunciado por Betancourt en septiembre de 1936 durante un mitin convocado para unificar la izquierda en un solo partido (cinco años antes de la fundación de AD). Betancourt denuncia que las compañías petroleras, en complicidad con abogados locales, han sido las redactoras de la legislación petrolera venezolana. “...Esa fabulosa ganancia de no menos de 500 millones de bolívares que sacan anualmente de nuestro país las compañías de petróleo”, que podrían emplearse para resolver urgentes necesidades sociales, como proporcionar escuelas a los más de 430.000 niños venezolanos que no reciben ningún tipo de educación formal (1983:300). Betancourt apela a la colectividad como entidad unificada dotada de una voluntad única, y vincula los planes de nacionalización del petróleo en el futuro a las batallas por

la independencia política del siglo XIX: “Todos están interesados, en fin, en que se logre algún día nacionalizar esas enormes riquezas de nuestro subsuelo, aun cuando para ello sea necesario librar un nuevo Ayacucho y obteniendo de ese modo que Venezuela sea para los venezolanos” (1983)²⁴.

Para que Venezuela sea efectivamente “para los venezolanos”, el país tenía que reconquistar el subsuelo del que se habían apropiado potencias extranjeras. Sólo mediante la unión de su cuerpo político y su cuerpo natural podría lograrse la soberanía plena; la independencia política sin autonomía económica seguía siendo una forma de dependencia solapada. En ese mismo discurso, Betancourt resumió el programa político del partido unificado de izquierda en dos objetivos: las luchas por la libertad democrática y contra el imperialismo. Mediante la democratización de la política, los venezolanos reasumirían el control del subsuelo nacional y lograrían la independencia económica de la nación. El concepto de “Venezuela para los venezolanos” unía poderosamente ambos objetivos²⁵.

En mítines públicos y documentos, los jóvenes líderes políticos, escritores y activistas asumieron el papel de voceros de la democracia en nombre del público general, al cual le informaron sobre el significado democrático, enfatizando su base económica en la economía del petróleo. “Dentro de la democracia”, escribió un activista, “cada quien considera que *la economía nacional es la cosa de todos*, cada quien espera provechos de su prosperidad y se encuentra expuesto a sufrir con su decadencia o con su ruina” (Morales 1983: 346; énfasis mío).

El grado de apropiación de esta cosa colectiva por las potencias extranjeras a menudo se cuantificaba, y su gran magnitud se presentaba como la causa de la prosperidad foránea y la pobreza interna. Esta pérdida del patrimonio de la nación se exhibía, como se puede apreciar en los escritos de Antonio Arráiz (un joven intelectual venezolano que había vivido en EEUU) como fuente de dolor personal y de amor a la nación. Arráiz plantea que dado que los productos agrícolas significaban solo 8% del valor de las exportaciones totales (el petróleo representaba el resto), los venezolanos solo eran dueños de una duodécima parte de sus exportaciones²⁶. Según su cálculo, las ganancias diarias de la industria

²⁴ La batalla de Ayacucho (9 de diciembre de 1824) selló la independencia de Perú y culminó la de América del Sur. La dirigió Antonio José de Sucre, el oficial más leal a Bolívar. La referencia de Betancourt a Ayacucho y no a Carabobo (batalla por la independencia de Venezuela librada en 1821) resulta desconcertante, porque es poco común. En Venezuela se suele invocar a Ayacucho cuando se quiere colocar el acento en la independencia latinoamericana, o en la dimensión internacional de las luchas venezolanas por la independencia. Ayacucho se asocia también con la lealtad de Sucre hacia Bolívar y, por tanto, con la nación. El programa de becas puesto en práctica por Carlos Andrés Pérez durante su primer gobierno (1974-1979), por el cual viajaron miles de venezolanos a estudiar al extranjero, tomó el nombre de Antonio José de Sucre, por su victoria en la batalla de Ayacucho (Programa de Becas Gran Mariscal de Ayacucho).

²⁵ Esta se convirtió en una de las consignas más populares de su partido, Acción Democrática.

²⁶ Aunque en esa época Antonio Arráiz no era un estudiante, participó en las actividades de la Semana del Estudiante en febrero de 1928 y en el ataque al cuartel San Carlos el 7 de abril de ese mismo año. Fue puesto en prisión por Gómez, torturado y exiliado en 1935. Regresó a Venezuela en 1936 y se convirtió en escritor, poeta y periodista de fama.

petrolera eran de 1.360.000 bolívares, y argumenta, por medio de personajes de ficción, que este dinero sustentaba el nivel de vida de los propietarios estadounidenses de esta industria: Míster Tal o Míster Cual, el magnate petrolero; Molly, su esposa; Ted, el hijo botarate; Mildred, la hija consentida que “sólo sabe del arte de hacer cocktails y del arte ducho de amar y hacerse amar sin consecuencias”, todos los cuales viven en hogares opulentos (con “vajilla de plata, y el gobelino en el salón, y muebles Luis XV”). Por el contrario, las masas de Venezuela permanecen atrapadas en condiciones miserables.

Para Arráiz la facilidad ridícula con la que manaba el dinero del petróleo era un signo de que el país era tratado como una primitiva nación poblada por un pueblo carente de razón, al que presentaba sarcásticamente en sus escritos como “monos” y “negros” incapaces de explotar sus propios recursos:

Un millón trescientos sesenta mil bolívares diarios van para ellos de Venezuela; de la pobre, de la oscura, de la lejana y difusa Venezuela: una republiquita, allá lejos, poblada de monos y de negros, donde hace calor y crecen los cocoteros, y tienen, ¡los infelices!, esa rica cosa que es el petróleo, que se dejan explotar (1983:195).

Según Arráiz, el petróleo venezolano, en efecto, no pertenecía al “pobre hombre venezolano”, sino al “rubio míster” que llegaba al país “atrevido que se vino a su olor como la mosca a la miel”. Pero el “rubio míster” se hacía del petróleo porque “tuvimos un general Gómez que entregaba hasta el subsuelo, despiadadamente”. Arráiz termina su artículo estableciendo un vínculo directo entre su intenso nacionalismo, su amor por la nación que surge de su interior... “-patético, casi doloroso-” y la explotación de la que ella es víctima -“hacia esta patria sufrida”, que es “más amada” cuanto “más sufrida, cuando recuerdo que 1.360.000 bolívares de nuestra riqueza nacional, se nos van cada día para no volver” (1983:196)²⁷. En su muy feminizada imagen de la nación débil, postrada, carente de voluntad, el “amor por la nación” se identifica con la defensa masculina del subsuelo explotado: la fuente de la riqueza colectiva, la cosa de todos²⁸.

La política sobre el petróleo se convirtió en sinónimo de política económica nacionalista que intenta defender el subsuelo y no solo maximizar los ingresos petroleros. Como la búsqueda a todo trance de

²⁷ La imagen de “una nación de monos”, que aún hoy se emplea, hace referencia a una nación habitada por un pueblo primitivo que no puede defenderse a sí mismo ni a sus recursos; los “monos” son una manera eufemista de referirse a los negros, los indios e incluso los mestizos de Venezuela, en general. La expresión “negros” también se emplea metafóricamente para referirse a todas estas categorías, incluida la de “monos”. La yuxtaposición de estos términos contribuye a disolver las fronteras entre lo cultural y lo natural, lo social y lo salvaje (agradezco a Aims Me Guinness por haberme ayudado a ver las múltiples asociaciones que estas expresiones evocan).

²⁸ En este contexto, la palabra “cosa”, con sus múltiples significados, apunta no solo a los significados de “asunto” o “negocio”, sino que también evoca los genitales femeninos.

ingresos equivaldría a un agotamiento del subsuelo de la nación, una política petrolera nacionalista tendría que tratar de hacer un uso productivo de las entradas. Mientras que la industria petrolera foránea explotaba la dócil y silvestre naturaleza de Venezuela, el Estado (varón) venezolano la transformaría en una fuerza productiva y domesticada. Arturo Uslar Pietri, uno de los intelectuales venezolanos más influyentes del siglo XX, en un artículo de prensa expresó con fuerza la necesidad de transformar el efímero y corruptor dinero proveniente del petróleo en riqueza permanente.

La riqueza pública venezolana reposa en la actualidad, en más de un tercio, sobre el aprovechamiento destructor de los yacimientos del subsuelo, cuya vida no solamente es limitada por razones naturales, sino cuya productividad depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional. Esta gran proporción de riqueza de origen destructivo crecerá sin duda alguna el día en que los impuestos mineros se hagan más justos y remunerativos, hasta acercarse al sueño suicida de algunos ingenuos que ven como el ideal de la hacienda venezolana llegar a pagar la totalidad del Presupuesto con la sola renta de minas, que habría que traducir más simplemente así: llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable (Suárez Figueroa 1977:163).

La solución propuesta ante la inquietante perspectiva de convertirse en una nación rentista, vividamente transmitida por esta imagen de un “inmenso parásito del petróleo” consistía en emplear las entradas provenientes del mismo para crear “una economía reproductiva y progresiva”. Uslar Pietri afirmaba que era urgente utilizar la “riqueza transitoria” de la actual “economía destructiva” para crear las bases sanas y amplias de una “futura economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia”. Si la independencia política había sido el logro heroico alcanzado por Simón Bolívar, la independencia plena sería ahora la tarea de aquellos que pueden transformar una riqueza efímera en una capacidad productiva permanente. El editorial terminaba con un llamado a la acción: “Si tuviéramos que proponer una divisa para nuestra política económica lanzaríamos la siguiente, que nos parece que resume dramáticamente esa necesidad de invertir la riqueza producida por el sistema destructivo de la mina, en crear riqueza agrícola reproductiva y productiva: sembrar el petróleo” (Suárez Figueroa 1977:165). La convocatoria a “sembrar el petróleo” adquiría una gran resonancia en un país agrario que ya no alcanzaba a alimentarse a sí mismo y cuya elite económica buscaba nuevas áreas de obtención de ganancias; ella expresaba la problemática de la producción, la distribución y la reproducción en una nación petrolera. Esta frase se convirtió en el lema principal del discurso político del desarrollo democrático.

Legislación petrolera: nación petrolera

Con excepción de los esfuerzos de Gumersindo Torres por definir una política petrolera nacionalista, durante el periodo de Gómez el Estado se había comportado con respecto a las compañías, en esencia, como un ente privado que se beneficiaba de la venta de la propiedad nacional. Las disposiciones adoptadas por Gómez para garantizar entradas petroleras a largo plazo habían sido escasas, y se había beneficiado personalmente de la venta de concesiones a las compañías. Esta situación cambió después de 1936, cuando el debate público trató de establecer una relación diferente entre Estado (en tanto terrateniente) y compañías petroleras (en tanto capitalistas)²⁹.

Las negociaciones entre compañías petroleras y Estado siguieron un patrón típico, característico de las relaciones entre naciones huéspedes y empresas multinacionales involucradas en la explotación de recursos naturales. Después de un periodo inicial en el que los términos fueron favorables para las compañías extranjeras, el Estado logró obtener condiciones cada vez mejores, proceso que Vernon denomina “una ganga obsolescente” (*an obsolescing bargain*) (1971).

Una confrontación fundamental se produjo a propósito del tema impositivo. Como Gómez había concedido a las compañías contratos a largo plazo (que especificaban el exiguo pago fijo de las compañías al Estado), el presidente López Contreras intentó aumentar los ingresos petroleros del Estado mediante la modificación de las tasas del impuesto sobre los ingresos y las exenciones aduanales. Acostumbradas a las políticas económicas liberales de Gómez, las compañías se opusieron al intento de reducir sus ganancias y limitar sus privilegios. Con el argumento de que los contratos vigentes definían los impuestos sobre los ingresos y las exenciones aduanales, llevaron el caso ante los tribunales venezolanos, los cuales fallaron a su favor.

Este revés tuvo una importante consecuencia para el Gobierno. El ministro de Fomento, Manuel Egaña (1938-1941), después de estudiar las regulaciones de la minería en EEUU, aplicó en Venezuela los mismos criterios allí imperantes, donde se establece una distinción entre derechos contractuales de las entidades privadas y derechos gubernamentales en tanto Estado soberano. De ahí que en EEUU el Gobierno pueda arrendar tierras públicas a entidades privadas y establecer mediante un contrato el nivel de sus ingresos. Al mismo tiempo, en tanto Estado soberano, puede imponer -y cambiar siempre

²⁹ El análisis que sigue sobre la política petrolera de Venezuela se basa sobre todo en Mommer (1983; 1986) y en Lieuwin (1959), Tugwell (1975) y Vallenilla (1975).

que lo considere conveniente- un impuesto sobre los ingresos con lo que modifica sus entradas de acuerdo con las ganancias de las entidades privadas. Aunque las compañías aceptaban este principio en EEUU, se opusieron con fuerza a hacerlo en Venezuela. Esta incoherencia se consideró una grave afrenta a la soberanía venezolana.

La Segunda Guerra Mundial subrayó la importancia estratégica del petróleo venezolano, y con ello incrementó el poder negociador del Gobierno. Como las compañías se habían negado sistemáticamente a reconocer la soberanía fiscal del Estado, el presidente Medina envió una carta personal al presidente estadounidense donde le pedía que intercediera a favor de los reclamos de Venezuela. Franklin D. Roosevelt respondió solicitando a las petroleras que aceptaran las demandas venezolanas. A cambio, Venezuela se comprometió a convertirse en suministrador estable de EEUU.

En 1943 se aprobó una nueva ley petrolera que cambiaba de manera fundamental el papel del Estado en relación con la industria. La norma garantizaba la presencia a largo plazo de la industria petrolera en el país, al validar muchas concesiones previas concedidas ilícitamente en la época gomecista y, lo que es más importante, al otorgar a las compañías otras grandes concesiones por un periodo de 40 años. A su vez, creaba un vínculo capitalista entre el Estado terrateniente y las compañías arrendatarias-productoras. La nueva ley aumentaba de modo considerable la participación estatal en las ganancias de la industria, al fijar contractualmente mayores *royalties* y al establecer un impuesto sobre los ingresos en el sector petrolero. Se consideraba que los *royalties*, que eran de 1:6 (lo que significaba que uno de cada seis barriles pertenecía a Venezuela), unidos a otros impuestos fijos, supondrían que las ganancias se distribuirían a partes iguales. Además, en 1945 el Estado intentó aumentar su participación a 60% mediante la imposición de un impuesto de 12% sobre los ingresos del sector.

Este impuesto tuvo justificaciones teóricas y prácticas. El argumento teórico era que la plusganancia en un sector de interés público debía considerarse una ganancia excesiva; la apropiación no podía ser privada sino que debía revertirse a la nación. Por tanto, las ganancias de las compañías no debían rebasar un porcentaje justo del retorno de la inversión capitalista, principio que sería aceptado 25 años después, en 1968, por la OPEP, de ahí que el propósito ostensible de este impuesto sobre los ingresos era transformar una plusganancia privada en ingresos estatales. En efecto, al establecer el derecho soberano del Estado para modificar las tasas sobre los ingresos, esta ley le daba al Gobierno una herramienta para apropiarse de toda plusganancia de la industria, esto es, capturar una proporción cada vez mayor de la renta internacional del suelo (Mommer 1986: 83).

Una consideración práctica facilitó que las compañías aceptaran el planteo del Estado venezolano. Como el código impositivo de EEUU no reconoce el principio de la doble tributación, los impuestos venezolanos sobre los ingresos simplemente se descontarían de los impuestos estadounidenses equivalentes. En otras palabras, quienes perdían eran las arcas de EEUU (y sus consumidores), no las compañías petroleras estadounidenses. La ley incluía otra cláusula importante: obligaba a las compañías a construir refinerías en Venezuela. En abierto contraste con Gómez -quien había solicitado a las compañías petroleras que construyeran refinerías fuera del territorio venezolano, por ejemplo, en la isla de Curazao, a fin de evitar que se crearan grandes concentraciones de trabajadores con los consiguientes problemas laborales- el gobierno de Medina intentó diversificar la economía. La tarea no consistía solamente en obtener más ingresos a partir de la industria petrolera, sino también en promover la industrialización: “sembrar el petróleo”. AD apoyó los objetivos de esta política, pero planteó objeciones técnicas y políticas. Señaló que los métodos específicos para medir los beneficios no permitían al Estado venezolano obtener ni siquiera 50% de las ganancias de la industria, para no hablar de la meta de 60% (Betancourt 1975:161-197).

La Ley de Hidrocarburos de 1943 es un hito en la transformación de Venezuela en una nación petrolera. Reconocía plenamente que el subsuelo era propiedad nacional, y que el papel del Estado consistía en salvaguardar esta propiedad en nombre de la colectividad. Confirmaba el papel dual del Estado como poder soberano y como terrateniente. El reconocimiento de estos papeles legitimaba una política petrolera de incrementos impositivos y una política económica de desarrollo fomentado por el Estado.

Amnesia histórica e invisibilidad social del petróleo

La invisibilidad social del petróleo ha acentuado la amnesia histórica en lo concerniente a los orígenes de la transformación de Venezuela en nación petrolera. Esta imperceptibilidad se desprende de los orígenes de la industria como enclave foráneo trasplantado, de su estructura productiva de uso intensivo de capital y de los efectos difusos de la circulación de dinero proveniente del petróleo a través del cuerpo político. Es obvio que el carácter de enclave foráneo contribuyó en los inicios a crear la sensación de que el petróleo era una presencia poco familiar en Venezuela. Pero al ser un enclave petrolero la industria se hizo al mismo tiempo extraordinariamente tangible-expresión directa de una presencia foránea- y sin embargo tan aislada y claramente demarcada que siguió siendo una

presencia aislada más allá de su ubicación.

Como actividad dirigida a la exportación, la extracción de petróleo contrasta con las actividades agrícolas destinadas a la exportación de uso intensivo del trabajo que involucran a grandes sectores de la población en ciclos estacionales de siembra y cosecha o reproducción ganadera, al igual que con la mayoría de las actividades mineras, que suponen grandes insumos de trabajo. La extracción de petróleo -que a menudo se define como “producción de petróleo”- es una actividad intensiva de capital. Después de la fase de exploración, los puestos de trabajo tienden a disminuir; por ello nunca esta actividad ha ocupado un gran número de trabajadores en Venezuela, y en la medida en que se ha desarrollado en zonas relativamente aisladas, ha formado bolsones también aislados de actividad económica. Históricamente, la mayor parte del petróleo ha salido del país, una parte después de refinado, sin involucrar nunca a la mayoría de la población o afectar de modo tangible su vida. El hecho de comprar combustible en las gasolineras Shell o Creole (Exxon) hacía evidente (hasta antes de la nacionalización de la industria en 1976) que los venezolanos solo tenían acceso al recurso básico de la nación a través de la mediación de compañías extranjeras. Con el envejecimiento de la industria, los yacimientos abandonados y los pueblos en decadencia desperdigados por los estados Zulia, Portuguesa y Anzoátegui, le han agregado un aura fantasmal a la nebulosa presencia del petróleo en Venezuela.

El aislamiento de la industria temprana obedecía a su dependencia de los insumos importados para su funcionamiento y el consumo de sus empleados, el divorcio entre sus decisiones relativas a la producción y las consideraciones del país y la ausencia de una burguesía local en posiciones de control y administración³⁰. Durante las primeras décadas de su existencia, los puestos profesionales y administrativos fueron ocupados de modo casi exclusivo por extranjeros, mientras que los venezolanos solo eran contratados como obreros no calificados. En los campos petroleros cercados se recreaban las comodidades y condiciones existentes en otros países para disfrute de la elite de administradores extranjeros. “Si hubo una vez un sitio donde un hombre blanco pudo vivir feliz junto a su esposa y sus hijos en un clima cálido” señala una observadora en unas memorias publicadas en 1931, “ese lugar fue Mene Grande (un campo petrolero estadounidense)” (Lady Mills 1931). Verdaderos enclaves con caminos, escuelas, tiendas y suministros médicos particulares, estos campos constituían, como señalara un venezolano en 1936, “un Estado aparte del Estado venezolano” (Cabrera 1983: 688).

³⁰ Para un análisis clásico de la significación de los enclaves en la América Latina, v. Cardoso y Faletto (1979).

Con el paso del tiempo, a medida que se derribaban literal y metafóricamente las cercas, el Estado venezolano consolidaba su soberanía sobre el territorio nacional. No obstante, dado que asumió hasta cierto punto funciones previamente desempeñadas por las compañías petroleras, ambos Estados se fusionaron en uno, lo que al tiempo incrementó la aparente unidad estatal y aumentó sus conflictos internos. Si bien las casas matrices de las compañías siempre retuvieron la toma de decisión respecto a un número de temas claves (inversión, tecnología, mercadeo y precios), el Estado fortaleció su control de modo gradual. En parte debido a la presión gubernamental, pero también como resultado de políticas de la industria, los venezolanos comenzaron a ocupar algunos de los puestos técnicos y administrativos de mayor nivel. La actividad petrolera dejó de ser un enclave aparte para convertirse en una escuela³¹ que fijaba los modelos de prácticas de negocios tanto en el propio sector petrolero como en otros. Dada la estructura internacional de la industria del petróleo, las subsidiarias locales eran, necesariamente, implantes foráneos; pero con el paso del tiempo echaron raíces en el suelo local y generaron un *ethos* tecnocrático entre funcionarios y técnicos que facilitó su identificación con la racionalidad empresarial de la industria petrolera. Ya en 1976, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, venezolanos con una alta formación, que garantizaban su funcionamiento estable como compañía nacional, ocupaban la mayoría de los puestos técnico-administrativos. Después de 1976, los conflictos en torno de la distribución de recursos y ganancias, que antes habían enfrentado al Estado con las compañías, empezaron a desarrollarse en el seno del Estado³².

Como han puesto en evidencia varios estudiosos, a pesar del limitado espacio que ocupan sus emplazamientos productivos, la industria del petróleo reconfiguró el territorio nacional³³. Desestructuró las relaciones sociales y económicas asociadas al pasado agrícola y articuló la organización espacial comercial-urbana de la Venezuela contemporánea (Santaella 1985: 622). Denominándola “estructura petrolera”, Santaella plantea que mediante su impacto en la urbanización, la producción, el comercio y el consumo, así como en los sistemas de comunicación y de servicios, el petróleo tuvo un “considerable peso cualitativo en cuanto se refiere a la ocupación del

³¹ Este término, “escuela”, fue muy repetido por empleados de las industrias del automóvil, del acero y la petroquímica entrevistados juntamente con Julie Skurski durante nuestros trabajos de campo en Venezuela. Muchos de los administradores, técnicos e ingenieros que trabajaban en el sector metalmeccánico habían trabajado antes en el sector petrolero y se referían de modo espontáneo al impacto que había tenido la industria en su formación. Aunque resulta evidente que la industria del petróleo fue un modelo de racionalidad y organización empresarial en Venezuela, hasta donde conozco no existe ningún estudio que analice cómo afectó al desarrollo de las prácticas de negocios en otras áreas de la economía.

³² Para un informe enjundioso sobre esta relación plagada de conflictos, v. el recuento detallado, que es casi una confesión personal, de la experiencia de Andrés Sosa Pietri como presidente de Petróleos de Venezuela (1993).

³³ Me viene a la mente el estudio pionero del Ministerio de Obras Públicas realizado por Arcila Farías (1974) y el extraordinario análisis de los planes para transformar a Caracas durante la primera mitad del siglo llevado a cabo por Martín Frechilla (1994).

espacio". Afirmar que "todos los espacios se hacen coherentes al conjunto venezolano por intermedio del dominio de la estructura petrolera" (1985: 632)³⁴.

Los efectos del petróleo en su forma de dinero, esto es, como valor de cambio, fueron más vastos que como mercancía con propiedades físicas específicas, o sea, en tanto valor de uso. Como valor de cambio, el impacto social se produce una vez que el petróleo se ha vendido en el mercado internacional. En el nivel superficial del intercambio de mercado, la transformación de petróleo en dinero y de dinero en bienes y servicios adopta la apariencia de un proceso natural; a cambio del petróleo, Venezuela recibe su equivalente monetario en dólares que entonces se gastan en el país y en el extranjero. Pero estas transformaciones suponen también la transfiguración de los agentes sociales que participan en el proceso. De ahí que si el petróleo permea la sociedad venezolana mediante su metamorfosis en dinero, es metamorfoseando la sociedad que el dinero proveniente del petróleo se incorpora plenamente a ella y logra sus múltiples efectos.

Llamo domesticación del valor a la incorporación del petróleo en la sociedad. La construcción de Venezuela como nación petrolera fue parte de este proceso de domesticación del valor. Conceptualizar el país como nación petrolera se convirtió en una forma de dar cuenta de hábitos y expectativas; de reconocer esa potente presencia en el cuerpo político y, por tanto, de domeñar sus efectos. Mediante su vieja magia alquímica, el dinero "señor faze del syervo e del syervo señor"³⁵, el petróleo logró hacer el truco de poner dentro de su sombrero a una Venezuela "primitiva" y sacar de él una "nación petrolera".

Los dos cuerpos de la nación y la teoría democrática

Hace alrededor de tres cuartos de siglo se comenzó a leer la explotación del subsuelo del país por parte de compañías extranjeras como una pérdida de soberanía. En tanto éstas sacaban el petróleo y dejaban poco a cambio, la afirmación era que se estaba "entregando" la riqueza de la nación. Se desarrolló un consenso político en torno de la afirmación de que Gómez había "regalado nuestro subsuelo". No obstante, esta pérdida de riqueza física fue la condición que permitió articular un proyecto político democrático en cuyos términos se construía la nación como comunidad unificada de

³⁴ Para un planteamiento similar y un análisis más extenso del impacto del petróleo sobre los patrones de urbanización, comunicaciones y organización del espacio, v. Arcila Farías (1974) y Frechilla (1994).

³⁵ La expresión es de Juan Ruiz, poeta medieval conocido como Arcipreste de Hita, cit. por Fernando Ortiz en su análisis de los efectos de los ingresos por exportación de azúcar en la sociedad (1995: 81).

ciudadanos terratenientes.

En la medida en que se representaba a Venezuela como nación petrolera en estos términos y en que el Estado terrateniente se transformaba en el agente de ésta, el Estado se convirtió en el centro de las demandas sociales dirigidas contra las fuerzas internas y externas que habían privatizado “con rapacidad” el subsuelo colectivo. En el repetido llamado a “salvaguardar nuestra riqueza nacional” (enunciado originalmente, como se ha visto, en la política petrolera de Gumersindo Torres durante la década de 1920) y en la insistencia en que se empleara esta riqueza a favor de la colectividad que era por derecho su propietaria (demanda expresada con fuerza por la Generación del 28), los intereses particulares se subsumieron en el interés general de la nación como sujeto unificado. En la lucha contra el gomecismo y las compañías petroleras foráneas se desarrolló un lenguaje nacionalista que se dirigía a los venezolanos como miembros de una comunidad sostenida por la propiedad colectiva del subsuelo. La tarea del Estado fue definida como la de reintegrar la nación dividida, a la cual representa mediante la salvaguarda de un cuerpo físico que se esfumaba, en nombre de un eterno cuerpo político.

Esta imagen de una nación soberana dividida entre un cuerpo natural mortal y un cuerpo político inmortal, resuena con representaciones medievales del poder teológico y político que aún saturan el lenguaje secular de la política en Occidente. Como muestra Ernst Kantorowicz en su estudio clásico sobre la teología política medieval, la ficción legal de los dos cuerpos del rey surgió en Inglaterra durante el siglo XVI como parte de un proceso de formación del Estado-nación. Según esta ficción, el rey tiene un cuerpo natural como individuo mortal que es, y también tiene un cuerpo sobrenatural que es la encarnación del reino inmortal y omnipotente.

Mientras que Kantorowicz considera que esta ficción legal es “hija del pensamiento cristiano” (1988: 506), Claude Lefort se pregunta si no debiéramos entenderla como una “formación teológico-política” en la cual la integración de lo religioso y lo político se presenta “lógica e históricamente, como un dato primario” (1988: 250). El intercambio de propiedades o “quiasmata” que para Kantorowicz se da entre lo teológico y lo político, ocurre, según Lefort, “entre lo teológico ya politizado y lo político ya teologizado” (1988: 250). De ahí que Lefort considere que la representación de los dos cuerpos del rey no es el producto desplazado de estadios sociales sucesivos (reinos cristo-céntricos, jurídico-céntricos, político-céntricos y humano-céntricos) sino una formación cultural con múltiples estratos en la cual “lo que se desplaza en cada ocasión no es erradicado, y contiene la semilla de una configuración simbólica futura” (1988: 250). Mediante su reinterpretación de los dos cuerpos del rey

como una formación teológico-política, Lefort trata de ubicarnos en mejor posición para detectar cómo “ciertos esquemas de organización y representación sobreviven gracias al desplazamiento y la transferencia a nuevas entidades de la imagen del cuerpo y de su doble naturaleza” y, por tanto, para preguntarnos “si la democracia es el teatro de un nuevo modo de transferencia o si lo único que sobrevive en ella es el fantasma de lo teológico-político” (1988: 249).

Según Lefort, mientras que en el mundo premoderno la autoridad política residía en el cuerpo sacralizado del rey, lo cual le proporcionaba un cuerpo a la sociedad (1988:17), en las democracias modernas el poder político está totalmente desencarnado, lo que lo abstrae de toda ubicación o encarnación particulares: el poder, que pertenece a todos, no pertenece a nadie. En palabras de Lefort, en las sociedades modernas “el lugar del poder es un sitio vacío, no puede ser ocupado -su naturaleza impide que ningún individuo o grupo le sea consustancial- y no puede ser representado” (1988:17). Al carecer del basamento natural que sostenía el modelo monárquico del *ancien régime*, una “sociedad democrática se instituye como una sociedad sin cuerpo” (1988:18). Por ello surge como “una sociedad puramente social” en la cual “el pueblo, la nación y el Estado” adoptan la condición de “entidades universales” que, sin embargo, no “representan entidades sustanciales” (1988:17). Sin señales naturales de certidumbre, la democracia moderna se convierte en una sociedad posfundacional en la cual “las personas experimentan una indeterminación fundamental en lo relativo a las bases del poder, la ley y el saber” (1988: 19).

Estas consideraciones arrojan luz sobre la transición entre el gobierno de Gómez, cuya figura casi sacra llegó a encarnar el Estado (y cuyo espíritu es invocado actualmente en prácticas religiosas populares para que sane el cuerpo y el alma lastimados de los ciudadanos y de la nación) y el gobierno democrático, cuyos representantes, como veremos, han tenido que justificar la aseveración de que ocupan por derecho, no que usurpan, un espacio soberano que en principio es de todos. No obstante, este desplazamiento de la representación formal del poder soberano “del cuerpo del rey al cuerpo de nadie” (Turner 1989:331) no debe interpretarse como la desmaterialización del poder o la desaparición de sus bases concretas, sino como un cambio en la forma como el poder se materializa y representa en las sociedades modernas. La imagen teológica de la doble naturaleza del cuerpo, con sus múltiples resonancias religiosas y políticas en el Occidente cristiano, puede desplazarse, como he mostrado, a los líderes políticos seculares o al cuerpo natural de la nación. La idea de Lefort de que la democracia moderna es una “sociedad sin cuerpo” o una “sociedad puramente social” depende de la

aceptación de concepciones fetichizadas del poder en las sociedades premodernas. En vez de examinar estas concepciones como constructos ideológicos, Lefort asume su significado-fetichista (“sabe que el rey en realidad no tiene dos cuerpos, pero aun así...”) reinscribiendo la separación mistificada de lo material y lo sociocultural que reflejan y expresan. Al reinscribir la separación entre prácticas materiales y constructos culturales en vez de dar cuenta de ella, el análisis de Lefort ejemplifica un enfoque discursivo dirigido a la desmitificación del poder estatal que vela las relaciones de explotación y dominación en el seno de las cuales el poder estatal se ejerce y logra sus efectos mistificadores³⁶.

Por ejemplo, a partir de la obra de Lefort, que parte a su vez de la de Kantorowicz, esta separación le permite a Slavoj Žižek analizar el dominio del Estado en términos de operaciones psico-ideológicas que reducen el Estado a una idea y hacen a los sujetos responsables de su sujeción: “Es el sujeto mismo quien, al comportarse con respecto al Amo como un súbdito, lo convierte en Amo” (1991: 263). De modo similar, Philip Abrams trata al Estado como una ficción que esconde la práctica real del poder político: “El Estado no es la realidad que se esconde tras la máscara de la práctica política. Es la máscara misma, que nos impide ver la práctica política tal cual es” (1988: 82)³⁷. Abrams sostiene que lo que existe -y lo que debiera convertirse en objeto de estudio- es tanto la real desunión institucional del Estado (“el sistema-Estado”) como el mensaje ideológico sobre su unidad (“la idea-Estado”) (1988:82). Si bien reconoce que el Estado es “un artefacto ideológico” (1988: 81) que debe estudiarse históricamente mediante la separación de la máscara (fictiva) de la práctica (real), privilegiando a esta última, deja pasar la oportunidad de conceptualizar la práctica del enmascaramiento y el enmascaramiento de la práctica como aspectos duales del proceso histórico mediante el cual se constituyen los Estados. El proceso de enmascaramiento es activo; no conlleva el ocultamiento de una realidad preexistente, sino su trans/formación. Superbarrio, el activista político mexicano que se presenta como un luchador enmascarado y que ha convertido su máscara en un rasgo definitorio de su rostro político y en un medio para desenmascarar a los políticos cuyas caras *son* sus máscaras, le dijo al público reunido en cierta ocasión en la Universidad de Harvard: “Desconfíen de todos los

³⁶ Para una lúcida crítica materialista de los enfoques semiológicos del tema del poder que incluye un análisis de la obra de Žižek, v. el importante artículo de Pietz (1993).

³⁷ El sugerente artículo de Abrams ha ejercido una considerable influencia sobre los estudiosos dedicados a la investigación sobre América Latina; p. ej., v. Joseph y Nugent (1994).

políticos que usan máscaras y no muestran sus verdaderos rostros”³⁸. Los análisis deben desestabilizar y no confirmar la separación entre máscaras falsas y rostros verdaderos. El Estado no es la máscara que nos impide ver la práctica política tal cual es; es la unidad mitificante de la máscara y lo enmascarado en términos de la cual se constituye la práctica política.



Mausoleo de la familia Gómez en el cementerio de Maracay. (Foto: Julie Skurski.)

En lugar de adoptar una visión limitante del Estado que se centre en la creencia de su poder (como hace Zizek), o que lo considera una idea fetiche en la cual no hay que creer (como afirma Abrams), sugiero que analicemos la producción histórica del Estado como un complejo mitificante de prácticas y creencias. Si una multiplicidad de particularidades produce la apariencia del Estado como una forma general única, este “efecto Estado” foucaultiano está ya presente en cada una de esas particularidades como su condición de posibilidad. La cosificación del Estado es a la vez el efecto y la condición de sus diversas objetivaciones. Lo que pudiera llamarse la “forma Estado” funciona mediante el establecimiento de una relación de equivalencia entre lo general y lo particular, lo abstracto y lo concreto. Como el dinero y el capital, el Estado no es una cosa o una idea, sino un complejo conjunto de relaciones sociales mediadas por cosas o por otras objetivaciones de la práctica

³⁸ Superbarrio pronunció esta frase cuando respondía a mi pregunta de si algún día se quitaría la máscara, durante la conferencia “Performance and Politics”, celebrada en la Universidad de Harvard en mayo de 1996. Su presentación o *performance* adoptó la forma del discurso de un candidato a la presidencia de EEUU en campaña electoral.

social. Estas objetivaciones no son ni entidades independientes con propiedades inherentes ni solo símbolos de relaciones sociales, sino el medio a través del cual se constituyen estas relaciones. “Las relaciones de producción social no solo se 'simbolizan' mediante cosas, sino que se realizan mediante cosas” (Rubin 1973:11). De ahí que sea mediante el examen de las objetivaciones históricas del Estado que podamos entender su configuración en una sociedad dada: su forma general particular.

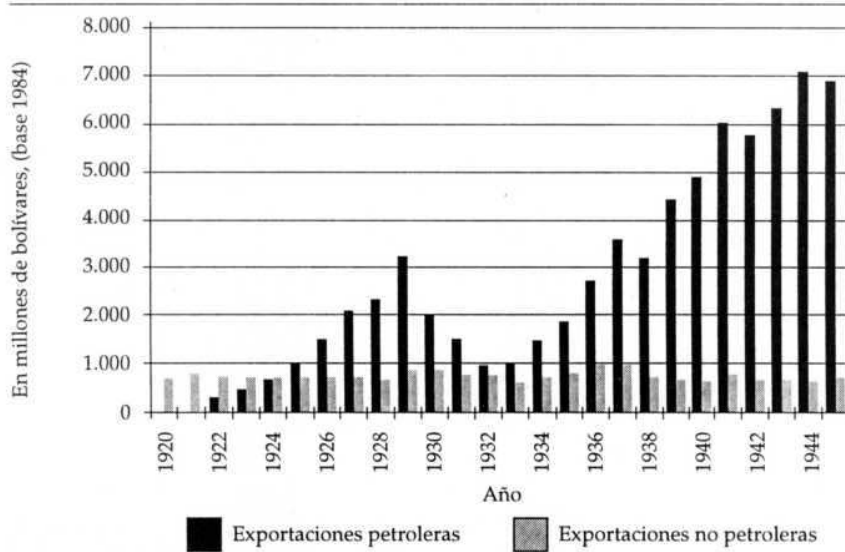
Mediante la revisión de trazas del pasado y de su memoria fragmentada, he tratado de brindar una visión de las políticas estatales y de las pugnas por el control del Estado que condujeron a la construcción de Venezuela como nación petrolera y a la reconfiguración de su Estado. En tanto nación petrolera, se imaginó a Venezuela como un país con dos cuerpos: un cuerpo natural (la fuente material de su riqueza) y un cuerpo político (sus ciudadanos), ambos representados por el Estado. Cuando hoy en día se invoca al espíritu de Gómez en su mausoleo en Maracay, o incorporado en una materia (medio espiritual), y este habla a sus seguidores en la montaña de Sorte, la autoridad de sus palabras resulta inseparable de las bases de su poder, tanto tiempo atrás sepultadas, como representante de los dos cuerpos de la nación. El poder del Estado democrático se sustenta sobre las mismas bases. Como veremos, si los que representan al Estado democrático aparecen como usurpadores del Estado (como es el caso de Carlos Andrés Pérez, depuesto y detenido entre 1993 y 1996 por uso ilegal de fondos estatales), no es solo porque ocupen un espacio que formalmente pertenece a todos, sino porque su actuación es colectivamente repudiada en términos de criterios históricos, de expectativas y normas históricamente construidas concernientes al papel del Estado como representante de una nación petrolera. Dado que tanto los Estados democráticos como los dictatoriales se han formado y evaluado según los términos de estos criterios, ha surgido un contrapunteo entre dictadura y democracia que continúa, como lo revela la presencia obsesiva del espíritu de Gómez hasta nuestros días.



Placa colocada en el mausoleo de la familia Gómez en el cementerio de Maracay.
(Foto: Julie Skurski.)

Gráfico 1

**Relación entre exportaciones petroleras y no petroleras (no rentistas),
1920-1945**



Fuente: Baptista 1991: 118.

Cuadro 3
Participación de la agricultura en el Producto Nacional Bruto, 1920-1945
(en millones de bolívares, base 1984)

Año	PNB (no rentista)	Agricultura	% agrícola en el PNB
1920	7.324,4	1.985,8	27
1925	14.587,3	2.929,0	20
1930	21.334,5	3.357,5	16
1935	20.090,3	3.627,2	18
1940	30.121,6	3.716,0	12
1945	40.733,9	3.870,7	10

Fuente: Baptista 1991: 114.

Cuadro 4
Participación del petróleo en el total de exportaciones, 1920-1945
(en millones de bolívares, base 1984)

Año	Total de exportaciones	Exportaciones petroleras (no rentista)	Exportaciones no petroleras	Total de % del petróleo en exportaciones
1920	677,2	-	677,2	0
1925	1.690,2	980,9	709,3	58
1930	2.803,6	1.964,3	839,3	70
1935	2.635,5	1.846,5	789,0	70
1940	5.484,3	4.871,6	612,7	89
1945	7.594,5	6.882,0	712,5	91

Fuente: Baptista 1991: 118.

Cuadro 5
Población urbana y rural, 1920-1945

Año	Población total	Población urbana	Población urbana/total %	Población rural	Población rural/total %
1920	2.992.468	490.765	16	2.501.703	84
1925	3.114.434	588.398	19	2.526.036	81
1930	3.300.214	749.844	23	2.550.370	77
1935	3.464.993	890.290	26	2.574.703	74
1940	3.783.780	1.169.188	31	2.614.592	69
1945	4.223.014	1.541.400	36	2.681.614	64

Fuente: Baptista 1991: 21, 22.

Segunda parte

Debut

Contrapunteo venezolano: dictadura y democracia



El general Marcos Pérez Jiménez, presidente de Venezuela, en el Palacio Presidencial.

(Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)



El general Pérez Jiménez frente a su mansión en España.

3. El 18 Brumario de la dictadura

*La característica que definía a Venezuela
-así como a la mayoría de los países latinoamericanos
en el siglo XIX- era el trágico contraste entre la realidad y la falsa fachada de leyes,
constituciones e instituciones importadas o traducidas de Europa a través
de las cuales enmascaramos, más que remediamos, nuestro atraso y nuestra negligencia.*

Mariano Picón Salas

*La tradición de todas las generaciones muertas oprime
como una pesadilla el cerebro de los vivos.*

Carlos Marx

Imágenes de la historia

La relación entre dictadura y democracia figura en la imaginación política latinoamericana como una manifestación más de la omnipresente confrontación maniquea civilización/barbarie, que ha definido la ambigua identidad del continente desde la conquista. Obras de ficción y recuentos académicos describen generalmente las naciones latinoamericanas como sociedades híbridas, atrapadas entre un orden primitivo y otro moderno. La oposición entre ambos modelos de gobierno, saturada de visiones coloniales e ideales republicanos, se remacha con imágenes imperiales de un pueblo atrasado que requiere de un control tutelar, y con imaginarios nacionalistas de una distintiva identidad latinoamericana.

Esta tensión entre el impulso casi obsesivo a catalogar las ancestrales deficiencias y el deseo no menos insistente de celebrar su singularidad histórica, anima las representaciones de la política latinoamericana. Mientras que los escritores de ficción tienden a concentrarse en el carácter singular de muchos caudillos y dictadores emblemáticos que han llegado a caracterizar la cultura política de América Latina, por lo general los científicos sociales se concentran en la construcción modernizadora de instituciones democráticas, y analizan las dictaduras como obstáculos al progreso.

De ahí que si observamos la agitada vida política del continente a través de las miradas combinadas de novelistas y científicos sociales es probable que lleguemos a sufrir de doble visión. Por un lado, un continente elusivo donde la historia se despliega como la criatura indomable de una fusión singular de

lo real y lo mágico¹. Por el otro, reconoceríamos pálidas réplicas de naciones canónicas del Primer Mundo², sociedades no tanto diferentes sino incompletas, cuya historia, aun cuando recorre caminos torcidos, se supone que debe evolucionar hacia un destino familiar³. El choque entre estas imágenes apunta menos a dos maneras distintas de ver la misma realidad que al modo como se entremezclan con la visión desde el imperio hasta los recuentos más desprejuiciados de ver la historia latinoamericana desde adentro. Si se quiere obtener una percepción más precisa, es necesario elaborar una perspectiva que evite tanto la tentadora fascinación de un exotismo nacionalista como el comfortable atractivo de una familiaridad extranjerizante: una perspectiva capaz de aprehender lo extraordinario en el seno de la creación cotidiana de una historia que aún está por escribirse.

En busca de este objetivo, me centraré ahora en varios golpes de Estado que permiten vislumbrar los términos en los que se libraron las luchas en torno del Estado en Venezuela. En el curso de esas luchas, imágenes contrapuestas de la democracia y la dictadura aparecieron como los adversarios fundamentales de un drama emancipador. Pero esos modelos de gobierno estaban tan vinculados el uno con el otro, tan condicionados por la economía del petróleo que los sustentaba, y tan profundamente saturados de una escatología colonial, que en ciertos aspectos llegaron a compartir atributos y a parecerse entre sí. Como en la Cuba agro-exportadora descrita por Fernando Ortiz en su clásico contrapunteo entre el tabaco y el azúcar, en la cual los agudos contrastes que originalmente distinguieran a estos productos formativos de la sociedad cubana se atenuaron cuando comenzaron a producirse en condiciones similares bajo el dominio del capital internacional (1995), en la Venezuela petrolera la oposición maniquea a través de la cual la democracia se ha definido en contraste a la dictadura se ha mermado bajo el impacto de las circunstancias comunes que han sustentado a regímenes tanto dictatoriales como democráticos.

El discurso político, los libros de texto y los medios de comunicación presentan convencionalmente la construcción de la democracia venezolana como una evolución con inicio en la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. Como indicaba en el capítulo previo, ello trajo consigo el fin de 27 años de gobierno y la incipiente liberalización del sistema político. Bajo los regímenes de los generales Eleazar López Contreras (1936- 1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945), los cambios

¹ Existen numerosas referencias literarias, pero quizás los textos esenciales sean *Facundo* (1845), de Domingo F. Sarmiento; *Pedro Páramo* (1955), de Juan Rulfo; *El señor presidente* (1946), de Miguel Ángel Asturias; *El otoño del patriarca* (1974), de Gabriel García Márquez; *El reino de este mundo* (1949) y *El recurso del método* (1974), de Alejo Carpentier; y *Yo el supremo* (1974), de Augusto Roa Bastos.

² Uso este término con las necesarias reticencias. Para una crítica históricamente fundada y culturalmente sensible de la taxonomía de los tres mundos, v. Pletsch.

³ Esta visión permea, de diferentes formas, las obras producidas a partir de los marcos de referencia, por otra parte concurrentes, de las teorías de la modernización, la dependencia y el marxismo.

producidos en las instituciones estatales reflejaron y facilitaron la paulatina participación y representación de grupos sociales en la política. Acción Democrática (AD) aceleró el proceso después del golpe de 1945, que lo proyectó al poder y a la elección en 1947 de su líder, Rómulo Gallegos, como primer presidente electo en Venezuela mediante el sufragio universal; el 24 de noviembre de 1948, nueve meses después de los comicios, su derrocamiento dio paso a una dictadura militar de 10 años, consolidada por un golpe palaciego el 2 de diciembre de 1952. El 23 de enero de 1958 la dictadura, a su vez, terminó a manos de otro golpe, que en esta ocasión tuvo amplio apoyo popular. A partir de 1958 el mando en Venezuela ha sido democrático. El punto de vista predominante es que la democracia se fortaleció después de la dictadura de 1948-1958, etapa considerada como una interrupción en la evolución democrática.

Mientras se consolidaban las instituciones democráticas locales, en el mismo periodo viejas democracias latinoamericanas se interrumpieron abruptamente. Entre 1964 y 1976 los regímenes democráticos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay cayeron por golpes militares. Luego la tendencia se revertiría, comenzando en la región un proceso de redemocratización. La democracia venezolana, que había impresionado a observadores extranjeros como una enigmática excepción durante la fase autoritaria de la política latinoamericana, ha sido proclamada como el modelo potencial para los regímenes surgidos tras las dictaduras militares que fracasaron en el propósito de lograr el progreso mediante la amarga pócima de orden político represivo y la ortodoxia económica. Considerada hasta hace poco tiempo una excepción, Venezuela ha llegado a ser vista como un ejemplo:

Para mí, entonces, el asunto clave es el siguiente: ¿hasta qué punto las condiciones que permitieron la restauración (en realidad, prácticamente la creación) de la hegemonía burguesa en Venezuela existen hoy en esos países? Lo que existe actualmente no es quizás nada más que una situación que hace posible ese desenlace, y el inicio del surgimiento, de país en país, de los elementos del “síndrome venezolano”: la restauración de la legitimidad de los políticos burgueses, el consenso de la elite, la definición de la democracia en términos de procedimientos, la posposición de temas conflictivos, la marginación de la izquierda y el fortalecimiento deliberado de los ejecutivos a expensas de los legislativos y de los líderes a expensas de los partidos...

En otras palabras, se aprecia una tendencia hacia la “democracia autolimitante” del tipo venezolano (Cammack 1986:44).⁴

⁴ La aguda caracterización que hace Cammack de la democracia venezolana es, al mismo tiempo, una descripción sucinta de sus logros y una crítica - inusual- que invita a reflexionar sobre sus limitaciones. Su comprensión de la importancia potencial que tiene para otros países latinoamericanos parece tomar como base la interpretación de Levine (incluida en el número de la publicación editado por Cammack) que minimiza el papel de los recursos petroleros en la creación de la democracia venezolana (1986:52).

Para los venezolanos, acostumbrados a varias décadas de estabilidad política, no es el periodo democrático, sino el periodo dictatorial de 1948- 1958, la anomalía. La mayoría de los analistas reproducen este punto de vista y consideran la dictadura como un paréntesis de oscuridad: se busca la comprensión de la democracia mediante el estudio de la propia etapa democrática. Sin embargo, como muestra la literatura revisionista -cuyo desarrollo reciente está relacionado con el renovado interés por Gómez como reflejo de la actual crisis de la democracia- la dictadura fue una época de cambios fundamentales que condicionaron el resurgimiento y la consolidación democrática después de 1958. En esta sección exploro la creación de la singular democracia venezolana a la luz de esta oscura dictadura.

Me aproximo de modo tangencial a la dictadura a través de algunos de los momentos clave de su creación y destrucción; el centro de mi análisis es una serie de golpes de Estado ocurridos entre 1945, cuando AD accede al poder e instaura un régimen democrático (1945-1948), y 1958, fecha del derrocamiento de Pérez Jiménez. Por tanto, la interpretación que sigue no pretende ser un análisis comprensivo del periodo. Se trata de un estudio de la orquestación de golpes de Estado vistos como rupturas históricas que nos permiten observar la formación y transformación de formas culturales e instituciones políticas durante el periodo.

Aunque los golpes de Estado por lo general marcan el establecimiento de un nuevo orden político, tal como las fases liminares de los rituales en sociedades relativamente estables (Tumer 1967: 95-106), son acontecimientos reflexivos y transformadores, momentos intermedios (*between and betwixt*) entre los tiempos corrientes, cuando los valores axiomáticos se invocan a la vez que se ponen en tela de juicio y se reformulan. Estas situaciones interestructurales, al expresar y rearticular valores básicos, arrojan luz sobre los principios de sustentación y las formas culturales de una sociedad.

Aunque mi análisis es necesariamente fragmentario, trato de ubicar estos golpes tanto en su contexto inmediato así como en el más largo proceso de transformación de Venezuela en nación petrolera.

Al arrojar luz sobre rasgos distintivos de la construcción de la democracia local, espero contribuir también a la abundante literatura dedicada al estudio de procesos de democratización en América Latina, donde figura a menudo como ejemplo exitoso de transición a la democracia⁵. Si el auge del autoritarismo de los años 60 trajo aparejado estudios que trataban de mostrar, según palabras de

⁵ La literatura sobre la democracia es vasta. Además de las fuentes citadas en este capítulo, me ha resultado especialmente útil la obra de Markoff (1996), así como toda la literatura sobre transiciones a la democracia. Para reseñas de esos textos, v. Mainwaring (1992) y Cammack (1986); para un análisis de sus premisas subyacentes, v. Coronil (1998). La mayoría de las referencias a Venezuela que aparecen en esta literatura se concentra en el periodo posterior a 1958. Para obras específicas sobre la democracia venezolana, v. Blank (1973), Bautista Urbaneja (1992), Levine (1973), Hellinger (1985) y Rey (1988).

Albert Hirschman, cómo un “vuelco específico de la marea política” tenía su origen en “un rasgo preciso del terreno económico subyacente” (1979: 68)⁶, el resurgimiento de los regímenes democráticos desde mediados de los 70 ha estimulado dos áreas de investigación: una que se concentra en la política o la acción, y otra que lo hace en la cultura o el significado. Ambas comparten una tendencia a enfocar cada área como un dominio relativamente independiente. Desde diferentes perspectivas, estas líneas de investigación marcan un desplazamiento del estudio de las interacciones entre niveles, instancias o dominios en el seno de la sociedad, hacia el de la acción política -de la problemática de la sociedad hacia la del sujeto humano.

Si bien son un correctivo necesario a la unilateralidad de marcos de trabajo previos (que dejaban poco espacio para los agentes humanos como actores políticos o como sujetos culturalmente constituidos), estas líneas de investigación, a su vez, muestran una tendencia a recrear la vieja unilateralidad en otro nivel, al no ubicar a los actores en sus contextos formativos⁷. Quizás, a contracorriente, este estudio insiste en buscar relaciones significativas entre la producción de la vida material, la creación de formaciones culturales y el ejercicio del poder. Lo que intento mostrar al centrarme en estas relaciones mutuamente condicionantes entre actores y estructuras, es la constitución recíproca de las esferas cultural, política y económica en vez de consolidar su apariencia como órdenes independientes.

Eligiendo la violencia, elecciones pacíficas

Durante los 27 años de gomecismo, no se permitió la existencia de organización de masas alguna. No obstante, 12 años después de la muerte del dictador se celebraron elecciones para elegir presidente y congresistas mediante voto directo y universal. Todos los venezolanos adultos, sin restricciones, pudieron votar en los comicios del 14 de diciembre de 1947 y elegir entre varios candidatos. El registro universal de votantes se estableció en Venezuela en fecha más temprana que en otros países latinoamericanos, y solo un año después que en Italia y Francia (Therborn 1977:11; 1978: 78). ¿Cómo explicar este giro relativamente rápido hacia la democracia electoral?

⁶ Hirschman, por supuesto, se refería a la obra seminal de Guillermo O'Donnell (1973).

⁷ Estos comentarios aluden solo a tendencias de la literatura contemporánea. El eje político se puede apreciar en la obra coordinada por O'Donnell, Schmitter y Whitehead (1986), quienes privilegian el conflicto político en el seno de los regímenes autoritarios para explicar las fuerzas que conducen a la transición a la democracia. Para una crítica de este punto de vista, v. Cardoso (1985:5). El énfasis discursivo en el estudio de la constitución de las identidades políticas caracteriza a una parte de la literatura sobre la democratización argentina, v. p. ej., Portantiero y De Ipola (1981).

Los estudiosos concuerdan en que la transición venezolana a la democracia en esta época formó parte de un movimiento hacia la democratización que siguió a la Segunda Guerra Mundial, y que intensificó un proceso interno de liberalización comenzado después de la muerte de Gómez; durante su mandato, los votantes, en principio, estaban situados a tres pasos de distancia de la elección del presidente. La Constitución estipulaba que todos los varones mayores de 21 años elegían representantes a los concejos municipales y las legislaturas estatales, quienes elegían legisladores nacionales, que a su vez elegían al presidente; en la práctica la elección recaía siempre en Gómez. López Contreras, su sucesor, dio pasos para liberalizar el proceso político en respuesta al rechazo colectivo a la dictadura gomecista.

En Caracas, el 14 de febrero de 1936, una demostración pacífica reprimida con violencia, seguida de una serie de protestas, pusieron de manifiesto la presencia de nuevos actores urbanos. El presidente López Contreras adquirió perfil de moderado al deponer al entonces gobernador del Distrito Federal, responsable de la represión, y restaurar las garantías constitucionales. También anunció su Programa de Febrero, el primer plan comprehensivo de desarrollo del país, que era en realidad un amplio programa reformista redactado por algunos de los más importantes intelectuales y que consistía en modernizar la economía y el Gobierno. En abril de 1936 el Congreso Nacional ratificó a López Contreras, quien se comprometió a poner en práctica el programa reformista en su condición de presidente constitucional hasta 1941.

En la medida en que estos nuevos actores urbanos se convertían en una fuerza política más organizada, sus demandas de reformas sociales fundamentales y de elecciones universales directas adquirieron una resonancia mayor y empezaron a ganar a los trabajadores más radicales del sector petrolero. En diciembre de 1936 estos trabajadores organizaron en el estado Zulia una huelga que se convertiría en un hito de la historia venezolana. Las demandas por mejoras en los pagos y en las condiciones de trabajo y a favor de la creación de un sindicato, galvanizaron a la población conformándose así un movimiento de apoyo nacional a la huelga. Para tratar de neutralizarlo, López Contreras se mostró dispuesto a satisfacer de modo parcial las demandas salariales, pero rápidamente utilizó la Ley Lara, una norma contra las organizaciones comunistas que había sido sancionada en 1936 por un Congreso gomecista para disolver los grupos de izquierda.

El Congreso posgomecista también revisó las regulaciones electorales (que durante Gómez habían tenido una importancia meramente formal). La Constitución restringía el voto a una pequeñísima parte de la población compuesta por varones mayores alfabetizados. Según un historiador, “este

comportamiento, es decir, la liberalización de la política y después la represión de la acción política resultante de ella, ilustra un patrón de la política venezolana posgomecista”, y no “la falta de sinceridad del compromiso de López Contreras con los sistemas políticos democrático o participativo” (Lombardi 1982: 221). Con independencia de las motivaciones de López Contreras, es obvio que esta restricción no constituía un giro hacia un gobierno autocrático, pero sí expresaba el esfuerzo de la elite gobernante por limitar la extensión de los derechos democráticos y su ansiedad en lo concerniente al cambio de las circunstancias.

La integración de los intereses populares y de la elite en un centro reformista se convirtió en una característica de los proyectos políticos hegemónicos. Si el populismo alimenta la fantasía de la unidad nacional mediante la identificación del pueblo con la nación, en Venezuela la expectativa de que el bienestar general se lograría mediante la transformación financiada por el petróleo convirtió esta fantasía en una ilusión de armonía colectiva. Pero desde el inicio la construcción de esta ilusión de armonía tuvo como premisa el control reformista sobre la industria del petróleo y la exclusión por la fuerza de demandas radicales planteadas tanto por la elite como por sectores populares⁸.

Al final de su régimen, López Contreras permitió que los grupos reprimidos participaran en las elecciones presidenciales, los cuales, dado lo limitado del registro de votantes, advertían que el presidente podía imponer a su candidato. Por ello, en lugar de fragmentarse en una contienda electoral sin posibilidades, la izquierda se unió en torno de un candidato simbólico, Rómulo Gallegos. Como se esperaba, el Congreso eligió a quien López Contreras había elegido como su sucesor: el ministro de Defensa, general Isafías Medina Angarita (en estas elecciones solo votaron alrededor de 400.000 personas).

Más joven que López Contreras y sin vínculos personales con el régimen de Gómez, Medina, con un compromiso más fuerte con la liberalización del sistema político, permitió a los partidos políticos organizarse con más libertad y presentar candidatos en las elecciones municipales y estadales de 1942. Durante su gobierno, una reforma constitucional les concedió a las mujeres el voto en las elecciones municipales, y a los hombres que sabían leer y escribir el voto directo para sufragar, quienes a su vez elegían al presidente (es decir, ya no de manera indirecta a través de representantes municipales que elegían a los congresistas).

A partir de 1936 los líderes de la Generación del 28, quienes se proclamaban representantes de la

⁸ He tomado el concepto de “ilusión de armonía” del título de un libro editado por Naim y Piñango que analiza diferentes aspectos de esta ilusión después de que comenzara a disiparse (1985).

nación posgomecista, habían exigido el establecimiento de elecciones directas a la presidencia y al Congreso mediante el sufragio universal. Cuando Medina llegó al poder, el intento de esos líderes de crear un partido unificado de izquierda, el Partido Democrático Nacional (PDN), había fracasado. Los comunistas se separaron del PDN en 1938 para formar el Partido Comunista de Venezuela (PC), con lo que el PDN quedó bajo control de Betancourt. Mientras que los comunistas apoyaron a Medina como parte de la política de Frente Unido para combatir al fascismo, en 1941 los líderes del PDN fundaron Acción Democrática, uno de cuyos principales objetivos políticos fue la reforma del sistema electoral. Al terminar el periodo presidencial de Medina, AD aprobó que el civil Diógenes Escalante fuera su sucesor, porque contaba con su promesa de establecer el sufragio universal. No obstante, Escalante debió retirarse de la contienda por razones de salud, y Medina eligió a otro candidato civil, Ángel Biaggini, que al no sostener una promesa similar se ganó la desconfianza de AD. Las ambiciones políticas de este partido parecían de repente frustradas: resultaba difícil imaginar que pudiera ganar unas elecciones mientras la masa de votantes siguiera restringida a una pequeña minoría. AD comenzó a impacientarse y en ese momento encontró un aliado insólito, inquieto por la lentitud de los cambios en el ámbito militar. Un grupo de oficiales de mediana graduación, muchos de los cuales habían recibido entrenamiento en el extranjero y se habían formado en ideologías desarrollistas que les asignaban a los militares un papel relevante en los proyectos nacionales, se sentían marginados por las camarillas que lideraban el ejército y aspiraban a acelerar el ritmo de las reformas políticas y de la promoción profesional. Dirigidos por el comandante Marcos Pérez Jiménez, quien se había graduado con altas calificaciones en academias militares de Venezuela y Perú, estos oficiales formaron un movimiento, la Unión Patriótica Militar (UPM), cuyo objetivo expreso era hacerse del Gobierno para imponer la “decencia” y el “patriotismo” en el Estado, fundar instituciones democráticas y fomentar el desarrollo de la nación.

Uno de los documentos secretos de la UPM ilustra la vaga mezcla de retórica patriótica y nacionalismo militar que alimentaba sus planes. Los líderes, que se definían como demócratas, señalaban que su objetivo consistía en renovar las instituciones y métodos de gobierno, e incluir en el Gobierno “normas y hombres que con sentido de verdadero patriotismo y decencia política, hagan efectivo el progreso de la Nación, llevándola a ocupar el puesto de avanzada a que tiene derecho por su pasado glorioso” (Krispin 1994: 63). Afirmaban su compromiso con la democracia, que definían como la expresión de la unidad nacional mediante elecciones universales: “no defendemos intereses personales ni de clase y propiciamos la formación de un gobierno que tenga por base el voto universal

y directo de la ciudadanía venezolana, una reforma de la Constitución que sea asimismo expresión de la voluntad nacional y la creación de un ejército verdaderamente profesional” (Krispin 1994: 63). Señalaban que había que “limpiar” la institución militar de elementos viejos e incompetentes, que eran la causa de su atraso. La declaración concluía con el juramento de conspirar en secreto hasta dar cumplimiento a su “sagrada misión”.

Aunque estos oficiales tenían confianza en que podrían derrocar a Medina, abrigaban dudas, dadas sus estrechas bases políticas y su aislamiento respecto de importantes grupos sociales, acerca de su capacidad para controlar el Estado. Aunque el comandante Pérez Jiménez propuso en un inicio tomar el poder y después convocar a civiles “destacados” a participar en el Gobierno, la mayoría de los oficiales se sumó a la propuesta del teniente Horacio López Conde de invitar a AD a participar en el golpe desde el principio.

Los oficiales rebeldes forjaron la alianza entre la UPM y AD en varias reuniones a las que asistieron representantes de ambos grupos. Rómulo Betancourt y Raúl Leoni participaron en la primera reunión, y en otras sesiones dedicadas a planear las acciones se les sumaron Luis Beltrán Prieto y Gonzalo Barrios. Todos decidieron mantener en secreto su participación, ostensiblemente para cargar ellos solos con la responsabilidad en caso de que el golpe fracasara; consta que ni Gallegos ni Andrés Eloy Blanco, respectivamente presidente y vicepresidente del partido, estaban enterados⁹. Tras varias reuniones, se acordó que AD encabezaría la Junta y que solo dos de los oficiales, Mario Vargas y Carlos Delgado Chalbaud (los de mayor grado militar y estatus social), participarían en ella¹⁰.

AD era un partido con base en las masas, pequeño pero en expansión, que había intentado llegar al poder mediante elecciones desde su fundación en 1941. En el cumplimiento de esta estrategia, sus líderes habían realizado un amplio trabajo con las bases. En los sectores rurales establecieron un importante y duradero sostén y entre los sectores urbanos lograron un apoyo significativo entre los trabajadores de cuello blanco, los maestros y los profesionales de nivel medio, pero competían con los comunistas por el control de los trabajadores del petróleo y el proletariado urbano organizado. Sin embargo, el principal obstáculo que enfrentaba AD era lo que percibía como el lento ritmo de la reforma electoral. Cuando Escalante enfermó y Biaggini no prometió la rápida puesta en práctica del

⁹ Es probable que otra razón para ocultar esta decisión a Gallegos y a Blanco haya sido evitar su probable desaprobación, dadas la objeción principista de Gallegos a acciones políticas ilegales y violentas, y las inclinaciones de Blanco y su enorme respeto por Gallegos. Éste ocupaba la presidencia de AD porque en tanto novelista y educador de prestigio internacional se le consideraba una figura no partidista. Andrés Eloy Blanco, poeta sumamente conocido en Venezuela, compartía con Gallegos una presencia nacional de persona no sectaria que ejercía un atractivo sobre un amplio público. No obstante, era Rómulo Betancourt, el secretario general, quien ejercía el verdadero control sobre el partido. La UPM estuvo representada en estas reuniones por Marcos Pérez Jiménez, Carlos Morales, Martín Márquez Áñez, Horacio López Conde y Francisco Gutiérrez Prado.

¹⁰ Los datos están tomados de la obra de Krispin, quien brinda un recuento detallado del golpe de 1945 (1994:51-74).

sufragio universal, los líderes de AD aceptaron rápidamente la opción no democrática. La vertiginosa urbanización y expansión económica estimuladas por el crecimiento de la economía petrolera fomentó la sensación generalizada de que el progreso estaba a la vuelta de la esquina; no se podía hacerlo esperar.

El 16 de octubre de 1945, líderes de la UPM y Rómulo Betancourt se reunieron en secreto por última vez antes del golpe. Ambas partes asumieron responsabilidades específicas. Mientras que los militares controlarían los cuarteles clave y el fuertemente armado Palacio Presidencial de Miraflores, AD garantizaría el apoyo civil. Sin embargo, en un país muy centralizado, con una elite relativamente pequeña unida por vínculos familiares, de amistad y de negocios, era difícil guardar secretos. El capitán Elio Quintero Medina, quien había tenido noticias del golpe por intermedio de su amigo, el capitán Wolfgang Larrazábal, advirtió a su tío, el general Medina.

Para evitarlo, el general Medina arrestó, en la mañana del 18 de octubre de 1945, al comandante Pérez Jiménez. Pero otros líderes de la UPM dieron el golpe tal como se había planeado. Los oficiales rebeldes tomaron la Academia Militar y el Palacio Presidencial y arrestaron a ministros de Medina, quien junto a oficiales leales combatieron a los rebeldes en el Cuartel Ambrosio Plaza. El jefe de la policía de Caracas, que se mantuvo leal, le pidió permiso a Medina para atacar la Academia Militar, pero el presidente se negó con el argumento de que había sido capitán de la compañía de cadetes de la Academia durante 17 años, y que no quería ser responsable de la muerte de oficiales jóvenes.

Se dice que Medina creía que la rebelión se limitaba a Caracas y que asumía que pronto se sofocaría. Pero el 19 de octubre supo que el Cuartel Maracay, el más importante de Venezuela, también estaba bajo control de los rebeldes. Aviones de Maracay atacaron a los regimientos leales de Caracas, entre ellos el Cuartel San Carlos, defendido por la policía. Cuando los aviones hicieron blanco en el Cuartel, la policía lo abandonó, por temor a que las bombas incendiaran el arsenal. En medio de la confusión que se produjo, sectores populares, resentidos por el continuado abuso policial, se unieron a los militares y saquearon el Cuartel San Carlos. Aparentemente, el presidente Medina, preocupado por el curso de los acontecimientos y tratando de evitar un baño de sangre, decidió aceptar públicamente su derrota. Poco después la policía se rindió a los militares. El golpe había terminado. La nueva Junta gobernante estaba compuesta por los líderes de AD: Rómulo Betancourt (presidente), Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto, Gonzalo Barrios y Edmundo Fernández; y por dos oficiales del ejército: Carlos Delgado Chalbaud y Mario Vargas. El golpe, orquestado en secreto en la cúpula, pronto fue glorificado por AD como la "Revolución de Octubre".

Elecciones universales: purificando la nación

Desde la Independencia, el lenguaje de la revolución había magnificado la importancia de los repetidos realineamientos del poder estatal en Venezuela. Después de la muerte de Gómez, como parte de la lucha hemisférica contra el fascismo y el comunismo, pero también como resultado de esfuerzos internos para construir una amplia coalición progresista, el Estado y la izquierda habían gravitado hacia el centro político y el lenguaje del reformismo había llegado a ser el marco del discurso político (Dávila 1992: 101).

El golpe de 1945 contra Medina se convirtió en una apertura histórica para la rearticulación del lenguaje de la revolución. Al definirlo como acontecimiento revolucionario, AD dividió la historia del país en dos periodos y se autoconstituyó como agente del progreso nacional. De pronto, el nacimiento de la Venezuela moderna se había desplazado a 1945, fecha que asumió también la “muerte histórica” de Gómez¹¹. Paradójicamente, en nombre del establecimiento democrático, AD llegó al control del Estado por medio de un golpe violento contra un régimen constitucional cuyos pasos hacia la democracia eran ampliamente reconocidos. AD enfatizó que este golpe era un medio para establecer el sufragio universal y, por tanto, la verdadera democracia, diferenciándolo así de los golpes de Estado que se limitaban a cambiar el grupo que ocupaba el poder. Obligado a legitimar sus acciones, pero también presa del espíritu de los tiempos, AD presentó el sufragio universal como un acontecimiento que abría una nueva época y que justificaba el golpe como medio para poner en práctica la democracia. Un connotado historiador venezolano muy cercano a AD afirmaba que “todos los venezolanos de 1945, creíamos en el voto universal como el milagro de la purificación nacional” (Velásquez 1979: 75-76; Dávila 1992: 39).

¹¹ Para la historiografía de AD, 1936 es un hito moderno porque marca los orígenes de AD con la fundación de ORVE (Movimiento de Organización Venezuela), agrupación de la que nació AD (Dávila 1992:56). Este punto de vista también está presente en recuentos de ficción, como la novela *Cantaclaro*, de Gallegos, en la que Juan Crisóstomo Payara, cuyo modelo es el caudillo Roberto Vargas Díaz, hace referencia al golpe de 1945 como el origen real de la modernidad venezolana, el momento cuando “Gómez realmente murió”.



La Junta Revolucionaria de Gobierno, 19 de octubre de 1945. De izquierda a derecha, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Carlos Delgado Chalbaud, Rómulo Betancourt, Mario Vargas, Valmore Rodríguez y Gonzalo Barrios. Junto al micrófono, Edmundo Fernández. (Fundación Andrés Mata.)

Una vez en el poder, AD procedió rápidamente a establecer las elecciones universales. Primero, en 1946 se eligió por voto universal un nuevo Congreso Nacional. Este se dio a la tarea de redactar una Constitución y una ley electoral nuevas. El tan perseguido objetivo se había logrado: la Constitución concedía el sufragio a todos los ciudadanos mayores de 18 años, eliminaba el requisito de saber leer y escribir y la exclusión de las mujeres, y establecía la elección directa de presidente, Congreso y representantes municipales. El 14 de diciembre de 1947 Rómulo Gallegos, al que se conocía como “el maestro”, fue electo presidente con casi 75% de los votos¹².

Con estas elecciones AD intentaba legitimar su ascenso al poder e identificar el sufragio universal con la democracia.

La transición hacia la democracia

Resulta difícil explicar esta transición relativamente rápida y apacible. Las condiciones que la mayoría de los analistas asocian con el surgimiento y establecimiento de la democracia burguesa existían en Venezuela solo de manera parcial. Para muchos teóricos, el desarrollo del capitalismo y la

¹² En las elecciones congresionales de 1946, AD obtuvo 78,4% de los votos (1.100.000); Copei, 13,2% (185.000); la URD, 4,2% (59.000); y el PC, 3,5% (50.000). En las elecciones presidenciales de 1947, AD obtuvo 74%; Copei, 22,4%; y el PC, 3,1%.

competencia entre grupos sociales con intereses opuestos es una condición básica para que surjan instituciones democráticas (Therborn 1977: 28). Sin embargo una clase media en expansión, pero dependiente del Estado; un proletariado combativo, pero pequeño y aislado; y un campesinado que menguaba y que carecía de organización política, parecían ser fuerzas débiles para impulsar la democratización venezolana.

Una explicación del surgimiento de la democracia enfatiza el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la política interna (Carrera Damas 1980). La lucha internacional contra el fascismo estuvo ligada en el hemisferio a la promoción de fuerzas políticas de la democracia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética respaldaron el establecimiento de regímenes reformistas. Venezuela adquirió una importancia especial durante el conflicto, porque proveía en tiempo de guerra a EEUU -cuyo abastecimiento era amenazado por Alemania- de una mercancía estratégica. El gobierno estadounidense trató de oponerse tanto a la influencia alemana como a la comunista en Venezuela, mediante la promoción de reformas democráticas y de lazos económicos y culturales más estrechos. Esta perspectiva considera que la democracia fue promovida también desde el exterior, y que no se generó solamente en el país.

Es obvio que no es esperable encontrar en Venezuela una réplica de las condiciones internas en medio de las cuales surgió la democracia en las naciones capitalistas avanzadas. No hay duda de que factores externos vinculados a la lucha mundial contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial desempeñaron en esta época un papel esencial en el establecimiento del sufragio universal en Venezuela. Pero las condiciones externas tuvieron impacto porque existían también fuerzas sociales internas que apostaban a la democracia. En Venezuela, la lucha en pro de la democracia se desarrolló como una lucha contra el gomecismo y contra el comunismo. Después de la muerte de Gómez, la oposición al gomecismo demandó con efectividad una redefinición radical del Estado y estableció los términos que definirían el discurso político nacional a partir de entonces. En el discurso público, el gomecismo llegó a ser identificado con la privación de las libertades políticas y con la privatización del poder y la riqueza del Estado.

Por el contrario, el logro de la democracia se identificó con la participación de la ciudadanía en el sistema político y en la riqueza de la nación. Si Gómez había utilizado al Estado para enriquecerse y llevar adelante sus objetivos personales, se afirmaba que un régimen democrático invertiría la riqueza de la nación en proyectos que beneficiarían a la colectividad y harían que Venezuela se sumara al

mundo moderno. La idea de la democracia adquirió un contenido específico y prendió en la imaginación nacional gracias a la tentadora promesa de que un sistema democrático le daría al pueblo el derecho a participar en el sistema político y a beneficiarse de la enorme riqueza de la nación. La unión del poder y el dinero, de los derechos políticos y los derechos económicos, que sería el resultado de la unión mediada por el Estado de los cuerpos físico y político de la nación, le dio a la democracia venezolana su forma distintiva.

Sembrando el petróleo: erosionando la democracia

Aunque había sido Arturo Uslar Pietri, una de las víctimas de los juicios celebrados por AD en 1945 contra las personas que se habían enriquecido gracias al régimen de Gómez, quien había acuñado la consigna “sembrar el petróleo”, AD la abrazó como propia y la convirtió en el principio rector de su programa económico¹³. Esta era una metáfora adecuadamente ambigua. La idea de sembrar unía una conocida práctica agrícola a la tarea de emprender nuevas empresas productivas. De ahí que invocara una imagen familiar -sin especificar la forma o dirección que adoptaría- para la idea relativamente nueva de que los ingresos provenientes del petróleo debían emplearse para desarrollar empresas modernas. Como metáfora clave en narrativas del progreso y la abundancia nacionales, contribuyó a dar un rodeo que evitara temas conflictivos relacionados con las clases o los privilegios, y proyectó en las mentes imágenes de fecundidad colectiva que se lograría mediante la unión productiva del petróleo y la agricultura, ámbitos separados que los niños aprendían a llamar en las escuelas el reino mineral, el reino vegetal. El Estado, que presidía estos reinos de la naturaleza, parecía ser el gran alquimista encargado de convertir el dinero proveniente del petróleo en inversiones agrícolas e industriales productivas y, por tanto, de transformar la vasta pero agotable riqueza de Venezuela en riqueza social permanente.

Si miramos el gasto estatal entre 1936 y 1948, observamos que este objetivo condujo a un gradual desplazamiento del gasto militar y administrativo al gasto social -en especial en salud y educación- y al creciente fomento de la industria nacional (Hausman 1981: 313-356). Pero durante el trienio de AD se produjo un cambio significativo. Respaldado por un incremento presupuestal de 240% entre 1945 y

¹³ Como Arturo Uslar Pietri había colaborado con el presidente Medina, tras el golpe de 1945 tribunales creados por AD para juzgar a quienes habían recibido beneficios por su asociación con Gómez y sus sucesores lo acusaron de corrupción. Estos juicios prejuiciados fueron una de las fuentes del descontento con las políticas “sectarias” de AD. En respuesta al proceso, Uslar criticó duramente a Betancourt y a AD. No obstante, AD no se limitó a adoptar la frase de Uslar como su consigna, sino que la incluyó en el logo de la Corporación Venezolana de Fomento, una agencia del Estado fundada en 1946 para fomentar empresas industriales y agrícolas.

1948, el Gobierno intentó vincular su plan de desarrollo nacional -democracia más industria- a la consolidación de AD como partido.

Durante el trienio, AD diseñó políticas encaminadas a fomentar la diversificación económica y a crear programas de bienestar social para la población trabajadora. Sin embargo, su incapacidad para incluir a otros partidos nacientes en la administración o el proceso político y su utilización de los programas gubernamentales para fortalecer su propia base dio como resultado su alejamiento de estos grupos, que lo acusaron de favoritismo y sectarismo. AD, que utilizaba al Estado para aumentar su nivel de apoyo entre campesinos y trabajadores, promulgó leyes de aumentos salariales y subsidios a los productos de consumo básicos, y fomentó la organización política de esos sectores. El salario real promedio diario aumentó de 7,15 bolívares en 1944 a 11,71 en 1948 (Hausmann 1981: 323). El número de sindicatos urbanos creció de 215, con un total de casi 25.000 miembros en 1945, a 1.047 con casi 140.000 miembros en 1948; en el sector rural la expansión fue de 53 sindicatos con menos de 4.000 miembros en 1945, a más de 500 sindicatos con más de 40.000 miembros en 1948 (Powell 1971: 79).

También, AD apoyó el desarrollo de un sector empresarial local mediante el establecimiento de fuertes vínculos con sus líderes y organizaciones, el fomento de políticas a favor de una ampliación de la participación privada en la industria y la agricultura y la concesión de créditos con bajos intereses por intermedio de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), creada en 1946 como un instituto autónomo vinculado al Ministerio de Fomento. El presupuesto del Ministerio creció en 700% durante el trienio, lo cual reflejaba la importancia que el Gobierno concedía al fomento de la industria. Su agencia más dinámica era la CVF, la cual, en estrecha cooperación con el capital privado, inició estudios para el desarrollo de industrias básicas en los sectores del acero, la petroquímica y la energía hidroeléctrica.



Rómulo Gallegos durante la campaña presidencial de 1947.

(Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

Sin embargo, la creciente influencia del Estado y el empleo de sus abundantes recursos en diversas áreas dieron lugar a aprensiones de que AD monopolizaba el poder político. La expresión más reveladora de este temor se produjo en respuesta al Decreto 321, una orden del Ejecutivo mediante la cual intentaba aumentar y homogeneizar los niveles educativos. La medida afectó en especial a las escuelas religiosas, a las cuales asistían niños de las clases media y alta, círculos donde muchos la consideraron una amenaza a su poder social y al poder de la Iglesia. El decreto, emitido el 30 de mayo de 1946, en vísperas de los exámenes finales, establecía que los maestros del sistema de escuelas públicas evaluarían los exámenes finales de las escuelas privadas. El decreto dio lugar a una protesta colectiva tan enérgica por parte de la Iglesia, los estudiantes y los padres que el Gobierno decidió desistir de su política, y el ministro de Educación, Humberto García Arocha, renunció a su cargo.

Sin embargo, en líneas generales AD respondió a lo que muchos consideraban su monopolización del poder con una mayor concentración en manos de la Junta de Gobierno. Apartándose significativamente de su programa, que especificaba que los gobernadores se elegirían en cada estado, AD otorgó poderes al presidente para nombrar a los gobernadores estatales. Preocupado por la existencia de conspiraciones y robustecido por el apoyo recibido en las elecciones, el Gobierno aprobó un decreto que fortalecía los poderes del Ejecutivo y limitaba temporalmente las garantías constitucionales. AD, actuando de una manera que llegaría a ser típica de la conducta del Estado

petrolero, contrarrestó la posible impopularidad de esta medida, que eliminaba derechos políticos sustantivos, fabricando la ilusión de progreso colectivo mediante la transformación de dinero procedente del petróleo en logros concretos. Durante la celebración del 1º de Mayo en 1947, Betancourt prometió 3.000 casas a los trabajadores en todo el país y 5 millones de bolívares en préstamos para construcción de viviendas para la clase media (Dávila 1992: 118).

Quizás los ejemplos más reveladores de la brecha entre las afirmaciones retóricas y los logros sustantivos se produjeron en el sector petrolero. Un aumento de 240% en los ingresos del Estado entre 1945 y 1948 reflejaba la coincidencia de una política posterior a Gómez consistente en incrementar los impuestos a las compañías petroleras y el brusco aumento de las ganancias de las compañías como resultado de la expansión de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Betancourt, en su calidad de presidente del gobierno provisional tras el golpe de 1945, aprovechando el auge de las ganancias de la industria petrolera, usó la ley del petróleo de Medina, aprobada en 1943, con el fin de obtener 58% de las ganancias mediante un aumento del impuesto sobre los ingresos, que lo elevó a 28,5%. En ese momento se proclamó que la medida era un triunfo nacionalista. Pero con el continuo incremento de los precios del petróleo, las ganancias de las compañías siguieron aumentando mientras que la participación de Venezuela en las mismas decreció a 53% en 1946 y a 52% en el año siguiente. El Estado sólo podía tener más entradas -el ansiado objetivo de 60% de las ganancias de la industria petrolera- si aumentaba aún más el impuesto sobre los ingresos de la industria del petróleo. Pero se había llegado a un tope; el nivel local del impuesto sobre los ingresos era igual al de EEUU (28,5%). Cualquier incremento ulterior habría reducido de modo directo las ganancias de las compañías petroleras.

Las compañías empezaron a ejercer una presión considerable sobre el Gobierno. La producción de petróleo en el Medio Oriente -que se caracterizaba por los bajos costos de producción y los reducidos pagos por concepto de rentas- se ampliaba con rapidez, mientras que en Venezuela estaba estancada. Las compañías petroleras, que habían comenzado a orientar sus inversiones hacia el Medio Oriente, amenazaban con retirarlas de Venezuela. En respuesta a estas presiones, AD modificó las regulaciones del impuesto sobre los ingresos en 1948, pero presentó el nuevo código como un avance para el Estado. Este establecía el principio de 50-50, esto, es, la división a partes iguales de las ganancias entre el Estado y las compañías.

El nuevo código fue un triunfo de la retórica nacionalista. La ley del petróleo de 1948 establecía el principio de 50-50, eliminando la distinción entre *royalties* e impuestos sobre los ingresos. La

participación venezolana de 50% en las ganancias de la industria se determinaría mediante la suma de royalties e impuestos sobre los ingresos. Este, incluido en la ley de Medina de 1943 como una herramienta para que Venezuela capturara toda la plusganancia, se ató ahora a una fórmula que obligaba al Estado a compartirla con las compañías. Como ha mostrado Mommer, esta regulación redujo el poder estatal para transformar las plusganancias en ingresos. Según la interpretación revisionista de este autor, la victoria nacionalista proclamada por AD a partir del acuerdo de 50-50 esconde un significativo retroceso “cuantitativo” y “cualitativo” (1983: 32)¹⁴.

La maximización de los ingresos provenientes del petróleo había sido el objetivo central de la política petrolera. Esta meta unía a la mayoría de los grupos del país contra las compañías foráneas. Pero la moneda petrolera tenía otra cara: dados el enorme peso en la economía de los ingresos provenientes del petróleo y las demandas por el acceso a ellos, su empleo tuvo un efecto intrínsecamente divisionista. Grupos locales conspiraban activamente contra el Gobierno. Las compañías petroleras, preocupadas por las presiones dirigidas a incrementar la participación estatal en las ganancias, no eran insensibles a la creciente oposición al gobierno de AD¹⁵.

El golpe de 1948: una soledad aterradora

El gobierno de Rómulo Gallegos duró sólo nueve meses. Aunque AD había logrado hacer fracasar

¹⁴ Sobre la base de un cuidadoso trabajo en los archivos, Margarita López-Maya ha enfatizado las condiciones excepcionalmente favorables en medio de las cuales se aprobó la legislación de Medina sobre el petróleo en 1943, y la oposición que tuvo que enfrentar AD cuando trató de incrementar los ingresos estatales provenientes del petróleo después de 1945 (1994:159-221; 387-389). A diferencia de Mommer, para ella el acuerdo que establecía el principio de 50-50 fue un significativo logro nacionalista. Si bien el tema requiere más investigación, considero que los datos de López-Maya sobre la relación entre las compañías petroleras y los gobiernos venezolano y estadounidense en 1945-1948 no contradicen la interpretación de Mommer, cuya base es la distinción entre rentas e impuestos como fuentes de ingreso del Estado (1986:74-96). Para una interpretación que apoya los argumentos de Mommer, v. Espinasa (1989). Agradezco a López-Maya haber compartido conmigo sus puntos de vista sobre el tema.

¹⁵ Valero ha planteado que las compañías petroleras y sus gobiernos de origen (en especial la Standard Oil y EEUU) estaban atentos al acontecer político de Venezuela y desempeñaron un papel cauteloso en el golpe de 1945 (1993); en vez de favorecer a uno de los grupos en contienda, mantuvieron abiertas sus opciones. Todavía se debate sobre el papel que desempeñaron en el golpe de 1948. Es bien sabido que Gallegos acusó al gobierno de EEUU de respaldar el golpe sobre la base de la presencia del agregado militar estadounidense, el coronel Adams, en el Palacio de Miraflores el 24 de noviembre de 1948. Gallegos escribió al presidente Truman una comunicación en la cual acusaba a EEUU de promover el golpe. En su respuesta, Truman aseguró a Gallegos que su gobierno no había desempeñado ningún papel en el mismo. Su embajador le había informado que el coronel Adams había actuado a título personal, y que había ido al Palacio Presidencial sólo para obtener información de primera mano. Este asunto delicado no prosperó más y desde entonces no se ha arrojado nueva luz sobre el oscuro episodio. Para un análisis muy cuidadosamente investigado, pero aún no conclusivo, sobre este tema, que toma como base materiales de la embajada y el Departamento de Estado de EEUU, ver López-Maya (1994; 361- 377). Krispin ha planteado que la presencia del coronel Adams fue casual. Sobre la base de informes de la embajada estadounidense y de recuentos de observadores, incluido Betancourt, no asigna a EEUU ningún papel en el golpe (1994: 103-120). Bravo hace una interpretación diferente, en la que resalta la existencia de conflictos entre las compañías estadounidenses, que resentían el trato preferencial que AD le otorgaba a la Standard Oil de Rockefeller; y la presencia de diferencias entre el coronel Adams y el embajador estadounidense, Walter Donnelly, quien simpatizaba con el régimen. Sobre la base de las evidencias presentadas por Bravo, Ocarina Castillo apunta a la amplitud de los contactos establecidos por la embajada y la misión militar estadounidense en Venezuela, la presencia de una red oculta de intereses económico-militares que subyacía a programas dirigidos a la uniformación de los ejércitos latinoamericanos y la defensa de la seguridad hemisférica, y la prioridad absoluta que EEUU le asignaba a la lucha contra el comunismo y el control de los recursos estratégicos (1990:24-28). López-Maya plantea que las compañías petroleras no desempeñaron ningún papel en el golpe de 1945, y que en 1948 las grandes compañías, en especial Creóle, subsidiaria de Exxon, no querían desestabilizar el *modus vivendi* que habían logrado (1994).

varios complots luego de que la Junta tomara el poder en 1945, y aunque sus líderes estaban concientes de una creciente conspiración conservadora, hacia fines de 1948 no había logrado controlar a las fuerzas opuestas al régimen¹⁶. El 24 de noviembre de 1948 se produjo el golpe militar. Resulta sorprendente que no encontrara ninguna oposición significativa. La interpretación más corriente es que una población politizada no encontró vías para encarar el golpe o que, de alguna forma, aceptó su propia desmovilización. Un examen más cuidadoso sugiere que cuando los militares tomaron el poder el pueblo ya había sido desmovilizado por la más alta dirección de AD.

Como prometiera, AD no había tomado el poder en 1945 para mantenerlo por la fuerza, sino para establecer un sistema democrático. Pero AD se apropió de los logros gubernamentales en lo relativo al bienestar colectivo -sindicalización, incrementos salariales, programas de salud pública, reformas educativas, diversificación económica- como triunfos propios, no de la modernización del Estado venezolano o de batallas políticas libradas por el pueblo. La monopolización por parte de AD del poder político alienó incluso a algunos de los grupos que habían apoyado su ruta no democrática a la democracia. Cuando en 1948 tres de cada cuatro venezolanos eligieron presidente a Gallegos, muchos comenzaron a temer que el poder estatal se convirtiera en monopolio de una camarilla con un nuevo ropaje; que mediante el sistema electoral AD reemplazaría el gobierno de un hombre por el gobierno de un partido. Hasta fuerzas conservadoras echaron mano del discurso democrático que AD había contribuido a promover -su crítica de los gobiernos excluyentes- para oponerse a la gestión sectaria de AD.

En este contexto, el centro tanto de las luchas políticas como de la competencia económica, para los que se sentían excluidos del poder, se desplazó hacia el logro del control sobre el propio gobierno. A pesar de las significativas concesiones y proposiciones de AD al sector privado, muchas personalidades del mundo de los negocios se sentían amenazadas por las reformas sociales y el apoyo de que gozaba el partido entre obreros y campesinos; para ellos, los orígenes y la retórica socialistas de AD hacían revivir el espectro de un asalto popular contra la propiedad y el orden. A la Iglesia, ya alienada por el Decreto 321, le preocupaba la secular orientación adeca en el terreno de la educación. El partido demócrata cristiano (Comité de Organización Política Electoral Independiente, Copei) y el socialdemócrata (Unión Republicana Democrática, URD) temían no poder competir electoralmente con el partido que controlaba el poderoso aparato estatal.

¹⁶ Según Krispin, hubo ocho golpes de Estado que fracasaron después del 18 de octubre de 1945. Algunos fueron ejecutados por lopecistas, medinistas y gomecistas, pero otros fueron obra de miembros de la generación más joven vinculados a la UPM (1994: 93-94).

A pesar del flujo masivo de dinero que AD canalizó hacia las Fuerzas Armadas, los líderes militares que habían preparado el golpe contra Medina resentían que se les hubiera excluido del poder y querían ocupar un lugar más destacado en el Gobierno. En ese contexto, los militares, el locus último de la fuerza del Estado, volvieron a convertirse en agentes del cambio político. Desde un inicio se habían sentido desplazados por AD. Aunque el golpe de 1945 contra Medina había sido planificado y ejecutado por oficiales del ejército, AD se hizo con el control exclusivo del Estado e impuso su visión de la política. En respuesta a los intentos de los militares de derrocar al Gobierno después de 1945, AD se propuso controlarlos rodeándose de oficiales de confianza (incluidos en lo que llamaba su lista blanca), para que sometieran a quienes se le oponían (ubicados en su lista negra) y para infiltrar a los militares con sus propios cuadros. No obstante, AD no pudo controlar a los líderes de la UPM agrupados en torno del comandante Marcos Pérez Jiménez.

Inicialmente, siguiendo su práctica favorita de negociar acuerdos en la cúpula, los líderes de la UPM buscaron una solución de compromiso mediante una apelación a Gallegos en su condición de presidente. Como representantes de grupos de interés excluidos, le pidieron que incluyera en su gabinete a civiles no adecos y a líderes militares, y que exiliara a Betancourt, considerado el arquitecto fundamental de las políticas sectarias de AD. Aun así, este partido conservaría su mayoría en el Congreso. Betancourt estaba dispuesto a avenirse, porque confiaba en que con el tiempo AD volvería a tomar el control del Ejecutivo.

Pero Gallegos, que fundamentalmente era un novelista y no un político, pensaba que la política era asunto de principios y no una batalla por el poder. En esta coyuntura crítica, se veía a sí mismo en el papel de Santos Luzardo, el personaje principal de *Doña Bárbara*, que combate la barbarie en los llanos y lleva la civilización mediante el establecimiento del imperio de la ley. Opuesto a toda participación inconstitucional de los militares, se negó firmemente a una solución de compromiso, con el argumento de que si aceptaba las demandas no podría regresar a su hogar y enfrentar a su esposa, Teotiste. Mientras Gallegos negaba la existencia política de los militares en nombre de lo que Marx en cierta ocasión denominara “principios sin fuerza” (1981: 88), los mismos hombres que habían impulsado a AD al poder en 1945 se aprestaban a apoderarse del control del Estado haciendo uso, una vez más, del principio de la fuerza.

En respuesta a la conspiración militar contra Gallegos, algunos líderes adecos de mediano nivel intentaron preparar la resistencia por cuenta propia. Contra la amenaza del golpe, se propusieron blandir el peligro que representaban las masas organizadas. Según su plan, mientras que una huelga

general a la que se sumarían más de 300.000 trabajadores paralizaba el país, la milicia del partido se enfrentaría directamente a los militares¹⁷. Sin embargo, la más alta dirección de AD quería evitar a toda costa el conflicto social. Entendían que AD había organizado a las masas para obtener su apoyo electoral, no para desencadenar un proceso de transformación social radical. Una vez en el poder, trataron de construir un partido reformista multclasista, de controlar a los sectores populares por intermedio del Estado y de forjar una alianza con intereses económicos extranjeros y nacionales. Los sectores más conservadores de la burguesía local seguían teniendo la percepción de que era un partido radical, de líderes comunistas disfrazados, a pesar de que Betancourt había incluido a miembros destacados de la burguesía en el gabinete y de que había tratado de fomentar la formación de un sector empresarial nacional. Betancourt también cultivó una estrecha relación con Nelson Rockefeller, quien estaba interesado en convertir a Venezuela en un campo de pruebas para las inversiones de las compañías estadounidenses en la agricultura y la industria¹⁸.

Cuando Gallegos se negó a satisfacer las demandas de los militares, se intensificaron los rumores de una conspiración. Aunque en octubre Betancourt invocó la amenaza de una huelga de trabajadores petroleros si se producía una intentona, junto con el resto de la cúpula de AD desalentó con firmeza los intentos de los líderes medios de movilizar a los militantes. AD se definía como el Partido del Pueblo, aunque sus líderes entendían cada vez más por “pueblo” al sector popular controlado por la alta dirigencia partidaria. Dada su preocupación por fortalecer esta alianza reformista, la cúpula intentó neutralizar el complot mediante una negociación desde arriba y no mediante la movilización desde abajo. En este sentido AD se condujo como los conspiradores militares, porque el golpe se preparó en la cima y no involucró a sectores populares. Para evitar el golpe, AD se apoyaba en figuras militares clave, incluido el ministro de Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, amigo y ex-alumno de Gallegos, quien lo consideraba su “hijo espiritual”. Aunque a Gallegos le informaron que Delgado Chalbaud conspiraba en su contra, confió en su promesa de lealtad incondicional.

Napoleón Ordosgoiti, periodista y cineasta, amigo y secretario de Gallegos, estaba con el presidente en la mañana del golpe y nos ha dejado un relato de primera mano de la respuesta de Gallegos ante la traición de Delgado Chalbaud. Ordosgoiti dice que antes del golpe se había ocupado de concertar una reunión entre Gallegos y un oficial leal, Carlos Méndez Martínez, quien le informó de la existencia de una conspiración militar que involucraba a su ministro de Defensa. Según Ordosgoiti, Gallegos decidió

¹⁷ Contaban con armas capturadas en el asalto a los cuarteles durante el golpe militar de 1945 contra Medina Angarita.

¹⁸ Miembros destacados de la burguesía ocuparon posiciones clave en el sector oficial durante el trienio, incluidos el Ministerio de Agricultura y el Banco Central.

mantener la confidencialidad de esta información para hablar en privado con Delgado Chalbaud.

En la mañana del golpe, Gallegos invitó a Delgado Chalbaud a discutir en su casa, “Marisela” (bautizada con ese nombre en honor al personaje de su novela, la inocente hija de Doña Bárbara), los rumores de que se fraguaba una conspiración. Delgado Chalbaud reiteró su lealtad personal y aseguró a Gallegos que arrestaría a los principales oficiales involucrados en la conspiración, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. Lo que ocurrió en realidad fue que poco después de la reunión, Gallegos recibió una llamada telefónica en la que le informaban que los militares habían tomado el Palacio Presidencial y que todos sus ministros, con excepción de Delgado Chalbaud, estaban arrestados. Ordosgoiti, quien estaba en ese momento en casa de Gallegos, dice que el presidente se sintió visiblemente sacudido y entristecido por la traición. Minutos después de que se produjera la llamada telefónica, el jefe de la Academia Militar, teniente coronel Castro Gómez, llegó a la casa de Gallegos y le informó que “su régimen había caído”. Le preguntó a qué país deseaba ser exiliado. Gallegos respondió: a Cuba (Ordosgoiti 1984: 96-103). El golpe había terminado¹⁹. Cuando Delgado Chalbaud y otros oficiales del ejército se rebelaron contra Gallegos AD quedó inerme. Domingo Alberto Rangel, uno de los líderes juveniles de AD en la época, se refirió después al derrocamiento de Gallegos como un “golpe de teléfono”. Según Rangel, “no hubiera sido más difícil una parada militar” (1966: 9).

Como había tratado por todos los medios de garantizar la “paz social”, AD no estaba preparado para la guerra. Como ha señalado un analista de ese periodo, la prioridad estratégica había consistido en evitar toda confrontación social:

El mantenimiento de la paz social constituyó la clave principal de la estrategia política de AD durante el trienio. Incorporada dentro de la retórica del partido estaba la idea de que el desarrollo económico de la nación dependía de la eliminación del conflicto social. Acción Democrática se enorgullecía especialmente de su éxito al haber reducido las huelgas a su mínima expresión. Los miembros dirigentes de AD quedaron maniatados con esta estrategia durante los decisivos meses de 1948. Dudaron o evitaron por completo el confiar en el apoyo masivo del partido por temor a galvanizar las tensiones sociales. Más bien buscaron una “solución desde arriba” negociando con los elementos militares que no tenían ningún interés en conservar la democracia en Venezuela. Así, cuando los conspiradores dieron el golpe, “las

¹⁹ Ordosgoiti también afirma que Delgado Chalbaud lo empleó como intermediario para explicar a Gallegos por qué había actuado como lo hizo y para conseguir su perdón. Ordosgoiti viajó a México para entregar a Gallegos, adonde había viajado luego de que Prío Socarras reconociera el régimen militar, la carta personal de Delgado Chalbaud. Después de leerla, Gallegos la rompió y dijo: “Todo es mentira: es un Judas”. No obstante, se dice que Gallegos le permitió a Ordosgoiti, quien temía las consecuencias del fracaso de su misión, entregarle a Delgado Chalbaud y su esposa, en su nombre, los regalos que Ordosgoiti les había comprado: un cuchillo negro para Delgado Chalbaud (“negro, como la conciencia de su antiguo ministro”) y un pañuelo de cabeza blanco para su esposa (“blanco, como el símbolo del partido de misia Teotiste”) (1984:112-117). La figura de Ordosgoiti revela la densa trama que vinculaba a la elite política. Aunque estaba muy identificado con AD y había apoyado sus luchas, también trataba de mantenerse en buenas relaciones con los nuevos dirigentes.

calles estaban vacías” para las tropas militares: un gobierno popular fue derrocado por falta de resistencia popular (Ellner 1980:144).

A diferencia de los intentos previos llevados a cabo por los militares para derrocar a AD después de 1945, el golpe de noviembre de 1948 estuvo mejor organizado y ocurrió en un momento en el cual el control del poder estatal por parte de este partido le había alienado a sus rivales políticos. Sus dirigentes eran los mismos oficiales jóvenes que habían derrocado a Medina en 1945, y entre ellos se encontraban oficiales respetados de alta graduación a los que se identificaba como simpatizantes de AD, como Delgado Chalbaud. Al producirse el golpe, Gallegos hizo una apelación abstracta a las masas a “cumplir con su deber”. Un anuncio radial y algunos rumores propalaron la amenaza de una huelga general, pero no se dio ningún paso para organizarla. Un intento llevado a cabo por varios líderes de AD para establecer un gobierno provisional en Maracay terminó con el arresto de sus dirigentes. En esencia, la cúpula adeca aceptó el golpe como un *fait accompli* que la resistencia popular no podía alterar.

Sintomáticamente, Betancourt optó por pedir asilo político en la embajada colombiana, pero sintió la necesidad -como líder del “partido del pueblo”- de explicar su huida de la batalla para poder mantener su imagen de dirigente popular combativo. Le pidió a su partido, en una carta escrita en su refugio diplomático, que presentara públicamente su fuga del país como una orden partidaria, para que desde el exilio organizara la oposición de las masas al Gobierno. Su petición iba acompañada de una velada amenaza: si el partido se negaba, nunca retornaría a Venezuela. El partido aceptó (Fuenmayor 1982: 42).

Librados a sus propios medios, sus miembros no ocuparon el espacio político que sus líderes dejaron vacío. No se produjeron protestas sociales espontáneas, motines, huelgas o demostraciones públicas y, por tanto, no hubo represión²⁰. No se disparó un tiro. El primer régimen democrático de Venezuela establecido mediante el sufragio universal murió sin protestas en calles, campos o fábricas. En palabras de Guillermo García Ponce (quien se convirtió en uno de los principales dirigentes de la resistencia clandestina comunista a Pérez Jiménez) y Camacho Barrios: “Pero el Gobierno cae sin un disparo, sin una resistencia seria, sin protesta masiva en la calle, en medio de una soledad aterradora, ante un país que vuelve la espalda indiferente a cuanto ocurre” (García Ponce y Camacho Barrios 1982: 37).

²⁰ Bergquist apunta que en los campos petroleros “las protestas fueron fragmentarias y fácilmente sofocadas” (1986: 268).

El poder de las armas, la impotencia del pueblo

Los militares habían temido la oposición popular y habían dado pasos para sofocar la resistencia. Ocuparon las principales calles de Caracas, restringieron los movimientos en las ciudades y entre ellas, y proclamaron en los medios de comunicación que el país estaba bajo su control. Pero la simple demostración de fuerza bastó para hacer ciertas sus afirmaciones. Un editorial titulado “Gracias a Dios”, publicado en una revista auspiciada por los jesuitas, se burlaba del anuncio adeco de que 300.000 trabajadores irían a la huelga para apoyar al partido del pueblo. “¿Que qué pueblo? ¿De los 300.000 valientes que iban a salir a la calle contra el ejército? Qué ingenuidad. Sobraban cinco ceros. Habían 300.000 hombres dispuestos a reclamar más salario, más vacaciones, a participar en un desfile, a no trabajar” (Sic vol. II N° 110, diciembre de 1948, pp. 485-486).

En febrero de 1949 AD convocó a una huelga general, pero “estuvo mal organizada, no fue acogida con entusiasmo y pronto fue aplastada por la fuerza militar” (Bergquist 1986:286). La Junta respondió a la huelga con la disolución de los sindicatos adecos. Se afirma que algunos funcionarios gubernamentales les informaron a pares estadounidenses que estaban sorprendidos por la “debilidad de los sindicatos de Acción Democrática y por la docilidad con que la mayoría de los trabajadores del petróleo aceptaba el nuevo orden político” (Bergquist 1986).

Desde la perspectiva de AD el golpe de 1948 marca el inicio de una contrarrevolución, ya que después de esa fecha la mayoría de los sindicatos y de las organizaciones de base fueron desmanteladas. Pero en cierta forma estas organizaciones populares ya habían sido desmovilizadas por el partido después de 1945. El precio de la “paz social”, como señala Ellner, era el férreo control partidario del movimiento obrero. AD había comenzado a ejercer este control durante el gobierno de Medina, cuando lo instó a disolver los sindicatos comunistas, que tenían el predominio en el movimiento obrero, incluidos los trabajadores del petróleo. Como resultado de esa medida y de los cambios de política y las divisiones del PC durante el periodo browderista de los frentes populares, AD desplazó al comunismo como partido dirigente de los trabajadores.

Ya en el poder, AD utilizó los recursos políticos y económicos del Estado para ampliar su control sobre el movimiento obrero. Los sindicatos del sector petrolero, que habían nacido como organizaciones relativamente independientes y combativas en la época de Gómez se convirtieron, según un analista,

en unos meros “apéndices de las maquinarias de los partidos políticos” (Tennessee 1979: 306)²¹. Si bien la burocratización de sindicatos combativos es una consecuencia bastante común del sindicalismo corporativo, en Venezuela se produjo con una facilidad excepcional. Bergquist apunta que Venezuela, “moldeada por su extraordinaria economía petrolera, se adaptó a las políticas liberales corporativistas y el sindicalismo clientelar de (*bread and butter*) más fácil y permanentemente” que Chile, Argentina y Colombia, los otros países incluidos en su pionero estudio comparativo sobre política laboral en la América Latina (1986: 262).

La rápida construcción de AD como partido electoral había demandado la creación de una masa de electores. Betancourt ha descrito cómo trató de llegar a las masas desorganizadas. Su repetida consigna fue la guía de la política del partido a principios de la década de 1940: “Ni un solo distrito, ni un solo municipio, sin la casa del partido” (Betancourt 1956: 135). Un analista venezolano ha apuntado que esta consigna política que “reproduce y cruza de arriba abajo el mapa geográfico y político-administrativo del país” debe complementarse con otra, “no formulada pero sí practicada”. Esa consigna implícita, según este analista, “reproduce y cruza de lado a lado casi todo su mapa social. Tal consigna sería: 'Ni un solo sindicato, ni un solo gremio, ni una sola liga campesina, sin su casa de partido'" (Bautista Urbaneja 1992:142). Bautista Urbaneja señala la diferencia entre el objetivo explícito en la consigna y la práctica implícita: el primero se refiere al mapa ya existente: es un llamado a llevar el partido a los poblados rurales más remotos de Venezuela. La segunda se refiere a un mapa social que en lo fundamental hubo que crear: la formación de sindicatos, gremios y organizaciones campesinas controlados por el partido.

Este mapa social, dibujado en lo esencial con recursos del Estado, desapareció en buena medida luego del desplazamiento de AD. Las reformas sociales y la sindicalización de los trabajadores llevadas a cabo por AD resultaban insuficientes para crear un movimiento de base autónomo que pudiera actuar de manera independiente. Según un analista, “el tan pregonado combate de AD contra los problemas económicos y sociales básicos del país no llegó a ser una 'revolución social' básica, como han insistido los adecos y algunos escritores que simpatizan con AD, sino una política re- vigorizada y ampliada reforma interna que ya se había venido acelerando en la década de 1936-1945” (Burggraaff 1972: 81). Para este observador, “la verdadera revolución fue política: por primera vez en Venezuela la base política del partido gobernante estuvo en las clases medias y bajas, no en la elite” (1972: 81).

²¹ Para un excelente análisis de la lucha entre AD y el PC por el control del movimiento obrero durante este periodo, v. Ellner (1979), Tennessee (1979), Lucena (1982) y Bergquist (1986).

Si el gobierno adeco constituyó una revolución política en este sentido, el golpe de 1948 representó un desplazamiento del poder de un liderazgo civil de clase media a un liderazgo militar equivalente. Mientras que el primero afirmaba que el poder del Estado tenía sus bases en la autoridad del voto, el segundo argüía que lo tenía en la fuerza de las armas. Según Pedro Berroeta, escritor venezolano que respaldó las instituciones democráticas, tras el golpe de 1945 Betancourt quedó atrapado por la “ilusión del momento” y fue “incapaz de medir el poder relativo de las fuerzas en conflicto”. En esa coyuntura histórica, “creyó que había conquistado el poder, cuando en realidad sólo lo había adquirido como un préstamo, para una breve transición, mientras que los que realmente tenían poder tomaban conciencia de su fuerza” (1987: 210-211).

Es cierto que después del golpe de 1945 las clases medias y bajas ocuparon el espacio político ampliado abierto por AD; no obstante, un partido centralizado y jerárquico, que monopolizaba el control sobre estos nuevos actores, gradualmente desmontó su fuerza política. El Estado actuó como el centro de gravedad de la vida política. Para la cúpula de AD, el control del Gobierno suponía el mando del partido como un todo. Si bien la base social adeca se amplió de modo espectacular durante el trienio, el poder político del partido provino cada vez más de la cúpula: del control que ejercía sobre el aparato del Estado.

Paradójicamente, AD fomentó la presencia de nuevos sectores en la política nacional, pero le puso riendas a su fuerza mediante un estricto predominio del partido que se sustentaba sobre el control del Estado. De ahí que esta “revolución” política, realizada en nombre del pueblo, pero solo parcialmente lograda por él, quedara en una mera ilusión de revolución, en un movimiento controlado por el partido, que circunscribía y protegía a una masa dependiente. Como el poder político estaba concentrado en la cima del aparato estatal, a los militares les resultó posible conquistar el poder al tomar su control.

Un insólito edificio social se empezaba a construir en Venezuela, tallado por el flujo de la riqueza petrolera. Su modelo estaba en los ideales occidentales que Venezuela intentaba alcanzar: una sociedad civil productiva y un Estado representativo, aunque sus elementos estructurales estaban invertidos y la cúpula sostenía a la base. Con la continua expansión de la industria del petróleo, un Estado cada vez más rico, financieramente independiente de agentes internos, hacía al pueblo dependiente de él. Las clases medias y bajas, que poseían una fuerza económica limitada y una organización política rudimentaria, se transformaron de la fuente del poder de AD en un vehículo para legitimarlo. Una vez que tuvo el control del aparato del Estado, AD amplió su base política y su

apoyo popular mediante un uso amplio de las instituciones y recursos estatales. Después de las elecciones de 1947 su mando resultó legitimado por el masivo apoyo electoral, pero ese apoyo se vio erosionado por la monopolización del poder. En 1948 los militares derrocaron a AD desalojándolo del Estado, su nueva fuente de poder, no desarmando a las masas. En cuanto se hizo evidente que la Junta controlaba el Estado, su mando fue incontestado; las masas estaban inmobilizadas porque AD no las había movilizadas.

1948: en nombre de la democracia

Los mismos oficiales que habían participado con AD en el golpe de 1945 contra Medina para instalar un gobierno civil, establecieron esta vez una Junta compuesta por tres miembros: el general Carlos Delgado Chalbaud y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Carlos Llovera Páez. El 25 de noviembre los periódicos publicaron las primeras declaraciones de la Junta, en las que describían el gobierno de Gallegos como incapaz de resolver la “crisis nacional” y de controlar a los “grupos extremistas”: una clara referencia a la influencia de Betancourt. La incorporación por parte de AD de sectores populares a la política nacional se presentaba como una fuente de caos. El golpe se justificaba en nombre de la garantía del orden: las Fuerzas Armadas habían tomado el “total control de la situación” para lograr “el establecimiento final de la paz social en Venezuela” (*El Universal*, 25/11/48).

Delgado Chalbaud estaba a la cabeza de la nueva Junta. Se dice que él había expresado que se sentía incómodo por haber sido ex-ministro de Defensa del antiguo gobierno y posible jefe del nuevo. Pero ante la insistencia de Pérez Jiménez, aceptó integrarse a la Junta con la condición de que se le nombrara presidente por ser el oficial de mayor rango. Como ministro de Defensa, Delgado Chalbaud ya contaba con cierto grado de legitimidad ante la opinión pública, al tiempo que la elite social de Caracas lo consideraba uno de los suyos y confiaba en él²².

Los líderes del golpe lo describieron como una forma de combatir la perversión de la democracia perpetrada por AD. Desde su inicio Delgado Chalbaud se identificó como un defensor de la democracia. El 25 de noviembre manifestó ante periodistas extranjeros que “no habían procedido contra AD, sino contra sus líderes”, y que habían tomado el poder “no para proceder contra los

²² Además, se ha afirmado que era también el candidato favorito del agregado militar de EEUU, el coronel Adams, a quien se vio el día del golpe en el Palacio Presidencial conferenciando con varios líderes militares (García Ponce y Camacho Barrios 1982: 34).

principios democráticos, sino para preservarlos” (*El Universal*, 26/11/48). En la noche del 26 de noviembre, al dirigirse por primera vez a la nación, Delgado Chalbaud reiteró el compromiso de la Junta con lo que en aquel momento se consideraba el único sistema capaz de conferir legitimidad:

La Junta Militar quiere afirmar categóricamente que este movimiento no está orientado de ninguna manera, ni abierta ni solapadamente, hacia la restauración de una dictadura militar...Se ha tomado el poder no para violar los principios democráticos, sino para lograr su efectiva aplicación y preparar una contienda electoral donde todos puedan participar en igualdad de condiciones (*El Universal*, 27/11/ 48).

Al día siguiente, el periódico conservador *El Universal* informaba en primera plana sobre el anuncio de Delgado Chalbaud con el siguiente titular: “No se encamina a ninguna dictadura”.

Después del golpe, la limitada oposición de AD al régimen fue rápidamente reprimida. Los medios de comunicación desplegaron de manera prominente las noticias de los arrestos de líderes adecos, a menudo acompañadas de fotos de arsenales de armas y explosivos, como parte de un proceso en marcha de “limpieza activa de la ciudad” (*El Universal*, 28/11/ 48). Se afirmaba que la movilización social del régimen precedente había polarizado a la ciudadanía y amenazado la consolidación de la democracia al crear el “caos” y el “desorden”. La convocatoria de AD a una huelga general (que nunca se materializó) el 24 de noviembre, se citaba como una prueba de sus tácticas nocivas. La imposición del “orden” se presentaba como condición de la restauración democrática.

Como en ese momento se identificaba el extremismo con los esfuerzos de AD para organizar a los trabajadores, la Junta no denunció que el PC tuviera una influencia sobre el gobierno derrocado, como hiciera AD al deponer a Medina en 1945. Inmediatamente después del golpe, ante la pregunta de periodistas extranjeros sobre su posición con respecto al PC, Delgado Chalbaud contestó lacónicamente que el partido gozaba de “existencia legal en Venezuela” (*El Universal*, 26/11/48). En ese primer momento el PC no se opuso al golpe. La Junta presentó a AD como el único partido extremista y como la única fuente de “caos”, y a las Fuerzas Armadas como las garantes naturales de la paz y el orden.

Entre aquellos que no apoyaban a AD hubo una excepcional aceptación del golpe, o al menos un alto grado de tolerancia. Durante el trienio se había desarrollado un encendido antagonismo entre AD, que había intentado presentarse como paladín de la democracia, y otros partidos, que también habían fomentado instituciones democráticas pero que no tenían posibilidad alguna de ejercer influencia sobre el nuevo Estado. Para legitimar su gobierno, la Junta apeló al resentimiento general

contra la monopolización del poder por parte de AD.

Si los adecos no contaban con suficiente organización para oponerse al golpe, los que no lo eran se habían sentido demasiado alienados hacia AD como para enfrentarse a los nuevos gobernantes. No solo los medinistas, comprensiblemente resentidos con AD, sino también los líderes de Copei y de la URD, así como “independientes” destacados²³, personalidades profesionales e intelectuales, apoyaron a los nuevos gobernantes, con la esperanza de que la Junta desbloquearía el sistema político y fomentaría el establecimiento de una democracia menos sectaria. Para ellos no existía ninguna contradicción entre apoyar la democracia y respaldar el golpe. En fecha tan temprana como el 25 de noviembre de 1948, Jóvito Villalba, de la URD, declaró su confianza en el patriotismo y el altruismo de las FFAA, e instó a la población civil a evitar actos de violencia (*El Universal*, 26/11/48). Copei también decidió secundar a los nuevos gobernantes. Según *El Gráfico*, el periódico partidario, la Junta había salvado al Estado del “caos” y de una “horrible pesadilla”, que identificaba con “las manos sectarias y hegemónicas” de AD y de su líder, el comunista “encapuchado” Rómulo Betancourt (García Ponce y Camacho Barrios 1982: 36).

Para Mario Briceño Iragorri, respetado hombre de letras, el sectarismo había apartado a AD del poder. Muchos políticos honestos creían sinceramente en 1948 que “todos los errores del Gobierno gravitaban sobre los hombres de Acción Democrática”, y que el nuevo régimen fomentaría la institucionalización de la democracia, obstaculizada por “la política sectaria de Acción Democrática” (1971:40-41). Entendían que no se debía juzgar al nuevo gobierno por sus orígenes, sino por sus logros. De la misma forma que AD había justificado en 1945 el uso del golpe militar como un instrumento para acelerar la transición a la democracia, los simpatizantes del golpe de 1948 contra AD lo exhibieron como un medio para enrumbar correctamente la democracia. Por otra parte, para Vallenilla Lanz el hecho de que quienes respaldaban la democracia se mostraran dispuestos a saludar el golpe, confirmaba su criterio sobre el oportunismo de los políticos venezolanos. Con evidente alborozo escribió en sus memorias que Jóvito Villalba, de la URD, y Rafael Caldera, de Copei, expresaron su apoyo a la Junta en 1948 y buscaron la forma de encontrar ubicaciones en el nuevo gobierno (1967: 291), y destacaba que “los corredores se mantienen llenos de gente que solicita cargos” (298).

No obstante, muchos de quienes apoyaron al régimen en un inicio, e incluso aceptaron puestos, se volvieron en contra cuando la Junta no dio ningún paso para restaurar los derechos democráticos.

²³ “Independientes” es un término que se utiliza en Venezuela para referirse a personas que participan en la política sin estar afiliadas a ningún partido.

Otros, menos capaces de rechazar cargos públicos y de expresarse abiertamente contra el Gobierno, manifestaban su oposición en privado. Cuando se producía una grieta en el muro del control, esta resistencia reprimida hacía erupción públicamente. Por ejemplo, cuando el general Medina Angarita murió en 1953, miles de caraqueños, de modo espontáneo y sin distinción de partidos, llevaron cargado su féretro desde la casa hasta el cementerio, con lo que se transformó en una manifestación política de ocho horas que, al tiempo que honraba a un líder militar que había respetado la Constitución, protestaba contra la Junta que había violado sus promesas de hacerlo. Briceño Iragorri describió este acontecimiento con elocuencia²⁴. Bajo ambas ideas -la de que la población se avino al golpe para defender de modo principista la verdadera democracia o, por el contrario, que lo hizo a la caza egoísta de sus intereses- subyace la realidad de una sociedad cada vez más dependiente del Estado, donde la búsqueda del interés individual se representaba en términos del cumplimiento de los fines del Estado.

La transición a la dictadura: 1948-1950

Una vez que la Junta se hizo del control del aparato del Estado, declaró ilegal a AD, acusándolo de crear “un Estado dentro del Estado”, y poco a poco disolvió el Congreso, los consejos municipales, el Consejo Electoral Nacional y la mayoría de los sindicatos. Como en las etapas iniciales de otros regímenes militares latinoamericanos, el desmantelamiento de las instituciones democráticas se presentó como una mera fase en el proceso de construcción de la democracia sobre bases más sólidas.

Sin embargo, en este caso existían significativas diferencias de opinión en el seno de la Junta en lo concerniente al papel de los partidos y de las elecciones. Delgado Chalbaud, quien encabezaba el Gobierno, se inclinaba hacia un futuro retomo a las formas democráticas y buscaba la reinstitución de elecciones generales con la participación de la mayoría de los partidos. Pérez Jiménez, quien controlaba las FFAA, favorecía la consolidación de un régimen militar y quería restringir el papel de los partidos. Pero algo más que sus posiciones políticas los separaba. Mientras Delgado Chalbaud pertenecía a una familia de clase alta, había hecho estudios militares en Francia y gozaba de un amplio apoyo entre la elite social y económica, Pérez Jiménez había crecido en un pueblo pobre de los Andes, había estudiado en la academia militar del Perú y tenía muchos seguidores en las FFAA. Ambos

²⁴ V. a este respecto la vivida descripción de Briceño Iragorri sobre su propio cambio de opinión acerca de la Junta (1971: 41).

se necesitaban y evitaban la confrontación. Definieron que las tareas inmediatas de la Junta consistían en establecer el orden y en promover obras públicas de importancia; sus esfuerzos convergieron en la consecución de esos fines.

Pero el 13 de noviembre de 1950 Delgado Chalbaud fue misteriosamente asesinado, lo que dejó a Pérez Jiménez como el hombre fuerte de la Junta²⁵. Pérez Jiménez decidió nombrar presidente a un civil. No quería aparecer como el beneficiario del asesinato de otro oficial y trataba también de mantener en la Junta a un representante de la clase social y la posición ideológica de Delgado Chalbaud. Dos de sus ministros civiles se negaron a desempeñar el papel de figurones. Amoldo Gabaldón, un médico epidemiólogo muy respetado, que había reducido notablemente el índice de malaria en las zonas rurales y era independiente en política, aceptó el puesto. Pero Gabaldón aceptó la presidencia porque tomó por un drama lo que era solo una farsa. Quizás porque creía que el golpe de 1948 era en realidad la partera de una auténtica democracia, se incorporó al escenario político para desempeñar un papel escrito para otra obra. Se comenzó a comportar como jefe de Estado aún antes de que se le proclamara presidente nominal. Todavía sin ocupar la sede del poder, anunció sin tacto alguno el programa de su gobierno y su plan para las elecciones y, lo que era más importante, la composición de su gabinete, con lo que creó el pánico o la esperanza entre quienes, como él, confundían la realidad con las apariencias.

Entre bambalinas no hubo necesidad de una guillotina. La cabeza de Gabaldón cayó de un plumazo. Se le informó que ya no le correspondía encarnar al personaje. El papel recayó en Germán Suárez Flamerich, quien sí supo entender de qué obra se trataba. Embajador en Perú, era un miembro poco conocido de la Generación del 28 y, por tanto venía, como comentará Vallenilla con cinismo, “hasta con *antecedentes democráticos*” (1967: 325). Con Suárez Flamerich como presidente de la Junta, Pérez Jiménez tomó el mando. Bajo el manto civil de su figurón, el Gobierno adoptaba la forma de una dictadura militar.

Las elecciones de 1952: ilusiones de poder

Los hombres que ejercieron el poder después de 1948 no fueron políticos, y en años subsiguientes adquirieron solo una limitada experiencia. Se hicieron del control del Estado durante un periodo de

²⁵ No existe ninguna explicación completamente satisfactoria de este asesinato político. Como Pérez Jiménez fue el beneficiario, en la época muchos creyeron que había sido responsable, pero no existe evidencia de su complicidad. Para un análisis del tema, v. Betancourt (1979: 252-255) y López Borges (1971).

rápida expansión de la economía petrolera, y ni las condiciones políticas ni las económicas los forzaron a buscar el apoyo de otros grupos sociales. Su sentimiento de autosuficiencia los llevó a distanciarse hasta de las FFAA, su base de apoyo original. Trataron de evadir la política para concentrarse en logros visibles.

Para estos hombres, el énfasis en las obras públicas se convirtió en una vía para eliminar la política de partidos y redefinir la vida política: el Gobierno proclamó que traería la modernidad a Venezuela mediante “la transformación racional del medio físico”. El énfasis retórico en la “racionalidad” y en la transformación del “medio físico” expresaba un punto de vista muy común entre los pensadores positivistas decimonónicos de América Latina, quienes atribuían el atraso del continente a su hábitat natural y asumían que, si se cambiaba, las personas también cambiarían. La política se restringía ahora, entonces, a la administración por parte del Estado de los recursos del país. Las FFAA, encargadas de defender el territorio, tenían ahora la responsabilidad de salvaguardar la “riqueza de la nación”. Estos hombres afirmaban que el Estado expresaría la voz singular de la nación, lo cual era preferible a permitir las voces “escandalosas” de los partidos políticos que hablaban en nombre del pueblo al tiempo que perseguían intereses partidarios.

La facilidad con que habían dado el golpe, la concentración de poder, el control sobre los recursos financieros provenientes de rentas petroleras cada vez mayores, la existencia de logros tangibles, la ausencia de una crítica pública significativa, todo ello se combinó para que Pérez Jiménez y los líderes de la Junta se sintieran demasiado confiados y fueran poco realistas. Cada vez perdían más contacto con la realidad política. En un contexto de fuerzas políticas silenciadas o aquiescentes, los hombres que detentaban el poder terminaron por oír solo su propia voz. De ahí que la Junta llegara a creerse su propia retórica. En 1952 pensó que mediante su programa de obras públicas (la “transformación racional del medio físico”) también había logrado erradicar los sentimientos políticos irracionales del pueblo (Vallenilla 1967: 311). Por tanto, la Junta sintió que ya no había razones para seguir posponiendo las elecciones. Con el restablecimiento de los derechos constitucionales se neutralizaría la reducida oposición local y los molestos críticos extranjeros, y el Gobierno continuaría cumpliendo, sin ningún obstáculo, su doble tarea de transformar el medio y perfeccionar al pueblo. Los gobernantes, convencidos de que la obra gubernamental había puesto al pueblo de su lado, trataban de transformar un gobierno impuesto por la fuerza en un gobierno aceptado por el consentimiento; se permitiría la tranquila legitimación del voto.

El régimen que había negado las libertades políticas quería ahora garantizar que todo adulto

venezolano votara, para poder proclamar que gozaba del pleno apoyo de los ciudadanos. En abril de 1951 un nuevo código electoral hizo obligatorio el voto para todos los ciudadanos mayores de 21 años. (En la ley electoral de AD aprobada en 1947 el voto era un derecho voluntario de los ciudadanos mayores de 18 años.) Según este código, el electorado elegiría una Asamblea Constituyente cuya función principal sería elegir un nuevo presidente provisional en un plazo de 40 días y redactar la Constitución. A continuación se produciría la elección de un presidente constitucional mediante el sufragio universal. En mayo de 1951 se fundó un partido, el Frente Electoral Independiente (FEI), para respaldar a Pérez Jiménez. El inicio de la campaña electoral se fijó para mayo de 1952.

AD y el PC seguían siendo ilegales. Durante el periodo, AD intentó en varias ocasiones organizar un golpe contra la Junta. Pero esos esfuerzos fracasaron y terminaron con la muerte o la prisión de sus líderes. La pérdida más grave sufrida por AD fue la de Leonardo Ruiz Pineda, asesinado en las calles de Caracas el 21 de octubre de 1952. Ruiz Pineda, respetado por su capacidad y valentía, había sido ministro de Comunicaciones de Gallegos y había regresado secretamente del exilio para ponerse a la cabeza, junto a Alberto Carnevalli, del movimiento clandestino de AD.

La fecha de las elecciones se fijó para el 30 de noviembre de 1952, un mes después de la muerte de Ruiz Pineda. A pesar de que se habían producido muchos incidentes de represión violenta el año previo, la Junta insistió en que se respetarían los resultados electorales. La mayoría de los líderes políticos dio por sentado que el estado general imperante de represión y restricciones políticas impedía toda posibilidad de una contienda justa; opinaban que “un fraude perpetrado por el Gobierno en las elecciones del 30 de noviembre era una conclusión dada por hecho” (Kolb 1974:109). El paradigma establecido por las elecciones de 1947, que habían tenido lugar en un contexto de amplias libertades democráticas, hacía más evidentes las limitaciones de estas. Mientras que AD en un inicio ordenó a sus miembros que no votaran²⁶, Copei y la URD decidieron ocupar el espacio político abierto por las elecciones para poder exponer sus criterios y, si era posible, para ganar puestos en los órganos electivos del Estado y ampliar su esfera de influencia.

La campaña electoral empezó en mayo de 1952. La oposición organizó con éxito varias manifestaciones a las que asistieron personas provenientes de un amplio espectro político opuestas a la dictadura. Por el contrario, el FEI no logró llegar a las masas; carecía de base organizativa y de atractivo ideológico. Los gobernantes no atribuyeron su fracaso en esta esfera a su política, sino a su

²⁶ Se dice que aunque AD planeaba boicotear las elecciones, el asesinato de Ruiz Pineda un mes antes incitó a sus miembros a emitir un voto de castigo contra el Gobierno (Luzardo 1963: 170-171; Kolb 1974: 115).

carencia de oradores experimentados. Después de un discurso poco exitoso -como la mayoría- en una manifestación convocada por el FEI, Vallenilla Lanz, siempre despreciativo al referirse a Betancourt, confesó que por una vez había deseado tener la habilidad para dirigirse a las masas del carismático líder de AD (que permanecía en el exilio) (Vallenilla 1967: 313). La respuesta típica de la Junta al problema era emplear grandes sumas de dinero del Estado.

El ministro del Interior, Llovera Páez, envió grandes sumas de dinero e instrucciones a los gobernadores estatales y a otras autoridades locales para que inscribieran a los ciudadanos en los partidos regionales aliados al FEI. Buena parte del dinero se entregó en pequeñas cantidades como soborno directo a cambio de votos; en otros casos, se concedió crédito a campesinos para que compraran equipos agrícolas, o se regaló ropa, leche en polvo y otros presentes menudos. Se sobornó a los sacerdotes de pueblos en las zonas rurales para que hablaran desde el pulpito a favor de los candidatos del FEI, y se dice que algunos aconsejaron a los habitantes del campo que recordaran al votar que el símbolo del régimen en la boleta era redondo “como la hostia del Sagrado Sacramento” (Kolb 1974:110).

La oposición predijo que se produciría un fraude electoral; el Gobierno prometió total honestidad. En cierto sentido ambos tenían razón. La Junta, que creía haber conquistado la buena voluntad de la mayoría del pueblo, estaba segura de su victoria y no vio ninguna necesidad de preparar un fraude. Como informara Herbert Mathews en 1952, el Gobierno dispuso que se celebraran elecciones limpias porque creía que las ganaría (*The New York Times*, 16/4/52). Los informes que recibía la Junta -ecos de su propia voz- que indicaban que Pérez Jiménez podía contar con un respaldo popular masivo y que predecían una victoria abrumadora, alimentaban su optimismo. Según Vallenilla Lanz, pensaban que su triunfo era seguro.

El 30 de noviembre se demostró inesperadamente que la afirmación del Gobierno de que celebraría elecciones honestas era cierta, pero su predicción sobre los resultados estaba equivocada. Los primeros conteos mostraron que la URD iba a la cabeza. La Junta no estaba preparada para alterar los resultados electorales y no tenía planes para el caso de un triunfo de la oposición. Segura de su victoria, se desestabilizó ante las señales de su inminente derrota.

El 18 Brumario de Pérez Jiménez

Acontecimientos: el golpecito

Cuando recibió el escrutinio preliminar, Pérez Jiménez abandonó una fiesta que celebraba en su casa con amigos íntimos y se dirigió a una reunión de emergencia con sus asesores en el Ministerio de Defensa. El estado de ánimo que imperaba era sombrío. A medida que pasaba el tiempo los resultados electorales indicaban una clara derrota. Los hombres que detentaban el poder se encontraban ante una disyuntiva histórica; podían aceptar los resultados o ejercer la fuerza. Los socios de Pérez Jiménez en la cúpula habían creído en su propia retórica y estaban atrapados en la maraña de sus palabras. Las memorias de Vallenilla incluyen un relato -desde el punto de vista de un participante en los acontecimientos que, además, no era imparcial- de cómo se libraron de esa maraña, de las promesas que habían hecho y del compromiso de continuar el proceso electoral.

Aunque en el Ministerio de Defensa algunos plantearon: “Resignémonos, hemos perdido, la Nación nos rechaza”, otros sentían que había que llegar a un acuerdo con Villalba, de la URD (que había ganado las elecciones) (1967: 346). Pero el coronel Carlos Pulido Barreto dijo a quienes lo rodeaban: “Todo no está perdido. Nosotros tenemos el poder y las armas. No los vamos a entregar” (Vallenilla 1967: 345)²⁷. Después, reunidos en secreto en un baño, Pulido Barreto, el general Tamayo Suárez y Laureano Vallenilla acordaron que “el resultado de las elecciones no importa. Lo que interesa es que nos mantengamos unidos y dispuestos a conservar el mando”. Decidieron desestimar las elecciones. Vallenilla, echando mano de la tradicional imagen del caudillo, les aseguró a los oficiales que el Gobierno por la fuerza podía fácilmente presentarse como justo mediante una manipulación de la ley. “La fórmula civil, la solución jurídica, es fácil fabricarla cuando se cuenta con el respaldo de los machetes” (1967: 345). Acordaron que los militares debían seguir en el poder, apoyando a Pérez Jiménez como único jefe de Estado. Se fraguaba un golpe.

Sin embargo, en ese momento decisivo Pérez Jiménez “se sentía lleno de ansiedad y dudas”. Este, según un analista, era un “intrigante incansable y un maquinador meticulouso” pero “invariablemente lo asaltaban temores y celos cuando se enfrentaba a situaciones imprevistas que requerían una acción inmediata y decidida” (Kolb 1974: 113). Laureano Vallenilla asegura que fue él quien convenció a Pérez Jiménez al presentarle una justificación convincente para el golpe. “La hora es difícil,

²⁷ “El poder” significa el Estado, y en este caso en particular las FFAA del Estado.

dramática. Habrá que escoger entre el resultado del sufragio y el desarrollo del país. En una Nación civilizada no se plantearía el dilema.” Pero en Venezuela, le explicó Vallenilla, si se le entregaba el poder a Villalba los programas de desarrollo se abandonarían y el “caos” volvería a adueñarse de la vida de la nación. Se celebrarían elecciones generales y ganaría Rómulo Betancourt, “el más ducho” de todos los líderes de partidos. Aparentemente dotado de poderes de predicción, Vallenilla vaticinó que “menos intransigente después del último exilio, formará un gobierno de coalición para distribuir entre adecos, copeyanos, y urredecos los cargos políticos”. Añadió que “crecerá la burocracia para satisfacer la voracidad presupuestal de unos y otros. Lo realizado hasta ahora por la Junta caerá en ruinas” (Vallenilla 1967: 347)²⁸.

El siguiente acontecimiento, que resultó decisivo, fue la llegada a la oficina de Pérez Jiménez de un gran grupo de oficiales del ejército (entre 30 y 40), a quienes Pulido Barreto les había informado la decisión de respaldar a Pérez Jiménez. Se afirma que lo instaron a mantenerse al frente del Estado: “Usted debe conservar el poder, coronel. Nosotros lo apoyamos”. Insistieron en que debía gobernar solo, y le atribuyeron la crisis del momento a la falta de un liderazgo unificado. “Los problemas y las dificultades han surgido de las divisiones en el Ejecutivo” (Vallenilla 1967: 347). Vallenilla reseñó que Pérez Jiménez se sintió conmovido. Les dijo: “Si ustedes me apoyan, me quedo... Podría irme al exterior, pero creo que Venezuela me necesita todavía”. Y después añadió: “No tengo ambiciones personales... Si tomo la resolución de permanecer aquí es por el país, exclusivamente por el país” (1967: 347). Una vez que Pérez Jiménez estuvo persuadido de desempeñar el papel de salvador de la nación, los conspiradores se dieron a la tarea de garantizar el apoyo de los militares al golpe en el interior del país, lo cual esperaban lograr con facilidad.

Todavía había incertidumbre acerca de cómo reaccionarían ante el golpe las fuerzas políticas civiles. Para reducir la posible oposición a la “solución militar”, Vallenilla maquinó la “fórmula civil, la solución legal”. Se ha dicho que se la propuso a Pérez Jiménez en los siguientes términos:

La Junta, por una carta, debe presentar su renuncia a las FFAA puesto que de ellas emana el Poder que ejerce. Estas aceptan y lo designan a usted presidente provisional de la República, hasta tanto se reúna la Constituyente. Para ello se requiere, simplemente, redactar un acta que firmarán los jefes de los distintos cuerpos. En la misma oportunidad, toma usted posesión de su cargo, designa nuevo gabinete y dirige un mensaje radiado a la Nación (1967: 348).

²⁸ Hay que señalar que este informe se escribió en 1961, después de que Betancourt lograra crear una coalición con la URD y Copei en 1958.

El golpe de Estado se orquestó en estos términos simples en la noche del día de las elecciones, 30 de noviembre de 1952. Los periódicos de la mañana del 1^o de diciembre informaban los siguientes resultados de las 7 pm del día de las elecciones: URD: 294.573; FEI: 147.528; Copei: 89.095. Estos escrutinios eran los ciertos. Como esperaba un triunfo electoral, la Junta no había adoptado precauciones en cuanto a la censura de las noticias o alteración de los resultados. En la noche de ese mismo día, el *New York Times* supo, por medio de una llamada telefónica, que la URD iba a la cabeza con 450.000 votos, seguida por Copei con 206.000; pero la llamada se interrumpió antes de que se mencionaran las cifras de votos del FEI, que iba a la zaga. No se permitió que se informaran o publicaran más resultados electorales.

Pero los líderes del golpe sentían confianza: ya estaba garantizado el apoyo militar en las bases regionales y, lo que era igualmente importante, el embajador de EEUU también había expresado en privado su apoyo a Pérez Jiménez (Vallenilla 1967:358)²⁹. Entonces volvieron su atención hacia los asuntos corrientes. Cuando Vallenilla aún redactaba la renuncia de la Junta el día siguiente a las elecciones, se percató de que los depósitos en el Banco Industrial -que él presidía- habían aumentado: todo funcionaba normalmente. Sentía que pronto también la nación volvería a la normalidad, y se dispuso a volver al trabajo en su banco en un plazo de dos días. Se asumía que este golpe palaciego no enfrentaría ninguna oposición, que en Venezuela, desde la llegada de Gómez, el control de los centros administrativos y militares del Estado por parte de unos pocos líderes conllevaba el control del país. Después de aprobar el documento redactado por Vallenilla, Pérez Jiménez le informó que la ceremonia en que los militares lo nominarían presidente provisional debía aplazarse hasta el día siguiente, 2 de diciembre. Vallenilla apuntó que se sentía satisfecho con el cambio, que hacía coincidir los acontecimientos venezolanos con la cronología de la historia europea... de unos 100 años antes:

Me complace. El 2 de diciembre es fecha favorable para los golpes de Estado. Hace un siglo y un año, exactamente, tuvo lugar en Francia el de Luis Napoleón Bonaparte. Además, Napoleón el Grande opinaba que el 2 de diciembre traía suerte. Fue en esa fecha la batalla de Austerlitz. Soy supersticioso, coronel y... presiento que todo va a salir bien para nosotros (1967: 350).

La fórmula legal se construyó sin muchos esfuerzos por hacerla convincente o coherente. El fin de esa

²⁹ Es improbable que el golpe se hubiera producido sin este apoyo, o que hubiera adoptado la forma que adoptó. Como informara *The New York Times* el 12 de octubre de 1955: "Es un secreto a voces que si EEUU hubiera expresado su disgusto ante el robo de las elecciones venezolanas por los partidarios del coronel Pérez Jiménez en noviembre de 1952, este se habría retirado o al menos habría llegado a un acuerdo con la oposición. Al mantenemos estrictamente fuera del conflicto y reconocer rápidamente al régimen de Pérez Jiménez, en cierto sentido intervinimos".

fachada era inducir al acatamiento no por el poder de persuasión, sino por la persuasión del poder. El 2 de diciembre de 1952, Pérez Jiménez envió un telegrama a los líderes de la URD en el que los acusaba de haber actuado en alianza con partidos ilegales. Es obvio que esta acusación era solo una excusa para atacar tanto a la URD como a los resultados electorales. En ese mismo mensaje Pérez Jiménez, sin atender a la coherencia, reconocía la victoria electoral de la URD, con lo que revelaba, una vez más, que lo que estaba en juego era el poder, no la verdad:

Las FFAA, tan mal tratadas por usted, no están dispuestas a permitir que por medio de acuerdos viles se perjudique el prestigio y el poder de la nación, seriamente comprometidos por el triunfo electoral de Acción Democrática y el Partido Comunista propiciado por URD (Kolb 1974:114; énfasis en el original).

De esa forma, Pérez Jiménez reconocía que la URD (con el respaldo de AD y el PC) había ganado las elecciones, pero afirmaba que sólo lo había logrado mediante una alianza inaceptable con partidos ilegales. No obstante, horas después, cuando fue proclamado presidente provisional en una ceremonia con gran publicidad, el Consejo Electoral anunció que los resultados electorales parciales resultaban suficientes para anunciar la victoria de Pérez Jiménez. Según los resultados manipulados, el FEI iba a la cabeza con 578.000 votos; le seguía la URD con 463.708; y Copei estaba en tercer lugar, a gran distancia, con 138.003. Como la Junta no había pensado por adelantado en la posibilidad de fraude, había elegido como presidente del Consejo Electoral a un hombre honesto que se negó a firmar las actas. Pero para el nuevo guión de la obra cualquier firma servía, de modo que las firmó otro miembro del Consejo.

En ese momento, sin embargo, no eran los votos la fuente de la legitimidad de Pérez Jiménez. Según el nuevo guión, como el voto popular se había contaminado por la participación ilegal en las elecciones de AD y el PC, las FFAA, como defensoras de la integridad nacional, resultaban la fuente última de legitimidad. Este hecho, de acuerdo con el plan de Vallenilla, tenía que representarse mediante una ceremonia. De ahí que la Junta, bajo la presidencia de Suárez Flamerich, presentara su renuncia a las FFAA, las cuales a continuación nombraron a Pérez Jiménez presidente provisional.

Vallenilla debió sentirse complacido. El golpe no solo había tenido éxito, sino que había ocurrido el 2 de diciembre, tal como deseaba, 101 años después del golpe de Luis Napoleón Bonaparte. La fortuna también lo había favorecido personalmente: fue designado ministro de Relaciones Interiores, el segundo cargo en lo que respecta al poder político. Desde ese puesto podía confiar en aumentar

también su fortuna personal. Vallenilla relata sin reparos que después del nombramiento, un vendedor ambulante le ofreció un billete de lotería. Alguien que pasaba por el lugar disuadió al vendedor con el comentario de que Vallenilla “ya se sacó el gordo” (1967:359). Era ya un saber común que el Estado no solo era fuente de poder, sino también de riqueza.

Analogías

Los hombres que detentaban el poder engrandecieron el golpe para presentarlo como un acontecimiento que abría una nueva época. Cuando la fuerza de las circunstancias los hizo enfrentar un camino desconocido, Vallenilla les aportó su conocimiento de la historia europea para que sirviera de guía en la construcción de la historia venezolana. Es precisamente en periodos de cambio, apuntaba Marx, cuando las personas “se disponen precisamente a revolucionarse y revolucionar las cosas”, cuando “conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal” (1981: 15).

Al invocar el espíritu de Luis Napoleón Bonaparte, Vallenilla se las ingeniaba para divorciar el golpe de 1952 de su genealogía de golpes militares latinoamericanos y para establecer su afinidad con el golpe del 2 de diciembre de 1851. Mediante el poder alquímico de las analogías históricas, intentaba trasladar los eventos locales de los bastidores hacia el centro del escenario de la historia, transmutar a Pérez Jiménez y a Luis Napoleón en espíritus afines que llevaban a cabo una misión histórica común.

Pero quizás lo único que emparentaba a Pérez Jiménez con Bonaparte era una banalidad compartida y la distancia del antepasado cuyo poder ambos invocaban. Marx escribió que “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y otra vez como farsa” (1981: 15). En su clásico análisis del 18 Brumario, Marx vio a Luis Napoleón como el actor principal de la farsa del 2 de diciembre de 1851 sólo porque “la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe” (1981: 8). Consideraba que la descripción de Luis Napoleón como el héroe que había salvado a Francia del caos de las disputas de facciones no era más que un constructo dramático, la ilusión de una sociedad en crisis.

Resulta adecuado que Laureano Vallenilla haya invocado el espíritu de este particular salvador de

Francia, un fantasma en su propia época, en su esfuerzo por transmutar a otra mediocridad grotesca en un salvador, y a su pequeño golpe en el seno del Estado en un golpe de Estado que inauguraba una nueva época. También resulta adecuado que un historiador venezolano, ex-dirigente comunista, Juan Bautista Fuenmayor, también haya convertido el golpe de 1952 en un ejemplo de la “ley histórica general” cuya mejor expresión es el golpe bonapartista del 2 de diciembre de 1851, según la cual cada vez que la burguesía se demuestra incapaz de ejercer el poder político directo apela a un gobernante autocrático y le da su apoyo, para defender sus intereses más generales. Fuenmayor, que escribe la historia de Venezuela desde una perspectiva marxista a la sombra de la historia europea, vacila: ¿los acontecimientos locales eran el resultado de sus propias leyes o simplemente el producto imitativo de la evolución de la historia europea que sí respondía a leyes? Como Fuenmayor sabía que Vallenilla había diseñado el golpe siguiendo el modelo de Luis Napoleón, sintió que tenía que dar cuenta no solo de la determinación interna de los acontecimientos históricos en Venezuela, sino también de acontecimientos urdidos como imitación conciente de otra historia, que se desarrolla según ciertas leyes. Incapaz de resolver este dilema en su recuento en varios volúmenes de la historia venezolana contemporánea, Fuenmayor afirma: “No importa si él (Vallenilla) planificó la estrategia de Pérez Jiménez, o si el proceso histórico evolucionó ciegamente, espontáneamente, siguiendo leyes históricas. Lo que importa es que los eventos históricos ocurrieron de esta y no de otra manera” (Fuenmayor 1982: 397).

Estos acontecimientos históricos y su interpretación muestran que es posible que los hechos y los personajes históricos ocurran más de dos veces, que la historia aparentemente puede seguir los borgianos caminos laberínticos en lugar de la dialéctica en espiral hegeliana, que sus etapas también están hechas de infinitos espejos y elementos de tramoya y no solo de estructuras funcionales, que en ocasiones sus personajes actúan más como intérpretes de un papel que como agentes de la historia. O quizás muestran que estas peculiaridades históricas se producen más a menudo cuando a los hechos y los personajes no se les asigna gran importancia porque ocupan espacios marginales en las sombras de la historia mundial. En ese caso parecen carecer del poder para convertirse en fuerzas históricas y la iluminación que reciben no procede de sus propios actos, sino de su imitación; del *Napoleon le petit* de Víctor Hugo, no del Gran Napoleón de Austerlitz; del sobrino y no del tío. Como sólo pueden imitar imitaciones, en momentos de crisis invocan la imitación. Pero todos los imitadores -sea del original o de la copia- comparten un cierto parentesco. A diferencia de los revolucionarios, no invocan a los muertos para “glorificar las nuevas luchas”, sino para “parodiar las antiguas”; no para

“exagerar en la fantasía la misión trazada”, sino para “retroceder en la realidad ante su cumplimiento”; no para “encontrar de nuevo el espíritu de la revolución”, sino para “hacer vagar otra vez a su espectro” (Marx 1981:17).

Vallenilla sabía que estaba parodiando el pasado. De su padre, quien como ideólogo de Gómez había celebrado las virtudes del gendarme que requerían las naciones atrasadas, había recibido una educación de elite, y de él había heredado un interés por el poder político. Miembro de las clases altas de Caracas, había recibido una educación clásica en Europa (en Alemania, Francia, Italia y Suiza), donde estudió filosofía, derecho y ciencias políticas. Regresó a Venezuela en un momento cuando, en nombre del “pueblo”, como él mismo describiera, políticos provenientes de las clases medias, jóvenes oficiales del ejército y hombres de negocios en busca de ganancias reemplazaban el viejo orden oligárquico por instituciones democráticas.

Vallenilla se distanció de lo que sentía que eran las convicciones irreflexivas de sus contemporáneos venezolanos. “Pertenezco a esa generación nihilista que formó Francia entre las dos guerras mundiales. No creo en casi nada, pero reflexiono” (Vallenilla 1967: 297).

Sabía que tenía que aceptar una vida de concesiones. “Como despreciaba tanto a las clases bajas como a los políticos profesionales, favorecía un gobierno platónico de filósofos, pero se transaba por la vaga aproximación venezolana a este ideal: un gobierno de oficiales del ejército provenientes de la clase media baja y de oligarcas criollos” (Burggraaff 1972: 139).

En Europa conoció a muchos intelectuales venezolanos y de otros países de la América Latina, algunos de los cuales habían sido amigos cercanos de su padre. Vallenilla escribió que las ideas positivistas de César Zumeta habían ejercido una gran influencia sobre él. Zumeta lo alentó a trabajar “del lado de los que quieren construir la Nación porque a nuestra patria hay que construirla y poblarla”. “No olvide”, escribe Vallenilla que le dijo Zumeta, “que somos tres millones de analfabetos o casi analfabetos, desnutridos, desnudos y enfermos”. Afirmando que era de Zumeta una idea que se convirtió en principio legitimador del régimen de Pérez Jiménez: “El voto, la legalidad, la libertad de la prensa, son lujos para burgueses bien alimentados. La ciudad moderna no es la ciudad antigua y la democracia no se funda sobre ranchos de paja”. Zumeta describió la transformación de la nación como una tarea sagrada que debía emprender la elite. “Si alguna vez Dios le brinda la oportunidad de ejercer el poder, abra carreteras, canalice los ríos, riegue las tierras, levante escuelas y construya vías férreas.” En sus memorias, escritas en el exilio, Vallenilla parece adecuar el recuerdo de esa conversación a su situación del momento:

Si para ello es indispensable ser fuerte, sea fuerte y si le arrebatan el mando y lo envían al destierro, poco importa. Tendrá la satisfacción del deber cumplido. De todos nuestros gobernantes del siglo XIX solo Guzmán Blanco se salva del olvido porque construyó algo. Construir, edificar, crear, es la primera obligación de los dirigentes en esta etapa del mundo (1967:135-136).

Como durante la conquista, una óptica colonizadora describía las Américas como una tierra de habitantes desnudos e ignorantes a los que los iluminados debían civilizar. Durante el periodo colonial se estimaba que la conversión al cristianismo, por más formal que fuera, transformaba a los salvajes en seres racionales. “En esta etapa del mundo”, según Vallenilla, el contacto con los iconos externos de la modernidad, por más mimético que fuera, llevaría a un pueblo primitivo a la modernidad.

Pocos días después de la toma del poder, el nuevo ministro de Relaciones Interiores le dijo a Pérez Jiménez que su conocimiento de la historia y el pueblo de Venezuela le permitía saber lo que muchos venezolanos pensaban “sobre el drama o sainete que usted y yo estamos representando en esta asoleada sala de espectáculos que es Venezuela”. Y añadió: “Por lo demás espero de todo corazón que sea un sainete. Detesto el drama. Prefiero el género chico” (1967: 362).

En ese sentido, los acontecimientos le dieron la razón a Vallenilla, porque comparada con la farsa de 1851, la de 1952 era solo una aproximación compendiada. No obstante, una breve comparación entre ambos golpes puede ayudarnos a entender la sociedad cuyos gobernantes querían moldear imitando las imágenes de la seductora Europa³⁰.

El 2 de diciembre de 1851 Luis Napoleón tomó el poder luego que una prolongada lucha dentro y fuera del Parlamento hubiera desembocado en un empate político entre las fuerzas sociales básicas que contendían en la sociedad francesa: los legitimistas (propiedad de la tierra), los orleanistas (capital industrial), el proletariado, el lumpenproletariado, los campesinos, las clases medias y el ejército. Cuando la Asamblea Nacional rechazó, en noviembre de 1851, la decisión de Napoleón de volver a instituir el sufragio universal, por temor a que se beneficiara con el apoyo del campesinado, “volvió a confirmar una vez más que había dejado de ser la representación libremente elegida del pueblo, para convertirse en el Parlamento usurpador de una clase; confesó una vez más que había cortado por su propia mano los músculos que unían la cabeza parlamentaria con el cuerpo de la

³⁰ Como en este capítulo hago un contrapunteo más bien juguetón entre los acontecimientos que tuvieron lugar en Venezuela y la historia francesa tal como la narra Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1963), la base de la comparación entre el golpe de Pérez Jiménez en 1952 y el de *Luis Bonaparte* en 1851 es el recuento que hiciera Marx de este último.

nación” (Marx 1981:113). Pero igual que mediante este rechazo la burguesía parlamentaria renegaba del pueblo al que decía representar, la burguesía extraparlamentaria, mediante prolongados conflictos, había llegado a renegar de sus representantes en la Asamblea Nacional. En diciembre de 1851 estaba dispuesta, como otros grupos, a aclamar a Luis Napoleón como su representante.

Por tanto, el golpe de 1851 fue la respuesta al empate entre fuerzas sociales en conflicto. Pudo ocurrir sólo porque la alianza entre diferentes sectores de las clases media y alta se había roto, y las clases bajas habían sido neutralizadas: los trabajadores mediante la represión (durante los levantamientos de junio de 1848 más de 3.000 trabajadores fueron muertos y más de 15.000 deportados); los campesinos, mediante su propia desorganización y confusión (veían en su posesión de pequeñas propiedades la clave de su salvación y no una de las causas de su estancamiento); y el lumpenproletariado, mediante su participación en los despojos del poder (el movimiento del 10 de diciembre había concedido beneficios materiales al lumpenproletariado de París). La Asamblea Nacional era la representación de este cuerpo fragmentado. Al tratar a última hora de conquistar un poder propio y reconocer al ejército como “Poder decisivo del Estado” (Marx 1981: 113), intentaba formar un ejército parlamentario. Pero, “cuando, en vez de requerir inmediatamente a las tropas, debatía sobre su derecho a requerirlas, revelaba la duda en su propio poder” (1981:113). Debido a su fragmentación, “la Asamblea Nacional era ya incapaz para adoptar acuerdos. Sus elementos atómicos ya no se mantenían unidos por ninguna fuerza de cohesión; había gastado su último hálito de vida, estaba muerta” (1981: 113). Fue en el contexto de un empate entre fuerzas sociales contendientes que Luis Napoleón tomó el poder.

El sainete de 1952 se desarrolló en el reducido escenario del Palacio Presidencial, mientras el resto de la nación observaba los acontecimientos. El golpe no nació de la participación conflictiva de grupos sociales en la vida política, sino de su falta de participación; no de la fragmentación del poder político, sino de su concentración. En Venezuela no había una Asamblea Nacional que proclamara representar a la nación como mediadora entre sus múltiples y conflictivos intereses, sino un Ejecutivo autocrático que afirmaba encarnar el interés nacional de una sociedad silenciada. El golpe no fue el resultado de un empate social, de una amenaza desde abajo ni de una conspiración, sino de las confusiones engendradas por el poder estatal absoluto. Pérez Jiménez había creído que ganaría las elecciones generales, y, por tanto, las organizó. El golpe fue la respuesta de los que detentaban el poder a la realidad inesperada e intolerable de su derrota electoral.

Es cierto que el hecho de que el gobierno militar organizara una contienda electoral indica al menos la

presión ideológica que ejercían las demandas democráticas y la opción de la Junta gobernante de ubicar su gobierno en el marco aceptado de las instituciones democráticas. Y el hecho de que la mayoría del electorado votara contra el Gobierno muestra que la población estaba dispuesta a tomar una posición opositora en la arena pública. Pero la facilidad con la que se organizó el golpe y se echaron a un lado los resultados electorales revela la debilidad de los portadores de las demandas democráticas. El verdadero *locus* del poder seguía residiendo en el propio aparato del Estado, no en la sociedad civil. El pueblo disfrutaba del poder de votar, pero sus votos tenían muy poco poder.

Como las elecciones condujeron al golpe, se demostró que la oposición estaba en lo cierto, pero por razones que no eran las que alegaba. Se produjo el fraude electoral, pero solo después de los hechos. Dadas las obvias evidencias de fraude, el propósito del mismo no fue tanto crear la ilusión de que las urnas eran la fuente del poder legítimo como adornar al poder militar con una fachada de legitimidad. Una vez decidido el golpe, Pérez Jiménez hizo una abierta burla de las elecciones. Se echó a un lado el escrutinio inicial, se alteró el resultado final y se convirtió al FEI en triunfador. El fraude dejó huellas visibles de su hechura. Quedó claro que Pérez Jiménez tenía el poder gracias a las FFAA y que los votos electorales eran solo un adorno en las culatas de los fusiles. Los coreógrafos del golpe, con una amenazadora combinación de elementos, recrearon los procedimientos de la legalidad, pero no ocultaron los signos de su cruda manipulación, como si quisieran emitir la advertencia de que los que controlaban el Estado ejercerían el poder sin ambages.

La respuesta de Vallenilla a las críticas contra el golpe revela el espíritu de este, así como el carácter cosmético del fraude. Pocos días después del golpe un amigo cuya opinión respetaba le dijo: "Ustedes han debido pensar muy bien antes de actuar. Modificar el resultado de las elecciones es algo grave" (Vallenilla 1967:362). Según el propio Vallenilla, su respuesta fue la siguiente:

A mi no me preocupa... la acusación. Conozco el valor del voto en Venezuela. Se obtiene con el engaño, la mentira, la calumnia o la coacción. Cada banda apela a los medios de que dispone. Los demagogos al sufragio. Los otros a las armas para imponer su voluntad. En los dos casos el origen del poder es espurio y solamente puede purificarlo una gestión inteligente y eficaz. No temo a lo que se nos atribuya, sino al uso que vamos a hacer del Mando Supremo. Si durante el próximo quinquenio aceleramos el proceso de transformar a Venezuela y si al mismo tiempo creamos riqueza y elevamos los niveles de vida, ¡bendito sea el golpecito del 2 de diciembre! (1967: 362).

Tres décadas después, Pérez Jiménez reiteró este criterio y enfatizó que la democracia debía definirse por los logros del Gobierno y no por sus orígenes electorales: "Para nosotros la democracia no era la

cuestión del voto popular y que bastaba llegar a la presidencia ungido con ese voto para después tener patente de corso y hacer lo que les diera en gana”. Por el contrario, “para nosotros la democracia es la resultante de la labor del Gobierno y no el origen del mismo” (Blanco Muñoz 1983:186). Insistió en que nunca le habían preocupado las etiquetas, sino solo los hechos. “Que se llamara dictadura, dictablanda, protodemocrático, predemocrático, eso para mí no tiene ningún valor. Lo esencial es que era un gobierno beneficoso a la nación venezolana” (1983: 187). Cuando se le preguntó sobre la aparente preocupación de su gobierno por respetar determinadas formas democráticas, explicó que se trataba de una preocupación estratégica:

Sí, para llenar esas apariencias, para cumplir con esa parte. Pero no porque le diéramos la importancia plena que le dábamos a otras cosas. La importancia capital seguían siendo las ejecutorias del Gobierno. Y como yo comprendí que si se les daba otra vez la plenitud de poderes a los partidos, se truncaría la obra excepcional que se estaba realizando en Venezuela; opté por darle una forma democrática para prolongar mi gobierno por un periodo más. Un solo periodo más para luego abandonar el campo, porque sabía que dentro de los límites de ese periodo se iban a poder ejecutar un cúmulo de obras que no se han podido realizar en 25 años de democracia (Blanco 1983:187).

Fueron hombres de la cúpula, que detentaban el poder del Estado, quienes pusieron en escena el 18 Brumario de Pérez Jiménez. Esos hombres podían afirmar, junto a Vallenilla, que “sin derramar sangre, con unas pocas medidas, hemos torcido el rumbo de la historia y evitado una catástrofe” (Vallenilla 1967:368). En ese escenario, el ejército aparecía como el “poder decisivo del Estado”. Pero aunque la fuerza de las armas controlaba al Estado, el Estado controlaba a la sociedad mediante la fuerza del dinero. La expansión violenta de este Estado con enormes riquezas propias había hecho que todas las fuerzas sociales relevantes lo consideraran la fuente de su seguridad o de su fortuna. Y lo que es más importante, la propia identidad de esas fuerzas estaba vinculada al Estado, porque se habían formado o transformado a partir de su expansión. Se sentían anonadadas ante él. Siendo, como eran, hijas del petroestado, que su formación histórica en tanto fuerzas sociales era demasiado reciente, su experiencia política demasiado limitada, su necesidad de los recursos financieros y políticos demasiado grande para que siguieran un curso de acción independiente. Es cierto que había existido oposición al régimen antes del golpe de 1952: intranquilidad estudiantil, huelgas obreras, constantes conspiraciones políticas. Pero estos movimientos, que carecían de raíces suficientes en la sociedad, buscaban apoyo, en última instancia, en el Estado; la mayor parte de los esfuerzos opositoristas civiles terminaron por verse envueltos en conspiraciones militares. No hubo

levantamientos independientes de las masas ni una alianza significativa de grupos de interés o clases sociales contra el régimen. De la misma forma que el golpe de 1948 que derribó a Gallegos no provocó una resistencia significativa, el golpe de 1952 que pasó por encima de las elecciones de noviembre no encontró mayor repulsa.

De nuevo el Gobierno se sintió sorprendido; sus líderes habían vivido sus ilusiones, e incluso sus miedos engañosos, como si se tratara de la realidad. Cuando Vallenilla le informó a Pérez Jiménez que el golpe había triunfado, que no había encontrado resistencia, Pérez Jiménez le preguntó, casi sin poderlo creer: “¿Entonces nadie se ha alzado?”. La respuesta de Vallenilla resulta reveladora: “No, coronel, nadie, pero no podemos cantar victoria todavía. Los golpes de fuerza tienen, a veces, repercusiones imprevisibles. Hace un siglo, en París, todo parecía marchar bien. De repente, el 4 de diciembre, comenzaron los líos. Hubo muertos. Habrá que mantenerse vigilantes” (1967: 358). De nuevo se contemplaban los acontecimientos de Venezuela a la luz de la historia francesa. Pero en Venezuela el 4 de diciembre pasó sin pena ni gloria; se trataba de un sainete.

4. Construyendo la nación: la nación como constructo

Yo encontré una casa en ruinas y construí una casa sólida.

Juan Vicente Gómez

Aquí he volcado toda mi desilusión. Mi casa es la imagen del país que quise construir.

Marcos Pérez Jiménez

El año 1958, los sucesores del gobierno dictatorial, encontraron un muy sólido basamento en el cual levantar un edificio estable.

Tomás Pérez Tenreiro

Una vez que tomó posesión como presidente constitucional para el quinquenio, el general Pérez Jiménez no siguió describiendo su gobierno como un régimen de transición que debía conducir al restablecimiento del sistema de partidos y a elecciones libres y universales. La Junta, bajo su mando desde el asesinato de Delgado Chalbaud en 1950, se había endurecido. Tras el golpe de 1948, la represión contra los dirigentes sindicales y políticos había sido severa pero ahora, ante las dilaciones del régimen en restaurar las libertades civiles, comenzó a afectar cada vez más a la creciente oposición de la clase media. En Venezuela, periodistas y estudiosos han descrito a menudo el endurecimiento del Gobierno como el cambio de la dictablanda de 1948 al de la dictadura que comenzó después de 1950¹. Tras el golpe, la legalizada dictadura trató de apropiarse de la democracia, re- definiéndola.

Mientras que en 1948 la Junta Militar se presentaba como defensora de una democracia traicionada, y después del asesinato de Delgado Chalbaud aún prometía restaurar el sistema de partidos políticos, en 1953 proclamó que representaba la democracia “verdadera”: no la pseudodemocracia de los partidos y las promesas vacías, sino la democracia del orden político y de los hechos en el terreno material. Como su admirado amigo Juan Domingo Perón, entonces presidente de Argentina (Portantiero y De Ipola 1981: 14), Pérez Jiménez se burlaba de la política y su lenguaje engañoso, que no hacía más que traicionar los intereses del pueblo. En lugar de ello, ofrecía beneficios materiales a cambio de los cuales pedía la aceptación de su autoridad como dirigente de la nación. Ahora se juzgaría a la democracia por sus hechos y sus logros prácticos, y no por sus orígenes y métodos. El

¹ Como en toda contraposición, el interés por distinguir gradaciones puede oscurecer cambios fundamentales de esencia.

Estado monopolizó la actividad política; se proscribió a la mayoría de los partidos y sindicatos. El objetivo expreso del régimen -liberar Venezuela de la plaga de la política de partidos a fin de concentrar las energías nacionales en el progreso material- se llevaría a cabo en una atmósfera de estabilidad política (Burggraaff 1972: 130-131).

Esta preocupación por “construir” la nación mediante la edificación de su estructura material se expresaba en términos de un discurso modernizador que combinaba un énfasis positivista en el poder formativo del hábitat físico con la concepción historicista de un desarrollo que avanzaba por etapas hacia un fin concreto. Los dirigentes estatales hablaban de algunas de las manifestaciones más visibles de la modernidad como si se tratara de la fuente del progreso de la sociedad, y no de su resultado. En su versión de los acontecimientos, el esfuerzo por alcanzar a las naciones avanzadas conllevaba la utilización racional de los poderes de la nación, a los cuales identificaban con las riquezas de su subsuelo y el control de su despilfarro, que atribuían a las masas atrasadas y a los políticos interesados que decían representarlas. Desde la perspectiva de los nuevos dirigentes, el uso racional del dinero proveniente del petróleo suponía trasplantar a suelo venezolano lo que consideraban los signos y las fuentes visibles de la modernidad. Durante el gobierno de Pérez Jiménez, la siembra del petróleo continuó de nueva guisa.

El golpe de 1952, que tenía tan leve disfraz, se describió ahora como el momento fundacional de una nueva era. Con la inauguración ritual de grandiosos proyectos de obras públicas todos los años, Pérez Jiménez trataba, al mismo tiempo, de validar el golpe y de presentar su gobierno como expresión del interés nacional. Los hechos hablaban por sí mismos; no eran necesarios los discursos. Al pueblo, en su condición de espectador, se le invitaba a aplaudirlos en silencio.

La nación como *constructo*

Como he tratado de mostrar en capítulos anteriores, cuando la industria petrolera y los ingresos del Estado crecieron en el segundo cuarto de siglo, el discurso dominante construyó la nación como una entidad compuesta de un cuerpo social y un cuerpo natural. La riqueza, que durante el siglo XIX se identificaba con su producción agrícola, llegó a definirse como algo que consistía directamente en sustancias naturales. A este traspaso del locus de la riqueza del suelo cultivado al subsuelo no transformado correspondió un cambio en la base social del poder político, que se desplazó de los caudillos regionales y sus ejércitos hacia el Estado y los partidos políticos financiados por el petróleo y

representantes del pueblo. En el contexto de unos ingresos que crecían, el principio de la propiedad nacional sobre los recursos naturales constituyó el cimiento material de la institucionalización de la soberanía popular.

Al igual que la promoción de la democracia había estado vinculada a la idea de una nación que amalgamaría derechos democráticos como el sufragio universal y la libre expresión política con el derecho colectivo a la riqueza petrolera, la desmovilización de la sociedad bajo el mando de Pérez Jiménez conllevaba una reconceptualización de la relación entre pueblo y Estado que polarizaba tendencias ya presentes en el proyecto democrático. El cuerpo social de la nación se convirtió de manera más evidente en beneficiario pasivo de su cuerpo natural, entendido ahora como la fuente fundamental de los poderes nacionales. Este cambio supuso que el locus de la agencia histórica se desplazara sutil, pero perceptiblemente, del cuerpo social hacia el cuerpo natural, del pueblo a la naturaleza.

Como había ocurrido en la narrativa democrática de la nacionalidad, la naturaleza no apareció como actor social independiente, sino mediado por el Estado. Pero el Estado militar proclamaba representar a la nación directamente, sin mediación del pueblo. Como agente de la naturaleza, el Estado proponía ahora transformar el cuerpo natural de la nación en el hábitat material civilizado del pueblo. Se asumía que esta morada moderna podría transformar al pueblo que la habitaba. Esta era la creencia fundamental de Pérez Jiménez: la transformación del hábitat físico cambiaría al pueblo. Sin embargo, también trataba de facilitar este proceso civilizador saturando la morada de espíritu venezolano.

El espíritu de la nación

Según Pérez Jiménez, “la formación de una conciencia nacional” suponía el desarrollo de lo que denominaba un “saludable nacionalismo”, esto es, cuya base fueran “hechos” positivos y no “teorías negativas e inalcanzables”. Si bien, en su opinión, se asociaban fundamentalmente con los logros materiales de las sociedades metropolitanas, también le prestaba cierta atención a algunos aspectos de la cultura nacional, que denominaba la dimensión “espiritual” del nacionalismo. Según decía, “Nuestro nacionalismo debe implicar la defensa de las tradiciones que expresan lo positivo del espíritu venezolano”.

Resulta posible deducir, a partir de acciones y pronunciamientos gubernamentales dispersos -y no de algún programa explícito-, que esas expresiones positivas del espíritu venezolano tenían tres

procedencias fundamentales: la historia, la religión y la cultura popular. El Gobierno trataba también de aprovechar la energía que fluía de las tres fuentes de identidad colectiva, al tiempo que intentaba contener y delimitar su expresión al reducirlas a manifestaciones acotadas y controlables. La historia nacional consistía en el culto de los héroes de las guerras de Independencia, el catolicismo en la adoración de un panteón de santos identificados con regiones específicas, y la cultura popular en folklore oficial.

El vehículo principal para la afirmación de la historia nacional era la Semana de la Patria, una jornada de desfiles y ceremonias cuyo objetivo expreso era revalorizar el concepto de patria, honrar a los héroes de la Independencia y celebrar los valores de la nación. Evidentemente, al vincular patria y Estado el régimen confiaba también en establecer una línea de continuidad entre la independencia política y económica, por un lado, y los fundadores de la nación y sus constructores de ese momento, por la otra, y de esa manera crear la imagen de una colectividad unificada, empeñada en llevar adelante un proceso civilizatorio. Como Guzmán Blanco y Gómez, quienes habían tratado de modernizar Venezuela, Pérez Jiménez se consideraba la encarnación del espíritu de Bolívar.

La Semana de la Patria, creada por decreto en 1953, culminaba el 5 de julio, día de la declaración de la Independencia en 1811. El evento principal tenía lugar en Caracas, cuando sectores representativos de la población -trabajadores, estudiantes, militares, profesionales y miembros de la administración pública- se veían obligados a asistir a un gran desfile conmemorativo; a partir de 1955 el desfile se celebró en el Paseo de los Proceres, avenida construida por Pérez Jiménez que estaba flanqueada por monumentos en honor a los héroes de la Independencia. Al profundizar la deificación de Bolívar que había comenzado con Guzmán Blanco en el siglo XIX, la Semana de la Patria prosiguió también la sacralización del Estado como fuente última de los valores nacionales².

² Para un análisis breve de la Semana de la Patria, v. Castillo D'Imperio (1990:120-124); para un análisis de la deificación de Bolívar, v. Carrera Damas (1969).



El general Pérez Jiménez recibe como regalo obras de arte que lo toman como modelo.

(Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

La sacralización de la política implicó también la politización de la religión. A diferencia de AD, que se había alienado a la Iglesia católica con su intento de regular las instituciones educativas católicas, Pérez Jiménez alentó activamente los esfuerzos evangelizadores de la Iglesia y fomentó el establecimiento de santos patronos regionales en todo el país. El Gobierno fomentó el catolicismo y el culto a la Virgen María. Cada año se nombraba santa patrona de la Semana de la Patria a una virgen diferente, y se organizaban procesiones y misas para adorarla en diferentes ciudades. En 1952 el Papa Pío XII se avino a la petición del Gobierno de designar como santa patrona de Venezuela a la Virgen de Coromoto.

Como parte de su apoyo a la Iglesia católica, el Estado trató de erradicar las formas autónomas de religiosidad popular. Su blanco de ataque principal fue el llamado culto de María Lionza, una religión popular que combina creencias y prácticas indígenas, espiritistas afroamericanas y católicas populares y que se expandía en sectores de trabajadores y de la clase media (incluidos los militares) de centros urbanos. El Gobierno, al tiempo que trataba de impedir sus prácticas rituales tildándolas de “curanderismo”, se apropió de su cosmología mítica como expresión de la identidad nacional (Barreto 1995). Reprimida como figura religiosa, se celebró a María Lionza como mito nativista. En esta versión

manejable se convirtió en figura cultural que aparecía como parte del folklore del país en producciones teatrales, pinturas, esculturas y relatos literarios y periodísticos. En 1953 se ubicó una imponente estatua de María Lionza, realizada años antes por el escultor Alejandro Colina, en el apenas construido campus de la Universidad Central de Venezuela, diseñada por el arquitecto modernista Carlos Raúl Villanueva bajo el auspicio de Pérez Jiménez. Como ha mostrado Barreto, los esfuerzos del Estado por regular y controlar esta religión popular hicieron que la imagen pública de María Lionza se modificara durante ese periodo (1948-1958): si al principio era una figura popular pagana que la escultura sensual y musculosa de Molina evoca, con el tiempo llegó a ser una imagen casta con un curioso parecido con la Virgen de Coromoto.

Durante esa década, por primera vez en la historia de Venezuela el estudio de las tradiciones populares se integró a la curricula escolar. Con la oficialización del “folklore” como componente de la identidad, el Gobierno institucionalizó ciertas formas de la danza y la música populares y las transformó en expresiones representativas de la cultura nacional, que debían enseñarse e interpretarse en los actos oficiales. Apoyó también la creación de compañías de danza y teatro que diseminaron estas expresiones oficiales del folklore en el país y en el extranjero.

El más importante de estos grupos fue El Retablo de las Maravillas, fundado por Manuel Rodríguez Cárdenas, a cargo de la Dirección de Cultura Obrera, dependiente del Ministerio del Trabajo. Según Rodríguez Cárdenas, El Retablo fue, como proclamaba su lema, un grupo de “hijos de los trabajadores para los trabajadores”. Esta compañía de aficionados afirmaba representar “un movimiento juvenil obrero, unificado alrededor del arte, aplicado al cultivo espiritual de las masas” (Rodríguez Cárdenas 1954:16; Castillo D'Imperio 1990:124-126). Su repertorio reunía formas estilizadas de bailes de diferentes regiones.

Al igual que la finalidad de los constructos físicos del Estado era perfeccionar y al mismo tiempo contener al pueblo, la creación y promoción estatal de tradiciones nacionales selectas supuestamente estimularía, mientras disciplinaba, la creatividad popular. La Junta desconfiaba de los sectores populares y, sin embargo, los consideraba fuente para la construcción de una cultura nacional homogeneizadora. Al mismo tiempo que ejercía un estrecho control sobre la política mediante la censura, el desmantelamiento de partidos y sindicatos, y la represión, el Gobierno estimulaba la organización de la cultura como un reino apolítico para la celebración de una nacionalidad armoniosa y auténtica.



Estatua de María Lionza realizada por Alejandro Colina, ubicada en 1953 por el general Marcos Pérez Jiménez en terrenos cercanos a la Universidad Central de Venezuela, Caracas.

La actitud ambivalente de la dictadura hacia los sectores populares hizo más visible una contradicción que estaba en el centro mismo de la democracia venezolana, encubierta únicamente por el discurso celebratorio del pueblo elaborado por el Estado: la construcción de aquél como cimiento de la identidad soberana de la nación, y a la vez como masa primitiva que debía ser amoldada por la elite estatal (más) iluminada. Mientras que el régimen democrático había intentado perfeccionar al pueblo estimulando su participación política y -al mismo tiempo- dirigiendo el curso de la misma, la dictadura trató de moldearlo restringiendo su actividad y modificando su medio físico.

El cuerpo de la nación

Durante el gobierno de Pérez Jiménez, la redefinición de la ideología del Estado, lograda en el contexto de un discurso público restringido, se produjo por medio de hechos y de breves pronunciamientos. Consignas vagas como la “transformación racional del medio físico” abarcaban una multitud de actividades estatales en áreas muy diferentes. Sin embargo, la práctica evidenció que el régimen se concentraba en los signos visibles de la modernidad que consideraba esencia del

desarrollo capitalista. Estas encarnaciones concretas del progreso -hoteles de lujo, carreteras, una siderúrgica, un campus universitario modernista- se entendían al mismo tiempo como símbolos y causa del progreso. Se creía que transplantándolos de los centros metropolitanos al atrasado suelo local, estos fetiches de la modernidad traerían el progreso a Venezuela.

Pérez Jiménez evitaba la retórica política, que identificaba con los execrados partidos, y el debate ideológico, del cual desconfiaba. Su visión de Venezuela no se expresaba programáticamente sino que se ejecutaba de modo pragmático. Fue sólo en respuesta a las crecientes críticas provenientes del extranjero que trató de formular los objetivos que guiaban su gobierno³. Aunque su poder tenía ya carácter constitucional y continuaba decidido a construir su identidad de restaurador del orden y administrador eficaz, se vio en la obligación de expresar el propósito de su gobierno y definir los vínculos entre los ciudadanos y el Estado.

Como si se enfrentara a una tarea amarga, Pérez Jiménez juntó retazos de ideas hasta fabricar una doctrina a la que denominó Nuevo Ideal Nacional, que dio a la publicidad en 1955 durante una celebración del décimo aniversario del derrocamiento del presidente Medina. Panfletos editados por el Gobierno explicaban la doctrina en una lacónica síntesis de las ideas que siempre habían guiado al régimen, adornada con vagas expresiones retóricas que aludían al “progreso” y la “modernización”. Según un estudioso venezolano, el Nuevo Ideal Nacional era un compuesto ideológico de liberalismo, positivismo, militarismo tradicional y retórica de partidos democráticos venezolanos (Avendaño Lugo 1982: 342). Para explicar los propósitos del régimen, esta doctrina afirmaba que el “destino” más alto de los militares era eliminar las luchas políticas y canalizar las energías sociales hacia la “construcción material” de la patria.

En la “materialización del concepto abstracto de Patria” la nación se tornó un *constructo* visible, una apariencia concreta. Entendida la naturaleza como el medio físico y el pueblo como el beneficiario pasivo de una revolución de la geografía física, la nación se transformó en una masa a la que el Estado daría forma. La idea de la “transformación racional del medio físico” se conceptualizó como el medio para moldear y disciplinar al cuerpo social. La política dejaría de ser una lucha “desordenada” entre grupos contendientes que se disputaban los despojos del poder, para convertirse en la “construcción” armoniosa de la nación por parte del Estado.

No se empleó el discurso del progreso material para subrayar la complejidad técnica del desarrollo,

³ Durante la Conferencia Internacional sobre el Petróleo, celebrada en Caracas en abril de 1955, el representante de los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) criticó al régimen y demandó que permitiera la existencia de un movimiento sindical libre. La respuesta de Pérez Jiménez fue expulsar del país al delegado, lo que condujo a una mayor confrontación (Kolb 1974:149-153).

sino su simplicidad en ausencia de conflictos partidistas. En este sentido, el marco ideológico del régimen estaba más cercano al positivismo como se interpretara en Venezuela a principios del siglo XX que a la teoría de la modernización de la segunda posguerra. La ideología del desarrollo gozó de influencia en la América Latina después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la obra de Raúl Prebisch, una de las personalidades más prominentes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Muchos países aceptaron la evaluación de la Cepal acerca de los problemas estructurales básicos latinoamericanos -intercambio desigual, desempleo y dependencia externa- y adoptaron su concepción de “crecimiento hacia adentro” como manera de enfrentarlos. La Cepal asignaba un papel central al Estado como agente responsable de planificar y fomentar el desarrollo de economías integradas y relativamente independientes. Según la Cepal, mediante la promoción del crecimiento de la industria y la agricultura nacionales sobre la base de la sustitución de importaciones, el Estado estimularía también la formación de las clases sociales modernas asociadas a la modernidad: la burguesía y la clase trabajadora asalariada.

La política económica del régimen de Pérez Jiménez se desarrolló, sin demasiada elaboración teórica, siguiendo líneas trazadas desde 1936⁴. En la medida en que algunos de sus objetivos, como el fomento de la industria y la agricultura, eran compartidos en la región y estaban en la base del proyecto cepalino, resulta difícil discernir influencias y caracterizar el marco ideológico específico de las políticas económicas del régimen. Mientras que el prestigioso economista Domingo Maza Zavala disocia el proyecto económico de Pérez Jiménez del programa desarrollista de la Cepal y lo vincula a las ideologías desarrollistas militares de Perón en Argentina, Odría en Perú y Rojas Pinilla en Colombia (precursores de los programas autoritarios burocráticos más coherentes puestos en práctica en Brasil y Argentina en los 60 y en Chile en los 70), la historiadora Ocarina Castillo aprecia una continuidad subyacente en las políticas económicas de los regímenes establecidos en Venezuela tras la muerte de Gómez. Según Castillo D'Imperio, lo que diferencia el proyecto económico de Pérez Jiménez de quienes lo precedieron y lo sucedieron no es su contenido, sino sus “agentes rectores” y, por tanto, “las condiciones políticas tanto internas como externas en las que se desenvuelve” (1990: 62-63).

Me parece necesario subrayar la importancia de un marco legitimador claro como una de las condiciones que contribuyeron a dar forma a los planes de desarrollo de Pérez Jiménez. Como revelan los estudios de Castillo, su proyecto económico se enmarcaba en el discurso legitimador del

⁴ Aunque el régimen procuró en 1957 la asesoría de Celso Furtado, uno de los representantes más destacados de la Cepal, según Orlando Araujo lo que se pretendía del informe Furtado era que sirviera para apuntalar la imagen pública de la dictadura, por lo que el Gobierno no le prestó ninguna atención (Castillo 1990:172-173).

despotismo militar ilustrado, no de la teoría modernizadora que AD formuló durante el trienio o después de 1958, ni en las doctrinas autoritarias burocráticas desarrolladas por los militares en Brasil y Argentina⁵. Su discurso facilitaba la concentración de la toma de decisiones en el nivel ejecutivo y el silenciamiento del debate público sobre el proyecto de desarrollo del Estado. La política se reducía a la técnica, y las técnicas, a su vez, se simplificaban para no ser más que sus principios supuestamente evidentes.

Se puede apreciar los términos lacónicos en los cuales el ideólogo más locuaz del régimen afirma haber expresado su concepción del “progreso material” en un diálogo inusual que tuvo lugar en 1953 entre el ministro del Interior, Vallenilla Lanz, y su prisionero, Alberto Carnevali, el máximo dirigente de AD en la clandestinidad. Cuando Vallenilla visita a Carnevali, ambos se enzarzan en un vivo intercambio -posible porque compartían un mismo origen social- sobre las teorías del padre de Vallenilla, el renombrado historiador positivista e ideólogo del régimen de Gómez, Laureano Vallenilla Lanz⁶. En *Cesarismo democrático*, Vallenilla Lanz padre había planteado que los países latinoamericanos no estaban listos para la instauración de instituciones democráticas porque carecían de desarrollo social debido al legado de guerras civiles, economías fragmentadas, mezcla racial y ausencia de instituciones educativas. En consecuencia, debían ser gobernados por césares democráticos, déspotas ilustrados que monopolizaran, en una transición, el poder político, a fin de reordenar la sociedad y crear las condiciones para una futura democracia⁷.

Vallenilla cuenta que Carnevali -a quien consideraba el mejor de los adecos- lo presionó para que le explicara cómo planeaba erradicar el cesarismo. Su respuesta fue una formulación del credo de la dictadura: “Me empeño en que se lleve a cabo un programa de vasto alcance, una revolución en la geografía de Venezuela que, de cumplirse en su totalidad, extinguirá para siempre las razones del Cesarismo” (1967: 383). Creo que Vallenilla Lanz no sintió la necesidad de dar detalles a Carnevali ni a los lectores de sus memorias acerca de la “revolución en la geografía física de Venezuela” porque es muy probable que sus principios hubiesen sido aceptados por todas las partes en conflicto. Como sugiere Castillo, lo que en última instancia distinguía al nuevo régimen eran los agentes encargados de

⁵ La obra de Castillo D'Imperio constituye el análisis más completo hasta la fecha de los cimientos ideológicos del proyecto económico de Pérez Jiménez (1990); otras obras que incluyen evaluaciones sobre su programa económico en el marco de un análisis más general del periodo son, entre otras, Bautista Urbaneja (1992), Manuel Rodríguez Campos (1991), Martín Frechilla (1994) y Stambouli (1980). La referencia a la valoración de Maza Zavala sobre el programa económico del régimen está tomada de una entrevista grabada (Castillo D'Imperio 1990: 172). Para un análisis del autoritarismo burocrático y su discurso típico, v. O'Donnell (1973) y Collier (1979).

⁶ Laureano Vallenilla Lanz (hijo) dejó de usar el apellido materno para llamarse igual que su padre.

⁷ Aunque a menudo deja de lado su obra con el argumento de que no es más que una apología de la dictadura de Gómez, a la cual apoyó, lo cierto es que constituyó una innovadora interpretación sociológica de la historia de Venezuela, cuyos méritos han sido ampliamente reconocidos (Salazar-Carrillo 1966; Caballero 1966).

ejecutar el programa, no su contenido básico.

Al afirmar que gobernaba según principios racionales, la Junta Militar intentaba subrayar el carácter técnico del desarrollo y, por tanto, erradicar el debate público sobre sus medios y fines. Esa estrategia a menudo ha conducido en América Latina a la producción de programas de desarrollo muy elaborados, pero el reclamo de racionalidad durante este periodo de auge en Venezuela produjo propuestas minimalistas y políticas ad hoc. Desde la perspectiva de la Junta, como AD había malgastado la riqueza y las energías sociales en reformas partidistas, el régimen militar podía demostrar fácilmente su superioridad y fomentar el desarrollo mediante la transformación del dinero proveniente del petróleo en logros físicos, reincorporando visiblemente a la nación el valor extraído de su subsuelo. Mediante el poder del Estado, el paisaje ideológico oficial cambió; la geografía física se adelantó hacia el proscenio del discurso oficial, mientras que el pueblo se retiró hacia el fondo del escenario y se transfiguró de sujeto histórico en espectador de la revolución física emprendida por el régimen militar.

Esta concentración en las obras públicas hizo que se desplazara la atención de la valorización del subsuelo al uso racional del dinero proveniente del petróleo. El desplazamiento se vio facilitado dada la preocupación del Estado por no disgustar a las compañías petroleras. Mientras que los regímenes de Medina y de AD habían contado con un amplio apoyo que les permitía tratar de maximizar el valor de la riqueza nacional mediante políticas petroleras nacionalistas, Pérez Jiménez se contentó con los términos de esas políticas que heredó, y buscó legitimidad mediante el énfasis en la transformación del dinero proveniente del petróleo en obras públicas. En este nuevo paisaje político, la democracia no significaba derechos políticos, sino realizaciones materiales. Como observara un analista, “la democracia en el sentido político, que supone libertad de expresión y de pensar y la formación de partidos políticos que contienden por el poder para gobernar, se excluye específicamente, porque se considera perjudicial para los intereses de la nación” (Kolb 1974: 153).

Aunque algunos elementos de la ideología previa de la elite estaban presentes de modo evidente en el Nuevo Ideal Nacional y se incorporaron a su discurso desarrollista militar en la voz de Vallenilla Lanz y otros, Pérez Jiménez reclamaba la responsabilidad personal por su formulación. Durante su gobierno trató de controlar tanto la doctrina del régimen como sus acciones, y desde entonces ha refutado con vehemencia la afirmación de que fue Vallenilla quien lo persuadió para que adoptara ese programa. Pérez Jiménez enfatizó en una entrevista que “las ideas filosóficas que orientaron al régimen son de la exclusiva paternidad de Marcos Pérez Jiménez” (Blanco Muñoz 1983:347).

Tomando distancia de la elite tradicional, insistió en que quería que se le identificara sólo con los logros materiales de su gobierno y no con ideologías abstractas. Con respecto a la doctrina del cesarismo de Vallenilla, dijo que “yo no entiendo ni entendía” (1983: 257). Para Pérez Jiménez, su programa de realizaciones materiales era el cimiento filosófico de su régimen. Una vez silenciada la oposición, trató de restringir la totalidad del lenguaje político; el lenguaje del orden era el de los hechos tangibles, no el de las palabras efímeras.

Al final de una entrevista que ocupa todo un libro, 25 años después de su derrocamiento Pérez Jiménez pidió al entrevistador que incluyera una foto de su casa en España (v. foto, p. 136), cuyo diseño fue, en buena medida, realizado por él mismo. Explicó que el motivo del pedido era que “aquí he volcado toda mi desilusión. Mi casa es la imagen del país que quise construir” (Blanco Muñoz 1983:410). Su imagen ideal de la nación como la casa que construyó -un edificio monumental que junta retazos de varios estilos europeos- resulta emblemática de una concepción patriarcal de la política y de una visión fetichista del progreso. Mediante la redefinición de la política como la actividad encaminada a convertir la nación en un *constructo* físico, y mediante la consideración de los iconos tangibles de la modernidad como potentes fuerzas modernizadoras, Pérez Jiménez intentó domesticar a las masas bárbaras que habían ocupado el espacio público, disciplinar sus movimientos, palabras y opiniones dentro de los muros de la nación por construir el castillo del agigantado dictador.

Auge petrolero y políticas dictatoriales

Sin un programa claro de desarrollo, pero con abundantes recursos monetarios, el gobierno de Pérez Jiménez se dio a la tarea de comprar el progreso económico. Su lista de compras tenía la coherencia de lo que pasaba por sentido común en ciertos círculos de la elite venezolana de la época, y reflejaba las creencias del régimen acerca del carácter del desarrollo y las fuentes de la modernidad. Un economista venezolano apunta con agudeza que “el caso venezolano en la década 1950-1959 es el de un proceso sin plan ni programa donde la política industrial era solo un reflejo de la política del gasto público” (Araujo 1969:15). Las inversiones en infraestructura, en la industria o en el sector de los servicios formaban parte de un plan sólo en el sentido de que cabían en la visión fetichista del régimen acerca de la modernidad, como una colección de grandes logros materiales. Los proyectos tenían en común su cualidad de despliegue espectacular. Muchos de ellos también exhibían una total falta de atención por su utilidad o por el impacto que podían producir en el entorno natural y social.

Típico de la preocupación por las apariencias unida a la orientación hacia el exterior del régimen fue el objetivo gubernamental de transformar la ciudad de Caracas en un centro de turismo internacional y en sede de convenciones. La capital recibió una proporción sustancial de los ingresos gubernamentales en forma de proyectos, en buena medida destinados a atraer e impresionar a los hombres de negocios extranjeros y a la comunidad diplomática, al igual que a los viajeros pudientes. Para este régimen fuertemente orientado hacia las actividades comerciales, apuntalado por el apoyo económico y político procedente del exterior, la transformación de Caracas en un resplandeciente centro turístico y comercial simbolizaba el papel mediador del Estado entre la atrasada sociedad local y el moderno mundo internacional. El proyecto más cercano al corazón de Pérez Jiménez, el Hotel Humboldt (así bautizado en honor al naturalista alemán), un rascacielos de paredes vidriadas, estaba situado en lo alto del cerro el Ávila, al norte del valle de Caracas. Su emplazamiento encima de la capital era emblemático del papel bidireccional del Estado en lo que respecta a la circulación de las rentas provenientes del petróleo. El Humboldt miraba al mar por el norte y a Caracas por el sur, contaba con una pista de patinaje sobre hielo y se llegaba por un funicular que elevaba al visitante por sobre la ciudad hasta convertirla en una maqueta panorámica sobre el paisaje del valle. Construido sin un estudio adecuado de su viabilidad económica, el Humboldt nunca resultó rentable y permanece cerrado desde la época de Pérez Jiménez.

Pero para el régimen el lujo era una dimensión esencial del ideal a alcanzar. Era un signo visible de ascenso social y un medio para lograr el reconocimiento público tan fervientemente perseguido por la elite militar y sus socios *nouveau riche*. Mediante el despliegue conspicuo del lujo el gobierno militar no solo quería impresionar a los visitantes de las metrópolis, quienes representaban un superior mundo externo, sino también a la elite nacional tradicional, de la cual se sentía excluido, y al pueblo, al que intentaba controlar.

El Gobierno trató de apuntalar el sentido de identidad militar mediante la construcción de un club social para oficiales que debía superar los lujosos locales que la elite caraqueña tenía para su disfrute en clubes exclusivos. La revista *Time* encontró en ese club un símbolo de la nación rica en petróleo a la cual afluían los hombres de negocios estadounidenses:

Nada en Venezuela -o fuera de ella, en realidad- puede competir con el lujoso Círculo de las Fuerzas Armadas, el club social para oficiales del ejército y altos funcionarios de gobierno. Cuenta con un hotel (con televisión en todas las habitaciones), restaurantes, un bar, un salón de estar, un club nocturno, dos piscinas, un establo, un gimnasio, un salón de

esgrima, boleras, una biblioteca y un teatro. Tiene algunos toques de mucha suntuosidad: pisos de mármol, ventanas de cristales azules polarizados, gobelinos, búcaros de porcelana de Sévres, relojes de Tiffany, un invernadero de paredes de cristal que contiene un trozo vivo y floreciente de la selva venezolana. Las esposas de algunos coroneles visten para los bailes más suntuosos que se ofrecen en el club trajes de Balmain de 1.500 dólares (28/2/55).

Tras una apariencia espectacular yacían las tensiones irresueltas de una elite militar socialmente marginal pero ambiciosa, poco versada en las costumbres de la clase alta, pero que también estaba desconectada de las clases populares, a las que despreciaba.

En este marco programático vago, las alianzas y los límites políticos contribuían a definir la política económica del Gobierno. Con el ejército como base de su poder, y los hombres de negocios (tanto nacionales como extranjeros) como sus aliados fundamentales, el Gobierno intentaba contener al pueblo mediante la neutralización de los partidos dirigidos por la clase media que en el pasado reciente habían manipulado a las masas, se habían apropiado del Estado y habían desestabilizado el orden social. El acaudalado gobierno militar afirmaba encarnar el interés nacional y gobernar no en nombre del pueblo sino en su lugar.

Para los gobernantes tener el poder no significaba ser capaces de armonizar los intereses particulares, sino colocarse por encima de ellos; su capacidad para no ceder ante las demandas confirmaba su dominio. “La situación puede exponerse en términos simples: las FFAA no tenían ninguna intención de responder a las demandas planteadas por intereses autónomos, fuesen estos los que fuesen. Los militares parecían sentirse más confiados en que detentaban un poder burocrático que en cualquier periodo previo de la historia del país” (Taylor 1968: 37). Pérez Jiménez no trataba a sus aliados locales como socios en el diseño de la política, sino como personas que le prestaban un apoyo servil. Sus políticas no requerían discusión, negociación o acuerdos. Trató de gobernar en soledad.

Durante este periodo de Guerra Fría, cuando los gobiernos conservadores de América Latina recibieron un apoyo activo de Estados Unidos en su condición de aliados en la lucha contra el comunismo, estratégicamente Pérez Jiménez presentó la política económica venezolana en términos de defensa de la integridad física de la nación. “La oficialidad militar que apoyó la toma del poder por parte de Pérez Jiménez defendió con firmeza la idea de que el desarrollo y la defensa de Venezuela tenían que tener como centro su ubicación y sus recursos naturales, ambos estratégicos a efectos internacionales” (Skurski 1985: 45). En algunos sectores de las FFAA se consideraba que el Estado debía combinar la defensa de los intereses estratégicos de Venezuela con el fomento de un modelo

de desarrollo económico cuya base fueran los recursos naturales (Rincón 1982:73-78). Los militares no solo incluían como actividades estratégicas que debían estar bajo el control del Estado la producción de armamentos y suministros militares, sino también la de energía eléctrica y la de industrias básicas como las del acero y los productos petroquímicos.

Este marco político general contribuyó a orientar la política económica, centrada en el Estado, de acuerdo con las siguientes líneas: mayor apertura al capital extranjero; represión laboral; crecimiento económico mediante la inversión estatal en infraestructura, servicios e industria básica; y promoción y, al mismo tiempo, contención de la burguesía local. Si bien este programa sirvió para consolidar al régimen en un inicio, sus consecuencias terminaron por erosionarlo y prepararon el camino para su caída.

A continuación contextualizaré el golpe de Estado de 1958 contra Pérez Jiménez mediante un breve análisis del programa económico del régimen, en el cual resumo acontecimientos fundamentales en cuatro áreas. En el contexto de ese marco general, ofreceré una mirada más particular de la dinámica interna de cambio mediante un recuento detallado de la relación conflictiva entre el sector privado y el Estado respecto del fomento de una industria siderúrgica nacional, que brinda una imagen vivida del carácter distintivo del régimen: lo que Ocarina Castillo denomina “los agentes rectores”. Sin embargo, este caso también muestra que tales agentes -algunos de los cuales fueron personalidades clave en el régimen que precedió a la dictadura de Pérez Jiménez y llegarían a desempeñar papeles relevantes en los gobiernos democráticos que la sucedieron- no entraron al escenario de la historia con identidades fijas, sino que jugaron nuevos roles en medio de circunstancias cambiantes.

La apertura al capital extranjero

La voluntad del régimen de proporcionarle condiciones muy favorables al capital extranjero (bajos impuestos, libre convertibilidad de la moneda y remesas de ganancias), evidente en todos los sectores económicos, fue más palmaria en la industria petrolera. Las políticas hacia el sector, si bien aceptaron el marco básico que habían heredado, representaron un retroceso con respecto a las paulatinamente más nacionalistas de gobiernos previos. El régimen cosechó los beneficios de políticas anteriores, no promovió la obtención de nuevas ventajas y en algunas áreas simplemente desechó las existentes.

Este fue un periodo de rápida expansión económica. Las condiciones internacionales alimentaban una creciente demanda del petróleo venezolano: la reconstrucción de Europa, el armamentismo

estadounidense, la expansión de las empresas multinacionales de EEUU hacia países extranjeros, la Guerra de Corea, el intento de nacionalización del petróleo iraní y, en especial, la crisis de Suez. Durante esta etapa de auge (1947-1957), la producción venezolana de petróleo aumentó a una tasa promedio anual estable de 9,4%, los precios a 7,4% y las exportaciones a 17,4% (Hausman 1981: 208). Entre 1949 y 1957, la tasa anual de crecimiento de los ingresos corrientes provenientes del petróleo fue de 11,6%, la de ingresos totales por concepto de petróleo fue de 15,4% y la de los ingresos del Estado de 13,9% (1981: 317).

En este contexto, el gobierno militar no sintió la necesidad de presionar a uno de sus mayores aliados, las compañías petroleras. Por el contrario, fue especialmente receptivo a una campaña orquestada por esta industria y el Departamento de Estado de EEUU, cuyo contenido era que el petróleo barato del Medio Oriente constituía una amenaza para las exportaciones locales, y cuyo objetivo era desalentar que se mantuvieran las políticas petroleras nacionalistas de Venezuela (Rabe 1982:122-124). Como respuesta a estas presiones el Gobierno abandonó los intentos por desarrollar mecanismos para el control nacional sobre los precios del petróleo y la capacidad local para administrar los asuntos de la industria petrolera. También desistió de los planes para desarrollar una compañía petrolera nacional, no alentó a las compañías petroleras a reinvertir las ganancias en la economía no petrolera y les permitió declarar ingresos por concepto de ventas inferiores a su nivel real. Se ha calculado que entre 1949 y 1954 “el ajuste impositivo del régimen de Pérez Jiménez le costó a Venezuela la astronómica suma de 4.508 millones de bolívares por concepto de pérdidas en los ingresos” (Baloyra 1974:48). La Ley de Hidrocarburos de 1955, que fue la única aprobada durante este periodo, no legislaba sobre cuestiones clave, sino solo sobre detalles técnicos menores. “La política petrolera de Pérez Jiménez fue pasiva. Las anteriores tácticas agresivas encaminadas a incrementar la parte de la nación en las ganancias provenientes del petróleo se vieron sustituidas por una política de cooperación amistosa” (Hassan 1975:18). En resumen, el tratamiento que se aplicó a la industria petrolera fue el de fuente de ingresos inmediatos.

Preocupado sólo por aumentar rápido los ingresos sin enfrentar a las compañías petroleras, el régimen no logró desarrollar una política a largo plazo. Como era incapaz de interpretar la importancia del desplazamiento de las inversiones en el área hacia las fuentes baratas del Medio Oriente, el régimen aceptó la interpretación de la industria sobre dichos cambios. Pérez Jiménez revirtió la política de aumentar los ingresos de la nación mediante el incremento de los impuestos, y en lugar de ello expandió la producción. “Entre 1950 y 1957, la producción de petróleo creció de 547

millones de barriles al año a más de 1.000 millones, dado que las predicciones de un exceso de oferta en el mercado mundial demostraron ser prematuras” (Rabe 1982:129). Al adoptar un enfoque comercial de corto plazo, el Gobierno se hizo aun más vulnerable al control que ejercía la industria sobre los precios y la producción.

Por ello, cuando el Gobierno necesitó ingresos adicionales en 1956 como resultado de malos manejos administrativos y gastos excesivos, no los obtuvo haciendo uso de su poder como dueño de la tierra y demandando una renta mayor, sino por medios comerciales: mediante la venta de concesiones a compañías petroleras. Esta retractación de la política de “no más concesiones” que había enunciado AD puso en manos de las compañías petroleras 821.091 hectáreas de tierra y significó entradas adicionales para el Gobierno en 1956-1957 de casi 2.115 millones de bolívares (Vallenilla 1973: 219).

Este cambio de política se correspondía con un cambio en la base social de la dictadura. Los gobiernos posteriores a Gómez, que buscaron de modo creciente el apoyo popular como medio para asegurar su legitimidad, habían tratado de maximizar los ingresos estatales mediante un aumento de la participación nacional en las ganancias del petróleo, en otras palabras, exigiendo una renta mayor. Los militares en 1948, que dependían del apoyo del capital privado y extranjero para apuntalar su poder, siguieron el curso de incrementar los ingresos del Estado mediante el aumento del nivel total de producción petrolera. Pérez Jiménez, que no contaba con apoyo popular, trató de maximizar el respaldo de sus aliados extranjeros, y se sintió satisfecho con el nivel de ingresos que produjo su posición de “bajo riesgo”:

Los militares, en especial Pérez Jiménez, parecen haber seguido una línea de conformidad con los niveles de recursos, fueran cuales fueran, generados por una participación modesta, “de bajo riesgo”, del Gobierno en las ganancias de la industria. Impresionados por el argumento de que la industria tenía que seguir siendo “competitiva” y de que las compañías no podían soportar un pesado fardo impositivo, la mayoría de las veces los militares convirtieron en política gubernamental los razonamientos y los argumentos de la industria... Por el contrario, los adecos asumían que las compañías siempre obtenían ganancias a partir de sus negocios y que, a cambio de que no las nacionalizaran, primero se opondrían, pero siempre terminarían por aceptar tasas impositivas cada vez mayores y más regulaciones gubernamentales (Baloyra 1974:51).

El régimen militar, en tanto guardián del territorio, tomó en serio la venta de concesiones. Las licitaciones resultaban competitivas (en parte debido a que las nuevas compañías petroleras que estaban surgiendo en EEUU se interesaban en esa época en asegurarse la posesión de yacimientos en

el extranjero), y el Gobierno logró términos 10 veces más favorables que los de 1943 (388 dólares por hectárea ahora y 38 dólares entonces).

Las compañías se sentían seguras en Venezuela y reciprocaban. Durante el periodo ampliaron considerablemente sus actividades. El número de pozos productivos aumentó todos los años, con lo que se elevó de 6.031 en 1948 a 10.124 en 1957 (Banco Central de Venezuela 1977:69). Sin embargo, la inversión total de las compañías entre 1948 y 1957 creció a un ritmo moderado de sólo 11,8% en términos reales, lo que equivale a 1,2% del promedio de la renta compuesta al año, pero representaba más de 20% de las inversiones en un periodo durante el cual la inversión no petrolera creció 70,3% en términos reales (Salazar-Carrillo 1976: 108). Y en 1956-1957 se produjo un aumento considerable de las inversiones, no solo en la producción de petróleo, sino también en transporte, refinación y mercadeo. Entre 1950 y 1957 las ganancias de la industria petrolera en Venezuela alcanzaron la cifra de 3.790 millones de dólares; casi la mitad de los dividendos de la Standard Oil de New Jersey (EXXon) provenía de su subsidiaria venezolana, Creole Petroleum (Rabe 1982:129).

Pérez Jiménez también abrió las puertas de la economía no petrolera a los inversionistas extranjeros en momentos cuando las compañías manufactureras de EEUU aumentaban sus inversiones directas en el exterior. En el verano de 1953, con la intención de hacer de Venezuela un sitio propicio, se dieron instrucciones a los consulados de promover el país en los círculos de negocios. Poco después, la revista *Time* respondía con esta vívida descripción:

Un lugar donde los hombres de negocios estadounidenses que quieren invertir en el extranjero pueden aún prosperar en un clima de animada libre empresa es la abundante en petróleo república de Venezuela.... Desde 1948, cuando el Gobierno y las compañías de propiedad foránea... lograron llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio que supone una división a partes iguales de todas las ganancias, la producción se ha disparado hasta alcanzar más de 1.000.000 de barriles diarios, lo cual ha inundado a ese poco poblado país con unos ingresos provenientes del petróleo de 700 millones de dólares. El complacido gobierno les ha abierto las puertas de par en par a las empresas extranjeras, y la mayor colonia de hombres de negocios estadounidenses en el extranjero se aplica jubilosamente a hacer dinero en uno de los mercados más rentables del mundo. La ley venezolana le permite al extranjero operar con libertad, y las firmas de EEUU, propietarias de dos tercios de las inversiones foráneas en Venezuela, que alcanzan la cifra de 2.300 millones de dólares, extraen del país sus ganancias en dólares sin ningún obstáculo burocrático. Los yanquis que residen en Venezuela no pagan impuestos sobre las ganancias en EEUU, y el impuesto venezolano es decididamente leve (cit. por Kolb 1974:130).

Entre 1951 y 1957 la inversión extranjera más que se triplicó, y EEUU fue responsable de casi 70% del total (Banco Central de Venezuela 1958: 81). En este periodo la inversión de capital foráneo en la

industria aumentó de 165 millones a 411 millones de bolívares, esto es, de 10,7% a 14,8% de toda la inversión en este sector (Aranda 1977: 163). Dado el demorado desarrollo industrial de Venezuela y su economía floreciente, este flujo de capital extranjero en la manufactura no desplazó de la industria al capital local existente. Ni tampoco desalentó la actividad comercial. El comercio entre EEUU y Venezuela también se amplió durante esta década, hasta alcanzar el monto de más de 1.000 millones de dólares en 1957; Venezuela, con menos de siete millones de habitantes, se convirtió en el sexto mercado comercial del mundo para EEUU (Rabe 1982:128). De esta forma, el capital transnacional le abrió el camino al movimiento del capital local hacia la industria, sea por la fuerza de su ejemplo, sea porque se convirtió en su socio en empresas mixtas. De esta convergencia de intereses en el desarrollo industrial surgió una alianza naciente entre los sectores de punta del capital local y extranjero en respaldo a la industrialización fomentada por el Estado.

Represión laboral

Durante este periodo la actividad sindical se limitó y se prohibieron las huelgas. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se disolvió el 25 de febrero de 1949, y tras una huelga de los trabajadores del petróleo en 1950 (en protesta contra las restricciones políticas) el Gobierno atacó el sindicato de estos trabajadores. Como el movimiento obrero había sido organizado fundamentalmente por AD y el PC, el movimiento sindicalista prácticamente se disolvió cuando ambos partidos fueron reprimidos. En su lugar, el Gobierno creó una organización cautiva llamada Movimiento Sindical Independiente, que orquestó contratos favorables a las compañías.

Dada la importancia estratégica de la industria petrolera para EEUU, el Departamento de Estado y las compañías estadounidenses sintieron que el control de los trabajadores venezolanos no podía permanecer en manos locales. Se permitió al FBI y la CIA que llevaran a cabo actividades de vigilancia en Venezuela para contribuir a erradicar la influencia comunista en el movimiento obrero:

Las compañías petroleras cooperaron facilitándole al FBI las huellas digitales de sus empleados, para que determinara si eran comunistas o “compañeros de ruta”. Además, aumentaron la vigilancia sobre las propiedades y aceptaron la oferta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de velar en busca de subversivos y saboteadores entre los trabajadores petroleros venezolanos (Rabe 1982:121).

Hacia las postrimerías del régimen, “si bien seguían existiendo algunos sindicatos perezjimenistas, el movimiento sindical había sido destruido en la práctica” (Fagan 1977:177). De ahí que a pesar del auge de la economía, las demandas de los trabajadores -que nunca cesaron- estaban bloqueadas, y el aumento gradual de los salarios reales que comenzara en 1945 llegó a su fin.

Un segundo elemento de la política laboral que funcionó como contención de los trabajadores fue el fomento de la inmigración europea. Al alentar una inmigración selectiva, el Gobierno importó una mano de obra relativamente calificada -casi 800.000 trabajadores de origen rural y urbano- procedentes sobre todo de España, Italia y Portugal. Esas personas, que dejaban atrás los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil española, llegaban a Venezuela en busca de seguridad en una economía floreciente. De ahí que en lugar de ejercer una influencia que radicalizara a la clase trabajadora, como ocurriera en otros países latinoamericanos a principios del siglo XX, los trabajadores europeos contribuyeron a desmovilizarla al desplazar a trabajadores venezolanos menos calificados, prestar apoyo político al régimen, y oponerse a las demandas de otros trabajadores en sus centros de trabajo⁸.

No obstante, dada la industrialización de capital intensivo que tenía lugar en Venezuela, la mayor parte de los empleos urbanos se creó en los sectores comercial y de servicios; el empleo en la manufactura sólo representó 18,1% del total (y de ellos, la mitad en empresas artesanales), a diferencia del promedio latinoamericano de 27% en 1960 (Hassan 1975:87). Entre 1950 y 1957 el empleo agrícola descendió de 44,1% a 38,3% del total de empleos (Aranda 1977:171). En un momento cuando la canalización de los gastos hacia las ciudades a partir de los ingresos generados por el petróleo impulsaba a los campesinos y los trabajadores agrícolas a emigrar, factores como un diferencial de salarios rurales/urbanos de más de 400% en algunas zonas (Hassan 1975: 82), el deterioro de las condiciones de la producción agrícola tradicional, y la expansión de la agricultura comercial contribuyeron a erosionar en el campo lazos sociales ya debilitados.

De ahí que mientras la transformación de la agricultura tradicional en la vecina Colombia causó una intensa violencia rural en esta época, en Venezuela se produjo sin conflictos políticos abiertos. En uno de los procesos de urbanización más rápidos de los tiempos modernos, el porcentaje de los trabajadores empleados en la agricultura descendió de 71,1% en 1936 a 36,5% en 1961 (Hassan 1975: 81). La hacienda tradicional decayó drásticamente como resultado del rápido crecimiento de la agri-

⁸ Antes del plebiscito de 1957, Pérez Jiménez concedió el derecho al voto a extranjeros con dos años de residencia. La medida, que muchos consideraron oportunista, nutrió la creciente oposición al régimen.

cultura capitalista en el campo (Ríos de Hernández 1988: 109). Durante este periodo la mayoría de los trabajadores rurales eran empleados de grandes fincas comerciales o se dedicaban a cultivos de subsistencia. Durante los años 50, el control y la represión de los trabajadores se convirtió en un problema fundamentalmente urbano. Venezuela había dejado de ser un país rural.

Crecimiento económico a partir de la inversión estatal en infraestructura, servicios e industria básica

Como se mencionara, la historiografía oficial tiende a tratar el periodo 1948-1958 como un paréntesis de sombras en el progreso venezolano hacia la modernidad y, por tanto, a desconectarlo de los precedentes y posteriores regímenes democráticos. Sin embargo, la cuidadosa comparación realizada por Baloyra entre los presupuestos de los regímenes militares (1938-1945 y 1949-1957) y los de los gobiernos democráticos (1946-1948 y 1958-1969), donde los toma como indicadores de prioridades de política, ha mostrado que fueron sorprendentemente similares en términos de distribución porcentual entre las distintas categorías (Baloyra 1974). AD empleó una parte algo mayor en salud y educación; y Pérez Jiménez gastó más en comunicaciones (en buena medida como resultado de la terminación parcial de la construcción de carreteras y los planes ferrocarrileros comenzados por AD), pero, de cualquier modo, las diferencias no son considerables. En este nivel macro la diferencia básica es que AD trató activamente de aumentar los ingresos del Estado y gastó más en todos los ministerios (con excepción del de Justicia), mientras que Pérez Jiménez gastó el ingreso de que disponía, pero no trató de maximizar las entradas del Estado (Baloyra 1974:59- 61).

La diferencia entre las políticas económicas democráticas y dictatoriales en Venezuela ha sido reforzada por sus posiciones opuestas respecto a la planificación. Mientras que los regímenes democráticos trazaron elaborados planes de desarrollo con mucha publicidad, Pérez Jiménez prefirió presentar el desarrollo como un proceso simple que sería la consecuencia natural de un uso racional de los recursos del Estado. Los estudiosos que no le han prestado tanta atención a los programas explícitos, sino a las inversiones de Pérez Jiménez en el acero, la petroquímica, los teléfonos, los centrales azucareros y la electricidad, tienden a interpretar estas inversiones como signos del desarrollo conciente de un Estado productivo y, por tanto, a establecer una línea de continuidad con los regímenes democráticos (Aranda 1977:141). Estas inversiones reflejaban la militarización del Estado durante el periodo de la Guerra Fría y el respaldo de EEUU a los regímenes conservadores latinoamericanos como bastiones contra la amenaza comunista. Bajo la influencia de esta ideología

militarista de la Guerra Fría, la política económica del régimen adquirió cierto nivel de coherencia en dos líneas: la producción de bienes considerados estratégicos para la seguridad militar de la nación, por una parte, y el control estatal de industrias básicas y de otras relacionadas con ellas, con la consiguiente exclusión del sector privado local, por la otra.

El interés del Estado en la producción sirvió para concentrar el control estatal en manos de Pérez Jiménez, evitar la creación de centros alternativos de poder en el seno del sector privado y enriquecer a quienes estaban asociados a su fomento. Dada la ausencia de una planificación cuidadosa, resulta difícil no sacar en conclusión que estas consideraciones desempeñaron un papel clave en la manera en que estos proyectos se formularon y pusieron en práctica (Bigler 1980; Luzardo 1963: 177; Skurski 1985). La planta petroquímica fue el caso más notorio. Ubicada en una zona remota e inadecuada, en terrenos comprados a un militar amigo de Pérez Jiménez, este proyecto, que tenía graves deficiencias (muy poco operativo y deficitario pese a repetidos esfuerzos por reanimarlo aún tres décadas después de su construcción) estaba dirigido por militares cercanos al régimen, carentes de toda calificación técnica. Pero Pérez Jiménez y sus amigos se enriquecieron enormemente mediante su participación en la construcción de esta fachada industrial.

A la luz de la tajante separación que la historiografía oficial ha establecido entre regímenes democráticos y dictatoriales, resulta saludable apuntar a las continuidades en las políticas económicas y ser escéptico frente a las unilaterales evaluaciones negativas del régimen de Pérez Jiménez. No obstante, concentrarse en aparentes continuidades también puede velar algunos de los rasgos distintivos de la implicación de este gobierno en la producción. Muchos de estos proyectos se concibieron con el mismo espíritu que otras inversiones públicas no productivas: como obras espectaculares que se pensaba que tenían el poder de apuntalar al régimen y de inducir, con relativa facilidad, el desarrollo de la nación. No se puso demasiado cuidado en su formulación, muchos de ellos se originaron como respuesta a consideraciones circunstanciales o políticas, y como empresas productoras de ganancias y catalizadoras del desarrollo estaban mal concebidos. De ahí que el acercamiento distintivo de Pérez Jiménez a la modernidad no puede discernirse en el nivel de los agregados estadísticos o del patrón que siguieron los programas de inversiones, sino que requiere un examen cualitativo de sus proyectos específicos. El análisis de la producción de acero, al final de este capítulo, pretende ilustrar esta afirmación.

Promoción y, al mismo tiempo, contención de la burguesía local

Entre 1945 y 1960, Venezuela experimentó la mayor tasa de crecimiento del PIB real de la América del Sur y una de las mayores del mundo (Hassan 1975: 10). Entre 1950 y 1957, las entradas ordinarias provenientes del petróleo crecieron un promedio de 11,6%, mientras que los ingresos gubernamentales lo hacían a un promedio de 13,9% anual; en ese mismo periodo, el valor total de las exportaciones petroleras aumentó en 250% y las reservas del tesoro en 400% (Salazar-Carrillo 1976: 98). La oferta monetaria se duplicó, y la demanda aumentó con rapidez.

En este periodo los hombres de negocios del país aumentaron sus inversiones en áreas tradicionales - banca, construcción, comercio- y también diversificaron sus actividades al invertir en nuevos sectores: agricultura comercial e industria. Pero esta expansión, que era producto del auge petrolero, se vio limitada por las políticas de Pérez Jiménez, que intentaban de modo simultáneo fomentar el crecimiento económico e impedir el desarrollo de un sector privado independiente; esto es, alentar el espíritu de empresa y al mismo tiempo contenerlo dentro de límites asfixiantes y a menudo arbitrarios, como ilustra el análisis sobre la producción de acero con el que concluye este capítulo.

Durante esta década el sector bancario creció con rapidez, en respuesta a la explosiva expansión de las entradas fiscales, el gasto gubernamental y las actividades comerciales⁹. Sin embargo, los banqueros tenían obstáculos para financiar el crecimiento industrial porque estaba legalmente prohibido realizar préstamos por un lapso mayor de dos años. No existían tampoco bancos de inversiones ni bancos de ahorro y préstamo a través de los cuales se pudieran canalizar fondos a empresas productivas. En consecuencia, los fondos locales se dirigían al comercio y a proyectos de corto plazo, mientras que el financiamiento a largo plazo provenía del extranjero.

A diferencia del crecimiento explosivo de la oferta monetaria y del sistema bancario, la producción local experimentó poco desarrollo y los precios se mantuvieron estables. Dada la disponibilidad de divisas, el incremento de la demanda derivado de la inyección de dinero se satisfizo mediante un brusco aumento de las importaciones, que crecieron de 557 millones de dólares en 1947 a 1.776 millones en 1957 (Banco Central de Venezuela 1978: 238). “El gran incremento de las importaciones venezolanas hasta 1957 redujo la presión inflacionaria producida por el aumento del volumen de dinero y de la demanda efectiva en un momento cuando la capacidad productiva de la economía era limitada” (Hassan 1975: 66).

⁹ En 1947 los activos de la banca privada alcanzaban 779 millones de bolívares, préstamos e inversiones 445 millones, y depósitos 72 millones. En 1957 estas cifras eran, en ese mismo orden, de 5.386, 3.658 y 1.501 millones de bolívares (Hassan 1975:55).

En una época en la cual las dificultades de la balanza de pagos alentaron la industrialización y en que la inflación se convertía en un problema cada vez más agudo en la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela experimentó el menor cambio de toda la región en cuanto a costo de vida, cuyo incremento anual fue de solo 1,7% entre 1950 y 1959 (Hassan 1975:66). Ambos factores moldearon las políticas públicas y las expectativas y comportamientos del sector de los negocios y de los consumidores. Un alto nivel de importaciones se convirtió en un elemento esencial de la economía y la política estatal venezolanas. En esta etapa temprana de la industrialización, igual que la demanda de los consumidores se satisfacía mediante las importaciones, los requerimientos de la producción se solventaban importando materiales y equipos. Pero la facilidad con la cual se satisfacía la demanda de los consumidores mediante las importaciones contribuyó a fortalecer el interés del sector de los negocios en mantener bajo el nivel de protección, lo cual limitó la posibilidad de una industrialización continuada, especialmente por parte del capital local. En nombre de la defensa del acceso del público a bienes de alta calidad a precios razonables, el Gobierno se alió con los intereses comerciales y manufactureros estadounidenses que producían para la exportación. Así, en 1952 firmó una versión revisada del Tratado Comercial entre EEUU y Venezuela de 1939, que mantenía unas condiciones muy favorables para la importación de bienes manufacturados de ese país. La incapacidad de los nacientes intereses industriales para obtener tarifas proteccionistas para los productos que querían producir creó una división entre los intereses comerciales e industriales de la elite, lo cual terminó por tener consecuencias políticas.

Pero si los crecientes ingresos provenientes del petróleo contribuían a formar un mercado de consumidores que estimuló la expansión comercial, también crearon las condiciones que fomentaron una cierta producción industrial. El auge de la construcción estimuló un significativo crecimiento de las industrias relacionadas, que gozaban de ventajas comparativas como resultado de los costos por concepto de transporte. El cemento, la pintura, la madera y los minerales no metálicos representaban 12% de la producción industrial en 1955. Al mismo tiempo, la expansión de la demanda en el área de los bienes de consumo finales, alentada por la producción nacional de ciertas líneas de textiles, zapatos y ropa que no competían con las importaciones extranjeras, hicieron que aumentara la producción industrial local hasta representar 12% en 1960.

A contrapelo de la experiencia de anteriores industrializaciones “tardías” en la América Latina, durante este periodo de expansión de las empresas transnacionales hacia la inversión directa en el extranjero, el capital foráneo no desplazó a los menos eficientes productores locales, sino que alentó

el desarrollo de la protección estatal y la inversión privada en la industria. Los capitalistas locales pioneros empezaron a descubrir que podían prosperar al amparo del manto de la protección de la industria y evitar la fuerte competencia que imperaba en el sector comercial.

El Estado, que carecía de una política industrial coherente, concedía protección a las industrias sin orden ni concierto, en respuesta a solicitudes individuales de sus círculos clientelares. Muchas de las industrias eran, en lo esencial, empresas de ensamblaje final a las cuales se les concedía no solo acceso libre a los insumos importados sino también protección contra las importaciones, bien mediante tarifas -cuando no violaban los acuerdos comerciales con EEUU- o mediante cuotas de importación. Como sólo se protegía a unas pocas empresas en cada línea productiva, de hecho se les concedía un monopolio. Esta política contribuyó a dar forma a la estructura oligopólica que ha caracterizado a la producción industrial venezolana. Cuando los capitalistas privados trataban de invertir en proyectos productivos de gran magnitud o estratégicos (como la industria siderúrgica), el Gobierno se apropiaba de los mismos. En la práctica, la dictadura comenzó a establecer una política de industrialización encaminada a la sustitución de importaciones.

En el periodo que medió entre 1950 y 1957 la inversión fija bruta aumentó a una tasa promedio anual de 8,4% y promedió 27% del PIB (Hassan 1975:44). Durante ese mismo periodo, la inversión gubernamental en el sector industrial aumentó 15 veces entre 1950 y 1957 (de 35 millones a 527 millones de bolívares). En el mismo lapso la inversión fija bruta se duplicó para pasar de 3.313 millones de bolívares en 1950 a 6.041 millones en 1957. Mientras que la inversión pública en la industria casi se triplicó, al pasar de 1.054 millones a 2.748 millones de bolívares, la inversión privada creció en 50%, de 2.259 a 3.293 millones de bolívares (Falcón Urbano 1969: 101).

La tasa promedio anual de crecimiento de la industria fue de 11,4%, una tasa alta, pero aproximadamente igual a la de expansión del resto de la economía. Dado el nivel extremadamente bajo de industrialización al inicio del proceso, las estadísticas que indican un gran crecimiento resultan un tanto engañosas; en 1957 el papel que desempeñaba la industria en la economía era aún relativamente modesto. Esta expansión industrial tuvo lugar en áreas en las cuales Venezuela gozaba de ventajas económicas o de ubicación -manufacturas de capital intensivo- o en relación con rubros como la construcción, la cerveza y el cemento. El lento crecimiento del empleo industrial, que solo aumentó de 188.000 puestos de trabajo en 1950 a 242.000 en 1957 (Aranda 1977:160) resulta particularmente revelador de las limitaciones estructurales a las que estaba sujeta. La producción agrícola quedó retrasada, pero aun así llegó a alcanzar una tasa moderadamente alta de 4,5% anual

durante este periodo.

Si bien estas observaciones ofrecen una imagen general de las tendencias socioeconómicas durante el periodo, el estudio del caso del fomento de la industria siderúrgica permite apreciar la dinámica en el interior de dichas tendencias. Los indicadores macroeconómicos muestran una significativa continuidad entre las políticas económicas democráticas y dictatoriales, pero ocultan hasta qué punto durante el gobierno de Pérez Jiménez los hombres de negocios más emprendedores se vieron aislados del Estado e incapaces de ejercer su influencia sobre la política económica nacional.

La producción de acero: el Estado y el Sindicato del Hierro

Haré un breve resumen de las tres etapas del establecimiento de la industria siderúrgica en Venezuela: una fase inicial, que abarca hasta la década de 1930, durante la cual empresarios privados y funcionarios estatales comenzaron a imaginar el desarrollo de una industria siderúrgica nacional; una segunda fase (el trienio de 1945-1948) en la cual AD intentó activamente fomentarla por intermedio de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF); y una tercera etapa, durante la dictadura de 1948-1958, cuando tanto el Estado como el Sindicato del Hierro del sector privado emprendieron proyectos separados, hasta que el Gobierno se adjudicó el control de la industria siderúrgica¹⁰.

Los orígenes

El primer interés en los depósitos de mineral de hierro fue un subproducto del auge del oro en la región de Guayana en el siglo XIX. Entre 1882 y 1885 la mina El Callao, ubicada en las profundidades de la Amazonia venezolana, se convirtió en la mayor productora mundial de oro (Dodge 1968: 38; cit. por Skurski 1985: 12), lo que hizo que muchos empresarios locales y extranjeros se sintieran atraídos

¹⁰ Esta sección resume la obra de Skurski (1985). Participé con Skurski en las primeras etapas de esta investigación. Este trabajo incluyó entrevistas con muchos de los líderes del Sindicato del Hierro y con funcionarios estatales involucrados en el proyecto de la siderurgia, así como labores de archivo en instituciones del sector privado (Fedecámaras), agencias del Estado (CVF) e instituciones oficiales (Archivo Histórico de Miraflores). El Archivo Histórico de la Nación cuenta con un amplio registro de los documentos fundamentales. P. ej., la Serie B, Caja 87 C26 contiene un resumen histórico de los proyectos del hierro y del acero; la Serie B, Caja 451, información sobre procesos tecnológicos producida para Pérez Jiménez por la Oficina de Estudios Especiales; la Serie B, Caja 13 C3, una compilación de los diversos proyectos siderúrgicos; la Serie D, Caja 40 C8, actas de las reuniones de agencias estatales relativas a "industrias básicas"; la Serie E, Caja 56 C7, un análisis de los vínculos entre la industria siderúrgica y la electrificación del río Caroní; la Serie B, Caja 442 C6, y la Serie C, Caja 3C, documentos relativos a las propuestas de proyectos siderúrgicos solicitadas por Pérez Jiménez. Los documentos sobre la producción de acero y el Sindicato del Hierro en la CVF están dispersos en varias carpetas y cajas; entre ellos se encuentra una copia del documento que registra la fundación del Sindicato del Hierro (tb. disponible en el Registro Mercantil). Después de escribir este resumen tuve la oportunidad de leer el análisis de Martín Frechilla, fruto de una cuidadosa investigación sobre el fomento de la producción acerera en Venezuela (1994). He tratado de incorporar una parte de la excelente información que brinda. Tanto Skurski como Frechilla señalan continuidades en las políticas siderúrgicas de AD y Pérez Jiménez, pero mientras Skurski subraya los factores que dieron al traste con el proyecto siderúrgico de Pérez Jiménez, Frechilla hace hincapié en el esmero técnico que todos los regímenes dedicaron a su formulación.

hacia la región. Dos ciudadanos estadounidenses recibieron concesiones y ello condujo al descubrimiento de los depósitos de mineral de hierro y al inicio de las exportaciones en 1913; pero estas actividades no resultaron rentables y las compañías se disolvieron. Como consecuencia, disminuyó el interés en la región de Guayana.

Entre los venezolanos que se habían dirigido a la región en busca de oro había seis miembros de la encumbrada familia Zuloaga, cuyas empresas comerciales y agrícolas habían sufrido pérdidas significativas durante las guerras civiles del siglo XIX. Los Zuloaga no encontraron oro, pero se interesaron vivamente en la región. En 1939, a pedido de la U.S. Steel Co., el Ministerio de Fomento llevó a cabo un estudio de la Guayana cuyo resultado fue la demarcación como reserva nacional de una extensa área rica en mineral de hierro. Un aspecto notable del informe gubernamental era la recomendación de que se desarrollara una industria siderúrgica en Guayana con el fin de procesar el mineral de hierro de la nación, y que se investigara el potencial hidroeléctrico del río Caroní. Los dos expertos encargados de dirigir el informe eran Guillermo Zuloaga y Manuel Tello, venezolanos de clase alta graduados como geólogos en EEUU. Zuloaga, cuya familia había fundado la empresa Electricidad de Caracas, creó el Departamento de Minas del Ministerio de Fomento y se convirtió en director de Creole Petroleum of Venezuela, empresa de la Standard Oil. Los Zuloaga y los Tello desempeñarían después un papel activo en el desarrollo del Sindicato del Hierro.

El acero y el trienio de AD

Si bien la política de AD de sembrar el petróleo le concedió prioridad al fomento de las industrias de producción de bienes de consumo por intermedio de la CVF, esta fundó en 1947 un Departamento de Acero y Hierro cuya finalidad era planificar su producción para suministrar, en un futuro, este insumo a la industria local. Un año después, U.S. Steel encontró lo que hasta ese momento era el mayor hallazgo de hierro del siglo: una montaña de 400 millones de toneladas del mineral con 65% de pureza de reservas probadas. La montaña, conocida en la zona por el nombre de La Parida, pronto recibió nuevo nombre y nuevo género: pasó a llamarse Cerro Bolívar. Al hacerse evidente su importancia estratégica en términos económicos y políticos, se le adjudicó, originalmente identificada con la madre tierra generadora, el nombre del padre de la nación, alistándola así en la batalla por la independencia económica nacional.

Este descubrimiento refleja el cambio de política de U.S. Steel en lo tocante a sus suministros de

mineral de hierro. Como resultado de la expansión de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, esta gran empresa estadounidense dejó de confiar sólo en sus reservas de mineral de hierro nacionales y se dio a la tarea de buscar fuentes foráneas. A su vez, el descubrimiento impulsó al Estado venezolano a cambiar su política siderúrgica. En vez de esperar el desarrollo interno de industrias de bienes de consumo, decidió fomentar de inmediato la producción interna de acero. Poco deseoso de exportar otro recurso natural sin procesar, se dio a la empresa de adelantar su calendario para la producción interna. No se debía repetir la experiencia del petróleo.

No obstante, el petróleo ejercía su influencia de muy diversas maneras. Por intermedio de la CVF el Gobierno intentó vincular la producción de acero a la riqueza petrolera de la nación y hacer un uso productivo del gas natural, un subproducto de la perforación petrolera. Como resultado de sus averiguaciones, la CVF conoció una innovación en la tecnología de reducción del gas, cuya patente estaba en manos de una compañía estadounidense propiedad de William Brassert. La CVF, que no quería aventurarse sola en este nuevo campo, invitó a Nelson Rockefeller (con quien había creado fuertes lazos y empresas mixtas a través de la International Basic Economy Corporation, IBEC)¹¹, a participar en el establecimiento de una planta piloto conjunta con Brassert. Rockefeller estuvo de acuerdo, porque este plan se ajustaba a su proyecto de la IBEC de convertir a Venezuela en un modelo de la inversión empresarial estadounidense en la diversificación latinoamericana mediante empresas mixtas de capital extranjero, nacional y estatal.

Sin embargo, la alianza estuvo transida de conflictos que revelaban la brecha entre el sueño venezolano de participar “como un socio paritario en una compañía petrolera internacional decidida a revolucionar la industria siderúrgica” y “las íntimas interconexiones existentes en el seno de la elite empresarial estadounidense, que tendrían prioridad sobre todo vínculo con Venezuela” (Skurski 1985: 31). Resultó que Brassert había sido amigo de David Rockefeller en la universidad. Cuando la CVF invitó a Nelson Rockefeller a participar en el proyecto de Brassert, aquel se percató de que era el mismo proyecto que su hermano mayor David había venido apoyando. Los hermanos Rockefeller y Brassert negociaron entre ellos, sin informarle a la CVF, los términos del acuerdo sobre el establecimiento de una planta piloto, así como los temas de patentes, propiedad y royalties.

La CVF, que pensaba que participaba como socio paritario en un proyecto económico pionero, supo casi por accidente que ya no se deseaba su contribución. En respuesta a una pregunta sobre patentes,

¹¹ IBEC era una empresa de fomento fundada por los Rockefeller para diversificar sus inversiones económicas en América Latina con la que pretendían reducir su identificación con la extracción de petróleo. Para un estudio de esta empresa, que subraya el papel de la Standard Oil en su promoción, v. Broehl (1968).

Brassert le escribió a la corporación que establecería la planta piloto sin la participación de la CVF. Esta institución se sintió excluida de una empresa tecnológicamente innovadora, y traicionada por Nelson Rockefeller. La carta de Brassert dio pie a unas complejas negociaciones entre la CVF y Rockefeller, quien explicó que su hermano tenía vínculos previos con Brassert y que entre sus planes estaba informarle posteriormente a la CVF sobre los resultados de sus negociaciones.

Estos acontecimientos, sumados a pruebas realizadas con el mineral de hierro venezolano, las cuales indicaban que el proceso de Brassert era costoso y no estaba probado, así como informes negativos sobre la patente de Brassert emitidos por un grupo de abogados (Martín Frechilla 1994:224), condujeron a la CVF a explorar otras técnicas alternativas de reducción de gas que estaban siendo desarrolladas en Suecia (el proceso Wiberg). Se pidió a Luis Alberto Roncayolo, de la CVF, radicado en Nueva York desde fines de 1947 para supervisar las técnicas de reducción de gas que se desarrollaban en EEUU, incluida la tecnología de Brassert, que se trasladara a Suecia a la cabeza de una comisión de funcionarios y hombres de negocios venezolanos, para examinar esta nueva tecnología.

Paralelamente, en mayo de 1948 la corporación recibió los resultados de un estudio preliminar que había encargado a Bums and Roes Inc., que indicaban el gran potencial hidroeléctrico de los ríos Caroní y Orinoco. Aunque estos resultados eran positivos, la CVF, troquelada según un modelo de desarrollo fuertemente centrado en el petróleo, no trató de integrar sus proyectos siderúrgico e hidroeléctrico. Quizás lo habría hecho, pero en noviembre de 1948 repentinamente los militares le arrebataron el poder a AD y cambiaron el contexto en el cual se establecería la industria siderúrgica en Venezuela. La comisión de la CVF quedó varada en Suecia.

Acero, dictadura y el Sindicato del Hierro

Durante el trienio, AD hizo un esfuerzo particular por invitar a prominentes hombres de negocios nacionales a participar en las agencias económicas del Estado como la CVF. Después del golpe, la junta Militar les aseguró a los líderes privados que los planes de la corporación continuarían sin cambios. Sin embargo, pronto quedó claro que los proyectos estatales eran otros. Una vez que Pérez Jiménez se hizo del control gubernamental tras el asesinato de Delgado Chalbaud en noviembre de 1950, las relaciones entre el sector privado y la CVF cambiaron: el Departamento del Acero de la CVF se transfirió al Ministerio de Minas; el Departamento de Electricidad se redujo; se eliminó la disposición que garantizaba a la CVF entre 2% y 10% del presupuesto del Estado; y se removió a los

representantes del sector de los negocios, provenientes de la central gremial empresarial, Fedecámaras, que formaban parte de la junta directiva de la corporación, decisión que conocieron a través de la prensa. Con tales gestos, el Gobierno enviaba al sector privado el mensaje de que gobernaba solo. El Estado redujo el poder de Fedecámaras y se aisló de la posible influencia de las asociaciones de negocios (Bond 1975; Skurski 1985: 35).

Tras la extinción del proyecto de la CVF, un grupo de prominentes hombres de negocios decidió asumir por sí mismo el fomento de una planta productora de acero. Los principales promotores del proyecto fueron los hermanos Alberto y Gustavo Vollmer y Eugenio Mendoza Goiticoa. Estaban asociados con varias familias descollantes, incluidos los Zuloaga, los Machado y los Boulton. Unidas por lazos de matrimonio, amistad y negocios, estas familias tenían inversiones (a menudo conjuntas) en una gran variedad de industrias, que iban desde las vinculadas a la agricultura comercial, como el alimento animal y el ron, hasta las dirigidas a sectores urbanos, como electricidad, cemento y materiales de construcción. Se habían dado a la tarea de fomentar la producción interna de insumos para sus crecientes inversiones en el sector industrial. Las escaseces producidas durante la Segunda Guerra Mundial los habían convencido de la necesidad de garantizar una fuente nacional de productos del acero para sus empresas, así como para las industrias metalmeccánicas que aspiraban a fundar, que incluían puentes y estructuras industriales, tanques y tuberías de agua y piezas de automóviles.

Su plan inicial consistía en fundar dos compañías: una mina de hierro y una planta siderúrgica. Concientes de que un emprendimiento en la industria básica era una empresa políticamente sensible, formaron el Sindicato del Hierro, una asociación civil sin fines de lucro con el objetivo expreso de llevar a cabo estudios para fomentar dichas compañías, atraer una amplia participación de empresarios locales y lograr la aprobación y el respaldo del Estado.

Los hermanos Vollmer, inversionistas en la agricultura comercial, la construcción y la banca, eran la fuerza principal tras el Sindicato del Hierro, pero concordaron en que Eugenio Mendoza estaba mejor ubicado para recabar la aprobación de la Junta Militar para el proyecto siderúrgico, dados sus vínculos tanto con la elite social de Caracas como con el Gobierno, y su imagen pública de campeón de la industrialización venezolana. En su condición de ministro de Fomento de Medina Angarita durante el periodo de la guerra (1942-1944), Mendoza había declarado que Venezuela “tenía que producir lo que consumía” y había promovido la industria nacional con ayuda del recién creado Departamento de

Industria ministerial¹². En ese periodo las industrias de Mendoza habían prosperado. Ahora sus socios ocupaban puestos importantes en el gobierno militar: Gerardo Sansón, director de su fábrica de cemento, era ministro de Obras Públicas, y su amigo Santiago Vera Izquierdo, ministro de Minas.

Mendoza comenzó por explorar el terreno con Vera Izquierdo, quien le dijo que aparentemente el Gobierno no tenía planes de construir una planta siderúrgica. Alentado por esta información, Mendoza abordó a Laureano Vallenilla Lanz (amigo de la infancia), quien, en su calidad de asesor más cercano a Pérez Jiménez y presidente del Banco Industrial, tendría un peso decisivo en el asunto. Mendoza trató de suavizar su pedido de apoyo estatal para el Sindicato del Hierro ofreciendo la presidencia del mismo al suegro de Vallenilla, Adolfo Bueno, un médico de la elite que había hecho fortuna al vender una concesión petrolera que había recibido de Juan Vicente Gómez como muestra de gratitud por un tratamiento aplicado con éxito.

Pero Vallenilla no respetaba a Mendoza y sus socios, a los cuales consideraba hombres de negocios groseros y oportunistas que trataban de utilizar al Estado para su propio beneficio. Creía que la oferta del Sindicato del Hierro de elegir como presidente a Bueno era una transparente maniobra encaminada a ocultarse tras una figura respetada para conseguir respaldo estatal. No obstante, Vallenilla decidió no vetar el proyecto y se limitó a decirle a Mendoza que proponer a Bueno resultaba inaceptable. Le recordó que cuando en 1946 AD había confiscado los bienes de Bueno como parte de su campaña contra quienes se habían enriquecido durante el gomecismo, Mendoza lo había despedido del puesto de director de su fábrica de cemento, en vez de ofrecerle su apoyo.

Pérez Jiménez tampoco veía con buenos ojos el proyecto del Sindicato del Hierro, pero por razones diferentes. Desconfiaba de la elite económica caraqueña, le preocupaba el poder que les conferiría una planta siderúrgica y era sensible a las demandas de la institución militar de que el Estado ejerciera el control sobre la industria básica. Aun así, decidió permitirle al Sindicato del Hierro que siguiera adelante con su proyecto, con el fin de ver qué haría. Fue entonces que el ministro de Minas les aseguró que el Estado aprobaría sus planes.

Con esta aparente garantía de apoyo estatal, el Sindicato del Hierro se dio a la tarea de presentarse públicamente como el emprendimiento de una clase empresarial modernizadora, diferente al sistema cerrado de favoritos de la elite enriquecidos por el Estado durante el gomecismo. Dio comienzo a una inusual campaña nacional de alto perfil, para establecer su imagen como proyecto técnicamente bien concebido que contaba con una amplia base de apoyo. Sus principales líderes eran hombres que

¹² Entrevista, 1978.

habían participado en la investigación y el fomento de la industria siderúrgica desde el trienio y contaban con conocimientos sobre el tema: Alberto Vollmer, Antonio Álamo Blanco, Luis Roncayolo y Guillermo Machado Mendoza. Los miembros del Sindicato del Hierro se reunieron con líderes empresariales y políticos de todo el país para obtener apoyo político y financiero para el proyecto, y para contrarrestar la impresión de que era el plan de una pequeña camarilla. Ya en octubre de 1952 el Sindicato del Hierro tenía 170 accionistas (109 suscritos en Caracas, 21 en Maracaibo y 38 en otras ciudades del interior). Su presidente era Eugenio Mendoza y sus directores eran representativos de las más prominentes familias de negocios de Venezuela; entre ellos se encontraba Guillermo Zuloaga, autor de la prospección de mineral de hierro de 1939. El registro oficial se realizó el 4 de junio de 1953, y en octubre comenzó la exploración en busca de ubicaciones para la planta con ayuda de un tractor procedente del distante ingenio azucarero de Vollmer.

Los líderes del Sindicato del Hierro buscaron también la participación del capital extranjero en el proyecto. Atraieron interés y apoyo de empresas alemanas y de las dos mayores compañías estadounidenses que extraían hierro en Venezuela: U.S. Steel y Iron Mines. También hicieron preparativos en Londres y Nueva York para la firma de contratos para dos proyectos preliminares relativos a hornos Siemens Martins de reducción eléctrica; los estudios realizados confirmaron el gran potencial del río Caroní para proporcionar la energía hidroeléctrica, lo que condujo a que el proyecto abandonara el gas en favor de la tecnología de reducción por electricidad.

Para el sector privado la planta siderúrgica era una inversión estratégica. Dado el interés de los capitalistas locales en obtener un abastecimiento interno confiable y económico de insumos de acero para sus industrias, el Sindicato del Hierro sentía que la planta debía cumplir con ciertos requisitos técnicos: tenía que emplear energía hidroeléctrica y hornos eléctricos de reducción del hierro; producir primero “bar-mili shapes” (barras, cabillas, alambre), al tiempo que se estipulaba que se instalaría un *rolling mill* para producir productos planos en una etapa posterior; inicialmente tendría proporciones modestas (una capacidad de 120.000 toneladas anuales).

Pérez Jiménez siguió de cerca estos acontecimientos. Después del golpe de 1952 cambió su política y estableció una oficina ejecutiva para planificar la expansión del Estado en la industria básica, incluida la producción de acero. El proyecto siderúrgico fue asignado a un comité adscrito al Ministerio de Defensa y encabezado por el capitán Víctor Maldonado Michelena, ingeniero mecánico graduado en Argentina con muy cercanos vínculos a Pérez Jiménez, que había quedado muy impresionado ante el empuje que había logrado la producción estatal argentina de insumos estratégicos gracias a los

militares. En fecha tan temprana como 1951 había propuesto que los militares venezolanos controlaran la producción de suministros militares y la industria básica de la nación (Rincón 1982: 44-45).

En mayo de 1953 Maldonado Michelena viajó a Alemania, Suiza e Italia en calidad de oficial especial de la CVF a fin de explorar las tecnologías de producción de acero. Trajo consigo a varios técnicos alemanes para que evaluaran los estudios existentes, cuyos resultados confirmaban los del Sindicato del Hierro en lo concerniente al tipo de planta y de tecnología que se debía usar en Venezuela. Mientras algunos estudiosos opinan que Pérez Jiménez decidió emplear la energía hidroeléctrica únicamente sobre la base del trabajo de Maldonado, con independencia de los resultados de los estudios del sector privado (Martín Frechilla 1994:227), otros plantean que el ejército asumió el proyecto sólo después de que el Sindicato del Hierro confirmó que existía la tecnología para la reducción del mineral venezolano, y que este proceso podía utilizar la energía hidroeléctrica (Skurski 1985: 50; v. tb. Dinkelspiel 1967:29; García Iturbe 1961:25-29). Según Dinkelspiel, las evaluaciones de Maldonado eran los únicos estudios técnicos que el Gobierno solicitó para la planta siderúrgica (1967: 29).

La organización del proyecto de la planta siderúrgica del Estado quedó en manos de la Oficina de Estudios Especiales del Presidente de la República, creada por Pérez Jiménez en agosto de 1953 y encabezada por el teniente coronel Llovera Páez, un amigo en quien confiaba y que había participado en el golpe de 1948. En noviembre, Llovera Páez se reunió con Eugenio Mendoza y le informó que “al inicio” el Estado controlaría la planta siderúrgica pero que le daba la bienvenida a la inversión del sector privado. La planta emplearía energía eléctrica y tendría una capacidad de entre 120.000 y 500.000 toneladas. Esta fue una señal para los líderes del Sindicato del Hierro de que su proyecto corría peligro.

Pérez Jiménez también creó la Comisión para el Estudio de la Electrificación del Caroní, a fin de dirigir el proyecto hidroeléctrico. La encabezaba el comandante Rafael Alfonzo Ravard, graduado de ingeniería civil e hidráulica en el Massachusetts Institute of Technology y en la Escuela Superior de Guerra de París; a diferencia de la mayoría de los colaboradores de Pérez Jiménez, Alfonzo Ravard pertenecía a la elite social caraqueña.

Pérez Jiménez anunció públicamente la decisión gubernamental de construir una planta siderúrgica el 9 de enero de 1954, aprovechando un acontecimiento que garantizaba su impacto: el inicio de los embarques de mineral de hierro del Cerro Bolívar por la U.S. Steel. El mensaje tenía dos públicos: las

empresas extranjeras y los capitalistas locales. Las compañías foráneas que asistían a la ceremonia, U.S. Steel y Iron Mines, tenían la esperanza de instalar plantas siderúrgicas en Venezuela. Sin embargo, resultó llamativo que no se invitara a los directores del Sindicato del Hierro. El anuncio de Pérez Jiménez era un medio de informar a los capitalistas extranjeros y nacionales no solo de los planes del Gobierno, sino también de su intención de formularlos sin tomar en cuenta al sector privado.

Al mes siguiente, el director de la Oficina de Estudios Especiales, Llovera Páez, declaró que la compañía siderúrgica estaría abierta a una participación minoritaria del capital privado. Este anuncio mantuvo viva la esperanza de los promotores del Sindicato del Hierro de que podrían influir sobre las decisiones del Gobierno invirtiendo en la compañía estatal. Entonces, en una súbita rectificación, se anunció que la industria sería solo de propiedad estatal y preparó una licitación secreta para una planta cuyo diseño no se había hecho público.

A la luz de estos acontecimientos, los líderes del Sindicato del Hierro se percataron de que no podían seguir aferrados a su proyecto original. No obstante, decididos todavía a producir ciertos insumos de acero para sus industrias, compraron Sivensa, una pequeña fábrica de cabillas de Caracas, con intención de ampliarla, y Alberto Vollmer hizo planes para crear otra planta para el procesamiento del acero. Pero Pérez Jiménez consideró estas iniciativas como un reto al poder del Estado y ordenó que cesaran, y que de no hacerlo encarcelaría a Vollmer. Poco después, a inicios de 1955, Pérez Jiménez disolvió el Sindicato del Hierro y ordenó que se entregaran sus estudios al Gobierno (Skurski 1985: 53).

La manera en la cual el Gobierno se condujo en relación con el proyecto siderúrgico creó dudas acerca de sus objetivos y su competencia. El proceso de licitación estuvo plagado de irregularidades¹³. Fiat se hizo del contrato y se encargó del diseño y la obra ingeniera, después, esta empresa contrató la construcción de la planta a la Innocenti Società Generale per l'industria Metalurgia e Meccanica. Luego de la firma del contrato el 31 de diciembre de 1955, Fiat se retiró del proyecto y dejó a cargo a Innocenti, a pesar de que esta era fundamentalmente una productora de tubos sin costura y de que carecía de experiencia en la construcción de plantas siderúrgicas.

Fiat había presentado el proyecto menos costoso (101.553.000 dólares) pero no cumplió lo prometido; la realización costó más de tres veces esa suma, no se terminó a tiempo y no produjo lo

¹³ En 1954 Llovera Páez viajó a Europa con el objeto de solicitar propuestas para la planta siderúrgica estatal. La Oficina de Estudios Especiales recibió 11 proyectos preliminares y en 1955 invitó a seis compañías a participar en una ronda de licitaciones sobre la base de especificaciones más detalladas de la planta.

que se proyectaba. Revisiones secretas del contrato aumentaron de forma abrupta la capacidad de la planta a 600.000 toneladas al año y la rediseñaron sin que mediaran estudios técnicos, de modo que más de la mitad de su producción consistiría en tubos sin costura, que se emplea en la industria petrolera y no en insumos para las industrias de propiedad nacional (Skurski 1985:55). El contrato especificaba también que Innocenti recibiría su pago en dólares en bancos fuera del país antes de la entrega de los equipos. Cuando se produjo el derrocamiento de Pérez Jiménez el contrato ya había costado al Estado 388.500.000 dólares (Dodge 1968: 76-77). Se dice que Pérez Jiménez y Llovera Páez recibieron 7 millones de dólares cada uno de manos de Innocenti en el momento en que se firmó el acuerdo (Dinkelspiel 1968: 35). Durante el posterior régimen democrático fue necesario realizar prolongados y costosos rediseños para que la planta pudiera entrar en operaciones¹⁴.

A diferencia del plan siderúrgico, el plan hidroeléctrico de Guayana fue puesto en práctica de manera eficiente por Alfonzo Ravard. Se terminó la presa según el plan, sin que se produjeran señales de corrupción o sobornos. Alfonzo Ravard concebía el proyecto hidroeléctrico como el corazón de un complejo industrial potencialmente vasto en la región. Lo protegió de la política manteniéndolo reducido y vinculado sólo a la industria siderúrgica del Estado. Como protegió su labor técnica de la política, tras el derrocamiento de Pérez Jiménez no se consideró que Alfonzo Ravard fuera un colaborador del régimen y se le designó presidente de la CVF durante el gobierno de AD (Skurski 1985: 56). En ese puesto diseñó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) -de la cual después será presidente-, una empresa Holding que controlaba todas las grandes industrias de Guayana y que se convirtió en un modelo de asociación entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero¹⁵.

Conclusiones: deconstruyendo la dictadura

Este análisis de los intentos del Sindicato del Hierro por fomentar la producción de acero en Venezuela ilustra varios procesos que caracterizan la evolución del petroestado durante el gobierno

¹⁴ Sobre la base de la obra de García Iturbe (1961), Frechilla ofrece una interpretación diferente. Plantea que la oferta de Fiat-Innocenti era la más razonable, y que la planta siderúrgica avanzaba según el calendario establecido (1994: 230). Según García Iturbe, la crítica al proyecto de Innocenti era un complot para sustituirla por la Koppers, que había presentado la oferta más costosa, pero que estaba vinculada a miembros del Sindicato del Hierro. Frechilla afirma que Antonio Álamo y Luis Roncayolo habían participado en 1959 en el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, que estaba involucrado en la evaluación de la planta siderúrgica y que tenía intereses en la Koppers (1994: 230). El punto de vista que he presentado tiene como base fundamental la obra de Skurski (1985) y tb. la de Dodge (1968) y Dinkelspiel (1967), así como numerosas entrevistas con personas relacionadas con la industria siderúrgica en Venezuela, entre ellas Alberto Vollmer, Eugenio Mendoza, Antonio Álamo y Héctor Santaella. Resulta innecesario aclarar que brindo esta interpretación a manera de recuento parcial de un tema complejo que requiere más investigación.

¹⁵ Después de desempeñarse durante más de dos décadas como presidente de la CVG, en 1974 Alfonzo Ravard se convirtió en director del Grupo Mendoza (conglomerado encabezado por Eugenio Mendoza). En 1976, tras la nacionalización del petróleo durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, éste designó presidente de Petroven, la nueva compañía *holding* para la industria nacional del petróleo, a Alfonzo Ravard (Skurski 1985:56).

de Pérez Jiménez: 1) la construcción del Estado como el agente central del progreso nacional; 2) la identificación de los intereses nacionales con los intereses del Estado, y, por tanto, la exclusión del sector privado de las posiciones de influencia política; 3) la definición de ciertas empresas de materias primas como industrias “básicas” de interés nacional que el Estado debía desarrollar; 4) la personificación del poder estatal en la figura del presidente; 5) la fetichización de la modernidad en proyectos económicos de gran escala como concretizaciones de la modernidad que deben llevarse a vías de hecho sin tener en cuenta su impacto social, económico y ecológico más general; 6) la arbitrariedad y ausencia de rendición de cuentas del poder del Estado; y 7) el alcance de la corrupción, no solo en su forma de apropiación de recursos públicos por parte de altos funcionarios gubernamentales, sino también en la de un despilfarro masivo de recursos públicos en proyectos improductivos que demandan un apoyo estatal continuo y dilapidador. Como veremos, durante los subsiguientes regímenes democráticos algunos de estos rasgos del petroestado cambiaron, mientras que otros se agudizaron.

Si bien la burguesía creció en riquezas y magnitud durante el auge económico de los años 50, su expansión a nuevas actividades se vio bloqueada por límites definidos por un Estado cada vez más arbitrario y sordo. Los grandes empresarios que intentaron trasponer esos límites invirtiendo en acero, productos metálicos y petroquímicos y logrando un fomento estatal más activo a la industrialización se vieron enfrentados con la oposición del gobierno militar. Como habían crecido a la sombra del Estado y con el apoyo de la economía petrolera, carecían de fuerza económica independiente y no estaban organizados como fuerza política. Pero cuando en 1957 convergió un conjunto de factores políticos y económicos que minó al régimen, esos empresarios retiraron su apoyo a la dictadura y se convirtieron en campeones de la democracia.

5. El 23 de Enero de la democracia

Con un estado mental menos influenciado por fantasías la insurrección del 23 de Enero hubiera alcanzado su plenitud.

Domingo Alberto Rangel

¿Cómo explicar la caída de una dictadura que gobernó durante un periodo de auge de los ingresos estatales y rápido crecimiento económico? Entre 1945 y 1957 las entradas gubernamentales se multiplicaron por 8 y los ingresos provenientes del petróleo por 11; en 1957 el petróleo era responsable de 70,7% de los ingresos fiscales (Aranda 1977:141). Durante la dictadura de Pérez Jiménez la abundancia sin precedentes fue el motor de la ampliación de los negocios y también de gastos excesivos y derroches sobre la base de créditos fáciles. Pero con la reversión de este ciclo expansivo hacia fines de 1957, se produjo una contracción fiscal en espiral que hizo que el sector empresarial se sintiera presionado por los acreedores, y que muchas empresas se vieran al borde de la bancarrota. Hasta la industria de la construcción experimentó una depresión. La mayoría de los analistas han atribuido la caída de Pérez Jiménez a esta “crisis económica”¹. Pero aunque la situación era grave resultaba tanto más seria por innecesaria, y su severidad tenía como causa factores políticos más que financieros.

Desde la cima del auge de 1955, el Gobierno había adoptado la práctica de posponer los pagos a las compañías contratistas de la construcción. Emitía bonos que no podían canjearse en los bancos de inmediato, pero que las compañías podían emplear para obtener créditos, a menudo de la banca extranjera. De hecho, estos bonos gubernamentales constituían préstamos forzados sin interés “que las firmas duramente necesitadas de efectivo se veían obligadas a vender... a precio menor al nominal” (Kolb 1974:167; v. tb. Burggraaff 1972:144). En 1957 esta práctica había hecho que la deuda del Gobierno se estimara ya en 1.400 millones de dólares (Alexander 1964:60), de los cuales la deuda interna solo representaba la cifra de 150 millones (Vallenilla 1967: 452-453).

En opinión de Pérez Jiménez, era el sector privado y no el Gobierno el que había incurrido en esta deuda. Estimaba que los contratistas habían obtenido financiamiento sobre la base de los contratos públicos, incluidos aquellos con calendarios que ataban los pagos a las fases de las obras. Cuando no las terminaban en las fechas pactadas, los pagos se posponían, aun cuando las firmas tuvieran que

¹ Helena Plaza (1978) critica este enfoque y subraya los aspectos políticos de la crisis.

pagar puntualmente a sus acreedores (Blanco 1983:163). Desde esta perspectiva, la deuda era el resultado de la incapacidad del sector privado para cumplir a tiempo sus compromisos.

A la luz de la información disponible resulta difícil evaluar la veracidad de estas opiniones. Durante la recesión de 1957 los acreedores se tornaron más inflexibles y los contratistas se vieron más presionados para cumplir con sus obligaciones financieras. Lo que sigue siendo poco claro y resulta “inexplicable” para algunos (Burggraaff 1972:144) es por qué Pérez Jiménez se negó a pagar a los contratistas, aunque no fuera más que para lograr su apoyo político. Según Vallenilla Lanz, la negativa de Pérez Jiménez a efectuar los pagos de los 150 millones de dólares de deuda interna (pese a que el Tesoro contaba con un excedente de más de 700 millones), y pese también a las súplicas de Vallenilla, se debió a su terquedad. Incluso, después de la preocupación por la política gubernamental expresada públicamente por los militares, Pérez Jiménez cortó el diálogo negando que existiera deuda: “no hay deudas, sino compromisos” (Vallenilla 1967:451)².

Como la indiferencia del Gobierno hacia las demandas del sector privado agravó los efectos de la escasez financiera, y dado que el sector, cada vez más intranquilo ante el clima económico, exageraba su malestar debido a la frustración ante la insensibilidad gubernamental, la recesión económica se empezó a describir como “crisis económica”. Si la diferencia entre “problemas” económicos y “crisis” económica es que “se puede convivir con los problemas” mientras que la crisis pone en entredicho “la viabilidad del sistema” y “conlleva un cambio inevitable”, como plantea Smith en su análisis de las dificultades de Inglaterra (1984:12)³, entonces en esa época la crisis de Venezuela no era económica, sino política; era el sistema político el que ya no parecía viable.

Estas dificultades coincidieron con una coyuntura política que era también producto de errores de cálculo gubernamentales. La Constitución de 1953 estipulaba que las elecciones presidenciales se celebrarían cada cinco años. Los redactores habían previsto que en un determinado periodo los programas de gobierno le granjearían a Pérez Jiménez el apoyo popular. En 1957, transcurridos cuatro años, resultaba evidente su excesivo optimismo: las obras públicas no habían producido el suficiente apoyo. Se ha escrito que Vallenilla, como si sintiera que el poder había estado excesivamente concentrado en el Ejecutivo, le explicó a Pérez Jiménez que no existía la percepción de que las obras públicas fueran propiedad de la colectividad. “La obra del régimen es, con su perdón, demasiado nuestra. Lleva nombre y apellido y esto constituye nuestro principal pecado. No nos perdonarán”

² Dos décadas después mantenía la misma posición (Blanco Muñoz 1983: 163).

³ Smith plantea la cuestión en relación con Inglaterra, pero su punto de vista resulta aplicable a Venezuela.

(1967: 449). Resulta irónico que en 1957 la dictadura se enfrentara a su propia Constitución, que reglaba una contienda electoral que muy probablemente perdería.

El plebiscito de 1957: otro golpe de Estado

En un inicio, Pérez Jiménez trató de organizar un sufragio entre dos partidos, el suyo y Copei, la otra organización política legal. Pero temeroso de que se convirtiera en un canal para que otros grupos expresaran su oposición al régimen, como había sucedido en las elecciones de 1952, presionó al líder copeyano, Rafael Caldera, a rechazar el apoyo de los partidos ilegales. Caldera se negó y fue arrestado (Plaza 1978: 82). Este ataque a un líder que sostenía relaciones íntimas con la jerarquía eclesiástica y con la elite social y económica aisló aún más a Pérez Jiménez.

Obsesionado con la idea de retener el poder, Pérez Jiménez advirtió que no tenía otra alternativa que componer una ficción electoral. Una vez más, intentó iluminar el presente con la luz del pasado. En 1952, dando por reales las afirmaciones de su régimen, había celebrado unas elecciones limpias. En 1957, conciente de ese autoengaño, intentó crear la ilusión pública de que contaba con apoyo. Dada su concepción ideal de la política como organización pasiva y silenciosa, se daría al pueblo sólo la más restringida participación en la construcción de dicha ilusión. De ahí que el 4 de noviembre de 1957 anunciara que había diseñado un plebiscito -maniobra flagrantemente inconstitucional- que definió como “una forma de universalidad, según la cual se expresará la opinión que se tenga del actual régimen” (Plaza 1978: 66). El 15 de diciembre se le pidió al pueblo que votara si aceptaba o no el programa de obras públicas del régimen y si estaba de acuerdo en “reelegir a la persona que ocupa en la actualidad el cargo de presidente” (Herrera Campíns 1978: 94).

Las obras públicas eran la historia política y la plataforma presidenciales: Pérez Jiménez evitó la retórica. Las palabras solo podían conducir al resbaloso terreno de la interpretación, a la separación entre hechos y opiniones, y de ahí al mundo corrupto de las mentiras fabricadas por los políticos. Pero las obras públicas, estimaba Pérez Jiménez, hablaban por sí solas en el lenguaje sencillo de la realidad objetiva, un lenguaje democrático que satisfacía las auténticas necesidades del pueblo. Y los votos, como las obras públicas, podían construirse.

El 15 de diciembre, mientras se realizaba el conteo de los primeros votos, Vallenilla Lanz anunciaba a la prensa internacional los resultados. El fraude era evidente. El escrutinio, alterado en un grado sin

precedentes, mostraba que 81% de los votantes apoyaba a Pérez Jiménez (el porcentaje más alto de cualquier presidente en la historia venezolana); de la noche a la mañana, en una producción exagerada de apariencias, se presentaba como un dictador popular.

Entre 1952 y 1957 Pérez Jiménez no se había tornado más realista, simplemente había cambiado una ilusión por otra. En 1952 pensó que contaba con el apoyo popular; en 1957 creyó que tenía el de los militares. En el primer caso, imaginó que un apoyo sólo existente en la retórica del Gobierno era real; en el segundo, que el apoyo, real en una época, podía ser eterno. Después de seis años de un poder muy personalizado, Pérez Jiménez ya no se engañaba pensando que disfrutaba o podía obtener con facilidad el apoyo popular. Tras fracasar en el intento de ganarse al pueblo, había comenzado a tratar a sus aliados como si ellos también pertenecieran al ejército de los poco confiables, de los subordinados, de los que debían recibir órdenes en vez de darlas. En este sentido, su régimen representaba un renacimiento del control represivo de los caudillos sobre quienes consideraban eventuales retadores de su poder. Sin embargo, a diferencia del mando caudillista tradicional, Pérez Jiménez no ejerció la represión contra coaliciones poco estructuradas en torno de líderes militares rivales, sino contra miembros de unas Fuerzas Armadas cada vez más profesionalizadas. Este control afectó también a miembros del sector empresarial y a grupos profesionales, que habían crecido de modo considerable estimulados por la expansión de la economía.

Contando quizás con el temor histórico de la elite a la movilización popular, Pérez Jiménez hizo caso omiso de las señales de disidencia procedentes de la Iglesia, del sector empresario e incluso de las FFAA, convencido de que estos sectores preferirían apoyarlo antes que enfrentar la amenaza de lo desconocido. Pero, sobre todo, contaba con la adhesión militar para la continuidad de su liderazgo personalista. Y esta fue su más grave equivocación.

El dictador solitario: encarando una creciente oposición

En realidad, pese a la muy proclamada unidad de las FFAA, en 1957 los militares estaban profundamente divididos. Muchos factores habían erosionado su unidad, pero subyacía como elemento común la excesiva centralización del poder y los beneficios en el Ejecutivo. La jerarquía se sentía excluida tanto de la responsabilidad como de las prebendas. Pérez Jiménez hacía nombramientos arbitrarios sobre la base de la lealtad personal y no del mérito, y a menudo destituía de puestos de poder a oficiales calificados a los que consideraba rivales en potencia. Favorecía al

ejército (su propia arma) en detrimento de las otras; a los fines de la seguridad interna depositaba su confianza en la policía secreta de Pedro Estrada (la temida Seguridad Nacional), que llegó a ejercer el control incluso entre los militares; y obstaculizaba el ascenso de oficiales jóvenes que se sentían más calificados porque habían recibido entrenamiento en Estados Unidos, potencia militar después de la Segunda Guerra Mundial. Pérez Jiménez había prometido la modernización de sectores importantes desde un punto de vista estratégico de la institución militar, así como la participación de la misma en diferentes áreas de la economía -desde las comunicaciones hasta la industria-, pero los oficiales que ascendían no podían confiar en ocupar un papel dentro de los proyectos gubernamentales ni en la viabilidad y realización de dichos proyectos. Con el tiempo se llegó a poner en duda la propia capacidad defensiva del país.

Además, para los oficiales excluidos del círculo cercano al poder el auge era en buena medida fantasmal. Si bien recibían salarios fijos de moderada magnitud, los hombres de negocios y los profesionales prosperaban, y los funcionarios gubernamentales -en particular Pérez Jiménez- derrochaban lujo (Rangel 1977: 58). Un informe confidencial de la embajada de EEUU sobre la situación militar durante 1957 planteaba que el problema no consistía en que una parte demasiado grande del dinero del Estado fuera a parar a los bolsillos de Pérez Jiménez, sino que una parte demasiado pequeña llegaba a los de la jerarquía militar (Burggraaff 1972:150). De ahí que la disparidad entre los beneficios recibidos por la camarilla gobernante y el resto del cuerpo de oficiales se viera acentuada con el desinterés que mostraba Pérez Jiménez por compartir los despojos del poder con sus principales sostenedores y por construirse una imagen de estadista magnánimo.

Pero la fractura del apoyo militar permaneció escondida en los cuarteles, a la espera de una coyuntura política apropiada para salir a la luz. En 1957, cuando “la ruptura de canales políticos de comunicación” que se produjo como resultado de la centralización del poder y de la decisión de la dictadura de no celebrar elecciones abiertas “convergió con una ruptura de los canales de comunicación del mercado” (la negativa del Estado a pagar sus deudas; Skurski 1985: 44), una serie de señales crecientes procedentes de múltiples sectores, cada una de las cuales reforzaba a las otras, comenzó a confluír hacia la oposición a Pérez Jiménez.

En ese contexto, la Junta Patriótica (JP), un grupo multipartidario representante de diversos intereses, se empeñó en convertir la desafección política al régimen en una oposición coordinada. Desde su fundación en junio de 1957 por Fabricio Ojeda, dirigente medio de la Unión Republicana Democrática, y Guillermo García Ponce, líder del Partido Comunista, los objetivos de la JP habían sido garantizar el

respeto a la Constitución y la celebración de elecciones libres, con el fin de evitar la reelección de Pérez Jiménez, y luchar por el establecimiento de un régimen democrático.

Los múltiples manifiestos de la JP -impresos por cientos de miles y distribuidos en todo el país- llamaban a los venezolanos a deponer los intereses partidarios y a unirse en una lucha común contra la dictadura. Definían la lucha contra el régimen de Pérez Jiménez como parte del esfuerzo civilizador encaminado a lograr que Venezuela superara su estado de barbarie. En su primer manifiesto, del 10 de julio de 1957, la JP afirmaba que “la mayoría de los venezolanos de diferentes ideologías coincidimos al pensar que a Venezuela, como nación civilizada, corresponde demostrar claramente ante el mundo, que es un país económica y políticamente sólido, capaz de ejercer la soberanía en su más amplia expresión democrática” (Plaza 1978: 80). En otro manifiesto, emitido en agosto, proclamaba que al exigir elecciones libres “No buscamos ni defendemos el poder para usufructo sectario de un grupo” (Stambouli 1980:158), declaración que constituía una crítica no solo al gobierno de Pérez Jiménez, sino también, implícitamente, a AD.

Cuando Pérez Jiménez anunció el plebiscito el 4 de noviembre, la JP señaló que era “un nuevo Golpe de Estado” (Plaza 1978: 84). En un manifiesto dirigido a “las Fuerzas Armadas Nacionales”, del 8 de noviembre, la JP denunciaba las violaciones de la Constitución cometidas por el Gobierno y preguntaba: “¿Están las Fuerzas Armadas Nacionales para amparar la violación de la Constitución o para defenderla?, ¿o acaso es que el ejército ha de actuar en la forma servil como lo hace el Congreso, integrado por hombres sin dignidad y sin conciencia patriótica?” (1978: 84). Tras el plebiscito del 15 de diciembre, la JP lanzó un llamado a todos los venezolanos a deponer sus diferencias y juntarse en un frente unido en la lucha contra la dictadura.



Movilización de apoyo al golpe del 23 de enero de 1958 contra el general Marcos Pérez Jiménez, cerca de un plan de viviendas construido por él. Este emprendimiento llevaba el nombre de 2 de Diciembre en honor al golpe que consolidara el poder de Pérez Jiménez; luego sería rebautizado como 23 de Enero para celebrar el golpe que lo derrocó. (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

Durante todo el año de 1957, la Iglesia, sensible al cambio de los tiempos -tanto a la creciente oposición local al régimen como al llamado del Papa Pío XII en pro de una Iglesia con mayor responsabilidad social- y más protegida de las represalias del régimen, tomó la vanguardia de las críticas abiertas a las políticas sociales del Gobierno. El 1° de mayo de 1957 se publicó y leyó durante la celebración de la misa en toda la nación una carta pastoral redactada por el arzobispo de Caracas, Rafael Arias. Allí se reafirmaban, en términos religiosos, los principios fundamentales del discurso democrático elaborado por los jóvenes que criticaban el régimen de Gómez en los años 30. Condenaba la disparidad entre la riqueza de la nación y la pobreza del pueblo, y la atribuía al mal uso por parte del Estado de los recursos provenientes del petróleo:

Nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez. Según un estudio económico de las Naciones Unidas, la producción per cápita en Venezuela ha subido al índice de \$540.00 (quinientos cuarenta dólares) lo cual la sitúa de primera entre sus hermanas latinoamericanas, y por encima de naciones como Alemania, Australia, e Italia. Ahora bien, nadie osará afirmar que esa riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos, ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se puede calificar de humanas (Plaza 1978: 74).

La carta criticaba el desempleo, los bajos salarios, la falta de servicios sociales, las deficiencias de las instituciones de bienestar público, e incluso condenaba “la frecuencia con que son burladas la Ley del Trabajo y los instrumentos legales prescritos para la defensa de la clase obrera” (Plaza 1978: 74). La carta pastoral no fue un hecho aislado. En ese periodo, los editoriales de *La Religión*, el periódico de la Iglesia, se dedicaron a criticar al régimen, lo que trajo como resultado la persecución de su director, el padre Hernández Chapellín. Este cambio de la posición de la Iglesia se interpretó como una señal que indicaba una retirada del apoyo al régimen en los más altos niveles de la sociedad venezolana.

Incluso el gobierno de EEUU, que en 1955 le había concedido a Pérez Jiménez la medalla de la Legión del Mérito (Legion of Merit), había comenzado a preocuparse por lo poco confiable desde el punto de vista político que resultaba su poder personalizado. Ello había quedado ejemplificado por la propuesta que presentara en la Conferencia Panamericana de Presidentes, celebrada en 1956 en Panamá, encaminada a fundar una agencia multilateral de ayuda, propuesta a la que EEUU se opuso con vehemencia. Un analista venezolano sugiere que el descenso del apoyo estadounidense alentó a la elite del sector de los negocios a cambiar su postura con respecto al régimen en 1957 (Rangel 1977:42), pero es probable que se tratara de procesos convergentes mutuamente reforzados.

El cambio en las posturas de figuras del sector privado fue un factor crucial en la consolidación de la oposición a Pérez Jiménez. En 1948 y en 1952 la mayoría de los líderes del sector, disgustados por las políticas populistas de AD durante el trienio, le brindaron un decidido apoyo a Pérez Jiménez. Pero en 1957 algunos miembros de la elite empresarial, en particular quienes promovían la industrialización, se habían convertido en críticos de la indiferencia gubernamental respecto de sus preocupaciones, así como del mal manejo de la economía (Skurski 1985). De ahí que hacia fines de 1957 estuvieran conspirando con AD, la URD y Copei (pero no con el PC).

La Cámara de Comercio de Caracas emitió una crítica pública al régimen, y en diciembre dos prominentes hombres de negocios, Eugenio Mendoza (ex-presidente del Sindicato del Hierro) y el banquero Mario Diez (ejecutivo de la subsidiaria del First National City Bank), se reunieron con los líderes de AD, la URD y Copei en Nueva York a fin de debatir la organización de la oposición y dejar

sentadas las reglas para el establecimiento de un régimen electoral (Blank 1973: 25). El acuerdo logrado en esa reunión “simbolizó el reconocimiento por parte de AD de que el apoyo electoral mayoritario no justificaba un gobierno de un solo partido” (Lombardi 1982: 229). Y lo que es igualmente importante, simbolizó también el reconocimiento por AD de que un gobierno de partido no justificaba la exclusión del sector privado de la participación gubernamental activa, así como el reconocimiento privado de que los partidos podían convertirse en un medio confiable para representar sus intereses.

Un catalizador esencial de esta cadena de transformaciones recíprocas fue la retirada del apoyo de los militares al régimen. Dado el carácter conspirativo de la política militar y la naturaleza represiva del régimen, la intranquilidad existente en los rangos de oficiales permaneció oculta de la vista pública: las sanciones contra los uniformados que expresaban su disenso con el régimen eran sumarias y a menudo severas. Pero en un país pequeño resultaba difícil mantener en la oscuridad los destellos de descontento. En un manifiesto fechado el 10 de septiembre, la JP le había hecho pública la oposición existente en las filas de las FFAA a los planes de reelección de Pérez Jiménez (Plaza 1978: 81). Tras el plebiscito, los rumores de golpe circularon cautelosamente, pero cada vez con más frecuencia. Las personas que poseían contactos hacían circular con nerviosismo datos o “bolas” cuya fuente, se afirmaba por lo general, era siempre un amigo o familiar bien situado, un capitán o coronel “enterado”. Los rumores hicieron visible una grieta en el edificio militar.

El 23 de Enero de la democracia

Si bien hacia fines de 1957 el sordo murmullo de los chismes que anunciaba el descontento en los militares erosionó un principio fundamental de la identidad del régimen -la unidad de las FFAA-, fue el estruendo de una batalla aérea durante el levantamiento del 1^o de enero de 1958 el hecho que hizo añicos ese dogma. Todavía aturdida por las ruidosas detonaciones de las fiestas de Año Nuevo, la población de Caracas se despertó para asistir con asombro al espectáculo de una batalla entre aviones de la Fuerza Aérea rebelde y la artillería del ejército: la primera atacaba el Palacio Presidencial y la segunda lo defendía.

La derrota del alzamiento, ejecutado a toda prisa (originalmente había sido planificado para el 4 de enero) se debió a la incapacidad de sus líderes para actuar en el momento crucial; los insurgentes, “mostrando una abrumadora falta de coordinación” (Burggraaff 1972: 155), no pusieron en práctica

una cadena de levantamientos simultáneos planificados en guarniciones estratégicamente ubicadas. Sin demasiado esfuerzo, dos oficiales leales a Pérez Jiménez, los coroneles Roberto Casanova y Abel Romero Villate, lograron reducir a los insurgentes. Al día siguiente el Gobierno controlaba la situación. Pero al hacer añicos el mito de la unidad militar, se transformó el contexto de la acción política: intensificó la oposición al régimen y erosionó la capacidad gubernamental para sofocarla. Reveló que la grieta del edificio militar llegaba hasta sus cimientos.

Como si ya no la contuviera el mito sostenedor del régimen, la oposición a Pérez Jiménez emergió a la superficie en los principales centros urbanos, con lo que se amplió la grieta que la ilusión de unidad había escondido. Intelectuales, asociaciones de profesionales y grupos de interés comenzaron a manifestar públicamente su oposición. Incluso uno de sus principales beneficiarios, la Asociación de Ingenieros, emitió una declaración en la cual criticaba el caótico programa de obras públicas. En las calles de Caracas grupos de estudiantes chocaban a diario con la policía, y a principios de enero se produjeron varias manifestaciones, entre ellas una de mujeres frente a la sede de la Seguridad Nacional⁴.

Pero los líderes de la oposición civil sentían que solo los militares podían derrocar a Pérez Jiménez. De ahí que en la creciente ola de manifiestos se les hiciera un llamado para que pronunciaran la palabra decisiva. En una declaración pública de enero, la JP elogiaba a los militares por haber tomado las armas y los instaba a derrocar el “‘triumvirato’ de Pérez Jiménez, Vallenilla Lanz y Estrada” (Burggraaff 1972:159). Al reducir los responsables a tres individuos -dos de ellos civiles- la JP intentaba disociar a los militares como institución de la responsabilidad por la debacle. Como tardía respuesta encaminada a apaciguar a las FFAA, Pérez Jiménez destituyó a Vallenilla y a Estrada, nombró a militares en los puestos clave que habían ocupado y aumentó a siete el número de oficiales de su gabinete. Pero esta inclusión no hizo más que acercar la lucha por el poder a su propia sede.

Intensificada la conspiración entre los militares después del abortado levantamiento, sin los aliados de confianza, Vallenilla y Estrada, Pérez Jiménez fue incapaz de encontrar oficiales leales que vigilaran a los rebeldes. Al oponer a un arma contra otra -el Ejército confiscó municiones de la Armada, se mantenía a raya a la Fuerza Aérea, en el interior se desarmó a cuarteles sospechosos de sedición- creció el descontento entre los militares, lo que despertó los apetitos de generales ambiciosos. El propio ministro de Defensa de Pérez Jiménez, general Rómulo Fernández, orquestó un golpe fallido. El

⁴ Todavía recuerdo la llegada de mi madre, Lya Imber, a casa, con su pierna herida sangrando por el impacto de un fragmento de bomba lacrimógena que había sido lanzada para disolver esta manifestación.

dictador, no confiando en nadie más para ocupar ese puesto clave, decidió hacerse cargo personalmente del ministerio, afirmando que ello “garantizaría el mantenimiento de la unidad de las FFAA” (Burggraaff 1972:161). Pero como la concentración de poder en manos presidenciales era la raíz de la división de las FFAA, esta iniciativa solo contribuyó a aumentar el aislamiento y la vulnerabilidad de Pérez Jiménez.

El 14 de enero, importantes asociaciones del sector privado respondieron a la crisis política con la publicación de un manifiesto que proclamaba la necesidad de que el Gobierno garantizara el ejercicio pleno de los derechos constitucionales para asegurar “la recuperación institucional y democrática de Venezuela”. Resultaba necesario que “mediante una acción vigilante y enérgica, se normalice y dignifique la administración de los dineros públicos, a fin de que nuestros recursos naturales se encaucen en un sentido verdaderamente beneficioso para la colectividad, sin ventajas personales, derivadas de la gestión oficial” (Stambouli 1980:131). Al día siguiente, el Colegio de Ingenieros exigió “el pleno goce de los derechos humanos” y “una mejor y más proba inversión de los recursos del país”, así como “la libre y sana crítica” del uso de los “dineros públicos” destinados a obras públicas suntuosas (1980:131). Como había sucedido en la lucha contra Juan Vicente Gómez, la exigencia del movimiento contra Pérez Jiménez de que se restablecieran los derechos constitucionales resultaba inseparable del derecho a beneficiarse de la riqueza de la nación; los derechos políticos incluían el derecho económico a los bienes colectivos.

Un comité creado por la JP coordinaba la oposición civil y militar. Planeaba derribar a Pérez Jiménez mediante la combinación de una huelga general y un levantamiento militar. Una vez conseguida la victoria, una junta provisional de tres miembros -encabezada por el jefe de la Armada Wolfgang Larrazábal y completada por dos civiles, el economista Manuel Egaña y el ingeniero Pedro Emilio Herrera- organizaría el cambio de la dictadura por un Estado democrático.

Aunque una huelga general paralizó Caracas el 21 de enero, el levantamiento militar no se materializó. Al día siguiente la insurgencia parecía estar controlada. En la víspera del 22 de enero, Pérez Jiménez se relajó y jugó dominó en el Palacio Presidencial. Manifestó que “el público ha descargado su furia y ahora tiene que retirarse cansado” (Kolb 1974:176). Jugar dominó ese día no era una mera distracción, sino también un síntoma de su incomunicación y aislamiento. Según se afirma, a menudo jugaba dominó en las reuniones sociales para desalentar a quienes querían darle conversación (Bautista Urbaneja 1992:188). Su retraimiento y desdén por la opinión pública resultarían costosos. Bastaron dos llamadas en la noche del 22 de enero para que se produjera el giro

de los acontecimientos. La primera sacó a Pérez Jiménez de su ensueño y lo devolvió a la realidad: el contralmirante Larrazábal, en nombre de los jefes del Estado Mayor de las FFAA, exigía su renuncia. La insurgencia civil se había calmado, pero la militar se le volvía en contra.

Esta inesperada movida debe haberle indicado a Pérez Jiménez la insospechada magnitud de la oposición militar. Larrazábal tenía fama de hombre tranquilo, de conformista más que de conspirador. Aunque era el oficial de mayor rango en la Armada, Pérez Jiménez lo había relegado al cargo menor de jefe del Club de Oficiales, afrenta que había creado descontento en los rangos de la fuerza, pero que Larrazábal parecía haber aceptado con resignación. De hecho, sólo se sumó a la insurrección al no poder persuadir a los oficiales jóvenes de buscar una solución de compromiso.

Con la esperanza de lograr un acuerdo negociado, Pérez Jiménez pidió una entrevista a medianoche con los oficiales insurgentes. Larrazábal se mostró de acuerdo. Mientras Pérez Jiménez se dirigía a su hogar para preparar a su familia ante cualquier eventualidad, los coroneles Casanova y Romero Villate, que habían sofocado el levantamiento del 1º de enero y a quienes se consideraba leales a Pérez Jiménez, permanecieron en el Palacio Presidencial para defender al Gobierno. La segunda llamada telefónica convirtió a los coroneles Casanova y Romero Villate de defensores leales que habían sido el 1º de enero en insurgentes rebeldes. Cuando Larrazábal los instó telefónicamente a unirse a la insurrección, ambos aceptaron, con la condición de que se les incluyera en la nueva junta. Larrazábal aceptó la demanda.

De ahí que cuando Pérez Jiménez regresó al Palacio, Casanova y Romero Villate le informaron que debía abandonar el país de inmediato. Al final, carente de aliados leales, Pérez Jiménez no tuvo otra opción; luchar no era necesario ni posible. A las tres de la madrugada partió en el avión presidencial hacia la República Dominicana, gobernada por su amigo, el dictador Rafael Leónidas Trujillo. En el mismo aparato escapó también un reducido grupo de familiares y amigos cercanos; en la estampida se dejaron accidentalmente sobre la pista una maleta con casi 2 millones de dólares en efectivo y documentos que mostraban ganancias personales en proyectos gubernamentales por una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Una vez más, la resistencia civil desembocaba en una conspiración militar. Sin la insurgencia de los militares la oposición civil no habría podido derribar a Pérez Jiménez. Pero sin la creciente y amplia oposición civil al régimen, los militares no se habrían vuelto contra su líder. La revolución de 1958 no fue ni un golpe militar tradicional ni un levantamiento de masas. Más bien fue, de manera peculiar aunque real, la cristalización del descontento colectivo -de diferentes clases, sectores y bastiones de

poder, incluidos los militares- contra el gobierno cada vez más arbitrario y personal de Pérez Jiménez. Peculiar porque estos grupos no habían participado antes en luchas comunes y no estaban vinculados por intereses sectoriales interdependientes. Real porque, no obstante, se unieron en su oposición a un régimen que no los tomaba en cuenta, y porque, compartían el interés en un Estado que utilizara los recursos fiscales de la nación en su beneficio. A pesar de sus agudas diferencias económicas e ideológicas, estos grupos formaron una comunidad de intereses e ideales sobre la base de una orientación compartida hacia el Estado como fuente principal de bienestar colectivo e individual. Aunque la caída de Pérez Jiménez se produjo debido a la oposición generalizada, rápidamente se interpretó como consecuencia directa de la resistencia popular masiva; esto es, como si el derrocamiento no se hubiera debido a un golpe militar, sino al triunfo colectivo de un pueblo unido, alzado de manera aunada contra el tirano. En esa coyuntura de transición, en la escena pública de la política nacional las diferencias entre grupos sociales -diferencias de intereses, posiciones e ideales- quedaron subsumidas ideológicamente en una identidad común. La representación compartida era que la colectividad unida, el pueblo, había resurgido como sujeto activo de la historia nacional, y que actuaba con una única voluntad para liberarse de la opresión, en lo que constituía la continuidad de una ejemplar tradición heroica iniciada durante las guerras de Independencia. Esta interpretación de la experiencia dotó de nuevo significado al proceso de democratización; pareció marcar una ruptura entre el pasado -la política como maniobras para satisfacer intereses particulares- y el presente: la política como acciones altruistas llevadas a cabo por representantes del Estado en nombre del pueblo. Si los nuevos líderes democráticos concertaban pactos y acuerdos no se trataba de meros pactos, sino de una expresión del espíritu del 23 de Enero, de la concreción de un acuerdo colectivo trascendente. De ahí que la historia del derrocamiento popular de Pérez Jiménez se tornara, desde el mismo momento en que ocurría, en el mito de origen de la democracia.

El espíritu del 23 de Enero

El 23 de enero, mientras los principales periódicos celebraban el derrocamiento de Pérez Jiménez como un triunfo del pueblo, y la JP publicaba un manifiesto que comparaba la lucha popular victoriosa contra la dictadura con las guerras de Independencia del siglo XIX, Wolfgang Larrazábal se dirigió a la nación y planteó de manera llana que las FFAA habían tomado “los poderes públicos del Estado”. Según Larrazábal, tres objetivos habían motivado la acción: salvar “la unidad y el sentido institucional

de los militares”; satisfacer el “clamor unánime” de toda la población; y conducir a la República a “una organización legal y política acorde con la práctica universal de la



Primera plana de *El Nacional* del 23 de enero de 1958 en la que se anuncia el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. (Archivo *El Nacional*.)

democracia y la ley” (*El Nacional*, 24/1/58). Al amanecer del 23 de enero, masas populares tomaron las calles de Caracas para protagonizar una jubilosa celebración por el advenimiento de una nueva vida política. Atacaron a los carceleros en el edificio de la Seguridad Nacional, liberaron a prisioneros políticos y saquearon las casas de los perezjimenistas más odiados (como Pedro Estrada y Luis Vallenilla). Cada nueva victoria se convertía instantáneamente en componente de un drama que se proclamaba acontecimiento histórico trascendente como parte de su representación.

Cuando se hizo público que la Junta Militar de cinco miembros incluía a los coroneles Casanova y Romero Villate, que habían estado íntimamente asociados a Pérez Jiménez, pareció de repente que el golpe democrático, organizado por muchos grupos, era desviado por la derecha militar, o, peor aún, que el drama que el pueblo representaba en las calles como revolución democrática era solamente el telón de fondo de una restauración oligárquica orquestada en la cúpula. A fin de conjurar la amenaza de continuidad del control militar, la JP llamó a realizar manifestaciones públicas y a presionar al nuevo ministro de Defensa, el coronel Castro León (quien había participado en el levantamiento militar del 1º de enero) para que destituyera a los despreciados Casanova y Romero Villate⁵.

Quizás era cierto que, como había afirmado Larrazábal, los “poderes públicos del Estado” estaban en manos de los uniformados, pero los altos líderes militares respondieron a las expresiones políticas de la sociedad. En respuesta a la presión desde arriba y a la movilización de las masas desde abajo, que incluyó confrontaciones violentas y numerosas víctimas⁶, el 25 de enero dos civiles reemplazaron a los dos coroneles. Eran dos líderes del sector privado, Eugenio Mendoza, ex-presidente del Sindicato del Hierro, y Blas Lamberti; ambos estuvieron entre los primeros miembros de la elite económica que habían buscado una alianza de amplia base para derrocar la dictadura. Resulta irónico que la participación directa de la burguesía en la Junta se haya representado públicamente como un triunfo de la presión popular, como otra confirmación de que aquella encamaba la voluntad excluyente de la nación, el pueblo unificado. De nuevo el pueblo parecía haber ejercido su poder. Probablemente en ninguna otra coyuntura en este siglo tantos venezolanos se hayan visto unidos por la fuerza de los

⁵ Los miembros de la junta Militar eran el contraalmirante Wolfgang Larazábal y los coroneles Roberto Casanova, Abel Romero Villate, Pedro José Numa Quevedo y Carlos Luis Araque.

⁶ Resulta difícil determinar con exactitud el número de víctimas durante los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar el 23 de enero. Si bien el gobierno declaró que se habían producido los 23 bajas un periódico informó que habían muertos 300 personas y que 1.000 habían resultado heridas en confrontaciones con la policía y la seguridad nacional (*El Nacional*, 24 / 1 / 58).

acontecimientos históricos y hayan experimentado, por más ilusoriamente que fuera, un sentimiento de comunidad nacional. Este sentimiento del poder transformador de la unidad colectiva cristalizó finalmente en la expresión “el espíritu del 23 de Enero”, constantemente invocada durante los días difíciles de construcción institucional, cuando las contradicciones veladas por este ideal amenazaban con desgarrar el frágil tejido de una democracia en construcción.

La democracia

Al igual que muchos de los que habían apoyado a Pérez Jiménez, Mendoza ahora enarbolaba la bandera de la democracia. Laureano Vallenilla recordaba que en 1952, después del golpe de Pérez Jiménez, su amigo de infancia, Eugenio Mendoza, le había dicho: “La situación es magnífica... ¡Sigán así, hermano!” (Vallenilla 1978: 376). De ahí que sea con amarga ironía que Vallenilla termine sus memorias haciendo referencia a un telegrama de Mendoza con motivo de Año Nuevo que encontrara en un bolsillo al iniciar su exilio en Francia, en el mismo momento en que aquél surgía como representante de una burguesía que de repente había descubierto su vocación democrática. Allí deseaba a Vallenilla y su esposa “todo género de dicha para 1958” (1978: 478).

Pero esta coyuntura política no solo era una severa prueba para las instituciones democráticas, sino también para los actores políticos. Individuos e instituciones no aparecían en el escenario político con identidades fijas, sino que oscilaban al compás de los acontecimientos en los que participaban. Sus transformaciones, incluidos los desplazamientos de lealtades, se aceptaban no solo como hechos sino como condición necesaria para la construcción de la democracia. Tan solo quienes habían estado íntimamente ligados al aparato represivo del régimen o habían hecho ostentación de su poder eran condenados al ostracismo. Después de 1948 algunos miembros prominentes de la burguesía local se habían declarado enemigos del sistema partidocrático y habían depositado su confianza en los militares como si ellos fueran su propio partido: el “partido de la burguesía”, como denominara Poulantzas en cierta ocasión a los militares (1978). En 1957, cuando se hizo evidente que para Pérez Jiménez no había más partido que él mismo, llegaron a aceptar un sistema en cuyo seno pudieran operar y del cual, quizás, pudieran apropiarse.

El reto que enfrentaba la oposición democrática a Pérez Jiménez era convertir un descontento generalizado en un apoyo a la democracia, dada la existencia de una memoria colectiva del trienio sectario de AD. La solución a este dilema consistió en orquestar en la cúpula una coalición de partidos

y grupos de interés en torno de un programa populista de centro. Betancourt se había venido preparando para la estrategia. En 1956 había propuesto a los líderes de AD en el exilio que el partido cooperara más íntimamente con el sector privado y con los partidos “democráticos”, esto es, Copei y la URD. La propuesta produjo un distanciamiento de los líderes intermedios de AD, muchos de ellos más jóvenes y más cercanos ideológicamente al socialismo, que habían colaborado con el PC en la resistencia y habían fundado la JP. A pesar de la oposición, por la insistencia de Betancourt el PC fue excluido de la naciente alianza.

La exclusión se justificó con el argumento de que era un partido cuyo fin consistía en la implantación de una dictadura (la del proletariado), lo que no se avenía con la construcción de la democracia. De esta forma los partidos democráticos podían presentarse ante el sector privado y el gobierno de EEUU como fuerzas moderadas. De ahí que la exclusión del PC se describiera como una acción encaminada a preservar la unidad nacional, y no a fracturarla. Aunque el PC quedó formalmente excluido, durante 1958 fue un sostén importante de la Junta de Gobierno y de los esfuerzos de la nueva alianza dirigidos a garantizar el apoyo unificado a la transición a la democracia. En su asamblea nacional de 1958, el PC ratificó este apoyo al comprometerse a “dar todo cuanto sea capaz, a hacer todos los sacrificios, para conservar esa unidad” (Plaza 1978). Aunque se autodefinía como leninista, el PC no seguía los principios enunciados por Lenin en las tesis de abril de 1917, cuando plantea que la lucha por el socialismo no tiene que esperar por la consolidación del poder burgués. El PC venezolano, muy influido por el browderismo (cuyo origen era el PC de EEUU), aceptaba una concepción etapista según la cual el socialismo en los países atrasados solo sobrevendría después de la consolidación del capitalismo, idea más cercana a los mencheviques que a Lenin. Del mismo modo que la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra el fascismo en las naciones capitalistas avanzadas había alentado una política de alianza de todas las fuerzas democráticas, la lucha contra Pérez Jiménez había conducido al PC venezolano a definir la política posterior a 1958 en términos de un conflicto entre la amenaza de una dictadura militar y la consolidación de la democracia⁷. Mediante pactos y acuerdos los principales representantes de los partidos democráticos trataron de evitar lo que sus líderes consideraban los dos mayores peligros que enfrentaba la democracia: el retorno de un gobierno militar, posibilidad que muchos consideraban el “camino homicida”, y la vuelta de una política

⁷ En fecha tan temprana como 1959 el PC hizo una crítica de las posiciones que había sostenido en 1958. El análisis pionero de Plaza sobre la posición del PC en 1958 y sobre su decisión de incorporarse a la lucha armada durante el gobierno de Betancourt (1959-1964) sigue siendo una fuente esencial para el estudio de este polémico tópico (1978). La obra de Ellner es el recuento más detallado de la influencia del browderismo en el PC venezolano (1980).

partidaria sectaria, que Betancourt bautizó el “camino suicida”. Decidieron unir esfuerzos para garantizar una transición armoniosa a un régimen democrático por medio de una contienda electoral libre, pero en la que no hubiera perdedores absolutos. Se acordó que todos los partidos (excepto el PC) tendrían una porción de poder y de sus responsabilidades y beneficios, a despecho del candidato que ganara. El sector privado tendría una participación significativa en el Gobierno y una voz importante en el diseño de su política. AD, el partido con mayores posibilidades de triunfar, era, al mismo tiempo, el más interesado en que se cumpliera el acuerdo. Entendía que para obtener y mantener el poder tenía que compartir sus despojos.

Los más altos líderes militares se sumaron a estas decisiones. Inmersos en ese movimiento colectivo y arrastrados por su ímpetu, trataban de restablecer el papel de la institución militar como guardiana de la Constitución y defensora de la soberanía. Aunque se culpaba a los militares de buena parte de lo sucedido y aun si su imagen había sufrido durante la dictadura, sentían que Pérez Jiménez los había privado del papel que por derecho les correspondía. Larrazábal creía que Pérez Jiménez había gobernado en soledad. “Pensábamos que no gobernaba en nombre de las FFAA, porque no estaba rodeado de militares” (Blanco 1980: 190).

Los pactos y el espíritu de la democracia

El espíritu del 23 de Enero adoptó forma tangible en varios pactos y acuerdos. El 24 de abril de 1958 todos los partidos políticos (incluido el PC) firmaron el Avenimiento Obrero Patronal. Este acuerdo subordinaba las demandas de los trabajadores a la necesidad de crear el clima de estabilidad considerado necesario para la consolidación de la democracia, y establecía que la negociación colectiva era el único mecanismo permitido para que los trabajadores ejercieran presión sobre la patronal. Como era previsible, al establecer un límite a las demandas laborales, este acuerdo hizo que los trabajadores pagaran el precio de la estabilidad política (López y Werz 1988: 11-14). A pesar del carácter desmovilizador del pacto, los líderes comunistas lo asumieron, porque querían preservar la unidad organizativa del movimiento de los trabajadores (el comité sindical unificado), que AD y Copei habían amenazado con quebrantar (Croes 1973:175).

Dos analistas venezolanos han comentado que “ello subraya la alta prioridad concedida a la estabilidad política como objetivo común de todos los partidos” y la “falta de coherencia o de claridad estratégica y táctica de las elites de ese partido [el PC]” (López-Maya y Gómez Calcagno 1985:80).

Pero fuera o no el pacto producto de la incoherencia o de la ceguera política, los dos aspectos de la política que trazaba -la prioridad concedida al apoyo a la democracia y la disposición de poner límites a las demandas de los trabajadores- tenían sus raíces en creencias tácitas acerca de la sociedad venezolana: la idea de que el petróleo era la fuente fundamental de riqueza, y la seguridad de que a los trabajadores les iría mejor si apoyaban un régimen que redistribuiría las rentas petroleras que si exigían salarios más altos, con lo que se corría el riesgo de desestabilizar la naciente democracia.

Más relevante quizás resultó un segundo pacto, porque coordinaba las relaciones de los partidos en torno de un programa común. El pacto se firmó después del fracaso de las negociaciones, apoyadas fundamentalmente por la JP, encaminadas a seleccionar un candidato de unidad nacional para las elecciones de 1958. Según los términos del Pacto de Punto Fijo, firmado por AD, la URD y Copei el 31 de octubre de 1958, los partidos se comprometían a respetar los resultados de las elecciones y a formar un gobierno de coalición cuyo programa se redactaría previamente y sería aceptado por los contendientes. Poco antes de la contienda electoral, en diciembre de 1958, los candidatos firmaron el esbozo del Programa Mínimo de Gobierno y una Declaración de Principios⁸.

En esencia, este pacto definía un proyecto de desarrollo capitalista, auspiciado por el Estado democrático reformista con la activa participación del capital nacional y extranjero. Mediante este y otros acuerdos formales e informales, a la Iglesia y a los militares se les otorgaron amplias garantías de que sus papeles en la sociedad serían objeto de respeto y apoyo; AD se comprometía así a no repetir su intento de ejercer control sobre las instituciones educativas administradas por la Iglesia católica. Se ha considerado que este acuerdo es emblemático de las formas de solidaridad que se desarrollaron durante la lucha contra Pérez Jiménez. Levine apunta, con precisión, que el espíritu del 23 de Enero “adoptó forma concreta” en el Pacto de Punto Fijo (1973: 43).

Como era de esperarse, Betancourt ganó las elecciones de diciembre de 1958 por un margen relativamente amplio. Obtuvo 1.284.042 votos, seguido por Larrazábal (con el apoyo de la URD y el PC), cuyos 903.479 votos reflejaban no solo la fuerza de esos partidos sino su propia popularidad como líder de la rebelión contra Pérez Jiménez. En tercer lugar quedó Rafael Caldera, de Copei, con 423.262 votos. Una vez en el poder, Betancourt mantuvo los acuerdos preelectorales y formó un gobierno de coalición en el que estaban representados los partidos reformistas y el sector privado, con lo que se dio inicio a un periodo ininterrumpido de gobiernos democráticos que, con algunas

⁸ Desde la década de 1930, Betancourt, influido por la socialdemocracia europea, había propuesto la redacción de un programa mínimo, a contrapelo de las posiciones más anticapitalistas de la izquierda radical (Sosa y Lengrand 1981).

modificaciones en los acuerdos originales, duró hasta el inicio del gobierno de Hugo Chávez (1999).

La democracia: *constructos* teóricos y realidades históricas

La mayoría de los analistas ha atribuido un papel crucial a la política en la conquista y consolidación de la democracia en Venezuela. Según el punto de vista predominante, la democracia local es un subproducto de un estilo político particular caracterizado por eludir el conflicto y buscar el consenso en torno de cuestiones de procedimiento y no de temas sustanciales. Si bien esta mirada puede incluir el reconocimiento de que la riqueza derivada del petróleo en un país pequeño sin profundas divisiones étnicas y con un estrato alto relativamente reducido y homogéneo, creó condiciones favorables a la democracia, subraya el hecho de que ella es únicamente resultado de las habilidades políticas de los líderes venezolanos⁹.

De ahí que se trate a la política como una actividad de las elites que refleja las habilidades para negociar, la flexibilidad y, sobre todo, la capacidad de aprendizaje de la dirigencia, en su mayor parte políticos y empresarios, aunque también militares, eclesiásticos y representantes de otros intereses fundamentales, incluidos los de los trabajadores. Se considera particularmente receptivos a las lecciones del pasado reciente a los líderes de un país carente de tradiciones democráticas y desgarrado por una historia violenta. De la misma forma que el trienio de AD les enseñó a evitar la política partidaria sectaria, la dictadura les advirtió sobre los peligros de un gobierno militar personalista. Los representantes de los sectores fundamentales aprendieron a evitar los temas conflictivos, a excluir del debate político ciertas cuestiones básicas, a conciliar las diferencias y a abandonar los programas ideológicos problemáticos a favor de acuerdos factibles en torno de reformas paulatinas. Es como si un *ethos* armonizador animara a los actores políticos venezolanos.

Si bien, para explicar la construcción de la democracia venezolana, se invoca la política entendida como un estilo y un conjunto de habilidades, la política propiamente dicha no se explica a no ser de manera tautológica. En lugar de elucidar el espíritu o las habilidades e inusual capacidad de aprendizaje de los actores, se usan sus habilidades personales o sus facultades cultivadas para explicar las acciones. Es innegable que los políticos venezolanos aprendieron las lecciones de experiencias

⁹ Este punto de vista está especialmente presente en las obras influidas por la concepción de la política centrada en los actores, p. e., Levine (1973) y Alexander (1964); pero también aparece en las interpretaciones más estructurales de Stambouli (1980), Blank (1973), Karl (1982), López- Maya y Gómez Calcagno (1985) y Urbaneja (1995). En las interpretaciones de Plaza (1978) y Hellinger (1985) se adjudica a la habilidad política de las elites el poner en movimiento las estructuras conformadas por la economía petrolera. Para una reseña de las interpretaciones sobre la democracia venezolana, v. Abente (1987).

pasadas y lograron establecer compromisos significativos. Pero es necesario explicar este aprendizaje. Lo más típico ha sido describir un segundo paso en el que los actores democráticos ponen en movimiento un proceso cuya dinámica básica se explica echando mano a esquemas teóricos diseñados originalmente para dar cuenta de la experiencia histórica de las naciones metropolitanas. De ahí que la diversificación de la producción industrial y el crecimiento de la clase media se consideren procesos que generan intrínsecamente oposición al autoritarismo y apoyo a la democracia. Como esta interpretación coincide con la de los principales ideólogos nacionales, la teoría social y la ideología local se dan la mano en la representación del giro democrático como resultado del crecimiento de una joven nación capitalista que ha madurado hasta el punto de rebelarse contra un gobierno dictatorial.

Por ejemplo, una interpretación muy a menudo citada describe el giro a la democracia en 1958 como resultado de una combinación de factores “estructurales” -la “maduración” de las “condiciones” como consecuencia de la industrialización- y de la voluntad humana o “capacidad de los estadistas” -la orquestación de un compromiso mediante el cual la burguesía, en una “clásica transacción del 'derecho a gobernar por el derecho a hacer dinero', apoyó el establecimiento de un sistema democrático de partidos (Karl 1982:10-20). Esta explicación conjuga dos ilusiones. La primera es la quimera de la ideología de la modernización como teoría de la historia, lo que O'Donnell ha llamado la “fórmula optimista: más desarrollo económico [equivale a] mayor probabilidad de democracia política” (O'Donnell 1973)¹⁰. Si bien es cierto que Pérez Jiménez alienó a importantes grupos del sector privado, no está claro si esta relación conflictiva era estructural e inevitable o contingente y superable. El desarrollo capitalista es inherentemente conflictivo, pero ha tenido lugar bajo formas democráticas y dictatoriales. El crecimiento de la industria capitalista bajo las dictaduras militares de Brasil, Argentina y Chile durante los años 60 y 70 demuestra que es posible que en América Latina se produzca una expansión de la industrialización bajo regímenes dictatoriales. La crisis de estos regímenes autoritarios no puede reducirse a un conflicto inherente entre la industrialización capitalista y la dictadura. Incluso si se pudiera demostrar que la democracia es la mejor envoltura política del capitalismo, la transición a la democracia en Venezuela no podría deducirse de este principio general, sino que habría que tomar en cuenta la formación histórica distintiva del Estado y la sociedad venezolanos en esa particular coyuntura.

¹⁰ Una formulación clásica de la fórmula optimista de la modernización puede encontrarse en Lipset (1960). Therborn ofrece una sólida reseña del giro hacia formas institucionales democráticas en Europa y América (1977; 1979). Para un análisis detallado de la relación entre desarrollo y democracia en Europa y la América Latina basado sobre el desarrollo del modelo de Barrington Moore, v. Stephens (1987) y Rueschemeyer et al. (1988).

La segunda ilusión conjura una vez más el espíritu del bonapartismo, “la transacción clásica”, como analogía para explicar el papel de la habilidad del estadista en la concertación de alianzas y pactos que desembocaron en la democracia venezolana. Se asume que, como en Francia en el siglo XIX, en Venezuela en 1958 la burguesía cambió el derecho a gobernar por el derecho a hacer dinero. Comprender el origen y el uso del bonapartismo como constructo teórico puede ayudarnos a apreciar su alcance y sus limitaciones cuando se aplica a la poco clásica relación entre el Estado y la sociedad en Venezuela¹¹.

Bonapartismo clásico y bonapartismo rentista

El concepto de bonapartismo fue enunciado por primera vez por Marx para explicar el surgimiento del gobierno imperial de Luis Bonaparte. Se refiere a una situación de empate entre clases donde la burguesía, incapaz de conducir el país por medio de sus propios representantes, cambia el derecho a gobernar por el de hacer dinero. Desde entonces, el concepto de bonapartismo se ha ampliado no solo para explicar los regímenes autoritarios en general, sino también para definir un fenómeno general que refleja la “autonomía relativa” de todos los Estados capitalistas¹². De ahí que Poulantzas argumente que el concepto marxiano de bonapartismo no debe aplicarse sólo a una “forma concreta de Estado capitalista”. Más bien debe considerársele “una característica constitutiva del tipo mismo de Estado capitalista” (1973: 258).

Esta ampliación del bonapartismo disuelve su especificidad histórica original, pero al mismo tiempo evidencia que tanto su uso específico como general presuponen la existencia de un tipo universal de relación entre Estado y sociedad, que se distingue por una clara separación entre la esfera política y el dominio de las actividades generadoras de ganancias. Del análisis de Poulantzas queda claro que cuando habla del “tipo mismo de Estado capitalista” no tiene en mente todas sus formas, sino el Estado de sociedades en las cuales el “predominio” del modo de producción capitalista -entendido también como un tipo homogéneo- “ya se ha consolidado”. Como él mismo apunta, “nos ocupamos aquí de una forma política perteneciente a la fase de la reproducción ampliada” (1973:260). Poulantzas trata de establecer la forma general de la relación entre el Estado capitalista y la sociedad

¹¹ Karl utiliza la fórmula de la “transacción clásica” para explicar la democracia venezolana, pero a diferencia de otros analistas, que le prestan poca atención a los efectos políticos y sociales de la industria del petróleo en Venezuela, este autor le atribuye un significado fundamental al dinero proveniente del petróleo en la creación de un sistema -que analiza- de alianzas y compromisos.

¹² Schmitter ha planteado que los regímenes militares latinoamericanos pudieran considerarse formas de “bonapartismo” mediante las cuales una burguesía incapaz de imponer su hegemonía sobre la sociedad “cambia su ‘derecho a gobernar’ por su ‘derecho a hacer dinero’” (1973:187).

capitalista, entendiéndolos a ambos como tipos universales.

No obstante, creo que Venezuela, como muchas otras sociedades, no cabe en el concepto restringido ni en el ampliado de bonapartismo. Una revisión del carácter rentista del Estado venezolano indica que el empleo del modelo bonapartista para explicar la democracia local ejemplifica la recurrente falta de reconocimiento teórico de una historia distintiva. También revela los límites de los esquemas teóricos ostensiblemente universales, formulados sobre la base de experiencias históricas específicas. Resulta irónico que Marx, cuyo 18 Brumario ha servido de cimiento al constructo bonapartista, alertara en ese mismo libro contra el uso descontextualizado de categorías teóricas. Su obra critica de manera directa el mal empleo de analogías históricas, en particular la del “cesarismo”. Esta categoría, de moda entonces en Francia, atribuía a individuos aislados (en este caso Luis Napoleón) un efecto determinante sobre la historia¹³. “Finalmente -subrayó Marx- confío en que mi obra contribuirá a eliminar ese tópico del llamado cesarismo, tan corriente, sobre todo actualmente, en Alemania” (1981: 7-8). Proporciona razones persuasivas contra la transposición del concepto de cesarismo de Roma a Francia:

En esta superficial analogía histórica se olvida lo principal: en la antigua Roma, la lucha de clases solo se ventilaba entre una minoría privilegiada, entre los libres ricos y los libres pobres, mientras la gran masa productiva de la población, los esclavos, formaban un pedestal puramente pasivo para aquellos luchadores. Se olvida la importante sentencia de Sismondi: el proletariado romano vivía a costa de la sociedad, mientras que la moderna sociedad vive a costa del proletariado. La diferencia de las condiciones materiales, económicas, de la lucha de clases antigua y moderna es tan radical, que sus criaturas políticas respectivas no pueden tener más semejanza las unas con las otras que el arzobispo de Canterbury y el pontífice Samuel (1981: 247-248).

Una objeción similar puede hacerse al traslado del bonapartismo de Francia a Venezuela. Considerar la organización de un régimen democrático después de 1958 como un caso de bonapartismo también olvida el punto principal: que en Venezuela la lucha de clases se centraba en el Estado, y que su núcleo primario no era la apropiación de plusvalía producida nacionalmente sino la captación de rentas petroleras; que en la defensa de sus intereses las clases no intentaban tanto usar al Estado unas contra otras a fin de obtener ingresos (aunque, por supuesto, también lo intentaban), sino usar a

¹³ En el tercer capítulo de este libro señalé que varios autores han empleado el concepto de bonapartismo para explicar los acontecimientos en Venezuela. Es probable que Laureano Vallenilla Lanz (autor de *Cesarismo democrático*), quien recibió una educación europea, haya sido influido por la perspectiva que Marx criticaba. Juan Bautista Fuenmayor, el líder comunista e historiador que convirtió esa analogía en una ley, recibió la influencia directa de Marx (y quizás de Gramsci). En el caso de Karl, su uso del concepto se relaciona con la obra de Schmitter y tal vez la de Poulantzas.

cada una para obtener acceso al Estado en tanto fuente primaria de riqueza. Los pactos elaborados después de 1958, que entrelazaban al trabajo, el capital y los partidos políticos, en tanto cristalización del espíritu del 23 de Enero, expresaban este interés común en la fuente fundamental de riqueza de la nación.

En la etapa de conformación del petroestado, el derecho a gobernar y a hacer dinero se trenzaron íntimamente. El compromiso político orquestado abarcó a clases y grupos sociales cuyas relaciones recíprocas estaban condicionadas por su dependencia fundamental del Estado, y era, por tanto, un tipo diferente de compromiso. Parafraseando a Sismondi, se podría plantear que en un compromiso bonapartista el Estado vive a expensas de la sociedad, mientras que en un “compromiso rentista”, la sociedad vive a expensas del Estado.

Si se considerara el bonapartismo *a la* Poulantzas como “una característica teórica constitutiva del tipo mismo de Estado capitalista”, incluidos los Estados de las naciones periféricas, los cuales generalmente se excluyen de los análisis del Estado capitalista, habría que plantear la existencia de “subtipos” de Estados capitalistas y ubicarlos en un espectro cuyos extremos estarían constituidos por lo que pudiéramos llamar “bonapartismo clásico” y “bonapartismo rentista”. El primero expresaría las relaciones de una sociedad capitalista estructurada en torno de la extracción y distribución de plusvalía local, el segundo, las de una sociedad capitalista organizada en torno de la apropiación y distribución de la renta del suelo¹⁴.

Del 18 Brumario al 23 de Enero

A la luz de estas consideraciones es posible entender mejor el golpe contra Pérez Jiménez y la transición a la democracia. Las medidas económicas adoptadas por la dictadura transformaron la economía de manera no planificada y alteraron las demandas políticas de varios grupos sociales. A

¹⁴ Como en cualquier tipología, esta distinción llama la atención sobre las diferencias distintivas y difumina las similitudes que se dan en cualquier situación histórica concreta. Quizás un estudio cuidadoso de lo que se considera el compromiso “clásico” revelaría la significación de la renta del suelo en su formación. A este respecto resulta importante recordar que, según el recuento de Marx, en 1851 las clases vinculadas a diversas fracciones del capital, la tierra y el trabajo habían llegado a un empate en Francia, y que Luis Napoleón arribó al poder con el apoyo del campesinado. En este compromiso clásico la burguesía cambia su derecho a gobernar por su derecho a hacer dinero. Pero la burguesía no es la única clase preocupada por hacer dinero, y las ganancias no son la única forma de ingreso. En el caso francés, el derecho a hacer dinero no solo incluía la distribución de plusvalía entre diversas fracciones del capital y el trabajo, sino también la de las rentas entre el campesinado y otras clases poseedoras de la tierra. De ahí que la renta del suelo también desempeñó un papel en Francia y, por tanto, en la formación del compromiso bonapartista clásico. Lo que distingue al caso venezolano es el papel central del Estado como único propietario nacional de la tierra y como canal fundamental para la distribución de la renta del suelo. En Francia, los capitalistas no eran propietarios de la tierra sino los principales contendientes por el poder político, y el volumen total de la renta del suelo no estaba centralizado, sino distribuido entre múltiples campesinos atomizados dispersos en los campos. No obstante, en última instancia, se convirtieron en la fuente del poder de Luis Napoleón.

pesar de la orientación mercantilista del régimen, sus acciones estimularon el crecimiento de la industria y la agricultura capitalista y atrajeron el capital industrial foráneo, antes limitado al enclave petrolero, hacia el centro mismo de la economía. Estos cambios acelerados se debieron en buena parte a que la clase de los propietarios latifundistas y la ideología oligárquica asociada a ella ya habían sido desmanteladas, con lo que resultó posible que la naciente elite modernizadora política y empresarial y la ideología reformista de desarrollo del trienio delimitaran el terreno en el cual el régimen militar podía definirse y legitimarse.

Si bien la dictadura se desenvolvía en el marco de un crecimiento económico financiado por las rentas, intentó despolitizar el ascendente modelo reformista de desarrollo; trató de construir el edificio físico de la modernidad en un paisaje social apacible. Al mismo tiempo, favoreció la expansión de los intereses de las clases propietarias pero limitó su creciente poder. Este proceso trajo consigo, inevitablemente, un incremento de las tensiones en el seno de una dinámica de crecimiento basada en las rentas, de la cual el Estado era el agente central y el núcleo de la actividad económica. La tendencia a que la distribución de las rentas provenientes del petróleo se concentrara en el poder del Estado se vio cada vez más contrarrestada por la diversificación de la economía y las clases sociales. Además, y de manera relacionada, el otrora extremo predominio económico de las actividades financieras y comerciales basadas en las importaciones, estimuladas por el enclave petrolero y la distribución estatal del ingreso, tuvo que enfrentar el reto de las demandas concurrentes de la producción capitalista dirigida al mercado local, así como del intento de los capitalistas privados de influir en las decisiones relativas al desarrollo de las industrias básicas. El movimiento que derribó a Pérez Jiménez no se planteó estas cuestiones. Se subsumieron en los reclamos de libertad, democracia y derechos humanos que atravesaron las líneas de fractura entre las clases. No obstante, contribuyeron a que se produjera el desplazamiento de las fuerzas políticas y a que surgiera con rapidez un sentimiento colectivo de oposición al régimen militar, que finalmente cuajó en las postrimerías de dicho régimen. Esos conflictos eran referentes implícitos en las nuevas definiciones de objetivos políticos y económicos que formularían las elites que desempeñaron un papel principal en la oposición a Pérez Jiménez.

Tras el levantamiento militar del 1^o de enero de 1958, el quiebre del dogma de la unidad de las FFAA prendió la chispa de una oposición creciente, pero no fue esta falta de unidad la que condujo a la caída de Pérez Jiménez. El dictador había erosionado su propio régimen no solo al clausurar los canales de comunicación política y al tratar de silenciar en 1957 la voz del mercado, sino también al

debilitar a los militares, que eran su fuente de apoyo fundamental. Pérez Jiménez transformó la autónoma y secreta Seguridad Nacional en un instrumento para vigilar a los militares y en una agencia que controlaba el uso de la fuerza. Al hacerlo, le volvió la espalda a una cada vez más profesionalizada institución militar -profesionalización a favor de la cual se había manifestado- y se alió a una fuerza personal -que recordaba a la de los caudillos- encabezada por un civil, Pedro Estrada. Cuando en enero de 1958 los militares exigieron que Pérez Jiménez les devolviera el poder, el dictador no tuvo otro recurso que decapitar la Seguridad Nacional, la agencia que había usurpado ese poder. Al fiarse en lo relativo al uso de la fuerza pública de una institución policial privatizada, Pérez Jiménez perdió el apoyo de los militares, los representantes institucionales legítimos de la fuerza pública.

Pérez Jiménez quedó solo únicamente cuando se hicieron visibles las señales de su debilidad, lo que produjo una devaluación en picada de su credibilidad política. Presas del pánico, muchos seguidores le retiraron su lealtad para transferirla a otros, o abandonaron el país en las primeras tres semanas de enero. De repente, viejos incondicionales del régimen, tanto militares como del sector privado, se convirtieron en campeones de la democracia. La rápida caída del dictador, a la que no opuso resistencia ningún grupo o sector, reveló la volatilidad de actores políticos cuyos poderes eran en buena medida prestados, que no habitaban un mundo construido por ellos mismos, sino en gran parte fabricado por los poderes extraordinarios del Estado.

Desde el primer gabinete, instalado el 24 de enero, los líderes del sector privado ocuparon posiciones clave en el nuevo gobierno. Arturo Sosa, muy cercano a los Vollmer, fue nombrado ministro de Hacienda; Oscar Machado Zuloaga ministro de Comunicaciones; el teniente coronel Rafael Alfonso Ravard, presidente de la Corporación Venezolana de Desarrollo. Tras el reemplazo de los dos oficiales perezjimenistas por dos acaudalados líderes del mundo de los negocios, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, representantes de una burguesía en expansión, la Junta se tornó la expresión del matrimonio entre el derecho a gobernar y el derecho a hacer dinero que Pérez Jiménez había disuelto al concentrar en sí ambas funciones¹⁵.

La alianza entre militares, sector empresarial y partidos políticos predominantes tuvo como base el acuerdo de que el ganador electoral no monopolizaría el poder político. AD, el más popular, fue un insistente promotor de la idea de que el partido gobernante debía compartir el poder con las demás organizaciones centristas, y concederle a la burguesía una voz significativa en las decisiones y

¹⁵ Mendoza y Lamberti renunciaron el 18 de mayo de 1958. La defensa de sus intereses, que no necesitaba del alto perfil de su presencia personal en la Junta, estaba garantizada a través de la influencia de líderes del sector privado en ministerios clave.

participación en el aparato del Estado. Se entendía de manera implícita que se produciría una amplia distribución de la riqueza pública y del poder del Estado, y no su concentración en un individuo o grupo.

Los pactos firmados por los partidos deben ubicarse como formulaciones ideológicas en el más amplio mundo cultural y social del cual derivaba su significación y eficacia. En la medida en que el desarrollo petrolero ayudaba a reconfigurar una red de relaciones sociales sostenida por el dinero proveniente de la actividad, el Estado se convirtió en el centro de luchas políticas por su carácter de guardián de dicha riqueza. Cada vez más se dieron por sentadas la centralidad práctica del Estado y la significación fundacional de las concepciones que le servían de premisas, relativas a la naturaleza de Venezuela como nación petrolera, y tanto el carácter colectivo de la riqueza proveniente del petróleo, como los derechos de los ciudadanos a beneficiarse de ella. Adam Przeworski ha planteado que los pactos solo aparecen en la agenda política cuando están ausentes o amenazadas las condiciones para un compromiso de clases democrático y espontáneo (1991). Lo que todas las naciones capitalistas avanzadas democráticas tienen en común, parece plantear, no es la existencia de pactos, sino el capitalismo avanzado mismo, además de condiciones electorales e institucionales que generan “un compromiso espontáneo que apoya la coexistencia del capitalismo y la democracia” (1987: 3). Sin estas condiciones, la democracia no puede surgir de manera espontánea. Pero lo que parece “espontáneo” en una sociedad específica -lo que las personas sienten como “segunda naturaleza”, lo que Bourdieu llama “habitus”- en realidad es experiencia histórica sedimentada. El planteo de Przeworski presupone un modelo de sociedad donde capitalistas y trabajadores generan la riqueza que se distribuye entre ellos, y donde ambas cosas suceden en los marcos de la nación. El caso venezolano no exhibe el desarrollo histórico de la “espontaneidad” de mercado clásica, sino una segunda naturaleza diferente: el reconocimiento “espontáneo” de la necesidad de controlar la intervención estatal como resultado de la formación de una sociedad capitalista cuya fuente fundamental de riqueza monetaria no es la producción local de plusvalía, sino la captación internacional de renta del suelo. En lugar de entender este caso como una anomalía, lo que es necesario analizar en ambos es la naturaleza histórica de un comportamiento político aparentemente espontáneo.

Si bien los conflictos se centraron en el papel y la forma de instituciones específicas-el aparato del Estado, los partidos políticos, las asociaciones de intereses privado y los sindicatos- los entendidos fundamentales relativos a su carácter de factores de una nación petrolera se tornaron segunda

naturaleza. Ello supuso una red de entendidos y orientaciones que constituía el contexto condicionante en cuyo seno adquirió su forma definitiva la democracia venezolana. El espíritu del 23 de Enero era una expresión de estos implícitos. Ese espíritu adoptó forma concreta en los pactos, que contribuyeron a dotar de forma institucional la democracia venezolana y a consolidar como datos naturales las creencias que la sostenían.

Por otra parte, lo que estos pactos daban por sentado -las premisas culturales asumidas que Durkheim definió como los cimientos no contractuales de los contratos- resultaban tan significativos como lo que regulaban explícitamente. Su premisa fundamental era que la mayor posibilidad de fomento del bienestar individual y colectivo residía en la ampliación de la economía petrolera y la distribución de los ingresos provenientes del petróleo por parte de un Estado democrático. De ahí que se construyeran en torno del acuerdo de respetar las relaciones políticas y económicas básicas que sostenían el enclave petrolero y que, a su vez, eran sostenidas por él. La orquestación explícita de alianzas y la formulación de un proyecto político y económico común presuponía un acuerdo implícito de mantener el papel internacional de Venezuela como gran productor de petróleo atado económica y políticamente a la estrategia geopolítica de EEUU en el hemisferio. Esta orquestación también daba por sentado un compromiso de contener a las clases baja y trabajadora en los marcos de un sistema centralizado de reformas y beneficios limitados. Las nuevas instituciones políticas se construirían sobre la base de las relaciones de poder existentes, no contra ellas; EEUU era un participante crucial, aunque invisible, de estos manejos. La exclusión del PC de los pactos resultó emblemática de este entendido fundamental, ya que no significaba meramente la exclusión de un grupo político específico que había desempeñado un papel clave en la resistencia contra Pérez Jiménez, sino la de una tendencia de izquierda que gozaba de amplio prestigio en las filas de los propios partidos reformistas, en especial de AD y la URD. Esta tendencia pronto se radicalizó debido a la influencia de la Revolución cubana, en particular luego de su adscripción al socialismo en 1961, y por la cada vez más visible orientación centrista de Betancourt en los asuntos políticos nacionales e internacionales.

En un contexto polarizado por la radicalización de la Revolución cubana, la cual se convirtió en un modelo atractivo para grandes sectores juveniles de los partidos fundamentales (excepto Copei), los pactos ya no pudieron contener a las fuerzas enfrentadas. La URD fue el primer partido en abandonar el gobierno de coalición, como gesto de protesta contra los intentos de Betancourt de imponer sanciones hemisféricas contra Cuba en la reunión de la OEA celebrada en Costa Rica. Después AD sufrió una primera división, cuando el 8 de abril de 1960 la mayoría de sus líderes jóvenes y de la

juventud de AD (quienes en 1958 habían intentado designar a un candidato de “unidad nacional” que no proviniera de ninguno de los partidos y que posteriormente se habían tornado críticos de las políticas sociales de Betancourt), fundaron el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y se unieron a sectores del PC en la lucha armada en pro del socialismo. Consideraban que Betancourt había transformado al partido “del pueblo” en el partido de la burguesía¹⁶.

El pacto fundamental era, por tanto, el acuerdo de hacer pactos. Este acuerdo subyacente conllevaba un compromiso de evitar el conflicto político y el cambio estructural. En consecuencia, los pactos sirvieron para controlar la transformación de las identidades políticas durante un periodo de transición; intentaban reformar, pero también preservar, la estructura existente de relaciones económicas y sociales. Los pactos no se referían solo a qué hacer, sino también a quién ser¹⁷. La Venezuela posterior a 1958 no resultó ser un lugar para revolucionarios, sino para reformistas moderados.

Dramas neocoloniales

Resulta de algún modo apropiado que lo que Vallenilla denominó “la vitrina soleada” se convirtiera varias veces en un escenario para representar la clásica toma del poder bonapartista en 1851, sea como mascarada dramática (Vallenilla 1967) o como constructo científico (Fuenmayor 1982; Karl 1982). Mientras que los trajes de la farsa, que mal se ajustan a los cuerpos de los actores históricos, iluminan sus ilusiones, los atuendos procústeos de la ciencia, al hacer creer que dichos trajes les quedan bien, fijan con más firmeza sus identidades de imitadores de un drama extranjero representado en el escenario de la vitrina soleada.

Si queremos apreciar el espectáculo no solo en sus pretensiones hay que mirar más allá de la imaginación imperial, que hace encajar la política interna en los límites de las tentadoras imágenes de los Otros civilizados. El objetivo al hacerlo no es revelar los rostros verdaderos que se ocultan tras máscaras fantásticas, sino explorar la constitución de identidades políticas en el terreno histórico del neocolonialismo, donde la lucha entre barbarie y civilización continúa bajo nuevas formas. En la América Latina la aspiración a superar el subdesarrollo a menudo se ha convertido en medios sutilmente trágicos de continuar la conquista y la colonización, ahora a manos de sí misma, de

¹⁶ Para un testimonio revelador de sus esfuerzos por evitar la candidatura de Betancourt en 1958 y de sus razones para abandonar el partido y sumarse a la lucha armada, v. las entrevistas a Lino Martínez, Moisés Moleiro y Américo Martín, en Blanco (1982).

¹⁷ Como plantea Lechner, la transición a la democracia supone la reformulación de las identidades colectivas e individuales (1984).

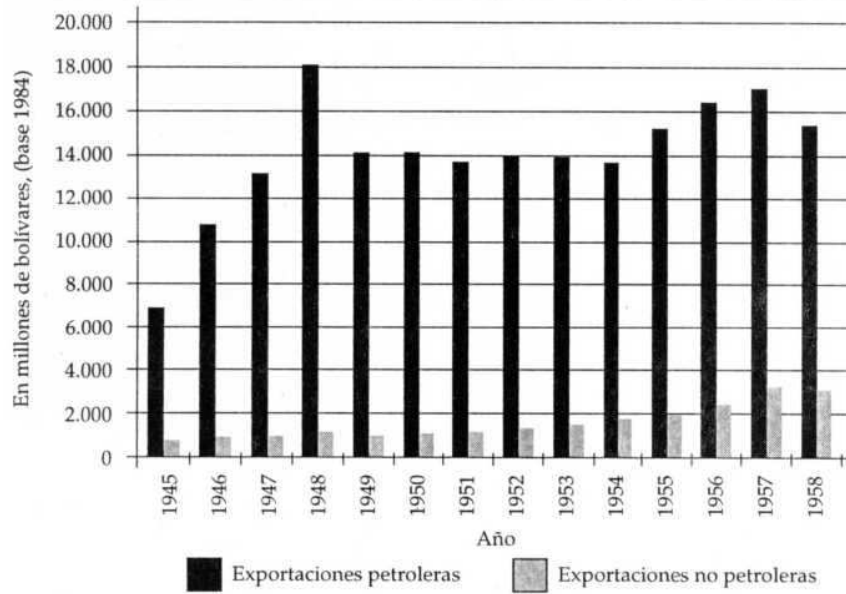
reconocerse en otras historias y, por tanto, de no reconocer la historia que se despliega en su propia tierra.

En Venezuela se ha entendido la contienda entre democracia y dictadura como parte de esta lucha colonial de pesadilla entre la civilización y la barbarie. Fantasmas del pasado e imágenes del futuro moderno (incorporadas en una cornucopia de objetos e imágenes de sociedades en las cuales el futuro ya ha sucedido) se entremezclan en las batallas diarias de los actores políticos, dando aliento a sus intereses e ideales. Tanto en sus batallas públicas como en sus fantasías privadas el Estado llegó a ser la poderosa sede de la representación de ilusiones y de la ilusión de la representación, un teatro mágico donde los símbolos de la vida civilizada -historia metropolitana, mercancías, instituciones, siderúrgicas, carreteras, Constituciones- se transformaban en iconos potentes que se podían comprar o copiar. En tanto teatro mágico, el Estado se convirtió en un lugar dotado del poder alquímico de transmutar la riqueza líquida en vida civilizada.

En este Estado mágico los protagonistas se dejaron seducir fácilmente por el encanto de su propia actuación y terminaron por encarnar los poderes del Estado como si se tratara de propios. Poseído por esos poderes, Pérez Jiménez, al igual que Gómez antes suyo, pensó que podía gobernar en soledad. Mientras su actuación como personificación del Estado fue pujante, la mayor parte del público se rindió a su magia. Pero roto el hechizo se vio que Pérez Jiménez era un histrión. Presionado por las FFAA se vio obligado a abandonar el país. El pueblo, que ocupó el espacio vacante como única pero solitaria encarnación de la nación, apareció entonces en el centro del escenario como un cuerpo aglutinado alrededor de una voluntad única, para exigir, una vez más, durante un momento histórico breve pero inaugural, la democracia.

Gráfico 2

Relación entre exportaciones petroleras y no petroleras
(no rentistas), 1945-1948



Fuente: Baptista 1991: 118.

Cuadro 6
Evaluación de los ingresos provenientes del petróleo, 1945-1958
(en millones de bolívares, base 1968)

Año	Beneficios petroleros rentistas	Valor de la producción petrolera	Valor de la producción petrolera no rentística	Participación fiscal en beneficios petroleros	Beneficios reportados¹	Beneficios sin renta²
1945	406	1.060	654	458	275	211
1946	403	1.462	1.059	552	440	388
1947	863	2.394	1.531	871	745	611
1948	1.328	3.534	2.206	1.400	1.060	992
1949	1.144	3.124	1.980	1.150	704	747
1950	1.821	3.748	1.927	1.124	970	804
1951	2.414	4.405	1.991	1.469	1.201	53
1952	2.576	4.677	2.101	1.516	1.263	720
1953	2.712	4.892	2.180	1.568	1.261	710
1954	3.102	5.337	2.235	1.699	1.412	667
1955	3.369	5.875	2.506	1.973	1.710	821
1956	4.072	6.829	2.757	3.197	2.215	914
1957	5.346	8.463	3.117	3.879	2.774	948
1958	4.753	7.662	2.909	2.825	1.616	718

Fuente: Baptista 1991:144.

Nota: Los títulos de cada columna han sido modificados por el autor, previa consulta con Baptista.

1. Ganancias informadas por las compañías petroleras.

2. Rentabilidad del capital petrolero en Venezuela después de los impuestos (sobre la base de la tasa de retomo estadounidense para el sector).

Cuadro 7

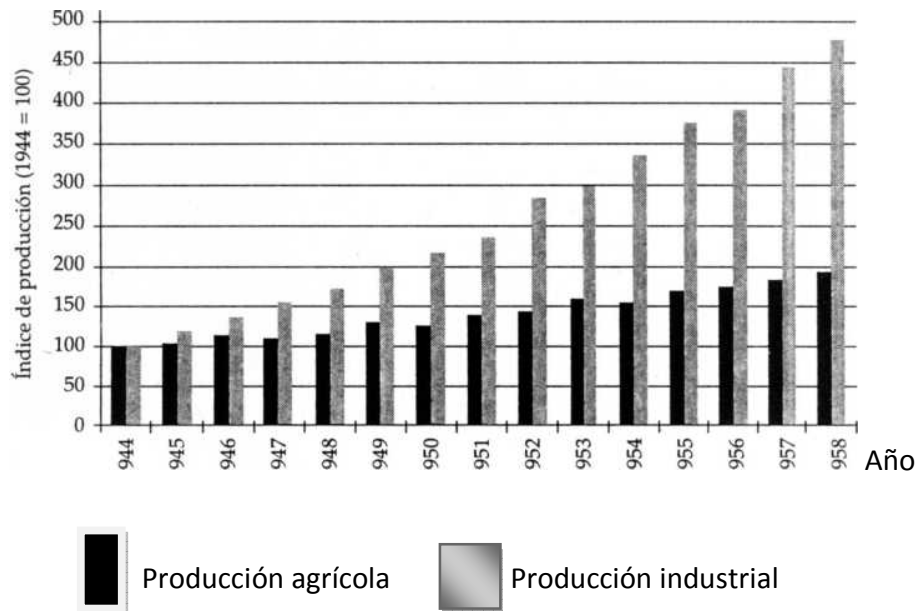
% del petróleo en las exportaciones totales, 1945-1958
(en millones de bolívares, base 1984)

Año	Exportaciones totales	Exportaciones petroleras (no rentistas)	Exportaciones no petroleras	% del petróleo en las exportaciones totales
1945	7594,5	6882,0	712,5	91
1946	11564,1	10704,9	859,2	93
1947	13960,2	13097,0	863,2	94
1948	19139,0	18031,0	1108,0	94
1949	14971,1	14052,0	919,1	94
1950	15062,2	14060,5	1001,7	93
1951	14694,0	13620,5	1073,5	93
1952	15123,6	13863,5	1260,1	92
1953	15294,5	13872,0	1422,5	91
1954	15327,1	13625,8	1701,3	89
1955	17051,6	15158,0	1893,6	89
1956	18711,2	16340,7	2370,5	87
1957	20155,6	16952,8	3202,8	84
1958	18385,4	15348,9	3036,5	83

Fuente: Baptista 1991:118-119.

Gráfico 3

Producción agrícola e industrial, 1944-1958

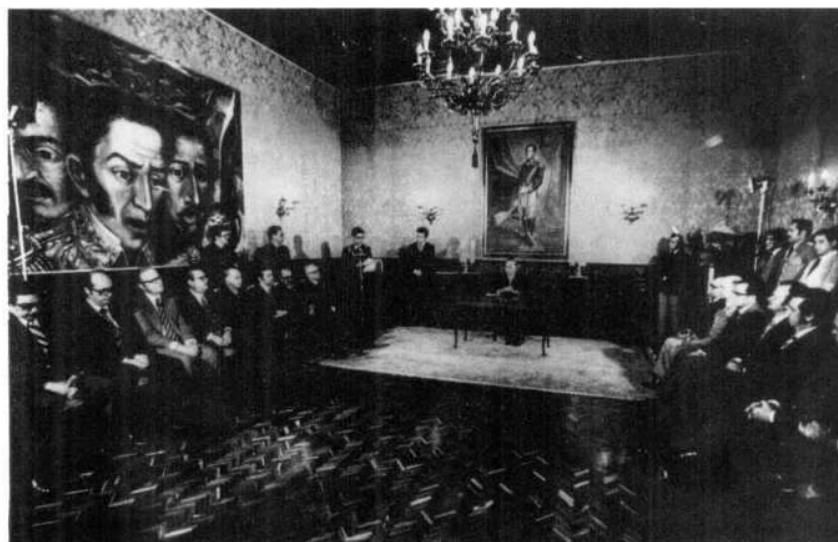


Fuente: Baptista 1991:124,126.

Tercera parte

Reprise

El petroestado y la siembra del petróleo



Carlos Andrés Pérez y su gabinete en el Palacio Presidencial después de ganar las elecciones de 1973. (Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)



Carlos Andrés Pérez y su querida, Cecilia Matos. (Archivo *El Nacional*.)

6. Las guerras de los motores: las máquinas del progreso

¡Este hombre sí camina!

(eslogan electoral de Carlos Andrés Pérez)

Nada camina tanto en este continente como un mito.

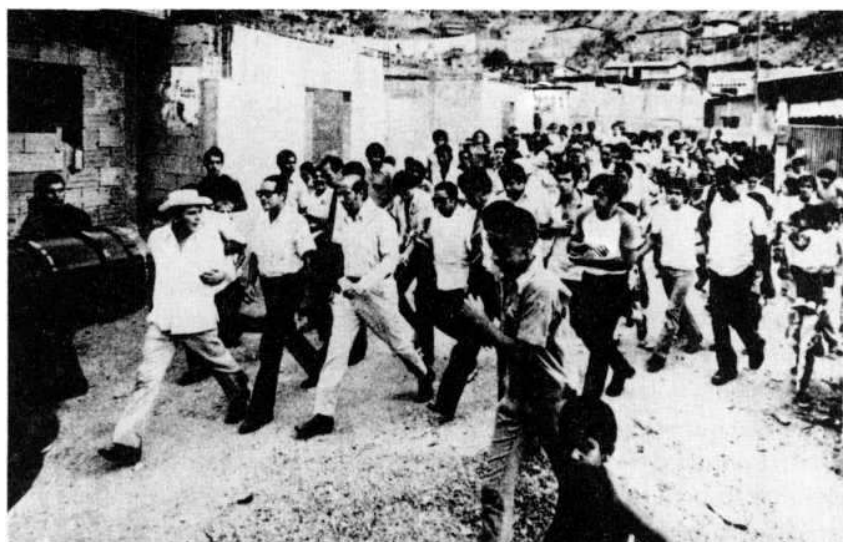
Alejo Carpentier

A fines de 1973, la cuadruplicación de los precios del crudo estremeció al mundo. Un tornado enloquecido parecía succionar dinero de los países centrales para volcarlo en los países petroleros de la periferia. En el Primer Mundo, lo que se conoció como la crisis del petróleo indujo a visiones de desastre político y financiero, recrudescidas por las predicciones del Banco Mundial de un futuro de continuas transferencias de riqueza mundial hacia los países miembros de la OPEP. Un analista afirmó: “Todos los símbolos fundamentales del éxito del Occidente industrial parecen estar en subasta. Un grupo de inversionistas árabes intentó comprar un pueblecito en la porción noroccidental de Estados Unidos. El nombre del pueblo: George Washington. Los árabes podrían comprar la General Motors, el Bank of America y el Bank of England” (Aliber 1983: 119).

Mientras el aumento del precio del petróleo producía en el Occidente industrializado visiones de derrumbe, en Venezuela, al igual que en otros países OPEP, creó la ilusión de que la modernización instantánea estaba al alcance de la mano, que podía modificarse el cauce de la historia, y que el dinero del petróleo era capaz de impulsar al país hacia el futuro y garantizarle el control de su propio destino. En diciembre de 1973, mientras subían los precios, Carlos Andrés Pérez era electo presidente por un amplio margen. El hombre que había hecho su campaña bajo el lema de “el hombre con energía”, de repente parecía depositario de la energía que provenía de los petrodólares, cuyo origen era la crisis energética mundial. Al tomar posesión de su cargo, Pérez presentó de manera dramática esta coyuntura como la oportunidad histórica de Venezuela para superar el subdesarrollo, conquistar su segunda independencia y construir la Gran Venezuela.

La primera independencia, conquistada en 1821 tras la prolongada lucha encabezada por Simón Bolívar, no había logrado imponer el control político y económico del Estado sobre la sociedad. Como en otras naciones latinoamericanas, la contienda civil diezmó la economía y fragmentó la autoridad civil durante todo el siglo XIX. Venezuela fue asediada por acreedores y se mantuvo vulnerable a las fluctuaciones internacionales de los precios de los productos agrícolas, y su elite continuó con la vista

fija en Europa en busca de modelos de vida civilizada. El país parecía vivir a la sombra de poderes externos. La segunda independencia, por tanto, se refería al proyecto de trascender este legado de postración al vincular el único momento de gloria del pasado histórico de la nación con un futuro dinámico y luminoso. Se trataba de culminar la tarea que Bolívar había comenzado. Ya antes, en más de una ocasión se había proclamado el objetivo de conquistar esa segunda independencia. Lo nuevo era el sentimiento sin precedentes de que era posible que esta vez el progreso nacional, ese espejismo lejano a medida que se avanzaba, por fin podía convertirse en realidad. El súbito flujo de poder dio pie a un estado colectivo que se conoce en el país como “la euforia petrolera”. Por fin parecía que Venezuela se dirigía al control de su propio destino.



Carlos Andrés Pérez durante la campaña presidencial de 1973.

(Instituto Autónomo Biblioteca Nacional.)

El escenario estaba listo para una representación de gala: el teatro de la modernización; o sea, el conjunto de leyes, prácticas y rituales de mando mediante los cuales la elite política y económica reproducía su poder al definir los términos del desarrollo nacional. Si bien el Estado venezolano generalmente había ejercido su poder de modo teatral, imponiendo el consenso mediante un despliegue majestuoso de su presencia, esta súbita y extraordinaria abundancia financiera le permitía proyectarse de manera más fantástica que nunca. Mediante fabulosos proyectos de modernización que suscitaban fantasías colectivas de progreso, el Estado, personificado en Pérez como su más efectivo prestidigitador, indujo a la aparición de un Estado-mago como condición para que el Estado

apareciera como el agente grandioso de la transformación venezolana. En este capítulo analizo cómo el Estado intentó modernizar el país mediante el desarrollo de la industria automotriz, durante este periodo de poder estatal y expectativas colectivas en ascenso¹.

La política industrial automotriz

La alianza forjada entre partidos reformistas de masas, elite local del sector de negocios e importantes intereses empresariales estadounidenses tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, fijó la soberanía nacional como su meta. Esta soberanía debía tener su base en el establecimiento de controles democráticos sobre la apropiación de los recursos petroleros y la inversión productiva de estos ingresos. Cuando políticos y economistas comenzaron a debatir el empleo que debía darse a la abundancia financiera, el problema que tuvieron que enfrentar no fue la escasez de recursos sino su exceso. Esto creaba un extraordinario sentimiento de confianza. Resultaba posible creer que el proyecto de transformar la riqueza natural efímera en permanente bienestar social - sembrar el petróleo- podía convertirse al fin en una realidad tangible.

La política relativa a la industria automotriz formulada en 1962 fue una importante expresión de ese proyecto, cuya premisa era la idea de que el país podía replicar la evolución de las naciones capitalistas desarrolladas (Blank 1969). La expansión de la industria daba pie a la expectativa de progreso, porque se estimaba que unía, con su avanzada organización productiva y con el valor social de la mercancía producida, la promesa de desarrollo colectivo y la de autonomía individual. Al mismo tiempo, existía el propósito de que esta industria beneficiara al nuevo régimen democrático al brindar oportunidades de inversión y crear empleos fabriles, con lo que se reduciría la dependencia tecnológica y disminuiría el peso de las importaciones en la balanza de pagos. Aunque la puesta en práctica de este programa padeció de un retraso crónico, los sucesivos gobiernos de Acción Democrática, encabezados por Rómulo Betancourt (1959-1963), Raúl Leoni (1964-1969), y de Copei, presidido por Rafael Caldera (1969-1974), se adscribieron a sus principios. Ello garantizó un inusual

¹ La base de este análisis de la política relativa a la industria automotriz que desarrollo en los capítulos 6 (la producción de motores) y 7 (la producción de tractores) es un estudio más vasto que incluyó entrevistas a la mayoría de los líderes estatales y del sector privado directamente involucrados en la formulación y puesta en práctica de dicha política. La investigación se centró en entrevistas informales a administradores y dueños de más de 50 empresas de partes y piezas para autos, entrevistas estructuradas a trabajadores y administradores y trabajo de archivo en el Registro de Comercio, la Corporación Venezolana de Fomento, la Corporación Venezolana de Guayana, el Ministerio de Fomento, Fedecámaras, el Consejo Venezolano de Industria y Favenpa. Asistí también a eventos organizados por asociaciones del sector de los negocios en el periodo 1974-1979. La investigación sobre la estructura de la propiedad en el sector automotor desembocó en un mapa de los principales grupos económicos de Venezuela y de sus vínculos entre sí y con el Estado. He basado este capítulo en el trabajo de Coronil y Skurski (1982).

grado de continuidad del personal técnico del programa y reforzó la definición ideológica de que la industria automotriz era una fuerza primordial en el camino hacia el desarrollo y la cuna de clases sociales modernizadoras.

Con el retorno de AD al poder en 1974, políticos y técnicos sintieron que el nuevo gobierno por fin podría lograr los objetivos tantas veces pospuestos, expresados en la política automotriz. El ingreso de Venezuela al Pacto Andino en 1973 derivó en la obligación de formular una nueva política, dado que ahora el país estaba comprometido a una “racionalización” del programa automotriz (esto es, a hacer racional la irracional industria nacional) a fin de coordinar la producción de vehículos con los demás miembros del Pacto (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). La euforia colectiva nacida de la riqueza imperante en 1974 y 1975 condujo a los funcionarios gubernamentales a considerar que los fracasos previos en ese campo eran ya cosa del pasado, fácilmente superable.

La política para la industria automotriz se convirtió en ley, con regulaciones de forzoso cumplimiento, como prueba inequívoca de los compromisos del Estado con sus objetivos. El propósito de la ley era desarrollar una industria completamente integrada, y su redacción corrió a cargo de funcionarios del Ministerio de Fomento, el Instituto de Comercio Exterior (ICE) y el Ministerio de Planificación (Cordiplan). La versión que redactaron se nutrió de las propuestas hechas por tres especialistas en economía de AD, vinculados a poderosos intereses empresariales, en un estudio sobre la industria automotriz solicitado por el Gobierno en 1969². De ahí que la ley reflejara tanto las políticas de AD como los intereses empresariales de sus aliados. No resulta sorprendente que los lineamientos internos del Gobierno para la formulación de la política establecieran obstáculos *de facto* a los objetivos trazados en ella, y que desde el inicio fijara su agenda de forma que limitaba potencialmente sus resultados. Los lineamientos indicaban que la “racionalización” de la industria, que implicaba una reducción drástica del número de compañías automotrices y de modelos, debía causar el menor “trastorno social y económico” posible a las compañías. En segundo lugar, que la “estructura del mercado” existente, cuya base era el peso relativo de cada compañía productora, debía ser un factor determinante en la planificación de la reorganización del sector. Por último -y esto sería de gran importancia futura- se debían respetar las “preferencias históricas”, entendidas como el gusto por los grandes autos estadounidenses. La audacia de los objetivos de la política para el sector

² Tanto José Ignacio Casals como Constantino Quero Morales llegaron a ser ministros de Fomento durante la presidencia de Pérez; Aura Celina Casanova dirigía el Banco Industrial del Estado. La Corporación Venezolana de Fomento (CVF) le encargó a la firma privada de Casals y Quero la redacción del “Estudio sobre la industria automotriz venezolana y sus perspectivas de desarrollo” (Ecodesa, Caracas, 1969).

contrastaba mucho con el carácter conservador de estos lineamientos³.

El documento no encontró grandes objeciones en el sector privado. A lo largo de 1974 la comisión de redacción se reunió con las compañías fabricantes y logró un aparente consenso. La ley se aprobó el 16 de mayo de 1975 (decretos leyes 921 y 929) al amparo de los “poderes especiales” concedidos al Ejecutivo para acelerar los planes de desarrollo, producto del periodo cuando decisiones fundamentales se convirtieron en ley fuera del marco de los controles legislativo y partidario⁴. El objetivo central era fabricar en el país, para 1985, 90% del valor de los vehículos, incluido el tren de conducción. Partes automotrices básicas serían producidas por empresas con al menos 51% de capital proveniente de fuentes privadas. Las compañías extranjeras, para poder acceder al mercado común, tendrían que convertirse en empresas mixtas o nacionales, en cumplimiento de las regulaciones del Pacto Andino. Las compañías transnacionales (CTNs) que fabricaban vehículos podrían también fabricar componentes básicos (como el tren de conducción) si se transformaban en compañías mixtas o nacionales según los términos de la Decisión 24 del Pacto Andino. Esto alteraba las bases del antagonismo entre el sector de ensamblaje y el de componentes, entre las CTNs fabricantes de vehículos y los industriales locales, según quedarán definidas por la política establecida en 1962.

El primer paso hacia el logro de estos objetivos era la reducción del número de modelos de vehículos, de 59 a 11 en 1985, de modo que los fabricantes se beneficiaran de la economía de escala y de la uniformación de partes y piezas⁵. La etapa siguiente era aumentar el contenido local de los vehículos en 3% anual y medir este contenido por un sistema de indización de los costos de producción (perfiles industriales). En tercer lugar, en 1979 los fabricantes de vehículos compensarían el valor de sus importaciones de partes para el ensamblaje mediante la exportación de piezas de autos producidas en el país. En cuarto lugar, las firmas ya no podrían sumar sus exportaciones de piezas para cumplir su cuota de contenido local para los vehículos venezolanos. Quinto, en 1980 los fabricantes debían producir el tren de conducción en el país con hierro colado, acero y aluminio de Venezuela. Por último, a los fabricantes solo se les permitiría producir las clases de vehículos (como los diseñados principalmente para el transporte de pasajeros o de carga) que fabricaban en el momento de la aprobación de la ley (disposición que afectaba a los fabricantes europeos y japoneses, que estaban

³ Memorando confidencial sin título (Ministerio de Fomento 1974). También, entrevistas a miembros de la comisión de redacción.

⁴ Para un análisis de la formulación de políticas en este periodo, en el contexto de la experiencia venezolana a partir de 1958, v. Blank (1974).

⁵ El modelo de vehículo de pasajeros se definía por el tren de conducción y no por el diseño de la carrocería. El tren de conducción incluye motor, transmisión y elementos relacionados. La producción de estas piezas demanda también la creación de una forja y una fundición.

menos diversificados que sus competidores estadounidenses)⁶.

El programa sectorial del Pacto Andino asignaba a Venezuela los siguientes modelos de vehículos: un auto de pasajeros mediano (categoría A3, 1.500-2.000 cc); la producción exclusiva de dos autos grandes de pasajeros (A4, más de 2.000 cc); un utilitario (C, peso máximo 2.500 kilos; Venezuela optó por emplear un motor de auto en este vehículo); un camión mediano (B3, entre 9,3 y 17 toneladas métricas); y un camión grande (B4, más de 17 toneladas). Además, el Gobierno firmó acuerdos bilaterales para la fabricación de dos modelos de camiones ligeros: un acuerdo de "coproducción" con Ecuador (B1.2, entre 3 y 6 toneladas métricas) y un acuerdo de "coensamblaje" con Bolivia (B1.1, hasta 3 toneladas métricas).

La política estaba diseñada para lograr primero la fabricación del tren de conducción, mientras que la de la carrocería sería la etapa final. Esto último permitiría que la producción nacional se independizara de los cambios de diseño en el país de origen. Basada en la idea de que la producción del tren de conducción garantizaba la transferencia de la tecnología esencial, esta estrategia de dos fases coincidía tanto con el programa automotor del Pacto Andino como con las concepciones tradicionales de los fabricantes estadounidenses. Además, los planificadores locales, influidos por el ejemplo y las razones de aquella industria, pospusieron el estampado en metal de la carrocería con el argumento de que la onerosa inversión en maquinarias que ello requería no se justificaba para producir para un mercado de las dimensiones del venezolano, y que, por tanto, debía esperar por la ampliación del mercado andino. Como este razonamiento tenía como base el sistema estadounidense de altos volúmenes de producción y de cambios anuales de diseño, es probable que el método seleccionado para reducir los modelos no haya respondido a criterios técnicos, sino a juicios aportados por las compañías fabricantes, las cuales -siendo las creadoras de la tecnología para la producción del tren de conducción

-les daba una ventaja inicial en las negociaciones y generaba un obstáculo técnico al logro de los objetivos de la política automotriz. Según un antiguo técnico del Ministerio de Fomento, es posible utilizar el estampado de carrocerías para alcanzar la reducción de modelos en la etapa intermedia del crecimiento de la industria. La prohibición de que creciera el número de modelos golpearía en ese caso directamente la dependencia comercial de la industria nacional con respecto a las compañías extranjeras y la replicación de los patrones de consumo estadounidenses en el mercado local

⁶ "Normas para el desarrollo de la industria automotriz. Resolución N° 5.457,1975", *Gaceta Oficial* N° 1772, 16/9/1975.

(entrevista confidencial 1978)⁷.

La premisa de que debía respetarse la estructura industrial existente, virtualmente garantizó que el Estado seleccionara a las Tres Grandes estadounidenses (GM, Chrysler y Ford) para producir los anhelados grandes motores de gasolina (dos de ocho cilindros y uno de seis) que se emplearían en los modelos A4 de pasajeros, en el utilitario y en el camión B3. Dadas las restricciones oficiales, Renault, VW y Fiat solo pudieron presentar propuestas en la categoría mediana del motor de cuatro cilindros, y Toyota y Nissan solo ofrecieron los motores de sus vehículos rústicos en la categoría A4. La agenda de negociaciones para las licitaciones de los motores grandes excluyó a las compañías japonesas y europeas.

Una fuente importante de conflictos fue la decisión de permitir la fabricación de un motor para cada modelo. Esto obligaba a los ensambladores a usar en sus vehículos el modelo nacional, incluso si no era el de ellos (el concepto de “vehículo híbrido”). A los planificadores locales no solo les resultaba importante desde un punto de vista técnico contar con la aquiescencia de las CTNs para el programa; también era una prueba de la capacidad estatal para fomentar los intereses generales del capital local. Los planificadores compartían la creencia de que los nuevos recursos financieros del Estado podían transformarse directamente en poder político. Se estimaba que del mismo modo que los países de la OPEP podían definir nuevos términos de asociación con las compañías petroleras al tiempo que mantenían su relación con ellas, el Estado venezolano podía imponer nuevas condiciones a las CTNs automotrices y solidificar su alianza con las mismas.

En realidad, las negociaciones entre el Estado y las CTNs en tomo de los derechos para fabricar localmente motores de vehículos, estaban condicionadas por el conflicto subyacente entre dos procesos interrelacionados, ambos desencadenados por el incremento brusco de los precios petroleros de 1973 y la subsiguiente recesión mundial. Primero, la reorganización de la industria automotriz mundial a manos de las transnacionales; segundo, la reorganización de la alianza dominante en Venezuela y la reorientación de su programa de desarrollo. Las inversiones en los nuevos proyectos se vieron afectadas por estos procesos -relacionados entre sí- en los contextos internacional y local, provocadas por el auge del petróleo.

⁷ La base de este análisis proviene de entrevistas muy confidenciales. Nunca se hizo pública la información sobre el proceso de licitaciones, considerado un secreto estatal del más alto nivel. Para un examen de las economías de escala, v. Baranson (1968) y White (1971).

El contexto internacional

Como resultado de la recesión mundial de principios de los años 70, el capital internacional sufrió una reestructuración sustancial, uno de cuyos elementos importantes fue la reorganización de la industria automotriz. Cuando las naciones centrales buscaron medios para reciclar la enorme cantidad de petrodólares súbitamente en poder de los países de la OPEP, las CTNs automotrices de EEUU, Europa y Japón comenzaron a competir ferozmente por los mercados extranjeros. No obstante, como estaban todas atrapadas en una recesión que las obligaba a redefinir sus estrategias globales, las más grandes eran reticentes a invertir en Venezuela. En 1973 los mayores productores mundiales habían alcanzado altos niveles de fabricación de vehículos: EEUU, más de 10 millones de unidades; Japón, 4,5 millones; Alemania y Francia, más de 3,5 millones cada uno. Por primera vez, en 1974 Brasil produjo un millón de vehículos. La suma de la producción de esos países superaba los 25 millones. Pero entre 1973 y 1975 descendió en todas partes: 30% en EEUU, 36% en Japón, 22% en Alemania. En 1975 la producción total de la industria automotriz europea descendió en 15%; cinco de los nueve mayores productores sufrieron pérdidas de consideración; y los gobiernos se vieron obligados a intervenir en varias firmas.

El trauma de la energía afectó en especial a la industria automotriz estadounidense, la cual desde mucho tiempo atrás confiaba en una provisión barata de gasolina para sus grandes autos, que generaban altos niveles de ganancia. Enfrentadas a un mercado en contracción, estas empresas estimaron una inversión necesaria de unos 80.000 millones de dólares hasta 1985 para diseñar y producir motores más eficientes y vehículos más ligeros. En EEUU fue esta la época del “*blues del auto pequeño*” [*small car blues*] (*Business Week*, 16/3/1974), cuando los fabricantes, que sufrían graves pérdidas, se vieron obligados a desplazar la producción hacia autos pequeños, menos rentables pero más eficientes en términos de consumo. La situación de la General Motors fue sintomática. Entre octubre de 1973 y marzo de 1974, enfrentó la mayor caída de sus ventas desde la recesión de 1958. Durante 1974 descendieron 37,5%. Entre febrero y marzo su participación en el mercado automovilístico, incluidas las importaciones, bajó de 44,4% a 37,5%. El desempleo en el sector crecía; en marzo de 1974, GM había cerrado 15 de sus 22 plantas de ensamblaje y 3 de sus 4 fábricas de carrocerías, para reducir el exceso de autos grandes no vendidos y llevar a cabo la

reconversión hacia autos más pequeños, ahora más populares⁸. Resulta revelador que durante este periodo GM fuera “derrubada de su pedestal de empresa industrial más rentable de EEUU para ser sustituida, irónicamente, por EXXon Corporation” (*The New York Times*, 24/3/74).

Los demás fabricantes también sufrieron fuertes pérdidas. Mientras GM caía de la primera a la segunda posición, Ford pasaba de la tercera a la cuarta y Chrysler de la sexta a la décimo primera. En conjunto, los ingresos de los fabricantes de vehículos descendieron 65% en 1974. Durante los dos primeros trimestres de 1975, Ford, Chrysler y American Motors informaron pérdidas. En enero de 1975, cuando los fabricantes ensamblaron solo 370.000 vehículos, el desempleo alcanzó una cifra récord; 314.000 trabajadores (cerca de 40% de la fuerza laboral por horas de la industria) fueron cesanteados. La reconversión obligó a las compañías a competir con los autos importados. Durante los primeros seis meses de 1975, las importaciones satisficieron 37% del mercado de autos pequeños y 20% del mercado total (*Business Week*, 28/7/1975).

Por tanto, al inicio del gobierno de Pérez estas CTNs, debilitadas por la declinación económica, llevaban a cabo importantes cambios organizativos. Para compensar su descenso hacían esfuerzos por penetrar en mercados extranjeros, integrar sus operaciones productivas internacionales, ampliar la fabricación de ciertos productos en naciones del Tercer Mundo, aumentar su control sobre ciertas materias primas, establecer asociaciones entre sí y fortalecer los vínculos con gobiernos y monedas nacionales.

En la medida en que los temas del ahorro de combustible, los costos de las materias primas y el diseño adquirirían nueva importancia, las compañías fabricantes requerían una estrategia mundial para garantizar la provisión de materias primas baratas, una eficiente división internacional de las tareas productivas y una ampliación de los mercados. Comenzaron a buscar abastecimientos mundiales para producir “autos mundiales”, esto es, la fabricación coordinada de modelos de vehículos estandarizados, ensamblados con componentes producidos en diferentes países. De ahí que los fabricantes finalmente se interesaran en participar en programas nacionales de desarrollo de la industria automotriz, siempre que se adaptaran a sus estrategias globales que evolucionaban con rapidez.

Cada uno de los países en los cuales operaban estas CTNs tenía un papel definido en su esquema general, y el mismo tenía, a su vez, una importancia decisiva en la conformación de la industria. Como

⁸ Fabricar un Cadillac Coupe de Ville costaba 300 dólares más que producir un Chevrolet Caprice, pero se vendía 2.700 dólares más caro. Un auto intermedio típico, el Chevelle, producía una ganancia de 600 dólares por auto; el Nova, de 450; y el subcompacto Vega, de solo 125 (*Atlantic*, diciembre de 1974).

expresara un ejecutivo de GM en Venezuela: “Para la GM no hay mercado pequeño” (entrevista confidencial 1978). *Business Latin America* comentó la experiencia de GM y Ford en las negociaciones del Pacto Andino: “Las empresas deben planificar su estrategia para la región como un todo, de modo que las licitaciones en un país se preparen con las prioridades regionales en mente. ... La casa matriz puede llegar a ver de muy diferente manera ciertas concesiones que probablemente la preocuparían si con las mismas se logra un acceso firme a proyectos relacionados” (25/10/1978). En Venezuela, cada concesión tuvo un precio. La nueva flexibilidad de las CTNs logró vincular más estrechamente la política automotriz nacional con la política internacional de las cada vez más globales empresas.

El contexto nacional

Los capitalistas locales vacilaban en invertir en los nuevos proyectos, pero por razones diferentes a las de las CTNs. Durante este periodo se dio una reorganización de la alianza de las clases dominantes y un reordenamiento del patrón de rentabilidad de la economía interna. Como resultado de las nacionalizaciones de las industrias del hierro y del petróleo en 1975 y 1976, el papel principal del Estado pasó del cobro de impuestos sobre la exportación de productos primarios, a la producción directa de bienes primarios e industriales. La nueva integración que ello produjo entre los papeles financiero y productivo del Estado, tomó dos direcciones: el aparato financiero estatal se amplió, se centralizó y se interconectó con las empresas productivas del Estado. La estrategia de desarrollo gubernamental combinó el objetivo tradicional de la industrialización para sustituir importaciones a fin de crear un sistema industrial interno diversificado y verticalmente integrado, con el nuevo objetivo de establecer una estructura industrial para la exportación mediante las inversiones del Estado. El fomento estatal a la acumulación de capital, previamente basada sobre su papel proteccionista, se complementó ahora con su participación directa como principal agente productivo de la economía⁹.

Pérez vinculó la puesta en práctica de una política dirigida a “profundizar” las relaciones capitalistas con la lucha por fortalecer su facción política en el seno de AD. Esta combinación solidificó la alianza existente entre AD y ciertos sectores de la burguesía y forjó un matrimonio sobre la base de la complicidad entre la camarilla política y la camarilla económica de Pérez, esto es, entre “políticos

⁹ La estrategia y el programa de inversiones del Gobierno se describen en el “V Plan de la Nación” (*Gaceta Oficial* Nº 1.860, extraordinario. Tipografía Nacional, Caracas, 1976). Bigler analiza la expansión institucional del Estado (1980). Para el V Plan, la reforma de las empresas del Estado y la nacionalización del petróleo, v. Equipo Proceso Político (1977). Para la reforma administrativa, v. Karl (1982).

burgueses” y “capitalistas políticos”. La lucha interna por el liderazgo de AD hizo que el tradicional uso del poder estatal por parte del partido de gobierno para favorecer sus propios intereses adoptara nuevas formas. Desde hacía largo tiempo el partido estaba dominado por el ex-presidente Rómulo Betancourt y otros líderes de la vieja guardia vinculados al proyecto original de desarrollo industrial y a los grupos económicos que éste promovía. A principios de los años 70 Betancourt trató de resolver el problema de la sucesión en el partido apoyando la candidatura de Pérez, a quien consideraba un líder de la generación joven de AD que respetaba su autoridad y sus alianzas. Sin embargo, el poder político y financiero sin precedentes del gobierno de Pérez le permitió a éste utilizar su cargo con relativa libertad respecto de los límites políticos establecidos. De ahí que a inicios de su gestión, Pérez pudiera capitalizar la aceptación de su poder por parte de la nación. Se propuso reorganizar el aparato estatal y garantizar que su facción ocupara dentro de AD una posición dominante.

La estrategia política perecista tenía dos componentes. En primer lugar, intentó concentrar el poder en el Ejecutivo al tiempo que reducía la necesidad de rendir cuentas al partido, la legislatura y las agencias del Estado. El Congreso le concedió poderes especiales. En segundo lugar, trató de alcanzar más autonomía respecto de vínculos previos con intereses económicos muy poderosos en el diseño de políticas gubernamentales. Para ello, promovió a un conjunto de empresarios que habían apoyado su candidatura, los Doce Apóstoles, así llamados por su estrecha relación con el presidente.

Estos empresarios, en especial Pedro Tinoco y Carmelo Lauría, influyeron sobre las políticas de Pérez (como la nacionalización del petróleo y el hierro, el V Plan y el plan de reforma administrativa) y contribuyeron a construir importantes proyectos económicos que vinculaban al Estado con el capital extranjero y nacional. Aunque los grupos y empresas establecidos siguieron beneficiándose de los proyectos estatales y del gasto durante el gobierno de Pérez, lo cierto es que fueron desplazados por los nuevos grupos de su exclusiva posición previa de privilegio, desde la cual habían ejercido influencia sobre la política del Estado.

En consecuencia, se desarrollaron intensos conflictos interburgueses durante el periodo. A despecho de las apariencias, los mismos no eran un mero reflejo de los intereses opuestos de diversas fracciones sectoriales del capital (p. ej., capital industrial y comercial). En Venezuela, los ingresos provenientes del petróleo habían contribuido a conectar a distintos sectores de la economía. El surgimiento de importantes grupos económicos con inversiones diversificadas que se solapaban entre sí había servido para disminuir los choques entre esos sectores económicos en el nivel de las políticas. Lo que reflejaban los conflictos de este periodo era el aumento de la competencia entre los

capitalistas por lograr el acceso a los proyectos y los fondos estatales y, en última instancia, por ocupar una posición en el seno del Estado empresarial.

Los grupos económicos rivales se diferenciaban por la composición de sus inversiones. Si bien ambos grupos -tanto los de vieja data como los ascendentes- tenían su base fundamental en las finanzas, el comercio y los bienes inmuebles; los más antiguos poseían significativas inversiones industriales en bienes de consumo durables y no durables para el mercado masivo. Los grupos ascendentes, aprovechando sus vínculos políticos, intentaban expandirse en todas las áreas, incluidos los sectores manufactureros, en los cuales el predominio de los grupos anteriores no había sido nunca disputado (p. ej., cemento y petroquímica). En lo que respecta a la industria automotriz, los grupos antiguos dominaban el sector de partes y piezas automotrices y el del acero y la metalmecánica, relacionado con el anterior, y tenían inversiones en las firmas más pequeñas de ensamblaje de vehículos. Los grupos ascendentes, que no poseían inversiones en estos sectores, se convertirían en socios de las CTNs automotrices en algunos de los nuevos proyectos¹⁰.

La política para el sector automotriz dio por sentado que los capitalistas locales invertirían en los proyectos. Sin embargo, aunque estaban dispuestos a ampliar sus empresas e incluso a producir nuevas piezas, procedieron con cautela en cuanto a las grandes inversiones planificadas. La política para el sector había planteado, de manera ambigua, que la realización de los proyectos quedaría en manos de empresas de capital mixto. La intención del Gobierno era que los inversores locales se unieran a las firmas extranjeras en la etapa inicial de diseño del proyecto. Sin embargo, solo se creó una compañía según ese plan: Plamoanca, empresa mixta entre GM y el poderoso grupo Sivensa (controlado por la familia Machado Zuloaga).

Otros industriales, más débiles y menos comprometidos con el sector automotor, no estuvieron dispuestos a realizar inversiones de tal magnitud, lenta maduración y riesgo.

Durante este periodo, la explosiva expansión del circulante monetario creó oportunidades de ganancia que no dependían de las inversiones productivas ni de los esfuerzos por aumentar la productividad. Se podían cosechar grandes ganancias en una variedad de aventuras especulativas en bienes inmuebles, comercio y construcción. El capital local se sentía particularmente atraído a estas áreas donde rápidamente podía captar una parte del circulante. Entre 1974 y 1976 la tasa de

¹⁰ El auge de los "nuevos grupos" en el seno de la burguesía fue un proceso significativo pero bastante mal comprendido. Duno (1975) y Martin (1976) analizaron sus vínculos políticos. Equipo Proceso Político (1978) sostiene equivocadamente que los nuevos grupos constituyen una fracción internacionalizada del capital. No se ha hecho ningún análisis exhaustivo de su base económica. El único estudio de los "grupos tradicionales" es el que aparece en las obras de Rangel (en especial 1972).

inversión privada en la industria decreció y llegó al nivel de 1972, en el que se mantuvo hasta 1976. La expansión de la producción durante este periodo (11% del sector manufacturero) fue producto del incremento de la utilización de la capacidad instalada. Por otra parte, la tasa de expansión del comercio fue de 36,9%, lo que reflejaba un aumento significativo de las importaciones. Lejos de estimular las inversiones privadas en la industria, el auge creó condiciones que reforzaron la orientación tradicional del capital local hacia la inversión en áreas que producían retornos mayores y más inmediatos. Para entender mejor este contexto resulta necesario describir brevemente la estructura de la industria automotriz en el país.

La organización de la industria automotriz venezolana

A diferencia de las primeras naciones latinoamericanas que se industrializaron, donde las operaciones de ensamblaje precedieron a las de producción, Venezuela experimentó un crecimiento simultáneo de los sectores terminal (ensamblaje) y de partes y piezas. La política original automotriz de 1962 dividía los dos sectores, porque prohibía la integración vertical, esto es, la inversión de firmas de ensamblaje en el sector de partes y piezas. De ahí que el naciente sector de partes y piezas no pudiera ser controlado de modo directo por las CTNs fabricantes de vehículos, y que los empresarios locales contaran con un campo relativamente protegido para realizar inversiones industriales en conjunción con firmas extranjeras productoras de partes y piezas. Además, estos capitalistas locales promovidos por el Estado, proclamados como burguesía industrial nacional emergente, contribuyeron a balancear el peso de las CTNs fabricantes en las negociaciones con las agencias estatales.

El sector terminal

En este sector, en 1975 las 15 firmas existentes empleaban a 10.456 trabajadores (3,2% de la fuerza de trabajo en la industria). Su inversión bruta de capital fijo era de 83 millones de dólares, y su producción representaba 6% del PIB no petrolero. El contenido local promedio de los vehículos (porcentaje de las piezas de un auto oficialmente consideradas de producción local) era aproximadamente 35% del valor. Esto representaba la compra de 264 millones de dólares de piezas producidas en el país. En 1975 las firmas dedicadas al ensamblaje variaban de manera considerable en cuanto a tamaño y diversificación del producto. Siete firmas ensamblaban autos y vehículos

comerciales; tres, solo vehículos comerciales (camiones y ómnibus); una, vehículos comerciales y rústicos (de tracción en las cuatro ruedas); y una, solo autos. En 1975 las Tres Grandes estadounidenses producían en Venezuela 81% de los autos de pasajeros y 90,2% de los vehículos comerciales, de un total de 143.900 unidades.

Las firmas relevantes para este estudio se dividen en tres categorías. En primer lugar, las Tres Grandes tenían subsidiarias de su única propiedad fundadas en 1948, 1950 y 1962. En segundo lugar, las firmas automotrices europeas -Renault, Fiat, Volkswagen y Daimler-Benz- participaban en empresas mixtas o habían otorgado licencias para ensamblaje a compañías de capital nacional. En tercer lugar, las compañías de ensamblaje de vehículos rústicos y comerciales de EEUU, Europa y Japón también operaban mediante una licencia o como empresas mixtas (excepto la American Motors). Estas últimas firmas, al igual que las firmas automotrices europeas, habían sido creadas como resultado de la política para el sector automotriz de 1962.

El sector de partes y piezas

En 1975 el núcleo de este sector eran aproximadamente 75 firmas que producían fundamentalmente para la industria automotriz y representaban cerca de 80% de la producción local de partes y piezas. Una periferia, que producía secundariamente para la industria automotriz, elevaba el número de empresas en este sector a unas 300. El valor de las partes y piezas producidas en 1975 para autos nuevos fue de 264 millones de dólares, y la inversión fija bruta fue de 130 millones. El sector empleaba a 14.000 trabajadores, lo que equivalía a 4,3% de la fuerza laboral industrial. Dada la diversidad del sector, resulta difícil determinar con precisión su composición económica¹¹.

Muy pocas de las firmas que formaban parte del núcleo del sector eran subsidiarias extranjeras (excepto en lo que concierne al subsector de la fabricación de cubiertas para vehículos) aunque las principales firmas locales estaban asociadas con importantes empresas estadounidenses u operaban con licencias. Si bien muchos industriales locales pequeños y medios estaban involucrados con este sector, las firmas mayores estaban dominadas por los grupos económicos más poderosos. La empresa Sivensa -de rápida expansión-, un *Holding* industrial creado por miembros de la elite de los grupos antiguos (las familias Machado Zuloaga y Vollmer), tenía la propiedad mayoritaria de más de 20 de las principales firmas del sector de partes y piezas.

¹¹ Los datos para esta sección fueron tomados de Favenpa, CIVA, y el Ministerio de Fomento.

Asociaciones de interés de la industria automotriz

Las dos cámaras industriales se fundaron en 1963 a instancias del Gobierno para representar a las empresas del sector en el proceso de planificación democrático¹². La Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) contaba con 66 miembros en 1975 y con 120 en 1978. Compuesta por las principales firmas productoras de partes y piezas para autos, en esa época representaba alrededor de 80% de partes y piezas fabricadas en el país. Los representantes de Sivensa tenían un papel importante en su liderazgo. Favenpa utilizó su cada vez más poderosa voz pública para promover el conjunto de los intereses y el papel político de los industriales locales.

La Cámara de la Industria Venezolana Automotriz (CIVA) tenía menos actividad pública que Favenpa. Tendía a criticar las regulaciones gubernamentales, a las cuales consideraba obstruccionistas, y a atacar al sector de partes y piezas local por sus supuestos altos costos y baja calidad. La unidad de CIVA a menudo se vio erosionada por el papel preponderante que desempeñaban en ella las Tres Grandes y por el tratamiento privilegiado que en ocasiones obtenían algunas firmas de ensamblaje de propiedad local. Importantes distribuidores de vehículos fundaron en 1952 la Asociación de Distribuidores de Automóviles y Maquinaria (ADAM) con el fin de controlar la ampliación de la distribución. Entre sus miembros se contaban algunas de las familias más ricas de Venezuela, cuya fortuna tiene su origen en la venta de autos¹³. Esta red les proporcionaba a las empresas extranjeras conocimiento sobre la escena política local y acceso a la misma, aunque ADAM, en sí misma, ejercía poca influencia sobre las políticas.

La implementación de la política

Espera y verás: la oposición inicial

Como se ha visto, el auge económico hizo que tanto las CTNs automotrices como los capitalistas locales sintieran reticencias acerca de la posibilidad de invertir en los proyectos programados. Mientras que las CTNs trataban de ajustar sus inversiones locales a sus planes globales, los capitalistas

¹² Para la política automotriz en la planificación en democracia, v. Blank (1969; 1974).

¹³ Entre ellas están las familias Phelps, Degwitz, Planchart, Di Mase, Cisneros, Duarte, Zingg, Vallenilla y Mendoza. Para un recuento periodístico de los inicios del negocio de distribución de vehículos, v. Schael (1969).

vernáculos intentaban adelantar negocios en las esferas del comercio, bienes inmuebles y banca. Las transnacionales del automóvil procedían con especial cautela en lo tocante a futuras inversiones en Venezuela. Cada nueva inversión debía evaluarse con más cuidado que la anterior, dado que las operaciones locales tenían que corresponderse con sus nacientes estrategias globales. Por ejemplo, la posición de la casa matriz de GM, en Detroit, con respecto a su política de inversión en Venezuela era simple: “La GM no invertirá allí un centavo en estos momentos” (entrevista confidencial, Chicago 1980). El auge del petróleo, al debilitar a las transnacionales del automóvil, las animó a desafiar de modo más directo la política automotriz del gobierno venezolano.

Este desafío, por supuesto, no podía ser frontal. Venezuela era un mercado excepcionalmente lucrativo. Mientras que las ventas de autos se desplomaban en todo el mundo debido a los incrementos de los precios petroleros, la tasa de crecimiento en Venezuela era de 20%, y la de la producción local de 12,8%. La diferencia entre la producción y la demanda se compensaba con un gran incremento de las importaciones. Las CTNs sentían cada vez más la necesidad de asegurar una posición en el mercado venezolano. Combatieron la política vigente y trataron de aumentar sus ganancias oponiéndose al control de los precios. Argumentaban que sus ganancias disminuían como resultado de los controles de precios de 40% de los autos que producían -los autos “regulados”, sin aditamentos de lujo-, por lo cual aumentaron drásticamente el precio de los vehículos de lujo no regulados. A su vez, el Gobierno, también en respuesta a la creciente demanda local de autos regulados, exigió a la mayoría de los fabricantes que aumentaran a 50% la cuota local de producción regulada. La demanda superaba a la oferta de todas las categorías de vehículos en el mercado venezolano, que se expandía con rapidez.

Esta batalla en torno de los precios fue el origen de un desafío más básico. Las transnacionales argüían que sin ganancias adecuadas no podrían ampliar la producción de vehículos de forma que satisficiera la demanda ni planificar inversiones en el proyecto del tren de conducción. Para sustentar sus argumentos con acciones, las CTNs dejaron de promover la producción de nuevas partes y piezas por parte de las firmas fabricantes. Como la producción de partes y piezas de vehículos solo podía ampliarse con la guía de las CTNs, ello indicaba un claro desafío a los objetivos relativos al contenido local enunciados en la política automotriz. Al mismo tiempo, las compañías de ensamblaje ejercieron una presión exitosa en donde había que ejercerla. Para sorpresa de muchos de los funcionarios gubernamentales directamente involucrados en la puesta en práctica de la política, el ministro de Fomento, José Ignacio Casals, redujo significativamente a estas compañías la exigencia de contenido

local en camiones y ómnibus. Las empresas, atentas a la situación, entendieron este cambio, que no encontró oposición -y fue ejecutado mediante varios oficios de bajo nivel jurídico- como un mensaje revelador: la ley se aplicaría con “flexibilidad”¹⁴.

Propuestas para el futuro..., ¿o para el presente?

El proceso de licitación de los grandes proyectos automotores se vio seriamente afectado por estas respuestas convergentes del capital local y extranjero ante el auge petrolero. El Gobierno había dado casi cinco meses a los inversionistas privados para que presentaran sus ofertas (del 15 de octubre de 1975 al 1º de marzo de 1976). Ya en diciembre de 1975, cuando era obvio que serían pocos los proyectos, el Gobierno se vio obligado a revisar el espíritu, ya que no la letra, de sus lineamientos. Casals admitió que una vez seleccionadas, las CTNs pudieran buscar socios locales para sus proyectos. Por tanto, en ausencia de competencia local en pos de participar en empresas conjuntas, las CTNs consolidaron su control y se vieron con las manos libres para diseñar los proyectos a su antojo, sin tener que ceder a las presiones del capital local.

No obstante, las CTNs no satisfacían las demandas del Gobierno. El requerimiento básico -que Venezuela produjera motores e incorporara 90% del valor de los vehículos en 1985- colocaba a esas empresas en una posición incómoda con respecto a sus nacientes estrategias globales. Las CTNs abordaron a varios funcionarios oficiales de primer nivel para ganar su apoyo en la búsqueda de un cambio de política. Su petición encontró más que un simple apoyo en el ministro Lauría, el asesor económico más cercano al presidente Pérez y ex-presidente de un importante banco local. Se ha dicho que en una reunión con representantes de las Tres Grandes, que afirmaban que era una locura fabricar motores en el país, les aconsejó que sabotearan la política: “Ante una locura propongan otra locura”. En otra reunión, un representante de la Renault recibió el mismo mensaje¹⁵.

Las licitaciones

Los fabricantes siguieron el consejo de Lauría. Le presentaron al Gobierno propuestas tan inadecuadas que lo obligaron a enfrentar las consecuencias de sus decisiones previas. Cuando el

¹⁴ Esta interpretación tiene su base en numerosas entrevistas a ejecutivos de Favenpa, la GM, CIVA y el Ministerio de Fomento.

¹⁵ Entrevistas privadas a varios funcionarios gubernamentales y líderes del sector privado.

Gobierno limitó las propuestas para los motores de mayor volumen a las compañías ya establecidas, aumentó el ascendiente de éstas y redujo al mínimo la competencia. En ese contexto, las compañías más poderosas presentaron las peores ofertas, y las débiles, las mejores. Toyota, que contaba con asesores bien informados e influyentes socios locales (la familia Behrens), decidió arriesgarse y presentar una propuesta. Sin embargo, por ley, su propuesta tenía que restringirse a la categoría de vehículos que ya producía en el país (vehículos rústicos con tracción en las cuatro ruedas), de modo que su oferta no resultó aceptable. Los competidores por el motor de cuatro cilindros fueron Renault y Fiat. VW no presentó proyecto. La casa matriz decidió no hacerlo porque ya había realizado grandes inversiones en Brasil y México. Como resultado de todo lo anterior, el Gobierno invitó a Hillman a presentar una propuesta, pero esta compañía también declinó. La propuesta bien diseñada de Renault ofrecía un motor técnicamente avanzado, aunque costoso (con un bloque ligero de aluminio). Fiat propuso un motor convencional y ya probado, pero su plan era incompleto. Para el motor de diesel sólo tres de los siete participantes brindaron suficiente información: Fiat, Daimler-Benz y Pegaso. Mack, Cummins, Ferrostaal y Steward and Stevenson ni siquiera cumplieron los requisitos mínimos de la licitación.

Todas las propuestas presuponían la fundación de una fábrica de cajas de velocidades, una fundición y una forja para producir el bloque de diversos motores y otros componentes del tren de conducción. Pero no se recibió ninguna propuesta aceptable para esos proyectos, lo cual constituía un inconveniente de importancia. Sin la fundición y la forja, los fabricantes extranjeros de transmisiones podían limitarse a terminar en un taller de maquinado de las plantas que poseían en Venezuela sus propios componentes importados. Un asesor extranjero, que había contribuido a formular la política automotriz desde su inicio en 1962, manifestó que el ministro de Fomento no le había concedido suficiente importancia a dichos proyectos y no había dado los pasos necesarios para lograr propuestas adecuadas por parte de las compañías¹⁶.

Selecciones iniciales, demoras continuas

Ante esa situación, se extendió el plazo de licitación hasta junio de 1976 y se instó a las compañías a mejorar sus propuestas. El Gobierno aclaró que no aceptaría críticas a la política vigente por parte de quienes presentaban propuestas, las cuales debían estar completas. Sobre la base de los proyectos

¹⁶ Entrevista confidencial (1978).

revisados, se realizó una selección preliminar. La gran ganadora fue Fiat: se le concedió el motor de auto de cuatro cilindros y el motor B3 mediano de camión (para utilizar en camiones de entre 9,3 y 17 toneladas de peso muerto). Se rumoreó que esta selección reflejaba la influencia que tenía en el Gobierno la familia Di Mase, socia de Fiat en su planta de ensamblaje local y tradicional patrocinadora de AD. Además, Pérez había dado el paso inusual de establecer contacto personal con Agnelli, presidente de Fiat, durante una reciente visita a Italia. El motor grande para los camiones B4 (de más de 17 toneladas) recayó en Mack Truck Company, cuyo socio local era la prominente familia Duarte. Esta licencia se reconoció legalmente mediante un acta convenio firmada en mayo de 1977.

En lo que respecta a los motores para autos mayores, técnicos del Gobierno, con el apoyo de una consultora estadounidense, recomendaron que se seleccionara a Chrysler para el de ocho cilindros y a American Motors para el de seis. Sin embargo, algunos líderes gubernamentales protestaron contra esta recomendación. Argumentaron que no se podía confiar en ese momento con que dichas compañías realizaran grandes inversiones en Venezuela, dadas las dificultades financieras de Chrysler en EEUU y el papel secundario que desempeñaba AMC como productora internacional.

Nuevos lineamientos

En consecuencia, las decisiones básicas relativas a los motores sufrieron demoras. Entonces, a fin de economizar en el consumo de gasolina, el Gobierno ordenó que todos los camiones comerciales debían usar motores diesel. Este cambio abrió una nueva ronda de licitaciones. Uno de los motores de ocho cilindros se había diseñado originalmente (un 70%) para camiones medianos. Ahora ya no había necesidad de producir dos motores de ocho cilindros. Como observaron entonces algunos hombres de negocios locales, las Tres Grandes ya no podían “repartirse la torta”.

En la cúpula gubernamental el entendimiento implícito había consistido en que las Tres Grandes compartirían el mercado venezolano. Ford recibiría el motor de gasolina de ocho cilindros para vehículos comerciales; y Chrysler y GM, los motores de ocho y seis cilindros para automóviles¹⁷. Al haber un solo motor de gasolina de ocho cilindros, el mercado no podía dividirse como se preveía originalmente. Ahora el plan sólo incluía dos motores para dos mercados diferentes: un motor de ocho cilindros para

100.000 vehículos y un motor de seis cilindros para 40.000.

¹⁷ Entrevistas confidenciales.

El Gobierno ya no podía armonizar fácilmente a las tres compañías, que en conjunto controlaban 75% del mercado local. Chrysler había presentado la mejor oferta para el motor de ocho cilindros, pero enfrentaba serias dificultades financieras. American Motors había presentado la mejor oferta para el motor de seis cilindros, pero no era una compañía fuerte en el plano internacional ni en el nacional. GM, líder mundial en automóviles, había presentado la peor propuesta y no había dado muestras de querer cooperar con el Gobierno. Ford, cuyo proyecto para el motor de ocho cilindros solo cedía ante el de Chrysler, no contaba con un motor aceptable de seis cilindros. El Gobierno se vio atrapado en un impase. Propuso entonces que Chrysler y Ford produjeran en conjunto un motor de ocho cilindros y otro de seis cilindros en una misma planta. Las dos compañías se repartirían el mercado a partes iguales. En castigo a su actitud recalcitrante, se excluiría a GM. Sin embargo, Ford y Chrysler decidieron que la propuesta resultaba inaceptable. Ninguna de las dos compañías quería operar con la otra, y Ford todavía esperaba obtener los derechos exclusivos para fabricar el motor de ocho cilindros, que era el más lucrativo.

El impase se prolongó. No obstante, al objetar cualquier decisión concreta, en los hechos las tres compañías actuaban de forma concertada. Al bloquear la puesta en práctica de la política automotriz, de hecho seguían el camino que buscaban, evitar las inversiones en Venezuela, al tiempo que preservaban el derecho a permanecer en el país en calidad de ensambladores e importadores en un rentable periodo de auge.

La batalla por lograr buenas propuestas

Durante todo este proceso la imagen pública del Gobierno como actor poderoso e imparcial empezó a desmoronarse. Tratando de aparentar que no cedía a las tradicionales consideraciones de interés político, había intentado demostrar por todos los medios que podía juzgar las propuestas de motores sobre la sola base de sus méritos técnicos. La comisión evaluadora tenía sus oficinas en un edificio aparte del Ministerio de Fomento y mantenía su ubicación en secreto para evitar el cabildeo de las empresas. Parece ser que esta comisión de hecho seleccionó las mejores propuestas, pero escogió los proyectos de las compañías más débiles.

Las decisiones se tomaron en la cúpula del Gobierno sobre bases que no eran las técnicas. La selección de Fiat lo hizo evidente. Y la negativa a aprobar las propuestas de American Motors y Chrysler, aunque quizás razonablemente justificada en términos de la necesidad de escoger a

compañías poderosas, también reflejó el significativo peso político de las empresas excluidas. Se puso en evidencia que la cuestión no consistía simplemente en seleccionar los mejores motores. Para el Gobierno el nuevo reto consistía en lograr que dichas compañías presentaran, si no las mejores, al menos aceptables propuestas.

Durante casi un año el Gobierno hizo poco por cambiar la situación. Pero el 26 de junio de 1977 el nuevo ministro de Fomento (el tercero en un año), Luis Alvarez Domínguez, anunció que a fin de promover el ahorro de combustible, se había decidido que Venezuela no produciría el motor de ocho cilindros. Esta decisión redefinió las licitaciones de los dos motores de gasolina de seis cilindros, al ampliar su mercado potencial y, por tanto, su atractivo. La intención era equipar con estos motores no solo los autos de pasajeros, sino también los camiones de cuatro toneladas producidos conjuntamente con Ecuador. Aprovechando el año de demora, el Gobierno añadió varios requerimientos técnicos: bajo consumo de combustible, control de la contaminación según las normas de California, tecnología avanzada y empleo de aluminio en los componentes. Este cambio debilitaba a Ford y fortalecía a GM. Mientras que Ford no contaba con un motor de seis cilindros de esas características, GM tenía uno ya probado que podía satisfacer los requerimientos. Algunos técnicos opinaron en confianza que esta decisión tenía motivos políticos. Argüían que en vez de especificar el número de cilindros, el Gobierno debía haber trazado un conjunto de criterios de funcionamiento, incluido el de la eficiencia en el consumo. No obstante, si bien es cierto que la definición de criterios hubiera permitido que existiera competencia entre diferentes tipos de motores, a despecho del número de cilindros, la tendencia mundial era incrementar la producción de motores más pequeños y livianos. El Gobierno dio un paso adicional dirigido a aumentar la competencia al invitar a Renault a unirse a las Tres Grandes en una nueva ronda cerrada de propuestas para el motor de seis cilindros. American Motors fue excluida. Al invitar a Renault la intención no era solo darle la oportunidad de permanecer en el mercado venezolano (había perdido ante Fiat en la competencia por el motor de cuatro cilindros), sino también obligar a las empresas estadounidenses a hacer mejores propuestas.

Inseguridad jurídica

Al principio, la inclusión de Renault pareció ser una simple maniobra para aumentar la competencia. Las compañías estadounidenses creían contar con seguridades de que, en última instancia, la

selección las favorecería, pero otro conjunto de decisiones gubernamentales enturbió la situación y revelaron hasta qué punto el Gobierno era coherente con su política de manera *ad hoc*. La primera de las decisiones se produjo a principios de septiembre de 1977. El Ejecutivo revocó de manera unilateral la selección de Mack Truck Company para producir el motor diesel grande, y concedió ambos motores y los derechos de ensamblaje de un camión y un ómnibus a Pegaso, una compañía perteneciente a la estatal española Enasa, que atravesaba serias dificultades financieras. La decisión coincidió con la visita a Venezuela del rey de España, y estuvo acompañada de otras medidas que le brindaban a ese país importantes oportunidades para invertir en Venezuela.

Esta decisión, tomada al calor del momento, reflejaba la determinación de AD de fortalecer sus lazos con el joven régimen democrático español. Pocos meses después, el ministro de Fomento Álvarez Domínguez reconoció que la selección de la Pegaso había tenido motivaciones políticas. En un memorando que preparó para su sucesor, explicaba que la elección de la Pegaso “estuvo determinada en parte por la necesidad política de fortalecer las relaciones con la nueva democracia española” (*Latin American Economic Report*, 13/4/1979). El hecho de que Mack se hubiera contentado con el incremento de las importaciones de camiones como resultado del auge del comercio, y de que no hubiera dado ningún paso para producir el motor que se le había concedido en 1975 le facilitó al Gobierno volver sobre su decisión y le impidió a Mack oponerse a esa reversión.

La concesión a la Pegaso no solo violaba el acta convenio firmada el 9 de mayo por la cual se concedía a Mack la producción del motor diesel grande, sino también la ley de la política automotriz. Según dicha norma, no podían establecerse en Venezuela nuevos modelos de vehículos ni nuevos ensambladores. Mientras que en el caso de los automóviles el modelo se define por el motor y el tren de conducción, en el de los camiones y autobuses se define por la carrocería. Por tanto, al concederle a Pegaso el derecho a producir ómnibus y camiones, de hecho se permitía el establecimiento de un nuevo ensamblador y la introducción de nuevos modelos. Los industriales venezolanos quedaron atónitos. El 9 de mayo, Mack, Fiat y Pegaso ya habían firmado un convenio para producir motores diesel en la región de Guayana. Sin embargo, la planta de producción de motores diesel de Pegaso se diseñó para construirla en el estado andino de Táchira, decisión que implicaba la disolución del complejo diesel de Guayana.

Pocos días después, el 13 de septiembre, tras meses de arduas negociaciones, las cinco naciones miembros del Pacto Andino firmaron en Quito un programa común para la producción de vehículos que se llamó Decisión 120. Este programa complejo planteaba que las naciones firmantes se

comprometían a no permitir la introducción de nuevos modelos de vehículos. Por tanto, la selección de Pegaso también violaba el espíritu del programa que había sido ampliamente discutido y que estaba a punto de firmarse. Inmediatamente antes de la firma de la Decisión 120, Favenpa había dado a publicidad una protesta contra el Gobierno por aceptar la tarifa externa común incluida en el programa. Los industriales locales se habían quejado de que la tarifa propuesta, de alrededor de 40%, era demasiado baja para proteger la industria venezolana. Mientras que en los otros cuatro países la escasez de divisas y los controles sobre su cambio resultaban efectivos para proteger a la industria local contra las importaciones, en Venezuela la abundancia de divisas y la existencia de libre convertibilidad hacían necesario imponer tarifas altas. Aunque los industriales locales habían expresado estas preocupaciones por intermedio de sus asociaciones a funcionarios gubernamentales clave (el 22 de julio Favenpa, CIVA, la Cámara Nacional de Importadores y Distribuidores de Repuestos Automotores Canidra y la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, enviaron un documento a Reinaldo Figueredo, presidente del Instituto de Comercio Exterior), el Gobierno no había prestado atención a sus demandas. El acuerdo estaba a punto de firmarse y no se había realizado ningún cambio. De ahí que Favenpa estableciera contacto con los periodistas responsables de las secciones económicas de los periódicos más importantes y les pidiera que destacaran la información sobre el tema¹⁸.

Pérez se contrarió el 11 de septiembre (domingo) al toparse en los periódicos con la avalancha de críticas públicas. Convocó con urgencia a los presidentes de CIVA y Favenpa, “estuvieran donde estuvieran”. Concentró su ataque contra César Rodríguez, de Favenpa, y acusó a la asociación de ser un instrumento de las empresas transnacionales y de tener planes para socavar el Pacto Andino. Rodríguez rechazó la acusación. Planteó que Favenpa representaba a los industriales nacionales y que no estaba interesada en socavar el Pacto Andino, sino en defender a la industria local. Se dice que entonces Pérez modificó sensiblemente su posición. Le aseguró a Rodríguez que intentaría modificar la tarifa, aunque no podía prometer que cambiaría de manera unilateral la tarifa común. Mientras tanto, afirmó, la industria local sería protegida por todos los medios posibles, incluida la concesión de licencias para las importaciones¹⁹.

Se dice que al percibir la receptividad presidencial, Rodríguez tomó la ofensiva. Expresó que el Gobierno era el que socavaba el programa automotor al violar sus principios. Explicó que la decisión

¹⁸ Periódicos del 10 de septiembre y entrevistas.

¹⁹ Entrevistas confidenciales.

con respecto a Pegaso no solo violaba el espíritu del programa que estaba a punto de firmarse en Quito, sino también la letra de la ley venezolana que regulaba la política automotriz. Pérez, sorprendido, se volvió hacia su ministro de Fomento, quien admitió las palabras de Rodríguez. Como resultado de este intercambio, Pérez manipuló deliberadamente la ley sobre la industria automotriz: emitió una modificación mediante la cual se le concedía al Ejecutivo poder discrecional para permitir la introducción de nuevos modelos de vehículos. Este decreto se publicó al día siguiente (12 de septiembre) pero con fecha del 9 de septiembre, para hacerlo coincidir con el anuncio de la decisión sobre Pegaso²⁰.

Si bien esta modificación autorizaba al Gobierno a introducir nuevos modelos de vehículos, la subsiguiente firma de la Decisión 120 se lo prohibía por ley. Por tanto, la modificación de la ley nacional solo resultaba aplicable a la selección de Pegaso, del 9 de septiembre, cuatro días antes de que se firmara la Decisión 120. Pero el día 16 el Ministerio de Fomento emitió un oficio mediante el cual se permitía la producción local del R30 de Renault. Favenpa envió una carta al ministro Álvarez Domínguez en la que informaba que dicha decisión constituía una violación de la política vigente. El ministro no respondió.

Este conjunto de acontecimientos puso de manifiesto lo que el sector privado denominaba la creciente "inseguridad jurídica" que caracterizó al periodo. El desprecio que mostraba el Gobierno por las reglas del juego acentuaba la debilidad colectiva del sector privado y lo dividía, al poner de relieve los beneficios implicados en aspirar al acceso individual al Ejecutivo. A pesar del manifestado compromiso ideológico con una planificación concertada, las relaciones entre el sector privado y el Estado se centraron en torno a la práctica de negociar excepciones individuales y garantizar privilegios particulares.

Los técnicos del Ministerio de Fomento: política vs. Profesionalidad

Las CTNs automotrices contribuyeron a la situación al influir para lograr el favor del Estado. Se movieron lentamente, de una simple oposición a la política trazada, hasta la propuesta explícita de alternativas. Ford intentó negociar directamente con el presidente. Henry Ford II viajó a Venezuela y ofreció una ampliación de sus inversiones y la apertura de una fábrica de ruedas de aluminio para la exportación (*El Universal*, 18/9/77). Según algunas fuentes, tanto Ford como GM adelantaron que si

²⁰ Entrevistas confidenciales. V. "resolución Nº 4.970, 9 de septiembre de 1977", *Gaceta Oficial*, 12/9/1977.

obtenían la licitación para la producción de motores, cabildearían en el Congreso estadounidense a favor de que se incluyera a Venezuela y a Ecuador en el sistema preferencial de comercio de la Ley de Comercio Exterior de EEUU [U.S. Foreign Trade Law]. La exclusión de Venezuela de dicha norma afectaba a sectores clave como la industria petroquímica.

Mientras el sector privado se sentía preocupado por la creciente inseguridad jurídica, a los técnicos gubernamentales les inquietaba cada vez más su poca influencia en el proceso de toma de decisiones. En un intercambio informal con un ministro, uno de ellos se quejó de que sus opiniones no se tenían en cuenta. El ministro replicó rápidamente: “Mire, amigo, usted está aquí para entregarnos sus informes técnicos, no para tomar decisiones”. Y a continuación añadió: “Si las decisiones se tomaran sobre la base de criterios técnicos solamente, no habría necesidad de ministros” (entrevista confidencial 1978). Por supuesto, en sí misma esta posición era razonable. Pero las razones de Estado no alcanzaban a ocultar los vínculos de complicidad que unían a políticos y hombres de negocios en una red tejida para privilegiar intereses privados.

Con gran frecuencia esta red de complicidad incluía a técnicos gubernamentales. “En toda la América Latina”, dijo Max Nolff, un consultor internacional de experiencia, “solo los ministros que tienen técnicos en los cuales confían por completo pueden tomar decisiones sobre la base de recomendaciones técnicas” (entrevista 1978). Un alto funcionario del departamento automotor del Ministerio de Fomento expresó una opinión similar: “Mire, el estilo errático de Carlos Andrés Pérez es su manera de protegerse de gente en la cual no puede confiar. Cambia de planes constantemente para volverse impredecible”. Y añadió: “La gente le puede decir 'Locovén', pero tiene que gobernar como un loco para afirmar su poder sobre los que lo rodean”²¹.

No obstante, en este caso no resultaba claro si el presidente empleaba su poder para impulsar la política automotriz o para perseguir objetivos ajenos a ella. En este periodo las CTNs ejercieron una intensa presión sobre el Estado. Las mismas compañías que en un inicio habían mostrado poco interés por invertir en Venezuela proponían ahora grandes planes y empleaban su poder para influir sobre el curso de los acontecimientos. Todo el mundo espiaba los movimientos de todo el mundo.

Esas presiones se sentían cada vez más en el Ministerio de Fomento. El mismo técnico que reconoció que la aparente arbitrariedad de Pérez tenía cierta lógica, afirmaba que AD trataba de armarle una trampa para quitarle su empleo. No era miembro de AD, y había conservado el puesto gracias a su

²¹ El apelativo “locovén”: *loco* + *ven* (por el sufijo usado frecuentemente en los nombres de compañías estatales) (p. ej., Petroven). Entrevista confidencial 1978.

honestidad y competencia técnica. La menor muestra de error podía servir de justificación para su reemplazo. Me explicó que en fecha reciente la esposa de un prominente líder de AD le había pedido que le concediera un permiso para importar un auto. Se negó. En cuanto la mujer se fue, su jefe (líder de AD) fue a su oficina y le dijo: “Mira, negarle ese auto te puede costar el puesto”. Pero su propia interpretación del suceso era que se trataba de una trampa para librarse de él. “Si le concedo el permiso para importar el auto”, dijo, “tendrían una excusa para echarme y poner aquí a un adeco que haría lo que ellos quisieran, ahora que se van a tomar decisiones capitales que suponen millones y millones” (entrevista confidencial 1978).

La permanencia en Fomento del personal técnico de la industria automotriz y el relativo aislamiento político de dicho ministerio durante varios periodos de gobierno, fueron excepcionales en Venezuela. Esa tradición comenzó a principios de los años 60. En esa época, Hugo Pisani, simpatizante de Copei, estaba a cargo del Departamento Automotriz del Ministerio de Fomento. Cuando Leonardo Montiel Ortega, líder de la URD, recibió el nombramiento de director de industrias de ese ministerio, se esperaba el despido de Pisani. Por el contrario, y oponiéndose a la presión de su partido, Montiel Ortega ratificó a los jefes de departamentos. Según Pisani, “Montiel Ortega dio inicio a una tradición. Desde entonces, todos hemos mantenido nuestros empleos gracias a nuestra honestidad” (entrevista 1977). Cuando Pisani decidió dedicarse a la práctica privada de su profesión, se le pidió que sugiriera un sustituto. El empleo quedó en manos de su elegido, Mariano Crespo, otro simpatizante de Copei. Cuando Crespo, a su vez, decidió unirse a las filas del sector privado, también se le pidió que propusiera a su reemplazante. Su candidato, Roberto Madero, había sido miembro del Partido Comunista y se había graduado de ingeniero en Checoslovaquia. Madero también fue nombrado en el cargo.

Todos estos técnicos estaban de acuerdo en que habían obtenido y conservado sus puestos gracias a una combinación de experiencia, conocimientos técnicos y honestidad. “El mundo de la industria automotriz venezolana es pequeño”, afirmó Pisani. “Si uno hace algo que no debe, todo el mundo se entera inmediatamente” (entrevista 1977). Pero era también un mundo complicado. A diferencia de otros sectores industriales, donde unas pocas empresas controlan la producción, en el sector automotor hay un cierto grado de complejidad y competencia. “Sucedió que tanto los partidos de gobierno como las compañías privadas preferían que hubiera gente como nosotros en el ministerio”, explicaba Mariano Crespo. “Al menos sabían qué podían esperar de nosotros” (entrevista 1977).

Sin embargo, el Ministerio de Fomento tenía un déficit de personal y de equipos, y los salarios de sus

empleados eran bajos. Durante el auge del petróleo, con la abundancia de ingresos gubernamentales, los mismos que eran responsables del funcionamiento normal del Ministerio tenían que encargarse de las negociaciones de las propuestas presentadas para la industria automotriz. El Gobierno adoptó pocas disposiciones para permitirle al personal del ministerio evaluar los proyectos sobre la base de los profundos cambios que estaban teniendo lugar en la estructura de la industria automotriz mundial y en la economía del país. El personal estaba sobrecargado y en buena medida tenía que recurrir, para obtener la información relativa a la dirección futura de la industria automotriz internacional, a las propias compañías automotrices interesadas. Además, carecía del equipamiento necesario para monitorear y evaluar adecuadamente el cumplimiento por parte de los fabricantes de partes y piezas de las nuevas regulaciones sobre contenido local, de cuyo éxito dependían los objetivos futuros de la fabricación de componentes importantes. En un momento Favenpa, a sugerencia de los intereses de Sivensa representados en ella, se ofreció incluso a ayudar al Ministerio a crear un sistema computarizado que le permitiera contar con información actualizada sobre el sector automotor.

Por tanto, si bien tenían a su favor cierta dosis de estabilidad y de protección contra las presiones políticas, y aunque sus decisiones ejercían un efecto sobre las operaciones de rutina de las compañías automotrices, los técnicos contaban con un poder limitado para formular o poner en práctica de manera efectiva la política industrial automotriz. Lo que se tomaba por respeto del Ejecutivo a su capacidad tecnológica era, en realidad, un medio para producir un discurso técnico y un conjunto de prácticas administrativas que servían para amortiguar y legitimar los esfuerzos del partido político dominante encaminados a articular intereses políticos y económicos²².

La política al mando: nuevas decisiones

También existían medios directos para ejercer control político sobre la dimensión técnica de la toma de decisiones. Los partidos controlaban las decisiones a través de los puestos más altos del Ministerio de Fomento (ministro, director de Industria y director de Comercio). Quienes ocupaban estos puestos aunque no tenían que ser miembros eran leales al partido de gobierno. Las condiciones esenciales eran dar prioridad a las consideraciones políticas y apoyar al presidente. Además, todas las decisiones económicas de importancia las debatía y finalmente las adoptaba el gabinete económico (un subgrupo dentro del gabinete compuesto por los ministros involucrados en los asuntos económicos y

²² Dinkelspeil llega a la misma conclusión a partir de un agudo análisis de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) (1967).

el presidente). En este alto nivel el partido gobernante, por intermedio de los líderes de sus diversas facciones, y la elite del sector privado, representada directamente o por políticos de su confianza, decían la última palabra en lo relativo a iniciativas de la política automotriz.

No obstante, las decisiones respecto a Pegaso y Renault se tomaron por fuera de estos canales. A diferencia de decisiones previas, la elección de Pegaso fue efectuada por el presidente. La inclusión de Renault en la licitación del nuevo motor también se decidió sin consultar al gabinete económico. De ahí que creciera la preocupación de que se tomarían decisiones de importancia de modo unilateral. Se interpretaban las presiones que recibía el personal técnico del Ministerio de Fomento como una señal de la creciente corriente para desconocer los canales normales de toma de decisiones y para privatizar el proceso en grado significativo. La importancia de los nuevos proyectos hacía que esta posibilidad resultara muy inquietante; estaban en juego proyectos multimillonarios que abarcaban no solo el mercado venezolano, sino el andino. La oferta de Ford a Pérez de producir en Venezuela ruedas de aluminio para la exportación causó mucha preocupación sobre el futuro de la política automotriz.

Retórica y política: conflictos en el seno de la Triple Alianza

La amplitud y la expresión de esta preocupación sobre una posible redefinición de la política automotriz se revela en una discusión que tuvo lugar durante una reunión celebrada en noviembre de 1977, organizada por el Consejo Venezolano de Industria para evaluar la Decisión 120; a ella asistieron funcionarios gubernamentales, líderes del sector privado y hombres de negocios. Después de un día de discusiones formales se ofreció un convite. Aunque estaban presentes personalidades políticas de alto nivel, los hombres de negocios se reunieron en especial en torno de Roberto Madero, el jefe de la sección automotriz del Ministerio de Fomento (Dirección General de Materiales y Equipos de Transporte). Esa ocasión les permitió hablar con él de modo informal, en su propio terreno, sobre problemas relativos a regulaciones y decisiones gubernamentales. Si bien el ambiente era cordial, mantenían una distancia prudente, la cual contrastaba con el intercambio distendido que imperaba en las conversaciones que sostenían entre ellos mismos y con muchos líderes políticos.

La atmósfera se enrareció cuando Henrique Machado Zuloaga, director del grupo Sivensa, se acercó a Madero y le expresó sus objeciones al proyecto de Ford. Planteó que exportar ruedas de aluminio podría perjudicar mucho a los productores locales de partes y piezas. Ford podría reducir sus compras

de partes y piezas de los fabricantes locales en un valor equivalente al de las ruedas que produjera y exportara (la deducción del contenido local de sus autos que podía hacer por esta vía llegaba a 20%). Machado Zuloaga insistió, mientras que los reunidos a su alrededor escuchaban con atención, en que exportar las ruedas equivalía a exportar energía eléctrica y bauxita venezolanas baratas: el estampado de las ruedas no empleaba mucha mano de obra. Si se llevaba a cabo el proyecto, Venezuela seguiría siendo un exportador de materias primas bajo un ropaje industrial. Finalmente, para hacer irrefutables los argumentos que le daba al representante del Gobierno, Machado Zuloaga invocó un principio central de la doctrina de la industrialización promovida por el Estado: el Estado protege el interés nacional mediante el fomento de la industria local.

La razón de ser de la política automotriz ha sido, es, y deberá seguir siendo, la industrialización de Venezuela. La política automotriz intenta desarrollar la industria local y expandir los productores de partes y piezas automotrices. Pero si Ford exporta esas ruedas nuestra industria nacional va a ser socavada. Si lo que queremos es exportar valor, el mejor negocio que podemos hacer es exportar la gasolina que está dentro del tanque de gasolina de un carro.

Madero escuchaba atentamente. Machado había enmarcado su crítica en el código nacionalista dominante, promovido por él mismo. Ambos sabían también -sin necesidad de explicitarlo- que Rudeveca, la firma de Henrique Machado, productora de ruedas de acero, se vería afectada de concretarse el proyecto de Ford. En su cuidadosa respuesta, Madero se refirió a los aspectos técnicos del tema. Planteó que la fábrica de ruedas no conllevaría una reducción de la incorporación de contenido local, porque una vez que una pieza se admite como parte del contenido local no se puede desincorporar. Si bien la fábrica de ruedas de Ford podía inhibir las inversiones en partes y piezas de fabricación local, lo cierto era que esta compañía necesitaba encontrar vías para mantener sus ganancias. Por último, si era necesario, los productores de partes y piezas podían venderle su producción a los ensambladores.

En respuesta, Machado Zuloaga le planteó que la importancia de aprobar la planta de ruedas de aluminio no solo residía en que reduciría la compra por parte de Ford de las ruedas de Rudeveca, sino en que sentaría un precedente negativo frente a otros ensambladores. La aceptación gubernamental de la rentabilidad como justificación de la planta, contradecía sus propios objetivos de política. Si las ganancias eran el punto decisivo, entonces le presentaría al ministerio un proyecto rentable que no desarrollaba la capacidad industrial de la nación.

Yo no lo había hecho antes porque sé que si lo hiciera, me sacarías a patadas de tu oficina, porque no querrías que me burlara de ti. Pero ahora lo haré. Presentaré un proyecto para producir y exportar láminas de acero con algunos huecos y tornillos. Este proyecto te dará un argumento para objetar al plan de la Ford. Así podrás decir que así como el plan de Machado fue rechazado, el proyecto de la Ford debe ser rechazado.



Izquierda: Roberto Madero, jefe de la dirección automotriz del Ministerio de Fomento. (Revista Automotriz.) Derecha: Henrique Machado Zuloaga, director del grupo Sivensa. (Archivo *El Nacional*.)

Cuadro 8

Firma	1975				1978			
	Pasajeros	Utilitarios	Comercial	Total	Pasajeros	Utilitarios	Comercial	Total
GM	19.797	—	9.906	29.703	28.029	—	12.226	40.255
Ford	25.270	—	16.491	41.761	39.881	—	23.916	63.797
Chrysler	28.772	—	7.820	36.592	19.626	—	16.438	36.064
AMC	1.259	4.537	—	5.796	—	6.037	—	6.037
Fiat	2.117	—	315	2.432	4.200	—	738	4.938
Renault	5.978	—	—	5.978	6.564	—	—	6.564
VW	6.158	—	540	6.698	5.002	—	—	5.002
Mercedes Benz	1.607	—	410	2.017	165	—	21	186
Toyota	—	5.602	—	5.602	—	9.241	—	9.241
Nissan	—	3.765	—	3.765	—	6.871	—	6.871
Mack	—	—	801	801	—	—	1.606	1.606
Total de las firmas anteriores	90.958	13.904	36.283	141.145	103.467	22.149	54.945	180.561
Total de las 15 firmas*	92.079	14.422	37.414	143.915	103.467	22.802	56.409	182.678

Producción de vehículos en Venezuela, 1975-1978

1975 1978

Fuente: Coronil y Skurski 1982:73, sobre la base de los informes anuales de CIVA y los informes estadísticos del Ministerio de Fomento.

*Incluye la producción de las siguientes marcas: Bluebird, Reo, Land Rover, Hillman e International Harvester.

En esta ocasión Madero escuchó y no respondió. Su silencio parecía decir que acordaba con los argumentos de Machado. Además, se mostró dispuesto a debatir el asunto en el futuro. La conversación se desplazó después hacia otros temas. Machado expresó su preocupación por el hecho de que aunque Venezuela producía ejes (Danaven, de su propiedad, era el mayor productor local), los demás países del Pacto Andino no los reconocían como parte del tren de conducción. “Venezuela podría terminar compitiendo con ejes más baratos importados de esos países.” Madero le garantizó que eso no ocurriría.

Durante el auge petrolero había aumentado considerablemente la importación de automóviles, lo que había inquietado a los productores locales de partes y piezas. Machado hizo una referencia crítica a la importación de 4.000 Chevrolet Caprice en 1976. Madero contestó: “No tiene importancia que unos cuantos venezolanos ricos se hayan gastado 85.000 bolívares [unos 19.000 dólares] para comprarse un Caprice importado”. José Bisogno, alto empleado del subgrupo Procesa dedicado a las partes y piezas, y que formaba parte de Sivensa, argumentó, para apoyar a Machado, que 4.000 autos significaban 5.000 ruedas, lo cual equivalía a la producción mensual de Rudeveca. Madero respondió: “¿La producción de ustedes ha disminuido últimamente?”. Bisogno replicó: “No, pero no ha

aumentado. La situación es grave. Estas importaciones son lo mismo que decir que durante un mes 500 trabajadores no harán nada”. Y añadió después: “Tú sabes que la gente se inscribió en la Asociación de Agricultores solo para poder importar carros de lujo con tracción en las cuatro ruedas, que manejaban orgullosos por Caracas, y no en las fincas, como pretendía el Gobierno”. En ese momento Gerald Greenwald, presidente de la Ford en Venezuela, se unió a la conversación. De repente, convergían en este pequeño grupo representantes de las tres fuerzas sociales fundamentales que en conjunto estaban conformando en esos momentos la política automotriz: el Estado, el capital local y las empresas transnacionales.

Madero era un funcionario gubernamental sin afiliación política y que debía todo a sus propios esfuerzos. Había militado en la Juventud Comunista durante los tumultuosos años 60 en su secundaria caraqueña, en el Liceo Andrés Bello. Mediante conexiones con el PC había obtenido una beca para estudiar ingeniería en Checoslovaquia. A su regreso, trabajó en el Ministerio de Fomento, donde se desempeñó como jefe del sector automotriz desde que su predecesor, Mariano Crespo, abandonara el ministerio en 1973. A diferencia de muchos de sus antiguos camaradas, no se había convertido en un anticomunista, pero era muy crítico de la estrategia del PC y tenía poca confianza en la política venezolana. No obstante, se seguía sintiendo comprometido con el desarrollo venezolano y creía que podía hacer más por el país trabajando en el Estado que contra él. Había logrado hacerse de una posición de funcionario responsable y honesto, pero no se sentía cómodo en compañía de empresarios. Más le gustaba estar rodeado por otros que, como él, trabajaban aprovechando las pequeñas grietas del sistema. Su mundo no era el de la riqueza o el poder, como el de muchos de sus compañeros de trabajo. Provenía de una familia de clase media y posibilidades modestas, y su apariencia y su estilo eran los de un criollo típico de Caracas: extrovertido, agudo y orgulloso. Menos típico era que no buscaba la aprobación de los ricos y poderosos, ni adoptaba su estilo.

Machado Zuloaga también era ingeniero. Pertenecía a un grupo económico poderoso y a una distinguida familia caraqueña de la elite social tradicional, cuyos miembros habían ocupado históricamente posiciones importantes en el mundo económico y cultural de Venezuela. Su hermano mayor, Oscar Machado Zuloaga, había sido presidente de Fedecámaras, la principal asociación del sector de los negocios, y había estado a la cabeza de la Electricidad de Caracas, la mayor compañía privada. Henrique Machado había llegado a ser el líder del subgrupo automotriz (Procesa) del grupo Sivensa, que había experimentado un significativo crecimiento bajo su mando. Parecía la encarnación del capitalista local ideal, que utilizara su privilegiada educación, su fortuna familiar y su nombre para

erigir las estructuras productivas de la economía. Era un empresario competente y había sido presidente de Favenpa, aunque por lo general prefería mantenerse tras bambalinas. Nada pretencioso, casi retraído, en algunos aspectos resultaba típico del sector tradicional de la elite caraqueña: elegante sin ser ostentoso, cortés pero un poco distante.

Gerald Greenwald era el presidente de la subsidiaria de Ford en Venezuela además de representante de confianza de Lee Iacocca (el presidente de la compañía) durante este periodo. (Cuando Iacocca llegó a la presidencia de Chrysler, algunos años después, Greenwald se convirtió en su mano derecha; en la fecha de escritura de este libro, presidía United Airlines.) Tras su llegada a Venezuela se ganó una reputación de ejecutivo capaz y con personalidad en época en que Ford atravesaba dificultades locales. La oposición original de la compañía a la política automotriz, agravada por su trato desdeñoso a funcionarios y líderes políticos, le había ganado las simpatías del Gobierno. A diferencia de sus predecesores, Greenwald se comportó de manera respetuosa y afable, y con frecuencia invitaba a figuras líderes a visitarlo en su casa, en un esfuerzo por reparar los daños. Seguro de sí mismo y amable, sabía mostrarse cauteloso en público y trabajar tras bambalinas.

Al sumarse Greenwald a la conversación, por fuerza ésta cambió de rumbo. El recién llegado planteó el problema del creciente costo de los automóviles en Venezuela. Señaló que la política automotriz conllevaría necesariamente incrementos intolerables del precio de las partes y piezas, de ahí que el Gobierno debería tomar medidas para evitar el aumento de los costos de producción, o bien permitir que en el mercado se reflejaran los incrementos (en otras palabras, eliminar los controles de precios). De hecho, la proposición de Greenwald consistía en que Venezuela debía explotar sus ventajas comparativas y no emprender la producción en condiciones desfavorables. Expresó la idea con cautela: “Venezuela es un país rico. Debe usar sus recursos de modo inteligente para producir sólo en condiciones favorables y, por tanto, a precios razonables”. Era obvio que esta línea de pensamiento favorecía la nueva planta de aluminio propuesta por Ford. Madero (quien antes había parecido defender el proyecto de Ford) planteó ahora:

El Gobierno toma en cuenta no solo los intereses a corto plazo de las firmas y los consumidores, sino los intereses a largo plazo de la nación. Si el Estado promueve la industria automotriz es porque está interesado en el desarrollo de la nación como un todo. Si tú sabes producir un motor para un automóvil, sabes también cómo producir un motor estacionario para la industria agrícola, de la minería o de la construcción. Nosotros queremos aumentar el empleo y alcanzar cierto nivel de independencia tecnológica. ¿Qué ganamos con tener carros baratos si no tenemos conocimientos de cómo producirlos ni empleo para la gente? Para nosotros, la industria automotriz es un medio, no un fin.

Durante la intervención de Madero, que aprobaba Machado, Greenwald interrumpió en repetidas ocasiones con la siguiente frase: “Sí, puede que tengas razón, pero me gustaría saber qué opina tu esposa cuando compra un auto”. Madero decidió no responder a estas interrupciones, pero uno de sus subordinados dijo a Greenwald: “Tiene usted razón, el auto será caro pero sus hijos tendrán trabajo”. La conversación que al principio había enfrentado a los capitalistas locales con Madero en su condición de representante del Estado, terminó por unirlos contra Greenwald, representante del capital extranjero. De repente, los presentes unieron filas en torno de Machado Zuloaga, Bisogno y Madero contra Greenwald. En este intercambio intenso y espontáneo, el llamado a defender los objetivos nacionalistas de desarrollo subsumió las divisiones existentes entre Gobierno e industriales cuando la crítica a dichos objetivos provino de un capitalista extranjero, a pesar de su íntima participación en el sistema económico local.



Gerald Greenwald (al centro) presidente de Ford en Venezuela, durante una recepción en su residencia, en Caracas, ofrecida a ejecutivos del sector automotor. (Archivo *El Nacional*.)

La conversación se desvió hacia un debate más técnico. Greenwald, quien se negó a lidiar con los argumentos nacionalistas, insistió en el tema de los precios en el nivel del costo-beneficio para los consumidores y las empresas. Madero planteó que los precios de los automóviles en Venezuela dependían de dos factores: el nivel de contenido local y el volumen de la producción. Mediante la articulación de estos dos factores, el Gobierno podía fomentar el crecimiento económico sin recargar el costo de manera excesiva sobre los hombros de los consumidores o de las compañías automotrices.

Greenwald mostró su desacuerdo. Señaló que el mercado venezolano era demasiado pequeño para resultar eficiente. “Por ejemplo, las manijas de los autos Ford son todas iguales, y producimos cuatro millones de manijas idénticas.” Madero le previno: “Si no pueden producir manijas baratas aquí, haremos que todas las compañías utilicen las mismas manijas”. Y añadió: “Si los fabricantes de autos quieren permanecer aquí, tendrán que hacer acuerdos para compartir partes y piezas”. Santiago González, un empresario local de una pequeña compañía productora de embragues, se mostró de acuerdo con Madero: “Los ejes que produce DANA y otras compañías son iguales”. Como para poner fin a la discusión, Madero dijo:

Mira, cada vez que voy a Detroit escucho el mismo cuento que nuestro mercado es demasiado pequeño. Ustedes están acostumbrados a distintas magnitudes. Ustedes no entienden que su mercado no tiene que ser el estándar universal. Se puede estructurar la producción de otra manera. Las maquinarias pueden ser diferentes. En vez de una estampadora de seis toneladas se puede usar una de dos. En vez de seis “transfers” para hacer ejes se puede necesitar solo uno.

La conversación se mantuvo dentro de límites amistosos. Sonriente, Greenwald insistía en que Madero podía tener razón, pero que le gustaría saber qué pensaría su esposa cuando tuviera que comprar un auto hecho en Venezuela. Cuando se hizo claro que no adelantaba por ese camino, volvió a cambiar el derrotero de la conversación. Planteó el tema de la tecnología. “¿Quién va a construir la industria? Ustedes carecen de personal capacitado.” La respuesta de Madero fue rápida: “No importa que no tengamos el personal capacitado. Importaremos el personal.”

A esto, Greenwald contestó con una pregunta: “¿Para qué se desarrolla un país? ¿Para beneficiar a quién?”. Madero respondió: “Para beneficiar al país, a todos los que viven en el país”. Greenwald le replicó entonces que “los empleados extranjeros no pertenecen al país, vienen y van y cosechan los beneficios de su trabajo”. Madero le contestó que todos los que vinieran al país y contribuyeran al desarrollo de la nación recibirían la recompensa por su trabajo. “Pero los resultados de su trabajo permanecerán en el país, y de ellos se beneficiará la colectividad.” Greenwald objetó: “De modo que serán los extranjeros los que desarrollen el país”. En ese punto todos los venezolanos, evidentemente molestos por las implicaciones de la afirmación de Greenwald, opinaron de consuno: “EEUU hizo lo mismo, es un melting pot: Fermi, Einstein, Von Braun”. Y Bisogno añadió: “Sí, seremos como EEUU en 1928”. Enfrentado a este fuerte consenso, Greenwald se replegó: “Sí, los inmigrantes hicieron una gran contribución al desarrollo de EEUU”.

Durante la discusión, los venezolanos estuvieron de acuerdo en que la actividad industrial no debía evaluarse exclusivamente en términos de los beneficios inmediatos que reportaría a la empresa y sus trabajadores, o a los consumidores. Como Machado enfatizó más de una vez, la vara que debía utilizarse para medir cualquier política era la contribución que podía hacer al desarrollo del conjunto de la nación. Madero, al sentir que Machado reforzaba implícitamente su planteo inicial opuesto al proyecto de las ruedas de la Ford, quebró el consenso creado en la discusión con Greenwald. “Sí, pero también es necesario tomar en cuenta las ganancias de la empresa. De otra forma, no obtendremos suficientes inversiones, y la nación también se verá afectada.” Cuando Madero se retiraba, un compañero de trabajo y viejo amigo le dijo: “Mira, Roberto, tú estás muy viejo para desempeñar el papel de abogado del diablo. ¿Qué sentido tiene que defiendas cosas en las que no crees?”.

Este intercambio informal ocurrido en noviembre de 1977 revelaba mucho más que los términos y la forma que adoptaban los debates públicos informales entre representantes del Estado y del capital acerca de la política de desarrollo y la actividad económica. También mostraba la contradicción básica que socavaba la política automotriz y prefiguraba la dirección de su futura modificación.

Los motores del poder

El ministro Alvarez Domínguez, el 28 de junio de 1978 informó a una sorprendida opinión pública que se había seleccionado a Renault y a GM para fabricar los motores de seis cilindros. Ford estaba excluida, explicó, porque el motor de aluminio era un prototipo no sometido a prueba que no estaría a punto para su fabricación hasta 1981. Si bien el motor de Renault carecía de la potencia necesaria para ser empleado en el camión ligero, como se había solicitado, sus méritos se habían probado durante dos años de uso comercial en Europa. Además, Chrysler se había retirado de la licitación (debido a recortes financieros en la casa matriz) pero había expresado por escrito su disposición a utilizar motores Renault en sus autos, si esta última compañía era la seleccionada. De ocurrir esta variante, Venezuela podría lograr la exportación de su motor a los mercados internacionales de Chrysler.

Esta importante reversión de lo previsto respondía también a consideraciones políticas. La explicación semioficial enfatizaba el deseo presidencial de “diversificar los orígenes nacionales de quienes suministran tecnología a Venezuela, para aumentar el poder de negociación del país con las CTNs y contrarrestar su dependencia de las compañías estadounidenses” (Luis Álvarez Domínguez, cit. en *The*

Daily Journal, 19/10/78). El Gobierno se había percatado de que su poder de negociación era limitado en relación con las compañías foráneas poderosas, cuya presencia local las arraigaba socialmente y les permitía establecer vínculos políticos.

Con la selección de Renault, el Gobierno pretendía aumentar su poder de negociación. Desde el inicio, Ford y GM habían empleado su poder para perturbar y paralizar las negociaciones. Como Ford, la compañía más poderosa y recalcitrante, no estaba dispuesta a negociar en los términos que establecía el Gobierno, éste dio pasos encaminados a excluirla y alentó la competencia apoyando a compañías europeas con muy escaso poder local. Una diversificación de las fuentes tecnológicas significaría una diversificación de los aliados y la potencial ampliación de la autonomía del Ejecutivo. Se afirma que Francia había ofrecido tecnología militar junto con el motor de Renault. La inesperada presencia del ministro de Defensa en una reunión de entonces del gabinete económico le dio consistencia al rumor. Se dice también que, en una actitud muy diferente, el representante de Ford le presentó un ultimátum al ministro Alvarez Domínguez: se aceptaba el motor de Ford o abandonarían el país. Pero la disminución del apoyo al Gobierno y las crecientes dificultades financieras redujeron la capacidad decisional del Ejecutivo. Ford organizó una campaña encaminada a detener la decisión sobre el motor y a convertir el conflicto en torno de la política automotriz en una guerra de los motores. Pocas compañías extranjeras de otros sectores habrían podido intentar un ataque público de tales dimensiones. Sin embargo, la industria automotriz se presta a la integración de los fabricantes foráneos en la comunidad local de los negocios, y el mercadeo de los vehículos engendra lealtades entre los consumidores con respecto a las compañías productoras.

Ford contaba con muchos recursos: peso en la economía, conexiones políticas, imagen pública de compañía respetable, y poder y prestigio internacionales. Pero el poder de Ford por sí mismo no podía garantizar el éxito. Se produjo una convergencia entre la oposición a la decisión con respecto al motor, encabezada por Ford en el sector privado, y la oposición al gobierno de Pérez dirigida por miembros de la vieja guardia de AD. Las tensiones entre AD y el presidente se acrecentaron como resultado del procedimiento de selección de Renault. Pérez había actuado de manera independiente, con su ministro de Fomento como aliado fundamental, y no había consultado con el gabinete económico. El liderazgo de AD se dispuso a enfrentarse a Pérez en las elecciones presidenciales de 1978. Como se reconocían las consecuencias electorales de una mala administración y de la corrupción generalizada, AD escogió a un candidato que contaba con el apoyo de Betancourt, Luis Piñerúa, quien prometió adecentar la administración pública (el lema de su campaña fue “el hombre

correcto”). Un artículo en una revista admitía que el conflicto no giraba sobre “el poder de los motores, sino los motores del poder” (*Zeta*, 15/8/1978). Ford negó categóricamente ante la prensa que el Gobierno hubiera hecho una “selección” en la cuestión de los motores, y afirmó que se trataba de una “preselección”. El ministro Álvarez Domínguez respondió públicamente que la selección del motor era definitiva (*El Universal*, 11/7/78).



Un motor V-6 de General Motors instalado en un camión Ford, exhibido en un hotel de Caracas en agosto/septiembre de 1978, para demostrar la factibilidad de los vehículos “híbridos” para la producción nacional y la exportación. (*Revista Automotriz*.)

Ford movilizó apoyo interno y organizó simultáneamente presiones sobre las negociaciones del Pacto Andino. Ya había sido seleccionada para producir el camión ligero de Ecuador, que emplearía un motor venezolano de seis cilindros. Le notificó ahora al Gobierno ecuatoriano que se negaba a utilizar el motor de GM porque no tenía suficiente potencia y porque la protección del renombre internacional de Ford impedía dicha combinación. El círculo de presiones de Ford se había completado. El presidente Pérez, al ver en peligro el acuerdo del Pacto Andino, suspendió el 12 de julio, sin anuncio público, la decisión sobre el motor, y envió a Quito a algunos técnicos del Ministerio de Fomento y del ICE. En reuniones celebradas a fines de julio, Venezuela y Ecuador revisaron las condiciones de las licitaciones y pidieron a Ford y a GM que mejoraran sus ofertas en una nueva

ronda. Añadían los siguientes requerimientos: las transmisiones debían fabricarse para la exportación fuera del Pacto Andino (100.000 transmisiones automáticas al año en Venezuela, 75.000 transmisiones manuales al año en Ecuador); se eliminarían los pagos de royalties por la tecnología para las plantas de motores; y se fundaría un centro de entrenamiento automotor para los trabajadores (*El Universal*, 22/8/78). Esta era una innovación importante en las negociaciones del Pacto Andino: dos países se habían puesto de acuerdo sobre términos comunes para una licitación y habían negociado de conjunto con las CTNs.

Con el aumento de la crítica local, de manera inesperada Pérez relevó a su aliado, el ministro Álvarez Domínguez, de su responsabilidad como principal negociador del programa automotriz e hizo que lo sustituyera el presidente del ICE, Reinaldo Figueredo Planchart, que había llegado a ser amigo íntimo del presidente y era hijo de una familia de la clase alta que había tenido negocios de venta de vehículos. Álvarez Domínguez se había elevado a su posición gracias a su competencia técnica y habilidades políticas. En su época de estudiante universitario había sido líder del PC, pero al graduarse como ingeniero había cambiado de afiliación política y se había unido a las filas del sector privado. El presidente Pérez también nombró a Figueredo Planchart director de una nueva comisión interministerial creada para examinar la política automotriz. Este cambio sorpresivo se produjo mientras Álvarez Domínguez se encontraba en Europa (31 de julio al 6 de agosto).

Este abrupto giro de la autoridad hacia el ICE dio pie a una breve batalla entre agencias estatales en el seno de la “guerra de los motores”. Álvarez Domínguez, asombrado por la traición presidencial, trató de reafirmar su autoridad. La intensidad psicológica de la batalla tendría sus costos. Después de una presentación pública, Álvarez Domínguez se desplomó y fue trasladado a un hospital. Por lo general, el ministro de Fomento había sido más permeable a la influencia del sector privado que el ICE, pero durante el gobierno de Pérez, Figueredo Planchart había actuado como representante directo del presidente, y Ford había encontrado más apoyo en él. No había desacuerdos entre los técnicos de las dos agencias, quienes compartían los principios y objetivos de la política automotriz. No obstante, Álvarez Domínguez no les permitió a sus representantes ministeriales firmar los nuevos términos para la licitación presentados a las compañías en Quito el 16 de agosto, en cuya negociación había participado Figueredo Planchart, y acusó públicamente a las CTNs de ejercer “presiones abusivas” con el fin de subvertir los programas del Estado (*El Universal*, 19/8/78). Al tiempo que insistía en que era el único negociador legal de Venezuela, en privado Álvarez Domínguez presentó su renuncia. En vez de aceptarla, Pérez le devolvió su responsabilidad original para que recibiera las nuevas propuestas el

30 de agosto. Entonces fue Figueredo Planchart quien presentó su renuncia al ICE, que tampoco se aceptó, con lo que el conflicto llegó a su final.

Durante este periodo, la guerra de los motores se asemejó a un concurso popular. Las empresas intentaban ampliar su base de apoyo mediante artículos y anuncios a plana llena en la prensa gráfica. La enorme campaña publicitaria de Ford, auspiciada por su asociación de concesionarios, subrayaba la importancia de la compañía en el mercado interno y el avanzado diseño de su motor. Se extendió una invitación a un grupo de periodistas venezolanos para que recorrieran sus instalaciones en EEUU durante las celebraciones del 50 aniversario de la compañía, en el mes de agosto. Los invitados reciprocaban con artículos laudatorios en la prensa local.

Frente a un público más selecto se hizo énfasis en el papel central que desempeñaba Ford en la alianza gobernante en Venezuela y sus fuertes vínculos con instituciones financieras y bancadas del país. Nelson Rockefeller, desde mucho antes influyente en la política local, expresó, en un almuerzo ofrecido por Eugenio Mendoza en ocasión de su 70 cumpleaños y al que asistieron líderes nacionales, entre ellos Rómulo Betancourt, su firme apoyo a Ford (entrevistas confidenciales)²³. La campaña de GM subrayaba la larga historia de la compañía en el país, la ayuda que había brindado a los fabricantes de partes y piezas y la calidad probada y versatilidad de su motor. Su mensaje incluía que como empresa sólida y de reputación, respetaba al gobierno local. Un tema común durante esta campaña era que los motores contribuirían a la modernización de Venezuela y a impulsarla hacia “el futuro”. Los motores que se mostraban en los anuncios enfatizaban la capacidad de transformación de la tecnología. El mensaje consistía en que el futuro de Venezuela dependía de cuál motor se escogía.

La selección final: ganadores sin perdedores

En octubre de 1978, el Gobierno anunció que GM había vencido a Ford. La primera había aceptado producir en Venezuela 1,2 millones adicionales de tambores de frenos anuales para la exportación y 150.000 ejes al año en Ecuador destinados también a la exportación. Al mejorar su oferta, GM no solo había ganado la licitación del motor, sino también el derecho a fabricar el camión que Ecuador le había asignado previamente a Ford. Álvarez Domínguez se sentía complacido. Anunció triunfante que

²³Eugenio Mendoza había sido ministro de Fomento durante el gobierno del general Medina Angarita en 1942, presidente del Sindicato del Hierro durante el mandato del general Pérez Jiménez y miembro de la Junta de Gobierno que derrocó a Pérez Jiménez en 1958. En su condición de figura dirigente del grupo Mendoza, era un industrial que gozaba de mucha visibilidad y que intervenía en los asuntos públicos.

a partir de ese momento los países del Pacto Andino mejorarían su capacidad de negociación al “oponer entre sí a las multinacionales... Mientras luchan por el botín, nos sentaremos a mirarlas y a cosechar los beneficios” (*The Daily Journal*, 19/ 10/78). Dada esta posición, el Gobierno anunció otra decisión sorprendente. Para la selección del segundo motor de seis cilindros, competirían Ford y Renault (“luchar por el botín”) en una nueva ronda bilateral con Venezuela y Bolivia, coproductores del camión B1.1.

Aunque Ford había perdido otra vez, se le daba una nueva oportunidad. La postura agresiva había sido efectiva. Ahora Ford amplió su fábrica en la ciudad de Valencia hasta lograr una capacidad de 400 unidades por día, con lo que se convertía en la mayor planta para la fabricación de vehículos de América del Sur. Al hacer esta ampliación, la compañía hacía patente su decisión de permanecer en el país. La recuperación de Ford en la ronda de licitación se relacionaba con nuevos cambios en la industria automotriz internacional. En el verano de 1978, Chrysler se retiró de Europa tras vender el interés mayoritario de sus subsidiarias al mayor competidor de Renault, Peugeot-Citroen, y se preparó para vender todas sus instalaciones en América Latina, excepto las ubicadas en México. Una vez conseguida la fabricación del motor de seis cilindros, GM compró las instalaciones de Chrysler en Venezuela y Colombia. Ello le dio una base fuerte en la zona del Pacto Andino y compensó la venta de su subsidiaria argentina, que no era rentable. En consecuencia, Renault ya no podía pensar en un acuerdo con Chrysler para mejorar su posición en la licitación venezolana, lo que cambiaba las alianzas de intereses empresariales que había sido el sostén de la selección de Renault en junio. La posición regional de Renault se debilitó, la de GM se fortaleció y las perspectivas de Ford mejoraron de manera ostensible.

La nueva ronda de licitación signó el declinar de la guerra de los motores. Se hizo evidente que el Gobierno no iba a adoptar una decisión final en ese momento. Aunque las negociaciones se basaban en la premisa de la soberanía nacional, el poder para la toma de decisiones de los fabricantes de vehículos, cuya base era internacional, sometía de continuo las negociaciones a cambios sobre los cuales el Estado, de base local, no ejercía control. Atrapado en una intensa campaña con vistas a las elecciones de diciembre y envuelto en un grave escándalo político (el “caso Carmona”, que se analiza en un capítulo posterior), el Gobierno no tomaría ninguna nueva decisión políticamente costosa. Las compañías productoras de vehículos también preferían posponer la decisión hasta después de celebrar las elecciones, tanto porque sus relaciones con el gobierno de Pérez habían estado plagadas de conflictos como porque esperaban que el nuevo gobierno cambiaría los términos de la propia

política. Como apuntara un periodista:

El protagonista en este escenario es aún el Gobierno de Venezuela, y debido a su falta de predictibilidad en el pasado en lo concerniente al programa de desarrollo automotriz andino, nadie quiere comprometerse a pronosticar con certeza cuál será el resultado final.... Los hombres de negocios nacionales y extranjeros aún recuerdan con cierta amargura el asunto de la Pegaso, y están absolutamente concientes de que el Gobierno echará a un lado las reglas del juego que él mismo trazó si el "interés nacional" aconseja tal violación (*The Daily Journal*, 19/10/78).

La presidencia de Copei: se despedazan los motores del progreso

La elección del candidato democristiano, Luis Herrera Campíns en diciembre de 1978 (con 46,6% de los votos contra 43,3% de AD) trajo consigo una reevaluación de los programas de Pérez, una política de desaceleración económica y el tímido fomento de una doctrina económica de libre mercado. La transición hacia un nuevo gobierno encabezado por un líder de un partido de oposición facilitó aceptar que el pasado -el periodo de auge- había terminado. Como anunciara Herrera Campíns en el discurso de toma de posesión, heredaba un "país hipotecado". Este cambio en las condiciones económicas y políticas contribuyó a que cristalizara una redefinición del área automotriz. La producción local de vehículos, que reflejaba el descenso de la economía, cayó 13,6% en 1979 y 1,8% en 1980. En este contexto, el Gobierno comenzó a modificar la política automotriz en el sentido propuesto por las CTNs desde largo tiempo atrás. En primer lugar, se libró de los compromisos legales y políticos contraídos por la gestión anterior. En abril de 1980 canceló las selecciones de motores realizadas durante el gobierno de Pérez y prometió realizar otras nuevas antes de fin de año. Esta anulación no se aplicaba a las concesiones incluidas en acuerdos internacionales de coproducción, o sea, a las que involucraban a GM.

Con miras al ahorro de combustible, se eliminó la producción de automóviles de ocho cilindros. Ello proporcionó a Ford y GM la oportunidad de producir autos de cuatro cilindros y, por tanto, el derecho a realizar propuestas para el motor pequeño que había sido concedido a Fiat. Sin embargo, Fiat estaba violando sus dos contratos ya firmados, porque no había comenzado la construcción de ninguno de los dos motores en el periodo requerido. Además, con el cambio de gobierno había perdido su influencia en el Ejecutivo. De ahí que se invitara a GM y a Cummins a hacer propuestas para los motores diesel. Mack había apelado contra el derecho legal de Pegaso a construir el motor diesel y había construido una planta de ensamblaje de motores para exportar a países que no fueran

miembros del Pacto Andino, con la esperanza de producir para el mercado andino si triunfaba en su reclamo legal.

Como resultado de estas posposiciones se había detenido la inversión local en la producción de partes para el tren de conducción. En este contexto, el programa automotriz se vio enfrentado a un significativo reto. Las ensambladoras (en especial GM) atacaron las tradicionales prohibiciones relativas a la integración vertical al buscar una participación accionaria en las firmas existentes para ampliar su producción con destino a la exportación. Como parte de su nueva estrategia productiva global, GM quería hacer de Venezuela la sede de la producción de algunos artículos (como aires acondicionados y arranques automáticos). En agosto de 1980 se adoptaron significativos cambios de política. Se aceptaron aumentos en los autos regulados y se anunció que los controles de precios desaparecerían en octubre de 1981, ya que serían sustituidos por un sistema de tarifas de dos niveles. Como medida transitoria encaminada a reducir la oposición de los consumidores al aumento, el Gobierno permitió a las ensambladoras importar 15.000 “autos populares” pequeños y de bajo precio antes de octubre de 1981. Como los modelos de dichos autos eran diferentes de los producidos en Venezuela, esta medida violaba el Programa Sectorial del Pacto Andino. Se eliminó la obligación de producir autos regulados. Se suspendió en 1981 el incremento anual de 3% de contenido local y se disminuyó a 1% hasta 1985.

Estas medidas, que afectaban directamente a los consumidores, recibieron una considerable atención de la prensa. No obstante, el cambio más significativo de la política pasó casi inadvertido. El contenido local máximo de 90% estipulado en la política se redujo a 75%. Esta disposición reconocía oficialmente que todos los sectores retiraban su apoyo al objetivo de la autonomía de la industria nacional. La meta tradicional de fabricar un “auto venezolano”, revitalizada de manera tan dramática durante los años de auge, llegaba así a un silencioso final. Un año después, en agosto de 1981, se ampliaron los cambios. Se autorizó al sector ensamblador a cumplir con 30% del contenido local hasta 1983 con las exportaciones de partes y piezas (según la Ley Automotriz de 1975 este permiso se eliminaría en 1980), y la obligación del sector de compensar las importaciones con exportaciones de igual valor se pospuso indefinidamente. Como resultado de estas medidas, las exportaciones de partes y piezas se harían a expensas de las empresas locales del ramo y, por tanto, de la diversificación de la producción de partes y piezas.

Estos cambios coincidieron con los esfuerzos de las CTNs para que los países del Pacto Andino adaptaran sus políticas a sus estrategias globales. Ford llegó a sugerir en su nueva propuesta de motor

que los países andinos se limitaran a ensamblar vehículos y motores hasta que el volumen de sus mercados justificara emprender la producción. Mientras tanto, argüía, a manera de compensación podían exportar partes y piezas, por ejemplo, ruedas de aluminio de Venezuela (*Número*, 15/2/1981). El sector privado no se opuso a estos cambios, lo que significaba una transformación de las estrategias de inversión. No se trataba del fin de las empresas rentables, pero sí de un desplazamiento de las oportunidades para las ganancias. Era obvio que resultaban favorecidos los intereses comerciales. Pero con los cambios, las inversiones industriales podían realizarse de modo menos complicado: se podía producir partes y piezas para la exportación, a menudo en asociación con empresas transnacionales. Resulta revelador de la diferencia de intereses que se escondía tras la política pública de los fabricantes de partes y piezas que Gastón Texier, el nuevo presidente de Favenpa, aprobaba la reorientación. Los intereses de su fábrica coincidían con la nueva dirección adoptada por la política automotriz, ya que se abría la posibilidad de exportar los productos que fabricaba por intermedio de las CTNs. Por último, el ministro de Fomento recomendó la posposición de la decisión sobre el motor de gasolina hasta 1984. Esta demora se justificó en los mismos términos manifestados antes por las CTNs. Disponer de más tiempo le permitiría al Gobierno evaluar los cambios tecnológicos producidos en la industria automotriz internacional. Al final, Venezuela resultaría vencedora. Pero de hecho, el Gobierno y el sector privado habían llegado a aceptar, al menos en ese momento, que el país continuara como un importador de motores. Al esfumarse hacia un futuro distante los “motores del progreso”, la propia creencia en el progreso cedió terreno. Para esconder la sima abierta por este fracaso, una retórica del desarrollo transparentemente ideológica reemplazó las ilusiones de desarrollo de tiempos más auspiciosos.

Conclusiones

Fomento a las exportaciones vs. sustitución de importaciones

La resistencia de las empresas a poner en práctica la política automotriz fue el resultado de las estrategias cada vez más globales de los fabricantes. La difícil meta de encontrar en el mundo fuentes de materias primas para un mercado de autos mundial, requería que se minimizaran las barreras proteccionistas, que se integraran internacionalmente las instalaciones productivas y que los recursos naturales resultaran accesibles. De ahí el aumento de la preocupación de las CTNs sobre las

especificidades de las políticas automotrices nacionales.

En el curso de las negociaciones de los motores, las CTNs reclamaron una política alternativa que aprovechara las ventajas comparativas de Venezuela y la participación potencial de la industria local en la producción global de vehículos. En su opinión, la estabilidad política y el poderío económico del país en el contexto del Pacto Andino y del Caribe lo hacían una base atractiva para el capital extranjero. La riqueza venezolana en recursos naturales y el desarrollo de las industrias metalúrgica, del aluminio, hidroeléctrica y petroquímica posibilitaban la producción de insumos de energía intensiva que incorporaran un alto coeficiente de energía barata para la producción de partes y piezas de autos más ligeras destinadas a la exportación. Las CTNs contraponían a los objetivos expresados en la política automotriz de autosostenimiento económico e integración local, los beneficios de la tecnología moderna y de la integración internacional.

Las regulaciones venezolanas sobre el contenido local y el objetivo de 90% de integración local se convirtieron en objeto de las presiones de las empresas y en el lugar del conflicto entre las políticas de sustitución de importaciones y de fomento a las exportaciones. Según *Business Week*, “los requerimientos acerca del contenido local, que obstaculizan los abastecimientos del exterior son uno de las mayores barreras que enfrentan los fabricantes que tratan de racionalizar sus instalaciones productivas”. Un funcionario de GM afirmó: “La obtención de suministros mundiales constituye un problema logístico muy complicado que tiende a empeorar... en la medida en que los países con intenciones proteccionistas aumentan constantemente su porcentaje local” (20 de noviembre de 1978). “En General Motors la tendencia es a abandonar el estudio de la estabilidad macropolítica a favor del de los procesos regulatorios de un país y sus probables opciones. En nuestro negocio, los cambios en cosas tales como las leyes de 'contenido local' pueden plantearnos grandes problemas. Y pueden significar la diferencia entre la ganancia y las pérdidas” (*Business Week*, 1/12/1980).

No obstante, los fabricantes locales de partes y piezas se sentían más preocupados por la ambigua y contradictoria aplicación de la política, que creaba incertidumbre a la hora de planificar la producción e invertir en ella, que por el análisis de las estrategias políticas. Si bien Favenpa había apoyado la nueva política, su demanda fundamental ahora era que el Gobierno estimulara el crecimiento del sector de partes y piezas mediante el establecimiento de regulaciones claras y el respeto a las reglas del juego. Como afirmara su director ejecutivo: “Un cambio del contenido local a 75% preocupará a los teóricos de la política automotriz, pero no a los productores de partes y piezas” (entrevista a Rodrigo Arcaya; las entrevistas realizadas a industriales locales confirmaron esta opinión). La crítica

fundamental de la asociación de productores de partes y piezas estaba dirigida contra la indecisión gubernamental:

A tres años de su promulgación no se ha cumplido con la ejecución de las normas y las metas de incorporación, y no porque los encargados de velar por su ejecución desconozcan la realidad.... El mismo Ejecutivo Nacional, autor de la política, ha modificado su espíritu al permitir mediante resoluciones, ensamblar nuevos modelos y marcas de vehículos, en el país.... ¿Para qué fue creado el ordenamiento contenido en decretos y resoluciones? ¿Cuál es el sentido de un texto legal cuya letra no se respeta? (Notifavenpa, junio de 1978).

En este conflicto las firmas ensambladoras sostenían que la ascendente industria automotriz mexicana era un ejemplo de los méritos del fomento a las exportaciones, mientras que la plenamente integrada y estancada industria argentina demostraba los inconvenientes de la sustitución de importaciones. Las asombrosas similitudes, y también las significativas diferencias, entre el desarrollo de la política automotriz en México y Venezuela revelan por qué se favorecía el ejemplo mexicano. En ambos países los fabricantes de vehículos se opusieron a la integración local y a las medidas de racionalización de la industria (como los límites al número de firmas encargadas de la terminación y los modelos de vehículos) desde el inicio de la formulación de la política en 1962. Ello hizo inevitable la fragmentación y la dependencia externa de la industria. Los objetivos originales se hicieron más difíciles de cumplir en la medida en que sucesivas negociaciones eran condicionadas por la estructura industrial existente y la alianza de clases que la sostenía. En México, como respuesta a la presión ejercida por las compañías y a las dificultades que experimentaba la balanza de pagos, el Gobierno aceptó suavizar las restricciones relativas a la integración vertical y los ya débiles requerimientos concernientes a contenido local mucho antes de que el giro de 1977 hacia el fomento a las exportaciones alentara esas medidas. En Venezuela, una balanza de pagos positiva facilitó la formulación de regulaciones sobre contenido local y restricciones a la integración vertical más estrictas, pero también permitió posposiciones crónicas de la puesta en práctica de la política. En ambos países, la evolución de las regulaciones relativas a la integración vertical y a la incorporación de contenido local permitió la continuidad entre la sustitución de importaciones en la medida en que se puso en práctica y la estrategia de fomento a las exportaciones que se presentó como la solución de sus males.

Como cualquier programa de exportación aumenta el control externo y la fragmentación de la industria local (mediante la dependencia que crea de las especificaciones que requiere un producto

destinado a clientes extranjeros y las fluctuaciones de la demanda), una estrategia de crecimiento orientada hacia la exportación es más fácil de aplicar si la etapa de crecimiento hacia adentro ha conservado la base para la integración externa. En México, el programa de exportación de la industria automotriz había aprovechado la creciente interpenetración de las economías mexicana y estadounidense resultante de la proximidad de ambos países, de la oferta de mano de obra barata, de la estructura industrial diversificada y de la expansión de la industria del petróleo. En Venezuela, el fomento a las exportaciones en esta etapa era más bien un medio para socavar una política proteccionista y para reducir la separación entre los sectores de ensamblaje y de partes y piezas, y no una estrategia de desarrollo en sí mismo, ya que el reciclaje de los petrodólares seguía definiendo la dinámica interna de la industria local y su papel en la industria nacional. En ambos casos, las estrategias de exportación fueron funcionales a la integración internacional de la industria automotriz.

La posición del gobierno venezolano respecto a la revisión de la política automotriz fue en buena medida reactiva. En respuesta a los cambios en la industria y las presiones ejercidas por las compañías, permitió que su incumplimiento de *facto* creara las condiciones para la modificación de la política. El 31 de enero de 1978, el ministro de Fomento Álvarez Domínguez había sugerido esa posibilidad a *The Daily Journal*, al comentar que el objetivo de la política de lograr 90% de integración local en 1985 “no es rígido, y está sujeto a la flexibilidad que imponen las condiciones existentes, que afectan a la industria, así como a la evaluación de numerosos factores contingentes”.

Algún tiempo después Álvarez Domínguez afirmó que la Ley sobre Política Automotriz de 1975 era expresión del “optimismo” de los años de auge de 1974 y 1975. “Los objetivos de la ley, que debían haberse estipulado como un cuerpo de regulaciones modificable, se convirtieron en leyes rígidas porque en ese momento pensábamos que podíamos lograr todo.” Reconoció que la conversión en ley de los objetivos expresaba el compromiso del Gobierno con la política automotriz, pero admitió que “si la industria automotriz ya no puede ser el corazón del desarrollo, entonces el Gobierno podría trasplantarle otro corazón” (entrevista 1980). Héctor Hurtado, el principal promotor de la política automotriz de 1962 y ministro de Hacienda y presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela durante el gobierno de Pérez, compartía el escepticismo con respecto a los objetivos de la política. “La meta de 90% se incluyó en la ley debido al entusiasmo de los técnicos: no valía la pena discutirla con ellos” (entrevista 1980).

Las consideraciones electorales también contribuyeron a la disminución del apoyo gubernamental a la

política automotriz. Álvarez Domínguez admitió posteriormente: “No se adoptaron ciertas decisiones económicas porque habrían tenido un costo electoral” (entrevista 1980). Un apóstol clave expresó confidencialmente: “Carlos Andrés Pérez es un político sagaz. Escogió los motores cuando ya era muy tarde para aferrarse a las decisiones. No iba a hacerse cargo del problema político de fabricar autos costosos o de alienarse el apoyo de sus aliados” (entrevista confidencial 1980).

El poder del Estado: acumulación de capital y reproducción social

Estas justificaciones *post hoc* subrayan dos puntos. El primero, las políticas industriales del gobierno venezolano eran muy sensibles a las metas cambiantes de los otros miembros de la alianza dominante. A pesar de sus recursos económicos, el poder del Estado para hacer política depende de las acciones adoptadas por miembros prominentes de la alianza. La tensión existente entre la abundancia monetaria del Estado y su debilidad estructural da pie a una tendencia a inflar los objetivos de política, a que la aplicación de la política sea reactiva y a que los planificadores del Estado favorezcan estrategias que minimicen los riesgos y preserven las avenencias existentes. Los encargados de trazar políticas cultivaron la capacidad para reproducir el presente al tiempo que proclamaban el futuro.

El segundo punto, la naciente reorientación de esta política reflejó una adaptación no solo a la reorganización de la industria automotriz internacional sino también al nuevo enfoque del proyecto de desarrollo nacional. Durante la gestión de Pérez, el Estado mantuvo públicamente su compromiso tradicional con el desarrollo autónomo. El fomento a las exportaciones industriales se presentaba como una lógica ampliación de la sustitución de importaciones. No obstante, el apoyo internacional al fomento a las exportaciones como alternativa había encontrado aceptación local, y había empezado a asimilarse en la retórica del nacionalismo. “Las potencias económicas mundiales nos han hechizado y engañado con la sustitución de importaciones para tratar de mantenernos para siempre como parásitos de su sistema”, afirmó el presidente Pérez en privado (entrevista, septiembre de 1980). De hecho, la promoción estatal de las industrias intermedias con un potencial de exportación, junto a la rápida expansión de los proyectos que dependían de financiamiento, tecnología e insumos externos, consolidaron una retirada no expresa del apoyo a la sustitución de importaciones. Cuando la

burguesía foránea asentada en el país²⁴, la burguesía local y el Estado convergieron en el apoyo al objetivo del desarrollo nacional mediante el fomento a las exportaciones, ya no se trató a la industria automotriz como un sector de punta de la economía, sino como un sector de procesamiento para la producción industrial básica. El objetivo a alcanzar ya no fue el de integrar la industria automotriz y la burguesía local en el seno de la nación, sino vincular el capital local y el transnacional en el seno de las estructuras productivas globales.

La evolución del conflicto en torno de los modelos alternativos de desarrollo se vio constreñida por el refuerzo del crecimiento basado sobre la renta. La avalancha de consumo originada por la súbita abundancia de petrodólares no solo estimuló las inversiones productivas, sino también una tendencia hacia la "retrogresión"²⁵: el fortalecimiento de las prácticas comerciales y financieras no productivas centradas en el Estado, que consolidaron el carácter rentista de la economía venezolana. Las importaciones financiadas por el petróleo suministraron a las unidades productivas los medios de producción, complementaron o reemplazaron bienes de consumo producidos en el país y crearon oportunidades de ganancias que disminuyeron la necesidad de desarrollar la productividad del trabajo. Estas condiciones hicieron que se aplicara de manera incoherente la política industrial. El Gobierno emprendió proyectos demasiado ambiciosos en todas las áreas de la economía, con escasa coordinación y carentes de disposiciones para resolver las demandas concurrentes que hacían a recursos materiales y humanos. El sector privado criticó solo el creciente control que ejercía el Gobierno sobre la economía y su mala administración de las empresas públicas, ya que eran fuente de demanda de los servicios y productos privados.

El resultado fue una tendencia acrecentada del sector privado a privatizar el Estado y del Estado a ampliar el control público de la economía. Dada la ampliación del papel estatal como agente financiero y productivo, la inversión privada se vio inextricablemente vinculada al acceso político al Ejecutivo y las agencias estatales. Los grupos económicos locales y las empresas extranjeras intensificaron su lucha por formar alianzas con el capital estatal. En consecuencia, la fusión entre los terrenos económico y político, típica del capitalismo rentista venezolano, se hizo más marcada. La competencia entre capitales no se produjo en un sistema económico separado, ni fue estrictamente una lucha en torno de la acumulación. Lo que ocurrió fue que la acumulación, la continuada transformación de capital monetario en capital productivo, se convirtió en un elemento más de la

²⁴ Con el término "burguesía foránea asentada en el país" ("domicilia ted foreign bourgeoisie") me refiero al sector del capital extranjero que se arraiga social y políticamente en la nación huésped. Para la "doctrina del asentamiento" ("doctrine y domicile"), v. Sklar (1975:186).

²⁵ Sobre este concepto, v. Brenner (1977:41-53).

lucha intensificada en tomo de la apropiación de las rentas petroleras.

A pesar de sus limitaciones, la Ley sobre Política Automotriz amenazaba con alterar una de las reglas básicas del juego: el acuerdo implícito de que esta industria venezolana seguiría siendo limitada, tendría su base en el ensamblaje y sería un enclave comercial para las exportaciones de las CTNs. La fabricación total de vehículos en Venezuela habría trastornado la estructura comercial y productiva ya establecida de la industria y habría obligado a las empresas a realizar una importante inversión en términos que habrían reducido los vínculos entre sus operaciones locales e internacionales y habrían circunscrito su comportamiento en lo tocante a la propiedad, los cambios de modelos y la estandarización. De ahí que al tiempo que competían para evitar ser excluidas del lucrativo mercado local, su interés común en la preservación del carácter importador y de ensamblaje de la industria hiciera que se aliaran para intentar subvertir la política diseñada. Su coincidencia puso de manifiesto, a ojos de los encargados de trazar las políticas, las limitaciones del poder del Estado. “Las transnacionales automotrices parecen luchar entre sí”, me dijo en privado Carlos Andrés Pérez, “pero en realidad tienen acuerdos secretos. Cuando tratamos de poner en práctica la política automotriz nos dimos cuenta de que las transnacionales se repartían mercados y campos de acción y de influencia para obstaculizar nuestros planes” (entrevista, septiembre de 1980).

Políticas por medio de los Estados, políticas de los Estados

En las naciones subalternas, son los Estados los encargados de formular las políticas de sustitución de importaciones y fomento a las exportaciones, pero éstas no son políticas de los Estados. El enfoque dominante para el análisis de la toma de decisiones en las naciones del Tercer Mundo asume que los Estados huéspedes y las empresas transnacionales son actores independientes y que ambos persiguen intereses claros. Los modelos de negociación (“bargaining models”) del proceso de política parten de estas asunciones implícitas y, por tanto, reproducen ilusiones muy compartidas: la creencia en que los Estados defienden los intereses nacionales, la seguridad de que la búsqueda de la maximización de la ganancia opone al capital local y el transnacional, la suposición de que los resultados de la política dependen del diferencial de poder de negociación de estos actores. Un enfoque estructural que se centre en la dinámica de las relaciones productivas, las alianzas de clases y las coaliciones políticas conduce a una perspectiva diferente no solo en cuanto a quién negocia qué sino también en qué consiste la negociación misma. Si el trazado de políticas parece un drama

representado por actores sociales opuestos entre sí, la perspectiva que propongo revela las relaciones que constituyen a los actores y las estructuras que subyacen al drama. Al enfatizar las dimensiones durkheimianas, no contractuales, del trazado de políticas, trato de hacer visible hasta qué punto este proceso refleja y reproduce los valores y relaciones en los cuales está incrustada.

Este análisis muestra cómo el conflicto en torno de la política automotriz se convirtió en un *locus* de limitaciones al desarrollo del capitalismo en Venezuela. La lucha a propósito de los motores no solo reflejó la tensión entre las estrategias de desarrollo basadas sobre la sustitución de importaciones y el fomento a las exportaciones, sino también una intensificación de la disyunción entre las lógicas de la acumulación de capital en el nivel global y de la reproducción social interna. Mientras que esta disyunción permitió cierto grado de expansión de la acumulación de capital (al costo de un incremento de la represión social) en Brasil, y en algunos periodos en México y Argentina, en Venezuela erosionó la posibilidad de aplicar cualquiera de las dos estrategias y consolidó el carácter rentista de la economía. En Venezuela, el “desarrollo nacional” ha tenido como premisa la ampliación local del capitalismo industrial, pero la industrialización solo se ha ampliado en el marco de los límites de la estructura social nacional, cuyas organización interna y vínculos con el mercado mundial se han erigido sobre la extracción y circulación de las rentas provenientes del petróleo.

Las guerras de los motores expresaron y consolidaron cambios significativos no solo en lo tocante a los objetivos de la política industrial venezolana, sino también en lo concerniente a las identidades de actores sociales fundamentales, y en las condiciones que estructuraron sus campos de acción. Lo que comenzó en 1974, por más ilusorio que fuera, como un momento de empoderamiento -de creencia en la capacidad interna para modernizar la nación- terminó en un simulacro acrecentado de poder: la pretensión de que se ejercía un control soberano en presencia de acontecimientos y fuerzas internos e internacionales incontrolables. La modificación de la política automotriz, de hecho el abandono de sus objetivos originales, se produjo lentamente y sin dramatismo, hasta tal punto que se presentó como un perfeccionamiento. Durante un periodo, cuando el desbordante flujo de riquezas petroleras parecía bendecir Venezuela y deslumbrantes proyectos de desarrollo estatales conjuraban fantasías colectivas de progreso, el entrelazamiento de impotencia con ilusiones de poder contribuyó a borrar la distinción entre la flexibilidad pragmática y la sumisión forzada. Los actores se adaptaron velozmente a las nuevas condiciones sin someter el pasado a una evaluación crítica. Se quebró la posibilidad de diferenciar entre versatilidad e inconstancia. Entre las grietas resultaba posible vislumbrar que la magia del dinero proveniente del petróleo ya no podía sostener al Estado mágico,

porque el dinero que el petróleo le aportaba al país se disolvía en los torrentes financieros globales del capital internacional.

7. Espejismos de El Dorado: la muerte de una fábrica de tractores

En muchas economías de mercado, las restricciones gubernamentales a la actividad económica son realidades omnipresentes. Estas restricciones dan pie al surgimiento de rentas de variadas formas, por las cuales a menudo las personas compiten. En ocasiones esa competencia es perfectamente legal. En otros casos, la búsqueda adopta otras formas, como el soborno, la corrupción, el contrabando y el mercado negro.

Anne Krueger¹

En Venezuela, para que te llamen deshonesto tienes que ser un gángster.

(Un industrial venezolano)

El sistema de circulación

Si es cierto que el dinero habla, tenemos que entender lo que el dinero dijo durante el auge petrolero en Venezuela. En el curso del gobierno de Carlos Andrés Pérez, tras la cuadruplicación de los precios del petróleo, el dinero circuló en mayores cantidades y a través de más canales que nunca antes. En solo cinco años, los gastos gubernamentales superaron la suma de los gastos de todos los gobiernos anteriores desde inicios del siglo. Esta abundancia monetaria amplió o creó redes de acumulación de fortunas personales y alimentó la ilusión, en la medida en que el dinero pasaba de mano en mano, de que podía lograrse que cayera en lo que Keynes en cierta ocasión denominó las “palmas codiciosas” de los hombres (1963: 183). Es claro que el impacto de esta abundancia súbita, interpretada mediante concepciones del dinero como una sustancia o fuerza externa-“una lluvia de petrodólares”, “un regalo de Dios”, “ríos de dinero”-, estaba condicionado por el contexto preexistente. Al mismo tiempo, este cambio de forma y magnitud del flujo monetario produjo un cambio correspondiente en las relaciones y los valores sociales. Es la naturaleza de estos cambios relacionados entre sí la que me propongo analizar a continuación.

Un resultado visible de la súbita afluencia de petrodólares fue que la producción local de valor se subordinó más que nunca a la apropiación del dinero circulante. Un resultado igualmente real, pero menos obvio, fue el hecho de que cambió el carácter mismo de la circulación. El torrente de petrodólares ahogó la producción; en lo que respecta a la circulación, por el contrario, la infló. En la

¹ Se debe hacer notar que el concepto de rentas utilizado por la economía neoclásica difiere del concepto marxista. En la obra de Krueger, las rentas son el resultado de las restricciones sociales a la libre competencia (1974: 291-292)

medida en que los petrodólares erosionaban los vínculos entre la circulación y la producción, también se socavaban los límites que habían inhibido antes la expansión de la circulación como un sistema de relaciones y valores sociales. Con la erosión de esos límites, la circulación se expandió más allá de sus confines acostumbrados con lo que hizo retroceder o violó fronteras normativas. El quiebre de la normalidad creó una nueva sociabilidad.

Un recuento etnográfico de la corta vida de Fanatracto, una fábrica de tractores y motores, revela la lógica interna del sistema de circulación una vez que la ideología productiva se liberó de los límites impuestos por la práctica. En el capítulo anterior mostré cómo las negociaciones para seleccionar las compañías que fabricarían motores de vehículos se estancaron indefinidamente. Expuse cómo la justificación de las dilaciones, revestida de un discurso técnico que las presentaba como un conflicto entre las estrategias de industrialización basadas sobre el fomento a las exportaciones o la sustitución de importaciones, ocultaba una oposición más básica entre la producción y la apropiación de la renta. A su vez, esta oposición fundamental reflejaba la tensión entre el real predominio social de la circulación sobre la producción y la necesidad política de eclipsarlo y de presentar al Estado y a la burguesía como campeones de la producción. En este capítulo mostraré cómo la lógica de la circulación funcionó incluso en el caso de un proyecto que había alcanzado la etapa productiva.

Espejismos de El Dorado

El 22 de septiembre de 1978, el presidente Pérez puso a funcionar un tractor ensamblado en el sudeste de Venezuela por Fanatracto (Fábrica Nacional de Tractores y Motores Venezolanos). El acontecimiento tenía especial significación. La producción de maquinaria agrícola había sido un viejo objetivo de la estrategia industrial de sustitución de importaciones. Además, Fanatracto era la primera gran fábrica construida en Ciudad Bolívar, la capital del estado del mismo nombre, en Guayana. Esta región, asiento del mítico El Dorado durante la conquista española, se había convertido en el siglo XX en esperanza de la diversificación e independencia económicas de Venezuela. Como se vio en el caso del Sindicato del Hierro, su riqueza en recursos naturales -energía hidroeléctrica, hierro y bauxita- alimentó sueños de un futuro de abundancia, incluso sin el petróleo. Cinco años antes, en 1973, a punto de retirarse de su cargo de presidente de la CVG y en su condición de líder pionero de los esfuerzos estatales por industrializar la región -dado que había encabezado el proyecto hidroeléctrico durante el gobierno de Pérez Jiménez-, el general Rafael Alfonzo Ravard había decla-

rado que “el progreso de Guayana en los últimos 20 años ha sido la marcha de El Dorado hacia el hombre” (*El Universal*, 30/11/73). Fanatracto parecía encarnar el nuevo El Dorado, la futura marcha hacia Venezuela. En su discurso en ocasión de la inauguración de la fábrica, el presidente Pérez proclamó: “No tenemos nada que temer del mañana, cuando las fuentes de nuestro petróleo se hayan agotado, porque la industria y la agricultura venezolanas serán la base sólida y firme sobre la cual descansará el bienestar de los venezolanos” (*El Universal*, 23/9/78). Dos años después Fanatracto había muerto.



El presidente Carlos Andrés Pérez y el presidente de Fanatracto, Antón von Enzberg, en la inauguración de Fanatracto.
(Colección privada.)

El ensamblaje de los tractores comenzó en julio de 1978 en una planta piloto. La construcción de la planta a gran escala se inició en junio de 1978 y terminó a fines de 1980. La planta final, versión reducida de una fábrica de tractores John Deere ubicada en España, contaba con un espacio de 27.000 m² circunscritos y libres de polvo (un requerimiento para la producción de motores diesel), y su construcción cubría un área total de 127.000m². La fábrica, con una inversión inicial de más de 70 millones de bolívares (18 millones de dólares) estuvo lista para empezar a funcionar a inicios de 1981. Pero nunca llegó a producir ningún tractor. En vez de ello, fue abandonada. La promesa de la producción se convirtió en la realidad del deterioro. El cadáver de la fábrica esperó por el asalto conjunto de las fuerzas no domesticadas de la naturaleza -el avance de la vegetación- y de los seres

humanos “no socializados”, esto es, los marginados a los que se consideraba listos para destrozarla a fin de llevarse las piezas de baño y otras partes aprovechables de la construcción. “El Gobierno ni siquiera quiere proteger la fábrica”, se lamentaba uno de sus promotores privados, “de modo que tengo que estirar nuestro presupuesto para pagar a algunos guardias con nuestro propio dinero. Pero pronto todo habrá terminado. Los marginados destrozarán la fábrica y se la tragará la selva” (entrevista confidencial, agosto de 1981)².

Fanatracto murió en medio de un relativo silencio. Desde el inicio, los medios de comunicación le prestaron poca atención a sus dificultades. Sus promotores no emplearon a la prensa para generar el apoyo político que necesitaban a fin de que la fábrica sobreviviera. Cuando se vieron obligados a detener sus operaciones y a disolver la compañía en octubre de 1980, no se produjo ninguna expresión significativa de protesta pública. En un país donde la burguesía usa comúnmente los periódicos para ejercer presión, para construir un sentimiento de identidad colectiva e incluso para comunicarse entre sí, enviando mensajes privados entre grupos restringidos de la elite, el limitado empleo de la prensa parece sorprendente. Desde la perspectiva que ofrecieron los medios de comunicación, parecía como si sólo unas pocas personas sintieran cariño por Fanatracto, como si la fábrica, como los marginados, no tuviera dolientes de importancia. He tomado la aparente falta de dolientes de Fanatracto como una pista de mis investigaciones sobre su muerte prematura. Como en Venezuela la importancia social o el poder de los individuos se denota a su muerte por sus dolientes, que se reflejan en el número y el tamaño de las notas de condolencia publicadas (un código tácito determina dimensiones apropiadas y fuente institucional), he dado el paso de asumir que la muerte sin duelo de esta compañía reflejaba su falta de importancia social. También he asumido que el final silencioso de Fanatracto, si se considera el estatus de sus promotores, era un mensaje a voces; de ahí que descifrarlo sea una clave para entender su muerte.

Cuadro 9

La muerte de Fanatracto: actores principales Empresas y organismos

ACO S.A.: conglomerado propiedad de Alcoa Aluminum Co. y de diversos inversionistas venezolanos. Distribuidor de los productos de la Deere.

² El presidente de Fanatracto, Antón von Enzberg, tenía una opinión menos pesimista. Me dijo que la fábrica estaba protegida por un presupuesto de mantenimiento que debía alcanzar hasta 1985. Tomó literalmente el comentario de que a Fanatracto se la tragaría la selva, por lo que me hizo notar que la selva estaba a 200 kilómetros de distancia (entrevista personal, 13 de julio de 1983).

ACO Inversora: subsidiaria de ACO, en poder de 15% de las acciones de Fanatracto.

Cavendes: banco de inversiones propiedad de importantes grupos económicos locales, asegurador de 20% de las acciones de Fanatracto.

CVG: Corporación Venezolana de Guayana, compañía holding del Estado para el desarrollo industrial de la región de Guayana. Propietaria del 45% de las acciones de Fanatracto.

John Deere Co.: transnacional estadounidense, la mayor productora mundial de maquinaria agrícola, en poder de 20% de las acciones de Fanatracto.

Ministerio de Fomento: agencia responsable de la política industrial del Gobierno y de las actividades de fomento.

Fanatracto: compañía de capital mixto fundada para fabricar tractores en Venezuela.

Gabinete económico: subgrupo en el interior del gabinete gubernamental.

Individuos

Carlos Guillermo Cordido Valery: presidente de Fanatracto, miembro de la facción de Rafael Caldera del partido Copei.

Luis Herrera Campíns: presidente de Venezuela (1979-1984), del partido Copei.

Harry Mannil: presidente de la ACO.

José Porras Omaña: ministro de Fomento, sucesor de Concepción Quijada.

Concepción Quijada: especialista en agricultura e importador de tractores, hermano de Manuel Quijada.

Manuel Quijada: ministro de Fomento, amigo del presidente Herrera.

Carlos Andrés Pérez: presidente de Venezuela (1974-1979), del partido AD.

Andrés Sucre: presidente de la CVG.

El origen de Fanatracto

El objetivo de crear una fábrica de tractores se definió durante el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), se debatió en el del democristiano Rafael Caldera (1969-1974) y finalmente se concretó durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. El auge petrolero contribuyó a que el plan adquiriera dimensiones ambiciosas. Durante el gobierno de Pérez, el Estado decidió combinar la construcción de una fábrica de tractores con el establecimiento de un complejo diesel que produciría tres tipos diferentes de motores: de 60 a 120 caballos de fuerza para tractores y camiones pequeños; de 120 a 170, para camiones medianos; y de más de 170, para camiones grandes y ómnibus. Estos motores formaban parte de las asignaciones hechas a Venezuela por el Pacto Andino. Mediante la combinación en un solo lugar de la producción de tres tipos diferentes de motores, el Estado esperaba maximizar las economías de escala.

El 9 de octubre de 1975 el Gobierno invitó a firmas interesadas a presentar propuestas para la producción de los motores. Las empresas que ganaron la licitación original (Deere el motor pequeño, Fiat el mediano y Mack Truck el grande) se opusieron al plan gubernamental. Presentaron objeciones técnicas a la producción conjunta de elementos comunes para los motores, y plantearon que eran necesario crear fábricas separadas para cada motor. No obstante, el auge había generado en el seno del Gobierno el sentimiento de que el dinero confería un poder político ilimitado. Como en otras áreas de la política estatal, en este caso los planificadores creyeron que podían imponer sus exigencias nacionalistas a las compañías transnacionales. Un funcionario del Ministerio de Fomento expresó con orgullo en una entrevista privada:

Nosotros invitamos a sus representantes a una reunión y les dijimos lo que queríamos hacer. Tendremos una forja común para todos y produciremos ciertos elementos comunes para todos los motores. Todo este asunto estará gerenciado por una administración. Ellos presentaron sus objeciones, pero no pudieron refutar nuestros argumentos. Nosotros establecimos las condiciones y forzamos a las transnacionales a aceptarlas (entrevista, Jorge García Duque 1978).

El Estado, por intermedio del Ministerio de Fomento, logró establecer dichas condiciones. No obstante, las violó a través del presidente. A raíz de la visita del rey Juan Carlos de España, el presidente Pérez revocó el 9 de septiembre de 1977 la selección de la Mack para producir el motor diesel de gran tamaño y otorgó tanto el motor como los derechos de ensamblaje de camiones y ómnibus a Pegaso, que formaba parte de la estatal española Enasa. Los detalles de esta decisión se analizaron en el capítulo anterior. Baste recordar aquí que el Gobierno justificó su decisión sobre la base de la necesidad política de Venezuela de reforzar su relación con el nuevo régimen democrático español, y que al hacerlo violaba contratos legalmente sancionados. En este caso, sus acciones tuvieron dos consecuencias importantes: primero, el desmembramiento del complejo diesel de Guayana por razones políticas como resultado de la elección presidencial de la ciudad de Cumaná como asiento de la planta de Pegaso; y, segundo, un aumento de las preocupaciones privadas respecto de que el Estado redefiniera a su arbitrio las reglas mediante las cuales funcionaba. Uno de los más prominentes empresarios automovilísticos del país afirmó confidencialmente: “Después del asunto de la Pegaso no puedo convencer a ninguna transnacional a hacer negocios serios con Venezuela. ¿Cómo puedo convencerlas de que inviertan grandes sumas en Venezuela, si no puedo garantizarles que el Gobierno no cambiará arbitrariamente las reglas del juego?” (entrevista

confidencial, Caracas, septiembre de 1980).

En el sector privado, el incidente con Pegaso produjo el efecto de inhibir las inversiones productivas, fueran promovidas por capitalistas o por el Estado. Pero también alertó a los capitalistas sobre los peligros de no invertir en el momento adecuado. La selección de Pegaso era sólo en parte resultado de la arbitrariedad estatal; la resistencia privada a invertir en la industria también era responsable. Aunque se le había otorgado el motor diesel ya en 1976, Mack no había empezado a construir la fábrica y había empleado tácticas dilatorias. Una vez más, el predominio de las actividades comerciales frenaba la expansión industrial. Si Mack hubiera empezado la construcción, a Pérez le habría resultado más difícil revocar la selección original. El resultado fue que Mack se encontró sin apoyo gubernamental para su empresa industrial y enfrentada a un nuevo y formidable competidor en el sector comercial. Sobre la base de esta experiencia, un consultor de Mack (y ex-funcionario del Ministerio de Fomento) dijo a los ejecutivos de la compañía: "Incluso si no logramos sacar de una patada a la Pegaso, tienen que comenzar a producir, aunque sea sólo para exportar y sin mucha protección. Si la Pegaso se retira o si resulta incapaz de enfrentar la competencia de la Volvo de Perú, la Mack estará aquí" (entrevista, septiembre de 1980). Desde esta perspectiva, la producción no se oponía a la circulación, sino que más bien se consideraba la inversión industrial como un medio para conservar el predominio comercial.

La creación de Fanatracto

Fanatracto fue hija de este imperativo de industrializarse o morir, impuesto a las empresas comerciales por las políticas de sustitución de importaciones. Los productores extranjeros de tractores se habían visto obligados a presentar propuestas para la producción. Para algunos de ellos, el mercado local no era lo suficientemente grande como para justificar una inversión industrial, pero era lo bastante lucrativo como para tentarlos a invertir en instalaciones productivas a fin de preservar su presencia comercial. El Estado los enfrentó a una alternativa inflexible: el perdedor sería excluido del mercado comercial y el ganador contaría con un mercado cautivo. Además, el Estado le garantizaba al ganador un adecuado apoyo financiero y una protección arancelaria suficiente contra productos importados de menor costo.

Los estudios de factibilidad habían demostrado que con un mercado anual de 4.000 tractores, el país podía asimilar una única fábrica solo si esta recibía una generosa protección estatal. El plan para

instalar la planta se justificaba sobre la base de que sería un medio para fomentar la producción agrícola al reducir el costo de sus insumos. Los tractores, a diferencia de los camiones o los ómnibus, debían recibir mantenimiento en el lugar donde se usaban. Como el mercado de Venezuela era pequeño y existían multitud de marcas, el mantenimiento de los tractores era pobre, lo que limitaba su vida útil promedio. Los tractores en desuso yacían desperdigados por los campos.

El Estado quería contrarrestar el impacto negativo de esta situación sobre la producción agrícola y los precios mediante el desarrollo de una red de mantenimiento nacional adecuada. Sin embargo, ello sólo era posible en un mercado con una sola marca. El establecimiento de un monopolio comercial no era factible desde el punto de vista político. El Gobierno no podía justificarlo en principio, y de hacerlo tendría que enfrentar la oposición de los vendedores. El establecimiento de un monopolio industrial, por otro lado, podía justificarse por consideraciones tanto políticas como técnicas. La firma tendría que satisfacer ciertas condiciones: participación accionaria estatal, para evitar que la compañía favoreciera ciertos intereses privados en detrimento de otros, o que cobrara precios excesivos; inversión de un distribuidor local para garantizar el mantenimiento y el apoyo político; e inversión de un fabricante extranjero de tractores, que aportara la tecnología moderna.

Así nació Fanatracto. La inversión total se estimó en 168 millones de bolívares (39,1 millones de dólares). De la inversión inicial de 50 millones de bolívares, John Deere (ganadora de la licitación) proporcionaría 20%; ACO Inversora (una subsidiaria de ACO S.A., un conglomerado local que distribuía productos de Deere y otros vehículos), 15%; Cavendes (un banco de inversiones que actuaba como asegurador), 20% para venta a otros distribuidores; y CVG (la corporación estatal), 45%. Por tanto, Fanatracto era un modelo especial de empresa mixta. Unía el capital estatal con el privado local y extranjero mediante una alianza de cuatro tipos de actores sociales: empresa transnacional, conglomerado privado local, banco privado local y corporación estatal. De ellos, dos merecen mención especial: CVG y ACO S.A.

Cuadro 10
Composición social de ACO S.A.

Accionistas	%
Aluminum Company of America (Alcoa)	41,9
Albur, C.A. ^a	21,9
Inversiones Diversas C.A. ^b	8,4
Sindicato Tamayo, S.A. ^c	8,9
Juan Simón Mendoza F.	2,4
Harry Mannil ^d	1,6
Empresa Mil S.A. ^e	1,5
Sindicato Santa Clara S.A. ^f	0,9
Arnold Orav ^g	0,8
Urbanización Central C.A. ^h	0,7
Funcionarios, empleados y otros accionistas	1,0
	100,00

Fuente: archivo de la CVG.

a) Juan Simón Mendoza es propietario de más de 90%; b) propiedad de Ricardo Degwitz; c) propiedad de la familia Tamayo; d) presidente y director de la junta de la compañía; e) propiedad de la familia Villasmil; f) propiedad de Arturo Brillembourg; g) vicepresidente de operaciones y uno de los directores de la compañía; h) propiedad de Juan Simón Mendoza.

CVG y ACO

De las numerosas empresas públicas de Venezuela, la CVG estaba entre las que disfrutaban de buena reputación por la relativa eficiencia de sus firmas (aunque también era famosa por no hacer caso al impacto social de sus gigantescas compañías en la región de Guayana). Desde su creación en 1960, el general Alfonso Ravard la había aislado de la política partidista al administrarla según un criterio “técnico” -lo que Dinkelspiel ha llamado un “estilo administrativo tecnológico”- que intentaba divorciarla de las implicaciones y demandas más abarcadoras de las políticas que contribuía a poner en práctica (1967). El sucesor de Alfonso Ravard, Argenis Gamboa, ingeniero graduado en la Universidad de Pittsburgh, continuó su tradición administrativa profesional. Como resultado, las empresas de la CVG se apoyaban en un grado inusual de continuidad de personal y profesionalidad técnica. El auge redujo el relativo aislamiento de la CVG respecto a la política, pero Andrés Sucre, su presidente durante el gobierno de Copei, prometió mantener las prioridades.

ACO Inversora (principal inversionista privada de Fanatracto y subsidiaria de la ACO S.A., en adelante ACO) también parecía ser un socio muy prometedor. Varios de sus rasgos hacían aparecer a ACO como un fuerte aliado. Era una gran compañía Holding que reunía capital transnacional (la Alcoa era propietaria de 41,9% de sus acciones) y a un grupo diversificado de inversionistas locales (2.000 accionistas, según el informe anual de ACO), entre los cuales se encontraban destacadas familias locales³. Era también un conglomerado diversificado que se especializaba en la distribución de maquinaria automotriz y agrícola, cuyas 42 compañías vinculaban a los sectores comercial, financiero, industrial y de servicios. Además, era el mayor distribuidor independiente de productos agrícolas e industriales de Deere en el mundo fuera del territorio de Estados Unidos, había contado con una administración profesional desde su creación en 1954, reunía personal capacitado y había tenido enorme crecimiento en los años recientes⁴. Más de 75% de las ganancias de ACO procedían de sus actividades comerciales. El Gobierno aprobó un incremento en el precio de los tractores de 30% sobre el precio CIF. Entre 1974 y 1977 la participación de ACO en el mercado de tractores subió de 19,7% a 36% (ACO S.A. 1974-1979).

ACO Inversora (en adelante Inversora) era una compañía subsidiaria Holding de la cual 40,9% era propiedad de ACO y 59,1% de los directores y accionistas de ACO. Por intermedio de sus subsidiarias en operaciones (muchas de las cuales eran antiguas subsidiarias de ACO), Inversora participaba en la distribución de vehículos de carga y de maquinaria pesada, alquiler de equipos, y en la manufactura y en la exportación de café. Inversora se había fundado en 1976 para posibilitar la diversificación y el crecimiento de ACO. La decisión venezolana de incorporarse al Pacto Andino en enero de 1974 y la aceptación de la Decisión 24, que regulaba la inversión extranjera en la región, limitó la expansión de ACO porque Alcoa tenía una gran participación en la compañía. Según los términos de la Decisión 24, la nueva inversión extranjera en áreas especificadas, que incluían la compra, el mercadeo o la distribución de bienes, quedaba restringida a las compañías nacionales, esto es, a aquellas en las cuales la participación extranjera fuera menor de 20%. Las compañías “mixtas”, en las cuales el capital extranjero representaba menos de 50% del capital total, podían continuar conduciendo las operaciones ya existentes, pero no se les permitía ampliar sus actividades en esas áreas. Mediante el desplazamiento de sus acciones, la propiedad indirecta de Alcoa de 17% de Inversora (por intermedio

³ Tamayo Rivero, Degwitz, Mendoza Fleury, Mendoza Goiticoa, Villasmil y Brillembourg.

⁴ Entre 1973 y 1977 las ventas netas crecieron de 71,1 millones de dólares a 212 millones, esto es, una tasa de crecimiento compuesto anual promedio de 31%. Los ingresos netos se incrementaron de 4,3 millones de dólares a 15,9 millones, a una tasa de 39%; y las ventas de los productos de Deere aumentaron a una tasa de 51%. En 1977, los equipos agrícolas representaron 19,6% de las ventas de ACO y crecieron a una tasa de 33,6% en el periodo 1973-1977.

de su 41,9% de participación en ACO) resultaba menor a 20% permitido. De ahí que la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) clasificara a Inversora como compañía nacional, con derecho a expandirse a nuevas áreas industriales y comerciales. Por supuesto, Fanatracto era el tipo de proyecto industrial reservado a las compañías nacionales, pero los principales promotores del proyecto no tenían prisa por ponerlo en marcha. La CVG estaba participando en varios proyectos de mayor envergadura: el Plan IV de Sidor, la siderúrgica estatal, cuya intención era cuadruplicar la producción de acero en un periodo de cinco años; el esfuerzo por duplicar la producción de aluminio mediante la ampliación de Alcasa y la creación de Venalum; y el incremento de la energía hidroeléctrica mediante la ampliación de la represa del Guri. ACO, por su parte, quería seguir cosechando beneficios comerciales del auge petrolero el mayor tiempo posible. Si bien se había construido una planta piloto para ensamblar tractores y entrenar al personal local, Harry Mannil, presidente de esta compañía, frenó el ensamblaje de tractores, aparentemente para evitar la hostilidad de otros importadores, así como de sus proveedores extranjeros (entrevista confidencial, septiembre de 1980).

Por otra parte, las consideraciones electorales desempeñaron un papel esencial para acelerar la construcción de la fábrica. Pérez había querido ser el pionero de la producción de tractores, pero su presidencia estaba a punto de terminar sin que la fábrica entrara en funcionamiento. De ahí que tuviera que contentarse con la perspectiva de echar a andar un tractor ensamblado en la planta piloto, lo que hizo sólo 10 semanas antes de las elecciones presidenciales de 1978.

La muerte de Fanatracto

La sorprendente derrota de AD en las elecciones de diciembre llevó al poder al gobierno democristiano presidido por Luis Herrera Campíns. Uno de los primeros actos de su gabinete económico fue nombrar un comité para evaluar la política automotriz. El comité formó un subcomité para estudiar a Fanatracto, compuesto por representantes del Ministerio de Fomento, el Ministerio de Planificación (Cordiplan) y el Ministerio de Agricultura. Tras un trabajo de cuatro meses, el subcomité emitió un informe que aprobaba el proyecto de Fanatracto y recomendaba todo el apoyo gubernamental. Hacía dos importantes sugerencias: se le debía conceder a Fanatracto una tarifa de protección de 50%; y, hasta tanto entrara en vigor la tarifa, se debía establecer un sistema de licencias de importación que solo permitiera la entrada de tractores cuya potencia fuera diferente a la de los

previstos por la compañía.

El informe evaluaba las objeciones fundamentales hechas al proyecto (sobre todo por agricultores e importadores de equipos agrícolas): primero, que los tractores producidos en el país tendrían un alto precio⁵; segundo, que esos tractores costosos incrementarían los costos agrícolas⁶; tercero, un monopolio en este sector clave tendría consecuencias negativas⁷. El informe enfatizaba la contribución de Fanatracto a los objetivos del desarrollo general de la nación: la creación de empleos calificados, el establecimiento de *backward linkages*, el ahorro de divisas, la transferencia de tecnología y el fomento de la autonomía nacional.

Pero el ministro de Fomento, Manuel Quijada, inexplicablemente no le transmitió los resultados de este informe al gabinete económico. En vez de ello, dio una serie de pasos para posponer cualquier decisión. Solicitó nuevas informaciones sobre todos los aspectos de Fanatracto, mientras permitía la importación de tractores emitiendo numerosas licencias de importación. El 20 de junio de 1980 decidió pedirle a la firma que revisara su programa de contenido local. En una carta dirigida a su presidente, Quijada expresaba su preocupación por el impacto de Fanatracto en los costos agrícolas y explicaba que “cualquier decisión sobre esta industria tiene que tomar en cuenta su efecto sobre la actividad agrícola” (CVG 1980). Quijada también insistió en que el contrato con Deere especificara que se le concedieran a Fanatracto los derechos exclusivos para la fabricación de tractores Deere en la región andina, y que esta empresa accediera a comprar partes, piezas y motores todos los años (por un valor equivalente a 2.500 tractores), para exportar fuera de los límites de la región. Si se cumplían estas dos condiciones, el Gobierno accedería a suspender todas las licencias para la importación de tractores y le concedería a Fanatracto una tarifa de protección de 25%.

⁵ El informe planteaba que el sobrecargo sería solo de 33,4%, asumiendo que la producción total tendría 60% de contenido local y 33% de incremento en el costo de las partes fabricadas en el país, comparadas con las importadas.

⁶ En el informe se presentaban dos alternativas. Si se asumía que la vida promedio de un tractor era de cinco años, 35% de incremento del costo del tractor supondría un aumento de

0,037 bolívares por kilogramo de la producción agrícola promedio. Si, por otro lado, se asumía que la vida promedio del tractor era de siete años (como resultado de la estandarización y de las mejoras en los servicios de mantenimiento), los costos agrícolas se reducirían en 0,05 bolívares por kilogramo.

⁷ El informe planteaba que la inversión del Estado en el proyecto, que le permitía controlarlo, evitaría que la firma favoreciera a un interés privado particular o que elevara los precios especulativamente. De ser necesario, el Estado podría aumentar su control convirtiéndose en accionista mayoritario. Recomendaba, no obstante, que se estudiara la estructura de costos de la producción de los tractores para determinar el precio que debían pedir los distribuidores.

Cuadro 11
Composición social de ACO Inversora S.A.

Accionistas	%
ACO S.A.	40,9
Albur, C.A. ^a	22,5
Inversiones Diversas C.A. ^b	8,3
Sindicato Tamayo, S.A. ^c	7,8
Funcionarios, empleados y otros accionistas	20,5
	100,00

a) Juan Simón Mendoza es propietario de más de 90%; b) propiedad de Ricardo Degwitz; c) propiedad de la familia Tamayo.
Fuente: Archivo de la CVG.

Cuadro 12
Composición social de Fanatracto

Accionistas	%
CVG	45
John Deere Co.	20
Cavendes	20
ACO Inversora S.A.	15
	100,00

Fuente: Archivo de la CVG.

Cuadro 13
Crecimiento anual de ACO
(%)

	1974	1975	1976	1977	1973-1977
Vehículos automotores	67,9	24,8	21,3	35,9	36,3
Equipos agrícolas					
Maquinaria industrial y de la construcción	17,4	83,6	20,7	13,6	31,1
	26,2	100,5	20,5	29,9	41,1
Piezas de repuesto	21,9	49,0	22,6	30,8	30,6
Servicios y otros	49,1	(13,6)	(5,4)	(18,4)	-
Total	32,3	44,4	22,6	27,3	31,4

Fuentes: Archivo de la CVG; informes anuales de ACO S.A.

La posición del ministro Quijada formaba parte de un giro de la política gubernamental que también reflejaba un cambio en el clima internacional de la opinión económica. La liberalización se había convertido en la fórmula preferida por las agencias financieras y de desarrollo para lidiar con las economías estancadas. Mientras que en el resto de América Latina se aplicaba de manera bastante sistemática, en Venezuela se empleaba de forma bastante ad hoc. No había necesidad, como sí la había en países con regímenes autoritarios como Chile, de utilizar las doctrinas económicas como medio de legitimación política. La liberalización se usaba, más bien, de forma incoherente, como respuesta a problemas económicos coyunturales. Por ejemplo, cuando el sector privado vacilaba en invertir debido al decrecimiento de los márgenes de ganancia en ciertos sectores, el Gobierno invocaba la liberalización para eliminar los controles sobre los precios de los productos, congelados desde hacía tiempo para proteger a los consumidores.

La liberalización también servía para justificar la concesión de licencias para la importación de tractores, lo cual llevó a que durante este periodo el mercado se saturara. En esas condiciones, el ensamblaje en la planta piloto de Fanatracto dejó de ser rentable. Entre 1978 y 1979, el armado de 992 tractores (149 en 1978 y 843 en 1979) produjo pérdidas por valor de 8.128.000 bolívares. El plan de producción de 1980 era de 995 tractores, con una pérdida estimada de 9.400.000 bolívares⁸. Las

⁸ La producción total fue de 1.400 tractores.

condiciones establecidas por Quijada eran obviamente irrazonables. Un líder de ACO expresó confidencialmente: “En realidad sólo necesitábamos 30% de protección. Pedimos más porque queríamos tener más margen para maniobrar”⁹. Más margen significaba, por supuesto, mayores ganancias. Ahora se había reducido el espacio de maniobra de Fanatracto. Incluso si cumplía con todas las condiciones impuestas por Quijada, solo se le concedería una tarifa de 25%. En un país donde los autos recibían una tarifa mínima de protección de 60%, parecía irrazonable esperar que se pudiera producir tractores de manera rentable, a pesar de su menor nivel de contenido local, en esas condiciones. Incapaz de alterar la posición de Quijada y enfrentada a una creciente presión financiera, Fanatracto hizo lo que hacen la mayoría de las empresas vinculadas al Estado cuando atraviesan problemas: pidió ayuda financiera al Gobierno.

Cuadro 14

Ventas netas de ACO (en millones de dólares)										
	1977	%	1976	%	1975	%	1974	%	1973	%
Automotores, camiones y ómnibus	383,124	42,0	281,923	39,4	232,490	39,8	186,345	46,1	111,006	36,4
Maquinaria agrícola	170,553	18,7	150,076	21,0	124,338	21,3	67,725	16,7	57,688	18,9
Vehículos todo terreno	141,015	15,5	110,329	15,4	79,696	13,6	55,993	13,8	64,284	21,0
Maquinaria industrial y de la construcción	132,133	14,5	101,69	14,2	84,364	14,4	42,072	10,4	33,348	10,9
Piezas de repuesto	68,906	7,6	52,699	7,4	42,971	7,4	28,843	7,1	23,669	7,7
Servicio y otros	15,765	1,7	19,311	2,6	20,405	3,5	23,621	5,9	15,847	5,1
Total	911,496	100,0	716,028	100,0	584,264	100,0	404,599	100,0	305,842	100,0

Fuentes: Archivo de la CVG; informes anuales de ACO S.A.

Cuadro 15

Ganancias netas de ACO (% de las ventas netas)					
	1977	1976	1975	1974	1973
Automotores, camiones y ómnibus	18,9	17,7	16,8	16,4	16,0
Maquinaria agrícola	20,9	22,9	24,9	25,3	19,4
Vehículos todo terreno	14,9	13,5	11,9	12,2	12,1
Maquinaria industrial y de la construcción	26,1	24,1	19,4	16,0	17,6
Piezas de repuesto	25,2	26,4	32,1	31,1	20,9
Servicio y otros	2,6	33,1	13,8	22,0	11,9

Fuentes: Archivo de la CVG; informes anuales de ACO S.A.

⁹ Entrevista confidencial (15 de septiembre de 1980). No obstante, según Von Enzberg, presidente de Fanatracto, ese nivel de protección era necesario para compensar los costos más altos resultantes de un incremento del contenido local en una fase posterior del proyecto (entrevista, 13 de julio de 1983).

Ventas de tractores de ACO

Año	ACO S.A.		Importaciones totales		Participación de ACO %
	Unidades	%	Unidades	%	
1974	538	—	2.728	—	19,7
1975	957	77,9	3.033	11,2	31,6
1976	1.259	31,6	3.300	8,8	38,2
1977	1.336	6,1	3.700	12,1	36,1

Fuentes: Archivo de la CVG; informes anuales de ACO S.A.

La petición de asistencia financiera, empleada como un último recurso, era un medio que utilizaba Fanatracto para ganar tiempo. En ese momento la expectativa consistía en que si se le otorgaba margen de tiempo, de repente algo podría pasar: Quijada podía cambiar de opinión, se podría persuadir al presidente de que apoyara a Fanatracto, o podría nombrarse un nuevo ministro. La cadena de incoherencias alimentaba la expectativa de que se produjeran nuevas incoherencias y fluctuaciones. Tenía sentido que los promotores de la compañía actuaran en armonía con la incoherencia estructural del sistema. De modo que si el Gobierno parecía contradecirse al promover y socavar de modo simultáneo su compañía, era razonable que sus promotores apelaran a un banco estatal en busca de ayuda financiera para salvarla cuando el ministro de Fomento condicionaba su sobrevivencia a su capacidad de ser eficiente en los costos. La petición de la compañía solo parecía absurda si se asumía que la política estatal es siempre coherente; en el contexto venezolano Fanatracto hizo lo que era esperable. Sus promotores decidieron apelar a la persona más cercana al presidente Herrera, su ministro secretario, Gonzalo García Bustillos. En una carta fechada el 2 de julio de 1980, Carlos Guillermo Cordido Valery, presidente de Fanatracto, pedía a García Bustillos que apoyara su solicitud de un préstamo del Banco Industrial (propiedad del Estado) por 10 millones de bolívares. La carta, redactada con todo cuidado, eludía cualquier rastro de confrontación con el ministro de Fomento. En lugar de ello, se centraba en la urgente necesidad de la compañía para poder cumplir perentorias obligaciones. El tono y el mensaje de la carta se explicitaban ya en su primer párrafo. “Aunque el Ministerio de Fomento se ha declarado dispuesto a apoyar... a Fanatracto... este apoyo ha llegado tarde” (CVG 1980). Por supuesto, la disposición de Quijada era pura fachada pública, condicionada al cumplimiento de sus férreos requerimientos. Como la administración de Fanatracto había asumido la táctica de aceptarlos -porque todo era “absurdo”- se sentía con derecho a

mencionar el apoyo declarado de Quijada.

Cordido Valery explicó su estrategia en una carta que le escribió el día siguiente a Andrés Sucre, presidente de la CVG. “Nos hemos centrado exclusivamente en el problema con el Banco Industrial porque plantear el asunto del apoyo general al proyecto podría crear demoras que afectarían de manera adversa a las urgentes necesidades de la compañía” (CVG 1980). Continuaba explicando que había firmado la petición, en su condición de presidente de la compañía, pero que si Sucre pensaba que debía firmarla, en su calidad de presidente del principal accionista, se sintiera libre de hacerlo. Intentó también tener una reunión con García Bustillos, a quien deseaban imponer de la urgencia de la petición. El cuidado que Cordido le concedió a cada detalle de la carta revela la precaria posición en que según su sentimiento se encontraba la compañía. Como era evidente que Quijada contaba con el apoyo del presidente Herrera, Cordido sentía que tenía que medir bien cada paso. Su estrategia tuvo éxito. El 14 de julio, Luis Ugueto, ministro de Hacienda, envió una carta al ministro secretario García Bustillos en la cual le informaba que “el gabinete económico ha decidido concederle a Fanatracto el préstamo solicitado”¹⁰.

Este apoyo financiero no reflejaba un cambio de política con respecto a la compañía. En realidad, era un ejemplo de la respuesta típica de la política venezolana: mitigar los conflictos con un colchón de petrodólares. El dinero se empleaba, si no para mantener contentos a los que había que contentar, al menos para disminuir el costo político de las decisiones del Estado. Este subsidio al consenso sobre la base del petróleo promovía la ambigüedad en las prácticas y los valores sociales al prolongar de modo artificial la vida de actores en conflicto. El uso del dinero como cemento social era al mismo tiempo la expresión y el cimiento de una cultura política de reglas ambiguas y de una vida política plagada de continuas intrigas. En este caso, el préstamo, obviamente, no pretendía solucionar los problemas de Fanatracto. No se trataba en este caso de mantener funcionando la empresa a golpes de dinero (“a realazos”), sino evitar su muerte inmediata. Durante esta prolongación de la vida de la compañía, sus promotores trataron tanto de presionar para que se cambiara la política como de cumplir con los requisitos de Quijada. Mientras avanzaba con rapidez la construcción de la moderna fábrica para dejarla en condiciones de funcionar a principios de 1981, Deere evaluaba nuevos programas de exportación, asistencia tecnológica e incorporación de contenido local.

No obstante, en octubre de 1980, Quijada le dijo en privado a Sucre, que el Gobierno nunca le

¹⁰ A pesar de esta decisión, según Von Enzberg, presidente de Fanatracto, el Banco Industrial sólo le entregó a Fanatracto tres millones de bolívares (entrevista personal, 1983).

brindaría protección a Fanatracto. Como resultado de esta información y de las continuas dificultades financieras, la junta directiva de la compañía decidió suspender sus operaciones. El beso de la muerte se produjo el 5 de noviembre. La Gaceta Oficial publicó una resolución del Ministerio de Fomento por medio de la cual se eliminaba el requisito de las licencias de importación para los tractores y se establecía una tarifa de solo 1%. Esta decisión contradecía acuerdos previos y marcó el final de toda posibilidad de arreglo. Como resultado, la junta directiva de Fanatracto decidió poner fin a las operaciones de la compañía y vender sus activos.

La prensa se mantuvo en un silencio casi total. Sólo los periódicos de Ciudad Bolívar lamentaron el cierre. Por el contrario, un anuncio aparecido en un periódico de circulación nacional celebraba la muerte de la compañía. La Asociación de Agricultores reimprimió un artículo pagado, publicado antes, en el que se criticaba el proyecto. La nota afirmaba que no se debía crear una fábrica de tractores que no los produjera al mismo precio que los importados. Por supuesto que esta posición contradecía principios básicos de la ideología venezolana de la industrialización. Aun así, se sostenía osada y claramente.

La aceptación silenciosa de los hechos contrastó con los fuegos de artificio de la guerra de los motores. La lucha por salvar la compañía se había reducido a negociaciones privadas con el ministro de Fomento. La limitada atención que le prestó la prensa tuvo sentido sólo para quienes conocían las bambalinas de la situación. Cuando la compañía cerró sus puertas, únicamente la voz solitaria de un líder de una asociación industrial (AIMM, Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería) se alzó para acusar al empresario Concepción Quijada de “presionar con éxito para que se cerrara Fanatracto”. El ministro Quijada le respondió con vehemencia: “Lo único venezolano de los tractores de Fanatracto era el aire de los cauchos”. Insistió en que la compañía no había querido producir con una tarifa de 25% y reiteró que el Gobierno no estaba dispuesto a concederle una protección mayor. Para él, la cuestión no era solo económica, sino también moral:

Si la AIMM quiere mantener la fábrica en funcionamiento, que cree un fondo especial para hacerlo. Algunos venezolanos todavía no pueden acostumbrarse al hecho de que un gobierno puede adoptar decisiones sobre la base del mero interés nacional... pero con el tiempo se acostumbrarán a un clima de moralidad, que es el que queremos implantar en Venezuela (*The Monthly Report*, octubre de 1980).

Pocos meses después, el ministro Quijada, en una significativa posdata a Fanatracto, fue destituido de

su cargo. Enfrentado a la creciente oposición del sector privado y al descontento público por el estado de la economía, el 4 de enero de 1981 el presidente Herrera invitó a desayunar a Quijada y le informó a su amigo que el Gobierno necesitaba un cambio de imagen. Le ofreció el cargo de embajador en España, que Quijada rechazó.

El nuevo ministro, Porras Omaña, era una personalidad muy diferente. No correspondía a la preferencia del presidente por un ministerio libre de vínculos con el sector privado. Por el contrario, era famoso por emplear sus vínculos con el Estado para favorecer los intereses de un importante grupo económico. Durante el periodo de Betancourt se había desempeñado como director de industrias del Ministerio de Fomento; en esa época había sido un firme defensor del proteccionismo. Abandonó su cargo para trabajar para el poderoso grupo económico Di Mase, vinculado a AD: una familia con fuertes intereses en la banca y propietaria de la ensambladora de Fiat. En el momento de su nombramiento, se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo del Banco de la Construcción de Oriente, de los Di Mase. Sin embargo, al igual que Quijada, Porras Omaña era amigo personal de Herrera, habían estudiado en la misma escuela secundaria de Barquisimeto y podía brindarle al presidente la lealtad y la confianza que buscaba.

Post mortem: las fuerzas opuestas a Fanatracto

Era de esperar que una alianza de agricultores e importadores de maquinaria agrícola se opusiera a Fanatracto. Los primeros han disfrutado tradicionalmente de libertad para importar sus insumos; de hecho, algunos de ellos se han convertido en grandes importadores por derecho propio. Uno de los líderes más visibles del sector agrícola expresó su oposición al proyecto cuando se inauguró en septiembre de 1978. En esa ocasión, Concepción Quijada, ex-presidente de Fedecámaras (la asociación de los grandes hombres de negocios) y en ese momento presidente de la Asociación de Cultivadores de Algodón dijo a un periodista: “Nunca he apoyado el ensamblaje de tractores en Venezuela con el pretexto de desarrollar una industria nacional, porque la producción agrícola ya enfrenta dificultades y no se le pueden imponer nuevos costos que sería imposible cubrir” (*El Universal*, 20/9/78). Advirtió que la producción de tractores solo podía sobrevivir si se la protegía con altas tarifas, e instó a los agricultores y a los ganaderos a vigilar su desarrollo.

Manuel Quijada

Lo inesperado en septiembre de 1978 era que AD perdiera las elecciones y, sobre todo, que Manuel Quijada, hermano de Concepción, fuera nombrado ministro de Fomento. Si la victoria de Herrera fue una sorpresa, para la mayoría la elección de Quijada era inimaginable: no era miembro de Copei, carecía de experiencia en asuntos industriales y, además, en 1962 había estado involucrado en un levantamiento armado de izquierda contra Betancourt. Hasta un periodista que simpatizaba con él se sintió obligado a tocar el asunto. En una entrevista de siete horas, el periodista suscitó una fuerte reacción en Quijada al comentar que muchos se habían sorprendido por su nombramiento, dada su falta de credenciales para el cargo y su borrascoso pasado político. “Se dice que hubo que investigar su *curriculum vitae* en la Disip” (la policía política). Quijada contestó sin perturbarse: “En todo caso (sonriendo), una parte de él”. La otra parte, afirmó, tenía que ver con las cualidades personales reconocidas por el presidente. Aseguró que Herrera Campíns lo había seleccionado porque quería a una persona de ideas claras, independiente de los grupos económicos, en la cual pudiera confiar. Para Quijada, la economía no era cuestión de conocimientos, sino de sentido común. “Yo no soy economista, ni siquiera manejo bien la terminología. Creo que la economía es más un problema de lógica que de conocimiento teórico profundo. Los verdaderos problemas tienen que ver con el sentido común y no con las teorías.” (*Número*, 21/12/1980). A propósito de otro comentario del periodista, expuso su visión de Venezuela. El entrevistador observó: “Se ha dicho que Quijada es un ministro adecuado para la 'República del Este', pero no para el Ministerio de Fomento”. (La República del Este fue una tertulia informal de poetas, profesores y artistas en general que se reunían a platicar sobre la vida y la política en los bares de Sabana Grande, un área comercial del este de Caracas.) Quijada replicó:

Puede ser, porque en la República del Este están solamente los capaces, inteligentes, frustrados por los mediocres. Indiscutiblemente ahí es la única parte donde no se habla de negocios, se habla de cuestiones importantes o más interesantes en la vida de un país o de la cultura o del hombre. Lo que pasa es que se critica a la República del Este porque parece -parece no, es verdad- que se toma mucho. Casualmente en un país de orgía como este a los únicos que señalan como pecadores del alcohol es a los miembros de la República del Este (*Número*, 21/12/1980).

Esta visión de Venezuela tuvo impacto en su política. Ante la XI Convención del Consejo Venezolano de Industrias, expresó su firme oposición al proteccionismo, y criticó el uso de las licencias de

importación como instrumento de política industrial:

Tradicionalmente, en Venezuela se ha protegido y sobreprotegido a toda la industria local, independientemente de que su existencia tenga justificación económica, en términos de su eficacia en la utilización de los factores productivos internos y en función del destino social de los bienes generados. Los criterios seguidos por el Estado para mantener el instrumento arancelario, han estado más vinculados a la búsqueda de una industrialización a ultranza, que a la construcción de un plantel fabril que por su eficiencia económica tenga un impacto social positivo; asimismo el otorgamiento de protecciones, en algunos casos, es revelador del grado de influencia que un promotor industrial determinado pueda tener en el Gobierno de turno... La eliminación del mecanismo de licencias de importación, es una necesidad económica y moral. Desde el punto de vista económico la licencia de importación se transforma en un medio de restricción absoluta al acceso a la oferta externa, lo cual de hecho consolida situaciones monopolistas que anulan una política de estímulo a la competencia. En su vertiente moral para nadie es un secreto que constituye una fuente inagotable de corruptelas y de privilegios indebidos, de la política industrial y enturbiadores de la gestión administrativa (*Producción*, 10/8/1980).

Aunque Milton Friedman hubiera podido suscribir esas declaraciones, sería un error tomar a Quijada como un seguidor de la escuela de Chicago. En su contexto, esas palabras tenían un significado diferente: no eran tanto una adscripción al liberalismo como una crítica rudimentaria al capitalismo. De la misma manera que Proudhon, el acérrimo crítico de la institución de la propiedad privada, consideraba la propiedad como un contrapeso al poder del Estado (Hirschman 1977: 128), Quijada criticaba el privilegio capitalista en Venezuela y consideraba que la liberalización era un medio para contrarrestar su institucionalización.

Como muchas personas de su generación que compartían un pasado común, Quijada era crítico del curso que había tomado el capitalismo en Venezuela. Este sentimiento de insatisfacción estaba en las raíces del levantamiento armado de izquierda de 1962 en el que había desempeñado un importante papel. Casi dos décadas después, ahora como ministro, consideraba el capitalismo como una etapa necesaria en el desarrollo de la humanidad; no pretendía combatirlo, sino humanizarlo. El capitalismo debía ser humanizado porque era injusto, indiferente a la pobreza y a la desigualdad. Esta indiferencia era un reflejo de su falla fundamental: una estrechez de espíritu resultado de la implacable búsqueda de la ganancia que alentaba. Al crudo materialismo del *ethos* capitalista, Quijada oponía una espiritualidad trascendental, que tenía sus raíces en la teología medieval española y en ideas mercantiles que consideraban degradante la inversión capitalista y que el dinero era para circular y no para ahorrar. De ahí que el espiritualismo de Quijada no pudiera constituir una guía para acciones prácticas en un medio capitalista. Su medio era una corriente de intelectuales latinoamericanos que

se consideran por encima de las preocupaciones mundanas de la existencia material.

En el centro de la visión de Quijada estaba la interpretación del origen natural de su riqueza y del despilfarro social de la misma. En su larga y a menudo inconexa entrevista, Quijada planteó que como Venezuela consumía riqueza natural y no social, era incapaz de sustentar el desarrollo de la vida civilizada:

¿Cómo es posible que un país como el nuestro, tenga una riqueza que la está consumiendo una sola generación? Una riqueza que no nos pertenece como generación, porque las riquezas naturales pertenecen a todas las generaciones de Venezuela, la actual y las que vienen. La hemos estado consumiendo para el enriquecimiento y, por cierto, muy mal usado este enriquecimiento, de una clase social en nuestra generación. Y digo mal usado porque aquí no existe una verdadera calidad de vida. No digo calidad de vida a nivel de las clases populares, ni siquiera a nivel de las clases prósperas, porque para nosotros el arte, por ejemplo, cuesta poco, es mucho más placentero ir a emborracharse en Miami que vivir aquí en Venezuela en otras condiciones o ir a Europa a ver todo lo que es el mundo cultural europeo. O sea que nosotros no tenemos una calidad de vida en ninguno de los niveles. Claro, existe una clase intelectual, muy importante, muy interesante, lo que tú quieras, pero eso no significa que haya una calidad de vida. Ni la hay a nivel de las ciudades más desarrolladas y menos en el interior. El problema que tenemos en el interior es que no hay una calidad de vida. Por eso hay una especie de cerco, una especie de horda, de miseria, que prácticamente está rodeando a este país y que crea un estado de peligrosidad, inclusive, de intranquilidad, porque no se encuentra un mejor confort de vida en el campo y se vienen para acá. Las ciudades de Venezuela, las ciudades grandes, son ciudades asediadas (*Número*, 21/12/1980).

Quijada representaba una tradición cultural que permanecía en una tensión ambivalente ante el avance del capitalismo: aceptaba su dinamismo, pero rechazaba su espíritu. Como ha señalado Germán Carrera Damas, un importante historiador venezolano:

Desde el final del siglo xviii hasta la Segunda Guerra Mundial lo que más aplastaba a los venezolanos preocupados era una sensación de tiempo suspendido, de estancamiento de una sociedad que no se movía hacia ninguna parte, que se agotaba en sí misma, en su miseria, en su hambre, en su pobreza, en su pequeñez. No hay peor suerte para un pueblo que esto. Es 100 veces mejor para un pueblo vivir en medio de problemas. Por esta razón ese loco pero ilustrado Antonio Guzmán Blanco se distinguió de sus contemporáneos por su horror al atraso y por ser capaz de venderle su alma al diablo a cambio de romper con el atraso. Así, fue capaz de hacer eso, de vender su alma al diablo, al capitalismo en expansión (*El Nacional*, 30/11/80)¹¹.

¹¹ Guzmán Blanco, que gobernó Venezuela intermitentemente durante el último tercio del siglo xix, fomentó activamente el desarrollo del sector exportador de café y la incorporación de Venezuela al mercado mundial.

En el mapa ideológico de Venezuela, Quijada se presentaba como un campeón del alma perdida de la nación. En correspondencia con su visión de una separación entre la cultura y los negocios, entre la espiritualidad y la materialidad, estaba la idea de las dos Venezuela: una nación corrupta gobernada por el dinero y “la República del Este... el único lugar donde no se habla de negocios”. En esta oposición, los extranjeros eran la encarnación preferida del capitalismo como un mal. En tanto forasteros, representaban al capital como fuerza ajena, no mediada por la red de relaciones que vinculaba a los sectores de negocios y las comunidades intelectuales del país, que mitigaba los elementos negativos asociados a la búsqueda del dinero. Era desde la perspectiva de la República del Este que Quijada atacaba a Fanatracto.

En su oposición a Fanatracto también desempeñaban un papel otros factores. Su hermano mayor, Concepción, lo había ayudado en 1962 mientras estuvo preso y posteriormente exiliado, época en la que había estudiado arte en Florencia (entrevista confidencial, septiembre de 1980). Ahora Manuel tenía la oportunidad de reciprocár. Su hermano no sentía la necesidad de ocultar los beneficios que obtenía de sus vínculos con el ministro. En una reunión con líderes de ACO, se jactó: “Fanatracto nunca funcionará. Estoy obteniendo una licencia para importar varios cientos de tractores. Nunca podrán competir conmigo”.

Política y dinero

Este ostentoso despliegue de poder se estaba haciendo normal. Si antes del auge petrolero de 1974 una cierta discreción caracterizaba el uso privado del poder público, ahora la arrogancia ponía su sello en su empleo, como si exhibir el poder confirmara tenerlo. La frenética búsqueda de dinero borraba aún más la línea que separaba lo público y lo privado. En muchos círculos, abstenerse de emplear el poder público para fines privados equivalía a una estupidez. Si bien en Venezuela ser “vivo” siempre se ha asociado con ser rápido -con la capacidad para comprender de inmediato una situación- ahora ser vivo significaba encontrar maneras de enriquecerse velozmente. Estuviera donde estuviera, el dinero tendía a definir la situación. Desde una perspectiva que privilegiaba su búsqueda, el Estado, como principal distribuidor del dinero proveniente del petróleo, se percibía como fuente de riqueza y como herramienta para el enriquecimiento privado.

En los más altos niveles del poder estatal, el presidente necesitaba un grado relativo de independencia de la influencia del dinero y de la política partidaria. En ese nivel, la honestidad era un

asunto práctico; no consistía tanto en no ser deshonesto como en saber cómo lidiar con la deshonestidad. La omisión de una regla implícita de la política venezolana -rota por Carlos Andrés Pérez y altos funcionarios de su gobierno- de que los líderes máximos dejan robar a otros pero no roban, había conducido al caos administrativo. Las crecientes monetización de la política y politización del dinero reducían ahora la capacidad de acción presidencial. El nombramiento de Quijada por parte de Herrera fue una respuesta paradójica a esta situación. Al escoger a un amigo personal, sin partido y sin relación con ningún grupo económico, el presidente aspiraba a ganar independencia del control partidario y de la influencia del sector privado. También aspiraba a ganarse la lealtad de un ministro que no disponía de una base independiente de poder y cuyas ideas respetaba, incluidas la desconfianza de Quijada hacia la comunidad empresarial y su preferencia por las “cosas importantes en la vida de un país, de la Cultura, o del Hombre”. Pero la consecuencia no prevista de esta huida hacia el terreno personal fue que no solo se intensificó la politización de las relaciones personales, sino también la personalización de la vida política.

Cordido Valery

La elección de Quijada era también un reflejo de las rivalidades políticas en el interior de Copei. El presidente Herrera mostraba su intención de bloquear a la persona considerada por muchos como el candidato copeyano al Ministerio de Fomento. Carlos Guillermo Cordido Valery había desempeñado altos cargos en Fomento durante la presidencia de Caldera: habiendo dedicado su vida profesional a los asuntos industriales tanto en el sector privado como en el público, se le consideraba un economista capaz. Durante el gobierno de Pérez trabajó como consultor para varios grupos económicos involucrados en la industria automotriz, y era asesor de Favenpa (la asociación de los productores de partes y piezas automotrices). Había un factor que contrapesaba sus credenciales: estaba asociado a la facción de Caldera en Copei. Las luchas intestinas entre calderistas y herreristas impidieron que accediera al Ministerio.

Según un código político implícito, no se podía excluir a Cordido Valery del Gobierno; en aras de la armonía en el seno del partido, era necesario que recibiera un cargo importante en la nueva administración. Sin embargo, era obvio que Cordido Valery consideraba la presidencia de Fanatracto como un trampolín para el cargo de ministro. En la medida en que Quijada se enajenaba a la comunidad empresarial, las constantes y no siempre diplomáticas críticas que le dirigía Cordido Valery

transparentaban demasiado su propia ambición. Por su parte, Quijada no necesitaba demasiado impulso para poner fin a la ambición de Cordido. Sabía que el fin de Fanatracto terminaría también con la amenaza que para él significaba Cordido Valery.

Monopolio: ¿a favor o en contra?

Si bien es cierto que el establecimiento de un monopolio industrial habría despertado una oposición significativa en cualquier condición, es comprensible que en este contexto el ministro Quijada haya sido especialmente receptivo a las objeciones de su hermano. Había razones objetivas para preocuparse. Como Aco Inversora y Deere eran socias en Fanatracto (en conjunto tenían 35% de las acciones) al Gobierno le resultaba difícil garantizar que no serían cómplices. Aun si el Estado era el accionista principal, y si Cavendes, como estaba planeado, vendía su 20%, era claro que ACO y Deere estarían en una posición privilegiada para controlar la producción, distribución y precio de los tractores. La viabilidad del plan dependía de la capacidad del Estado para controlar y vigilar a la empresa. No obstante, Quijada no quería darle a Cordido Valery el poder para llevar adelante esa opción.

Por tanto, la oposición de Quijada a Fanatracto no puede entenderse simplemente como resultado de su interés en el éxito comercial de su hermano como agricultor o importador, o en preservar su cargo en detrimento de Cordido, o en su ambivalencia acerca del capitalismo. Estos intereses económicos y políticos no eran decisivos en sí mismos, porque no expresaban el punto de vista de grupos sociales organizados. La posición de Quijada resultó efectiva porque articuló a universos sociales y morales diferentes, de por sí poco organizados. En este contexto, la liberalización económica no se correspondía ni con esa doctrina ni con ningún grupo social influyente. Tal como Quijada la presentaba, era un medio tanto para revitalizar el capitalismo como para oponerse a su pernicioso avance en Venezuela. Pero aquí una paradoja se erigía sobre la base de otra paradoja: al oponerse a Fanatracto, en la práctica Quijada apoyaba a sus promotores del sector privado, ACO y Deere, que eran inversionistas industriales de la firma pero también, en su condición de empresas comerciales, defensores de la liberalización.

En este conflicto, la lucha en tomo de estrategias y principios se mezclaba con una batalla en tomo de posiciones. La rivalidad existente entre Quijada y Cordido Valery se hizo tan de conocimiento público que los directores de Fanatracto pidieron en privado a Sucre, presidente de la CVG, que depusiera a

Cordido de la presidencia de Fanatracto. Argüían que su presencia se había convertido en un inconveniente, ya que Quijada obstruiría cualquier otra cosa que pudiera contribuir a realzar la imagen de Cordido. Pero Sucre no estaba dispuesto a buscarse problemas por defender a la compañía. Prefirió dejar que el conflicto se agotara por sí mismo. Cuando la firma cerró, dos influyentes administradores de la CVG (Ricardo Martínez y Roberto Álamo) le dijeron a Sucre: “El general no hubiera permitido que esto pasara” (refiriéndose a Ravard, ex-presidente de la CVG) (entrevista, septiembre de 1981). Cordido había tenido que luchar en nombre del Estado contra sus representantes.

Deere, ACO y Harry Mannil

Los restantes aliados de Cordido Valery en Fanatracto eran sus accionistas privados, Deere y ACO. No obstante, es necesario recordar que originalmente Deere se había mostrado reticente a invertir en Venezuela. Decidió hacerlo sólo porque el Estado la forzó y porque garantizó asistencia financiera y tarifas de protección. Deere, la mayor productora de equipos agrícolas del mundo, gozaba de una posición fuerte. A diferencia de sus principales rivales, Massey-Ferguson e International Harvester, cuyas ventas dependían del mercado externo, Deere controlaba el mercado estadounidense: solo 23% de sus ventas se realizaban fuera de la América del Norte, a diferencia de 70% de Massey-Ferguson y 32% de International Harvester. No obstante, el hecho de que ACO fuera el mayor distribuidor independiente de productos de Deere fuera de EEUU llevó a la compañía a intentar preservar el lucrativo mercado venezolano. Aunque para Deere resultaba potencialmente atractiva la posibilidad de un monopolio industrial, también le creaba dudas. Un monopolio productivo era un asunto políticamente sensible y económicamente riesgoso. Por otro lado, como socio comercial de ACO, Deere había visto crecer su participación en el mercado de tractores de 19% a 33% en tres años. Las ganancias se habían multiplicado proporcionalmente, sin complejas inversiones ni conflictos laborales. En resumen, Deere aceptaría que la forzaran al monopolio si el Estado le concedía todo su apoyo, pero no lo promovería si el proyecto daba pie a conflictos políticos o era duramente criticado. El principal promotor privado de Fanatracto, ACO, funcionaba bajo la conducción de Harry Mannil. Nacido en Estonia, había llegado a Maracaibo en 1946 sin un centavo. Su primer éxito fue ascender como empleado de BECO, una tienda por departamentos propiedad de la familia Blohm, de ascendencia alemana. Esta empresa, fundada en 1942, era un producto político de la Segunda Guerra

Mundial. Blohm y Compañía, que fue durante muchos años la compañía de la familia Blohm, se dedicaba al negocio de importación y exportación: Blohm, que era estrictamente una compañía familiar, operaba como agente comercial desde el siglo XIX. Sus principales accionistas eran Jorge y Ernesto Blohm, hijos del fundador, Otto Blohm, y sus primos Enrique Heinz y Carlos Alfredo, hijos de Alfredo Blohm. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, EEUU ejerció presión para obtener el control de las inversiones alemanas en América Latina. Aunque los Blohm eran ciudadanos venezolanos de ascendencia alemana, se vieron obligados a reorganizar su compañía. Poco dispuestos a someterse a las demandas del Gobierno, Enrique Heinz y Carlos Alfredo les vendieron sus acciones a sus primos, que entonces negociaron la organización de una nueva compañía con una comisión tripartita formada por el Estado venezolano, EEUU y Gran Bretaña. Esa nueva compañía adoptó el nombre de BECO. Los Blohm solo tendrían un voto por cada 100 acciones. Se invitó al capital extranjero y local a participar en la nueva compañía. Los capitalistas locales fundamentales fueron Eduardo Tamayo, Miguel Alfonzo Rivas y Guillermo Villasmil. Pero el accionista más poderoso fue una compañía estadounidense: la Aluminum Company of Pittsburgh (Alcoa) que se hizo de 25% de las acciones.

El representante de Alcoa era Mr. Tatter, un ciudadano estadounidense nacido en Estonia que desempeñó “un papel decisivo” en la junta directiva (Gerstl 1977:276). Como resultado de un conflicto surgido en 1954 entre los Blohm y Tatter, Alcoa decidió abandonar BECO y fundar otra compañía, ACO, el 8 de septiembre de 1954. Siguiendo el ejemplo de BECO, Alcoa invitó a capitalistas locales a participar en la nueva compañía. De la inversión inicial de un millón de bolívares, Alcoa suscribió 45% de las acciones; Juan Simón Mendoza, 25%; y Eduardo Tamayo, Eugenio Mendoza y Ricardo Degwitz, 10% cada uno. Un mes más tarde se añadieron 14 millones de bolívares más, inversión en la cual participaron los socios de manera más o menos proporcional, con excepción de Mendoza, quien esperó hasta 1961 para comenzar a incrementar su participación en la compañía. Dos nuevos inversionistas menores que se unieron a la empresa fueron Guillermo Villasmil y Arturo Brillembourg. Harry Mannil se fue a ACO con Tatter y lo reemplazó en 1972 en el cargo de presidente. Desde entonces ha estado al frente de la compañía, la cual dirige según normas estadounidenses.

El éxito económico de Mannil le abrió las puertas de los círculos sociales más exclusivos de Maracaibo. Se casó con Masula D'Empaire, nieta de Samuel Belloso, un rico comerciante y banquero. Pero los Mannil se mantuvieron apartados de los exclusivos círculos sociales de Maracaibo. Se relacionaban con Venezuela a través del mundo de los negocios y de sus márgenes indígenas o su

pasado misterioso, como si se tratara de un exótico objeto de consumo. Los Mannil promovieron la producción comercial y el mercadeo de los textiles producidos por los indios guajiros y, en conjunto, la familia posee la mayor colección privada de arte precolombino de Venezuela. Estas actividades les ganaron la enemistad de los antropólogos locales, quienes criticaban su relación con los guajiros, así como los medios que empleaban para reunir su colección arqueológica. Rechazados por estos intelectuales, los Mannil también eran mantenidos a distancia por las clases altas de Caracas. Un informe sobre la elite venezolana escrito por la embajada de EEUU afirmaba: “Mannil todavía no es totalmente aceptado en la elite social de Venezuela. Posiblemente sea por ello que envió a su esposa a EEUU para dar a luz, de modo que sus hijos pudieran tener la doble ciudadanía estadounidense-venezolana, en caso de que en algún momento decidieran irse de Venezuela” (mimeo: s/f). Sin embargo, de manera típicamente venezolana, se les aceptó indirectamente a través de sus hijos. En 1977, después de escrito el informe antes citado, Helmi, la hija de los Mannil, se casó con Martín Tovar Larraín, hijo de Martín Tovar Zuloaga y Yolanda Larraín Basalo, ambos miembros de familias de la elite. El matrimonio no invalidaba la observación del informe, sino que ilustraba la flexibilidad de los círculos sociales exclusivos de Caracas y su permeabilidad frente a los advenedizos con éxito.

ACO estaba más dividida que Deere. Hasta cierto punto, también le satisfacía su extraordinario éxito comercial y le preocupaban los riesgos políticos de la monopolización. Por otro lado, era más receptiva que Deere a la idea de Fanatracto. La amplia base de capital local de ACO y la expectativa de que Fanatracto le reportaría inmensas ganancias y legitimidad política debilitaron su resistencia a la creación de un monopolio industrial. Harry Mannil, presidente de ACO, podía, por tanto, decir que promovía a Fanatracto sólo por “razones patrióticas” y confiar en que en Venezuela “la gran ventaja de impulsar la producción industrial es que en el comercio hay competencia y precios justos, en la producción hay monopolios y ganancias especulativas” (entrevista personal, septiembre de 1978). El potencial de Fanatracto de producir ganancias extraordinarias era el anzuelo que preocupaba y atraía a ACO.

Sin embargo, el apoyo brindado por ACO al proyecto no impidió que sus organizadores actuaran con moderación. La fuerte presencia de Alcoa en ACO sin dudas alentaba la cautela. Conviene recordar que ya en 1978 Mannil decidió frenar el programa de producción de Fanatracto con el fin de evitar un enfrentamiento con los importadores de tractores, y que, como resultado de ello, el presidente Pérez en ese año tuvo que conceder licencias para la importación. Una vez abierta esta grieta, la muralla proteccionista podía derrumbarse con facilidad, como ocurrió cuando el ministro Quijada aprobó

importantes licencias en 1979, con lo cual ahogó a Fanatracto en un océano de tractores más baratos. Una evaluación financiera de ACO, redactada por una firma estadounidense, observaba sin ninguna reserva que la compañía empleaba la inversión industrial como instrumento de predominio comercial:

Inversora participa junto a otras varias compañías venezolanas y extranjeras en diversos proyectos de fabricación de equipos de transporte y agrícolas. Si bien se espera que algunos de esos proyectos supongan ingresos significativos para Inversora en el futuro, la administración estima que ellos son también importantes para garantizar un futuro abastecimiento adecuado de productos importados, y que, por tanto, protejan y amplíen potencialmente la participación del grupo ACO en el mercado de esos productos (CVG 1980).

El potencial de éxito industrial de Fanatracto, por tanto, también estaba en conflicto con la base social comercial de sus propios promotores. Si la compañía tenía éxito, eliminaría del mercado un gran número de marcas de tractores importados por compañías influyentes relacionadas con ACO¹². Todos los grandes importadores de tractores perderían con el éxito de Fanatracto, y por tanto se opusieron a la compañía. Como eran los aliados políticos y económicos naturales de la ACO, ésta tenía interés en no enfrentarlos. De ahí que la ACO estuviera dividida. Promovió a Fanatracto mientras fue la criatura protegida por las políticas estatales, pero la dejó morir cuando el Estado le retiró su apoyo. Y lo que es más importante: siempre intentó preservar las condiciones que habían posibilitado su propio éxito comercial.

El diseño de políticas y el Estado

Como se ha mostrado, el ministro Quijada no paralizó a Fanatracto por sí solo. Como no representaba a un grupo social o a una corriente política coherentes, su oposición a la compañía resultó efectiva porque coincidió con la de otros grupos, en sí mismos divididos e inconstantes. Los productores agrícolas y los importadores de tractores, quienes siempre habían dependido del Estado, transitaron de una política de crítica cautelosa durante el gobierno de Pérez a una de resistencia activa cuando el presidente Herrera experimentó con la liberalización. ACO, que combinaba intereses industriales y comerciales, modificó su apoyo al cambiar las condiciones, y remodeló su identidad para pasar de

¹² Ford Company, que tenía 37% del mercado automotor, era el mayor suministrador de vehículos de ACO (ACO representó 23,8% de las ventas de Ford en 1977). Una compañía propiedad de J.J. González Gorrondona, que era muy cercano al presidente Pérez, también vendía tractores Ford. La firma Maquinarias Mendoza, propiedad de Eugenio Mendoza, uno de los fundadores de ACO y poderoso líder empresarial, era una gran importadora y distribuidora de tractores.

promotor de la industrialización por “razones patrióticas” a defensor de las ventajas comparativas por las mismas razones. En un reportaje especial de *Chief Executive* (una revista trimestral de negocios estadounidense “escrita en primer lugar por y para altos funcionarios de la industria de EEUU”), Harry Mannil se declaró firmemente a favor de las políticas de libre comercio: “Si bien las regulaciones gubernamentales pueden tener efecto a corto plazo, a largo plazo las fuerzas del mercado dominarán la economía mundial” (otoño de 1981). Durante todo este conflicto en torno de la política, los actores adoptaron una actitud de “esperar y ver” y se mantuvieron prestos a adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones.

El Estado, más que ningún otro actor, contaba con la capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones. Incapaz de controlar las condiciones cambiantes en las cuales funcionaba, se adaptó a ellas mediante la manipulación y redefinición de leyes y regulaciones. Autorizado como estaba para redactar reglamentos, también se sentía dotado del poder para quebrantarlos. La línea que separaba la ley y su violación desaparecía. Un prominente abogado observó: “En Venezuela, el que hace la ley hace la trampa” (entrevista, 1981). El sector privado percibía la visible volubilidad del Estado como fuente de inestabilidad económica. De ahí que los hombres de negocios demandaran constantemente un clima de “seguridad jurídica” y reglas de juego bien definidas.

En este caso, el Estado actuó sin encontrar gran oposición en el sector privado. La crítica más fuerte que se le dirigió fue la publicada en *The Monthly Report*, un periódico privado editado en inglés que se vendía sobre todo a compañías extranjeras. Su crítica detallada expresaba la necesidad del capital transnacional y local de contar con lineamientos claros para sus inversiones industriales en Venezuela. A la lógica contingente del dinero circulante -como se reflejaba en las cambiantes políticas estatales- *The Monthly Report* oponía la lógica estructural del capital industrial. Cito *in extenso* de su artículo:

En realidad, resulta difícil imaginar por qué el Gobierno continúa realizando acciones tan contradictorias y que le reportan daños. Además de que Venezuela seguirá dependiendo de fuentes de abastecimiento externas para toda una parte de su sistema de producción de alimentos, el punto clave es que una vez más el Gobierno ha faltado a su palabra. Fanatracto se fundó en Venezuela a instancias del Gobierno (no de Acción Democrática). Ningún productor de tractores quería crear instalaciones para su fabricación en las condiciones impuestas. Los productores de alimentos tienen razón cuando dicen que el mercado es demasiado reducido para lograr economías de escala apropiadas. Los tractores venezolanos necesariamente serán más costosos que los importados. No obstante, la idea que animó la fundación de Fanatracto era crear una manufactura local que brindara también una red nacional eficiente de servicios y mantenimiento que se encargara de un mercado de tractores estandarizados. Esa era la consideración básica que animaba los esfuerzos del

Gobierno para inducir a los productores extranjeros a invertir aquí. John Deere no deseaba construir una fábrica en Venezuela, pero aceptó con reservas presentar una propuesta cuando el Gobierno (no AD) prometió que al ganador se le concedería una tarifa de 50% como protección contra las importaciones, y que sería el único proveedor de tractores. Ahora el Gobierno (no Copei) ha decidido alegremente que Fanatracto no puede producir a un costo lo suficientemente bajo como para justificar su existencia, y que, en todo caso, la máxima protección que recibiría sería de solo 25%. Esto es absurdo. ¿Por qué estarían sujetos los tractores a 25% en momentos en los cuales el Gobierno ha aceptado que la mayoría de los vehículos de motor requieren una tarifa de protección de 60%? Sean cuales fueren los méritos de la opinión actual del Gobierno, lo cierto es que la planta se creó sobre la base de un firme compromiso gubernamental con la concesión de una protección de 50%. Cuando el Gobierno cambió de opinión de repente, debió ofrecerle a Fanatracto algún tipo de compensación por las pérdidas que tendría que absorber... La credibilidad de Venezuela como nación seria y cumplidora de la ley se ha erosionado aún más. De hecho, los potenciales inversionistas se plantean cada vez más la pregunta de si resulta aconsejable invertir en Venezuela. Sin confianza en el Gobierno, y sin garantías reales de que las inversiones contarán con tasas de protección y de retorno razonables, no se materializarán nuevas inversiones. Venezuela seguirá siendo inundada por tractores importados. La mayoría de ellos no cuenta con redes de distribución de piezas de repuesto y de servicios, y el ya grande cementerio de tractores del sector agrícola seguirá creciendo, salpicando las tierras cultivadas de la nación de herrumbrosas estructuras de acero. Y la nación seguirá sufriendo a causa de un sector agrícola que pierde hasta 50% de sus cosechas en un año, debido, principalmente, a la carencia de una infraestructura estandarizada y bien mantenida para realizar sus cosechas (26/10/1980:15).

Haciendo negocios con los monos

Uno de los principales promotores de Fanatracto, un técnico que había trabajado para el Gobierno a principios de los años 60 y que ahora lo hacía para el sector privado, se sintió sobrecogido por lo sucedido: “Andrés Sucre se echó a reír cuando Fanatracto cerró. Por mi parte, estoy convencido de que es tan responsable de los millones que perdió el Gobierno como si se los hubiera robado”. Según ese técnico, los importadores se beneficiaron de la muerte de la fábrica de tractores, pero no se puede considerar que las políticas del Gobierno hubiesen estado diseñadas para favorecer al sector comercial. “Tienen tal grado de incoherencia que no había ninguna intención de favorecer al sector comercial. Simplemente pasó lo que pasó.” Consideraba que sus preocupaciones diferían de las de los políticos y los empresarios, y se identificaba con el carácter civilizador de la industria, el cual había sido establecido desde tiempo atrás por el discurso industrializador: “A nadie le importa. Yo soy el del trauma. Y tengo un trauma por las lecciones que aprendí de grandes economistas e ingenieros -de personas como Jean Tinberger- para los cuales el desarrollo de un país se mide por su capacidad para desarrollar una fundición, una forja y una industria siderúrgica” (entrevista, septiembre de 1980).

Como técnico, se definía por su irrenunciable compromiso con la forma y los preceptos de la planificación para el desarrollo. Una concepción tecnocrática de la planificación como ciencia, a menudo blandida como escudo para proteger los planes de los rejugos de la política, consolidaba la comprensión prevaleciente del desarrollo en tanto proceso neutral, como sucesión secuencial de etapas vinculadas por la lógica del crecimiento industrial. Una siderurgia, una fundición y una fábrica de tractores eran eslabones de una cadena natural, entidades objetivas sin las cuales no podía haber desarrollo. Desde esta perspectiva, el fin de Fanatracto era un hito que indicaba que el país había abandonado el camino del desarrollo, que no iba hacia ninguna parte:

De la misma forma que los monos tienen que adquirir nuevas habilidades para desarrollarse y convertirse en seres humanos, los seres humanos tienen que aprender a desarrollar el hierro y el acero si quieren salir del subdesarrollo. Cuando la GM estaba negociando con el Gobierno la creación de una fábrica de motores en Venezuela, tuve que explicarle a su vicepresidente, Mr. Estes, lo que había pasado con Fanatracto. A medida que le contaba la historia, podía darme cuenta de lo que estaba pensando. Me dije: "Firmarían cualquier cosa, y lo harán. Pero van a exigir una cláusula de escape. Están firmando un contrato con monos. Nada importa. La cuestión para nosotros no es el imperialismo, es que nos dejemos imperializar". (Entrevista, septiembre de 1980.)

La cicatriz de la impotencia

Para los críticos de Fanatracto, su final significó que los negocios podían continuar a la manera usual, que se preservaría el *status quo*. Para sus simpatizantes, fue otra señal de que Venezuela se resistía al cambio, de que "el futuro" seguía siendo una ilusión inalcanzable. Tanto para los ganadores como para los perdedores, la muerte de Fanatracto dejó la huella de la violencia cotidiana de una normalidad construida sobre los resbalosos cimientos de los petrodólares circulantes. No era solo la normalidad visible de un poder aparentemente ilimitado, de planes grandiosos, de compromisos vagos, de acciones ilegales. Era también la normalidad subyacente del subdesarrollo, de la falta de control sobre las fuerzas del cambio histórico. La impotencia en medio de la riqueza daba pie a una sensación de incoherencia, de descontrol, de entender la sociedad como un espectáculo. Si los cambios no eran, en última instancia, efectivos, lo que quedaba -descontando una transformación radical- era el espectáculo del cambio, la representación.

Los diseñadores de política y los capitalistas proclamaron el objetivo de transformar a Venezuela, pero parecían decididos a preservar las relaciones existentes y únicamente capaces de gastar los

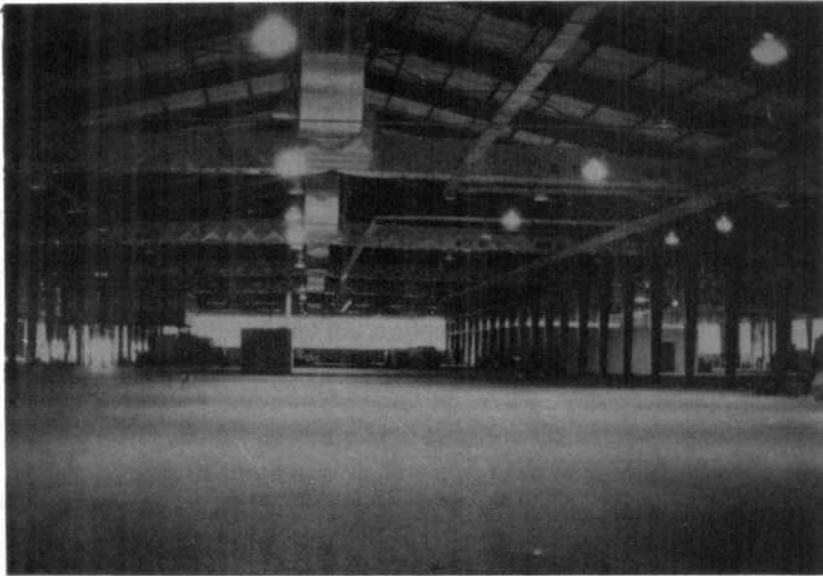
evanescentes petrodólares venezolanos, no de crear las condiciones que en otros lugares habían hecho posible “la historia”. La frenética agitación de la lucha cotidiana, con su aparente carencia de significación histórica, parecía intrascendente, el movimiento sin sentido de una nación sin objetivos, la distracción de una sociedad paralizada: “Una sociedad que se gasta a sí misma en las mismas tensiones y relajaciones; antagonismos que periódicamente parecieran culminar en un clímax, sólo para perder luego su agudeza y desaparecer sin resolverse” (Marx 1981: 43).

Como en la descripción realizada por Marx de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte durante la crisis política de 1848-1851, cuando el progreso histórico pareció haberse detenido, en la Venezuela de los años 80, cuando el dinero parecía incapaz de comprar el progreso, el sentimiento del drama de la historia cedió su lugar al de la historia como drama. Lo único que había logrado la abundancia monetaria había sido ocultar lo que se percibía como el atraso venezolano. Con la disminución de los recursos, la perspectiva del estancamiento se reafirmó con más fuerza tras la máscara del cambio.

Como en otras naciones del Tercer Mundo, en Venezuela la experiencia de la conquista, la colonización y el subdesarrollo habían dejado la cicatriz del sentimiento de que se vivía a la sombra de la historia. Los venezolanos tejieron sus vidas personales y colectivas alrededor de esa cicatriz. En el centro permaneció la herida, estructurando la experiencia social como una necesaria, aun si a menudo oculta, confrontación con la realidad de sujeción histórica. Pocos experimentaron la muerte de Fanatracto como un trauma personal. Pero sólo porque este trauma formaba parte de una experiencia común de subordinación colectiva podía expresarse desde adentro por uno de sus dolientes en términos de un discurso colonial que definía a Venezuela como una sociedad primitiva, como una nación de monos.

La lógica contingente de la circulación

Las interpretaciones predominantes de las naciones del Tercer Mundo que se industrializan tienden a olvidar que dichas sociedades están dominadas pero no organizadas por el mercado. Por tanto, esas miradas asumen que los intereses económicos y políticos se organizan según los términos de un modelo ideal de racionalidad capitalista y deducen a partir de allí la constitución de agentes sociales y de políticas estatales. A fin de desarrollar un punto de vista alternativo, he usado la historia de



Fanatracto: la fábrica vacía. (Colección privada.)

Fanatracto como hilo conductor que ilumine el tejido social. Al vincular estructuras, agentes y acciones, este hilo conductor me ha permitido analizar la formación de la política estatal en relación con la reproducción de la sociedad, esto es, mostrar cómo los agentes sociales se constituyeron al expresar y moldear su mundo social, un mundo cuya aparente incoherencia manifestaba la lógica subyacente de la circulación impulsada por las rentas.

Sería erróneo asumir que Fanatracto era el lugar del conflicto entre el capital comercial e industrial local, o entre el capital estatal y el privado, o entre el imperialismo y Venezuela. Como he tratado de mostrar, resulta difícil afirmar que ACO y Deere, los mayores accionistas privados de Fanatracto, representaban los intereses del capital industrial: sus intereses comerciales eran fundamentales, aun si invertían en la fábrica. De manera similar, el conflicto entre los intereses comerciales privados y la política industrial estatal se vio opacado por la oposición en el seno del Estado entre dos facciones políticas y dos personalidades, una de las cuales representaba al proteccionismo y el fomento a la industria y la otra a la liberalización y el libre comercio. Pero incluso en este caso, la defensa de los principios estaba inextricablemente vinculada a la defensa de posiciones. Era obvio que si se modificaban las circunstancias, los principios también cambiarían.

También sería erróneo analizar este caso haciendo uso de un modelo de sistema cerrado de sociedad capitalista en el cual la nación se abstrae del sistema internacional. Mi análisis, opuesto al ideal de la nación capitalista como sistema integrado internamente, subraya la necesidad de contextualizar las relaciones capitalistas en las dimensiones de tiempo y espacio, que preserven los vínculos entre los

acontecimientos globales y locales. Por tanto, en este caso he intentado mostrar cómo la desgraciada evolución de Fanatracto se torna inteligible a la luz de la relación específica de Venezuela con la formación de valor, es decir, como exportadora de materias primas estratégicas, y receptora, por intermedio del Estado, de un gran flujo de valor generado internacionalmente en forma de rentas minerales.

Fanatracto se convirtió en el *locus* de la aguda disyunción entre un vasto flujo de valor circulante en el país y el alcance limitado de la capacidad productiva local. Más que nunca antes, durante este periodo la producción se valoró en términos de su relación con la circulación. Las ganancias industriales se percibían como una extensión de los ingresos comerciales; la industria, como un medio para lograr el predominio comercial. Sin eliminar la producción local de valor, la circulación la subordinó a la apropiación de las rentas petroleras.

En la medida en que el flujo de petrodólares hacía que las ganancias cada vez estuvieran menos relacionadas con la producción, el objetivo de hacer dinero se convirtió en una actividad independiente, en un fin que definía sus propios medios. Este hecho tuvo un enorme significado. Supuso un alejamiento del conjunto de valores asociado con la producción capitalista y un acercamiento progresivo a los relacionados con la especulación comercial y financiera. Mientras que la ideología de la producción se hacía cada vez más transparentemente ideológica, la práctica de la especulación generaba su propia ideología legitimadora. El modelo ideal del burgués conquistador, del constructor de sociedad, cedió su lugar al del hombre de negocios, o mejor, al del negociante, el astuto buscador de fortuna personal. La rapidez, la adaptabilidad y la improvisación eran más apreciadas que la constancia, la continuidad y la disciplina.

Pero la búsqueda ilimitada de la ganancia individual era un objetivo plagado de ambigüedad, porque la apropiación personal del dinero proveniente del petróleo conllevaba la privatización de la riqueza nacional. De ahí que el modelo del negociante listo reflejara sólo una de las caras de la moneda petrolera. La otra, vista desde la perspectiva que privilegiaba la dimensión colectiva de la riqueza petrolera, reflejaba la imagen del buscador de ganancias como un corrupto o un pirata. El calificativo popular de “pirata” condensaba dos referentes: el aventurero que marcha en busca del botín y el impostor cuya apariencia falsa no puede ocultar su ineptitud. La palabra terminó por referirse a los ladrones de la riqueza y la confianza sociales, a los aventureros deseosos de riquezas rápidas, para los cuales la sociedad era una frontera en expansión cuyas reglas existían para ser violadas, para los cuales la nación era un despojo de guerra. El término “piratería” empezó entonces a designar al

conjunto de prácticas caracterizadas por la incompetencia, la corrupción y el engaño.

Fanatracto fue hija de la euforia y el sentimiento de poder alimentados por el auge petrolero. El proyecto formaba parte del plan multimillonario encaminado a transformar a Venezuela de nación subdesarrollada en potencia industrial: La Gran Venezuela. En 1980, cuando se completó la fábrica, el contexto había cambiado de manera radical. Venezuela pagaba los costos de préstamos y gastos excesivos y negligentes, planes de desarrollo poco realistas y piratería generalizada. La disminución de los ingresos provenientes del petróleo, la creciente deuda externa y el lento crecimiento industrial fueron algunos de los factores desencadenantes de los esporádicos giros del presidente Herrera hacia la liberalización de la economía. Con la evaporación de la abundancia, el optimismo eufórico cedió su lugar a la ideología del realismo. Pero ambas perspectivas reflejaban el mismo proceso subyacente. En esta etapa, el realismo y la liberalización, como antes el optimismo y el proteccionismo, eran las formas sociales por intermedio de las cuales hablaba el dinero.

Por tanto, por debajo de los elementos dispares que se combinaron para poner fin a Fanatracto yacía un cimiento común: la consolidación de una lógica contingente arraigada en el predominio del dinero de las rentas y cuya motivación era el valor que se concedía a su captación. Fue en los términos de esta lógica fluida que el Estado pudo romper compromisos, violar acuerdos y malgastar inversiones, y que sus decisiones pudieron encontrar aceptación social. Ni las palabras ni las acciones eran fijas; una fluidez caprichosa disolvía su constancia. Las personas, empeñadas en perseguir el dinero, se adaptaban a sus formas cambiantes. De ahí que llegara a ser posible que se aceptara convertir a Fanatracto, cuando ya estaba lista para producir, en un cadáver potencial en el corazón de Guayana, en otro espejismo de El Dorado.

8. El excremento del diablo: delincuencia y sociabilidad

Estamos hundiéndonos en el excremento del diablo.

Juan Pablo Pérez Alfonzo

El dinero, más que cualquier otra forma del valor, posibilita el secreto, la invisibilidad y el silencio del intercambio. Comprimiendo el dinero en un pedazo de papel, dejándolo deslizarse en la mano de una persona, es posible convertirla en una persona rica.

George Simmel

La medida del poder del dinero es la medida de mi poder. Las propiedades del dinero son mis propiedades y poderes esenciales, las propiedades y los poderes de quien los posee. De ahí que lo que soy y lo que soy capaz de hacer no esté de ningún modo determinado por mi individualidad...¿Acaso yo, quien gracias al dinero soy capaz de alcanzar todo lo que puede alcanzar el corazón humano, no poseo todas las capacidades humanas? Y, por tanto, ¿acaso el dinero no transforma todas mis incapacidades en su contrario?

Karl Marx

Dinero y sociabilidad

Cuando los primeros tractores ensamblados en Venezuela salían de la planta piloto de Fanatracto en Ciudad Bolívar, el 28 de julio de 1978 a las 2:30 de la tarde, Ramón Carmona, un abogado venezolano de 36 años era asesinado en la concurrida avenida Andrés Bello, de Caracas. Tres hombres armados se bajaron de un auto y lo ametrallaron en presencia de los transeúntes. Todo sucedió muy rápido. Carmona se resistió a que lo montaran en el auto, pero no pudo huir ni recibir ayuda antes de que lo mataran. Un testigo indignado sólo pudo gritar: “¡Esa no es manera de matar a un hombre!”, pero se calló de inmediato cuando le apuntaron con un arma. Los tres hombres volvieron a montarse en el auto y desaparecieron. En la calle quedó Carmona con el cuerpo cosido a balazos en sentido vertical, al mejor estilo de los pistoleros profesionales, desde el cuello hasta el muslo derecho: había recibido 11 impactos de balas de ametralladora.

En la superficie, las muertes de Fanatracto y de Carmona no estaban relacionadas: es muy probable que Carmona ni supiera de la existencia de la compañía. Sin embargo, entiendo que tanto uno como otra fueron víctimas de las mismas fuerzas. Mediante el análisis de Fanatracto mostré cómo durante

el auge del petróleo la expansión de la circulación del dinero de la renta erosionó la producción y convirtió la búsqueda del dinero en un fin que definía sus propios medios. Ahora, mediante la investigación de otra muerte -el homicidio de Carmona- exploro la dinámica del sistema de circulación fuera de la esfera formal de la economía. En ambos casos, mediante el análisis de los límites del sistema de circulación, examino su estructura interna¹.

Criminalidad y sociabilidad

Sembrar a Carmona

Carmona sabía que su vida corría peligro. También conocía que podían intentar secuestrarlo; solía decir a sus amigos que siempre era mejor oponerse a las intenciones de los secuestradores. Según su esposa, “Ramón siempre lo decía y lo pregonaba, cuando a uno lo vayan a secuestrar sea la policía, sean guerrilleros, sean ladrones, uno debe dejarse matar en el sitio, nunca montarse en el carro” (Castellanos 1979:171). Fiel a su palabra, el 28 de julio opuso resistencia. Cuando sus asaltantes fracasaron en el propósito de hacerlo subir al auto, lo mataron a balazos. Todavía vivo, Carmona fue conducido a un hospital cercano, donde murió al llegar. Sus últimas palabras fueron “Me jodieron”. Al día siguiente la policía informó que Carmona había sido asesinado por ladrones. No obstante, en su entierro un amigo pronunció un discurso emocionado en el cual culpó a la policía:

Estamos viviendo una hora aciaga porque carecemos de seguridad jurídica, porque los criminales, los estafadores y ladrones son protegidos por policías y jueces genuflexos, porque estamos asfixiados por la corrupción. ... Tu muerte, Ramón Carmona, ya había sido procesada y sentenciada. Se gestó, y hay que decirlo con tu propia franqueza, en los propios tugurios de la policía; de una policía envilecida; de una policía que tomó el camino retorcido del chantaje y la represión política; de una policía que, en lugar de descubrir el delito, más bien lo encubre, y que en lugar de impedir el crimen, lo propicia y lo ejecuta (Castellanos 1979:101).

¹ Este capítulo está basado en los recuentos publicados. En el asesinato de Carmona estuvieron involucrados individuos muy poderosos enredados en una compleja red de transacciones ilegales. Muchas de las personas vinculadas de una u otra manera a este caso, como Manuel Molina Gásperi y Raimund Aguiar, han muerto, víctimas de asesinatos o de accidentes. Aunque entrevisté a algunos de los actores de los sucesos que analizo aquí, incluidos el presidente Pérez y Gladys de Carmona, decidí tomar como base de mi reconstrucción la información impresa de circulación pública y las noticias de la prensa. En este caso, mi interés consiste en examinar las declaraciones hechas en la época, no en determinar su veracidad. Las advertencias usuales acerca del carácter fragmentario de cualquier interpretación se aplican en particular a este capítulo



Gladys de Carmona exhibe los portafolios de su marido para demostrar que el asesinato no había tenido móviles de robo, sino políticos. (Archivo *El Nacional*.)

Cuadro 17

Principales actores del caso Carmona

Raymond Aguiar: abogado de Gladys de Carmona.

Virgilio Ávila Vivas: gobernador de Margarita, involucrado en el proyecto de Playa Moreno. David Morales Bello: dirigente de AD, prominente abogado y “apóstol” del presidente Pérez.

Renato Campetti: hombre de negocios italiano dedicado al fomento de Playa Moreno, propietario de portafolios.

Ramón Carmona: abogado de Campetti, asesinado por pistoleros.

Gladys de Carmona: abogada, esposa de Ramón Carmona.

Piero de la Corte: hombre de negocios italiano dedicado a la venta de fragatas, amigo de Campetti y de Metimano.

Antonino D'Antona: chofer de Campetti, retuvo su portafolios, lo acusó de delitos laborales.

Juan Martín Echevarría: ministro de Justicia, ex-director de la PTJ (policía federal de investigaciones).

Cecilia Matos: secretaria y amante del presidente Pérez, la “segunda dama”.

Giulio Metimano: ex-administrador del restaurante Boca de la Veritá, vendía protección.

Alberto Martínez Moncada: juez asignado al caso Carmona, obligado a renunciar por presiones de la PTJ.

Manuel Molina Gásperi: director de la PTJ.

Mayra Vernet de Molina: abogada de D'Antona, esposa de Manuel Molina Gásperi.

Carlos Andrés Pérez: presidente de Venezuela (1974-1979), líder de AD.

En ese momento, la viuda de la víctima, Gladys de Carmona (ella misma una combativa abogada, apodada “la Turca”) manifestó a la prensa que los asesinos de su marido no eran delincuentes comunes y que no le habían robado. Para probar sus palabras, enseñó los cuatro maletines de Ramón, señalando que habían dejado las joyas y el dinero que llevaba al morir. No mencionó que 24 horas después del asesinato, un amigo le había asegurado por teléfono que a su marido lo había matado la Policía Técnica Judicial (la policía federal encargada de la investigación de los casos criminales, en adelante PTJ). El informante le dio los nombres de los asesinos y le dijo que el plan no había consistido en matar a su marido en plena calle, sino en “sembrarlo”: secuestrarlo, matarlo y enterrarlo en otra parte. Gladys no dio esta información a la publicidad, pero declaró que no descansaría hasta encontrar a quienes habían matado a su marido. “Los quiero vivos” se convirtió en su grito de batalla. A lo largo de la sensacional investigación pública, Gladys de Carmona enfatizó que debía descubrirse al autor intelectual del asesinato, no al responsable material. Para ella no era importante quién había apretado el gatillo, sino quién había dado la orden. Siguiendo este razonamiento, no me preguntaré ahora quién dio la orden, sino por qué se dio. No buscaré la respuesta en el perfil psicológico de los actores, sino en la intersección de intereses individuales con relaciones sociales contradictorias. Mediante la descripción de “las condiciones estructurales que posibilitan diversas formas de acciones conscientes” (Bhaskar 1979:124) pretendo hacer inteligible el asesinato.

Según entiendo, este asesinato puede verse como uno de los hilos de una red tejida para capturar dinero. ¿Cómo fue que durante el auge petrolero la búsqueda desenfrenada de dinero se convirtió en una práctica normativa en círculos sociales cada vez más amplios? La progresiva erosión de los cauces normales y pautas normativas se hizo evidente en toda la sociedad venezolana. Este cambio se difundió tanto que no solo parecía irreversible, sino también natural. Quienes denunciaban la “erosión de la moralidad pública” reconocían que los comportamientos ilegales habían establecido su propia legitimidad. Gonzalo Barrios, presidente de AD y su analista más diestro (un hombre con reputación de honestidad) comentaba sobre el nuevo ambiente con laconismo resignado: “En Venezuela, los funcionarios públicos roban sencillamente porque no tienen razones para no robar” (*El Nacional*, 28/9/78). En este contexto, “robar” era un eufemismo que sólo aludía a la punta del *iceberg* de la ilegalidad.



Ramón Carmona y Gladys de Carmona. (Archivo Últimas Noticias.)

Las muertes de Fanatracto y de Carmona fueron resultado de esta difuminación de las normas. No obstante, ambos acontecimientos ocuparon lugares diferentes en la opinión pública venezolana. La muerte lenta de Fanatracto pasó casi inadvertida. Solo quienes estaban directamente vinculados a la firma conocieron de sus problemas, y ni siquiera ellos llamaron la atención del público sobre el asunto. Por el contrario, los acontecimientos que rodearon la muerte de Carmona estuvieron en el centro del interés público desde un inicio. El asesinato pudo pasar inadvertido como uno más de los muchos delitos comunes que ocurren en una gran ciudad. Pero la batalla política librada en torno de él lo convirtió en un drama nacional. Su escenario, el terreno normalmente oculto de las transacciones ilegales centradas en el Estado, de repente se develó a la vista del público.

La muerte como espectáculo

Durante varios meses después del asesinato, el caso Carmona fue noticia nacional. Los hechos salieron a la luz de modo fragmentado y confuso; cada revelación planteaba nuevas preguntas. Primero se supo que en el momento de su muerte Carmona era el abogado defensor de Renato Campetti en el juicio que le había entablado su empleado Antonino D'Antona. La abogada de Campetti era Mayra Vernet de Molina, esposa de Manuel Molina Gásperi, director de la PTJ. Un día después del asesinato, cuando la PTJ anunciaba que los asesinos eran delincuentes comunes, Gladys

de Carmona iniciaba una investigación propia. Cuando declaró a la prensa que quería vivos a los asesinos de su marido, le comunicaba a un público atento que no creía que se trataba de un asesinato común. Se dio a la tarea de investigar el caso y proclamó que no descansaría hasta establecer quién había sido “el autor intelectual del asesinato”.

El siguiente paso estuvo a cargo de la PTJ. Tras fracasar en su intento de demostrar que Carmona había sido asesinado por delincuentes comunes, el organismo sugirió la posibilidad de que se tratara de una venganza. Una semana después, el 8 de agosto, la PTJ dijo contar con evidencias de que se trataba de un crimen pasional. Ese mismo día, una estación de radio (Continente) transmitió la grabación de una conversación telefónica en la que Gladys de Carmona decía que le iba a pegar un tiro en la cabeza a su esposo. Al principio, esta evidencia pareció confirmar la versión de la PTJ. Ya se había hecho público para ese entonces que Carmona había sido un notorio mujeriego, y que poco antes de su muerte había estado con una de sus amantes en un hotel de Caracas. También se había sabido que su esposa estaba muy molesta con él por su comportamiento.

Sin embargo, Gladys logró convertir la aparentemente incriminadora grabación de su conversación telefónica en una evidencia contra la PTJ. Primero, demostró que la conversación grabada en realidad se había producido dos horas después de cometido el asesinato. Explicó que su esposo le había asegurado que almorzaría con ella ese día, y que estaba furiosa porque no lo podía encontrar en ningún sitio. A las 4:30 de la tarde (el asesinato había ocurrido a las 2:30) llamó a uno de los amigos de su marido (José Novoa) y le dijo: “como Ramón ande con una mujer, le voy a meter un tiro entre los dos ojos” (Castellanos 1979: 83). Su rápida explicación debilitó la versión de la PTJ, mientras que la existencia misma de la grabación reveló que por razones desconocidas la policía había estado vigilando de cerca los pasos de Carmona y que ahora, en complicidad con una estación de radio, trataba de desacreditar a su viuda. Estos acontecimientos aumentaron la credibilidad de Gladys. Su esposo era muy conocido en los círculos legales, había sido abogado defensor de poderosas personalidades acusadas de fraudes y delitos violentos. Su osadía le había ganado amigos leales y feroces enemigos. Apoyada por un grupo de abogados y de amigos bien relacionados, Gladys comenzó una campaña de presión a favor de la solución del homicidio.

Un sector de los medios de comunicación desempeñó un papel esencial en la exposición del caso. El diario *El Nacional*, la estación Radio Caracas, y en especial la revista *Resumen* siguieron la historia en detalle. Según Rafael Rodríguez Corro, uno de los jueces encargados del caso Carmona, los medios de comunicación se condujeron como un verdadero fiscal especial. En su opinión, mientras que la prensa

consiguió información que contribuyó al desarrollo del proceso legal y cambió su curso, el Gobierno intentó “escamotear el legítimo derecho de la prensa a informar libremente sobre el caso”. Añadió que de no haber sido por la actitud de los medios, “este caso no sale, al menos por ahora, ya que existía el propósito de ocultarlo por lo menos hasta la culminación del proceso electoral” (*Resumen*, 17/12/1978). Como se convirtió en un elemento de lucha política, el asesinato rompió “todos los récords de publicidad en nuestro país a través de la prensa escrita, radio, y TV” (*Resumen*, 28/12/1978).

Los críticos de la corrupción de diferentes tendencias políticas blandieron este caso como un espejo para que la sociedad venezolana se mirara en él. Jorge Olavarría, director de *Resumen*, una revista que contaba con el apoyo de grupos económicos tradicionales (Mendoza, Vollmer), afirmó:

La sangre de Carmona ha caído sobre todos nosotros. Ella salió de la sangre de todos los pobres asesinados con “energía” justiciera. Ella se nutrió de la impudicia de la demagogia que denuncia la corrupción, pero que la practica a ojos vistas. Ella nació de haber aceptado, sin protestar, el primer atropello, el primer muerto, el primer corrupto. Ella mana de la cobardía, de la indiferencia, del comodismo. Y el caso mismo, podrido en sus antecedentes, en sus raíces, en sus proyecciones, no es accidente; es síntoma de la purulencia de una sociedad delincuente, que persigue al que tiene el valor de hablar y que ampara al que tiene la desvergüenza de convertirse en su encubridor y cómplice (*Resumen*, 19/11/1978)².

Los críticos de izquierda apuntaron a este escándalo como un ejemplo de la total corrupción que había llegado a caracterizar al conjunto de la sociedad. Dos connotados líderes políticos y profesores universitarios, Domingo Alberto Rangel y Pedro Duno, escribieron un comentario y el prefacio de un libro titulado *Los quiero vivos*, basado en entrevistas realizadas a Gladys de Carmona. El libro fue escrito como respuesta inmediata al asesinato. Inmerso en el momento, asume como conocida y cierta la creencia prevaleciente sobre lo sucedido, y no brinda un relato verídico de los hechos relacionados con el caso. Las declaraciones retóricas ocupan el lugar del análisis, no se siguen pistas potenciales, que son presentadas como explicaciones satisfactorias. Es como si la crítica de la realidad formara parte del espectáculo.

La fuerza fundamental que impulsó la cobertura del caso por parte de la prensa fue el interés de grupos políticos y económicos en desacreditar al gobierno de Pérez. De los partidos de oposición, Copei era el que más podía ganar con el daño electoral que se le pudiera infligir a AD mediante la

² La mención de la “energía” es una clara alusión al presidente Pérez, una de cuyas consignas electorales era “Democracia con energía”. También hizo campaña como “el hombre con energía”.

revelación de un escándalo político. De ahí que empleara su influencia en el sistema judicial para llevar adelante el caso y movilizar a la opinión pública a través de los medios de comunicación. El 19 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones presidenciales de diciembre, un prominente líder de Copei, Rodolfo José Cárdenas, acusó al Gobierno del asesinato. Convirtió las sospechas hacia la PTJ en certidumbres. Dada esta premisa, sus argumentos iban al grano: como el asesinato había sido cometido por la policía gubernamental con el consentimiento de su director, Molina Gásperi, el Gobierno era responsable del crimen. Según Cárdenas:

La Policía Técnica Judicial es un órgano del Gobierno. La PTJ forma parte del Gobierno, y parte muy importante. Es imposible que el Gobierno hable de la PTJ como si fuera un órgano ajeno, como si se tratara de un compañía privada de serenos, o como si fuera un cuerpo semejante a los *boy-scouts* (Resumen, 19/11/1978).

Como era corriente en ese periodo, concluía su artículo haciendo un llamado a adecentar la nación, que sazónaba con concepciones católicas del mal y de la contrición:

Estamos en hora propicia para la purificación. ¿Podrá más el país que los intereses creados que se desovillan alrededor de un asesinato? Hay gatos, y homicidas. Hay ratas, y gordas. ¡Los perros del crimen erizan sus pelos y ladran a los pacíficos ciudadanos! (Resumen, 19/11/1978)³.

Más contradictorio, pero igualmente significativo, fue el papel desempeñado por AD. La nominación de Luis Piñerúa Ordaz (con el respaldo de Betancourt) como candidato presidencial de AD había incrementado la tensión existente entre las facciones de Betancourt y de Pérez. La identidad electoral de Piñerúa como “el hombre correcto” constituía una crítica implícita al hombre incorrecto, Carlos Andrés Pérez. Por otra parte, se decía en todas partes que la facción de Pérez hacía uso de su influencia en el sistema judicial, en buena medida por intermedio de la relación de paternalismo clientelar que existía entre el líder adeco David Morales Bello y algunos jueces, con el objeto de que el caso Carmona se estancara. Por su parte, el sector de Betancourt se sentía tironeado por los objetivos contradictorios de socavar el poder de Pérez en el seno de AD y de proteger las posibilidades electorales de Piñerúa. La disciplina del partido y las consideraciones electorales disuadieron al betancourismo de manifestarse públicamente contra Pérez. Pero a despecho de los posibles costos

³ Grupo Armado Táctico Operacional (GATO), era el nombre de la brigada elite de la PTJ de la cual se sospechaba que había estado involucrada en el crimen.

electorales, Betancourt sintió la necesidad de respaldar la investigación judicial del caso Carmona. Al hacerlo, no solo esperaba erosionar el poder perecista, sino también dar fe del deseo de AD de representar una fuerza moral en la sociedad venezolana. Los principales grupos económicos tradicionales apoyaron ese esfuerzo. Preocupados por el deterioro de la economía y por el crecimiento explosivo de los “grupos de apóstoles” durante el gobierno de Pérez, dieron su apoyo a la investigación.

A medida que se conocía la historia, el caso Carmona generaba una fuente de apoyo propia: el público. En tanto nuevos elementos colocaban en el centro del escenario a actores más influyentes y acontecimientos más excitantes, un público ávido aumentaba las presiones para que se revelara la conjura. A su vez, en la medida en que esta se revelaba, salía a la luz una compleja estructura de transacciones ilegales que incluía el uso del Estado para fines de enriquecimiento privado por parte de una red social encubierta cuyo centro era el propio presidente. Los medios presentaban la curiosidad del público sobre estos manejos ilícitos como una fuerza purificadora. Como planteaba Resumen, en bien de la salud de Venezuela era necesario “sacar a la luz completamente la basura que contiene el caso Carmona en su totalidad” (19/11/1978).

La conquista de El Dorado

Los italianos

La búsqueda de fortuna reunió a los personajes de esta crónica. Como ocurre a menudo en las historias complejas, esta tuvo un inicio simple.

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba en ruinas, Venezuela atravesó un auge petrolero como resultado de la reactivación del comercio mundial en la posguerra. Entre 1944 y 1950 se duplicó la producción local de petróleo: aumentó de 700.000 a 1.500.000 barriles diarios. Los residentes europeos en Venezuela -fundamentalmente italianos y españoles- hicieron circular el rumor entre sus parientes y amigos en Europa de que “en Venezuela el dinero corre por las calles”. Entre los muchos italianos que llegaron entonces a Venezuela para conquistar El Dorado estaban Renato Campetti, nacido en Giulianova, Abruzzo, en 1922; y Antonino D'Antona, nacido en Trapani en 1924. Se conocieron en Puerto La Cruz en 1948. Ambos eran jóvenes y ninguno tenía un centavo. Su encuentro fue breve, y a partir de ese momento sus vidas tomaron caminos diferentes. Luego de 30

años, sus caminos volvieron a cruzarse. Fue este segundo encuentro el que dio origen al caso Carmona.

Para la época del segundo encuentro, la búsqueda de fortuna de D'Antona no había sido coronada por el éxito. Su pasado estaba plagado de aventuras: había sido capitán de un barco pesquero (de ahí su apodo de "el Capitán"), buscador de oro y diamantes en los ríos de Guayana, jugador profesional de billar y amigo del famoso novelista Papillón. Pero no había hecho dinero. En la época cuando una segunda generación de italianos llegaba a Venezuela para hacer fortuna tras el auge de 1974, D'Antona trabajaba como parqueador en un restaurante de Caracas, La Boca de la Veritá. Fue en este restaurante que se encontró de nuevo con Renato Campetti, quien lo recordaba de los días de 1948 en Puerto La Cruz y quien lo contrató para que fungiera no solo como su valet y chofer, sino también como chofer de su compañía, Playa Moreno, cuando Campetti estuviera de viaje.

A diferencia de D'Antona, Campetti había tenido gran éxito en los negocios. De Puerto La Cruz se había encaminado a la remota ciudad de San Fernando de Apure, en los llanos, donde su primera empresa, una lavandería, había fracasado. Cargado de deudas y atraído por el auge caraqueño en la construcción, promovido por el gasto público durante la dictadura de Pérez Jiménez (1948-1958), Campetti abandonó el interior para probar suerte en la capital. Por intermedio de amigos italianos obtuvo lucrativos contratos para construir cuarteles militares. Campetti se percató pronto de cuán beneficiosos resultaban los vínculos entre negocios y política, y se convirtió en un activo organizador del apoyo al dictador por parte de la comunidad italiana. Tras la caída de Pérez Jiménez en 1958, asustado por la reacción popular contra quienes se habían beneficiado de manera conspicua por sus relaciones con el régimen, Campetti, sintió que debía abandonar el país. Dejó en Venezuela una red de amigos y contactos y llevó a Italia las lecciones de su experiencia americana: dinero y política van de la mano; para hacer dinero es necesario aproximarse a quienes están en el poder.

En Italia se convirtió en el representante de ventas para la América Latina de una gran compañía de tractores (SAME), realizando ventas a varios países. Su transacción más espectacular fue un negocio con Fidel Castro, mediante el cual se las ingenió para romper el bloqueo económico y venderle a Cuba 1.500 tractores. Su fortuna aumentó con rapidez. En Paraguay compró una gran hacienda, se aproximó al dictador general Stroessner (quien lo designó cónsul *ad honorem* en Milán) y amplió sus actividades de negocios. No obstante, su interés fundamental seguía siendo Venezuela. Regresó a Caracas, pagó sus antiguas deudas y restableció sus contactos. Su mayor negocio consistió en la venta al gobierno de Caldera de dos barcos petroleros, Independencia I e Independencia II. Esta transacción

restableció la posición de Campetti en ciertos círculos. Resulta significativo -aunque no hay conocimiento público de ello en Venezuela- que un empresario venezolano le haya ofrecido al gobierno de Caldera los mismos barcos a un precio mucho menor. Este empresario no solo era un simpatizante de Copei, sino también un amigo personal de Caldera. No obstante, a diferencia de Campetti no sobornó a los funcionarios que realizaron la compra (entrevista confidencial, noviembre de 1978). Campetti había aprendido a hacer uso de los mecanismos informales que vinculaban cada vez más los negocios con la política en Venezuela.

Playa Moreno

Durante su estancia previa en Caracas, Campetti también había aprendido que en Venezuela la tierra era una llave para la riqueza. Puso sus ojos en Margarita, una isla en la costa nordeste de Venezuela que había sido recientemente declarada zona libre de impuestos y que experimentaba un auge comercial y turístico, donde Campetti tenía interés en comprar Playa Moreno, una gran extensión de tierra que estaba a la venta. Para ello necesitaba socios. El aumento de los precios del petróleo había afectado a la economía italiana; algunos italianos ricos burlaban el pago de impuestos sacando liras de contrabando para comprar dólares en Suiza e invertir lucrativamente en otros países. En Italia, Campetti había creado una red de poderosas conexiones. Por intermedio de su esposa italiana, se convirtió en tío político de Sebastiano Cameli, descendiente de una famosa familia genovesa de armadores. A su vez, la familia Cameli lo vinculó con otras personas influyentes: los Denino, también dedicados a la construcción de barcos; los Martinelli, activos en el negocio de la cerveza; Ignacio Barbuscia, representante de Ford en Italia; y Bambo Kessouglu, armador y propietario de la Sun Line Company. Entre otros, estos individuos se convirtieron en accionistas italianos de Playa Moreno (Invernizzi, *Resumen*, 8/4/1979).

Playa Moreno incluía un terreno de propiedad pública de 1.200.000 m² que, gracias a la influencia del gobernador margariteño, Virgilio Ávila Vivas, y del ministro del ambiente, Roberto Gabaldón, se había vendido a un grupo de inversionistas. Originalmente, éstos habían pagado solo 0,125 bolívares (alrededor de tres centavos de dólar) por metro cuadrado, y habían vendido parte de la tierra, inmediatamente después, a empresarios interesados en desarrollar Playa Moreno por un precio equivalente a 240 veces el que habían pagado: 30 bolívares (alrededor de 7 dólares) por metro cuadrado. Ambos grupos siguieron siendo socios en Playa Moreno. Para los inversores italianos, la

historia de la tierra y el brusco aumento de precio carecía de importancia: querían obtener ganancias, y a ese precio Playa Moreno era una buena inversión. Además, sus relaciones con influyentes venezolanos parecían garantizar el éxito. El presidente Pérez quería convertir a Margarita en un importante centro de turismo nacional e internacional, y empleaba los recursos del Estado para promover su desarrollo. El gobernador Ávila Vivas construyó caminos y servicios para Playa Moreno. Resulta innecesario aclarar que, al contar con el respaldo de tan importantes personalidades, la “permisología”, que en Venezuela puede estancar un proyecto por tiempo indefinido, no afectó este emprendimiento: se concedieron los permisos con rapidez y todo funcionaba sin problemas. Inesperadamente, la violación de un antiguo código de honor, que involucraba a Campetti y D'Antona, ensombreció estos sueños de fortuna.

El maletín

A cambio de sus servicios como chofer y *valet*, Campetti le había ofrecido a D'Antona un buen salario mensual y una suma sustancial tras la conclusión de la transacción de Playa Moreno (se afirma que 100.000 dólares). D'Antona necesitaba el dinero; Campetti precisaba un hombre en el que pudiera confiar. Pero no fue cuidadoso en el trato que le dio a D'Antona. Cuando Campetti estaba a punto de salir de Venezuela para realizar un viaje en mayo de 1978 sin haberle pagado su salario durante tres meses, D'Antona abandonó airado su empleo y le exigió su salario y una compensación por cesantía (30.000 bolívares, o sea, unos 7.000 dólares). Apurado por abordar el avión que lo llevaría a Nueva York, Campetti trató de apaciguar a D'Antona metiéndole entre las manos unos pocos miles de bolívares. Pero D'Antona no se sintió satisfecho. De acuerdo con la prensa, el Capitán, que es un hombre de honor, se sintió ofendido y le devolvió el dinero. Campetti le respondió: “E allora vaffanculo” y tomó el avión (*El Nacional*, 30/11/78). Había dejado a cargo de D'Antona, como era su costumbre, sus efectos personales; en este caso se trataba de una maleta de ropa y de un maletín. Unos días después, cuando Campetti regresó de Nueva York, D'Antona no lo esperaba en el aeropuerto.

Campetti tomó un taxi y se dirigió al Hotel Tamanaco, donde generalmente se hospedaba en Caracas. Ya en 1957, Mariano Picón Salas (el mayor ensayista venezolano) describía este hotel, en un breve ensayo sobre Caracas, como el “vestíbulo” de la vida económica de Venezuela:

Para el extranjero ambicioso que viene a Venezuela y puede afrontar los gastos de la primera semana, el Tamanaco es una necesaria batalla social. Desde allí se inicia la red de las relaciones y cuando se tiene cálculo y estrategia puede ser el anchuroso vestíbulo de la fortuna. Para quienes saben descubrirlo y conocen las palabras mágicas, Aladino va, a veces, por las calles de Caracas con su lámpara que ofrece concesiones mineras, terrenos por urbanizarse, empresas por crear (1976:233-234).

Pasados 30 años, durante el auge petrolero, un periodista italiano brindaba la siguiente descripción del Hotel Tamanaco:

Un río de millones de dólares corre hacia las arcas del Estado, inspirando dentro y fuera de Venezuela sueños de grandeza y de ganancias fáciles. En Caracas el Hotel Tamanaco se ha convertido en un centro de transacciones internacionales. Alrededor de su piscina se discuten, cierran, pierden y sueñan negocios fantásticos (*Resumen*, 15/4/1979).

Desde el Hotel Tamanaco, Campetti le envió un mensajero a D'Antona, reclamando la devolución de sus cosas. Pero D'Antona sólo le devolvió la maleta y le mandó a decir que sólo le entregaría el maletín cuando le pagara lo que le debía. Campetti, renuente a actuar bajo presión, se dedicó a atender otros asuntos, presumiblemente con la esperanza de que, mientras tanto, el Capitán recuperaría la cordura y se percataría de que le convenía devolver el maletín.

Cuando Campetti se fue a Margarita para atender asuntos relacionados con Playa Moreno, D'Antona, quien no sabía cómo proceder, se reunió con sus amigos italianos en uno de los cafés donde funcionaba la República del Este, en Sabana Grande, que, como vimos en el capítulo anterior, es una zona cosmopolita de Caracas con muchos cafés y restaurantes, donde los intelectuales, los políticos y los extranjeros se reunían para platicar e intercambiar ideas sobre la vida y la política. Se quejó de que no le habían pagado, de que estaba viejo, de que Campetti era rico. Sus amigos examinaron el maletín. Uno de ellos, Giulio Metimano, le sugirió que con el maletín podía lograr lo que quería. Metimano había sido administrador de La Boca de la Veritá, donde D'Antona había sido parqueador; se le ha descrito como un hombre con muchos conocidos, como un agente de la policía y como un “vendedor de protección” (Carmona 1979:97). Según sus amigos, el nombre le cuadraba; Metimano significa literalmente “meter la mano”. Entre sus conocidos se encontraba Manuel Molina Gásperi, el jefe de la PTJ. A sugerencia de Metimano, D'Antona le confió su caso y el maletín a Mayra de Molina, abogada y esposa del director de la PTJ.

La extorsión

Se dice que Mayra de Molina prestó poca atención a la disputa entre jefe y empleado, asunto que normalmente habría sido dirimido por un departamento del Ministerio del Trabajo. Lo que le interesó fue el contenido del maletín. El viernes 22 de junio de 1978, la operadora telefónica del Hotel Concorde de Margarita grabó un mensaje para Renato Campetti, en el cual se le pedía que llamara a Mayra de Molina.

Campetti sabía que tenía que responder a una llamada de la esposa del jefe de la PTJ. El lunes 25 de junio, Campetti envió a dos abogados (Leopoldo Robles y Coromoto Texier de Armas) a hablar con Mayra de Molina en su bufete (Coromoto Texier era la esposa de Hernán de Armas, uno de los socios de Campetti en Playa Moreno). Mayra de Molina les expuso el caso como si se tratara de una simple disputa laboral. Le pidió a D'Antona que formulara él mismo su demanda. La recompensa que éste pedía había subido bruscamente de 30.000 bolívares a un millón (o sea, de casi 7.000 dólares a 230.000). Sorprendidos, los abogados de Campetti abandonaron la oficina. Ese mismo día, D'Antona presentó una demanda laboral en la PTJ y dejó allí en custodia el maletín de Campetti. Después explicó que no quería que lo consideraran un ladrón; que sólo utilizaba el maletín como medio para obtener lo que por derecho le pertenecía. Pero Leopoldo Robles, quien había asistido a otra reunión con D'Antona y Mayra de Molina, declaró en los tribunales que en la misma “el Capitán manifestó que aparte de sus prestaciones sociales, exigía la suma de un millón de bolívares, ya que él había dejado de ser el tonto que era” (Castellanos 1979: 50). Robles añadió que D'Antona consideraba que Campetti le debía un regalo, y que como ahora tenía muchos gastos y Campetti era rico, debía recibir “un millón de bolívares para pasar su vejez tranquilo” (1979: 50).

La PTJ utilizó todo su poder contra Campetti. Allanó tanto su habitación en el Hotel Tamanaco como la oficina caraqueña de Playa Moreno, bloqueó su cuenta de banco (en 1977 Campetti había extraído 8 millones de bolívares, esto es, 1,8 millones de dólares), le pidió a la Interpol que lo arrestara dondequiera que lo encontrara y lo hizo seguir a todas partes en Caracas. Hasta ese momento, parecía un simple caso de extorsión: la poderosa esposa del jefe de la PTJ se enfrentaba a un extranjero rico pero impotente cuya riqueza misma lo hacía simultáneamente sospechoso de malos manejos y un blanco atractivo para la extorsión. Pero faltaba un detalle esencial, Campetti no era “huérfano”; o sea, no carecía de conexiones en las más altas esferas del poder.

Los círculos del poder: Cecilia Matos

En América, Campetti había aprendido que el dinero y la política van de la mano, que para hacer plata hay que aproximarse a los poderosos. En el centro de la camarilla del presidente Carlos Andrés Pérez había una mujer, Cecilia Matos. Llamada afectuosamente “la Negra” por su tez olivácea, era una de los 14 hijos de una humilde familia de Cabimas, en el pasado, floreciente pueblo petrolero pero ya en esa época en decadencia. Matos era amante y secretaria de Pérez durante su presidencia de la bancada parlamentaria de AD, en el periodo democristiano de Rafael Caldera (1969-1974). Desde esta posición Pérez había tenido un papel crucial en la aprobación legislativa de las políticas de Caldera, dado que Copei contaba con una minoría en el Congreso. También desarrolló una red de relaciones externas a los círculos políticos y de negocios tradicionales de AD. Esta red fue la base de la formación de la tristemente célebre camarilla de los apóstoles durante la presidencia de Pérez. En tanto secretaria y amante, Matos se había convertido en confidente de Pérez y en intermediaria para la distribución de favores y la negociación de acuerdos. Y cuando aquél llega a la presidencia, ella también asciende. Conocida entre sus íntimos como la Segunda Dama, ayudó a coordinar la red de relaciones sociales y transacciones políticas que conformaron el lado informal de la presidencia de Pérez.

En Venezuela, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se considera que la vida privada de los políticos es asunto privado mientras mantengan una apariencia de respetabilidad. No obstante, a veces a los jefes de Estado les resulta difícil mantener la privacidad. Las estrictas pero visibles medidas de seguridad impuestas por la agencia encargada de la seguridad presidencial, necesariamente transforman cada movimiento en un acontecimiento público. Pérez hizo de la necesidad una virtud. Su perfil político era el de un hombre enérgico. Al cultivar una imagen de mujeriego, reforzó su prestigio de hombre de acción. Imagen que adquirió una dimensión especial como resultado de sus muchos y efímeros romances con mujeres de la clase alta. No obstante, dejó sentado que respetaba ciertas normas. Visitaba a Matos con regularidad, pero cuando estaba en Caracas dormía en su propia casa. Y subrayaba la seriedad de su relación con Matos, con la cual tenía una hija, al insistir en que todos sus íntimos la aceptaran como uno de ellos⁴. Según se dice, con frecuencia afirmaba que quienes no la aceptaban a ella, no lo aceptaban a él (*Resumen*, 17/2/1980).

⁴ Posteriormente tuvo otra hija con Cecilia Matos, con quien se casó después de su segundo periodo presidencial (1989-1993) una vez divorciado de su esposa, Blanca Rodríguez.

Dado su papel de intermediaria, la figura de Matos cobró un sentido polémico: se convirtió en el centro de opiniones encontradas sobre Pérez. Para sus críticos, llegó a simbolizar el personalismo irrefrenado de la gestión perezista. Oscar Machado Zuloaga, presidente de la mayor compañía privada y líder del grupo económico Vollmer-Zuloaga, la consideraba el disolvente de los principios normativos establecidos. Al debatir el incremento de la corrupción durante el auge petrolero, insistía en aclarar que había dos tipos de empresarios: los corruptos y los morales. Los morales se preocupan por mantener sus asuntos de negocios separados de sus amistades políticas. Presentaba como evidencia de su propia moralidad el hecho de que nunca ni siquiera había visto a Cecilia Matos: “Hay empresarios que la buscan y que intentan ir a sus fiestas. Eso es lo que yo quiero decir cuando establezco que hay diferencias entre dos tipos de empresarios. Yo nunca usé mi relación con Rómulo Betancourt para resolver un problema económico” (entrevista, agosto de 1980)⁵.

El auge petrolero de 1974 le trajo suerte a Cecilia Matos. Se mudó a una gran mansión en La Lagunita, una de las zonas más caras y prestigiosas de Caracas. El hogar de la Segunda Dama se empezó a conocer con el nombre de La Segunda Casona (La Casona es el nombre de la residencia presidencial), porque allí, en una atmósfera informal de lujosas fiestas y comidas, se adoptaban decisiones de política, se designaba o removía a funcionarios públicos y se discutían y concertaban acuerdos de negocios. La propia abundancia y calidad de los licores y las comidas era un índice de poder. El señor Vásquez, antiguo chef del mejor restaurante de Caracas (Henry IV) y del Palacio Presidencial de Miraflores, se convirtió en chef de La Segunda Casona. En este escenario, alejado de las convenciones y el protocolo sofocantes de la vida pública, el poder de los puestos públicos y del dinero se conjugaban para producir una nueva etiqueta, un código de conducta congruente con la naturaleza de las decisiones adoptadas. La informalidad era en parte expresión del poder. Y lo que es más importante, era su forma social necesaria, coherente con la naturaleza que se expresaba a través de ella. Tener poder significaba poseer la capacidad para romper y redefinir las reglas. Se hizo popular una interpretación cínica de la Regla de Oro: “Los que tienen el oro hacen las reglas”. Como en Venezuela el Estado tenía el oro, la regla adoptaba incluso otra forma: “los que hacen las reglas se quedan con el oro”.

Matos había logrado acceso al mundo de los ricos. Quizás como agradecimiento a la fuente de su

⁵ En círculos muy restringidos se sabía que Machado Zuloaga había objetado antes lo que consideraba la conducta carente de principios de Pérez, así como su intento de intervenir en decisiones pertenecientes a las administraciones privadas. Había renunciado a la presidencia de Viasa (una compañía aérea de propiedad mixta estatal y privada) cuando el presidente Pérez solicitó que se asignara en su próximo destino a México en 1977 la misma aeromoza que lo había atendido durante su viaje, ese mismo año, al Medio Oriente, durante el cual supuestamente se habían celebrado fiestas.

buena suerte, llevaba al cuello, colgada de una cadena, una réplica en oro de una torre de petróleo. Decía que nunca se la quitaba. Era un regalo de “Papi”, nombre cariñoso que le daba al presidente Pérez (entrevista confidencial, agosto de 1978). En la medida en que obtenía más poder, se sentía con capacidad para redefinir las reglas. Una norma política bien establecida en Venezuela era que los medios de comunicación no podían informar sobre los asuntos privados del presidente; el anonimato de Matos no debía ser violado por los medios. En noviembre de 1977, su amiga íntima y subsecretaría de Pérez en Miraflores, Gladys López de Vázquez, ofreció una fiesta espectacular en el salón de bailes del Hotel Caracas Hilton para celebrar los 15 años de su hija. Un periódico informó que, no obstante, “el centro del espectáculo era Cecilia, y todos los ministros desfilaron por su mesa” (*Resumen*, 17/12/1980). El número de noviembre de la revista *Páginas* desplegaba un reportaje extenso sobre la fiesta, en el que se describían las costosas decoraciones y los lujosos licores y comidas. Entre las ilustraciones había una foto de Matos en el momento en que la saludaba Carmelo Lauría, el ministro con más poder del presidente Pérez.

El artículo produjo gran conmoción. De pronto descubría una realidad sumergida; ahora todo el mundo podía ver a la mujer cuyo nombre antes no podía siquiera aparecer impreso. El contexto era una fiesta lujosísima en la que solo tenían cabida los muy ricos. Se rumoró mucho que el reportaje había sido publicado por los enemigos de Pérez para empañar su imagen. Luis Esteban Rey, miembro de la fracción de Betancourt en AD, aprovechó la ocasión para escribir un artículo donde condenaba el énfasis en el consumo suntuario y la corrupción de la moral que corroían a la sociedad venezolana. Hubo rumores de que la policía confiscaría *Páginas* y arrestaría al autor de la nota sobre la fiesta. Pero después se supo que Matos le había pedido a su amigo Osmel Sousa, un cronista social, que escribiera sobre ella. “Fue una orden expresa de Cecilia, de salir, pues ya estaba cansada del anonimato al cual había estado obligada tanto tiempo” (*Resumen*, 17/2/ 1980). Matos, que en ese momento se sentía poderosa, probaba los límites de su poder y reclamaba su derecho a existir a la vista del público. Era mediante movidas como esta, aparentemente triviales, como se variaban las reglas y tomaban forma e imponían nuevas maneras de actuar y de definir la realidad.

Campetti había logrado integrarse al círculo de Matos. Era un grupo de personas reunidas por la riqueza en un ascenso vertiginoso hacia los tentadores símbolos de estatus del mundo occidental. En 1977, durante uno de sus frecuentes viajes a Europa, Matos se hospedó en una mansión recientemente adquirida por Campetti en Portofino, Italia, comprada a Umberto Agnelli (de Fiat) por cerca de un millón de dólares. A partir de esos encuentros con las riquezas del Viejo Mundo se

construían los sueños de los nuevos ricos de Venezuela. Desde su perspectiva de advenedizos, ese mundo parecía hecho de objetos independientes, comprables. Se rodeaban de sus resplandecientes iconos de superioridad; en palabras de un observador venezolano, de “trajes, automóviles, joyas, mansiones, viajes, yates, más y mejores trajes, automóviles, joyas, mansiones, viajes, yates” (Duno 1975: 58). De esta forma, a través de una búsqueda obsesiva y creciente del lujo, se construían una nueva identidad social, un sentimiento de pertenencia a un mundo superior, una posición más alta en su propio mundo. Este matrimonio entre poder y lujo dio origen, según el mismo observador, a “una dialéctica que te impele a escalar, obliga a perder escrúpulos” (1975: 58). Los sueños trajeron consigo a los medios.

Ramón Carmona

Campetti solicitó la ayuda de Cecilia Matos. Esta, no queriendo molestar a Pérez con el asunto, requirió consejo de su hermana. Nancy Matos era también una mujer influyente. En su condición de secretaria privada del presidente en Miraflores, había establecido contactos importantes. Su consejo fue que Campetti procurara la protección legal de Ramón Carmona, un abogado conocido por sus habilidades legales y espíritu combativo. Omar Salaverría, amigo de Campetti y de Carmona, los presentó. En una reunión de la que participaron los abogados de Campetti, Hernán de Armas y Coromoto de Armas, Carmona insistió en que Campetti sólo debía pagarle a D'Antona sus salarios y la compensación por cesantía. Mientras Carmona se ocupaba del caso, Campetti, preocupado por la participación de la PTJ, vivía en la casa de Salaverría. Allí se sentía protegido. Vecino de Salaverría era Erasto Fernández, antiguo director de la policía política federal (Digepol) durante el gobierno de Betancourt y quien posteriormente dirigió las fuerzas de seguridad de uno de los principales grupos económicos del país.

En ese momento, Piero de la Corte, amigo italiano de Campetti, llegó a Venezuela para ayudarlo. Sobre él se ha revelado muy poco al público. Los medios de comunicación solo han podido saber que era socio de Campetti, pero que no participaba de Playa Moreno. *Resumen* aludió a la naturaleza de la asociación que los unía al explicar que, por razones de seguridad, los militares habían prohibido a los medios informar sobre la reciente compra por la Armada de seis navios de guerra italianos. *Resumen* sabía hacer elocuentes sus silencios.

Durante su breve estancia De la Corte se reunió con Molina Gásperi, de la PTJ; con su esposa Mayra

de Molina; con Campetti y con Metimano. Estas reuniones, a pesar de ser confidenciales, tuvieron lugar en restaurantes, a la vista del público: el poder no solo hacía innecesaria la privacidad, sino que hacía suyos los espacios públicos. De la Corte pudo adelantarle a Campetti algunos detalles de lo que le esperaba: cuáles de sus cuentas de banco serían bloqueadas, qué pasos daría a continuación la policía. Su informante era Metimano, quien a su vez, confió que su fuente de información era “el Capo”. Campetti se sintió reconfortado por esta proximidad al poder.

No obstante, le sorprendió el consejo de De la Corte de que no solo le pagara a D'Antona el millón de bolívares que exigía, sino también 400.000 bolívares más (192.000 dólares) a Mayra de Molina. Carmona convenció a Campetti de que se negara a hacerlo. De la Corte, inquieto por lo que sentía como testarudez de su amigo, regresó a Italia. Allí se quejó de Carmona a la esposa de Campetti. Le dijo que Carmona era el obstáculo principal para el logro de una rápida solución de los problemas legales de su esposo. En conversaciones telefónicas con ella, Campetti se enteró de que consideraba a Carmona un abogado en el cual no se debía confiar, con un largo expediente policial y conocidos vínculos con la mafia.

Mientras Campetti era presionado desde Italia por su esposa para que no siguiera utilizando los servicios legales de Carmona, en Caracas Mayra de Molina empleaba todo el peso de la PTJ contra aquél, y Carmona manipulaba las palancas del sistema judicial contra D'Antona. En ese momento la ventaja era de Carmona. Por intermedio de su amistad con el juez Alberto Martínez Moncada, pudo acusar a D'Antona de extorsión y lograr que el 7 de julio se expidiera una orden judicial de arresto. No obstante, esta decisión dejaba mucho que desear. La orden judicial afectaba sólo a D'Antona y se expidió sin una investigación profunda. El juez Martínez Moncada no citó a ninguna de las personas supuestamente involucradas en la extorsión: Mayra de Molina, Manuel Molina Gásperi y sus subordinados en la PTJ, y el propio D'Antona. Además, a pesar de la orden, la PTJ no detuvo a D'Antona. Era obvio que en ese momento la intención de Carmona no era atacar a D'Antona, sino arrebatarse a Campetti de las garras de la PTJ. Una vez persuadidos los tribunales de que Campetti era víctima de una extorsión, Carmona se las ingenió para obtener otra orden judicial que levantaba las restricciones que la PTJ le había impuesto. Se desbloquearon sus cuentas de banco y se rescindió la orden de arresto de la Interpol. Campetti estaba en libertad de viajar a Italia.

Campetti estaba vindicado. Su abogado había obtenido una victoria. Le faltaba recuperar su maletín, pero se podía confiar en que Carmona lo lograría. Antes de partir hacia Italia, Campetti celebró su triunfo con Carmona. En medio de su euforia, le prometió a Carmona que haría que su amigo De la

Corte firmara en un consulado venezolano en Italia, un documento donde certificara que los Molina habían tratado de extorsionarlo.



Gladys de Carmona (con blusa blanca), viuda de Ramón Carmona, y Mayra Vernet de Molina (con vestido a cuadros), esposa de Molina Gásperi, director de la Policía Técnica Judicial en una audiencia en los tribunales. (Archivo *El Nacional*.)



Gladys de Carmona encabezando una protesta en demanda de justicia frente al Congreso Nacional tres días después del asesinato de su esposo. (Archivo *El Nacional*.)

Esta promesa hizo especialmente feliz a Carmona. Desde hacía mucho tiempo quería desacreditar a Mayra de Molina. Estaba convencido de que empleaba su condición de esposa del director de la PTJ para obtener ventajas injustas en su práctica profesional privada. Se había enfrentado a ella en muchas batallas legales, pero una de ellas había tenido especial significación, porque involucraba a su familia. En 1976, Molina Gásperi había cesanteado a la hermana de Gladys de Carmona, Gina de Jaimes, y a su esposo, Marcelo Jaimes, miembros fundadores de la PTJ y líderes de la rama de AD en el seno del cuerpo policial. Se dice que Molina Gásperi, resentido por la posición de la esposa de Jaimes en la rama de AD dentro de la PTJ -superior a la suya- los había expulsado con falsas acusaciones, y que había empleado a los medios de comunicación para desacreditarlos. Cuando Ramón Carmona trató de defenderlos legalmente, Mayra de Molina empleó su influencia para que un amigo fuera designado juez del caso. En consecuencia Carmona debió abandonar esa batalla legal. Era entonces razonable esperar que Carmona, como abogado de Campetti y viejo adversario de Molina, le diera la bienvenida a la oportunidad de combatir a su antigua rival. Pero también resulta razonable suponer que algo más se movía en este caso. Carmona debe haber evaluado la significación del maletín de Campetti. Si contenía documentos que podían establecer que algunas figuras de mayor nivel estaban involucradas en transacciones ilegales, su posesión le daría un enorme poder. Primero trató de obtenerlos por medios legales. Como representante de la defensa de Campetti, empleó su influencia con el juez Martínez Moncada para ordenar a la PTJ que le entregara el maletín al tribunal. Sin embargo, debe haber sabido que la PTJ se quedaría con los materiales esenciales. Pero presionando directamente a los Molina podía obligarlos a devolver los documentos o a hacer un trato. El 10 de julio, dos días antes de marcharse a Italia, Campetti le entregó a Carmona dos poderes legales: uno para continuar los procedimientos legales contra D'Antona, otro para iniciar un procedimiento contra "funcionarios de la PTJ que pudieran resultar culpables del delito de extorsión" (*Resumen*, 19/11/1978). El 25 de julio, Carmona obtuvo un certificado de solvencia tributaria para Playa Moreno; la PTJ, usurpando las funciones de Hacienda, había tratado de acusar a Campetti de evasión de impuestos. Resuelto esto, Carmona se sintió libre para atacar a los Molina. Pero todavía necesitaba el documento de Piero de la Corte. Tras muchas llamadas telefónicas a Campetti en Italia, el 28 de julio Carmona obtuvo la respuesta que quería: De la Corte había firmado la carta en la cual acusaba a Molina de extorsión. Los testigos de esta conversación en la oficina de Playa Moreno en Caracas oyeron a Carmona decir a Campetti: "Perfecto, hermano... Molina se jodió". Se dice que de inmediato hizo una llamada local y le dijo a un amigo: "Hermano, ya el documento llegó, tengo la

solvencia de los fiscales de Hacienda y D'Antona tiene un auto de detención. Manuel Molina se hundió y el lunes doy una rueda de prensa, donde los voy a desenmascarar” (Carmona 1979: 50). Pero otros también habían oído esta conversación. Inmediatamente después de las llamadas, Carmona se fue de las oficinas de Playa Moreno. Un amigo lo llevó en su auto al Hotel Cuatricentenario, donde Carmona pasó un rato con su amante. Se fue del hotel a las 2:10 de la tarde: su amante lo llevó en su auto hasta la avenida Andrés Bello. Fue entonces, cuando caminaba desde el auto hasta la oficina de un amigo, que tres hombres lo interceptaron y lo mataron.

Legalidad / Criminalidad

La red de relaciones sociales en la que quedó atrapado Carmona moldeaba también la trama legal empleada para encontrar a sus asesinos. Estaba diseñada para seleccionar quién resultaría atrapado, al tiempo que mantenía una apariencia de legalidad. Durante el desarrollo del caso, este trunco proceso legal mostró un inquietante isomorfismo con el propio asesinato. Una reconstrucción completa requeriría un análisis independiente. El breve recuento que sigue sirve para ilustrar la similitud entre el reino legal y el reino criminal, y para profundizar en el análisis del asesinato.

Tribus

Resulta importante señalar que aunque el sistema judicial venezolano es formalmente autónomo, en la práctica está estrechamente articulado con el sistema de partidos y es extremadamente sensible a las presiones políticas y las influencias privadas. Si bien la ley venezolana prohíbe a la mayoría de los funcionarios públicos la práctica independiente de sus profesiones, a menudo utilizan estos cargos para impulsar sus prácticas privadas. Esta privatización afectaba en especial al sistema judicial. Su mecanismo más común era el establecimiento de vínculos informales entre los tribunales públicos y los bufetes privados. Esta asociación fue bautizada con el nombre popular de “tribufete”, o más simplemente, “tribu”. La connotación del término tribu en este contexto es la de una forma de subsociabilidad o, en el mejor de los casos, de una forma atrasada de sociabilidad: la de los grupos primitivos, no la de la sociedad civilizada. El poder de los jefes de estas tribus, a menudo llamados “caciques”, se deriva de su habilidad para mediar entre la tribu y la sociedad.

Nada menos que Rómulo Betancourt comentó sobre la influencia generalizada de las tribus durante

este periodo. En la concentración convocada para proclamar la candidatura presidencial de Luis Piñerúa para las elecciones de 1978, Betancourt pronunció un encendido discurso en el cual instó a librar una batalla contra la corrupción del sistema legal venezolano. “Es necesario que se ponga fin a la calamidad de que el Poder Judicial sea un archipiélago donde cada partido político tenga una parcela- debe terminarse con eso de que buena parte de los Juzgados de Venezuela sean pulperías para la compra-venta de sentencias” (*Resumen*, 5/8/1979). Al vincular informalmente el cargo de Manuel Molina Gásperi en la PTJ con la práctica privada de su esposa Mayra, este matrimonio había creado una poderosa y temida tribu en el archipiélago legal de Venezuela.

Quizás la persona con más poder en los tribunales era David Morales Bello, líder de AD, hábil abogado y apóstol que gozaba de toda la confianza de Carlos Andrés Pérez. Morales Bello también era influyente en la PTJ, como lo indica el hecho de que un grupo de la GATO (el Grupo Armado Táctico Operacional), las fuerzas elite de la PTJ, lo seleccionara como padrino de su graduación. (Es común en Venezuela que los grupos que se gradúan adopten el nombre de una personalidad pública a la que admiran, quien se convierte en su padrino o madrina.) Para cerrar este círculo de influencias, el hijo de Morales Bello era asesor legal de la PTJ.

En esta ocasión, la politización -o mejor, la privatización- del proceso legal resultó inevitable. Dada la estructura del sistema legal y la multiplicidad de los intereses en juego, era de esperar que cada uno de los actores tratara de violentar la ley a su favor. Todos luchaban tanto para defender sus intereses inmediatos como para preservar la estructura subyacente de las alianzas que los unían. El resultado fue un empate: no fue posible ocultar completamente el caso ni resolverlo de manera concluyente.

Existían abundantes evidencias de que el proceso legal tenía profundas irregularidades. A los jueces se les extorsionó, amenazó y desalentó en su trabajo. La violencia, omnipresente, dificultaba la actuación de los magistrados, el testimonio de los testigos y la labor de los periodistas. El juez designado para investigar el caso, Alberto Martínez Moncada, renunció después de recibir amenazas contra su familia y de la revelación pública de que había participado en un caso de extorsión. Su reemplazante, Guevara Sifontes, también recibió varias amenazas de muerte. Y Gladys de Carmona, la principal promotora de la investigación, sufría amedrentamientos y seguimientos constantes. Su casa fue ametrallada en dos ocasiones. La opinión pública sospechaba que tras las acciones públicas de los involucrados en el caso se escondían motivos o presiones ocultos.

Incluso los intentos encaminados a crear una fachada de legalidad resultaron contraproducentes. Al mismo tiempo que trataba de presentarse como paladín de la justicia, Pérez reconoció

inconcientemente que había ejercido influencia sobre testigos clave. Había enviado a su representante personal para hacerles saber que sentía que “estaban siendo presionados” y para asegurarles que podían hablar con toda libertad. Como consecuencia de esta acción del Gobierno, los testigos cambiaron sus declaraciones. Como dijera el presidente con llaneza a los medios de comunicación: “Como resultado de la presión del Gobierno, reconocieron a los funcionarios supuestamente involucrados en el crimen”.

Falsificar criminales

El 29 de julio, el día siguiente al asesinato de Carmona, Molina Gásperi piloteó el avión de la PTJ hasta Miami para recoger allí al ministro de Justicia, J.M. Echevarría, y al apóstol David Morales Bello, que habían viajado en secreto a Washington para obtener información sobre la investigación que llevaba a cabo el Congreso estadounidense sobre los sobornos pagados por la Boeing a gobiernos extranjeros, entre ellos el de dos millones de dólares a funcionarios venezolanos responsables de la compra del avión presidencial. Se dice que Echevarría y Morales Bello debían tratar de mantener oculto este explosivo tema.

Inexplicablemente, Echevarría no había solicitado el permiso requerido como ministro para abandonar el país, lo cual tornaba ilegal su viaje. Además, no hubo ninguna buena explicación de los motivos para que el propio Molina Gásperi fuera a encontrarse con Echevarría y Morales Bello. Aparentemente no encontraron asientos en ningún vuelo comercial y solicitaron el avión de la PTJ. Cuando se presionó para obtener una explicación de por qué Molina tuvo que ir en persona, el presidente Pérez justificó el viaje como una simple cuestión de elección personal. Voló él mismo, dijo Pérez, “porque le dio la gana. Nadie lo mandó” (Peña 1979:26). A su regreso, Echevarría y Molina hicieron un frente común en lo relativo al asesinato de Carmona; declararon que se trataba de la obra de delincuentes comunes que pronto serían capturados. El viaje y sus secuelas sugieren la posibilidad de que el ministro de Justicia y el director de la PTJ fueran cómplices desde un inicio en el ocultamiento de los móviles del asesinato.

Mientras la PTJ utilizaba los medios de comunicación para convencer a la opinión pública de que en breve se encontraría a los asesinos, Molina Gásperi intentaba por vía privada controlar a Campetti y a De la Corte. Se dice que los obligó a regresar a Venezuela amenazándolos con recurrir a la Interpol si se negaban. Cuando arribaron a Caracas, Molina controló estrechamente sus movimientos. Se vieron

restringidos al Hotel Caracas Hilton y a salidas acompañados por Molina a restaurantes de lujo y a su casa. A Gladys de Carmona se le impidió, en todas las ocasiones que intentó, concertar una reunión con Campetti. A continuación, el 4 de septiembre, Campetti confirmó en un interrogatorio conducido por la PTJ su reciente declaración pública de que en realidad no existía ningún documento que acusara a Molina de extorsión. Gladys de Carmona se sintió indignada y su única esperanza fue poder revertir tal declaración interrogando a Campetti en un tribunal.

Después de que la PTJ fracasara en el intento de demostrar que Gladys de Carmona había asesinado a su esposo, trató, mediante la falsificación de testigos y móviles, de sustentar su declaración inicial de que Carmona había sido víctima de delincuentes comunes. Pero este intento se vio erosionado por las denuncias de los medios de comunicación sobre torturas y sobornos a los testigos. El descubrimiento del cadáver de Oswaldo Farrera (también conocido como Watusi), un delincuente común, causó un impacto particular. Farrera había sido liberado de la prisión, en circunstancias extrañas, el día antes del asesinato de Carmona, y se le encontró muerto el 17 de agosto. Entre sus compañeros de prisión se rumoraba que había conseguido un trato: si mataba a Carmona, lo sacarían de la cárcel. El 30 de julio, en una llamada telefónica a la PTJ, una persona que no reveló su identidad declaró que había oído a Farrera decir en la cárcel que un abogado estaba tratando de sacarlo “con la finalidad de matar al doctor Carmona Vásquez” (Castellanos 1979: 152).

El cuerpo de Farrera se encontró cerca de una casa presumiblemente utilizada para torturar prisioneros. Informes de que se habían descubierto otros cadáveres en las proximidades de esta “casa de torturas”, como la llamó la prensa, respaldaban los argumentos de que la muerte de Farrera no era producto de un delito común. Al resultar contraproducentes sus intentos para acusar a delincuentes comunes, la PTJ se convirtió en el blanco fundamental de las sospechas. Se sospechaba que algunos miembros de su brigada elite, la GATO, habían cometido el homicidio. Ello intensificaba las sospechas sobre Molina Gásperi. Ganaba terreno la opinión de que había ordenado el asesinato. Según este punto de vista, el móvil de Molina había sido su vieja rivalidad profesional con Carmona y su temor a ser públicamente acusado de extorsión. No obstante, el público estaba conciente de que no resultaría fácil acusar a Molina, quien además de ser jefe de la mayor fuerza policial nacional, era uno de los leales a AD, que gozaba de la confianza del presidente y del ministro de Justicia. Se bromeaba con que tal como en Estados Unidos el presidente había debido renunciar por el caso Watergate, en Venezuela quizás se removería al jefe de la policía debido al “Watergatos”.

Las reglas del juego legal

Pero en ese momento una repentina violación de las reglas del juego debilitó la posición de Molina Gásperi. Ello, junto a la pérdida continuada de apoyo electoral que experimentaba AD, hizo que Molina quedara expuesto ante sus contrincantes. Aunque desde el principio se sospechaba que la PTJ estaba involucrada en el crimen, el juez Martínez Moncada, había permitido que la PTJ llevara la investigación. La PTJ interrogó a testigos en su sede; nunca se citó a Molina a prestar declaración. Las investigaciones avanzaban con lentitud y sin resultados. Según Raimund Aguiar, abogado principal de Gladys de Carmona y amigo del juez Martínez Moncada, se había producido un acuerdo entre el juez y el jefe de la PTJ para no implicar a ese cuerpo en el caso⁶. Se decía que la PTJ tenía informaciones desde hacía más de un año de que el juez Martínez había tratado de extorsionar a los directores del Banco Latino (un importante banco local, cuyo presidente era Pedro Tinoco, uno de los más influyentes apóstoles del presidente Pérez). Molina había guardado esta información en la PTJ y había amenazado a Martínez con revelarla si continuaba las investigaciones sobre el caso Carmona. Según Aguiar, Molina le había hecho saber a Martínez que “si seguía echando vainas, o molestando, o encaminando las investigaciones hacia él, iba a hacer conocer lo del Banco Latino” (Castellanos 1979: 273).

De esa forma, Molina había mantenido controlado al juez mediante la extorsión y el chantaje. Además de la amenaza de revelar públicamente los materiales comprometedores que estaban en su poder, amenazó también a su familia. La PTJ libró una guerra psicológica contra el juez, al seguirlo a todas partes y enviarle constantes amenazas de muerte. Como resultado:

Alberto estaba realmente asustado: Alberto había dejado esta investigación en manos de la PTJ y en manos de los dos fiscales del Ministerio Público, y como sabemos, en peores manos no podía estar la investigación. Alberto no colaboró activamente para desviar el curso de las investigaciones. Sencillamente hizo como el avestruz: metió la cabeza en un hueco y se olvidó del mundo. Dejó que la PTJ y los dos fiscales hicieran lo que quisieran (Castellanos 1979: 274).

La violación de las reglas

Sin embargo, cuando Campetti y De la Corte prestaban declaraciones en la PTJ, el juez Martínez

⁶ Aguiar se convirtió en una personalidad importante gracias a sus denuncias sobre las irregularidades del caso. También fue asesinado a balazos (tras recibir muchas amenazas de muerte) en Caracas, en 1982.

Moncada desapareció discretamente durante algunos días. Un periodista amigo de Molina escribió un artículo en el cual revelaba que el juez estaba en Aruba, y sugería que había “huido” de Venezuela. El juez se sintió molesto. Ya era sensible a la crítica pública, porque el juez Rodríguez Corro lo había acusado de separar injustificadamente los casos de Playa Moreno y de Carmona. Estimó que el único que podía saber que había ido a Aruba era Molina, y que el artículo era un intento de humillarlo. Según Aguiar, el juez interpretó la información del periódico como una “violación de las reglas del juego”. El acuerdo había consistido en que “Manuel Molina no dice nada de Alberto Martínez Moncada, ni Alberto decía nada de Manuel Molina Gásperi” (Castellanos 1979: 274).

La violación de las reglas del juego condujo a una guerra abierta. El juez Martínez “decide también romper las reglas del juego” (Castellanos 1979: 274). Dio tres pasos: citó a Molina, a De la Corte y a Campetti a declarar en los tribunales; emitió una orden judicial que les prohibía a los italianos abandonar el país; y, lo que era más importante, le ordenó a la PTJ que le pasara la investigación del caso. Por su parte Molina, temeroso de perder el control del caso, reveló a los medios de comunicación la información sobre la implicación del juez Martínez en la extorsión a los funcionarios del Banco Latino. Al mismo tiempo, intensificó la “guerra psicológica”. Pocos días después, Martínez renunció. Más tarde explicó que lo que le preocupaba no eran los informes sobre su implicación en la extorsión al Banco Latino, sino las amenazas contra su esposa y sus hijos. Había descubierto frente a su casa un puesto de observación oculto de la PTJ desde donde se vigilaban y fotografiaban sus movimientos. Cuando trató de asumir el control efectivo del caso, las amenazas contra su familia se hicieron insoportables (1979: 42).



Piero de la Corte (con anteojos oscuros) y Renato Campetti (con anteojos claros) frente a la Policía Técnica Judicial. (Archivo *El Nacional*.)



Principales personalidades implicadas en el caso Carmona: David Morales Bello, socio de Carlos Andrés Pérez y prominente abogado (izquierda); Juan Martínez Echevarría, ministro de Justicia; y Manuel Molina Gásperi, director de la PTJ (centro). (Archivo *El Nacional*.)

Aunque los intentos del juez Martínez por seguir un curso de acción independiente solo duraron pocos días, sus acciones obligaron a Molina a violar la ley en un momento cuando la atención pública se centraba en él. A pesar de la orden judicial que les prohibía a los italianos abandonar Venezuela, el 10 de septiembre Molina los escoltó personalmente al aeropuerto y los ayudó a abordar un avión con rumbo a Italia. Como resultado de esta acción, el 12 de septiembre Molina fue destituido de la

jefatura de la PTJ. En opinión de De la Corte, Molina los llevó al aeropuerto porque previamente les había dado su palabra de que “podríamos abandonar el país si aparentábamos prestar declaración” (*El Universal*, 14/10/78). Para Gladys de Carmona, así como para todos los que creían que Molina era el único autor intelectual del asesinato, sus acciones probaban su culpabilidad. Por otra parte, para *Resumen*, el comportamiento errático de Molina con respecto a los italianos -su cambio de la actitud de “perseguidor” a la de “protector”- hacía pensar que Molina podía estar obedeciendo órdenes de “arriba” (3/12/1978). Pero es claro que su destitución -por violar una orden judicial, no por estar implicado en el asesinato-beneficiaba al presidente Pérez, quien estaba preocupado por el descenso de su popularidad a pocas semanas de las elecciones presidenciales de diciembre. Esa medida sacaba a Molina del centro del escenario y, por tanto, reducía las revelaciones públicas sobre los vínculos del Gobierno con el escándalo.

Los círculos del poder: las fuerzas de seguridad

Tras su destitución, a Molina de inmediato le ofrecieron empleo como director de seguridad y asesor legal del Grupo Cisneros, un importante conglomerado económico cuyo líder era uno de los “apóstoles” del presidente Pérez. El salario, según se informó, era de 30.000 bolívares mensuales (casi 7.000 dólares). Dados los vínculos entre Pérez y la familia Cisneros, esta oferta probablemente reflejaba un compromiso entre Pérez y Molina, o bien un intento de Pérez por apaciguarlo. En cualquiera de los dos casos, la oferta muestra que comportarse como un gángster -utilizar a la PTJ como instrumento de fuerza privado para obtener ganancias personales por medios violentos e ilegales- era permitido institucionalmente y recompensado políticamente.

Es obvio que los servicios de Molina se tenían en un alto aprecio y que resultaban socialmente aceptables. En su condición del más alto funcionario de la policía, había adquirido un íntimo conocimiento de los más exclusivos círculos de los negocios y la política. Esto podía resultarle muy útil a un grupo económico (la extorsión del juez Martínez a manos de Molina es sólo un ejemplo de ello). La oferta también permitía atisbar la compleja red de conexiones que unía al Estado y a los grupos económicos, y que incluía la asociación informal entre fuerzas de seguridad privadas y públicas. Los círculos interiores del poder se forjaban mediante este tipo de asociaciones. Esos círculos vinculaban a los más altos niveles del Estado y de la burguesía, sellaban su solidaridad en una red de complicidades, consolidaban su poder y creaban las condiciones para la fusión de la legalidad con la delincuencia y la criminalidad.

Presiones electorales

Como las encuestas electorales mostraban una disminución del apoyo a AD, Pérez decidió sumarse a la corriente de la opinión pública sobre el involucramiento de la PTJ en el asesinato. El 11 de octubre, el ministro de Justicia declaró a la prensa que el detective de la brigada GATO, Anoel Pacheco, había sido el asesino, y que el inspector de la brigada de la PTJ encargado de las personas desaparecidas, Gilberto Castillo, había actuado como encubridor. La gran pregunta -quién había sido el autor intelectual del asesinato- seguía sin respuesta oficial, pero en esta ocasión Echevarría declaró que los instigadores del crimen “serían detenidos y llevados a los tribunales tan pronto se sepa quiénes son” (*Resumen*, 14/12/ 1978).

Gladys de Carmona y sus abogados aceleraron el ritmo de trabajo. A fin de captar el máximo posible de la atención pública, el 4 de noviembre -cuando la mayoría del país miraba por televisión la pelea de un boxeador venezolano por la corona mundial- hicieron el dramático anuncio de que la PTJ de Molina Gásperi había sido la instigadora del asesinato de Carmona. Subrayaron que nadie de más nivel que Molina estaba implicado en el asesinato. Según lo que afirmaron, “la implicación delictuosa no traspasó los límites de la dirección del cuerpo, y el resto de la participación criminal en este caso debe buscarse de aquí para abajo” (*Resumen*, 24/ 12/1978).

El cuidado que se tomaron en no acusar a ningún superior de Molina parece extraño, en especial porque el caso contra éste no era completamente convincente. Su móvil aparente -la necesidad de defenderse de las acusaciones de extorsión- casi no había sido investigado. Mayra de Molina ni siquiera había sido acusada por su participación en la extorsión. Tampoco era claro por qué un hombre con el poder de Molina habría echado mano al asesinato para defenderse de las acusaciones de extorsión, supuestamente respaldadas por un documento firmado por un extranjero sin influencia reconocida en Venezuela como Piero de la Corte. Resulta razonable asumir que como jefe de la PTJ Molina no tenía que apelar al homicidio para bloquear las acusaciones en su contra. Por otra parte, se podía argumentar que Carmona era conocido por ser un abogado astuto y osado, y que resultaba lógico que los Molina trataran de evitar por todos los medios convertirse en el centro de un juicio políticamente sensible.

No obstante, la acusación focalizada contra Molina era el resultado lógico de la manera sospechosa como el director policial había manejado el caso Carmona. La separación entre la investigación del

asesinato y el caso de Playa Moreno significaba que móviles y sospechosos se habían excluido de la consideración. A esa luz, el esfuerzo por culpar solo a Molina parece haber tenido una motivación política. Entonces, el 25 de noviembre, sólo una semana antes de las elecciones presidenciales, Pérez declaró que creía que los medios de comunicación ya habían indicado quién había asesinado a Carmona. Esta declaración se interpretó como que el presidente había dejado de apoyar a Molina.

Molina habla: corrupción insondable

Con el tiempo, Molina se vio obligado a cumplir una sentencia de prisión por violar la orden judicial que les prohibía a Campetti y a De la Corte abandonar el país. Arrestado el 25 de octubre de 1978, mantuvo un cuidadoso silencio durante sus meses de cárcel. Su silencio no se interrumpió ni siquiera ante los informes de que existía un plan para matarlo en prisión y hacer que el asesinato pareciera un suicidio. En febrero de 1979 obtuvo la libertad condicional. Pero en el mismo momento en que parecía que regresaba a una posición de poder, el presidente Pérez declaró que seguía creyendo que la prensa ya había señalado quién había sido el autor intelectual del asesinato. Pocos días antes del fin del periodo presidencial, en marzo, se emitió una orden judicial de arresto contra Molina como “coautor material” del crimen. Pero Molina ya se había escondido. En una conferencia de prensa clandestina transmitida por radio el 7 de marzo, declaró que la orden judicial en su contra era resultado de las presiones ejercidas por el presidente, y que era “prisionero del presidente”. Después se las ingenió para huir del país. Una vez fuera de Venezuela se sintió libre para hablar, y le dio a un periodista extranjero nuevas informaciones, que redefinían la situación y acusaban del asesinato a Pérez.

La acusación de Molina era directa. Carmona no había sido asesinado por la GATO de la PTJ, sino por agentes de la Disip, la policía política del Gobierno. La Disip había planeado el asesinato y utilizado a un delincuente común, Oswaldo Farrera (Watusi), para que lo ejecutara. El móvil no era la extorsión. El crimen se había decidido “en el Palacio Presidencial, porque Carmona sabía demasiado”. Carmona no solo se había enterado de los tratos entre Campetti y Cecilia Matos en lo relativo a Playa Moreno, sino también de un escándalo mayor: “las fragatas militares, los seis barcos de guerra vendidos por Cantieri Navali Riuniti, de Riva Tigroso”. Esta transacción suponía “un negocio de más de 600 millones de dólares, que incluía un soborno de 60 millones, 40 de los cuales terminaron en los bolsillos de Cecilia Matos” (*Resumen*, 8/4/1979).

Investigaciones posteriores revelaron que era cierto que la compra de los barcos estaba plagada de irregularidades. Baste decir que se afirma que Campetti, haciendo uso de sus conexiones, fue el vínculo con los armadores italianos, y que los intermediarios locales de la transacción eran cercanos al presidente Pérez (los hermanos Di Mase y Alberto Aoun). El informe anual de la Contraloría General de la República muestra que el Gobierno pagó por los barcos 100 millones de dólares más que su precio de mercado. El doctor Muci Abraham, contralor general, declaró con posterioridad que había rechazado sobornos y evadido trampas de los empresarios involucrados en la transacción (prepararon un ardid por el cual parecía que estaba aceptando sobornos). Después de un corto tiempo en el cargo, lo reemplazó un hombre más cercano al presidente Pérez (*Resumen*, 24/6/1979).

El número del 25 de marzo de la revista italiana *L'Espresso*, que había publicado la entrevista con Molina, no circuló en Venezuela. *Resumen* informó que un diplomático venezolano en Roma había intentado sobornar al periodista para que no publicara el artículo. La implicación de ambos acontecimientos, según *Resumen*, era que el nuevo gobierno de Copei (desde marzo de 1979) podía haber decidido “encubrir los pecados del gobierno precedente” (15/4/1979). La interpretación es plausible, dada la estructura de solidaridad que unía a AD con Copei, basada en vínculos de complicidad y protección mutuas. Para otros, sin embargo, la acusación de Molina contra el presidente era una cortina de humo para desviar la atención de su persona⁷. Gladys de Carmona y sus abogados siguieron manteniendo que Molina era el único autor intelectual del asesinato.

¿Una sociedad de delincuentes? ¿Una sociedad de cómplices?

Cuando la complicidad de la PTJ quedó en evidencia, uno de los jueces a cargo del caso declaró que el homicidio de Carmona también había sido el de la PTJ como institución (*Resumen*, 17/12/1978). Pero se había producido una pérdida mayor. El caso Carmona se convirtió en un crisol para la definición social de las categorías políticas. Como ocurrió en medio de una violenta campaña electoral, sirvió para ubicar el debate público en torno de la naturaleza de la sociedad venezolana. La discusión se centró en la calidad de la vida política y el carácter del pueblo. Se presentó el caso como un espejo de Venezuela.

El elocuente sector social que construye de modo activo la imagen pública de la nación -los políticos, los intelectuales, los líderes del sector privado, los periodistas- concordaba en que se había producido

⁷ Molina murió en 1985 cuando volaba en un avión privado, accidente que aún no se ha esclarecido

un cambio de esa identidad. Coincidían ahora en que la visión comúnmente compartida de Venezuela como una sociedad normal y decente era mera apariencia, una fachada que ocultaba un vasto mundo subterráneo de corrupción, que no se restringía a un pequeño círculo. El caso Carmona se definió como un microcosmos de toda la nación. Al revelar el submundo de los poderosos y del propio sistema legal, el caso sirvió para cristalizar una concepción colectiva de la sociedad venezolana. La definición del Estado como el locus de la corrupción condujo a una proyección hacia el conjunto de la sociedad de las cualidades que se le atribuían.

En la época del ocaso del auge petrolero, el Estado se convirtió no solo en el *locus* de la lucha por los recursos, sino también de la frustración por la falta de progreso. Este centrarse en el Estado dio pie al sentimiento de que Venezuela era una nación de ladrones y “piratas”, una sociedad de delincuentes. Fue por esta razón que el asesinato de Carmona, en el cual el Estado estaba involucrado de manera tan íntima, se tomó como símbolo de otras muertes: de la muerte de la PTJ como institución, de la muerte de la legalidad y la decencia, de la muerte de las fuentes mismas de la moralidad y la sociabilidad en Venezuela. En su página editorial, poco antes de las elecciones presidenciales de 1978, *Resumen* se preguntaba:

¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Vivimos acaso en una sociedad delincuente? El caso del asesinato de Ramón Carmona mueve a esa reflexión. ¿Se trata de un accidente?, o es acaso sintomática de una sociedad que ha llegado al cenit de su purulencia y está empezando el fin característico de todas las sociedades delincuentes que se demoran solas? [El Gobierno] quiere que creamos que el caso Carmona es sólo un accidente humano, dentro de un cuadro institucional óptimo. Difícil nos resulta comulgar con esa rueda de molino, pues Molina no es ni el primero ni el único. Y eso también lo sabemos todos. Su delito consiste en haber llevado su codicia y su embriaguez de poder a extremos imposibles de aceptar por la sociedad delincuente. Pero este extremo no perdona ni minimiza a la horda de especuladores, de extorsionadores, de abusadores del poder, que son el tuétano de los huesos de la sociedad delincuente en la cual vivimos (19/11/1978).

La opinión de los críticos de izquierda era similar. Para Domingo Alberto Rangel y Pedro Duno, el caso Carmona es “una especie de espejo donde una sociedad... tiene que contemplar su verdadero rostro”. Afirmaban que “todos los males de nuestra vida pública desfilaron por el escenario de las causas del delito que rompería la existencia de Ramón Carmona ... Una sociedad deforme y pacata, que oculta sus taras para no perturbar la digestión del petróleo, apareció en su espeluznante desnudez” (Carmona 1979: 8).

La corrupción como indigestión de petróleo

La percepción del petróleo como causa de la corrupción venezolana se generalizó en este periodo. Se lo consideraba como una sustancia tóxica, cuyo consumo excesivo amenazaba la salud de la nación, de sus instituciones y de su pueblo. La absorción de cantidades masivas de petrodólares -en apariencia la más importante transformación que sufría el petróleo después de su extracción, y la forma principal como se manifestaba en la sociedad- constituía una amenaza para el cuerpo político, cuyo sistema digestivo era agredido y no funcionaba bien. Se creía que toda la sociedad estaba resquebrajándose ante la embestida de la fuerza corrosiva de las toxinas, la basura y el excremento acumulados. Durante este periodo la metáfora digestiva se convirtió en la imagen central para expresar el impacto de los petrodólares en el cuerpo social. Su uso y su elaboración repetidos manifestaron el predominio social de relaciones de consumo, y la falta de control sobre ellas. Ya en 1978 existía un sentimiento creciente de que el auge petrolero solamente había expandido en apariencia los poderes sociales, al aumentar la capacidad de consumir, y que en realidad había disminuido el control social, al socavar los nexos sociales y reemplazar la sociabilidad por la delincuencia.

El petróleo se conceptualizaba principalmente como una forma de dinero. Resulta paradójico que en un momento en el cual el petróleo como sustancia material estaba siendo, por tanto, más socializado -despojando de su materialidad natural y transformado apenas en otra palabra para designar al dinero- en tanto dinero se renaturalizaba, al asignarle poderes naturales y tratarlo como fuerza externa. Esta concepción hizo converger y confundir poderes atribuidos al dinero, a los cargos políticos y a la naturaleza. Con el deterioro de las condiciones, el petróleo llegó a ser el símbolo de fuerzas incontrolables. Condensaba asociaciones comunes entre el petróleo visto como el interior oscuro de la naturaleza y como el lubricante viscoso de todas las transacciones que se producían en la sociedad venezolana, y concepciones del dinero como fuerza corruptora, esto es, lo que Smmel denominara en una ocasión “la total falta de sentimientos del dinero” (“the complete heartlessness of money”). El petróleo, considerado como un poder negativo, llegó a verse como una fuerza del mal, “el excremento del diablo”. En 1975, Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP, escribió un libro visionario, *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Ya en 1978 esta frase se había convertido en una expresión común para referirse al petróleo. Se empleaba a menudo para respaldar el punto de vista, manifestado con más fuerza por Pérez Alfonzo, de que había erosionado a la sociedad venezolana al

convertirla, como temiera Uslar Pietri en 1936, en un parásito de la naturaleza. Los venezolanos habían estimado que el oscuro líquido que obsequiaba la naturaleza era un regalo de Dios, pero había resultado ser el excremento del diablo.

De ahí que la metáfora sobre la digestión llegara a ser expresiva de las relaciones existentes entre la sociedad y la naturaleza, entendidas como relaciones entre la sociedad y las fuerzas morales. La nación se alimentaba de una excreción ajena; había tomado por alimentos nutritivos lo que en realidad eran desechos dañinos. Por tanto, la indigestión era un síntoma de la enfermedad moral de una sociedad que había invertido las relaciones entre producción y consumo, que ya no podía distinguir entre los alimentos y los desechos, entre el bien y el mal. Venezuela había perdido el control sobre sí misma: intoxicada por los desechos que eran el petróleo, ella misma se había convertido en un desecho. La identificación de la nación y de los individuos con el excremento se hizo más y más común como explicación abreviada de los problemas cotidianos. En las conversaciones surgían aquí y allá frases como “somos una mierda”, o “es que este es un país de mierda”.

Dinero sin sentimientos

La visión del petróleo como fuerza independiente, como disolvente de la moralidad en Venezuela, recorre una versión novelada del caso Carmona escrita en este periodo. *Relajo con energía*, una noveleta redactada a toda prisa, permite atisbar la manera como se representó y experimentó el asesinato de Carmona. La narración está construida en torno de un grupo de personajes involucrados en el asesinato. Mediante un amplio uso del monólogo y el diálogo, se presenta al lector la subjetividad imaginada y el habla privada de personajes a los cuales se conoce sólo a través de los medios de comunicación. El objeto de muchas especulaciones acerca del funcionamiento interno del poder se presenta aquí como hechos, y se representa e interpreta en los términos de percepciones muy compartidas. Es obvio que buena parte de las fuentes de la novela son los rumores y chismes políticos. El mejor recuento periodístico del caso Carmona apunta que la República del Este era el lugar al cual acudir para averiguar sobre el caso Carmona (Castellanos 1979: 23). El autor de la novela, Argenis Rodríguez, era un ciudadano permanente de esa tertulia.

En esta versión novelada, el presidente Pérez presenta al petróleo como la fuerza definitoria en una sociedad cuya población y líderes son demasiado atrasados o corruptos para controlarla:

Venezuela no es un país con moral. O mística. O religión. Venezuela no es Irán. Venezuela es un pobre país con cerca de un millón de kilómetros cuadrados, con un ejército a lo americano -pobre y reconstituido con campesinos analfabetas. Venezuela vive del petróleo y todo eso va a dar a mis manos (Rodríguez, cit. en *Resumen*, 5/2/1980: 62).

El ministro de Fomento expone en la novela su versión de la “ideología del desarrollo” del presidente:

Nuestro sistema es el de dejar hacer, se decía. No podemos detener el desarrollo de un país. El desarrollo de un país como el nuestro está en la especulación y nuestra función es promover la especulación en todos los terrenos. Nuestro país se hará fuerte con el robo a la administración pública. Nuestro Estado es rico y la mejor manera de distribuir bien el dinero es dejando hacer (ibíd. 53-54).

Un congresista joven y ambicioso exalta el poder independiente del dinero:

Un culo se mueve por dinero. Una mujer se mueve por dinero. Un partido se mueve con dinero. Y uno sale de la nada por el dinero que pueda conseguir. Un buen militante no es aquel que sabe de historia sino aquel que sabe sacar plata donde hay y donde no hay (ibíd. 77).

La concepción del dinero como fuerza independiente y del poder como manipulación sirve de estructura a un capítulo titulado “Del diario secreto del ministro del Interior”, en donde el ministro expresa sus pensamientos acerca del caso Carmona y brinda una interpretación cínica de lo sucedido. En el monólogo que sigue, Cardona es Carmona y Sierpe es Molina:

En estos cinco años de CAP esto que llamamos democracia lo hemos llevado al precipicio. Y es una fortuna que los militares no hayan actuado. ¿Por qué? Nadie se explica. En el partido no nos lo explicamos. Los sociocristianos no se lo explican. Los mismos americanos no se lo explican. Algo raro pasa en Venezuela. La explicación puede ser muy sencilla: hay dinero y todo el mundo anda armado. Un muchacho de 12 años puede conseguir una pistola y asaltar a cualquier transeúnte. Y de hecho lo sabe y sucesos como éste los hay por miles cada día. No hay quien no haya sido asaltado. Y nuestra sociedad, en el vacío más absoluto, tolera más de 3.000 amenazas de muerte por teléfono. Al día, sí señor, al día. Teníamos controlado el teléfono de Cardona. Sí, sabíamos que no era un angelito. Que puteaba aquí y allí. Que se cogía a una Mendoza. Que se divorciaba a espaldas de su mujer. Sí, lo teníamos controlado. Pero al mismo tiempo controlábamos a nuestro amigo Sierpe, nuestro policía mayor. Y sabíamos que nuestro jefe de policía, junto con su mujer, que es abogado, quería sacarle un millón de bolívares a un cliente de Cardona. ¿Y qué hicimos? Cruzarnos de brazos y dejar que Sierpe ordenara el secuestro de Cardona. ¿Qué hacía Cardona? Nada. Insulseces. Amenazar con una rueda de prensa y declarar que el jefe de la policía era el jefe de los bandidos. ¿Acaso no lo sabíamos nosotros? Y no hicimos nada porque no quisimos hacer nada. Nos divertía la función y queríamos saber hasta dónde llegarían por el botín. Porque Cardona le pidió una audiencia al presidente, y el presidente, que estaba enterado del enredo, ni siquiera le contestó. Hasta que llegó la hora fatal. Una hora muy mala por cierto. Las dos y media de la tarde. La hora del burro. La hora en que uno duerme a causa del whisky. O del vino malo que nos mandan de Chile. O de la comilona

que nos tragamos en la casa de Gorrondona (o Gonorraea) que se llevaba todo un banco del Estado hacia los Estados Unidos. Lo premiamos por eso. Porque nuestro sistema se ha caracterizado por premiar a los que sí roban de verdad. Al raterito es al que jodemos. Por güevón (ibíd. 85-86).

Argenis Rodríguez ha dicho que escribió la novela con intención crítica. La dedicó a su hijo para que “nunca pensara en imitar a los personajes que aparecen en el libro o en seguir su ejemplo” (*Resumen*, 5/2/1980). En su título, *Relajo con energía*, hace referencia directa a una de las consignas electorales de Pérez en 1973: “Democracia con energía”. Rodríguez ha dicho que escogió ese título porque,

este es el lenguaje que entiende la gente en Venezuela. Aquí todo el mundo sabe lo que significa el relajo: “flojera”, “desorden”, “corrupción”. Y también sabemos lo que significa “energía”. Sabemos lo que es energía a través de otras fuerzas que no son sociales sino técnicas. Pero el hombre que quiso un día ofrecernos democracia con energía no pudo darnos ni lo uno ni lo otro. No logramos tener ni democracia ni energía. Lo que tuvimos fue un desorden, un incontrolable y enérgico desorden (*Resumen*, 3/2/1980).

El subtítulo de la obra también es revelador: “Breve relación de la destrucción de un país”. Alude al relato de la Conquista hecho por Bartolomé de las Casas. De la misma forma que para los conquistadores españoles América era un territorio a saquear, para los venezolanos contemporáneos su país se ha convertido en objeto de pillaje. ¿Cuán representativas son las opiniones de Rodríguez? Una reseña de su obra termina con las siguientes palabras:

¿Es este un libro pesimista, derrotista? Cada lector decidirá, pero nosotros, antes de resolver este problemita, juzgamos interesante señalar que las crudas realidades descritas en este libro corresponden, desgraciadamente, a la realidad. La historia contemporánea de Venezuela tiene un protagonista supremo, uno que se destaca sobre todos los demás. No es el desarrollo o el subdesarrollo. No es la riqueza o la pobreza. No es la justicia o la injusticia social. Es, sin atenuantes, la corrupción (*Resumen*, 3/2/1980).

Como en su obra previa, Rodríguez reduce a Venezuela a un espectáculo sórdido. No deja ningún espacio libre de corrupción, no apunta a ninguna zona de resistencia. Su impacto más general consiste en representar el Estado como una pandilla de delincuentes y proyectar esa imagen sobre el conjunto de la nación.

Escándalos explosivos, *business as usual*

Ya en 1978 el público comenzaba a percatarse de que los petrodólares de la nación se habían malgastado. La consigna más efectiva de la campaña electoral fue la de “¿Dónde están los reales?”, enarbolada por Copei. El caso Carmona ofreció parte de la respuesta: la corrupción, en una miríada de formas, había crecido hasta igualar las dimensiones de los acrecentados ingresos del Estado. La conciencia de que la bonanza no era eterna solo sirvió para acelerar la velocidad con la que se lanzaba el dinero público a la circulación para ser apropiado de forma privada. Debido a sus ramificaciones, el caso Carmona fue una de las causas inmediatas de la derrota electoral de AD en las elecciones de 1978 (Blank 1984: 215).

Que el episodio fuera importante no significaba que se resolviera. Ya en diciembre de 1978, Resumen planteaba que el caso Carmona nunca se aclararía. Sacaba esta conclusión a partir de la manera como se había manejado y presentado al público:

Como tal, como caso de Derecho, está más muerto que Ramón Carmona. La relación de causa a efecto está a 1.000 leguas de distancia el uno y el otro. Y mientras eso sucede, una viuda acosada, unos abogados que se desviven por flashes de la prensa, pero que no disponen más que de unos magros instrumentos de investigación, no miden la distancia que hay entre su optimismo y la debilidad de su caso y de los instrumentos que tendrían para llevarlo a feliz término. Mientras esta es la situación, la situación real, no la imaginaria del público que cree que ya a Molina se le condenó y la justicia se hizo, el secretario Lauría y el ministro Mantilla visitan a la viuda. Hacen protestas de seriedad, de energía, de decisión, de “cueste lo que cueste, aquí se hace justicia” y ganan lo único que les importa: tiempo. No solamente hasta las elecciones, para que el “caso” no lesione más de la cuenta a un candidato que luego les puede ajustar a ellos las cuentas. Sino para llegar a esos días alucinantes, en los cuales el país entero entra en el mundo imaginario de los arbolitos de navidad canadienses, los turrónes españoles, los vinos chilenos, los panetones isleños y las hallacas multisápidas. Después de eso... bueno, ya se le entrega este paquete al nuevo gobierno y “chi vediamo dopo, caro amico” (nos vemos luego, querido amigo) (3/ 12/1978).

Las circunstancias políticas que condujeron a las excepcionales revelaciones públicas del caso Carmona desaparecieron después. Otros escándalos estallaron y captaron el interés del público en diversos grados. A pesar de sus diferencias, cada uno de estos episodios recorrió un ciclo similar de implicación del público, disminución del interés y olvido final. Desde el establecimiento del régimen democrático en 1958, los escándalos públicos -la experiencia misma de cada escándalo y la de su sucesión, como si se tratara de uno más en una serie aparentemente infinita- daban pie a un sentimiento de agitación y cambio. A pesar de los escándalos, los casos de corrupción no se

resolvieron. De ahí que ese sentimiento fuera superficial y desproporcionado en relación con la más profunda y envolvente presencia de una realidad familiar que no solo parecía inmodificada, sino también inmodificable.

Incluso cuando su culpa salía a la luz en un escándalo, los poderosos rara vez terminaban en la cárcel. Seguían siendo ricos y poderosos, y eran más admirados por haber logrado mantener su posición pese a los ataques sufridos. Un periodista, al comentar sobre el caso Carmona, expresaba un punto de vista compartido: “En Venezuela van a la cárcel los pendejos y los limpios. Los *vivos nunca*” (Castellanos 1979: 98). La inmunidad de los poderosos resulta inexplicable si no se entiende el papel que han desempeñado las rentas petroleras en el establecimiento de un patrón particular de solidaridad en el seno de la clase dominante. Esta clase se define a sí misma como el custodio y administrador del principal recurso de la nación. Es claro que en el interior de la clase se ha producido una intensa competencia por la supremacía; la brecha entre políticos y empresarios era significativa. Pero el papel común desempeñado ha contribuido a reducir las diferencias entre sus miembros. La competencia entre ellos suponía una alianza básica para preservar las condiciones que hacían posible la competencia.

La forma de la competencia podía variar. El auge petrolero aumentó la significación de las transacciones ilegales en la lucha por los fondos del Estado. Ya en 1978, la indignación pública por la explosiva ampliación de la corrupción, aunque era también manipulada como elemento de la competencia, reflejaba la necesidad de redefinir las reglas del juego. Pero según una regla implícita, las diferencias internas en el seno de esta clase debían resolverse de manera informal, si no como entre amigos, al menos como entre socios. Esta sociedad tenía como premisa el acceso privilegiado de la clase a los recursos públicos. El crónico desvanecimiento de los límites que separaban el uso correcto y el uso incorrecto de este privilegio eran tanto una condición de la existencia de esta clase como una expresión de su poder.

Al moldear la forma de la competencia entre sus miembros, el dinero proveniente del petróleo funcionaba no solo como el cemento de las relaciones de poder existentes, sino también como el disolvente de cualquier esfuerzo por socavarlas. En cualquier lugar del mundo, la solidaridad estructural de una clase social se puede ver complementada por lazos de complicidad. Pero en Venezuela, en ausencia de formas más básicas de interdependencia social, el dinero de las rentas permitió que los lazos de complicidad constituyeran una forma estructural de la solidaridad de clase. A esta luz resulta comprensible por qué el caso Carmona, como la mayoría de los escándalos, no

podiera resolverse de manera satisfactoria. El objeto no era lograr que se hiciera justicia o determinar qué era lo que realmente había sucedido. Los escándalos eran expresión de una lucha de poder cuyo fin era recomponer una violación de las reglas o un desequilibrio específico por medios informales. Se movilizaba a la opinión pública para realinear las fuerzas en el seno de la clase dominante, no para alcanzar un resultado legal concluyente. Los lazos de reciprocidad existentes, contruidos en torno de una compleja red de complicidad, servían como contención contra la formalización de la resolución de los conflictos mediante el sistema legal. El escándalo transformaba un caso en espectáculo. El espectáculo no producía los resultados de obligatorio cumplimiento que producen las decisiones legales, sino una representación, la ilusión de que había resultados.

Pero por supuesto que los había. Las relaciones de poder existentes no se transformaban, pero se reproducían y reordenaban constantemente. Estos cambios a menudo se presentaban como transformaciones fundamentales, pero su significación real permanecía oculta. La vida política se vivía de momento en momento. Las excepciones a la regla eran la regla. El ejercicio del poder sobre la base de esta manera fluida de construir la realidad social, convertía en estructural lo contingente.

Conclusión: la forma de la informalidad

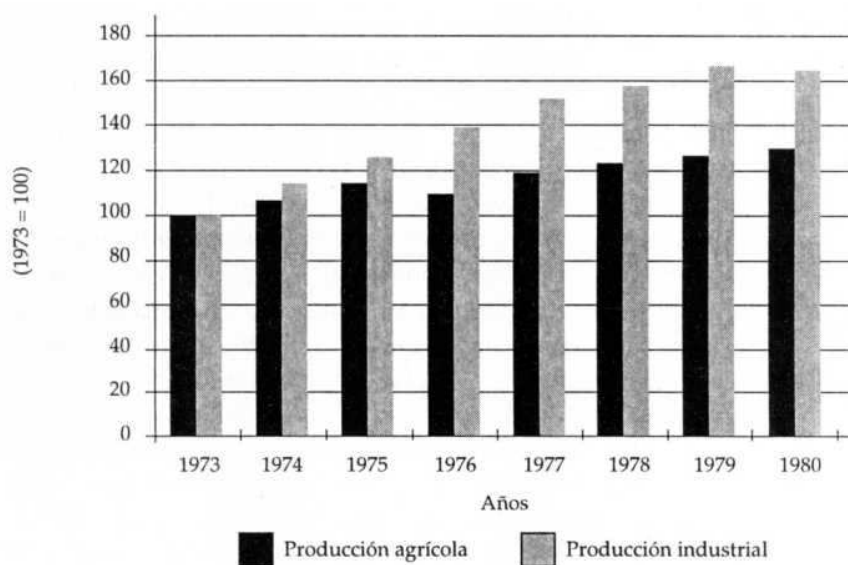
A diferencia de los asesinatos de la ficción, los reales no siempre dejan detrás la pista que puede ayudar a desentrañar su misterio y descubrir a sus autores. En este caso es probable que nunca sepamos si a Carmona lo mató Molina Gásperi o el presidente Pérez, si fue con el concurso de la PTJ o de la Disip, o incluso si lo hizo Pérez por intermedio de Molina. Pero lo significativo es que estas distintas alternativas se creyeron plausibles. Mi intención ha sido establecer su inteligibilidad, no si son ciertas o no, a fin de comprender no solo las condiciones sociales que hicieron posible el asesinato, sino también la forma particular que este adoptó y la manera como se representó socialmente. Si he analizado el asesinato como parte de un sistema de relaciones sociales es porque sólo a través del asesinato ese sistema emergió a la vista del público. Al sacar a la luz una realidad normalmente oculta, el homicidio se convirtió en la condición de su análisis. Y este, según creo, encarnó la violación de un código y la expresión de un código alternativo. Durante el auge petrolero, la delincuencia pretendió ser una forma normal de sociabilidad. Sus ideales salieron a la luz. Sus héroes abandonaron el mundo de la clandestinidad y desfilaron con orgullo por los espacios públicos: hicieron tratos en restaurantes, alardearon de sus logros en clubes privados, exhibieron su botín en

todas partes, buscaron la compañía de los notables de la sociedad.

En el ocaso del auge petrolero, el giro en la definición del comportamiento ideal en el reino económico estuvo acompañado por un giro en la definición normativa del comportamiento político. Igual que el ideal del *bourgeois conquerant* cedió frente al del comerciante o especulador astuto, la idea del ciudadano responsable palideció ante la del individuo independiente, la de la persona libre de las limitaciones sociales. Para ser alguien, había que ser listo, osado y rico; y para ser rico, había que tener el poder para mantenerse fuera de la ley y por encima de las restricciones sociales.

Aunque se trataba más bien de cuestión de énfasis que de diferencias agudas, estos giros en los patrones normativos se hicieron significativos en la conducción y representación de la vida social. Al proyectar esos patrones en la arena pública, la lucha política en torno del caso Carmona magnificó sus diferencias y exageró su oposición. Pero el contraste expresado mediante las imágenes que oponían a ciudadanos y gánsteres, empresarios y piratas, trabajo y pillaje, salud y envenenamiento se correspondían con la tensión fundamental que le daba un carácter distintivo a la sociedad venezolana: el conflicto entre el carácter público del dinero proveniente del petróleo y la naturaleza privada de su apropiación. Subyacía a las luchas por el ascenso social la concepción del petróleo como una riqueza colectiva lista para usar, cuya apropiación privada solo se justificaba si promovía el bienestar colectivo. Pero como oro negro, el petróleo era fuente de poder para los individuos que lo poseían, y transformaba, en virtud de su poder para conferir poder, la naturaleza del poder en la sociedad y la capacidad humana para definir colectivamente lo posible y lo deseable.

Gráfico 4
Producción agrícola e industrial, 1973-1980



Fuente: Baptista 1961: 126.

— Cuadro 18 —

Empleo, 1973-1980

Año	Población total	Económicamente activa	Empleados	Tasa de desempleados	% Desempleo
1973	11.748.395	3.673.778	3.468.418	205.360	5,59
1974	12.117.759	3.813.613	3.540.611	273.001	7,16
1975	12.522.721	3.966.121	3.709.534	256.587	6,47
1976	12.934.310	4.118.658	3.871.689	246.969	6,00
1977	13.341.371	4.275.765	4.072.699	203.066	4,75
1978	13.779.195	4.440.179	4.235.242	204.937	4,62
1979	14.237.753	4.605.261	4.357.919	247.342	5,37
1980	14.703.316	4.818.012	4.534.098	283.914	5,89

Fuente: Baptista 1991: 263.

Cuadro 19
Participación del petróleo en las exportaciones totales, 1973-1980
(en millones de bolívares, base 1984)

Año	Exportaciones totales	Exportaciones petroleras (no rentistas)	Exportaciones no petroleras	% del petróleo en las exportaciones totales
1973	26.857,1	20.109,9	6.747,2	75
1974	34.535,2	23.893,4	10.641,8	69
1975	29.582,7	21.887,4	7.695,3	74
1976	31.531,4	23.687,9	7.843,5	75
1977	29.611,3	23.116,8	6.494,5	78
1978	29.828,6	23.031,7	6.796,9	77
1979	38.605,2	28.521,8	10.083,4	74
1980	41.116,8	28.964,5	12.152,3	70

Fuente: Baptista 1991: 119.

Cuadro 20
Evaluación del ingreso proveniente del petróleo, 1973-1980
(en millones de bolívares, base 1968)

Año	Beneficios petroleros	Valor de la producción rentistas	Valor de la producción petrolera	Participación fiscal en petrolera no rentística	Beneficios reportados ^a beneficios	Beneficios sin renta ^b petroleros
1945	406	1.060	654	458	275	211
1973	13.459	19.980	6.521	13.037	2.665	2.055
1974	37.422	46.563	9.141	39.720	2.286	3.435
1975	27.806	37.966	10.160	29.858	1.815	3.479
1976	28.038	39.257	11.219	29.328	3.761	4.395
1977	30.188	41.724	11.536	26.991	7.805	4.622
1978	26.408	40.028	13.620	25.731	6.221	5.139
1979	43.789	62.435	18.646	39.618	12.480	8.117
1980	59.651	83.664	24.013	56.026	14.813	9.709

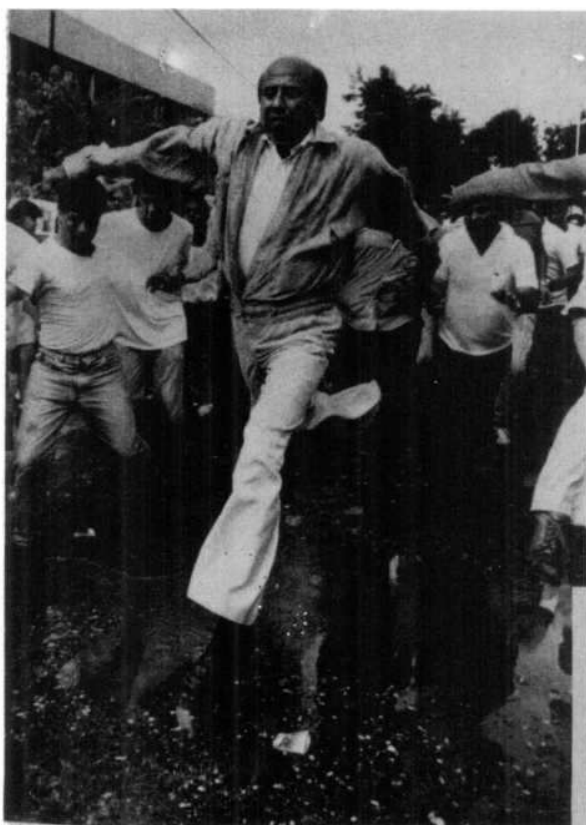
Fuente: Baptista 1991: 145.

Nota: Los títulos de cada columna han sido modificados por el autor, previa consulta con Baptista. a) Ganancias informadas por las compañías petroleras; b) rentabilidad del capital petrolero en Venezuela tras el pago de impuestos (sobre la base de la tasa de retomo estadounidense del sector petrolero).

Cuarta parte

Secuela

Oro negro: fetichismo del dinero y modernidad



Carlos Andrés Pérez, “el hombre que camina” durante la campaña presidencial de 1988.

(Archivo *Últimas Noticias*.)



27 de febrero de 1989, Caracas. (Archivo El Nacional. Foto: José Cohén.)

9. Cosechando el petróleo: la tormenta del progreso

En mi vida he demostrado que la riqueza material no me atrae.

A mí lo que sí me atrae es la historia.

Carlos Andrés Pérez¹

Entrevistador: *¿Cómo quiere ser recordado por la Historia?*

Carlos Andrés Pérez: *Como lo que fui, como un hombre que dedicó su vida -y yo tengo más de 50 años en la política- a la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela y en la América, y que logró impulsar la modernización de Venezuela.*²

El mito del progreso

La búsqueda de la modernidad en Venezuela, presentada por el discurso oficial como un objetivo nacional de parecerse a los centros metropolitanos, fue el sentido legitimador de la política y de las políticas durante la mayor parte del siglo. A pesar de los limitados logros y los persistentes fracasos, existía la creencia generalizada de que el país había progresado gradualmente hacia este objetivo a partir del restablecimiento de la democracia en 1958. Es por esta razón que Venezuela ha estado bastante ausente de los estudios internacionales sobre la América Latina, que han centrado su atención en naciones con historias más convulsas, signadas por revoluciones, oscilaciones económicas y severas dictaduras, y, más recientemente, por la transición del autoritarismo a la democracia. Tratada como excepción, se citaba a Venezuela como modelo de una transición exitosa, o como poseedora de una democracia “consolidada”. En uno de los libros que abordan el cambio de estatus de Venezuela, los editores apuntan: “Venezuela era tan excepcional, era en tal medida el modelo de una democracia socialmente conciente, que se le prestó poca atención. A los periodistas, científicos sociales y políticos extranjeros, Venezuela les parecía predecible, y de ahí ese escaso interés” (Goodman et al. 1995: 4).

El mito de Venezuela como nación democrática y rica que avanzaba gradualmente hacia la modernidad se mantuvo hasta los años 90, pese a los problemas que se habían evidenciado en 1978.

¹He tomado esta cita de un disco compacto titulado *No me perdonan*, producido por Alonso Toro, joven músico venezolano cuyas imaginativas composiciones musicales incorporan fragmentos de discursos políticos con una estructura rítmica cuyo fin es parodiar el papel de la repetición en la vida política. El título está tomado de un discurso de Pérez donde repetía que sus enemigos políticos no le perdonaban haber sido el único político venezolano electo dos veces presidente, transformando las críticas a su gobierno en expresiones de envidia.

² Entrevista, 21 de octubre de 1994. Visité a Pérez en su hogar, donde guardaba prisión domiciliaria tras ser depuesto por corrupción.

No solo fueron necesarias devaluaciones de la moneda, un prolongado deterioro de los niveles de vida y varios motines populares masivos que culminaron con la masacre de 400 personas en 1989, sino también dos golpes de Estado abortados en 1992 para reducir a añicos lo que Cabrujas ha llamado el “mito del progreso”. La elite política intentó silenciar la crítica a su giro económico e ideológico, y definir los motines y la protesta popular como la expresión de corrientes anárquicas en el seno de una población poco acostumbrada a una economía racional y a realizar sacrificios en bien de la nación (Coronil y Skurski 1991; Coronil 2000). Por el contrario, los intentos de golpe de Estado de 1992 produjeron en la cúpula una sensación de inestabilidad, socavaron la seguridad en sí misma de la elite y pusieron en solfa la opinión internacional y política prevaleciente sobre Venezuela.

El quiebre de las percepciones predominantes sobre Venezuela abrió espacio a opiniones que antes habían sido marginadas, pero que ahora sonaban a revelaciones. Desde allí fue posible decir que los golpes “revelaban, para que todos lo pudieran ver, que el país sufría muchos problemas graves y que su sistema político 'modelo' era terriblemente disfuncional”. El reconocimiento de que Venezuela “sufría de los problemas políticos, económicos y sociales comunes a la mayoría de los países de la América Latina” condujo al “fin del excepcionalismo venezolano” (Goodman et al. 1993:5-6; v. tb. Levine 1994). Desde esta nueva perspectiva, lo que antes se había celebrado como un Estado democrático modelo, un sistema dinámico de partidos y una economía que crecía, se describe ahora como un Estado congestionado, dominado por elites cerradas (una “cogollocracia”)³, un sistema clientelar de partidos (“partidocracia”)⁴, y un mercado protegido que engendró oligopolios parásitos (v. Goodman et al. 1995; McCoy et al. 1995).

Estas visiones polares subrayan la necesidad de prestar atención a las continuidades entre el pasado supuestamente excepcional y su presente, descrito como típicamente latinoamericano. El reconocimiento de esas continuidades hará más fácil entender cómo la excepcional riqueza financiera de Venezuela permitió que el Estado pusiera en práctica deslumbrantes planes de desarrollo que ocultaron estructuras típicas de otros países latinoamericanos. Como en una casa de espejos, Venezuela en tanto nación rica y moderna no solo reflejaba una extraordinaria fisonomía, sino también una anatomía típicamente deformada. Como el proyecto de desarrollo tenía como premisa la proyección de este mito excepcionalista sobre el país mismo, lo que se ha derrumbado es el mito.

³ El cogollo es la parte superior de la planta de la caña de azúcar y el corazón de las plantas de jardín; se usa metafóricamente para designar a la elite.

⁴ Muchos estudios venezolanos han analizado, desde tiempo atrás, los aspectos elitistas y desmovilizadores del sistema político (p. ej., Malavé Mata 1987). Algunos estudiosos estadounidenses también han señalado el carácter limitado de la democracia venezolana. Para una síntesis lúcida de la historia contemporánea de Venezuela que subraya este aspecto, v. Hellinger (1991); para una interpretación cuidadosamente documentada de la estructura elitista de los partidos en Venezuela, v. Coppedge (1994).

Comencé mi análisis en este libro con una cita de José Ignacio Cabrujas donde afirmaba que “la riqueza petrolera tiene la fuerza de un mito”. La riqueza petrolera transfiguró a los políticos en magos que encarnaban el mito del progreso y le daban forma específica. Carlos Andrés Pérez, presidente durante el auge petrolero de 1974, encarnó este mito como ningún otro en la historia venezolana y lo transformó, según palabras de Cabrujas, en una “alucinación”. Resulta irónico que una década más tarde, durante su segunda presidencia (1989-1993), Pérez contribuyera a hacer añicos el mito del progreso al descalificar el pasado protegido por el petróleo como una fantasía irracional y volverse hacia el mercado libre como el medio racional para alcanzar el progreso.

El mito persistente

Los sucesores de Pérez, Luis Herrera Campíns, de Copei (1979-1984), y Jaime Lusinchi, de AD (1984-1989), siguieron actuando como encarnaciones del mito del progreso en condiciones en las cuales era cada vez más difícil hacerlo. Mediante el uso de recursos financieros obtenidos a partir del brusco incremento de los precios petroleros en 1979 y de continuados préstamos extranjeros, trataron de perpetuar el sistema político existente, al tiempo que hacían algunos ajustes a fin de obtener más divisas. Cortejando tanto a los sectores populares como a los acreedores extranjeros, preservaron la centralidad política y económica del Estado mediante la canalización de recursos públicos hacia intereses privados a los que favorecían; la desmovilización de la población mediante el paternalismo, la publicidad y la represión; una mayor concentración de la riqueza en la cúpula; y el traspaso del peso de la deuda a los hombros de la población trabajadora de las generaciones venideras.

No obstante, la creciente deuda externa y el deterioro de la economía debilitaron el papel del Estado en los años 80. Los préstamos extranjeros, iniciados durante el gobierno de Pérez, se incrementaron vertiginosamente. Durante el gobierno de Herrera Campíns la deuda pública externa de Venezuela aumentó de alrededor de 9.000 millones a cerca de 24.000 millones de dólares. El fracaso en el intento de obtener financiamiento para consolidar las deudas signó la pérdida de crédito internacional. Los esfuerzos encaminados a activar la economía, como la devaluación en 1983, no lograron inducir un aumento de la productividad, porque estaban acompañados por subsidios a importaciones “esenciales” para las industrias protegidas. Como resultado de la incapacidad del Estado para fomentar la expansión de la economía, los empresarios locales perdieron confianza en el mercado local. En este contexto, los beneficios logrados mediante el proteccionismo se reorientaron

de la economía interna hacia una creciente fuga de capitales.

Durante el mandato de Lusinchi el mito del progreso se topó con sus límites. El Gobierno trató de ganarse a ciertos sectores locales mediante el mantenimiento de una versión modificada del sistema proteccionista y distribuidor que había heredado, pero también respondió a las presiones internacionales con la puesta en práctica de algunas de las medidas de estabilización del Fondo Monetario Internacional. Al igual que en países gobernados por regímenes militares, estas medidas condujeron a una caída en los salarios reales y en los niveles de consumo (McCoy 1989). Pero la elite venezolana podía beneficiarse de un sistema diseñado para suministrar dólares a una tasa de cambio preferencial para ciertas importaciones (la Oficina de Régimen de Cambio Diferencial, Recadi). Como canal para la masiva apropiación ilícita de fondos estatales, este sistema se tornó “en términos monetarios, probablemente en el mayor de la historia del país” (Perdomo 1995: 331). Lusinchi, heredero de una tradición que consideraba el endeudamiento como un signo del pasado atrasado de Venezuela (recuérdese que el general Gómez había pagado la deuda externa de Venezuela en 1930, aunque ese gesto no tenía sentido desde un punto de vista económico), se comprometió a pagar la deuda “hasta el último centavo”, como juró en su discurso de toma de posesión. Durante su gobierno el servicio de la deuda alcanzó la cifra de 30.000 millones de dólares y consumió casi 50% de las divisas del país, pero el capital se redujo sólo de 35.000 a 32.000 millones de dólares. La deuda real, aunque en buena medida permaneció invisible hasta la siguiente gestión, fue aún mayor, porque la “deuda flotante” (préstamos a corto plazo no aprobados o no registrados oficialmente, obtenidos por agencias del Estado) aumentaron el monto total a cerca de 43.000 millones de dólares (Karl 1995). Lusinchi siguió gastando en un último esfuerzo supremo de munificencia estatal hasta que, como descubriría Pérez, las reservas nacionales prácticamente se agotaron (200 millones de dólares). Cuando Pérez tomó posesión de su segunda presidencia -con un Estado sin crédito internacional para enfrentar sus crecientes obligaciones externas e internas- tuvo que emplear más de la mitad de los ingresos anuales en divisas del Estado (más de 5.000 millones de dólares) en pagar a los acreedores. La posibilidad de financiar el mito del progreso había llegado a su fin.



Carlos Andrés Pérez en “La Ahumada”, su residencia, bajo arresto domiciliario, en agosto de 1994. (Fundación Andrés Mata. Foto: Luis R. Bisbal.)

El nuevo mito de Pérez: el Gran Viraje

Como si siguiera un guión escrito por Cabrujas, quien había dicho que un candidato presidencial venezolano “que no nos prometa el paraíso” sería suicida, porque “el Estado no tiene nada que ver con nuestra realidad” (1987:17), la campaña presidencial de 1988 se desarrolló como si nada hubiera cambiado en la última década. Pérez hizo campaña a lo largo del país sin siquiera sugerir, como pude apreciar mientras viajaba con su comitiva, que había que enfrentar una realidad distinta. En cada pueblo y en cada acto público se presentó como un salvador que ofrecía, como dijera Cabrujas, “el paraíso”. Como en su pasada elección, hizo de la velocidad y la energía su sello personal. Pasaba por los pueblos como una aparición, bien en una larga caravana de autos encabezada por un equipo de experimentados motociclistas que recordaban a los dobles de las películas hollywoodenses, o bien caminando tan rápido que nadie podía interactuar con él. La consigna central de su campaña fue “Estas manos que ves son las de Carlos Andrés”, pero siguió identificándosele como “el hombre de la energía” y “el hombre que sí camina”; esas consignas de 1973 y las de la nueva campaña se repetían juntas en las reuniones organizadas a lo largo del país, con lo cual se vinculaban pasado y presente.

Aparecía en los pueblos saludando siempre con los brazos en alto y prometiendo prosperidad, con la intención de impresionar a todos con su poder excepcional; cada espectáculo se desarrollaba como si su objetivo no fuera tanto el de convencer al público sino dejarlo mudo de asombro.

Cuando las encuestas indicaron en noviembre que Pérez ganaría, resultaba difícil recordar que 10 años antes se le había acusado públicamente de corrupción, y que su propio partido al término de su mandato había intentado distanciarse. Como señalo en capítulos anteriores, es de entonces que había sido común referirse a Pérez con el apodo de “Locovén” (“ven”, apócope de Venezuela, se utilizaba en los acrónimos de las compañías estatales que Pérez fundó durante su gobierno). Al atribuirle el fracaso del proyecto de desarrollo nacional a la impulsividad y la personalización del poder de Pérez, “Locovén” expresaba el sentimiento general de que Pérez había perdido el contacto con la realidad, que encarnaba el enloquecido proyecto estatal de la Gran Venezuela.

Si en Venezuela la realidad política se construía, como dijera Cabrujas, mediante trucos de restidigitación, Pérez resultó ser el mejor mago del país. Como parte de los esfuerzos de AD por mejorar su imagen pública tras la derrota de su candidato en las elecciones de 1978, el Comité de Ética del partido sancionó a Pérez por corrupción e intentó sin éxito expulsarlo de sus filas⁵. Pérez logró vencer la oposición interna, reconstruir su liderazgo -cultivando alianzas que incluían apoyos financieros en la cima- y revivir el apoyo popular, especialmente entre los trabajadores. Como crítico del gobierno de Lusinchi se volvió a ganar el respaldo de la base partidaria y resultó electo candidato presidencial en las primarias⁶.

Ya en 1988 grupos muy diversos habían adoptado a Pérez como su candidato. Los excesos de su presidencia se explicaban ahora como la expresión inevitable de problemas estructurales que afectan a las naciones productoras de petróleo en periodos de auge; las acusaciones de corrupción previas se descartaban como producto de campañas de publicidad maquiavélicas encaminadas a empañar su imagen pública⁷. Mientras los grupos económicos vinculados confiaban en que respaldaría sus intereses, ante sectores de la izquierda Pérez aparecía como el único candidato viable para promover reformas fundamentales. Circulaban rumores de conversaciones secretas entre Pérez y líderes de

⁵ Para un recuento de este episodio, cuyo centro fue el precio excesivo pagado por la fragata Sierra Nevada, v. Malavé Mata (1987). Para la versión de este incidente de Gumersindo Rodríguez, persona muy cercana a Pérez, v. Blanco Muñoz (1989:497-500).

⁶ Pérez había respaldado a Lusinchi contra Piñerúa cuando ambos compitieron por la candidatura a presidente por AD en 1978, pero se convirtió en su rival por la supremacía en el seno de AD una vez que Lusinchi fue electo presidente.

⁷ Por ejemplo, me aseguraron que *Resumen*, cuyos reportajes investigativos durante la campaña presidencial de 1978 habían desempeñado un papel clave en vincular a Pérez con el caso Carmona, había publicado informaciones falsas sobre Pérez procedentes de círculos allegados a Rómulo Betancourt. También me dijeron que esa “información” había sido proporcionada por el propio Pérez. No obstante, 18 años después, el director de *Resumen*, Jorge Olavarría, seguía respaldando la reconstrucción que su revista había realizado del caso Carmona (entrevista, agosto de 1996).

partidos de izquierda, de acuerdos con presidentes latinoamericanos, de atrevidas reformas sociales. El fuerte énfasis en los temas de política exterior durante su primera gestión, que daba al país una imagen de liderazgo en la promoción de la democracia y el desarrollo autónomo en América Latina, dejó sentado el perfil de Pérez como defensor de la independencia latinoamericana. “Sabemos que es un pillo”, me dijo un amigo casi con resignación, “pero es el único líder político de Venezuela, y quizás de la América Latina, que puede diseñar una alianza política continental contra el FMI y redefinir el problema de la deuda”. Esta opinión de un connotado economista, quien había desempeñado un alto cargo en las labores de planificación durante el gobierno del presidente Caldera (1969-1974), resonaba con los ecos de una afirmación que se repitió mucho durante la campaña: “Carlos Andrés es tan loco que de repente puede echar una vaina”⁸.

Había comentarios risueños sobre el cambio general de las perspectivas. Otra observación muy generalizada durante la campaña electoral de 1988 captaba este giro: “En 1978 le decíamos Locovén. Ahora le decimos venloco”. La expresión cambia de nombre propio a oración, donde “loco” alude a la osadía del personaje. En vez de restarle importancia a Pérez como encarnación de un Estado desquiciado, “venloco” le pide que regrese como líder visionario que puede producir un viraje histórico⁹. “Hacer historia” se convirtió en una consigna familiar durante la campaña electoral de 1988. A menudo Pérez decía aspirar a otra segunda presidencia porque estaba interesado en la Historia, no en el dinero. Muchos repitieron esa frase. Otros, quizás más desengañados, o deseosos de respaldar su afirmación con argumentos irrefutables, decían: “Carlos Andrés ya tiene todos los reales. Si ahora quiere ocuparse de la presidencia en lugar de disfrutar de sus reales es porque de verdad quiere hacer Historia”¹⁰.

Sin embargo, en esta segunda ocasión no fue el dinero del petróleo sino el sistema financiero internacional lo que definió desde el inicio los términos en los cuales haría Historia.

Pérez ganó las elecciones el 4 de diciembre de 1998 por amplio margen (53% de los votos). La

⁸ “De repente” es una expresión coloquial que puede resultar difícil de entender fuera de Venezuela, pero es muy expresiva de la manera como los venezolanos manifiestan su creencia en que lo inesperado puede ocurrir. “Vaina” es una palabra tan usada por los venezolanos que otros latinoamericanos nos identifican por su empleo o por la exclamación “coño” (los genitales femeninos), que se utiliza casi con la misma frecuencia, a pesar de que se considera aún más vulgar. En este contexto, la frase expresa la posibilidad de un cambio, que podría crearle un problema a los poderosos. Agradezco a Jean Paul Dumont que me haya revelado que “vaina” alude también a vagina (otro ejemplo de ceguera nativa).

⁹ José Martí (1853-1895), el escritor y líder de la independencia cubana, escribió en cierta ocasión, empleando este sentido positivo de la palabra “loco”: “lo imposible, es posible. Los locos, somos cuerdos” (carta a Miguel F. Biondi, Nueva York, 24 de abril de 1880, Obras completas, t. 20, p. 285. N. de la T.); Cintio Vitier, escritor cubano, relaciona la invasión llevada a cabo por Fidel a Cuba a bordo del Granma con la idea martiana de que sólo los locos son capaces de hacer la historia (1970: xlii). En Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, que desafiaron la represión de la dictadura militar protestando en silencio por la desaparición de sus hijos, fueron motejadas con desprecio como “las locas de Plaza de Mayo”. Estas mujeres, que desempeñaron un papel crucial en el derrocamiento de la dictadura, resignificaron el sentido de “locas” al darle un sentido positivo que aludía al valor y la visión enfrentados a la opresión.

¹⁰ El real, una moneda de la época colonial, designa tanto al dinero en general como a una moneda, equivalente a medio bolívar.

ceremonia de su toma de posesión -llamada popularmente “la coronación”- fue un impresionante ritual de mando que intentaba revivir el esplendor del Estado y promover la expectativa de que Pérez produciría un viraje de la historia.

Al lograr convocar al acto a representantes de 108 naciones (incluidos 22 jefes de Estado), Pérez proyectó su imagen de líder internacional. Entre los presentes se encontraba Fidel Castro, en su primera visita a Venezuela desde 1959; el líder sandinista Daniel Ortega; y Dan Quayle, en su primera visita al extranjero como vicepresidente de Estados Unidos. La presencia de Castro y de Ortega dio pie a expectativas colectivas de que Pérez haría un anuncio radical.

Sólo se podía contrapesar el mito del progreso en términos igualmente míticos. Como encarnación, Pérez construyó su imagen de líder fuerte sobre la base de lo inesperado, de decisiones impulsivas a menudo tomadas por fuera de las instituciones políticas formales y el control regular, lo que produjo la ilusión de que podía lograr que sucediera cualquier cosa. Este estilo político mantuvo la confianza de que estaba en sintonía con el pulso de la Historia, de que por intermedio de él el país se encontraba ya en el camino del progreso. Como era causa de frecuentes fallos en la concepción y ejecución de los proyectos públicos, este estilo sólo podía mantenerse sobre la base de la velocidad; pero ningún político era tan veloz como Pérez, “el hombre que camina”, “el hombre con energía”.

La velocidad le permitió negar errores cometidos dejándolos atrás, avanzando frenéticamente de una labor espectacular a otra y manteniendo a la colectividad expectante con respecto a las maravillas de su poder.

Sin embargo, la velocidad no solo requería de magia, sino también de dinero; para ser una máquina de producir milagros, el Estado se alimentaba de un torrente continuo de petrodólares.

Ya en 1989, en la medida en que el cada vez más reducido número de petrodólares tuvo que emplearse para pagar el servicio de la deuda, Pérez transformó la tarea de enfrentar la realidad y decidir la apertura de la economía en otro mito.

Pero en la medida en que el Estado había sido “un Estado de disimulo” (Cabrujas 1987:7), al carecer de torrentes de dinero proveniente del petróleo sólo podía simular su disimulo. El nuevo mito no podía ser más que autodestructivo.

Esta tormenta que llamamos progreso

Donde percibimos una cadena de acontecimientos, [el ángel de la historia] ve una única catástrofe que amontona restos sobre restos y los lanza a sus pies...

Esta tormenta lo empuja irresistiblemente en dirección al futuro hacia el cual vuelve la espalda, mientras que la montaña de desechos que se alza ante él crece como si quisiera alcanzar el cielo.

Esta tormenta es lo que llamamos progreso. **Walter Benjamín**

Dando pábulo aún a la esperanza de que restauraría la prosperidad que el pueblo asociaba con el auge petrolero de 1973, Pérez se refirió durante su campaña electoral al FMI como “la bomba solomata-gente”. Durante la ceremonia de su toma de posesión hizo un llamado a las naciones deudoras a cabildear contra las políticas opresivas de los bancos internacionales. Pero al mismo tiempo que denunciaba públicamente al capital internacional, Pérez enviaba al FMI mensajes privados de que cumpliría con sus severas condiciones.

Poco después de asumir la presidencia cambió su posición pública. Anunció el Gran Viraje, que presentó como un punto de inflexión histórica: un giro hacia una economía abierta en cumplimiento del programa de austeridad del FMI. En teoría, significaba abandonar el provinciano mercado nacional, protegido por el petróleo, en favor del competitivo mercado global. En la práctica implicaba dismantelar la compleja red de protecciones -empleo estatal, préstamos, subsidios, tarifas, controles de precios y regulaciones laborales- que habían constituido el modelo populista de desarrollo durante más de medio siglo. Ni el sector empresarial ni la población trabajadora estaban preparados para este cambio.

En un momento cuando la población esperaba que Pérez trajera de vuelta la prosperidad, los negocios comenzaron a acaparar bienes básicos ante la expectativa de que el Gobierno eliminaría los controles de precios. La escasez de productos -que se extendió hasta las mismas monedas-, la posición abiertamente desafiante de las firmas comerciales y la indiferencia de la administración dieron pie a un extendido sentimiento de decepción e impotencia frente a fuerzas incontrolables. En ese contexto Pérez aumentó el precio de la gasolina, el más barato del mundo, para comenzar a acercarlo a los niveles del mercado mundial. El Gobierno asumía que esta medida se aceptaría como un paso económico razonable, por lo cual no preparó a la población antes de aplicarla. Pero en la petrodemocracia venezolana esta iniciativa rompía el lazo que unía al cuerpo político como dueño colectivo del cuerpo natural de la nación; al violar lo que la gente consideraba su derecho por

nacimiento, quebraba un vínculo moral de protección entre Estado y pueblo. En respuesta a esta medida, el 27 de febrero los propietarios privados de ómnibus y camionetas duplicaron sus tarifas, en abierto desafío a las regulaciones gubernamentales. Afectados por el Gobierno y por el sector privado, los trabajadores y los estudiantes, que hacían uso del transporte, dieron inicio a protestas espontáneas que pronto se ampliaron hasta llegar a ser motines y saqueos masivos, que crecieron desde las tiendas de los barrios populares hasta llegar a los centros comerciales de Caracas y de otras ciudades. Durante dos días, cientos de miles de personas de la capital y otras ciudades participaron en este levantamiento colectivo; sólo en Caracas fueron saqueadas y quemadas más de 1.000 tiendas.

Los líderes oficialistas se conmocionaron. Después de 30 años de estabilidad gracias a los ingresos petroleros y el control de los sectores populares a través de los partidos, creían que el pueblo era incapaz de realizar acciones independientes. El Gobierno, pasmado, sólo logró controlar las calles tras suspender las garantías constitucionales, arrestar a varios miles de personas e imponer el Estado de sitio. La revuelta, de cinco días, fue la mayor y la más violentamente reprimida de las que se han realizado contra un conjunto de medidas de austeridad en toda la historia latinoamericana (Coronil y Skurski 1991).

El Gobierno se opuso a los intentos de algunas organizaciones de derechos humanos de investigar lo ocurrido, no dio pasos legales contra los responsables de la violencia indiscriminada y excesiva y no asumió ninguna responsabilidad con los familiares de los muertos y los heridos¹¹. Aunque la cifra oficial sigue siendo de 277 muertos, la organización de derechos humanos Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989), ha identificado 400 cadáveres; es posible que hayan muerto muchos más. El descubrimiento más horrendo fue el de una fosa común en el Cementerio del Sur, en Caracas, de cuya existencia habían numerosos rumores. En una sección llamada “La Nueva Peste” por analogía con una fosa común para los muertos por una epidemia del pasado, el Gobierno enterró secretamente durante los motines 68 cadáveres envueltos en bolsas plásticas de basura. Estos hallazgos fortalecieron creencias muy arraigadas entre los pobres de que los muertos enterrados en secreto habían sido muchos más. No obstante, el Gobierno siguió desalentando los intentos de investigar estos hechos y no alteró las cifras oficiales que había dado antes del descubrimiento de “La Nueva Peste”.

¹¹ Cofavic afirmó que tres años después de la masacre de febrero, la impunidad sigue siendo el principal enemigo. El tribunal militar ante el cual han presentado todos sus casos, cuidadosamente investigados, no ha emitido ni una orden de arresto, mientras que el mismo tribunal, encargado de los juicios relacionados con el golpe militar del 4 de febrero de 1992 [un intento de golpe de Estado contra Pérez], ha emitido en menos de un mes más de 150 órdenes de arresto. Esto vuelve a poner en tela de juicio la credibilidad de la justicia militar (Tres años de impunidad, *Referencias* año 4 N° 41,1^o de marzo de 1992, p.4).

Años después, Pérez seguía insistiendo en que “hubo menos de 300 muertos”. Se desembarazó de mi pregunta sobre la lista de Cofavic desacreditando la fuente: “Eso es mentira. Si existe esa lista, las identificaciones son inventadas. La PTJ es muy honesta en relación con esto, no se ocultó nada. Hubo una fosa común, es cierto; pero los enterrados allí ya habían sido identificados”. Pérez terminó así sus palabras: “La muerte de una, dos o tres personas habría sido lamentable. La verdad histórica es que ni siquiera 300 personas murieron” (entrevista, octubre de 1994). La negativa de Pérez a revisar la cifra oficial no era solo la acostumbrada resistencia a dar cuenta de las acciones del Gobierno, sino también un intento de controlar los términos del discurso público y de rechazar denuncias alternativas¹².

Estos acontecimientos marcaron una crisis del proyecto populista que había definido la relación entre pueblo y Estado desde 1936. Con el giro hacia las políticas de libre mercado y el desmantelamiento del desarrollismo populista, el discurso dominante comenzó a presentar al pueblo no ya como el virtuoso cimiento de la democracia, sino como una masa turbulenta y parásita a la que el Estado tenía que disciplinar y el mercado tornar productiva. Desde la perspectiva de los sectores populares, por otro lado, la elite se definía de manera creciente como un “cogollo” corrupto, que había privatizado el Estado, saqueado la riqueza petrolera de la nación y atropellado al pueblo.

Durante varios meses después de estos motines del 27 de febrero conocidos como “el Caracazo”, en la medida en que se deterioraban las condiciones de vida, protestas aisladas a cargo de empleados estatales y profesionales, así como de estudiantes y trabajadores, se amplificaron a todo lo largo del país. Estas acciones ponían cada vez más al descubierto la opinión colectiva de que el pueblo había sido traicionado por sus líderes, y de que la democracia estaba convertida en una fachada detrás de la cual una elite empleaba el Estado para su propio beneficio. Esta opinión encontró un apoyo inesperado en el seno de los militares, que habían respaldado lealmente el régimen democrático. Los oficiales medios y los miembros de baja graduación también enfrentaban un drástico deterioro de los salarios reales y de las perspectivas de movilidad. En un proceso paralelo a la estratificación de los partidos políticos, los oficiales medios consideraban politizados a los altos oficiales y cómplices de un Estado corrupto que había obligado a las Fuerzas Armadas a reprimir las protestas públicas.

¹² En 1992 Pérez había afirmado que los cadáveres descubiertos en “La Nueva Peste” “estaban inscritos en la morgue” (“La exhumación avanza con lentitud”, *Referencias* año 3 N° 27, p. 3). Ahora me aseguraba que los habían sepultado en “La Nueva Peste” porque sus familiares no se habían llevado los cuerpos de la morgue. Pero Cofavic había demostrado que fueron enterrados en secreto, y que tres cuerpos identificados por la comisión forense, auxiliada por expertos internacionales, no estaban registrados en la lista original del Gobierno.



“La Nueva Peste”, Cementerio del Sur, Caracas. Cuerpos de las víctimas de la masacre del 27 de febrero de 1989 enterrados en sacos de basura. (Cofavic.)

Del mismo modo como había dado por sentada la pasividad de los sectores populares, el Gobierno asumió que la lealtad militar sería eterna, ya que había sido incorporada con éxito al sistema paternalista controlado por los partidos democráticos. Sin embargo, el 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército de mediana graduación, miembros del Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, casi logra derribar a Pérez. Las declaraciones del movimiento, que invocaban los principios bolivarianos de justicia y soberanía, acusaban a una elite corrupta de apropiarse de la riqueza de la nación, socavar su soberanía financiera, no proteger las fronteras, ampliar la brecha entre ricos y pobres, y emplear a los militares para reprimir las protestas sociales. El líder del golpe, el teniente Hugo Chávez, se convirtió de inmediato, para ciertos sectores ligados a las clases con menos recursos, en un héroe popular. A Chávez, un hombre de orígenes sociales humildes y de piel más oscura que la de la mayoría de los oficiales de alta graduación, se le consideraba un hombre del pueblo, la encarnación del líder patriótico comprometido con el cumplimiento de la promesa populista de soberanía nacional e igualdad social. Pasados 10 meses, el 27 de noviembre, oficiales de alta jerarquía, incluidos algunos de la fuerza aérea, que bombardearon el Palacio de Miraflores, llevaron a cabo un segundo intento de golpe, menos popular y más cruento. Si bien en ambos casos el grueso de los militares se mantuvo leal al Gobierno, estos intentos golpistas dejaron en claro que profundas fisuras en el seno de la institución militar erosionaban el régimen¹³. Como durante la

¹³ Para un análisis de los golpes, v. Ochoa 1992, Agüero 1995 y Burggraaff y Millett 1995.

turbulenta mitad del siglo XX (analizada en la parte 2), los líderes de los golpes se manifestaron a favor de que la democracia recuperara sus logros sustantivos, no tanto sus procedimientos formales. En respuesta a los golpes, los partidos acentuaron sus esfuerzos por descentralizar y revitalizar el sistema político según los lineamientos propuestos por la Copre (Comisión para la Reforma del Estado). Como el Congreso había aprobado una reforma del sistema electoral que reemplazaba la designación presidencial de los funcionarios regionales por la elección directa de alcaldes y gobernadores, las elecciones para gobernadores y alcaldes de 1992 se consideraron una oportunidad para fortalecer la maltrecha democracia venezolana. En un claro repudio a AD, los partidos de oposición Copei, Causa R y Movimiento al Socialismo (MAS) ganaron la mayoría de los gobiernos estatales y numerosas alcaldías. Pero si bien esta votación expresaba la capacidad de los partidos de oposición para organizarse en torno de preocupaciones y líderes locales, un abstencionismo de cerca de 50% reveló un amplio rechazo a los partidos y un profundo escepticismo hacia las instituciones democráticas venezolanas.

Golpes abortados y resultados electorales mostraban hasta qué punto Pérez había perdido el apoyo popular y el control sobre los militares. En un viraje súbito y complejo, un creciente sentimiento colectivo de que la estabilidad política y el bienestar nacional dependían de la remoción de Pérez se expresó mediante protestas y debates públicos cada vez mayores.

En mayo de 1993, el Congreso acusó a Pérez de corrupción: se le imputó haber utilizado ilegalmente 17 millones de dólares de la partida secreta Del Ejecutivo para apoyar la frágil democracia de Violeta de Chamorro en Nicaragua, y para financiar su también dispendiosa toma de posesión¹⁴. Si bien los observadores difieren en cuanto a la legalidad de la remoción de Pérez, todos concuerdan en que fue la elite política la que tomó esa medida para salvar un sistema amenazado¹⁵. Igual que había encarnado el mito del progreso, ahora Pérez tenía que simbolizar el mito de que era responsable de su fracaso.

El senador Ramón J. Velásquez, también historiador, resultó elegido presidente provisional. Su tarea fundamental era devolver la confianza en el sistema democrático y velar por las elecciones

¹⁴ Para un amplio recuento de este incidente, v. Chitty La Roche (1993).

¹⁵ Editorial Centauro reunió una amplia colección de artículos de amigos y críticos de Pérez quienes concuerdan en que el procedimiento legal en contra de él se vio empañado por diversas irregularidades, y que su remoción del cargo respondió a consideraciones políticas (1994).

presidenciales y legislativas¹⁶. Rafael Caldera, conocido por su rigurosa honestidad personal, rompió con su propio partido, Copei, para postularse con una plataforma que criticaba las reformas neoliberales y que contaba con el apoyo del MAS y de Convergencia Nacional, en una coalición de 16 partidos. Caldera resultó electo presidente con 31% de los votos; AD y Copei, que históricamente habían dominado el régimen democrático, vieron disminuir sus votos de 93% en las elecciones de 1988 a 47%. La abstención alcanzó un nivel récord de 44%, contra 22% en 1988. Esta súbita abstención marcó el inicio de un creciente sentimiento colectivo de exclusión política.

Caldera, que enfrentaba un repudio colectivo al sistema de partidos, también heredó una economía maltrecha cuyos problemas se veían magnificados por una crisis bancaria sin precedentes que emergió tres semanas antes de su toma de posesión. El sistema bancario se había convertido en terreno de especulaciones financieras y competencia oligopólica, como resultado de la inexistencia de leyes efectivas y agencias reguladoras para esa actividad, y de la desregulación de la economía que Pérez llevara a cabo. Los bancos atraían el dinero público mediante la oferta de tasas de interés ilusoriamente elevadas, y se lo daban en préstamo sin mayores requisitos a sus directivos y asociados, quienes ponían en marcha proyectos especulativos. El 19 de enero de 1994, el gobierno de Velásquez rescató al Banco Latino a un costo de casi 1.800 millones de dólares. En el Latino no solo estaban depositados ahorros de la población (1,2 millones de depositantes), sino también fondos del Estado, incluidos los recursos de la agencia de regulación bancaria. Durante los cuatro años en los que su ya antiguo presidente, el "apóstol" Pedro Tinoco, fungió como director del Banco Central en el gobierno de Pérez, el Latino se convirtió en el segundo del país y en un símbolo de la ostentación y la corrupción de la administración perezista. "Probablemente ningún otro banco del mundo tuviera más miembros de su junta directiva que sean dueños de *jets* privados. El presidente del Banco Latino, Gustavo Gómez, tenía tres" (*The Wall Street Journal*, 4/2/94).

El rescate del Banco Latino marcó el inicio de una crisis bancaria sin precedentes. Mientras las personas intentaban en vano extraer sus ahorros de otros bancos privados, el gobierno de Caldera se hizo cargo de casi todo el sistema bancario privado, a un costo estimado de más de 8.500 millones de dólares, lo que representaba 75% del presupuesto nacional de 1994. Una parte sustancial de ese dinero, entregado directamente a los bancos para que respaldaran los depósitos, fue sustraída por los banqueros, quienes huyeron a Europa y EEUU antes de que se expidieran órdenes de arresto. Esta fue

¹⁶ Velásquez concitaba un respeto general como historiador y como político independiente y de principios, aun cuando se le identificaba como simpatizante de AD. Tras su toma de posesión, el nivel de tensión social disminuyó notablemente. En las conversaciones cotidianas a menudo se mencionaba el contraste entre el "sentido común" de Velásquez y la "megalomanía" y "desconexión de la realidad" de Pérez.

una de las peores crisis bancarias de América Latina; proporcionalmente, fue 10 veces más severa para la economía venezolana que la quiebra de las instituciones de ahorro y préstamo a inicios de los años 90 para la de EEUU (*The New York Times*, 16/5/94). En medio de rumores de golpes de Estado y levantamientos populares, Caldera suspendió las garantías constitucionales y estableció controles sobre el cambio de la moneda.

Anteriormente, la elite se había apropiado de la riqueza petrolera pública por medio del Estado, que ejercía cierto control sobre su uso y distribución. Ahora la elite bancaria se apropiaba directamente de los ahorros personales de la población, y de grandes sumas de dinero del Gobierno, mediante el mercado desregulado. Si los golpes de Estado revelaban la existencia de grandes grietas en la institución militar paralelas a las existentes en el mundo político, la crisis bancaria ponía al descubierto la fuerza desterritorializadora por intermedio de la cual el mercado global cooptaba a la elite del sector de los negocios. La búsqueda de dinero en el mercado especulativo internacionalizado erosionó los vínculos de la elite con la economía interna y socavó normas establecidas para los negocios.

Como se vio antes, a fines del primer gobierno de Pérez existía una creencia muy generalizada de que los miembros del sector de los negocios se dividían entre los empresarios de buena reputación, cuyas inversiones estaban vinculadas al desarrollo del país, y los especuladores carentes de principios, que perseguían la ganancia por todos los medios en busca de beneficios personales. En tanto la elite tradicional estaba implicada en la crisis financiera, esa distinción se tornó insostenible. Como expresara con amargura a propósito de la confianza que había depositado en la junta directiva del banco un depositante del Metropolitan Bank, quien perdió sus ahorros: "Eran miembros de la aristocracia de negocios del país. Tenían los mejores apellidos. Gente honesta, gente de sangre azul". Pero ahora los consideraba gente "sin país". Y añadió: "Su país es el dinero" (*The Washington Post*, 27/6/94).

Como resultado de la liberalización comenzada en los años 80, el sector de los negocios desplazó su centro de atención del Estado hacia el mercado. Pero este desplazamiento se produjo por intermedio del Estado; algunos de los grupos económicos más poderosos habían empleado sus conexiones políticas para diversificarse e invertir en el extranjero. Se estima que la fuga de capitales a partir del auge petrolero de 1974 está entre los 60.000 y los 90.000 millones de dólares, lo que equivale a dos o tres veces el monto de la deuda externa. Los conglomerados que se expandieron internacionalmente han disfrutado de una mejor posición para adaptarse al nuevo contexto, gracias al empleo de

su poder financiero para reorganizar sus operaciones locales. “Nos hemos reinventado”, dijo Gustavo Cisneros, uno de los líderes del grupo Cisneros. “Todo grupo en América Latina que no haga lo que estamos haciendo estará perdido, acabado, concluido”, añadió en referencia a la nueva capacidad del grupo para competir en los mercados internacionales (*The Wall Street Journal*, 16/11/94)¹⁷.

Resulta una ironía que la ausencia de controles y privilegios estatales haya intensificado las prácticas oligopólicas y la competencia, lo cual ha conducido a una concentración del poder en el sector privado. Como lo reveló la crisis bancaria, la inexistencia de regulaciones en el campo financiero estimuló prácticas irrestrictas conducentes a la obtención de ganancias. En lo que dos analistas han denominado “un frenesí oligopólico” (Naím y Francés 1995: 189), la liberalización de la economía alentó a importantes grupos económicos a controlar el mercado por cualquier medio a su alcance. Imposibilitados ahora de confiar en el apoyo del Estado, los grupos económicos importantes basaban la obtención de ganancias en el control de aspectos clave del mercado: desde la monopolización de insumos hasta la formación de opinión pública a través de los medios de comunicación. Mientras que algunos de los prósperos grupos económicos bajo el proteccionismo estatal estaban ahora debilitados, otros, en particular los que contaron con inversiones nacionales e internacionales diversificadas, se convirtieron en nuevos centros de poder económico y político. En las condiciones del neoliberalismo, el poder centralizado no se dispersó, sólo cambió de forma. Las alturas desde las cuales se ejerce el mando ya no están en poder del Estado, sino de los más difusos e invisibles centros privados del poder público¹⁸.

En el sector automotriz, estudiado en este libro, las empresas de partes y piezas vinculadas a grandes conglomerados gozaron de mejores condiciones para adaptarse al libre mercado y resistir la reducción de la producción. La fabricación de vehículos disminuyó de 182.678 unidades en 1978 a 27.637 en 1989, pero a partir de entonces se ha recuperado gradualmente hasta llegar a 96.401 unidades en 1995. El valor de la producción de partes y piezas de vehículos en 1995 fue de 765

¹⁷ El grupo Cisneros, que se había convertido en uno de los mayores conglomerados de Venezuela durante el primer periodo de Pérez, estaba muy implicado en el Banco Latino, en parte debido a sus vínculos con su fundador y presidente, Pedro Tinoco, quien había sido antes presidente de la cadena de supermercados CADA, propiedad del grupo. Gustavo Cisneros, presidente del conglomerado, es miembro de la junta asesora internacional del Chase Manhattan Bank y un socio cercano de Carlos Andrés Pérez. Alrededor de la mitad de los 4.000 millones de dólares de ingresos del grupo en 1993 provinieron de subsidiarias en el extranjero, que incluyen inversiones en compañías como Univisión, la red de televisión en español en EEUU; Xtra International, una cadena de supermercados de 56 establecimientos en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la Florida; y las compañías Spalding y Evenflo, fabricantes de equipos deportivos y productos para niños (*The Wall Street Journal*, 16/11/94).

¹⁸ Es preciso estudiar la estructura y prácticas cambiantes del sector empresarial. Aunque el grupo Cisneros ha sufrido una significativa pérdida de prestigio y poder en Venezuela, es probable que continúe desempeñando un papel predominante en la vida económica y pública del país. Si bien en la transición hacia el libre mercado algunos de los conglomerados importantes se han debilitado (p. ej., los grupos Mendoza y Corimón), otros han continuado su expansión, y en algunos casos ésta no se limita a la diversificación internacional, sino que incluye una ampliación de sus ya significativas inversiones en estructuras productivas internas (el grupo Polar).

millones de dólares (265 millones para el mercado interno y el resto para la exportación). El grupo Sivena, controlado por la familia Machado Zuloaga, que incluye a las firmas más importantes del sector de partes y piezas, ha conservado su predominio al encaminar la producción hacia la exportación, que representa ahora más de la mitad de sus ingresos. Por otro lado, carente de toda protección, a pesar de algunos intentos para revivirla como fábrica de tractores o de utilizarla para otras actividades (como el almacenaje de granos o la reparación de carros de carga), Fanatracto sigue siendo un cascarón vacío en medio de la región de Guayana.

La crisis del Estado proteccionista y la apertura de la economía dividieron en dos al país: de un lado, una clase alta con vínculos internacionales y sus socios locales (acerca de muchos de los cuales se podría afirmar que “el dinero es su país”); del otro, una mayoría empobrecida que incluye a una clase media cada vez más reducida. Un artículo de *The New York Times* titulado “¿Qué diablos le pasó a la clase media venezolana?” (Whatever Happened to Venezuela's Middle Class?) subrayaba la drástica caída del nivel de vida en Venezuela (en los últimos 25 años la parte del presupuesto familiar que se destinaba a la alimentación había crecido de 28% a 72%) y describía “la muerte” de la clase media: “El país entra en su cuarto año de recesión, y la inflación de 54% el pasado año es la mayor de América del Sur. La clase media de Venezuela, en otra época acostumbrada a realizar compras en Miami, se ve reducida a un estado cercano a la pobreza” (9/2/96). Para la gran mayoría de la población, la situación, por supuesto, era peor: enfrentada a la mayor inflación de América Latina en 1996 (70%), alrededor de 70% de la gente estaba en la pobreza, y un 30% en estado de pobreza crítica.

Al asumir el poder, Caldera prometió poner límites a las medidas neoliberales y mejorar los niveles de vida. Pero carente de recursos financieros para respaldar sus planes, lo único que pudo hacer fue posponer la respuesta a las demandas de los acreedores extranjeros. El 14 de marzo de 1996, visiblemente inquieto, anunció su nuevo plan económico: la “Agenda Venezuela”, un programa de austeridad del FMI que le dio continuidad al plan comenzado por Pérez. A cambio de nuevos préstamos internacionales, aceptó imponer el conjunto usual de “ajustes internos”, incluido un aumento inmediato de 600% del precio de la gasolina. Ironías de la historia: Teodoro Petkoff, famoso ex-guerrillero y fundador del MAS, fue el responsable, en su condición de ministro de Planificación, de aplicar el programa. En lo que constituye una señal de la convergencia en ciertos aspectos de la crítica al proteccionismo desde la derecha y desde la izquierda, Petkoff, un político socialista y crítico de vieja data del capital local e internacional, se convirtió en el más eficiente promotor del programa.

Sobre la ironía de que había sido electo con el mandato de revertir el giro hacia el neoliberalismo, el

presidente Caldera comentó: “Tuve que adoptar estas medidas porque no había más remedio”. Sin embargo, apuntó que también había dado esos pasos debido a los compromisos contraídos con mercados regionales latinoamericanos organizados según principios liberales. Y señaló que “si bien el capital internacional y el FMI presionaron a Venezuela para que aceptara estas medidas, los gobiernos han logrado complementarlas con importantes programas de bienestar social”. Al terminar la entrevista me dijo de manera informal: “Teodoro cree en estas medidas más que yo” (entrevista, agosto de 1996).

Como en otros países latinoamericanos, el libre mercado no ha sido fomentado sólo por sus partidarios acérrimos, sino también por quienes antes lo criticaban. Pero ese respaldo plantea preguntas complejas acerca de los límites de la acción independiente tanto de instancias públicas como de actores políticos en contextos neocoloniales. ¿Cómo entender las políticas aplicadas por Estados subalternos en el marco de severas restricciones internas y externas?; ¿cómo interpretar la ideología y la práctica de la soberanía estatal en condiciones globales que las socavan?; ¿qué significaba para Caldera o para Petkoff “creer” en las medidas neoliberales?

Para Pérez y Caldera, nuevas modalidades de globalización transformaron el contexto en el que el Estado debía ir en pos de su perdurable objetivo, “la modernización de Venezuela”; el objetivo por cuyo logro Pérez confía en que se le recuerde. Pero el fracaso de la mayoría de los proyectos locales de desarrollo y en el resto del mundo han conducido al reconocimiento de que la búsqueda de la modernización no ha producido progreso, sino mayores desigualdades. Con el giro del Estado al mercado como fuente fundamental de avance, el progreso se sigue presentando como producto de planes de modernización, pero de manera creciente se le considera un objetivo individual y no nacional. La privatización neoliberal del mercado ha implicado la individualización de la marcha hacia el progreso.

De ahí que en vez de disolver el mito del progreso, la desmitificación del progreso nacional haya conducido a la mitificación del progreso individual. Si antes se había presentado la búsqueda de progreso como el objetivo de una colectividad unida, con lo que se borrarían las divisiones internas, en cambio ahora aparece como una meta individual, lo que intensifica la creciente polarización. En Venezuela esta división ha partido en dos al país. Mientras que la elite internacionalizada se mueve con facilidad entre los cada vez más inseguros enclaves de privilegio y los centros metropolitanos, la mayoría se ve restringida a un medio social progresivamente empobrecido y marcado de manera palpable por el abandono y la desidia. En la medida en que la tormenta del

progreso sigue amontonando restos sobre restos se va haciendo imposible negar la catástrofe que deja tras de sí mediante el simple expediente de mirar hacia el futuro. La tragedia de la modernidad consiste en que su promesa de progreso universal no puede cumplirse en los términos en que ha sido planteada.



Pinturas al óleo sobre billetes venezolanos de José Rafael Castillo Arnal: Simón Bolívar en un billete de 100 bolívares (centro); manifestante enmascarado en una protesta urbana (se les conoce como “encapuchados”) en un billete de 10 bolívares (izquierda); y una mujer indígena en un billete de 5 bolívares (derecha). Castillo Arnal, pintor caraqueño, critica el proyecto político de la elite gobernante en pinturas sobre lienzo y billetes.

10. Más allá del occidentalismo: una modernidad subalterna

La historia mundial viaja del este al oeste; por cuanto Europa es el fin absoluto de la historia, así como Asia es su origen... Es en el Oeste donde el sol interno de la conciencia propia, que emite una luz más brillante, alcanza su mayor elevación.

[La humanidad] es el trabajador milagroso, en cuanto que en el transcurso de la historia humana, domina cada vez más completamente a la naturaleza, tanto dentro como fuera de los seres humanos, y subordina a la naturaleza como el impotente material de su propia actividad.

Georg W.F. Hegel

En el laberinto

Como la historia, escribir es una batalla de posiciones. He escrito este recuento mediante la creación de un espacio desde el cual sea posible reflexionar sobre la historia laberíntica de Venezuela sin hacer las acostumbradas separaciones entre lo interno y lo externo, lo local y lo global, la geografía y la historia. Desde este espacio intenté desarrollar una posición desde la cual aprehender sociedades definidas como marginales en el mundo moderno y, al mismo tiempo, desviar la “radiante” luz imperial que las consigna a los márgenes. Si mediante una lectura contrapuntística de Jorge Luis Borges y Jacques Derrida podemos imaginar la historia como un laberinto cuyas salidas son entradas hacia otro laberinto en expansión, mi posición no reclama para sí un privilegio especial. “Para todo poeta”, ha dicho Derek Walcott, “siempre es de mañana en el mundo, y la Historia es una olvidada noche de insomnio” (1998: 79). Teniendo como derrotero la actitud de mirar hacia atrás, hacia la destrucción que ha tenido lugar y es recordada como “una noche de insomnio”, esta posición proclama el presente como la mañana de un mundo que rechaza aquel pasado. Quisiera insistir en algunos de los principios que orientan esta perspectiva, así como en la visión de Venezuela que esta produjo.

Si bien el eurocentrismo de Hegel ha sido uno de los blancos preferidos de la crítica al historicismo por motivos inobjetables, he unido a esta crítica dos valiosas observaciones de Hegel para oponerme tanto a su universalismo provinciano como al abandono por parte de sus críticos de una visión totalizadora. En primer término, Occidente no se formó con independencia de otras culturas, sino subsumiéndolas en su historia. Por tanto, la auto-conformación de Occidente como centro autoconstruido de la historia mundial debe entenderse como el efecto mistificante de relaciones de

poder. En segundo lugar, la universalización de Occidente se ha logrado mediante su dominio de la naturaleza (que asumo como una descripción del valor asignado a la dominación y a la explotación, no como una proposición normativa). Dada la división territorial del mundo en naciones políticamente independientes, el dominio de la naturaleza, por tanto, ha conllevado la sujeción de unas naciones por otras¹.

A partir de una larga tradición de reflexión crítica sobre el colonialismo y el imperialismo, a la cual he sumado el énfasis posmoderno en lo fragmentario como un momento útil de un análisis holístico y relacional, he sustentado la necesidad de replantear las historias occidentalistas que asumen una cabal separación entre Occidente y su periferia. A la luz de mi análisis sobre la formación del Estado venezolano, he propuesto que el reconocimiento teórico de la centralidad de la naturaleza en la formación histórica del capitalismo contribuye a integrar las historias de las regiones (pos)coloniales y metropolitanas; a conceptualizar el capitalismo como un proceso global que involucra a múltiples agentes sociales en complejas interacciones mundiales; a entender la modernidad como un proceso relacional que supone la constitución contrapuntística de modernidades subalternas y occidentalistas; a concebir al Estado, en su papel de terrateniente soberano en un territorio nacional, como un agente económico con su propia base de poder económico; y a desarrollar un enfoque dialéctico que libera nuestra comprensión de la historia de narrativas teleológicas atrapadas en contradicciones binarias, con

lo cual se crea el espacio para explorar las acciones y solidaridades potenciales de actores heterogéneos formados en condiciones materiales y culturales cada vez más interrelacionadas.

La magia del oro negro

Mi análisis de la formación histórica del Estado venezolano tiene como premisa la del desarrollo de esas proposiciones. Si aceptamos que Occidente ha definido su posición *vis-à-vis* la naturaleza como la del “hacedor de milagros” que “subordina a la naturaleza en su condición de material impotente de su propia actividad”, me he acercado a la producción del “milagro” en tierras venezolanas mediante la exploración de cómo el cambio alquímico del oro negro en dinero produjo la transfiguración de los

¹ He analizado en otros trabajos la concepción hegeliana de Europa como el centro de la historia, vinculando su filosofía de la historia, tal como se aprecia en sus *Lecciones sobre historia de la Filosofía*, con su análisis de la dialéctica del amo y el esclavo desarrollada en *Fenomenología del espíritu* (Coronil 1996). Para un planteo de que lo que se requiere es “pensar con Hegel contra Hegel”, útil para analizar la oposición modernidad/posmodernidad, v. Bemstein (1991: 293-319).

agentes sociales implicados en este proceso que ha hecho historia. El Estado venezolano se ha presentado como el hacedor de milagros que podía convertir su dominio de la naturaleza en fuente de progreso histórico. Pero debido en buena medida al hecho de que mucho de su poder se deriva de los poderes del dinero proveniente del petróleo en vez de ser producto de su dominación de la naturaleza, el Estado se ha visto limitado a producir actos de magia en vez de milagros. Mediante el análisis de las representaciones que lo han constituido como Estado mágico, he examinado sus transformaciones históricas durante este siglo, rastreando su papel en el frenético ascenso de Venezuela como nación petrolera rica desde el punto de vista financiero y su no menos violenta caída a la condición de país endeudado del Tercer Mundo.

Cuando la industria petrolera foránea se estableció en suelo venezolano, el país pasó rápidamente de ser una sociedad agrícola estancada, desgarrada por guerras civiles y endeudada con potencias extranjeras, a convertirse en el mayor exportador petrolero mundial. Desde el inicio, el vasto torrente de dinero condujo a la expansión de las actividades económicas internas, en particular en las áreas comercial, de servicios y de bienes raíces, en lugar de los sectores productivos. La inyección de dinero proveniente del petróleo en la economía doméstica contribuyó a naturalizar la riqueza, al desconectarla de la productividad del trabajo local debido a que se basaba en la valorización de un recurso mineral que demandaba poco trabajo para su extracción. Al hacerlo, fomentó la idea de que las riquezas existen directamente en la naturaleza. También politizó la riqueza nacional, al hacer que su magnitud monetaria dependiera de las capacidades de negociación respectivas del Estado y las compañías petroleras, y que su adquisición en el medio local obedeciera al acceso a sus canales de distribución interna, siempre mediados por el Estado. Resulta irónico que estos procesos, puestos en marcha por las actividades de las empresas transnacionales más avanzadas llegadas a suelo venezolano, hayan reforzado ciertas tendencias de la experiencia social que tenían sus raíces en la historia de la conquista y la colonización. El espejismo de El Dorado embrujó a los primeros conquistadores, quienes se adentraron cada vez más profundamente en la selva amazónica en su búsqueda obsesiva de las riquezas que según las poblaciones indígenas esperaban detrás de la próxima montaña. Una leve reaparición de este espejismo se produjo durante varios siglos con cada descubrimiento de riquezas minerales. Cuando brotó el petróleo, las imágenes sumergidas de El Dorado volvieron a lucir todo su brillo, y su nueva apariencia fue la de ríos infinitos de oro negro que circulaban por las arterias del cuerpo social, alimentándolo y esperando que alguien se apropiara de ellos.

En la medida en que la industria petrolera ocupaba un papel central en la economía interna, y en que se identificaba la producción de riqueza con la captación de las rentas petroleras, el capitalismo en Venezuela se desarrolló mediante el establecimiento de una relación singular entre la naturaleza, la nación y la economía global. Esta relación constitutiva no impidió, sino que más bien alentó, la rápida expansión de estructuras productivas internas. Sin embargo, condicionó su organización interna y dinámica productiva, al limitar la profundidad de la industrialización venezolana y promover el desarrollo de grupos económicos oligopólicos diversificados que integraban *Holdings* financieros, comerciales e industriales. Si en el capitalismo “el proceso de producción... absorbe a la circulación como una mera fase de la producción” (Marx 1967: 328), en Venezuela -debido a que la distribución de las rentas petroleras llegó a predominar sobre la producción de valor- el proceso de circulación absorbió a la producción como una fase de la circulación. De ahí que en un proceso contradictorio, la implantación de subsidiarias de las empresas transnacionales más avanzadas en el suelo de una sociedad agrícola estancada al mismo tiempo promovió y socavó el desarrollo de relaciones de producción. Paradójicamente, el dinero proveniente del petróleo, que era el resultado de las actividades de algunas de las más dinámicas empresas transnacionales, reforzó en Venezuela concepciones y prácticas surgidas a partir del descubrimiento y la colonización de las Américas, que consideraban la riqueza no tanto como el resultado del trabajo productivo sino más bien como la recompensa por actividades no directamente relacionadas con la producción, que incluían la conquista, el saqueo o la pura suerte.

Del gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez a inicios del siglo hasta el régimen democrático de Carlos Andrés Pérez en las postrimerías, el basamento del poder estatal en la economía petrolera se hizo más abstracto, al generalizar el dominio del Estado sobre la nación, pero en última instancia, al ceder una parte significativa del control al capital internacional. Tras la muerte de Gómez, la presión colectiva por participar en los cuerpos político y natural de la nación contribuyó a forjar una relación singular entre la democratización de la vida política y la constitución de un Estado tutelar y proteccionista. El poder del Estado, que tuvo sus raíces durante la dictadura de Gómez en la propiedad estatal sobre el subsuelo, llegó a depender de la capacidad del Estado para garantizar y manejar flujos crecientes de petrodólares con los cuales financiar proyectos de desarrollo nacional. La liquidez, abstracción y permutabilidad de estos recursos monetarios les otorgaron una visibilidad pública diferente al petróleo. Al circular por el cuerpo político en forma de dinero, el petróleo dejó de ser identificado como sustancia material y se convirtió en sinónimo de dinero. De la misma forma en

que se consideraba al petróleo de modo abstracto como dinero, el Estado se convirtió en el representante general de una comunidad política que ejercía la propiedad compartida del cuerpo natural de la nación.

En manos del Estado venezolano, durante todo el siglo el dinero fue el equivalente universal que encarnaba la promesa de universalidad. A cambio del dinero de la nación, el Estado prometía traer la modernidad a Venezuela, esto es, reemplazar su sistema de producción y su modo de vida provincianos por las estructuras y la cultura modernas de los centros metropolitanos. La frase “sembrar el petróleo” condensaba esa aspiración: cambiar el subsuelo nacional por dinero internacional se justificaba en aras de transformar el cuerpo natural no renovable del país en formas renovables de riqueza social. El intercambio fáustico de dinero por modernidad sólo trajo consigo la capacidad de producir la ilusión de producción: el dinero compró productos o fábricas modernas solo capaces de generar una modernidad trunca. Al crear una estructura industrial bajo el manto protector de los petrodólares, los programas de modernización del general Pérez Jiménez y de Carlos Andrés Pérez fomentaron industrias que manifestaban una persistente tendencia a funcionar más como trampas para captar rentas petroleras que como medios creativos de producción de valor.

El auge petrolero de 1973 hizo explotar los límites del intercambio fáustico de petróleo por la ilusión de modernidad. Los bancos extranjeros reciclaron los petrodólares en forma de préstamos, y el Estado hipotecó el subsuelo nacional para obtener préstamos con el fin de financiar su vasto plan de crear la Gran Venezuela. De esta manera, el dinero petrolero se multiplicó en dinero de la deuda. La circulación conjunta en el cuerpo político de petrodólares y dólares de la deuda intensificó el patrón de inversiones dilapidadoras y corrupción que había caracterizado desde un inicio el empleo de las rentas petroleras. Estos recursos conjuntos se disiparon en empresas ineficientes, consumo interno y fuga de capitales, y dejaron detrás como su principal cosecha interna la mayor deuda per cápita de la América Latina y una economía devastada².

Aun cuando la crisis de la deuda resulta parcialmente controlada por una variedad de mecanismos (pagos limitados, renegociación, traspaso de créditos malos del haber al debe en los libros de las instituciones prestamistas), en Venezuela, al igual que en otros países del Tercer Mundo, “el legado de la crisis se ve agravado por la incapacidad de los países latinoamericanos para encontrar un nicho adecuado en el sistema de comercio internacional” (Halperín Donghi 1993: 402). De ahí que, como

² Venezuela no era excepcional. Según el economista Jeffrey Sachs (que como consultor contribuyó a poner en práctica programas neoliberales de *shock* en la América Latina y Europa oriental), en las naciones en desarrollo “buena parte de los grandes préstamos otorgados no financiaron la inversión. Se utilizaron, en vez de ello, para financiar los gastos de consumo corriente y la fuga de capitales del sector privado” (1989:13).

planteo en este libro, lo fundamental para entender la dinámica del subdesarrollo no es tanto la dirección del flujo de valor como el lugar que ocupan las naciones del Tercer Mundo en la estructura global de la producción y la distribución.

Para recibir nuevos préstamos destinados al pago del servicio de la deuda externa con el objetivo de financiar los proyectos de desarrollo y para lograr la confianza del capital internacional, se ha obligado a Venezuela a abandonar el mundo “fantasioso” de la riqueza petrolera para incorporarse al mundo “real” del mercado; esto es, a abandonar el capitalismo protegido por el competitivo. Si bien fue el Gran Viraje de Carlos Andrés Pérez el que inició este proceso en 1989, la exigencia de enfrentar “la realidad” sigue ejerciendo su fuerza hegemónica, aun si ha encontrado la resistencia no solo de sectores populares y de fracciones de la elite, sino también del sucesor de Pérez, Rafael Caldera. El giro de la ilusión de la magia a la ilusión de lo real se corresponde con el cambio de poderes encarnados en el petróleo a poderes que residen en el dinero, del fetichismo material de la tierra al fetichismo abstracto del dinero.

Hasta la primera presidencia de Pérez, la riqueza petrolera sirvió de respaldo a la fetichización del Estado como agente indisputable del progreso. Como muestro en este libro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez, como encarnaciones del Estado, simbolizaron -en la premier, el debut y la *reprise* del mito del progreso- las fuerzas transformadoras que residían en el cuerpo natural de la nación. A partir de la crisis de la deuda de los años 80, el dinero global, que se presenta como la encarnación neutral de la racionalidad económica, ha roto el encantamiento del Estado endeudado, con lo cual ha deslegitimado su autoridad provinciana y limitado su poder sobre la nación; el presidente ya no es el agente del progreso dotado de poderes mágicos. Resulta irónico que un Estado que se constituyó como Estado nacional mediante el control sobre su petróleo se haya deshecho al emplear el subsuelo de la nación como garantía de préstamos contraídos para financiar un proyecto de desarrollo industrial destinado a poner fin a la dependencia respecto del petróleo.

Hay una cierta progresión perversa en el arco histórico que cubre este recuento. Si bien durante la mayor parte del siglo la circulación de petrodólares del Estado a través de la economía interna subordinó las estructuras productivas del país a la lógica de la captación de la renta, ahora la circulación de dinero internacional ha llegado a dominar la economía local, al determinar las condiciones en las cuales debe funcionar. El control político que se imponía directamente por intermedio del Estado se ejerce ahora de manera indirecta mediante el poder del dinero global despersonalizado, que adopta la figura “neutral” del mercado internacional. En nombre de la

universalidad abstracta del mercado, el capital internacional le impone su racionalidad al Estado a cambio de préstamos que prometen un alivio momentáneo de la carga que se arrastra del pasado.

Hacia una cartografía crítica de la modernidad

Este libro cubre la historia bastante inusual de la transformación de Venezuela a lo largo del siglo XX. De una sociedad agrícola cargada de deudas y amenazada con el poderío militar conjunto de los acreedores imperiales en 1902, se convirtió primero en un rico exportador de petróleo que durante el auge petrolero de 1973 amenazó desde la OPEP con alterar las relaciones centro-periferia, y, después, en los años 80, en una nación endeudada, desgarrada internamente por la tensión polarizadora del capital internacional. Quisiera concluir apuntando de nuevo que la tempestuosa historia venezolana, lejos de tener poca relevancia general, hace más visibles las transformaciones similares que tienen lugar en todas partes, no solo en el Tercer Mundo sino también en naciones centrales. De ahí que Robert Reich haya señalado que la globalización de la economía ha polarizado a la población de Estados Unidos en un sector pudiente vinculado a la economía transnacional y una mayoría que labora en el sector servicios y que se ve obligada a sufrir condiciones de vida en franco deterioro. Preocupado por la posibilidad de que esta polarización conduzca a “la secesión de los exitosos”, Reich insta a quienes se han labrado enclaves transnacionales de abundancia en un paisaje nacional cada vez más empobrecido a renovar su compromiso con la nación.

El auge petrolero de 1973 no solo fue un parteaguas en la transformación del Estado venezolano, sino también un punto de inflexión que puso en movimiento la dinámica global polarizadora del capitalismo contemporáneo en los niveles nacional e internacional. Irónicamente, los intentos de las naciones de la OPEP para revertir patrones de desigualdad internacional de muy vieja data, al final condujeron no solo a una mayor concentración del poder fuera de sus fronteras, sino también a una modificación de la estructura de poder misma. En lugar del “imperialismo uniformado” del control político directo y los mercados fijos territorializados de la vieja época imperial, hoy asistimos al surgimiento del imperialismo multiforme del fluido capital financiero, modos de acumulación flexibles y mercados desterritorializados, así como a la formación de un mundo ordenado mediante cambiantes fronteras políticas, económicas y culturales.

Transformaciones globales de la cultura, la política y la producción, generalmente asociadas con el surgimiento de la posmodernidad, modifican el conocido mapa de la modernidad. Como resultado de

esas transformaciones -vinculadas a revoluciones de las tecnologías de producción y de las comunicaciones, así como a gigantescas reconfiguraciones del poder geopolítico y de las poblaciones en todo el planeta- las categorías geográficas que nos resultan familiares se desarraigan de sus ubicaciones territoriales originales y se adhieren a nuevos territorios. Estos cambios alteran la relación entre la geografía y la historia. Si bien la desterritorialización conlleva la reterritorialización, este proceso dual hace más visible tanto la construcción social del espacio como las raíces geográficas de las historias. Estos cambios también modifican los espacios y los objetivos de la sujeción imperial y de la oposición política. Los imperios contemporáneos tienen ahora que enfrentar a sujetos subalternos en el interior de espacios re- configurados, tanto en sus propios países como en el extranjero, en la medida en que el Otro, en una época anterior mantenido en continentes distantes o confinado a ubicaciones acotadas en los países imperiales, se multiplica y se disuelve al mismo tiempo. Cada vez con mayor rapidez, se redefinen identidades colectivas en nuevos lugares sociales cuyos mapas no se pueden trazar con categorías anticuadas. Esta reconfiguración del espacio/tiempo hace más difícil sostener las viejas narrativas eurocéntricas de la historia universal, pero también crea las condiciones para la existencia de una universalidad descentrada.

Pero el mapa de un mundo polarizado en centros de modernidad y áreas atrasadas que esperan ser "iluminadas" -ahora mediante los "ajustes internos" de la reforma liberal y no a través de la misión civilizadora del control externo directo- sigue brindando legitimidad a la autoconstitución de Occidente mediante la dominación de otras sociedades y de la naturaleza. En una época en la cual la globalización según principios neoliberales hace más abstracta e invisible la dinámica subyacente que traza este mapa imperial -lo que conduce a algunos a confundir el análisis con la descripción deslumbrante de lo que perciben como los fragmentos incandescentes de un mundo posmoderno carente de profundidad y de orden-, es más necesario que nunca entender el orden desordenado que opone contra sí misma a la humanidad y que la opone a su vez a la naturaleza.

Si bien el poder imperial se despliega ahora en el interior de circuitos financieros que vinculan a los sectores dominantes metropolitanos y periféricos y que atraviesan las fronteras nacionales, los sujetos subalternos también proliferan en espacios reconfigurados en sus propios países y en el extranjero, lo que les permite nuevas comprensiones sobre sus conexiones internacionales y su situación común. Confío en que este recuento de las transformaciones sufridas por Venezuela, al iluminar ese elusivo orden mundial, pueda encontrarse con esas nuevas comprensiones y ayudar a contrarrestar la formación en curso de centros de dominación a expensas de otros subalternos, en

cualquier lugar del mundo.

Referencias

Archivos

Consejo Venezolano de Industrias

Corporación Venezolana de Fomento

Corporación Venezolana de Guayana

El Nacional

El Universal

Fedecámaras

Fundación Andrés Mata (archivo visual)

Fundación Boulton

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional (archivo de hojas sueltas y archivo audiovisual)

Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Minas e Hidrocarburos

Palacio de Miraflores (archivo histórico)

Registro Mercantil de Comercio Últimas Noticias

Periódicos

Ahora (1936-1938)

Fantoches

Economía Hoy

El Diario de Caracas

El Heraldo (1954-1956)

El Mundo El Nacional El País (1945-1957)

El Universal

The Daily Journal

Últimas Noticias

Revistas

Auténtico

Bohemia

Business Week

Business Latin America

Referencias

Resumen

Revista de las Fuerzas Armadas

Revista Producción

The Monthly Report

Veneconomía

Zeta

Libros y artículos

Abente, Diego. 1987. "Venezuelan Democracy Revisited." en *Latin American Research Review*, 22:1,225-240.

Abouhamad, Jeannette. 1970. *Los hombres de Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Abrams, Philip. 1988. "Notes on the Difficulty of Studying the State." *Journal of Historical Sociology*, 1:1, 58-89.

Abreu, Manuel Gonzalez. 1980. *Venezuela foránea*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Acedo de Sucre, María de Lourdes; y Carmen Margarita Nones Mendoza. 1967. *La generación venezolana de 1928*. Caracas: Oficina de Estudios Sociales y Económicos.

Acedo Mendoza, Carlos. 1967. *La vivienda en el área metropolitana de Caracas*. Caracas: Cuatricentenario de Caracas.

Acedo Mendoza, Manuel. 1976. *Por qué Eugenio Mendoza*. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza.

Acosta Espinosa, Nelson; y Heinrich Gorodeckas. 1985. *La adecuación*. Caracas: Ediciones Centauro.

Acosta, Irma. 1974. *¿Qué carajo hago yo aquí?* Caracas: Tipografía El Sobre.

Acosta Saignes, Miguel. 1987. *Latifundio*. Caracas: Procuraduría Agraria Nacional.

Acosta Silva, Manuel. 1976. *Historias del 28*. Caracas: Talleres Tipográficos de la Escuela Técnica Popular.

Acuña, Guido. 1989. *Pérez Jiménez: un gendarme innecesario*. Caracas: Pomaire Venezuela, S.A.

Adelman, Morris. 1964. "The World Oil Outlook", en Marion Clawson (ed.). *Natural Resources and International Development*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Adelman, Morris. 1972. *The World Petroleum Market*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Adelman, Morris. 1982. *Opec Behavior and World Oil Prices*. London: Allen&Unwin.

Adolfo Ruiz, Gustavo. 1991. *La educación de Bolívar*. Caracas: Fondo Editorial Trópykos.

- Agnew, Jean Christophe. 1986. *Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo-American Thought, 1550-1750*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Agüero, Felipe. 1995. "Crisis and Decay of Democracy in Venezuela: The Civil-Military Dimension", en *Venezuelan Democracy Under Stress*. McCoy, Jennifer L.; Andrés Serbin; William C. Smith; y Andrés Stambouli (eds.). 1995. New Brunswick: University of Miami Press, North-South Center, 215-236.
- Aguilera, Jesús Antonio. 1975. *La población de Venezuela: dinámica histórica, socio-económica, y geografía*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Ahmad, Aijaz. 1987. "Jameson's Rhetoric of Otherness and the 'National Allegory'." *Social Text*, 17 (otoño), 3-25.
- Ahmad, Aijaz. 1992. *In Theory*. Londres: Verso.
- Alavi, Hamza. 1972. "The Postcolonial State." *New Left Review*, 72.
- Albornoz, Orlando. S/F. *Reforma de Estado y educación*. Caracas: Copre.
- Alejandro Vargas, Francisco. 1981. *Los símbolos sagrados de la nación venezolana*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Alexander, Robert J. 1964. *The Venezuelan Democratic Revolution. A Profile of the Regime of Rómulo Betancourt*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Alexander, Robert J. 1990. *Venezuela's Voice for Democracy*. Nueva York: Praeger.
- Alfonzo Godoy, Luis. 1982. *La denuncia militar*. Caracas.
- Aliber, Robert. 1983. *The International Money Game*. Nueva York: Basic Books.
- Allen, Henry J. 1940. *Venezuela: A Democracy*. Nueva York: Doubleday.
- Almoina de Carrera, Pilar. 1987. *El héroe en el relato oral venezolano*. Caracas: Monte Ávila Latinoamericana.
- Almond, Gabriel A.; y Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Alshereidah, Mazhar. 1973. *Nigeria: petróleo y sangre*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Althusser, L. 1970. *Reading "Capital"*. Londres: New Left Books.
- Álvarez, Rubén Darío. 1987. *La democracia venezolana, criatura deforme*. Caracas.
- Amariglio, Jack; y Antonio Callari. "Marxian Value and the Problem of the Subject: The Role of Commodity Fetishism", en *Fetishism as Cultural Discourse*. Emily Apter; y William Pietz (eds.). Ithaca: Cornell University, 186-216.

- Amin, Samir. 1974. *Accumulation on a World Scale*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Amin, Samir. 1976. *Unequal Development*. Londres: Monthly Review Press.
- Amin, Samir. 1978. *The Law of Value and Historical Materialism*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Amin, Samir. 1989. *Eurocentrism*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Amin, Samir. 1990. *Delinking*. Londres: Zed Books.
- Amnesty International. 1987. *Political Prisoners in Venezuela*. Londres: Amnesty International.
- Amnesty International. 1988. *Memorandum al gobierno de Venezuela*. London: Amnesty International.
- Amuzegar J. 1982. "Oil Wealth: A Very Mixed Blessing." *Foreign Affairs*, 60: 814-835.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Communities*. Londres: Verso.
- Anderson, Perry. 1968. "Components of the National Culture." *New Left Review*, 50 (julio- agosto): 3-57.
- Anderson, Perry. 1974. *Lineages of the Absolutist State*. Londres: Verso.
- Anderson, Perry. 1988. "Modernity and Revolution", en *Marxism and the Interpretation of Culture*. Cary Nelson; y Lawrence Grossberg (eds.). Urbana: University of Illinois Press.
- Aniyar, Lolita. 1992. *Democracia y justicia penal*. Caracas: Congreso de la República.
- Antonorsi-Blanco, Marcel; e Ignacio Ávalos Gutiérrez. 1980. *La planificación ilusoria*. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.
- Appadurai, Arjun. 1986. "Introduction: Commodities and the Politics of Value", en *The Social Life of Things*. Arjun Appadurai (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 3-60.
- Appadurai, Arjun. 1991. "Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology", en *Working in the Present*. Richard Fox (ed.). Santa Fe: School of American Research, 191-210.
- Appadurai, Arjun (ed.). 1988. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Apter, Emily; y William Pietz. 1993. *Fetishism as Cultural Discourse*. Ithaca: Cornell University.
- Aranda, Sergio. 1977. *La economía venezolana*. Bogotá: Siglo XXI.
- Aranda, Sergio. 1983. *Las clases sociales y el Estado en Venezuela*. Caracas: Editorial Pomaire.
- Araujo, Jesús. 1990. *Juan Vicente Gómez*. Caracas: Escuela Técnica Popular.
- Araujo, Orlando. 1969. *Situación industrial de Venezuela*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela.
- Arcila Farfas, Eduardo. 1974. *Centenario del Ministerio de Obras Públicas*. Caracas: MOP.

- Arendt, Hanna. 1958. *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Arguedas, José María. 1977. *Formación de una cultura nacional indoamericana*. México: Siglo XXI.
- Armstrong, Nancy. 1990. "Occidental Alice." *Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies*, 2: 2, 3-40.
- Arráiz Jiménez, Antonio. 1983. "Bs. 1.300.000 diarios de ganancia líquida se llevan los petroleros." [Caracas, julio de 1936], en *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. El debate político en 1936*. Caracas: Congreso de la República, 193-208.
- Arrighi, Giovanni. 1979. "Peripheralization of Southern Africa, I: Changes in Production Processes." *Review*, 3:161-191.
- Arroyo Talavera, Eduardo. 1988. *Elecciones y negociaciones: los límites de la democracia en Venezuela*. Caracas: Fondo Editorial Conicyt.
- Asad, Talal. 1973. "Two European Images of Non-European Rule", en *Anthropology and the Colonial Encounter*. Talal Asad (ed.). Londres: Athlone.
- Asad, Talal. 1987. "Are There Histories of Peoples Without Europe?" *Comparative Studies in Society and History*, 29: 594-607.
- Ascanio, Consuelo. 1985. "Consideraciones sobre la situación del café venezolano entre 1908 y 1935." *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 613-628.
- Asturias, Miguel Ángel. 1946. *El señor presidente*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Attiga, Ali Ahmed. 1981. *Development Options of the Arab Oil Exporting Countries*. Safat: Organization of Arab Petroleum Exporting Countries.
- Attali, Jacques. 1977. *Bruits: essai sur l'économie politique de la musique*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Avendaño Lugo, José Ramón. 1982. *El militarismo en Venezuela: la dictadura de Pérez Jiménez*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Azocar, Gustavo. 1992. *El Amparo: crónica de una masacre*. Madrid: Editorial Planeta Venezolana, S.A.
- Balandier, George. 1970. "The Colonial Situation: A Theoretical Approach", en *The Sociology of Black Africa: Social Dynamics in Central Africa*. D. Garman (trad.). Nueva York: Praeger.
- Ball, Michael. 1977. "Differential Rent and the Role of Landed Property" en *International Journal of Urban and Regional Research*; 1: 3, 380-403.
- Ball, Michael. 1980. "On Marx's Theory of Agricultural Rent: a Reply to Ben Fine" en *Economy and Society*; 9 (agosto), 304-326.

Baloyra, Enrique A. 1974. "Oil Policies and Budgets in Venezuela, 1938-1968" en *Latin American Research Review*, 9: 2,28-72.

Baloyra, Enrique; y John D. Martz. 1976. *Electoral Mobilization and Public Opinion. The Venezuelan Campaign of 1973*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Baloyra, Enrique; y John D. Martz. 1979. *Political Attitudes in Venezuela: Societal Cleavages and Political Opinion*. Austin: University of Texas Press.

Banaji, Jairus. 1970. "The Crisis of British Anthropology" en *New Left Review*, 64: 71-85.

Banco Central de Venezuela. 1978. *La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años*. Caracas: Banco Central.

Banco Central de Venezuela. 1979. *Informe Económico*. Caracas: Editorial Arte.

Banco Central de Venezuela. Varios años. *Informe Económico*. Caracas: Banco Central.

Baptista, Asdrúbal. 1991. *Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1989*. Caracas: Ediciones María di Mase.

Baptista, Asdrúbal; y Bernard Mommer. 1987. *El petróleo en el pensamiento económico venezolano: un ensayo*. Caracas: Ediciones IESA.

Baran, Paul. 1957. *The Political Economy of Growth*. Nueva York: Monthly Review Press.

Baranson, Jack. 1969. *Automotive Industries in Developing Nations*. Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development.

Barber, Karin. 1982. "Popular Reactions to the Petro-Naira" en *The Journal of Modern African Studies*, 20: 3,431-450.

Baretta, Silvio; R. Duncan; y John Markoff. 1978. "Civilization and Barbarism: Cattle Frontiers in Latin America" en *Comparative Studies in Society and History*, 20: 4,587-605.

Barker, Francis. 1984. *The Tremulous Private Body: Essays on Subjection*. Londres: Methuen.

Baranson, Jack. 1968. *Automotive Industries in Developing Countries*. Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development.

Bartra, Roger. 1987. *La jaula de la melancolía*. México, D.F.: Grijalbo.

Barreto, Daisy. 1995. "The Cult of María Lionza in Venezuela: Between Legend, History, Myth, and Ideology". Inédito. Caracas.

Barrios, Gonzalo. 1981. *La imperfecta democracia*. Caracas: Centauro.

Barrios, Gonzalo. 1989. "Intervención sin título", en *Diario de Debates del Senado, República de Venezuela* XIX vol. 1. Caracas: Imprenta del Congreso de la República, 143-148.

- Basadre, Jorge. 1980. *La multitud, la ciudad y el campo en la historia de Perú*. Lima: Ediciones Treintatrés.
- Battaglini, Oscar. 1993. *Legitimación del poder y lucha política en Venezuela 1936-1941*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Baudrillard, Jean. 1981. *For a Critique of the Political Economy of the Sign*. St. Louis, MO.:Telos.
- Baudrillard, Jean. 1983. *Simulations*. Nueva York: Semiotext.
- Baumol, William J. 1974. "The Transformation of Values: What Marx 'Really' Meant (An Interpretation)" en *Journal of Economic Literature*; XII: 1 (marzo), 51-62.
- Bautista Fuenmayor, Juan. 1979.1928-1948: *Veinte años de política*. Caracas.
- Bautista Urbaneja, Diego. 1992. *Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo*. Caracas: Ediciones Cepet.
- Benítez-Rojo, Antonio. 1992. *The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective*. Durham, N.C.: Duke University Press.
- Benjamin, Walter. 1969. *Illuminations*. Nueva York: Schocken Books.
- Bennett, Douglas C. 1979. "Agenda Setting and Bargaining Power: The Mexican State vs. the Transnational Automobile Corporations" en *World Politics*, 32:57-89.
- Bennett, Douglas C. 1984. "The World Automobile Industry and its Implications for Developing Countries" en *Profits, Progress and Poverty: Case Studies of International Industries in Latin America*. Richard F. Newfarmer (ed.). Notre Dame: University of Notre Dame Press, 193- 226.
- Bennett, Douglas C. 1985. *Transnational Corporations versus the State. The Political Economy of the Mexican Auto Industry*. Princeton: Princeton University Press.
- Bennett, Douglas; y Kenneth Sharpe. 1979. "Agenda Setting and Bargaining Power: The Mexican State vs. Transnational Corporations" en *World Politics*, 32:1 (octubre), 57-89.
- Bennett, Douglas; y Kenneth Sharpe. 1979. "Transnational Corporations and the Political Economy of Export Promotion: The Case of the Mexican Automobile Industry" en *International Organization*, 33:2 (primavera), 177-201.
- Bentaleb, Fatima. 1984. "La rente dans la société et la culture en Algérie" en *Pétrole et société*-, 26 (enero-marzo), 75-104.
- Bergquist, Charles. 1986. *Labor in America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia*. Stanford: Stanford University Press.
- Bergsten, Fred; Thomas Horst; y Theodore H. Moran. 1978. *American Multinationals and American*

Interests. Washington, D.C.: Brookings Institute.

Berlant, Lauren. 1991. *The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia, and Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press.

Bernal, Martin. 1987. *Black Athena*. New Brunswick, NJ.: Rutgers University Press.

Bernstein, Richard J. 1991. *New Constellation: The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity*. Boston: MIT University Press.

Beroes, Agustín. 1990. *Recadi: la gran estafa*. Caracas: Planeta.

Berrefjord, Ole; y Per Heum. 1984. "Offshore Petroleum Activities and the Development of the Political Economy in Norway" en *Pétrole et société*; 26 (enero-marzo), 203-209.

Berroeta, Pedro. 1987. *Rómulo Betancourt: los años del aprendizaje. 1908-1948*. Caracas: Ediciones Centauro.

Betancourt, Rómulo. 1956. *Venezuela, política y petróleo*. México: Fondo de Cultura Económica.

Betancourt, Rómulo. 1975. *Venezuela, dueña de su petróleo*. Caracas: Ediciones Centauro.

Betancourt, Rómulo. 1979. *Venezuela, Oil and Politics*. Boston: Houghton Mifflin.

Betancourt, Rómulo. 1983. "Discurso pronunciado en el mitin de las izquierdas" [Caracas, septiembre de 1936] en *Pensamiento político venezolano del siglo XX*. Documentos para su estudio. El debate político en 1936. Caracas: Congreso de la República, 291-294.

Bhabha, Homi. 1985. "Signs Taken for Wonders: Questions of Ambivalence and Authority under a Tree Outside Delhi, May 1817" en *Critical Inquiry*, 12:1,144-165.

Bhabha, Homi. 1986. "The Other Question: Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism" en *Literature, Politics and Theory*. Francis Barker; Peter Hulme; Margaret Iversen; y Diana Loxley (eds.). Londres: Methuen, 148-172.

Bhabha, Homi. 1990. "DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation" en *Nation and Narration*. Homi Bhabha (ed.). Londres: Routledge, 291-322.

Bigler, Gene. 1980. "State Economic Control versus Market Expansion: The Third Sector in Venezuelan Politics." Ph.D disser. Baltimore: Johns Hopkins University.

Bigler, Gene; y Franklin Tugwell. 1986. "Banking on Oil in Venezuela" en *Bordering on Trouble. Resources and Politics in Latin America*. Andrew Maguire; y Janet Welsh (eds.). Bethesda: Adler & Adler, 152-189.

Bitar, Sergio; y Eduardo Troncoso. 1983. *El desafío industrial de Venezuela*. Buenos Aires: Pomaire.

Blanco Muñoz, Agustín. 1980. *El 23 de enero: habla la conspiración*. Caracas: Faces-UCV/ Ateneo.

- Blanco Muñoz, Agustín. 1981. *La conspiración cívico-militar*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Blanco Muñoz, Agustín. 1982. *La lucha armada: hablan tres comandantes de la izquierda revolucionaria, Lino Martínez, Moisés Moleiro, Américo Martín*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Blanco Muñoz, Agustín. 1983. *Habló el General*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Blanco Muñoz, Agustín. 1983. *Pedro Estrada habla*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Blanco Muñoz, Agustín. 1989. *Acción Democrática: memorias de una contradicción*. Caracas: Cátedra Pío Tamayo.
- Bland, Gary; Johanna Mendelson Forman; Louis W. Goodman; y Moisés Naim (eds.).1995. *Lessons of the Venezuelan Experience*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Blank, David Eugene. 1969. "Policy Making Style and Political Development: The Introduction of a System of Democratic Planning in Venezuela, 1958-1968." Ph.D disser. Nueva York: Columbia University.
- Blank, David Eugene. 1971. "Political Conflict and Industrial Planning in Venezuela, 1958- 1974" en *Venezuela*, 1969. Philip B. Jr. Taylor (ed.).Washington, D.C.: Johns Hopkins University Press, 84-106.
- Blank, David Eugene. 1973. *Politics in Venezuela*. Boston: Little, Brown and Company.
- Blank, David Eugene. 1974. "The Politics of Industrial Planning in Venezuela, 1958-1974: Variations on the Theme of Democratic Planning" presentado en *V National Meeting of the Latin American Studies Association*, San Francisco.
- Blank, David Eugene. 1984. *Politics in a Petroleum Republic*. New York: Praeger.
- Bloch, Maurice; y Jonathan Parry. 1989. *Money and the Morality of Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Block, Fred. 1977. "The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State" en *Socialist Revolution*, 7: 6-28.
- Bohm-Bawerk, Eugen von. 1949. *Karl Marx and the Close of His System* [1896], Paul M. Sweezy ed. Nueva York: Augustus M. Kelley.
- Bolívar, Ligia. 1992. "La masacre de El Amparo" en *Revista Sic*, 545 (junio).
- Bond, Robert D. 1975. "Business Associations and Interest Politics in Venezuela." Ph.D disser. Nashville: Vanderbilt.
- Bond, Robert D. 1977. *Contemporary Venezuela and its Role in International Affairs*. Nueva York: New York University Press.

- Borges, Jorge Luis. 1970. *Dreamtigers*. Austin: University of Texas Press.
- Borges, Jorge Luis. 1978. *Doctor Brodie's Report*. Nueva York: E.P. Dutton.
- Bottome, Robert, y John Sweeney. 1987. *The Economic Outlook for Venezuela, 1987-1992*. Caracas: VeneEconomía.
- Braudel, Fernand. 1967. *Capitalism and Material Life 1400-1800*. Nueva York: Harper & Row.
- Braverman, Harry. 1975. *Labor and Monopoly Capital*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Brenner, Robert. 1977. "The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism" en *New Left Review*, 104: 25-93.
- Brenner, Robert. 1977. "The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism" en *New Left Review*, 104 (julio-agosto), 82-87.
- Brewer-Carias, Allan Randolph. 1975. *Cambio político y reforma del Estado en Venezuela*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Briceño Iragorri, Mario. 1971. *Pérez Jiménez presidente. La autoelección de un déspota*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Briceño-León, Roberto. 1990. *Los efectos perversos del petróleo*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
- Bright, Charles; y Susan Harding (eds.). 1984. *Statemaking and Social Movements*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Brito Figueroa, Federico. 1966. *Historia económica y social de Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Britto García, Luis. 1988. *La máscara del poder: del gendarme necesario al demócrata necesario*. Caracas: Alfadil.
- Britto García, Luis. 1989. *El poder sin máscara*. Caracas: Alfadil.
- Broehl, Wayne G. 1968. *The International Basic Economy Corporation*. New Hampshire: National Planning Association.
- Brunhoff, Suzanne de. 1973. *Marx and Money*. Nueva York: Urizen Books.
- Brunhoff, Suzanne de. 1973. "Marx as an a-Ricardian: Value, Money, and Price at the Beginning of Capital" en *Economy and Society*; 2:4 (noviembre), 421-429.
- Brunhoff, Suzanne de. 1976. *Marx on Money*. Nueva York: Urizen Books.
- Brunner, José J. 1987. "Notes on Modernity and Postmodernity in Latin American Culture" en *Boundary*; 2: 20, 35-54.

- Buci-Glucksmann, C. 1979. *Gramsci and the State*. Londres: Lawrence and Wishart.
- Bucks-Morss, Susan. 1995. *The Dialectics of Seeing*. Cambridge: MIT Press.
- Buiter, Willem H.; y Douglas D. Purvis. 1980. *Oil, Disinflation, and Export Competitiveness: A Model of the "Dutch Disease"*. Coventry: University of Warwick Press, Department of Economics.
- Burggraaff, Winfield J. 1972. *The Venezuelan Armed Forces in Politics 1935-1959*. Columbia: University of Missouri Press.
- Burggraaff, Winfield J.; y Richard L. Millett. 1995. "More than Failed Coups: The Crisis in Venezuelan Civil-Military Relations" en Louis W. Goodman, Johanna Mendelson Forman, Moisés Naim, Joseph S. Tulchin, Gary Bland, (eds.). *Lessons of the Venezuelan Experience*. Washington: The Woodrow Wilson Center Press, 54-78.
- Bye, Vegard. 1979. "Nationalization of Oil in Venezuela. Re-defined Dependence and Legitimization of Imperialism" en *Journal of Peace Research*, 16:1,57-78.
- Caballero, Manuel. 1992. *El tirano liberal*. Caracas: Monte Ávila.
- Cabrera, Elery. 1985. "Gómez el 'Buen elemento'" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 685- 688.
- Cabrujas, José Ignacio. 1987. "El Estado de disimulo" en *Heterodoxia y Estado*. 5 Respuestas. *Estado&Reforma*. Edición Especial. Caracas: Copre, 7-35.
- Caldera, Rafael. 1989. "Intervención sin título" en *Diario de Debates del Senado, República de Venezuela* XIX vol. 1 (enero-junio), Caracas: Imprenta del Congreso de la República, 135-140.
- Cammack, Paul. 1986. "Redemocratization: a Review of the Issues" en *Bulletin of Latin American Research*, 4:39-46.
- Capo raso, James A. 1978. "Dependence and Dependency in the Global System" en *International Organization*, 32 (I): 1-12.
- Capriles Ayala, Carlos. *Los años treinta y cuarenta*. Caracas: Consorcio Ediciones Capriles.
- Cardoso, Fernando Henrique. 1973. "Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications" en *Authoritarian Brazil: Origins, Politics and Future* vol. 1. Alfred Stepan (ed.). New Haven: Yale University Press, 142-176.
- Cardoso, Fernando Henrique. 1985. "La democracia en América Latina" en *Punto de Vista*, 23 (abril), 1-9.
- Cardoso, Fernando Henrique; y Enzo Faletto. 1979. *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University of California Press.
- Cardozo, Arturo. 1987. *Luchas revolucionarias en Venezuela y el mundo*. Caracas.

- Carmona, Gladys de. 1979. *Los quiero vivos*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Carnoy, M. 1984. *The State and Political Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Carnoy, Martin. 1984. *The State and Political Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Carpentier, Alejo. 1977. *Reasons of State*. Londres: Readers and Writers Cooperative.
- Carrera Damas, Germán. 1968. *Boves: Aspectos socioeconómicos de la Guerra de Independencia*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central.
- Carrera Damas, Germán. 1969. *El culto a Bolívar*. Caracas: Instituto de Antropología e Historia, Universidad Central de Venezuela.
- Carrera Damas, Germán. 1972. *Historia contemporánea de Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Carrera Damas, Germán. 1980. *Una nación llamada Venezuela*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Carrera Damas, Germán; Carlos Salazar y Manuel Caballero. 1966. "El concepto de la historia" en Laureano Vallenilla Lanz: *Seminario de historia de la historiografía venezolana, 1962-1963*. Caracas: UCV.
- Carrier, James G. 1992. "Occidentalism: The World Upside Down" en *American Ethnologist*, 19: 2,195-212.
- Casals, José Ignacio; Aura Celina Casanova; y Constantino Quero Morales. 1969. "Estudio sobre la industria automotriz venezolana y sus perspectivas de desarrollo." Inédito.
- Castellanos, José Emilio. 1979. *El terrible fantasma de Carmona*. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.
- Castillo D'Imperio, Ocarina. 1985. "Gómez en el saber popular" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 645-648.
- Castillo D'Imperio, Ocarina. 1990. *Los años del buldozer: ideología y política 1948-1958*. Caracas: Trópykos.
- Castro Leiva, Luis. 1985. "El debate sobre el desarrollo del país en el siglo XIX" en *Apreciación del proceso histórico venezolano*. Caracas: Universidad Metropolitana.
- Catalá, José Agustín. 1989. *El estallido de febrero*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Catalá, José Agustín (ed.). 1994. *Otros juicios sobre el proceso al ex-presidente*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Chakrabarty, Dipesh. 1992. "Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for 'Indian' Pasts?" en *Representations*, 37 (invierno), 1-26.

- Chandra, Biban. 1980. "Karl Marx, His Theories of Asian Societies and Colonial Rule" en *Sociological Theories: Race and Colonialism*. Paris: Unesco.
- Chatelus, Michel; e Yves Schemeil. 1984. "Towards a New Political Economy of State Industrialization in the Arab Middle East" en *International Journal of Middle Eastern Studies*, 16: 251-265.
- Chatterjee, Partha. 1986. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* Londres: Zed Books.
- Chatterjee, Partha. 1993. *The Nation and It's Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
- Chen, Xiaomei. 1992. "Occidentalism as Counterdiscourse: *He shang* in Post-Mao China" en *Critical Inquiry*, 18:686-712.
- Chi-Keung Ko. 1981. "Dependent Development of an Export Platform Economy: Taiwan." Ph.D disser. Chicago: University of Chicago Press.
- Chitty La Roche, Nelson. 1993. *250 millones: la historia secreta*. Caracas: Editorial Pomaire.
- Chomsky, Noam. 1991. "The New World Order" en *Agenda*, 62:13-15.
- Chossudovsky, Miguel. 1977. *La miseria en Venezuela*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Clifford, James; y George E. Marcus (eds.). 1986. *The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press.
- Cohen, David William. 1994. *The Combing of History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Cohn, Bernard. 1980. "History and Anthropology: The State of Play" en *Comparative Studies in Society and History*, 22:198-221.
- Cohn, Bernard. 1981. "Anthropology and History in the 1980's: Towards a Rapprochement" en *Journal of Interdisciplinary History*, 12: 227-252.
- Cohn, Bernard. 1983. "Representing Authority in Victorian India" en *Inventing Tradition*. Terence Ranger (ed.). Cambridge: University of Cambridge Press, 165-209.
- Cohn, Bernard. 1985. "The Command of Language and the Language of Command" en *Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society* vol. 4. R. Guha (ed.). Nueva Delhi: Oxford University Press.
- Cohn, Bernard. 1987. *An Anthropologist Among the Historians and Other Essays*. Nueva Delhi: Oxford University Press.
- Collier, David (ed.). 1979. *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.

- Colmenares, Elio. 1989. *La insurrección de febrero*. Caracas.
- Comaroff, Jean. 1985. *Body of Power, Spirit of Resistance: The Culture and History of a South African People*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Comaroff, Jean; y John Comaroff. 1986. "Christianity and Colonialism in South Africa" en *American Ethnologist*, 13:1-19.
- Comaroff, Jean; y John Comaroff. *Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, vol. 1 of Revelation and Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Comaroff, Jean; y John Comaroff. 1989. "The Colonization of Consciousness in South Africa" en *Economy and Society*, 18: 267-296.
- Comaroff, Jean;y John Comaroff. 1990. "Goodly Beasts, Beastly Goods: Cattle and Commodities in a South African Context" en *American Ethnologist*, 17:195-216.
- Comaroff, Jean; y John Comaroff. 1991. *Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, vol. I of Revelation and Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Comaroff, Jean; y John Comaroff. 1992. *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder, CO.: Westview Press.
- Comaroff, John L. 1982. "Dialectical Systems, History and Anthropology" en *Journal of Southern African Studies*, 8:143-172.
- Comaroff, John L. 1987. "Of Totemism and Ethnicity: Consciousness, Practice, and the Signs of Inequality" en *Ethos*, 52:301-323.
- Comaroff, John L. 1989. "Images of Empire, Contests of Conscience: Models of Colonial Domination in South Africa" en *American Ethnologist*, 16:661-685.
- Conaghan, Catherine M.;y Rosario Espinal. 1990. "Unlikely Transitions to Uncertain Regimes?" en *Journal of Latin American Studies*, 22 (octubre), 553-574.
- Conybeare, J.A. 1981. "The Rent Seeking State and Revenue Diversification" en *World Politics*, 35:25-42.
- Coppedge, Michael. 1994. *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford University Press.
- Cooper, Frederick. 1994. "Conflict and Connection: Rethinking African History" en *American Historical Review* 99, 5:1516-1545.
- Cooper, Fred; y Ann Stoler. 1989. "Introduction. Tensions of Empire: Colonial Control and Visions of Rule" en *Special Issue of American Ethnologist*, 16: 609-621.

Corden, W. M.; y J.P. Neary. 1982. "Booming Sector and De-industrialization in a Small Open Economy" en *Economic Journal*, 92: 825-848.

Cordero Velasquez, América. 1985. "1928: las concesiones petroleras y la corrupción" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 567-578.

Córdoba, Diego. 1968. *Los desterrados y Juan Vicente Gómez*. Caracas.

Córdova, Armando. 1973. *Inversiones extranjeras y subdesarrollo*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Cornejo-Polar, Antonio. 1989. "Indigenist and Heterogeneous Literatures: Their Dual Sociocultural Status" en *Latin American Perspectives*, 16 (primavera), 12-28.

Coronil, Fernando. 1988. *The Magical State: History and Illusion in the Appearance of Venezuelan Democracy*. Working Paper N°112. Notre Dame, Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.

Coronil, Fernando. 1989. "Discovering America-Again: The Politics of Selfhood in the Age of Postcolonial Empires" en *Dispositio*; 14: 36, 315-331.

Coronil, Fernando. 1992. "Can Postcoloniality Be Decolonized? Imperial Banality and Postcolonial Power" en *Public Culture*, 5:1 (otoño), 89-108.

Coronil, Fernando. 1995. *Transculturation and the Politics of Theory: Countering the Center, Cuban Counterpoint. Introduction to Fernando Ortiz's Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar*. Durham: Duke University Press, ix-lvi.

Coronil, Fernando. 1996. "Beyond Occidentalism: Towards Non-Imperial Geohistorical Categories" en *Cultural Anthropology*, 11:1, 51-87.

Coronil, Fernando. 1998. "De transición en transición: democracia y nación en la América Latina" en *Anuario Mariateguiano*, X(10): 158-170.

Coronil, Fernando. 1999. "Más allá del occidentalismo: hacia categorías históricas no imperiales" en *Casa de las Americas*, enero-marzo, (206) 21:49. La Habana.

Coronil, Fernando. 2000. "Listening to the Subaltern: Postcolonial Studies and the Poetics of Neocolonial States" en Laura Chrisman y Benita Parry, *Postcolonial Theory and Criticism*, Suffolk: D.S. Brewer.

Coronil, Fernando; y Julie Skurski. 1982. "Reproducing Dependency: Auto Policy and Petrodollar Circulation in Venezuela" en *International Organization*, 36:1, 61-94.

Coronil, Fernando; y Julie Skurski. 1991. *Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics*

of Political Violence in Venezuela” en *Comparative Studies in Society and History*; 33: 2, 288-337.

Corradi, Juan E.; Patricia Weiss Fagen; y Manuel Antonio Garretón (eds.).1992. *Fear at the Edge: State Terror and Resistance in Latin America*. Berkeley: University of California Press.

Corrigan, Philip; y Derek Sayer. 1985. *The Great Arch*. Nueva York: Basil Blackwell.

Cox, Robert W. 1979. “Ideologies and the New International Economic Order” en *International Organization*, 33: 2 (primavera), 257-301.

Croce, Arturo. 1977. *Petróleo, mi general*. Caracas: Monte Avila Editores.

Croes, Hemmy. 1973. *El movimiento obrero venezolano (elementos para su historia)*. Caracas: Ediciones Movimiento Obrero.

Crosby, Alfred W., Jr. 1972. *The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492*. Westport, CN.: Greenwood Press.

Crump, Thomas. 1981. *The Phenomenon of Money*. Londres: Routledge and Kegan Paul.

Daalder, Hans. 1962. *The Role of the Military in the Emerging Countries*. Gravenhage: Mouton.

DaMatta, Roberto. 1991. *Carnivals, Heroes and Rogues. South Bend*: University of Notre Dame Press.

Dalton, Juan José. “El Salvador: Ecologist Warns of Serious Shortage” en *Latin American News Service*, IPS March 27,1995.

Dávila, Luis Ricardo. 1992. *Imaginario político venezolano*. Caracas: Alfadil Ediciones.

Davis, Natalie Z. 1981. “Anthropology and History in the 1980's” en *Journal of Interdisciplinary History*, 12: 2, 267-275.

De Castro, Josué. 1977. *The Geography of Hunger*. Nueva York: Monthly Review Press.

De Certeau, Michel. 1988. *The Practice of Everyday Life*. Berkeley: University of California Press.

De Ipola, Emilio; y Juan Carlos Portantiero. 1984. “Crisis social y pacto democrático” en *Punto de Vista*, 21 (agosto), 13-20.

De la Cruz, Rafael; y Heinz Sonntag. 1985. “The State and Industrialization in Venezuela” en *Latin American Perspectives*, 12: 4, 75-104.

De la Plaza, Salvador. 1970. *La formación de las clases sociales en Venezuela*. Caracas: Cuadernos Rocinante.

Derby, Lauren. 1994. “Haitians, Magic, and Money: Raza and Society in the Haitian-Dominican Borderlands, 1900 to 1937” en *Comparative Studies in Society and History*; 36:3 (julio), 488-526.

Derrida, Jacques. 1967. *De la grammatologie*. Paris: Minuit.

Derrida, Jacques. 1978. “Writing and Difference” A. Bass. (trad.). Chicago: University of Chicago Press.

- Díaz Sánchez, Ramón. 1973. *Transición política y realidad en Venezuela*. Caracas: Monte Ávila.
- Dinkelspiel, John. 1967. "Administrative Style and Economic Development." Ph.D. disser. Boston: Harvard University.
- Dirks, Nicholas B. 1987. *The Hollow Croxvn: Ethnohistory of an Indian Kingdom*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dirks, Nicholas B. (ed.). 1992. Colonialism and Culture. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Dobb, Maurice. 1946. *Studies in the Development of Capitalism*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Dobb, Maurice. 1973. *Theories of Value and Distribution Since Adam Smith*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dodge, Stephen Charles. 1968. "The History of the Development of the Guayana Region." Ph.D. diss. University of Minnesota, Minneápolis.
- Douglas, Mary. 1966. *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Doyle, Kenneth O. (ed.). 1992. "The Meanings of Money" en *American Behavioral Scientist*, 35: 6 (julio-agosto), 641-840.
- Dumont, Jean Paul. 1976. *Under the Rainbow: Nature and Supernature among the Panare Indians*. Austin: University of Texas Press.
- Dumont, Louis. 1977. *From Mandeville to Marx: The Genesis and Triumph of Economic Ideology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Duno, Pedro. 1975. *Los doce apóstoles*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Durkheim, Emile. 1947. *The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology*. J. Swain (trad.). Glencoe, IL.: Free Press.
- Dussel, Enrique. 1993. "Eurocentrism and Modernity" en *Boundary*, 2: 65-76.
- Eagleton, Terry; Fredric Jameson; y Edward Said. 1990. *Nationalism, Colonialism, and Literature*. Minneápolis: University of Minnesota Press.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean. 1995. *Economic Survey of Latin America and the Caribbean 1993* vol. II. Santiago, Chile: Eclac.
- Edel, Matthew. 1976. "Marx's Theory of Rent: Urban Applications" en *Kapitalstate*, Suummer 4/ 5.
- Eftekhari, Nirou. 1984. "La Norvège et le 'mal hollandais'" en *Pétrole et Société*; 26 (enero- marzo), 181-202.
- Eftekhari, Nirou. 1984. "La rente et la dépendance en Algérie" en *Pétrole et Société*; 26 (enero-

marzo), 31-74.

El Nacional. 1989. *El día que bajaron los cerros*. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.

El Nacional. 1990. "Cuando la muerte tomó las calles" en *El Nacional*, Caracas, (27/2).

Eldred, Michael. 1984. "A Reply to Gleicher" en *Capital and Class*; 23 (verano), 135-140.

Elias, Norbert. 1978. "The Civilizing Process." E. Jephcott. (trad.). Nueva York: Urizen Books.

Ellner, Steven. 1979. "The Venezuelan Left in the Era of the Popular Front, 1936-1945" en *Journal of Latin American Studies*, 10 (mayo), 169-184.

Ellner, Steven. 1980. *Los partidos políticos y la disputa por el control del movimiento sindical en Venezuela, 1936-1948*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Ellner, Steven. 1981. "Factionalism in the Venezuelan Communist Movement. 1937-1948" en *Science and Society*, 45:1(primavera), 52-70.

Ellner, Steven. 1982. "Populism in Venezuela, 1935-1948: Betancourt and 'Acción Democrática'" en *Latin American Populism in Comparative Perspective*. Michael Conniff (ed.) Albuquerque, N.M.: University of New Mexico Press.

Ellner, Steven 1987. *The Venezuelan Petroleum Corporation and the Debate Over Government Policy in Basic Industry, 1960-1976*. Glasgow: University Press of Glasgow, Institute of Latin American Studies.

Ellner, Steven. 1988. *Venezuela's Movimiento al Socialismo: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics*. Durham: Duke University Press.

Elson, Diane. 1979. *The Representation of Labour in Capitalism*. Londres: CSE Books.

Emmanuel, Arghiri. 1972. *Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade*. Nueva York: Monthly Review Press.

Entrikin, Nicholas. 1991. *The Betweenness of Place: Towards a Geography of Modernity*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Equipo Proceso Político. 1978. "CAP: 5 años" en *Proceso Político*.

Escobar, Arturo. 1994. *Encountering Development*. Princeton: Princeton University Press.

Escobar, Ticio. 1988. "Postmodernismo/precapitalismo" en *Casa de las Américas*, 168: 13-19.

Escobar Salom, Ramón. 1975. *Evolución política de Venezuela*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Escobar Salom, Ramón. 1985. "Venezuela: the Oil Boom and the Debt Crisis" en *Latin America and the World Recession*. Esperanza Durán (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 120-129.

España, Luis Pedro. 1989. *Democracia y renta petrolera: ensayo introductorio de Ramón Espinasa V.*

Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello.

Espinasa, Ramón V. 1989. "Petróleo, economía e historia." Introducción a *Democracia y renta petrolera*, de Luis Pedro España. Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello.

Esser, Klaus. 1976. *Oil and Development, Venezuela*. Berlín: Germán Development Institute.

Esté, Raúl. 1987. *La masacre de Yumare*. Caracas: Fondo Editorial "Carlos Aponte".

Evans, Peter. 1979. *Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil*. Princeton: Princeton University Press.

Evans, Peter; Dietrich Rueschemeyer; y Theda Skocpol. 1985. *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press.

Evans, Peter; Dietrich Rueschemeyer; y Evelyne Huber Stephens. 1985. *States versus Markets in the World System*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Evans-Prichard, Edward E. 1937. *Witchcraft, Oracles, and Magic Among Azande*. Oxford: Clarendon.

Ewell, Judith. 1984. *Venezuela: A Century of change*. Londres: C. Hurst and Company.

Fabar, Al. 1978. "Auto In the Eighties, Uncars and Unworkers" en *Radical America*, 13: 31-37.

Fabian, Johannes. 1983. *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object*. Nueva York: Columbia University Press.

Fagan, Stuart 1.1977. "Unionism and Democracy" en *Venezuela: The Democratic Experience*, John D.Martz y David J. Myers, (eds.). Nueva York: Praeger Publishers, 174-194.

Fagen, Richard (ed.). 1979. *Capitalism and the State in U.S.-Latin American Relations*. Stanford: Stanford University Press.

Falcón Urbano, M.F. 1969. *Desarrollo e industrialización en Venezuela*. Caracas: Faces.

Fanon, Frantz. 1963. *The Wretched of the Earth: A Negro Psychoanalyst's Study of the Problems of Racism & Colonialism in the World Today*. Nueva York: Grove.

Fanon, Frantz. 1967. *Black Skins, White Masks*. Nueva York: Grove.

Favenpa. 1972. *La industria nacional de partes y piezas automotrices* vol. I-III. Caracas.

Ferguson, James. 1988. "Cultural Exchange: New Developments in the Anthropology of Commodities" en *Cultural Anthropology*, 3:4,488-513.

Ferguson, James. 1990. *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fernández de Amicarelli, Estela. 1991. "La estructura categorial del discurso político venezolano:

- variaciones en la oposición civilización-barbarie: Francisco de Miranda y Simón Rodríguez. 1790-1850” en *Revista Interamericana de Bibliografía*, 41:1,63-81.
- Fine, Ben. 1975. *Marx's 'Capital.'* London: Macmillan.
- Fine, Ben. 1979. “On Marx's Theory of Agricultural Rent” en *Economy and Society*; 8:3.
- Fine, Ben. 1980. “On Marx's Theory of Agricultural Rent: a Rejoinder” en *Economy and Society*; 9: 3 (agosto), 327-331.
- Fine, Ben. 1986. *The Value Dimension: Marx versus Ricardo and Sraffa.* Nueva York: Kegan Paul.
- Fishlow, Albert. 1990. “The Latin American State” en *Journal of Economic Perspectives*, 4 (verano), 61-74.
- Fleet, Michael. 1977. “Host Country-Multinational Relations in the Colombian Automobile Industry” en *Interamerican Economic Affairs*, 32:1,3-32.
- Flores, Jean; Juan Flores; y George Yúdice (eds.). 1992. *On Edge: The Crisis of Contemporary Latin American Culture.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Ford Motor de Venezuela. 1975. *Estudio de la industria automotriz en Venezuela.* Caracas.
- Foster, Robert J. 1990. “Value Without Equivalence: Exchange and Replacement in a Melanesian Society” en *Man*; 25 (marzo), 54-69.
- Foucault, Michel. 1980. *Power and Knowledge.* Nueva York: The Harvester.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977.* Colin Gordon (ed.). Nueva York: Pantheon.
- Foucault, Michel. 1994. *The Order of Things.* Nueva York: Vintage Books.
- Franco, Jean; Juan Flores; y George Yúdice (eds.). 1992. *On Edge: The Crisis of Contemporary Latin American Culture.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Frank, Andre Gunder. 1972. *Lumpenbourgeoisie and Lumpendevelopment: Dependence, Class and Politics.* Nueva York: Monthly Review Press.
- Frank, Andre Gunder. 1978. *Dependent Accumulation and Underdevelopment.* Nueva York: Monthly Review Press.
- Frankel, S. Herbert. 1977. *Two Philosophies of Money.* Nueva York: St. Martin's Press.
- Fraser, Nancy. 1989. *Unruly Practices.* Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Friedlander, Judith. 1975. *Being Indian in Hueyapan: A Study of Forced Identity in Contemporary Mexico.* Nueva York: St. Martin's Press.
- Fuenmayor, Juan Bautista. 1975. *Historia de la política contemporánea venezolana, 1899-1969.*

Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Fuenmayor, Juan Bautista. 1982. *Historia de la Venezuela política contemporánea*, Caracas.

Fuenzalida, Edmundo; y Osvaldo Sunkel. 1974. *Transmtionalization, National Disintegration and Reintegration in Contemporary Capitalism*. Brighton, England: IDS International Working Paper N° 18.

Fundación Eugenio Mendoza. 1976. *Venezuela moderna, 1926-1967*. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza.

Fundación John Boulton. 1976. *Política y economía en Venezuela. 1810-1910*. Caracas: Fundación John Boulton.

Furtado, Celso. 1970. *Economie Development of Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gadant, Monique. 1984. "Boumediène, le discours de l'Etat" en *Pétrole et Société*; 26 (enero- marzo), 105-126.

Gallardo, Freddy Vivas. 1993. *Venezuela-Estados Unidos 1939-1945: La coyuntura decisiva*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Gallegos, Rómulo. 1959. *Doña Bárbara*, [1929] en *Obras completas I*. Madrid: Aguilar, 493-799.

García Araujo, Mauricio. 1971. *El gasto público consolidado en Venezuela*. Caracas: Artegrafía.

García Canclini, Néstor. 1988. "Culture and Power: The State of Research" en *Media, Culture and Society*, 10:495.

García Canclini, Néstor. 1990. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.

García Iturbe, Reinaldo. 1961. *La siderúrgica: su ruta hacia la Koppers*. Caracas: Pensamiento Vivo.

García Márquez, Gabriel. 1977. *El otoño del patriarca*. Barcelona: Ediciones G.P.

García Ponce, Guillermo; y Francisco Camacho Barrios. 1982. *Diario de la resistencia y la dictadura 1948-1958*. Caracas: Ediciones Centauro.

García Villasmil, Martín. 1964. "Usos legítimos del poder: Los militares como fuerza positiva en el desarrollo democrático" en *Siempre Firmes* (julio-octubre), 98-99.

Garmendia, Hermann. 1980. *María Lionza*. Caracas: Monte Ávila.

Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.

Gereffi, Gary; y Lynn Hempel. 1996. "Latin America in the Global Economy: Running Faster to Stay in Place" en *Nacla Report on the Americas*, XXIX: 4 (enero-febrero), 18-27.

Gereffi, Gary; y Miguel Korzeniewicz (eds.). 1994. *Commodity Chains and Global Capitalism*. Nueva

York: Praeger.

Gerstl, Otto. 1977. *Memorias e historias*. Caracas: Ediciones de la Fundación John Boulton.

Ghalioun, Burhan. 1984. "Rente pétrolière et transformations sociales en Norvège" en *Pétrole et Société*, 26 (enero-marzo), 163-180.

Gibson, Ross. 1992. *South of the West: Postcolonialism and the Narrative Construction of Australia*. Indianápolis: Indiana University Press.

Giddens, Anthony. 1987. *The Nation-State and Violence: vol. II of A Contemporary Critique of Historical Materialism*. Berkeley: University of California Press.

Gil Fortoul, José. 1953. *Historia constitucional de Venezuela*, 4ª ed. Caracas: Ministerio de Educación.

Gil Yepes, José Antonio. 1978. *El reto de las elites*. Madrid: Tecnos.

Gil Yepes, José Antonio. 1981. *The Challenge of Venezuelan Democracy*. New Brunswick, N.J.: Transaction Books.

Gilmore, Robert L. 1964. *Caudillism and Militarism in Venezuela, 1810-1910*. Athens: Ohio University Press.

Godzich, Wlad. 1994. *The Culture of Literacy*. Cambridge: Harvard University Press.

Gómez, Ramón Florencio. 1967. "Las fuerzas armadas: columna vertebral del sistema democrático" en *Política*, 6 (abril).

Gómez Calcaño, Luis, Thais Maingon; y Margarita López-Maya. 1989. *De Punto Fijo al pacto social: desarrollo y hegemonía en Venezuela (1958-1985)*. Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.

Gómez Calcaño, Luis; y Margarita López-Maya. 1990. *El tejido de Penélope. La reforma del Estado en Venezuela (1984-1988)*. Caracas: Cendes-Apucv-IPP.

González Abreu, Manuel. 1980. *Venezuela foránea*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

González Guinán, Francisco. 1954. *Historia contemporánea de Venezuela*, 15 vols. Caracas: Presidencia de la República.

González Ordosgoitti, Enrique. 1991. "En Venezuela todos somos minorías" en *Nueva Sociedad*, 111:128-140.

Goodman, Louis W., Johanna Mendelson Forman, Moisés Naim, Joseph S. Tulchin, Gary Bland (eds.). 1995. *Lessons of the Venezuelan Experience*. Washington: The Woodrow Wilson Center Press.

Goux, Jean-Joseph. 1990. *Symbolic Economies: After Marx and Freud*. Ithaca: Cornell University Press.

Gramsci, Antonio. 1971. "Selections from the Prison Notebooks." Quentin Hoare; y George Nowell Smith (trad.). Nueva York: International Publishers.

Grases, Pedro. 1967. La forja de un ejército, 1810-1814. Caracas.

Greenberg, Stanley B. 1980. Race and State in Capitalist Development: Comparative Perspectives. New Haven: Yale University Press.

Gregory, Christopher A. 1982. Gifts and Commodities. Londres: Academic Press.

Gregory, Derek y John Urry. 1985. Social Relations and Spatial Structures. Basingstroke, Hampshire: Macmillan.

Griffin, James M.; y David J. Teece. 1982. OPEC Behavior and World Oil Prices. Londres: George Allen and Unwin.

Grindle, Merilee S. (ed.). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Guédez, Emigdio Cañizales. 1993. El indio en la guerra de independencia. Caracas: Dirección de Cultura UCV /Asociación de Profesores.

Guha, Ranajit. 1983. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Nueva Delhi: Oxford University Press.

Guha, Ranajit. 1988. "The Prose of Counter-Insurgency" en Selected Subaltern Studies. Ranajit Guha; y Gayatri Spivak (eds.). Nueva Delhi: Oxford University Press, 37-44.

Guha, Ranajit. 1989. "Dominance without Hegemony and Its Historiography" en Subaltern Studies. Ranajit Guha (ed.). vol. 6. Nueva Delhi: Oxford University Press, 210-309.

Habermas, Jürgen. 1987. "The Philosophical Discourse of Modernity." Frederick Lawrence (trad.). Cambridge: MIT Press.

Hall, Stuart. 1986. "The Problem of Ideology-Marxism Without Guarantees" en journal of Communication Inquiry, 10: 2,5-27.

Hailwood, P.; y S. Sinclair. 1981. Oil, Debt, and Development: OPEC in the Third World. Londres: Allen and Unwin.

HalperinDonghi, Tulio. 1993. The Contemporary History of Latin America. Basingstoke: Macmillan.

Haraway, Donna. 1985. "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s" en Socialist Review, 80:65-107.

Haraway, Donna. 1991. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Nueva York: Routledge.

Harris, Olivia. 1989. "The Earth and the State: the Sources and Meanings of Money in Northern Potosi, Bolivia" en *Money and the Morality of Exchange*. Maurice Bloch; y Jonathan Parry (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 232-268.

Harstock, Nancy C.M. 1983. *Money, Sex, and Power*. Nueva York: Longman.

Hart, Keith. 1989. "Heads or Tails? Two Sides of the Same Coin" en *Man*, 21:4,637-656.

Harvey, David. 1989. *The Condition of Postmodernity*. Cambridge: Basil Blackwell.

Hassan, Mostafa. 1975. *Economic Growth and Employment Problems in Venezuela*. Nueva York: Praeger.

Haug, W.F. 1986. *Critique of Commodity Aesthetics. Appearance, Sexuality and Advertising in Capitalist Society*. Minneápolis: University of Minnesota Press.

Hausman, Ricardo. 1981. "State Landed Property, Oil Rent and Accumulation in the Venezuelan Economy." Ph.D disser. Ithaca: Cornell University.

Hegel, G.W.F. 1967. *The Phenomenology of Mind*. Nueva York: Harper Torchbooks.

Hegel, G.W.F. 1975. *Lectures on the Philosophy of History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hebdige, Dick. 1979. *Subculture: The Meaning of Style*. Londres: Methuen.

Hein, Wolfgang. 1980. "Oil and the State of Venezuela" en *Oil and Class Struggle*. Peter Nore; y Terisa Turner (eds.). Londres: Zed Press.

Hein, Wolfgang; y Conrad Stenzel. 1973. "The Capitalist State and Underdevelopment in Latin America: The Case of Venezuela" en *Kapitalstate*, 2: 31-48.

Hellinger, Daniel. 1979. *Class and Politics in Venezuela: Prologue to a Theory of Representative Democracy in Dependent Nations*. Mimeo. St. Louis, MO.:Webster College.

Hellinger, Daniel. 1985. "Democracy in Venezuela" en *Latin American Perspectives*, 12: 75-82.

Hellinger, Daniel. 1991. *Venezuela: Tarnished Democracy*. Boulder, CO.: Westview Press.

Henwood, Doug. 1996. "The Free Flow of Money" en *Nacla Report on the Americas XXIX*: 4 (enero-febrero), 11-17.

Herman, Donald L. 1980. *Christian Democracy in Venezuela*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Hermoso, José Manuel. 1991.1936: *Programas y poder*. Caracas: Editorial Kinesis.

Herrera Campíns, Luis. 1978. "Transición política" en 1958: *Tránsito de la dictadura a la democracia en Venezuela*, Salcedo Bastardo et al.(eds.). Caracas: Editorial Ariel.

Hilferding, Rudolf. 1949. *Bohm-Bawerk's Criticism of Marx*. Londres: Merlin.

Hill, Christopher. 1969. *Reformation to Industrial Revolution, 1530-1780*. Harmondsworth: Penguin.

Hindess, Barry; y Paul Q. Hirst. 1975. *Pre-Capitalist Modes of Transportation*. Londres: Routledge and Kegan Paul.

Hirschman, Albert O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.

Hirschman, Albert O. 1968. "The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America" en *Quarterly Journal of Economics*, 42:1 (febrero), 3-32.

Hirschman, Albert O. 1977. *The Passions and the Interests*. Princeton: Princeton University Press.

Hirschman, Albert O. 1979. "The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for its Economic Determinants" en David Collier (ed.). *The New Authoritarianism in Latin America*. Princeton: Princeton University Press.

Hobsbawm, Eric J. 1959. *Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the Nineteenth and Twentieth Centuries*. Manchester: Manchester University Press.

Hobsbawm, Eric J.: y Terence O. Ranger. 1983. *The Invention of Tradition*. Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press.

Holloway, John; y Sol Picciotto. 1978. *State and Capital. A Marxist Debate*. Austin: University of Texas Press.

Holsti, Kal J. 1978. "A New International Politics? Diplomacy in Complex Interdependence" en *International Organization*, 32: 2 (primavera), 513-530.

Hotelling, H. 1931. "The Economics of Exhaustible Resources" en *Journal of Political Economy*, 39:139-175.

Howard, Harrison Sabin. 1975. *Rómulo Gallegos y la revolución burguesa en Venezuela*. Caracas: Monte Avila.

Hugh-Jones, Stephen. 1992. "Yesterday's Luxuries, Tomorrow's Necessities: Business and Barter in Northwest Amazonia" en *Barter, Exchange and Value*. Caroline Humphrey; y Stephen Hugh-Jones. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 42-74.

Humphrey, John. 1982. *Capitalist Control and Workers' Struggle in the Brazilian Auto Industry*. Princeton: Princeton University Press.

Hyde, Lewis. 1978. *The Gift. Imagination and the Erotic Life of property*. Nueva York: Vintage Books.

Izard, Manuel et al. 1976. *Política y economía en Venezuela. 1810-1976*. Caracas: Fundación John Boulton.

Izard, Miguel. 1970. *Series estadísticas para la historia de Venezuela*. Mérida: Universidad de los

Andes.

Izard, Miguel. 1981. *El miedo a la revolución*. Madrid: Editorial Universal.

James, C.L.R. 1963. *The Black Jacobins. Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution*. Nueva York: Vintage Books.

Jameson, Fredric. 1981. *The Political Unconscious*. Ithaca: Cornell University Press.

Jameson, Fredric. 1984. "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism" en *New Left Review*, 146: 53-92.

Jameson, Fredric. 1986. "Third-World Literature in the Era of Multinational Capital" en *Social Text*, 15 (otoño), 65-88.

Jameson, Fredric. 1988. *The Ideologies of Theory: Essays, 1971-1986*. Londres: Routledge.

Jameson, Fredric. 1990. *Late Marxism: Adorno, or the Persistence of the Dialectic*. Londres: Verso.

Jenkins, Rhys Owen. 1977. *Dependent Industrialization in Latin America: The Automobile Industry in Argentina, Chile and Mexico*. Nueva York: Praeger.

Jenkins, Rhys Owen. 1987. *Transnational Corporations and the Latin American Automobile Industry*. Londres: Macmillan.

Jessop, Bob. 1982. *The Capitalist State: Marxist Theories and Methods*. Nueva York: Columbia University Press.

Jessop, Bob. 1983. *Theories of the State*. Nueva York: New York University Press.

Jessop, Bob. 1990. *State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place*. University Park: Pennsylvania State University Press.

Joseph, Gil M.; y Nugent, Daniel. 1994. *Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico*. Durham: Duke University Press.

Kaci, Djamel; y Kendillen Leila. 1984. "L'Algérie, proie de son quotidien" en *Pétrole et Société*; 26 (enero-marzo), 127-146.

Kalmanovitz, Salomón. 1978. *Desarrollo de la agricultura en Colombia*. Bogota: DNP/UEA.

Kantorowicz, Ernst H. 1957. *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*. Princeton: Princeton University Press.

Karl, Terry Lynn. 1982. "The Political Economy of Petrodollars: Oil and Democracy in Venezuela." Ph.D disser. Stanford: Stanford University.

Karl, Terry Lynn. 1987. "Petroleum and Political Facts: The Transition to Democracy in Venezuela" en *Latin American Research Review*, 22:1,63-94.

Karl, Terry Lynn. 1995. "The Venezuelan Petro-State and the Crisis of Its' Democracy" en Jennifer L. McCoy; Andrés Serbin; William C. Smith; y Andrés Stambouli (eds.). 1995. *Venezuelan Democracy Under Stress*. New Brunswick: University of Miami Press, North- South Center, 33-58.

Karlsson, Weine. 1975. *Manufacturing in Venezuela*. Estocolmo: Almquist and Wiksell International.

Kaufman, Robert; y Barbara Stallings (eds.). 1989. *Debt and Democracy in Latin America*. Boulder, CO.: Westview Press.

Kazancigil, Ali. 1986. *The State in Global Perspective*. Paris: Unesco.

Keenan, Thomas. 1993. "The Point is to (Ex)Change It: Reading Capital, Rhetorically" en *Fetishism as Cultural Discourse*. Emily Apter; y William Pietz (eds.). Ithaca: Cornell University Press, 152-185.

Keynes, John Maynard. 1963. *Essays in Persuasion*. Nueva York: W.W. Norton & Co.

Klapp, Merrie Gilbert. 1987. *The Sovereign Entrepreneur: Oil Policies in Advanced and Less Developed Countries*. Ithaca: Cornell University Press.

Kliksberg, Bernardo; y Pedro José Madrid (eds.). 1975. *Aportes para una administración pública latinoamericana*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Klor de Alva, Jorge. 1992. "Colonialism and Postcolonialism as (Latin) American Mirages" en *Colonial Latin American Review*, 1:1-23.

Kolb, Glen L. 1974. *Democracy and Dictatorship in Venezuela, 1945-1958*. Hamden: Connecticut College Press.

Komblith, Miriam. 1991. "The Political Constitution-Making: Constitutions and Democracy in Venezuela" en *Journal of Latin American Studies*, 23 (febrero), 61-89.

Kouznetsov, Alexander. 1988. "Materials Technology and Trade Implications" en *Materials Technology and Development* (cap. 5 de *Advance Technology Alert System*). Nueva York: United Nations, 67-71.

Krause, Ulrich. 1982. *Money & Abstract Labour: On the Analytical Foundations of Political Economy*. Londres: Verso.

Krispin, Karl. 1994. *Golpe de Estado Venezuela 1945-1948*. Caracas: Editorial Panapo.

Kronish, Rich; y Kenneth Mericle (eds.). 1984. *The Political Economy of the Latin American Motor Vehicle Industry*. Cambridge: MIT Press.

Krueger, Anne O. 1974. "The Political Economy of the Rent-Seeking Society" en *The American Economic Review*, 64: 3 (junio), 291-303.

Kurth, James. 1975. "The International Politics of Postindustrial Societies: The Role of the Multinational Corporation" en *Stress and Contradiction in Modern Capitalism*. L. Linderberg; R. Alfor;

- C. Crouch; y C. Offe (eds.). Lexington: Lexington Books, 11-44.
- Kurtzman, Joel. 1993. *The Death of Money*. Nueva York: Simon & Schuster.
- Kusch, Rodolfo. 1962. *América profunda*. Buenos Aires: Hachette.
- Laclau, Ernesto. 1971. "Feudalism and Capitalism in Latin America" en *New Left Review*, 67:19- 38.
- Laclau, Ernesto. 1977. *Nationalism, Populism, and Ideology*. Londres: Verso.
- Laclau, Ernesto. 1990. *New Reflections on the Revolution of Our Time*. Londres: Verso.
- Lan, David. 1989. "Resistance to the Present by the Past: Mediums and Money in Zimbabwe" en *Money and the Morality of Exchange*. Maurice Bloch; y Jonathan Parry (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 191-208.
- Larrazábal, Radamés; y Leticia Barrios G. 1991. *El colapso del populismo y el auge de la oligarquía financiera*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Colección Rectorado.
- Latin American Subaltern Studies Group. 1993. "Founding Statement" en *The Posmodernism Debate in Latin America*, John Beverley y José Oviedo (eds.). *Boundary 2* (otoño): 110-121.
- Leach, Edmund Ronald. 1954. *Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure*. Londres: Bell.
- Leal, Ildefonso. 1971. *La cultura venezolana en el siglo xviii*. Caracas: Academia Venezolana de la Historia.
- Lechner, Norbert. 1977. *La crisis del Estado en América Latina*. Caracas: El Cid.
- Lechner, Norbert. 1981. *Estado y política en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Lechner, Norbert. 1987. *Cultura política y democratización*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Lechner, Norbert (ed.). 1981. *Estado y política en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Lechner, Norbert (ed.). 1984. *Problemas de cultura política en la teoría de la democracia*. Santiago de Chile: Flacso.
- Lefebvre, Henry. 1974. *La production de l'espace*. París: Anthropos.
- Leff, Nathaniel. 1979. "Monopoly Capitalism and Public Policy in Developing Countries" en *Kyklos*, 32: 718-738.
- Lefort, Claude. 1988. *Democracy and Political Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- LeGoff, Jacques. 1988. "The Medieval Imagination." A. Goldhammer (trad.). Chicago: University of Chicago Press.
- Lenin, Vladimir Illich. 1971. "Selections from The Development of Capitalism in Russia" en *Essential*

- Works of Lenin. H. Christman (ed.). Nueva York: Bantam Press.
- Levine, Daniel H. 1973. *Conflict and Political Change in Venezuela*. Princeton: Princeton University Press.
- Levine, Daniel H. 1985. "The Transition to Democracy: Are There Lessons from Venezuela?" en *Bulletin of Latin American Research*, 4: 2,47-61.
- Levine, Daniel H. 1990. "Popular Groups, Popular Culture and Popular Religion" en *Comparative Studies in Society and History*, 32: 718-764.
- Lévi-Strauss, Claude. 1976. "Structural Anthropology, vol. II." M. Layton, (trad.). Nueva York: Basic Books.
- Lewis, W. Arthur. 1949. *The Principles of Economic Planning*. Londres: D. Dobson.
- Lezama Lima, José. 1969. *Expresión americana*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Lichtman, Richard. 1975. "Marx's Theory of Ideology" en *Socialist Revolution*, 5: 45-76.
- Lieuwen, Edwin. 1959. *Petroleum in Venezuela: A History*. Berkeley: University of California Press.
- Lieuwen, Edwin. 1961. *Venezuela*. Londres: Oxford University Press.
- Lindeman, John; y Wayne C. Taylor. 1955. *The Creole Petroleum Corporation in Venezuela*. Washington, D.C.: National Planning Association.
- Linz, Juan; y Alfred Stepan (eds.). 1978. *The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Lipietz, A. 1983. "Towards Global Fordism?" en *New Left Review*, 132: 33-47.
- Lipset, Seymour Martin. 1960. *Political Man: The Social Bases of Politics*. Garden City: Double Day.
- Lippi, Marco. 1979. *Value and Naturalism in Marx*. Londres: New Left Books.
- Liscano, Juan. 1950. *Folklore y cultura: Ensayos*. Caracas: Editorial Ávila Gráfica.
- Lojkin, Jean. 1977. *Le Marxisme. L'état et la question urbaine*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Lombardi, John V. 1977. *Venezuelan History: A Comprehensive Working Bibliography*. Boston: G.K. Hall.
- Lombardi, John V. 1982. *Venezuela, the Search for Order, the Dream of Progress*. Nueva York: Oxford University Press.
- Longuenesse, Elisabeth. 1984. "Rente pétrolière et structure de classe dans les pays du Golfe" en *Pétrole et Société*; 26 (enero-marzo), 147-162.
- López, Gilberto. 1985. "La Venezuela gomecista" en *Tierra Firme*. 3 (octubre-diciembre), 649- 662.
- López Borges, Nicanor. 1971. *El asesinato de Delgado Chalbaud*. Caracas: Ediciones Centauro.
- López-Maya, Margarita. 1984. "Organizaciones asociativas de la Venezuela en transición. 1900-1945"

en Cuadernos del Cendes, 4,137-166.

López-Maya, Margarita. 1994. Las relaciones de los EE.UU. con Venezuela durante el trienio. Disertación doctoral, Caracas: Universidad Central de Venezuela.

López-Maya, Margarita; y Luis Gómez Calcaño. 1985. "Desarrollo y hegemonía en la sociedad venezolana: 1958 a 1985". Caracas: Cendes, mimeo.

López-Maya, Margarita; y Nikolaus Werz. 1988. Estado y el movimiento sindical (1958-1980). Caracas: Cendes.

López-Sanz, Rafael. 1993. Parentesco, etnia y clase social en la sociedad venezolana. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Love, Joseph. 1980. "Raúl Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange" en *Latin American Research Review*, 15:3,45-70.

Lovera, Alberto. 1977. "Desarrollo urbano y renta del suelo en Valencia." Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Lovera de Sola, Roberto J. 1985. "Catálogo bibliográfico sobre el tiempo y gobierno de Juan Vicente Gómez" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 663-684.

Lovera de Sola, Roberto J. 1991. "Los libros de la democracia: esquema para un repertorio bibliográfico" en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, 74:195-208.

Lubrano, Aldo; y Rosa Haydée Sánchez. 1987. Del hombre completo a Jaime es como tú. Recuento de un proceso electoral venezolano. Caracas: Vadell Hermanos.

Lucena, Héctor. 1982. El movimiento obrero petrolero. Proceso de formación y desarrollo. Caracas: Ediciones Centauro.

Lukacs, George. 1971. *History and Class Consciousness*. Cambridge: MIT Press.

Luzardo, Rodolfo. 1963. *Notas histórico-económicas, 1928-1963*. Caracas: Editorial Sucre.

Machado Hernández, Alfredo. 1944. "La función económica de las razas de color de la formación del Estado venezolano" en *Revista de Hacienda*, 9: 6 (junio), 5-19.

Machillanda, José. 1993. *Cinismo político y golpe de Estado*. Caracas: Italgráfica.

MacPherson, C.B. (ed.). 1978. *Property. Mainstream and Critical Positions*. Toronto: University of Toronto Press.

Madero, Roberto. 1981. "La industria automotriz tendrá que adaptarse" en *El Nacional*, (3 de agosto).

Magallanes, Manuel Vicente (ed.). 1987. *Reformas electorales y partidos políticos*. Caracas: Publicaciones del Consejo Supremo Electoral.

Magallanes, Manuel Vicente. 1987. *Sistemas electorales, acceso al sistema político, y sistema de partidos*. Caracas: Publicaciones del Consejo Supremo Electoral.

Mainwaring, Scott. 1992. "Transition to Democracy and Democratic Consolidation: Theoretical and Comparative Perspective" en Scott Mainwaring, Guillermo O'Donnell, y J. Samuel Valenzuela (eds.). *Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective*, 294-341. Notre Dame: University of Notre Dame Press / Kellogg Institute.

Malavé Mata, Héctor. 1987. *Los extravíos del poder: euforia y crisis del populismo en Venezuela*. Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela.

Mallon, Florencia. 1994. "The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History" en *American Historical Review* 99, 5:1491-1515.

Malloy, James M. (ed.). 1977. *Authoritarianism and Corporatism in Latin America*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Mamalakis, Markos. 1978. "La teoría mineral del crecimiento: la experiencia latinoamericana" en *El Trimestre Económico*, 45 (octubre-diciembre), 841-878.

Mandel, Ernest. 1978. *Late Capitalism*. Londres: Verso.

Mandel, Ernest; y Alan Freeman (eds.). 1984. *Ricardo, Marx, Sraffa*. Londres: Verso.

Mann, Charles C.; y Mark L. Plummer. 1994. *Noha's Choice: The Future of Endangered Species*. Nueva York: Alfred A. Knopf.

Maravall, José Antonio. 1986. *Culture of the Baroque: Analysis of a Historical Structure*. Minneápolis: University of Minnesota Press.

Marcus, George E.; y Michael M.J. Fisher. 1986. *Anthropology as Cultural Critique*. Chicago: The University of Chicago Press.

Markoff, John. 1996. *Waves of Democracy, Social Movements and Political Change*. Thousand Oaks, CA.: Pine Forge.

Márquez, Joaquín Gabaldón. 1978. *Memoria y cuento de la generación del veintiocho*. Caracas: Consejo Municipal del Distrito Federal.

Márquez, Walter. 1992. *Comandos del crimen: la masacre de El Amparo*. Caracas: Fuentes Editores.

Marshall, Alfred. 1961. *Principles of Economics*. Londres: Macmillan.

Marta Sosa, Joaquin. 1984. *Venezuela: elecciones y transformación social*. Caracas: Ediciones Centauro.

Martín, Américo. 1976. *Los peces gordos*. Valencia: Vadell Hermanos.

Martín Frechilla, Juan José. 1994. Planes, planos y proyectos para Venezuela: 1908-1958 (Apuntes para una historia de la construcción del país). Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Martínez, Aníbal. 1966. Our Gift, Our Oil. Viena.

Martínez, Aníbal. 1973. Historia petrolero-venezolana en 20 jornadas. Caracas: Edreca Editorial.

Martínez, Aníbal. 1980. Gumersindo Torres: the Pioneer of Venezuelan Petroleum Policy. Patricia Pernalette (trad.). Caracas: Petróleos de Venezuela.

Martz, John D. 1964. The Venezuelan Elections of December 1, 1963. Washington, D.C.: Institute for the Comparative Study of Political Systems.

Martz, John D. 1966. Acción Democrática: Evolution of a Modern Political Party in Venezuela. Princeton: Princeton University Press.

Martz, John D. 1979. Political Attitudes in Venezuela: Societal Cleavages and Political Opinion. Austin, TX: University of Texas Press.

Martz, John D.; y Enrique Baloyra. 1979. Electoral Mobilization and Public Opinion: The Venezuelan Campaign of 1973. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Martz, John D.; y David Myers. 1977. Venezuela: The Democratic Experience. Nueva York: Praeger.

Marx, Karl. 1967. Capital. Nueva York: International Publishers.

Marx, Karl. 1968. Theories of Surplus-Value. Moscú: Progress Publishers.

Marx, Karl. 1973. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Harmondsworth: Penguin Books.

Marx, Karl. 1981. Capital vol. I-III. Nueva York: Vintage Books.

Marx, Karl. 1981. The 18th Brumaire of Louis Bonaparte. Nueva York: International Publishers.

Marx, Karl. 1985-1991. El Capital. Libros uno-tres. México: Siglo XXI.

Massarrat, Mohssen. 1980. "The Energy Crisis: The Struggle for the Redistribution of Surplus Profit from Oil" en Oil and Class Struggle. Peter Nore; y Terisa Turner (eds.). Londres: Zed Press, 26-68.

Massey, Doreen. 1992. "Politics and Space/Time" en New Left Review, 196: 65-84.

Masur, Gerhard. 1966. Nationalism in Latin America: Diversity and Unity. Nueva York: Macmillan.

Matthews, Robert D. Jr. 1977. Violencia rural en Venezuela, 1840-1858. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.

Mauss, Marcel. 1954. The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. I. Cunnison (trad.). Londres: Cohen and West.

Mayobre, Eduardo. 1985. "The Renegotiation of Venezuela's Foreign Debt During 1982 and 1983" en

Politics and Economics of External Debt Crisis: the Latin American Experience. Miguel S. Wionczek (ed.). Boulder, CO.: Westview Press Special Studies in Latin America and the Caribbean, 325-347.

Mayobre, José Antonio. 1970. Las inversiones extranjeras en Venezuela. Caracas: Monte Ávila.

Maza Zavala, D.F. et al. 1974. Venezuela. Crecimiento sin desarrollo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Maza Zavala, D.F. 1991. "Prólogo" en 1936: programas vs. poder José Manuel Hermoso. Caracas: Editorial Kinesis, i-viii.

Mbembe, Achille. 1992. "The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarity in the Postcolony" en *Public Culture*, 4:2,1-30.

McBeth, Brian S. 1983. Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908-1935. Cambridge: Cambridge University Press.

McBeth, Brian S. 1985. "El impacto de las compañías petroleras en el Zulia (1922-1935)" en *Tierra Firme*; 3: (octubre-diciembre), 537-550.
Boston, MA.: G.K. Hall.

McCoy, Jennifer L. 1986. "The Politics of Adjustment: Labor and the Venezuelan Debt Crisis" en *Journal of Inter-American Studies and World Affairs*, 28:4,103-138.

McCoy, Jennifer L. 1989. "Labor and the State in a Party-mediated Democracy: Institutional Change in Venezuela" en *Latin American Research Review*, 24:2 (invierno), 35-67.

McCoy, Jennifer L.; Andrés Serbin; William C. Smith; y Andrés Stambouli (eds.). 1995. *Venezuelan Democracy Under Stress*. New Brunswick: University of Miami Press, North- South Center.

McCoy, Jennifer L. "Venezuela. Austerity and the Working Class in a Democratic Regime" en *Paying the Costs of Austerity in Latin America* Werner Baer y Howard Handelman (eds.). Boulder: Westview Press, 195-223.

Medina Febres, Mariano. 1991. 1936 MEDO 1939: Caricaturas de lucha. Caracas: Ediciones Centauro.

Meek, Ronald L. 1956. *Studies in the Labor Theory of Value*. Nueva York: Monthly Review Press.

Mehlman, Jeffrey. 1994. "Remy de Gourmont with Freud: Fetishism and Patriotism" en *Fetishism as Cultural Discourse*. Emily Apter; y William Pietz (eds.). Ithaca: Cornell University Press, 84-91.

Meillassoux, Claude. 1981. *Maidens, Meal, and Money: Capitalism and the Domestic Community*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mejia Alarcon, Pedro Esteban. 1972. *La industria del petróleo en Venezuela*. Caracas: UCV.

Melcher, Dorothea. 1992. *Estado y movimiento obrero en Venezuela (represión e integración hasta*

1948). Caracas: Academia Nacional de la Historia.

Merhav, Meir. 1971. Posibilidades de exportación de la industria venezolana. Caracas: Cordiplan.

Michaels, Walter Benn. 1985. "The Gold Standard and the Logic of Naturalism" en *Representations*, 9 (invierno), 105-132.

Mignolo, Walter. 1991. "Canons A(nd) Cross-Cultural Boundaries (Or, Whose Canon Are We Talking About?)" en *Poetics Today*, 12:1,1-28.

Mignolo, Walter. 1992. "On the Colonization of Amerindian Languages and Memories: Renaissance Theories of Writing and the Discontinuity of the Classical Tradition" en *Comparative Studies in Society and History*, 34: 2,301-330.

Mignolo, Walter. 1995. *The Darker Side of the Renaissance*. Ann Arbor, MI.:University of Michigan Press.

Mikesell, Raymond F. (ed.). 1971. *Foreign Investment in the Petroleum and Mineral Industries: Case Studies of Investor-Host Country Relations*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Miliband, Ralph. 1969. *The State in Capitalist Society*. Londres: Winfield and Nicholson.

Miliband, Ralph. 1970. "The Capitalist State-Reply to Poulantzas" en *New Left Review*, 59:53- 60.

Miliband, Ralph. 1973. "Poulantzas and the Capitalist State" en *New Left Review*, 82: 83-92.

Miller, Gary M. 1986. "Status and Loyalty of Regular Army Officers in Late Colonial Venezuela" en *Hispanic American Historical Review*, 66:4(noviembre), 667-696.

Mills, Lady Dorothy Rachel Melissa. 1931. *The Country of the Orinoco*. Londres: Hutchinson and Co.

Ministerio de Fomento. Varios años. *Memoria y cuenta*. Caracas: Ministerio de Fomento.

Ministry of Development. 1974. *Untitled Confidential Memorandum*.

Mintz, Sidney. 1985. *Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History*. Nueva York: Penguin Books.

Mitchell, Christopher (ed.). 1988. *Changing Perspectives in Latin American Studies: Insights from Six Disciplines*. Stanford: Stanford University Press.

Mitchell, Timothy. 1988. *Colonising Egypt*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mitchell, Timothy.1991. "The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics" en *American Political Science Review*. 85 (I): 77-96.

Mitchell, W.J. Thomas. 1986. *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago: University of Chicago Press.

Miyoshi, Masao. 1993. "A Borderless World? From Colonialism and Transnationalism and the Decline of the Nation-State" en *Critical Inquiry*; 19 (verano), 726-751.

- Moghadam, Ual. 1988. "Oil, the State, and Limits to Autonomy: The Iranian Case" en *Arab Studies Quarterly*, 10: 2, 225-238.
- Mogull, Robert G. 1972. "The Symbiotic Relationship of Creole and Venezuela" en *Journal of Human Relations*, 20:4,459-467.
- Moleiro, Moisés. 1978. *El partido del pueblo*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Moleiro, Moisés. 1988. *Las máscaras de la democracia*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Moleiro, Rodolfo. 1993. *De la dictadura a la democracia*. Eleazar López Contreras. Lindero y puente entre dos épocas. Caracas: Editorial Pomaire.
- Mommer, Bernard. 1983. *Petróleo, renta del suelo e historia*. Mérida: Universidad de los Andes.
- Mommer, Bernard. 1986. *La cuestión petrolera*. Caracas: Fondo Editorial Trópykos.
- Morales, Carlos. 1983. "La democracia y la economía nacional". (Caracas, septiembre de 1936.)
En *Pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio. El debate político en 1936*. Caracas: Congreso de la República, 343-348.
- Moran, Theodore. 1974. *Multinational Corporations and the Politics of Dependence*. Princeton: Princeton University Press.
- Moran, Theodore. 1978. *Oil Prices and the Future of OPEC*. Washington, D.C.: Resources for the Future.
- Moran, Theodore. 1982. "Modeling OPEC Behavior: Economic and Political Alternatives" en *OPEC Behavior and World Oil Prices*. James M. Griffin; y Davie J. Teece (eds.). Londres: George Allen and Unwin, 1-36.
- Moreno, Arellano. 1968. *Mirador de la historia política de Venezuela*. Caracas: Ediciones Edime.
- Moreno Fraguinols, Manuel. 1976. *The Sugarmill. The Socioeconomic Complex of Sugar in Cuba*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Morishima, Michio; y George Catephores. 1978. *Value, Exploitation and Growth*. Londres: McGraw-Hill Book Co.
- Morley, Morris; James F. Petras; y Steven Smith. 1977. *The Nationalization of Venezuelan Oil*. Nueva York: Praeger Special Studies in International Economics and Development.
- Morner, Magnus. 1993. *Region and State in Latin America's Past*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Munk, B. 1969. "The Welfare Costs of Content Protection: The Automotive Industry in Latin America" en *Journal of Political Economy*, 77: 85-98.

- Murray, Robin. 1977. "Value and Theory of Rent: Part One" en *Capital and Class*; (otoño), 100- 121.
- Murray, Robin. 1978. "Value and Theory of Rent: Part Two" en *Capital and Class*; 4 (primavera), 11-31.
- Musgrove, Philip. 1981. "The Oil Price Increase and the Alleviation of Poverty. Income Distribution in Caracas, Venezuela in 1966 to 1975" en *Journal of Development Economics*, 9: 2, 229-250.
- Naim, Moisés y Antonio Francés. 1995. "The Venezuelan Private Sector: From Courting the State to Courting the Market" en Louis W. Goodman, Johanna Mendelson Forman, Moisés Naim, Joseph S. Tulchin, Gary Bland, (eds.). 1995. *Lessons of the Venezuelan Experience*. Washington: The Woodrow Wilson Center Press, 165-192.
- Naim, Moisés; y Ramón Piñango (eds.). 1985. *El caso Venezuela. Una ilusión de armonía*. Caracas: Ediciones IESA.
- Naim, Tom. 1981. *The Break-up of Britain*. Londres: Verso.
- Nash, June. 1979. *We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines*. Nueva York: Columbia University Press.
- National Planning Association. 1955. *United States Business Performance Abroad: The Case Study of the Creole Petroleum Corporation in Venezuela*.
- Navarro, Desiderio. 1985. "Otras reflexiones sobre eurocentrismo y antieurocentrismo en la teoría literaria de la América Latina y Europa" en *Casa de las Americas*, 150 (mayo-junio), 68-78.
- Naylor, Thomas R. 1994. *Hot Money*. Montreal: Blackrose.
- Neale, Walter C. 1976. *Monies in Societies*. San Francisco: Chandler and Sharpe Publishers.
- Neruda, Pablo. 1978. *Canto general*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Neuhouser, Kevin. 1992. "Democratic Stability in Venezuela: Elite Consensus or Class Compromise?" en *American Sociological Review*, 57 (febrero), 117-135.
- Newfarmer, Richard F. 1979. *Transnational Conglomerates and the Economics of Dependent Development*. Greenwich: JAI.
- Nisbet, Robert. 1980. *History of the Idea of Progress*. Nueva York: Basic Books.
- Nolff, Max (ed.). 1974. *Desarrollo industrial latinoamericano*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Nore, Petter; y Terisa Turner (eds.). 1980. *Oil and Class Struggle*. Londres: Zed Press.
- Ochoa, Enrique. 1992. *Los golpes de febrero: 27-2-89,4-2-92 (de la rebelión de los pobres al alzamiento de los militares)*. Caracas: Fuentes Editores.
- O'Donnell, Guillermo A. 1973. *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: University of California Press.

- O'Donnell, Guillermo; Philippe C. Schmitter; y Laurence Whitehead (eds.). 1986. *Transitions from Authoritarian Rule. Comparative Perspectives*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Offe, Claus. 1976. "Structural Problems of the Capitalist State" en *German Political Studies*. Beyme von Klaus (ed.). Beverly Hills, CA.: Sage, 11-30.
- Offe, Claus. 1985. *Disorganized Capitalism*. Cambridge: Polity.
- O'Gorman, Edmundo. 1947. *Crisis y porvenir de la ciencia histórica*. Ciudad de México: Imprenta Universitaria.
- O'Gorman, Edmundo. 1951. *La idea del descubrimiento de América: Historia de esa interpretación y crítica de sus fundamentos*. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.
- O'Gorman, Edmundo. 1972. *Cuatro historiadores de Indias, siglo xvi: Pedro Mártir de Angleria, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Bartolomé de las Casas, Joseph de Acosta*. México: Secretaría de Educación Pública.
- O'Gorman, Edmundo. 1982. *The Invention of America: An Inquiry into the Historical Nature of the New World and the Meaning of Its History*. Bloomington: Indiana University Press.
- O'Hanlon, Rosalind. 1988. "Recovering the Subject: Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia" en *Modern Asian Studies*, 22:1,189-224.
- Olayiwola, Peter. 1983. *Petroleum and Structural Change in a Developing Country: The Case of Nigeria*. Nueva York: Praeger.
- Olayiwola, Peter. 1987. *Petroleum and Structural Change in a Developing Country, the Case of Nigeria*. Nueva York: Praeger.
- Oilman, Bertell. 1971. *Alienation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oilman, Bertell. 1982. "Theses on the Capitalist State" en *Monthly Review*, 34: 7,41-47.
- O'Malley, Michael. 1994. "Specie and Species: Race and the Money Question in Nineteenth- Century America" en *American Historical Review*, 99: 2, 369-395.
- Ordosgoiti, Napoleón. 1984. *Gallegos, el poder y el exilio*. Caracas: Editorial Domingo Fuentes.
- Ortiz, Fernando. 1995. *Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar*. Durham: Duke University Press. [Fernando Ortiz: *Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar*, La Habana: Jesús Montero, 1940; otra edición: Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978.]
- Ortner, Sherry B. 1984. "Theory in Anthropology Since the Sixties" en *Comparative Studies in Society and History*, 26:126-166.
- Oviedo y Baños, José. 1987. *The Conquest and Settlement of Venezuela*. Berkeley: University of

California Press.

Pacheco, Emilio. 1984. *De Castro a López Contreras: proceso social de la Venezuela contemporánea*. Caracas: Editorial Domingo Fuentes.

Pacheco, Luis Eduardo. 1968. *Orígenes del presidente Gómez*. Caracas: Los Talleres de Artes Gráficas de los Lisiados Trabajadores de Venezuela.

Pagden, Anthony. 1982. *The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology*. Cambridge: Cambridge University Press.

Palloix, C. 1978. *La internacionalización de capital*. Madrid: Blume.

Panitch, Leo. 1994. "Globalisation and the State" en *Socialist Register*. Ralph Miliband (ed.). Londres: Merlin, 60-93.

Parboni, Ricardo. 1986. "The Dollar Weapon: From Nixon to Reagan" en *New Left Review*, 158 (julio-agosto), 5-18.

Pardo, Mercedes Carlota de. 1973. *Monedas venezolanas*. Colección histórico-económica venezolana. Tomo 1, 2ª edición. Caracas: Banco Central de Venezuela.

Parker, Andrew. 1993. "Unthinking Sex: Marx, Engels, and the Scene of Writing" en *Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory* (ed.). Michael Warner. Minneapolis: University of Minnesota Press, 19-41.

Parry, Benita. 1987. "Problems in Current Theories of Colonial Discourses" en *Oxford Literary Review* 9: 27-58.

Parry, Jonathan. 1989. "On the Moral Perils of Exchange" en *Money and the Morality of Exchange*. Maurice Bloch; y Jonathan Parry (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 64-93.

Pashukanis, E.V. 1978. *A General Theory of Law and Marxism*. Londres: Ink Links.

Pastor, Beatriz. 1988. "Polémicas en torno al canon: implicaciones filosóficas, pedagógicas y políticas" en *Casa de las Américas*, 171 (noviembre-diciembre), 78-87.

Pearsan, M. H. 1982. "The System of Dependent Capitalism in Pre- and Post-Revolutionary Iran" en *International Journal Middle Eastern Studies*, 14:501-522.

Peeler, John. 1985. *Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica, Venezuela*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Peña, Alfredo. 1979. *Conversaciones con Carlos Andrés Pérez*. Caracas: Acción Democrática.

Pérez, Carlos Andrés. 1973. *Acción de gobierno*. Caracas: Acción Democrática.

Pérez, Carlos Andrés. 1979. *Discursos militares 1974-1979*. Caracas.

- Pérez, Carlos Andrés. 1981. *La conspiración cívico-militar*. Caracas.
- Pérez Alfonzo, Juan Pablo. 1961. *Petróleo jugo de la tierra*. Caracas: Editorial Arte.
- Pérez Alfonzo, Juan Pablo. 1971. *Petróleo y dependencia*. Caracas: Síntesis Dos Mil.
- Pérez Alfonzo, Juan Pablo. 1976. *Hundiéndonos en el excremento del diablo*. Caracas: Editorial Lisbona.
- Pérez Alfonzo, Juan Pablo; y Domingo Alberto Rangel. 1976. *El desastre*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Pérez, Ana M. 1954. *Síntesis histórica de un hombre y un pueblo*. Caracas.
- Pérez Osuna, José Antonio. 1979. *La historia de una censura*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Pérez Perdomo, Rogelio. 1995. "Corruption and Political Crisis" en Louis W. Goodman, Johanna Mendelson Forman, Moisés Naim, Joseph S. Tulchin, Gary Bland (eds.). 1995. *Lessons of the Venezuelan Experience*. Washington: The Woodrow Wilson Center Press, 311- 333.
- Pérez Sainz, Juan Pablo; y Paul Zarembka. 1979. "Accumulation and the State in Venezuelan Industrialization" en *Latin American Perspectives*, 22 (verano), 5-29.
- Pérez Schael, Maria Sol. 1993. *Petróleo y poder en Venezuela*. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana.
- Petkoff, Teodoro. 1979. *Corrupción total*. Caracas: Editorial Fuentes.
- Petras, James et al. 1977. *The Nationalization of Venezuelan Oil*. Nueva York: Praeger.
- Petras, James; y M. Morley. 1983. "Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela" en *Third World Quarterly*, 5: 8-27.
- Philip, George. 1982. *Oil and Politics in Latin America. Nationalist Movements and State Companies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Picón Salas, Mariano. 1966. "La aventura venezolana" en *Suma de Venezuela*. Caracas: Editorial Doña Bárbara, 22.
- Picón Salas, Mariano. 1969. *De la conquista a la independencia. Tres siglos de historia cultural latinoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Picón Salas, Mariano. 1976. *Comprensión de Venezuela*. Caracas: Monte Ávila.
- Picón Salas, Mariano. 1984. *Formación y proceso de la literatura venezolana* Caracas: Monte Ávila.
- Pietz, William. 1985. "The Problem of the Fetish, Part 1" en *Res*, 9 (primavera), 5-17.
- Pietz, William. 1987. "The Problem of the Fetish, Part 2" en *Res*, 13 (primavera), 23-45.
- Pietz, William. 1988. "The Problem of the Fetish, Part 3a" en *Res*, 16 (otoño), 105-123.
- Pietz, William. 1993. "Fetishism and Materialism: The Limits of Theory in Marx" en *Fetishism as*

Cultural Discourse. Emily Apter; y William Pietz (eds.). Ithaca: Cornell University Press, 119-151.

Pilling, Geoffrey. 1973. "Imperialism, Trade, and 'Unequal Exchange': The Work of Aghiri Emmanuel" en *Economy and Society*, 2: 2,164-185.

Piñerúa, Luis. 1988. *Luis Piñerúa: Enfrentamiento con el poder*. Caracas: Ediciones Centauro.

Pino Iturrieta, Elias. 1985a. *Juan Vicente Gómez y su época*. Caracas: Monte Ávila.

Pino Iturrieta, Elias. 1985b. "Matar a Gómez" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 533- 536.

Plaza, Elena. 1978. *El 23 de enero y el proceso de consolidación de la democracia representativa en Venezuela: ensayo de interpretación sociopolítica*. Caracas: Garbizu y Todtmann Editores.

Plaza, Elena. 1984. *El 23 de enero de 1958*. Caracas: Garbizu y Todtmann Editores.

Pletsch, Cari. 1981. "The Three Worlds, or the Division of Social Scientific Labor, circa 1950- 1975" en *Comparative Studies in Society and History*, 23:4,565-590.

Poggi, G. 1978. *The Development of the Modern State: A Sociological Introduction*. Londres: Hutchinson.

Polanco Alcántara, Tomás. 1990. *Juan Vicente Gómez: aproximación a una biografía*. Caracas: Grijalbo.

Poole, Deborah (ed.). 1994. *Unruly Order: Violence and Cultural Identity in the High Provinces of Southern Peru*. Boulder: Westview Press.

Portantiero, Juan Carlos; y Emilio de Ipola. 1981. "Lo nacional popular y los populismos realmente existentes" en *Nueva Sociedad* 54: 7-18.

Poulantzas, Nicos. 1973. *Political Power and Social Classes*. Londres: New Left Books.

Poulantzas, Nicos. 1975. *Classes in Contemporary Capitalism*. Londres: New Left Books.

Poulantzas, Nicos. 1976. "The Capitalist State" en *New Left Review*, 95: 63-83.

Poulantzas, Nicos. 1978. *State, Power, Socialism*. Londres: New Left Books.

Powell, John Duncan. 1971. *Political Mobilization of the Venezuelan Peasant*. Cambridge: Harvard University Press.

Prakash, Gyan. 1990. "Writing Post-Orientalist Histories of the Third World: Perspectives from Indian Historiography" en *Comparative Studies in Society and History*, 32: 2 (abril), 383-408.

Prakash, Gyan. 1995. *After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements*. Princeton: Princeton University Press.

Proceso Político. 1978. *CAP: 5 años*. Caracas: Equipo Proceso Político.

Pro-Venezuela. 1973. *La política y los empresarios*. Caracas: Pro-Venezuela.

Przeworski, Adam. 1977. "Proletariat into a Class: The Process of Class Formation From Karl Kautsky's 'The Class Struggle' to Recent Controversies" en *Politics and Society*, 7:4,343- 401.

Przeworski, Adam. 1991. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

Purroy, Ignacio M. 1982. *Estado e industrialización en Venezuela*. Valencia: Vadell Hermanos.

Quero Morales, Constantino. 1978. *Imagen-objetivo de Venezuela: reformas fundamentales para su desarrollo*. Caracas: Banco Central de Venezuela.

Quintero, Inés. 1985. "De la alucinación a la eficiencia (Román Cárdenas en el Ministerio de Hacienda)" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 599-612.

Quintero, Inés. 1989. "La reforma militar restauradora" en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, 72:141-152.

Quintero, Rodolfo. 1972. *Antropología del petróleo*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Quintero, Rodolfo. 1975. *La cultura del petróleo*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Rabasa, José. 1993. *Inventing América*. Norman: Oklahoma University Press.

Rabe, Stephen G. 1982. *The Road to OPEC. United States Relations with Venezuela, 1919-1976*. Austin, TX.: University of Texas Press.

Radice, Hugo (ed.). 1975. *International Firms and Modern Imperialism*. Baltimore: Penguin Books.

Rafael, Vincent. 1993. *Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule*. Ithaca: Cornell University Press.

Rama, Ángel. 1982. *Transculturación narrativa en América Latina*. México: Siglo XXI.

Ramos, Joseph. 1986. *Neoconservative Economics in the Southern Cone of Latin America, 1973-1983*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Randall, Laura. 1987. *The Political Economy of Venezuelan Oil*. Nueva York: Praeger.

Rangel, Domingo Alberto. 1966. *La revolución de las fantasías*. Caracas. Grijalbo.

Rangel, Domingo Alberto. 1969. *Capital y desarrollo*. Tomo primero, la etapa agraria. Caracas: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.

Rangel, Domingo Alberto. 1972. *La oligarquía del dinero*. Tomo tercero de *Capital y desarrollo*. Caracas: Editorial Fuentes.

Rangel, Domingo Alberto. 1973. *Los mercaderes del voto*. Valencia: Vadell Hermanos.

Rangel, Domingo Alberto. 1974. *Capital y desarrollo*. *La Venezuela agraria*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

- Rangel, Domingo Alberto. 1976. *La oligarquía del dinero*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Rangel, Domingo Alberto. 1977. *Capital y desarrollo. El rey petróleo*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- Rangel, Domingo Alberto. 1978. *La revolución de las fantasías*. Caracas. Ediciones Ofidi.
- Rangel, Domingo Alberto. 1982. *Fin de fiesta*. Valencia: Vadell Hermanos.
- Rangel, Domingo Alberto; y Pedro Duno. 1979. *La pipa rota: las elecciones de 1978*. Caracas: Vadell Hermanos.
- Rangel Bourgoín, Luis Enrique. 1983. *Nosotros los militares*. Caracas: Editorial Sol.
- Rappaport, Joanne. 1987. "Mythic Images, Historical Thought, and Printed Texts: The Páez and the Written Word" en *Journal of Anthropological Research*, 43:1,43-61.
- Rappaport, Roy A. 1984. "Disorders of Our Own: A Conclusion" en *Anthropology and Public Engagement*. Shepard Forman (ed.). Ann Arbor, MI.:University of Michigan Press, 235- 293.
- Reddy, William M. 1987. *Money and Liberty in Modern Europe. A Critique of Historical Understanding*. Londres: Cambridge University Press.
- Reich, Robert. 1991. *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism*. Nueva York: A.A. Knopf.
- Renan, Ernest. 1990. "What is a Nation?" en *Nation and Narration*. Homi K. Bhabha (ed.). Nueva York: Routledge, 8-22.
- Rey, Juan Carlos. 1988. *Los desafíos de la democracia*. Caracas: Tierra de Gracia Editores.
- Rey, Juan Carlos. 1989. *El futuro de la democracia en Venezuela*. Caracas: IDEA.
- Reynolds, C.W. 1982. "The New Terms of Trade Problem: Economic Rents in International Exchange" en *Economics in the Long View vol. 1*. Charles P. Kindleberger; y Guido di Tella (eds.). Nueva York: MacMillan Press, Limited, 189-209.
- Ribeiro, Darcy. 1971. *The Americas and Civilization*. Nueva York: E.P. Dutton and Company.
- Ricardo, David. 1983. *On the Principles of Political Economy and Taxation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richard, Nelly. 1987. "Postmodernism and Periphery" en *Third Text*, 2 (invierno).
- Rieff, David. 1991. *Los Angeles: Capital of the Third World*. Nueva York: Simon Schuster.
- Rincón, Fredy N. 1982. *El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez Jiménez 1952-1957*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Ríos de Hernández, Josefina. 1988. *La hacienda venezolana. Una visión a través de la historia oral*.

Caracas: Fondo Editorial Trópykos.

Roa Bastos, Augusto. 1974. *Yo el supremo*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Rodríguez, Luis Cipriano. 1983. *Gómez: agricultura, petróleo y dependencia*. Caracas: Fondo Editorial Trópykos.

Rodríguez, Luis Cipriano. 1985. "Gómez y el anticomunismo" en *Tierra Firme*; 3 (octubre- diciembre), 551-566.

Rodríguez Campos, Manuel. 1991. *Pérez Jiménez y la dinámica del poder (1948-1958)*. Caracas: Eldorado Ediciones.

Rodríguez Cárdenas, Manuel. 1954. *El retablo de las maravillas*. Caracas: Ediciones Alejandro Vallejo.

Rodríguez Trujillo, Manuel. 1978. "La industria de bienes de capital en Venezuela" en *Venezuela Metalúrgica y Minera*, 27 (junio-julio), 11-30.

Rodríguez-Valdés, Ángel. 1993. *La otra muerte de CAP*. Caracas: Alfadil Ediciones.

Rodríguez Gallard, Irene. 1974. *El petróleo en la historiografía venezolana*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Rosdolsky, Roman. 1977. *The Making of Marx's "Capital"*. Londres: Pluto Press.

Rose, Sanford. 1977. "Why the Multinational Tide is Ebbing" en *Fortune*, (agosto), 118.

Roseberry, William. 1983. *Coffee and Capitalism in the Venezuelan Andes*, 1ª ed. Austin: University Press of Texas.

Roseberry, William. 1986. "Images of the Peasant in the Consciousness of the Venezuelan Proletariat" en *Proletarians and Protest*. Michael Hanagan; y Charles Stephenson (eds.). Westport, CN.: Greenwood.

Rostow, W.W. 1960. *The Process of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rothschild, Emma. 1974. *Paradise Lost: The Decline of the Auto-Industrial Age*. Nueva York: Vintage Books.

Rourke, Thomas. 1969. *Gómez, Tyrant of the Andes*. [1936] Nueva York: William Morrow.

Rouse, Roger. 1995. "Thinking Through Transnationalism" en *Public Culture*, 7: 2, 353-402.

Rubin, I.I. 1973. *Essays on Marx's Theory of Value*. Montreal: Black Rose Books.

Rueschemeyer, Dietrich; Evelyne Huber y John D. Stephens. 1992. *Capitalist Development and Democracy*. Cambridge: Polity.

Rutherford, Donald ed. *Dictionary of Economics*. Nueva York: Routledge.

- Sachs, J.D. (ed.). 1989. *Developing Country Debt and the World Economy*, NBER Project Report. Chicago: University of Chicago Press.
- Sahlins, Marshall. 1976. *Culture and Practical Reason*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sahlins, Marshall. 1985. *Islands of History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sahlins, Marshall. 1993. "Good Bye Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History" en *Assessing Cultural Anthropology*. Robert Borofsky (ed.). Nueva York: McGraw Hill.
- Said, Edward. 1978. *Orientalism*. Nueva York: Vintage Books.
- Said, Edward. 1993. *Culture and Imperialism*. Nueva York: Alfred A. Knopf.
- Said, Edward. 1995. "Secular Interpretation, the Geographical Element, and the Methodology of Imperialism" en *Beyond Colonialism*. Gyan Prakash (ed.). Princeton: Princeton University Press, 21-39.
- Salas Capriles, Roberto. 1980. *Se busca un industrial*. Caracas: Cromotip.
- Salazar-Carrillo Jorge. 1976. *Oil in the Economic Development of Venezuela*. Nueva York: Praeger.
- Salazar-Carrillo, Jorge. 1994. *Oil and Development in Venezuela During the Twentieth Century*. Westport, CN.: Praeger.
- Salgado, Rene. 1987. "Economic Pressure Groups and Policy-Making in Venezuela: The Case of Fedecámaras Reconsidered" en *Latin American Research Review*, 22: 3,91-105.
- Sallnow, M. J. 1989. "Precious Metals in the Andean Moral Economy" en *Money and the Morality of Exchange*. Maurice Bloch; y Jonathan Parry (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 209-231.
- Samuelson, Paul A. 1974. "Insight and Detour in the Theory of Exploitation: A Reply to Baumol" en *Journal of Economic Literature*, XII: 1 (marzo), 63-77.
- Sangren, P. Steven. 1988. "Rhetoric and the Authority of Ethnography: 'Postmodernism' and the Social Reproduction of Texts" en *Current Anthropology*, 29:405-435.
- Santaella, Ramón. 1985. "La dinámica del espacio venezolano durante el gobierno de Gómez" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 629-636.
- Sarlo, Beatriz. 1988. *Una modernidad periférica: Buenos Aires: 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Sassen, Saskia. 1991. *The Global City*. Princeton: Princeton University Press.
- Sassen, Saskia. 1994. *Cities in the World*. Thousand Oaks: Pine Forge Press.
- Shils, Edward. 1965. "Charisma, Order and Status" en *American Sociological Review* 30:199-213.
- Schael, Guillermo José. 1969. *El automóvil en Venezuela*. Caracas: Gráficas Edición de Arte.
- Schaposnik, Eduardo Carlos. 1985. *La democratización de las fuerzas armadas venezolanas*. Caracas:

Fundación Nacional Gonzalo Barrios.

Scharer-Nussberger, Maya. 1979. *Rómulo Gallegos: el mundo inconcluso*. Caracas: Monte Ávila.

Scheper-Hughes, Nancy. 1992. *Death without Weeping*. Berkeley: University of California Press.

Schmitter, Philippe. 1973. *Military Rule in Latin America: Function, Consequences, and Perspectives*. Beverly Hills: Sage Publications.

Schmidt, Alfred. 1971. *The Concept of Nature in Marx*. Londres: New Left Books.

Schwarz, Roberto. 1992. *Misplaced Ideas: Essays on Brazilian Culture*. Nueva York: Verso.

Schwerin, Karl H. 1966. *Oil and Steel: Processes of Karinya Culture in Response to Industrial Development*. Los Ángeles: Latin American Center, University of California Press.

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

Segnini, Yolanda. 1985. "Ateneo y Gomecismo" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 591-598.

Segnini, Yolanda. 1985. "Cartas al Benemérito" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 637-644.

Segnini, Yolanda. 1997. *Las luces del gomecismo*. Caracas: Editorial Alfadil.

Shaikh, Anwar. 1977. "Marx's Theory of Value and the 'Transformation Problem'" en *The Subtle Anatomy of Capitalism*. Jesse Schwartz (ed.). Santa Mónica, CA.: Goodyear, 106-139.

Shaikh, Anwar. 1979a. "Foreign Trade and the Law of Value: Part I" en *Science and Society*, (otoño), 281-302.

Shaikh, Anwar. 1979b. "Foreign Trade and the Law of Value: Part II" en *Science and Society*, (invierno), 27-57.

Shaikh, Anwar. 1980. "The Laws of International Trade" en *Growth, Profits, and Property*. Edward Nell (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 30-44.

Shell, Marc. 1982. *Money, Language, and Thought: Literacy and Philosophical Economics from the Medieval to the Modern Era*. Berkeley-Los Ángeles: University of California Press.

Shohat, Ella; y Robert Stam. 1994. *Unthinking Eurocentrism*. Nueva York: Routledge.

Silva, Manuel Acosta. 1976. *Historias del 28*. Caracas: Los Talleres Tipográficos de la Escuela Técnica Popular.

Silva Michelena, José Agustín. 1971. *The Illusion of Democracy in Dependent Nations*. Cambridge, MA.: MIT Press.

Silva, Michelena, José Agustín; y Heinz Rudolph Sonntag. 1979. *El proceso electoral de 1978*. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.

- Simmel, Georg. 1978. *The Philosophy of Money*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Sklar, Richard L. 1975. *Corporate Power in an African State: The Political Impact of Multinational Mining Companies in Zambia*. Berkeley: University of California Press.
- Skocpol, Theda. 1985. "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research" en *Bringing the State Back In*. P. Evans; D. Rueschemeyer; y T. Skocpol (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 3-37.
- Skurski, Julie. 1985. "Forging the Nation". University of Chicago. Mimeo.
- Skurski, Julie. "Representing "The People in Venezuelan Nationalism Discourse." Ph.D. disser. University of Chicago.
- Skurski, Julie. 1993. "The Leader and the People: Representing the Nation in Postcolonial Venezuela." Ph.D. disser. University of Chicago.
- Skurski, Julie. 1994. "The Ambiguities of Authenticity in Latin America: Doña Bárbara and the Construction of National Identity" en *Poetics Today*, 15: 4,59-81.
- Skurski, Julie; y Fernando Coronil. 1992. "Country and City in a Colonial Landscape: Double Discourse and the Geopolitics of Truth in Latin America" en *View from the Border: Essays in Honor of Raymond Williams*. Dennis Dworkin; y Leslie Roman (eds.). Nueva York: Routledge, 231-259.
- Smith, Adam. 1976. *The Wealth of Nations*. Chicago: University of Chicago Press.
- Smith, Keith. 1984. *The British Economic Crisis. Its Past and Future*. Middlesex: Penguin.
- Smith, Neil. 1990. *Uneven Development*. Cambridge: Basil Blackwell.
- Smith, Peter H. (ed.). 1995. *Latin America in Comparative Perspective*. Boulder, CO.: Westview Press.
- Soja, Edward. 1987. "The Postmodernization of Human Geography: A Review Essay" en *Annals of the Association of Human Geographers*, 77: 289-296.
- Soja, Edward. 1989. *Postmodern Geographies*. Londres: Verso.
- Solbery, Carl E. 1979. *Oil and Nationalism in Argentina: a History*. Stanford: Stanford University Press.
- Sommer, Doris. 1991. *Foundational Fictions: When History was Romance*. Berkeley: University of California Press.
- Sosa, Arturo A. 1974. *Filosofía política del gomecismo*. Barquisimeto: Centro Gumilla.
- Sosa, Arturo A. 1981. *Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Sosa, Arturo A. 1985. *Ensayos sobre el pensamiento político positivista venezolano*. Caracas: Ediciones Centauro.
- Sosa, Arturo A. 1995. *Rómulo Betancourt y el Partido del Pueblo (1937-1941)*. Caracas: Editorial

Fundación Rómulo Betancourt.

Sosa, Arturo; y Eloi Lengrand. 1981. *Del garibaldismo estudiantil a la izquierda criolla: los orígenes marxistas del proyecto marxista (1925-1935)*. Caracas: Ediciones Centauro.

Sosa Betancourt, F. 1959. *Pueblo en rebeldía*. Caracas: Ediciones Garrido.

Sosa Pietri, Andrés. 1993. *Petróleo y poder*. Caracas: Editorial Planeta Venezolana.

Spivak, GayatriChakravorty. 1988a. "Can the SubalternSpeak?" en *Marxism and the Interpretation of Culture*. Cary Nelson; y Lawrence Grossberg (eds.). Urbana: University of Illinois Press.

Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988b. "Subaltern Studies: Deconstructing Historiography" en *Selected Subaltern Studies*. Ranajit Guha; y Gayatri Chakravorty (eds.). Nueva York: Oxford University Press, 3-32.

Stallybrass, Peter; y Allon White. 1986. *The Politics and Poetics of Transgression*. Ithaca: Cornell University Press.

Stambouli, Andrés. 1980. *Crisis política. Venezuela 1948-1958*. Caracas: Editorial Ateneo.

Steadman, Ian et al. 1981. *The Value Controversy*. Londres: Verso.

Steedman, Carolyn Kay. 1986. *Landscape for a Good Woman. A Story of Two Lives*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Stepan, Alfred. 1978. *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*. Princeton: Princeton University Press.

Stephens, John. 1987. "Democratic Transition and Breakdown in Europe, 1870-1939: A Test of the Moore Thesis." Kellogg Working Paper N° 101, Notre Dame, en Helen Kellogg Institute for International Studies. University of Notre Dame.

Stobaugh, Robert; y Daniel Yergin (eds.). 1979. *Energy Future: Report of the Energy Project at the Harvard Business School*. Nueva York: Random House.

Stocking, George W., Jr. 1991. *Colonial Situations: Essayson the Ethnographic Knoivledge*. Madison: University of Wisconsin Press.

Staler, Ann Laura. 1995. *Race and the Education of Desire*. Durham: Duke University Press.

Suarez Figueroa, Naudy (ed.). 1977. *Programas políticos venezolanos de la primera mitad del siglo XX. Tomo II*. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Sullivan, William M. 1976. "Situación económica durante el periodo de Juan Vicente Gómez, 1908-1935" en *Política y economía en Venezuela, 1810-1976*. Caracas: Ediciones de la Fundación John Boulton, 247-272.

Tambiah, Stanley J. 1984. *The Buddhist Saints of the Forest and the Cult of the Amulets*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tanzer, Michael. 1980. *The Race for Resources*. Nueva York: Monthly Review Press.

Tanzer, Michael; y Stephen Zom. 1985. *Energy Update: Oil in the Late Twentieth Century*. Nueva York: Monthly Review Press.

Tarre Murzi, José. 1976. *Cuando el hombre no camina*. Valencia: Vadell Hermanos.

Tarre Murzi, José. 1978. *Venezuela Saudita*. Valencia: Vadell Hermanos.

Tarre Murzi, José. 1979. *Los muertos de la deuda, o el final de la Venezuela Saudita*. Caracas: Ediciones Centauro.

Taussig, Michael. 1980. *The Devil and Commodity Fetishism in South America*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Taussig, Michael. 1987. *Shamanism, Colonialism, and the Wild Man*. Chicago: The University of Chicago Press.

Taussig, Michael. 1994. "Maleficium: State Fetishism" en *Fetishism as Cultural Discourse*. Emily Apter; y William Pietz (eds.). Ithaca: Cornell University Press, 217-247.

Taylor, Charles. 1989. *Sources of the Self. The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press.

Taylor Jr., Philip B. (ed.). 1971. *Venezuela, 1969. Analysis of Progress*. Washington, D.C.: Johns Hopkins University Press, SAIS.

Taylor, Philip B., Jr. 1968. "The Venezuelan Golpe de Estado of 1958: The Fall of Marcos Pérez Jiménez" en *Political Studies Series: N°4*. Washington, D.C.: Institute for the Comparative Study of Political Systems.

Tennassee, Paul Nehru. 1979. *Venezuela, los obreros petroleros y la lucha por la democracia*. Caracas: E.F.I. Publicaciones.

Therborn, Gioran. 1977. "The Rule of Capital and the Rise of Democracy" en *New Left Review*, 103:3-42.

Therborn, Gioran. 1978. *What does the Ruling Class Do When it Rules?: State Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism*. London: NLB.

Therborn, Gioran. 1979. "The Travail of Latin American Democracy" en *New Left Review*, 71- 114.

Thomas, Nicholas. 1991. *Entangled Objects: Exchange, Material Objects and Colonialism in the Pacific*. Cambridge: Harvard University Press.

- Thomas, Paul. 1994. *Alien Politics: Marxist State Theory* Retrieved. Londres: Routledge.
- Thompson, E.P. 1971. "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century" en *Past and Present*, 50: 76-136.
- Timpanaro, Sebastiano. 1975. *On Materialism*. Londres: New Left Books.
- Tinoco, Pedro. 1972. *El Estado eficaz*. Caracas: Colección Los Desarrollistas.
- Tollison, Robert D. 1982. "Rent Seeking: A Survey" en *Kyklos*, 35:572-602.
- Torres, Gumersindo. 1917. *Memoria*, vol. I. Caracas: Ministerio de Fomento.
- Tribe, Keith. 1978. *Land, Labour and Economic Discourse*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1990. *Haiti, State Against Nation: the Origins and Legacy of Duvalierism*. Nueva York: Monthly Review Press.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1991. "Anthropology and the Savage Lot" en *Recapturing Anthropology*. Richard G. Fox (ed.). Sante Fe: School of American Research.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1992. "The Caribbean Region: An Open Frontier in Anthropological Theory" en *Annual Review of Anthropology*, 21:19-42.
- Trouillot, Michel-Rolph. 1995. *Silencing the Past: Power and the Production of History*. Boston, MA.: Beacon.
- Tugwell, Franklin. 1975. *The Politics of Oil in Venezuela*. Stanford: Stanford University Press.
- Tugwell, Franklin. 1977. "Petroleum Policy and the Political Process" en *Venezuela: The Democratic Experience*. John D. Martz; y David J. Myers (eds.). Nueva York: Praeger, 237- 254.
- Turner, Bryan S. 1989. "Review of Democracy and Political Theory, by Claude Lefort" en *Sociology*. 23:331-332.
- Turner, Terence. 1994. "Bodies and Anti-bodies: Flesh and Fetish in Contemporary Social Theory" en *Embodiment and Experience: the Existential Ground of Culture*. J.C. Sordas (ed.). Cambridge;Cambridge University Press.
- Turner, Terence. S/F. "Marx's Concept of Structure and the Structure of Marx's Model of Capitalist Production: An Anthropological Re-reading of Capital." Mimeo.
- Turner, Terence. 1983. "Production, Value, and Exploitation in Primitive Society." Second Decennial A.S.A. Conference, Cambridge.
- Turner, Terence. "The Social Skin" en *Not Work Alone*. J. Chorfas; y R. Lewin (eds.). Beverly Hills, CA.:Sage.
- Turner, Victor W. 1967. *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*. Ithaca: Cornell University

Press.

Urbaneja, Diego Bautista. 1995. Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX. Caracas: Monte Ávila.

Urbaneja, Diego Bautista. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Ithaca: Cornell University Press.

Valero, Jorge. 1993. ¿Cómo llegó Acción Democrática al poder en 1945? Caracas: Fondo Editorial Trópykos.

Vallenilla Lanz, Laureano. 1952. Cesarismo democrático. Caracas: Tipografía Garrido.

Vallenilla Lanz, Laureano. 1967. Escrito de memoria. Caracas: Ediciones Garrido.

Vallenilla, Luis. 1973. Auge, declinación y porvenir del petróleo venezolano. Caracas: Tiempo Nuevo.

Vallenilla Lanz, Laureano. 1975. Oil: The Making of a New Economic Order. Venezuelan Oil and OPEC. Nueva York: McGraw Hill.

Vallenilla, Nikita Harwich. 1986. Banca y Estado en Venezuela (1830-1940). Caracas: Fondo Editorial Buria y Fondo Editorial Antonio José de Sucre.

Velásquez, Luis Cordero. 1971. Gómez y las fuerzas vivas, 3^a ed. Caracas: Domingo Fuentes.

Velásquez, Ramón J. 1976. Venezuela moderna: medio siglo de historia, 1926-1976. Caracas: Editorial Ariel.

Velásquez, Ramón J. 1983. "Introducción" en El pensamiento político venezolano del siglo XX. Documentos para su estudio vol. 3. La oposición a la dictadura gomecista. Caracas: Congreso de la República, xi-lvi.

Velásquez, Ramón J. 1986. Juan Vicente Gómez ante la historia. San Cristóbal: Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses.

Velásquez, Ramón J. 1988. Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez. Caracas: Congreso de la República. Edición homenaje al autor, 9^a ed. ampliada.

Veliz, Claudio. 1980. The Centralist Tradition of Latin America. Princeton: Princeton University Press.

Vera, Rigoberto Henrique. 1989. De la tiranía a la democracia. Caracas: Ediciones Centauro.

Vernon, Raymond. 1971. Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises. Nueva York: Basic Books.

Vernon, Raymond. 1976. The Oil Crisis. Nueva York: W.W. Norton.

Vernon, Raymond (ed.). 1978. Big Business and the State. Cambridge: Harvard University Press.

Vetencourt, Roberto. 1994. Tiempo de caudillos. Caracas: Italgráfica.

- Vieille, Paul. 1984. "Le pétrole comme rapport social" en *Pétrole et Société*; 26 (enero-marzo), 3- 30.
- Vilar, Pierre. 1976. *A History of Gold and Money, 1450-1920*. Londres: New Left Books.
- Vincent, Joan. 1978. *Political Anthropology: Manipulating Strategies*. *Annual Review of Anthropology*, 7:175-194.
- Vitier, Cintio. 1970. *Lo cubano en la poesía*. La Habana: Instituto Cubano del Libro.
- Vivas, Antonio Pérez. 1987. *Hegemonía andina (historia) y Pérez Jiménez*. San Cristóbal: Tipografía Cortes.
- Volosinov, V.N. 1973. *Marxism and the Philosophy of Language*. Nueva York: Seminar.
- Walcott, Derek. 1998. *What the Tivilight Says. Essays*. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
- I
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Nueva York: Academic Press.
- Wallerstein, Immanuel. 1976. *The Modern World-System*. Nueva York: Academic Press.
- Walton, John. 1989. "Debt, Protest, and the State in Latin America" en *Power and Popular Protest*. Susan Eckstein (ed.). Berkeley: University of California Press, 299-328.
- Warner, Michael (ed.). 1993. *Queer Politics and Social Theory*. Minneápolis: University of Minnesota Press.
- Watts, Michael. 1983. *Silent Violence: Food, Famine, and Peasantry in Northern Nigeria*. Berkeley: University of California Press.
- Watts, Michael. 1987. *State, Oil, and Agriculture in Nigeria*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California Press.
- Watts, Michael. 1992. "The Shock of Modernity: Petroleum, Protest and Fast Capitalism in an Industrializing Society" en A. Pred y M. Watts. *Reworking Modernity: Capitalism and Symbolic Discontent*. New Brunswick: Rutgers University Press, 21-63.
- Watts, Michael. 1994. *Lining Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa*. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
- Weber, Max. 1957. *The Theory of Social and Economic Organization*. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Weeks, John. 1983. "Unequal Exchange" en *A Dictionary of Marxist Thought*, Tom Bottomore (ed.). Cambridge: Harvard University Press, 500-502.
- Wells, David. 1981. *Marxism and the Modern State. An Analysis of Fetishisms in Capitalist Society*. Atlantic Highlands: Humanities Press.

- White, Lawrence. 1971. *The Automobile Industry since 1945*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wijnbergen, S. van. 1984. "The Dutch Disease: A Disease after All?" en *Economic Journal*, 94:41- 55.
- Williams, Raymond. 1973. *The Country and the City*. Nueva York: Oxford University Press.
- Williams, Raymond. 1983. *Keywords: A Vocabulary of Culture and Society*. Nueva York: Oxford University Press.
- Wolf, Eric. 1982. *Europe and the People Without History*. Berkeley: University of California Press.
- Wolff, Robert Paul. 1981. "A Critique and Reinterpretation of Marx's Labor Theory of Value" en *Philosophy and Public Affairs*, 10: 2, 89-120.
- Worsley, Peter. 1984. *The Three Worlds: Culture and World Development*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wright, Winthrop R. 1988. "The Todd Duncan Affair: Acción Democrática and the Myth of Racial Democracy in Venezuela" en *The Americas*(West Bethesda), 44 (abril), 441-459.
- Wright, Winthrop R. 1990. *Café con Leche: Race, Class, and National Image in Venezuela*. Austin, TX.: University of Texas Press.
- Yépez, Germán. 1985. "Los regímenes de Castro y Gómez y el debate ideológico de 1936" en *Tierra Firme*; 3 (octubre-diciembre), 689-692.
- Yergin, Daniel. 1991. *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power*. Nueva York: Simon and Schuster.
- Young, Robert. 1990. *White Mythologies: Writing History and the West*. Nueva York: Routledge.
- Yudice, George. 1992. "Postmodernity and Transnational Capitalism in Latin America" en *On Edge. The Crisis of Contemporary Latin American Culture*. Juan Flores; Jean Franco; y George Yúdice (eds.). Minneápolis: University of Minnesota Press.
- Zapata, Juan Carlos. 1991. *El dinero, el diablo, y el buen dios*. Caracas: Alfadil Ediciones.
- Ziems, Angel. 1979. *El gomecismo y la formación del ejército nacional*. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas.
- Zizek, Slavoj. 1989. *The Sublime Object of Ideology*. Londres: Verso.
- Zizek, Slavoj. 1991. *For They Know Not What They Do. Enjoyment as a Political Factor*. Londres: Verso.